

**DE LA PROTESTA
A LA PROPUESTA**

**50 AÑOS
IMAGINANDO Y
CONSTRUYENDO
EL FUTURO**

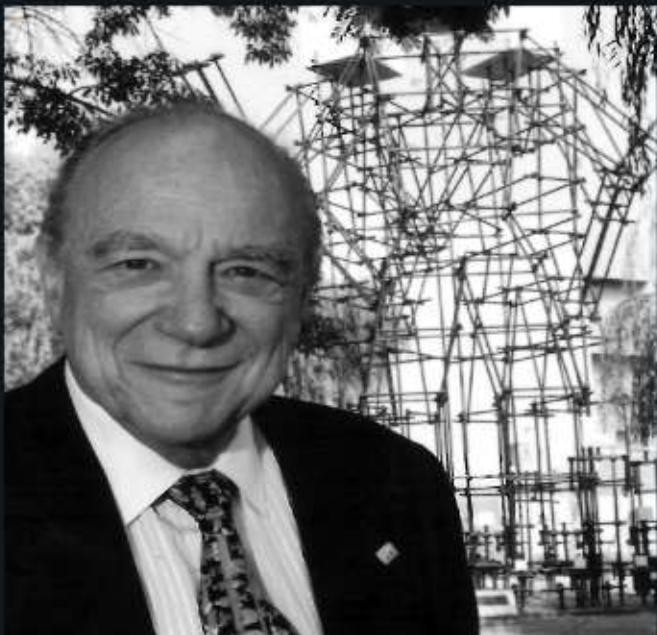
DAVID BARKIN



**siglo veintiuno
editores**



**UNIVERSIDAD
AUTÓNOMA
METROPOLITANA**



David Barkin es Investigador Emérito del Sistema Nacional de Investigadores y Profesor Distinguido en la Universidad Autónoma Metropolitana; fue galardonado con el Premio Nacional de Economía Política por el Colegio Nacional de Economistas y la Cátedra Georg Forster por la Fundación Alexander von Humboldt en Alemania. Recibió el "Premio Internacional para Estudios en Pobreza" del Consejo Internacional de Ciencias Sociales por su propuesta "La soberanía alimentaria como estrategia para la reducción de la pobreza" que se está preparando para su próxima publicación. Es reconocido por sus aportaciones al diseño e instrumentación de estrategias alternativas para la consolidación de comunidades campesinas e indígenas en América Latina. Actualmente, dedica gran parte de su tiempo a colaborar con comunidades encaminadas a consolidar sus instituciones "poscapitalistas" ya que les permiten forjar nuevas formas de convivencia y transformar patrones de consumo para avanzar hacia un mundo del "buen vivir".

economía
y
demografía



Casa abierta al tiempo

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA

Rector general, Eduardo Abel Peñalosa Castro
Secretario general, José Antonio de los Reyes Heredia

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA-XOCIMILCO

Rector de Unidad, Fernando de León González
Secretaría de Unidad, Claudia Mónica Salazar Villava

DIVISIÓN DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES

Director, Carlos Alfonso Hernández Gómez
Secretario académico, Alfonso León Pérez
Jefe de la sección de publicaciones, Miguel Ángel Hinojosa Carranza

CONSEJO EDITORIAL

Aleida Azamar Alonso / Gabriela Dutrénit Bielous
Diego Lizarazo Arias / Graciela Y. Pérez-Gavilán Rojas
José Alberto Sánchez Martínez
Asesores del Consejo Editorial: Luciano Concheiro Bórquez
Verónica Gil Montes / Miguel Ángel Hinojosa Carranza

COMITÉ EDITORIAL

Alejandro Cerdá García (presidente)
René David Benítez Rivera / Cristián Calónico Lucio
Arnulfo de Santiago Gómez / Roberto Diego Quintana
Roberto Escoria Romo / Roberto García Jurado / Álvaro López Lara
Enrique Guerra Manzo / Rhina Roux Ramírez
Adriana Soto Gutiérrez
Asistente editorial: Varinia Cortés Rodríguez

Sección de Publicaciones de la División de Ciencias Sociales y Humanidades.

Edificio A, 3er. piso. Teléfono 54 83 70 60

pubcsh@correo.xoc.uam.mx

<http://dcshpublicaciones.xoc.uam.mx>

DE LA PROTESTA A LA PROPUESTA: 50 AÑOS IMAGINANDO Y CONSTRUYENDO EL FUTURO

por

DAVID BARKIN



UNIVERSIDAD
AUTÓNOMA
METROPOLITANA





siglo xxi editores, méxico

CERRO DEL AGUA 248, ROMERO DE TERREROS, 04310 MÉXICO, DF
www.sigloxxieditores.com.mx

siglo xxi editores, argentina

GUATEMALA 4824, C1425BUP, BUENOS AIRES, ARGENTINA
www.sigloxxieditores.com.ar

anthropos editorial

LEPANT 241-243, 08013 BARCELONA, ESPAÑA
www.anthropos-editorial.com

HC79.E5

B37

2018 Barkin, David

De la protesta a la propuesta : 50 años imaginando y construyendo el futuro / por David Barkin. — México, Ciudad de México: Siglo XXI Editores : Universidad Autónoma Metropolitana, 2018.

572 p. – (Economía)

ISBN Siglo XXI Editores: 978-607-03-0919-9

ISBN UAM: 978-607-28-1370-0

1. Desarrollo económico – Aspectos ambientales – México. 2. Desarrollo sustentable – México. I. Agricultura – Aspectos económicos – México. I. t. II. ser

primera edición, 2018

d.r. siglo xxi editores, s. a de c. v.

isbn 978-607-03-0919-9

d.r. © universidad autónoma metropolitana
universidad autónoma metropolitana, unidad xochimilco
calzada del hueso 1100, colonia villa quietud,

isbn 978-607-28-1370-0

derechos reservados. prohibida su reproducción total o parcial
por cualquier medio.

impreso en los talleres de mójica impresor, s. a. de c. v.,
camelia núm. 4, col. el manto, iztapalapa, ciudad de méxico

Para la Raxza

*Quienes en sus diversas formas, creativas, críticas, festivas,
me llevaron en este camino de la protesta a la propuesta*

AGRADECIMIENTOS

¿Cómo agradecer a los colegas, a los pueblos, a los amigos, y a los muy queridos, por un libro que traza medio siglo de vida? Podría resumirse en:

Gracias a la vida que me ha dado tanto
Me ha dado el sonido y el abecedario
Con él las palabras que pienso y declaro
Madre, amigo, hermano, y luz alumbrando
La ruta del alma del que estoy amando (Violeta Parra, 1966).

Este libro es fruto del trabajo académico de una vida. ¿Quién hubiera previsto que una corta estancia en el mundo indígena de Michoacán (Huecorio) me transformaría en un militante (participé en las luchas por los profundos cambios que se requerían en ese momento)? Mi oposición inicial al envío de “asesores” norteamericanos a Indochina se reforzó con la generosa acogida de los compañeros que estaban forjando una nueva economía política para gestionar la Revolución cubana y con la abierta bienvenida de los líderes de la Unidad Popular en Chile quienes me invitaron a tomar en serio las letras de la Canción del Poder Popular:

Porque esta vez no se trata
De cambiar un presidente,
Será el pueblo quien construya
Un Chile bien diferente (Inti-Illimani, 1970).

Mi aterrizaje definitivo en México durante los años sesenta empezó en medio de estas aventuras. Invitaciones de Don Víctor Urquidi y del doctor Gustavo Petricoli me asentaron entre el mundo de los economistas, mientras que la tutela del antropólogo Ángel Palerm reforzó la formación que recibí con Sidney Mintz en Yale University. Ramón Fernández y Fernández me presentó una visión muy crítica de la Revolución Verde en México, mientras Nabor Carrillo y Gerardo Cruickshank estaban soñando con la posibilidad de un desarrollo armonioso para el Valle de México; ambos son parte de los cimientos de las propuestas que continúan guianando mis ideas para el México del futuro, contrarias a los esquemas ideados por la clase política de hoy. Pero Michoacán seguía tocando su silbato de

la sirena donde Salvador Lemus Fernández me mostró cómo las instituciones que atienden a los campesinos e indígenas podrían funcionar.

Con la creación de la Unidad Xochimilco de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM-X) se presentaron otras aristas. Su sistema modular planteaba un enfoque cooperativo, comprometido con la transformación de la sociedad; Raúl Livas me presentó la oportunidad de diseñar un nuevo currículo para el estudio de la economía política, integrando los fundamentos de la ortodoxia del momento con los mejores avances de la heterodoxia, una atrevida propuesta que sucumbió frente al embate neoliberal venidero. Retador en su implementación, el modelo de la UAM-X generó las bases para el resto de mi vida, enriquecido con investigaciones hechas posibles por la visión y capacidad institucional de Iván Restrepo, director fundador del Centro de Ecodesarrollo. Las profundas críticas del impacto socio-ambiental del modelo prevaleciente se tornaron en propuestas a medida que nuestros sujetos de investigación se volvieron actores sociales y se integraron en nuestros equipos; ¿Cómo agradecer a las decenas de “investigadores descalzos” que mostraron sus habilidades de apropiarse de las técnicas participativas para informarnos y luego (re) capacitarlos?

Este libro no hubiera sido posible sin el apoyo irrestricto de la Universidad, tanto material como intelectual e institucional. El espacio humano que hemos creado me ha permitido aprovechar oportunidades excepcionales en el país y el mundo que se ven reflejadas a lo largo de este libro. No sería posible enlistar todos los colegas, amigos, compañeros, quienes han hecho posible la trayectoria que se refleja en este tomo. Mi relación con Siglo XXI Editores no es poco importante: éste es el sexto libro que me publican, desde los agitados días cuando un grupo de intelectuales nos unimos contra la arbitrariedad y prepotencia de la ceguera del Estado mexicano.

Finalmente, agradezco a mi familia, mi esposa, los seis hijos y cuatro nietos, quienes han creado el espacio convivial que permitió ensamblar esta colección, GRACIAS.

PRÓLOGO

GUSTAVO ESTEVA

Un prólogo es una palabra introductoria sobre el autor, el libro y el tema. Al declarar mi admiración por el libro y mi pasión por los temas que aborda, debo confesar de entrada que David Barkin y yo hemos sido amigos por casi medio siglo, que escribimos juntos un par de libros y que hemos mantenido un diálogo enriquecedor.

Según David, la selección de los artículos que lo forman le exigió repasar profundamente la trayectoria de su vida. Seguirlo como lectores en este repaso significa revisar lo que ha pasado en México y el mundo en los últimos 50 años —un ejercicio necesario en el actual momento de peligro—. Como alguna vez dijo el finado subcomandante Marcos, estamos en una circunstancia especial en que para otear el futuro necesitamos ver hacia atrás. Con esta guía, podemos examinar sin nostalgia pero con vergüenza los caminos que no tomamos. Una y otra vez sus textos muestran que el país no tomó un camino ineluctable y que el desastre actual no estaba escrito en las estrellas. Su trabajo muestra la medida en que una clase política irresponsable y corrupta se puso al servicio del capital y traicionó sus compromisos con el país y sus habitantes.

Al terminar la lectura del libro resentí la ausencia de algunos textos que parecerían muy pertinentes para el momento actual, como el que se refiere a las relaciones entre México y Estados Unidos. Pero entiendo bien las dificultades de la selección, que podrá satisfacer a dos tipos de lectores: los que conocen ya su trabajo, para verlo en conjunto, apreciar su coherencia y descubrir ángulos o temas que desconocían —porque nadie, de seguro, ha podido leer una obra tan extensa—; y los que no lo conocen, porque esta dosis podrá despertar su apetito para explorar más ampliamente ciertos temas o argumentos que se presentan aquí.

Tiene David títulos y reconocimientos que lo llevan al más alto rango del mundo académico. Se le reconoce sin reservas el rigor y la calidad de su trabajo: domina la literatura pertinente y aplica sistemática y honestamente las herramientas adecuadas a sus objetos de estudio. Sin embargo, no emplea ese rigor para entregarse a la especulación abstracta y vacía, tan común en su oficio. Su trabajo está bien arraigado en un suelo social al que nunca traiciona. Usa la jerga abstracta para criticar la mentalidad dominante y el lenguaje ordinario para compartir experiencias a ras de tierra y explorar acotamientos en el suelo que pisamos. Tuvo

la fortuna, hace unos 25 años, de hacerse uno con Blanca Lemus, lo que le dio nuevas y más profundas raíces en el país que decidió hacer suyo.

El libro muestra los resultados de una capacidad singular de David para la interlocución y la escucha. Escuchar, decía el comandante Tacho, no es simplemente oír sino estar dispuesto a ser transformado por el otro. David sabe escuchar. Lo hace con personas como el general Cárdenas, Iván Illich o algunos de los más prominentes académicos del planeta, a quienes interpela sin inhibiciones, acortando la distancia que su rango impone habitualmente a quienes se les acercan. Hace lo mismo con personas comunes de barrios, comunidades y pueblos a quienes interpeла. En este caso, como descubre que el diálogo intercultural no llega muy lejos si se reduce a la conversación lo lleva a la práctica, es decir, realiza actividades con personas de culturas profundamente diferentes a la suya. Esta capacidad de interlocución indagadora con todo tipo de personas, que a veces lo hace parecer entrometido, rompe con la mirada etnográfica en la que fue adiestrado y se convierte en capacidad de escuchar. Logra así tomar sensata distancia de su visión estrictamente occidental y en particular de la epistemología convencional y sus métodos. Empezó a poner en práctica y someter a prueba el diálogo de saberes mucho antes de que se pusiera de moda.

David se adelantó repetidas veces a amigos y colegas en su ejercicio crítico. No da lanzadas a caballos muertos ni asalta molinos de viento. Se enfrenta con vigor y desfachatez a todo género de vacas sagradas, dispuesto a pagar el precio de hacerlo —que a veces ha sido muy alto—. Quiero mencionar algunas de ellas.

- Cuando el ‘desarrollo’ era un mantra intocable y funcionaba como tabú inmarcesible para personas de todo el espectro ideológico lo puso en la picota de un análisis severo y mostró el impacto real de algunos de los ‘proyectos de desarrollo’ más exitosos. Sus trabajos sobre ‘desarrollo regional’ siguen siendo referencia obligada.
- El artículo que impulsó a Iván Illich a llamar a Barkin para consulta (capítulo 12) es una crítica eficaz de la educación, al mostrar que obliga a todos a correr cada vez más rápido sólo para mantenerse en el mismo lugar. Como Illich demostró, se trata de una institución contraproduktiva.
- La apertura al mercado mundial está inscrita en los genes del capitalismo, pero el Estado-nación fue la arena privilegiada de su expansión por más de dos siglos, incluso si se toman en cuenta los ejercicios imperiales. La internacionalización/transnacionalización del capital es un fenómeno reciente, que culminó en los años setenta. Hasta

donde sé, David fue el primero en traer a México el debate sobre el asunto y el análisis de sus consecuencias.

- La cuestión ecológica, que hoy es preocupación general y opera como uno de los límites del capitalismo, no tenía mayor relevancia en el análisis económico predominante en los años setenta. En México no tuvieron mayor impacto los llamados de 1972 por parte del Club de Roma —aunque en él militaba don Víctor Urquidi—, o de la Conferencia de Naciones Unidas en Estocolmo —el primer gran esfuerzo internacional sobre el tema—. Pero David incorporó desde entonces la cuestión a sus análisis. Por ello, este libro da buena cuenta de lo que interesa saber en la materia, en particular lo que se ha dado en llamar ‘justicia ambiental’. El agua y los bosques, dos cuestiones interconectadas que generan en todas partes creciente preocupación, fueron objeto temprano de atención para Barkin, que hace aportaciones tanto analíticas como prácticas en ambos temas.
- Como muestra bien este libro, David ha sido defensor sistemático, tan apasionado como riguroso, de lo que puede llamarse “vía campesina”, un camino que tiene sustento empírico claro en México y que defiende la más grande organización campesina de la historia humana. Su propuesta de una ‘nueva ruralidad comunitaria’ parece particularmente interesante: como en otros campos, aprovecha lo más avanzado de la literatura y la dinámica actual de los movimientos sociales para elaborar una síntesis novedosa. Cuando expresa la convicción de “que son las propias comunidades, organizadas en agrupaciones étnicas y alianzas regionales e internacionales, quienes tendrán la última palabra en el diseño de las estrategias para superar las diversas crisis que enfrenta la humanidad actualmente” lo hace con un sustento teórico, analítico y práctico que ha trabajado durante mucho tiempo.
- En plena era globalizadora, Barkin llamó la atención y concentró análisis y experiencias en la ‘economía local’. Mientras sus numerosas propuestas de política pública fueron continuamente ignoradas, en este campo no sólo ofreció sólidos argumentos y elaboraciones teóricas. Además de incontables ejemplos, que acopió con rigor, describió experiencias específicas que contribuyó directamente a organizar y caracterizó con expresiones como la “economía política de la autonomía” y la “economía ecológica desde abajo”.
- La convicción anticapitalista de Barkin no tuvo raíz ideológica, sino teórica y analítica, pero sólo en los últimos años, ante lo que se sospecha cada vez más como el colapso del capitalismo, en una ola violenta y destructiva que pone en peligro la supervivencia de la especie humana, la tradujo en observaciones, experiencias y prescripciones.

ciones pertinentes y valiosas. Entra con fundamento al examen de la construcción de sociedades poscapitalistas que aparece legítimamente como la conclusión de un prolongado empeño que es a la vez teórico, político y vivencial.

Terminado este prólogo, quisiera aún intentar algunos elementos del diálogo que David y yo hemos mantenido por tanto tiempo y ha sido para mí tan valioso.

Este año se cumplen 25 años de la publicación de *El diccionario del desarrollo: una guía del conocimiento como poder*. Habrá eventos y publicaciones que examinen su impacto, el significado de la corriente del posdesarrollo y el estado actual de las reflexiones y las experiencias al respecto. Según Wolfgang Sachs, el editor del *Diccionario*, “como desarrollo significa cualquier cosa, desde levantar rascacielos hasta instalar letrinas, lo mismo perforar pozos de petróleo que de agua, es un concepto de un vacío monumental... Es un testimonio del poder de las ideas que un concepto vacío haya dominado las discusiones por medio siglo”. Aunque David no estuvo entre los autores del *Diccionario*, compartía sus ideas. Sus análisis mostraban una postura crítica respecto al desarrollo mucho antes de que el libro apareciera. ¿Por qué, entonces, sigue usando la palabra hasta hoy?

En sus muy diversas y hasta contradictorias alusiones al ‘desarrollo’,¹ David muestra que sabe que el emperador está desnudo. Desde que Truman acuñó la palabra ‘subdesarrollo’, el desarrollo implicó aceptar como meta universal la definición de la buena vida del *American Way of Life*. David advierte tajantemente que “no se pueden generalizar los niveles actuales de consumo de recursos per cápita en los países ricos a la gente que vive en el resto del mundo” y que “los niveles actuales de consumo no pueden ser mantenidos, aun para aquellos grupos que ahora disfrutan de elevados niveles de consumo material”. Adopta sin reservas la defini-

¹ Se ha referido al desarrollo como “un proceso dual de enriquecimiento y cambio estructural”; ha aludido al famoso efecto cascada: que los beneficios concentrados del ‘desarrollo’ se transmitirían eventualmente a las masas; que en México ha sido sobre todo un proceso para incorporar a toda la población “dentro de los pliegues de las relaciones sociales capitalistas”; que el ‘desarrollo sostenible’ es “un compromiso esencial para enfrentar los retos de la supervivencia de la humanidad”; que “enfrentar los retos del desarrollo sostenible no consiste sólo en cuestionar nuestros patrones y prioridades de vida: también es poner en tela de juicio los valores básicos y el funcionamiento de los grupos más poderosos en todo el mundo”; que “el desarrollo sostenible no es una meta: es un proceso que tendrá que abarcar a todos, un camino que tendremos que recorrer juntos para que la humanidad tenga la opción de perdurar”; que los proyectos de desarrollo son una nueva forma de colonización, que beneficia a los inversionistas pero no a los pobladores...

ción del desarrollo que formula Rist, como “una serie de prácticas... que requieren la transformación y destrucción del ambiente y de las relaciones sociales”. Consciente del desastre del desarrollo y como uno de sus más sólidos críticos, David asume la noción plural y diversa del ‘buen vivir’ para caracterizar la miríada de opciones al desarrollo y al régimen dominante, en la construcción de las sociedades poscapitalistas que forman la desembocadura de su análisis.

Es probable que en esto, como en otras cosas, Barkin haya tratado de evitar el gelatinoso campo de las propuestas utópicas. Una analogía puede ilustrar el punto. En los años setenta Marcos Kaplan podía examinar con algún fundamento “la autonomía relativa del Estado” para referirse, no tanto al fantasma lingüístico, al fetiche, a los usos que se dan convencionalmente a la palabra ‘Estado’, sino a la medida en que el subsistema político y las instituciones públicas eran terreno de lucha en el cual la gente podía defender e impulsar sus intereses. No era insensato proponer políticas públicas que se ajustaran a los intereses y aspiraciones de obreros y campesinos. A medida que las clases políticas y las instituciones públicas quedaron cada vez más subordinadas al capital y se hizo prácticamente imposible que adoptaran políticas justas y sensatas, el énfasis de Barkin se trasladó a la gente misma, a su capacidad de ejercer sus poderes y capacidades para crear en forma autónoma sus formas de vida, sus mundos poscapitalistas. Conforme a esta analogía, David habría abandonado teórica y prácticamente la mentalidad dominante en relación con el ‘desarrollo’ o el ‘Estado’, pero retuvo el uso de estas palabras, tratando de darles nuevo significado, para mantener el diálogo con sus interlocutores.

Aunque ha pasado toda su vida en la academia, desde sus tiempos de estudiante hasta la fecha, David no se ha dejado atrapar por ella: además de las luchas que libraba dentro de las propias instituciones académicas para transformarlas, acercándolas a la realidad social y comprometiéndolas con ella, realizó en la práctica lo que planteaba, involucrándose personalmente con diversos actores del mundo a cuyo servicio quiso estar. Le interesaba más la verdad de la transformación que la transformación de la verdad, como alguna vez escribimos.

Traigo aquí a colación estos elementos de nuestro diálogo, como complemento del prólogo, para invitar a los lectores de este libro a seguir un camino semejante: se presta como pocos para reflexionar en los caminos y maneras en que podemos poner manos a la obra en la tarea de detener el horror que nos agobia cotidianamente y empeñarnos, cotidianamente también, en la construcción del mundo nuevo.

INTRODUCCIÓN

Nunca imaginé, cuando se me propuso editar una colección de artículos propios, que implicaría un repaso tan profundo de mi propia historia y una toma de conciencia. Al reunir estos escritos, he examinado mi propia trayectoria, resultado de más de medio siglo de actividad académica y de transformación, producto de mi decisión, hace más de 55 años, de mudarme a México y comprometerme con la historia de una nación en continuo cambio y un pueblo en lucha, un pueblo que sigue mostrando su enorme capacidad de resistir y de avanzar. Desde la primera oportunidad que tuve de vivir en la comunidad indígena de Huecorio, Pátzcuaro, Michoacán, en 1962, y convivir con un pueblo en rápida integración a la sociedad nacional, tuve experiencias que marcaron mi vida y que se plasman en los materiales incluidos aquí: mi primer encuentro con el expresidente de la nación, el General Lázaro Cárdenas, redefinió la orientación de mis estudios de posgrado y me marcó de por vida. No fue sólo por su generosidad, que me permitió entender el profundo contraste entre los “proyectos de desarrollo” que ya estaban polarizando el país y las colaboraciones entre productores en las comunidades rurales, que incidieron en elevar la calidad de vida de los comuneros, sino porque él también me abrió oportunidades para que entendiera el significado de la escuela cepalina y su relación con otros pensadores, quienes apuntaban hacia diferentes estrategias de las que dominaban en el Norte, como señaló en los capítulos 3 y 6.

Siendo estudiante en Yale University, se manifestó la profunda división paradigmática entre los estudiosos muy teóricos/tecnocráticos de la economía convencional y los que optamos por una vía más definida por los esfuerzos de transformar las condiciones de los países “subdesarrollados”. Esta brecha se hizo más evidente para mí por la fortuita interacción con Celso Furtado, que llegó como invitado, huyendo del golpe militar en Brasil, y con otros dos brasileños, Clovis Cavalcanti y Edmar Bacha, compañeros de casa y de debate. Las diferencias no eran de forma sino de fondo; se hicieron evidentes durante mis largas conversaciones con dos antropólogos: Sidney Mintz, como tutor de mi segunda área de especialización, cuyo compromiso con los pueblos caribeños, afrodescendientes, me llevó a entender de otra forma el significado de la caña de azúcar en la historia del capitalismo y de la región, y June Nash, que me demostró lo

trascendental del reconocimiento de género como fenómeno que incide en todas las dimensiones de nuestra existencia. Si estas influencias no fueron suficientes, la oportunidad de ser asistente de James Tobin, futuro premio Nobel, durante el periodo en que estaba formulando las bases de lo que sería la propuesta del “Tobin Tax” sobre transacciones bursátiles (Tobin, 1974), me convenció de la necesidad de encontrar otras epistemologías y ontologías. En este sentido, la posibilidad de colaborar con la Facultad de Economía de la Universidad de La Habana durante algunos años abrió otra puerta (un producto es el capítulo 12 de este libro) al igual que mi participación en el gobierno de la Unidad Popular durante la presidencia de Salvador Allende en Chile (Barkin, 1972b).

Regresando a México en 1974, tuve la oportunidad de participar en los importantes debates sobre las estrategias de desarrollo que transitaron desde el debate “estabilizador” hasta el “compartido” para llegar al neoliberalismo que todavía nos flagela. En aquellos días, había mucha esperanza de que la universalización de la educación constituiría un camino para asegurar la movilidad social y la democratización de la sociedad; eran los esfuerzos iniciales para extender la educación primaria a todos los grupos sociales, como parte de la herencia de la Revolución mexicana. Sin embargo, rápidamente se volvió evidente que las estructuras económicas e institucionales resultaron imperantes, limitando las acciones sociales (capítulo 1) y la posibilidad de enfrentar la crisis del cambio climático (capítulo 5). Unos años atrás, en este ámbito había realizado un análisis merecedor de una invitación para colaborar con Iván Illich (capítulo 2), experiencia que me abrió nuevas perspectivas sobre el quehacer social y político que imprimieron marcas indelebles que todavía llevo conmigo.

Bajo el liderazgo de Iván Restrepo, y con el apoyo del nuevo CONACYT, en 1974, se formó el Centro de Ecodesarrollo (siguiendo un modelo creado en París por Ignacy Sachs unos años antes) donde pudimos emprender investigaciones transdisciplinarias, pioneras en México y en el mundo. Encontré un ambiente muy acogedor para esta nueva epistemología en la recién creada Universidad Autónoma Metropolitana, donde se presentó una espléndida oportunidad para diseñar un nuevo programa docente en economía política en colaboración con un grupo de jóvenes y entusiastas profesores, reflejando la gran diversidad de pensamiento y disposición de experimentar que caracterizaba a México en aquel momento. Durante los más de cuarenta años de docente en esta Universidad, he disfrutado de una amplia oportunidad de desarrollar las líneas de trabajo que se plasman en los veintinueve capítulos de este libro; la docencia que realicé en estos años dentro del novedoso esquema modular

propició una interacción dinámica y transdisciplinaria con los estudiantes, que fue una fuente de constante enriquecimiento y que examino en un artículo que se publicó recientemente en la revista divisional, *Argumentos* (Barkin, 2015).

El Centro de Ecodesarrollo patrocinó importantes líneas de investigación que incidieron en el debate nacional sobre el camino a seguir. Entre ellas, dirigí un grupo de estudios sobre la evolución del sector primario en México, dando continuidad al trabajo previo en el Centro de Investigaciones Agrarias (Reyes Osorio, 1966). Publicamos numerosos trabajos sobre el papel del campesinado en la dinámica de la sociedad mexicana y su relación con los ecosistemas. Prestábamos particular atención a la problemática de la autosuficiencia alimentaria, ya que se estaba descubriendo que el ‘olvido’ de los campesinos en aras de un desarrollo agroindustrial había dejado al país a merced de los vientos del mercado internacional con un deterioro importante en la calidad de los alimentos disponibles para la población nacional (capítulos 13, 18, 23, 26); los libros que publicamos en aquella época se volvieron de lectura obligada como parte del debate nacional (Barkin y Suárez, 1982; 1985). Nuestra posición firme en cuanto al peligro de acceder al Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) provocó tanta ira en las esferas más altas de la jerarquía política que ordenaron cerrar el Centro en 1992. Aun cuando desapareció el Centro, seguimos con su espíritu, involucrándonos en apoyar iniciativas campesinas, como la de las comunidades de la Reserva de la Mariposa Monarca (capítulo 9), tecnologías apropiadas para fortalecer sus capacidades (capítulos 19 y 21), y análisis que insistieron en la fortaleza subyacente de la sociedad campesina, a pesar de sus muchos detractores (*e.g.*, capítulo 15).

Durante este periodo, mucho de nuestro trabajo siguió con un enfoque de desarrollo regional. Tomamos un papel activo en la formación de la Red Nacional de Investigación Urbana y en la Asociación Mexicana de Ciencias para el Desarrollo Regional; se publicaron varios trabajos que dieron seguimiento a mi tesis doctoral sobre desarrollo regional en cuencas hidrológicas (Barkin y King, 1970). La problemática del desarrollo desigual entre regiones estaba llamando la atención de muchos académicos quienes lamentaron la hiper-urbanización del Valle de México y el relativo olvido de otras regiones. Muy pocos analistas estaban dispuestos a reconocer que estos desequilibrios eran producto inherente de la operación de las mismas fuerzas del mercado que estaban provocando la creciente desigualdad económica y social, resultado del profundo cambio en el modelo de desarrollo a raíz del cambio en el patrón de acumulación que se dio en México a mediados de la década de los ochenta (capítulos 7, 8, 25).

El análisis de la estrategia de desarrollo y sus impactos en la sociedad mexicana fue tema subyacente a lo largo de mis trabajos profesionales. Los trabajos tempranos sobre la transformación de su naturaleza pronto evolucionaron en búsqueda de alternativas (capítulos 14, 18). Nutridos de la experiencia popular de Inglaterra durante la segunda guerra mundial, ofrecen una reflexión sobre la posibilidad de superar la volatilidad y el relativo estancamiento de la economía nacional (capítulo 16). Siempre estuve convencido (y lo sigo estando) de que el desaire oficial al sector campesino y a la producción de bienes de consumo básico fue un error; por eso, dediqué un esfuerzo permanente a identificar las diversas formas en que los actores rurales están contribuyendo a la dinámica nacional y a su propio bienestar (capítulos 14, 17, 18, 28).

Me he mantenido atento también a los conflictos al interior de la sociedad mexicana. A medida que examinaba la dinámica de la economía nacional, me resultó claro que el discurso oficial de la necesidad de controlar la inflación era una forma no tan sutil para imponer una compresión sobre los salarios, que ha venido apretándose cada vez más. El ensayo sobre la inflación en México, escrito con Gustavo Esteva (capítulo 4), inició una colaboración que sigue viva hasta estos días. Fue galardonado con el Premio Nacional de Economía Política y provocó una polémica airada y constructiva entre los economistas, sin que lograra contrarrestar la embestida neoliberal, apoyada ampliamente por el Banco de México, que insistía en la necesidad de reprimir la inflación mediante el control férreo de los salarios mínimos. Más reciente, la polémica en torno a la política nacional se ha hecho cada vez más compleja por la creciente inflexibilidad de la gestión económica; hoy en día, cuando el cambio climático está empezando a hacer sentir sus impactos de variadas formas en las diferentes regiones del país, las fuerzas de capital están intensificando sus impactos ambientales, implementando cambios superficiales y limitando las posibilidades de implementar políticas adecuadas para atender a las necesidades del país y de las mayorías (capítulo 5).

Los conflictos económicos empezaron a arreciarse hacia finales del siglo xx. Después de haber participado en el esfuerzo para frenar la inclusión del país al GATT en 1979, nos vimos superados por una nueva y mejor organizada campaña oficial para acceder en 1986, que a la postre resultó ser la antesala a la creación del TLCAN, que entró en operación en 1994; no se requerían grandes investigaciones para dictaminar que tendría nefastas consecuencias para los trabajadores y el medio ambiente. Desgraciadamente, el tiempo nos ha dado la razón. Las instituciones del nuevo tratado no resultaron adecuadas para enfrentar los retos: las Co-

misiones para la Cooperación Laboral y Ambiental generaron importantes contradicciones (capítulo 3).

La gestión del agua sigue como un foco de crecientes problemas en México. Nuestros trabajos con estudiantes de la UAM y colaboradores del Centro de Ecodesarrollo identificaron importantes sesgos en la política gubernamental. Desde mis primeros trabajos sobre las cuencas hidrológicas, mantuvimos una línea coherente de análisis de las contradicciones en la política hidráulica del país, primero con los municipios sin capacidades para cumplir sus mandatos, y después con una orientación hacia la privatización del control y gestión del recurso (capítulo 11); este trabajo se amplió en la obra colectiva que documentó las secuelas sociales y ambientales de la gestión del agua urbana (Barkin, 2006). A pesar de la centralización del control, hay muchos ejemplos de grupos locales que han logrado mantener y extender su dominio sobre este recurso tan importante, con importantes beneficios sociales y ambientales (capítulo 22). La gestión forestal también ha representado un ámbito de actividad comunitaria; las comunidades mexicanas han estado en la delantera de un movimiento internacional para conciliar, culturalmente, las estrategias de aprovechamiento y de conservación de los bosques, a la vez que contribuyen al bienestar de sus miembros (capítulo 20). El ejemplo de los indígenas que se han capacitado para defender y cuidar el bosque más grande del trópico húmedo mexicano sigue siendo motivo de estudio internacionalmente (capítulo 10) y un foco de conflicto entre modelos de sociedad diametralmente opuestos.

En años más recientes, al integrarme plenamente en los programas de posgrado en la UAM, he enfocado mi docencia en contribuir a la integración del enfoque de la economía ecológica en los programas de ‘ciencias’ económicas. Con la creciente comprensión de la relación integral entre la economía, la sociedad, y el ecosistema, las enseñanzas transdisciplinarias nos han llevado a explorar nuevas aristas del análisis económico, vinculado al tema sociocultural y ambiental. Participé en esfuerzos para modificar la enseñanza de la economía, integrando consideraciones de su relación con la biosfera (capítulo 23). Asimismo, abogué por una economía ecológica radical (capítulo 27) y una epistemología mejor armonizada con las demandas y el reconocimiento de las luchas y estrategias de organización de “los de abajo” (capítulos 24, 29). Por eso, tomé parte activa en la formación de la Sociedad Mesoamericana de Economía Ecológica, integrante de la Sociedad Internacional.

Para la implementación de este nuevo enfoque, era necesario revisar nuestras formas de interactuar con las comunidades que reconocían sus posibilidades de emprender estrategias propias para su bienestar.

Así, aprendimos a reconocer las aportaciones de las praxis rurales en la construcción territorial de nichos de sustentabilidad, de procesos de una nueva ruralidad comunitaria y en la innovación de la tradición. Sobre esta última enseñanza, aprendimos a colaborar en la introducción de tecnologías que complementaran las formas tradicionales en las comunidades (capítulos 19 y 21). También, integramos a algunos miembros de las comunidades en nuestros equipos de investigación y docencia, generando propuestas alternativas e interculturales para la organización social y productiva, siempre cuidando los impactos ambientales (capítulos 25 y 29).

Estoy convencido de que son las propias comunidades, organizadas en agrupaciones étnicas y alianzas regionales e internacionales, quienes tendrán la última palabra en el diseño de las estrategias para superar las diversas crisis que enfrenta la humanidad actualmente. A lo largo de más de un cuarto de siglo he tenido la suerte de ser acompañado por mi compañera Blanca Lemus con nuestros hijos y nietos. Ella ha asegurado que nuestra investigación esté siempre a la altura de las comunidades con las cuales estamos colaborando. Su participación en el proyecto internacional “Gobernanza Ambiental en América Latina” contribuyó a transformar esta experiencia en una “hoja de ruta” para forjar una economía social y solidaria, un reto que seguimos aceptando (capítulo 28). Seguiremos caminando con las comunidades con las que tenemos la suerte de colaborar, las que están empeñadas en forjar sus propios mundos poscapitalistas (capítulo 29).

Ahora que este “paquete” está armado, resulta claro que mi participación en la vida académica y política de México es algo más que la suma de estos ensayos. Sigo insistiendo en las limitaciones de la disciplina de la economía tal como la conocemos y es enseñada en nuestro país; a pesar del florecimiento de heterodoxias en muchas otras partes, aquí, la oferta dominante sigue siendo anacrónica. Desde mi participación en la academia he logrado impulsar una dinámica diferente, impulsando a mis estudiantes y en los auditorios donde tengo la oportunidad de hablar, a buscar nuevas explicaciones y nuevos campos de comprensión, combinando el diagnóstico crítico con la búsqueda de soluciones.

Se parte de principios muy elementales, heredados de algunos de los grandes pensadores de nuestros tiempos y de antaño. Empezamos con la muy evidente observación de que la economía no debe ser un mundo en sí mismo, sino parte de un sistema muy complejo. Seguimos con otra menos clara para muchos analistas: casi todas las sociedades en la historia tenían posibilidades de generar excedentes, pero la economía de subsistencia generalmente fue impuesta o, en algunos casos, una elección colectiva para evitar el surgimiento de desigualdades que minarían a la

solidaridad. Es notable que al reclamar esta capacidad de generar y controlar estos excedentes hoy, muchas comunidades están forjando nuevas bases para otros futuros posibles. Hemos comprendido esta posibilidad a medida que nuestras interacciones con ellas han “descubierto” el significado de las otras cosmovisiones que las caracterizan, las informan, y les ofrecen dinamismo.

Muchos académicos están inmersos en discusiones interminables sobre la naturaleza y las causas de la profunda desigualdad que carcome las sociedades en las principales economías del mundo. Están dándose cuenta del “hilo negro del capitalismo”, de que la concentración y centralización del capital alimenta la búsqueda por tajadas siempre mayores de poder que inevitablemente lleva a su abuso. Las letanías desde sus altares del poder, rogándonos respetar nuestra progenie y cuidar al planeta suenan huecas cuando tiran sus desechos en nuestros patios. ¿Realmente es necesario precisar los múltiples caminos de la desigualdad y la destrucción ambiental? ¿No es suficiente emprender otros caminos como los que los protagonistas de muchos de los ensayos en este libro están trazando?

Así, a diferencia de muchas colecciones, este libro comienza con una historia de decepciones y protestas contra los dogmas heredados. Su secuencia ofrece al lector una “visión panorámica” o una perspectiva a “ojo de pájaro” de la evolución de la protesta a la propuesta. La segunda parte está firmemente anclada en la diversidad regional que orgullosamente presume México: una diversidad que ocasiona numerosos problemas de gobernanza centralizada y grandes promesas traicionadas, y de esfuerzos todavía vivos de grupos sociales tratando de generar formas de autogobierno para que puedan tomar control de sus propias situaciones. La tercera parte empieza con una crítica de la gran transformación de la economía cubana para abordar la compleja trama que ha tejido la evolución capitalista en México, que creó contradicciones y callejones sin salida para las administraciones públicas en el siglo XXI a medida que abrió caminos para muchas sociedades locales. La cuarta parte asienta el enorme potencial del sector rural para impulsar un proceso diferente de desarrollo. En su primera sección, aborda los efectos dañinos y los resultados decepcionantes de las políticas oficiales, mientras que la segunda traza las posibilidades generadas por las acciones locales de numerosas comunidades. La segunda sección plantea una visión optimista, anclada en la realidad de las investigaciones y colaboraciones que hemos realizado en los últimos lustros con estudiantes y mi compañera de vida.

PARTE I
UNA VISIÓN CRÍTICA DEL DESARROLLO CAPITALISTA

INTRODUCCIÓN

El libro abre con una visión macroeconómica y social del proceso de desarrollo en México, contrastante con la que reina actualmente. El país gozó de un periodo casi sin precedentes en la historia del capitalismo mundial, que se conoció como el “Milagro Mexicano”. Durante tres decenios (1935-1965) experimentó un crecimiento económico de más de 6 por ciento global y un aumento sostenido de casi 3 por ciento en términos per cápita. La herencia de la Revolución mexicana y un grupo de políticos comprometidos con sus principios imprimieron una dinámica singular en el país: las nuevas políticas económicas y transformaciones institucionales impulsaron la integración de enormes contingentes de la población a nuevas actividades productivas y a las organizaciones creadas para asegurar su apoyo a la naciente estructura de control político. En el proceso, una gran mayoría de los mexicanos experimentaron una ampliación de sus oportunidades y un mejoramiento de su calidad de vida. La distribución de una parte importante de las tierras agrícolas y forestales, la extensión del sistema educativo, el inicio de una infraestructura productiva (de riego y de transporte) y de desarrollo urbano, así como la promoción de un proceso de industrialización, son facetas de este proceso que están quedando en el olvido ideológico de los nuevos próceres, que preferirían enfocarse en las bondades de la libre empresa y su mercado internacional.

A diferencia de tiempos más recientes, este hito no se limitó a un grupo de políticos y empresarios acaudalados que hoy están canalizando los recursos de la nación y del erario público en provecho propio. Claro, las cúpulas no se quedaron fuera del avance material y financiero que generó el “Milagro”. Pero, en esta época única en la historia del país, parecía haber suficiente para compartir algo con “los de abajo”, como los nombró Mariano Azuela, aquellos que lucharon en las filas de las fuerzas revolucionarias: campesinos, indígenas, obreros y tantos otros grupos que no quedan nítidamente clasificados en la historia social de aquel momento.

Como se examina en el primer capítulo, a pesar del proceso de inclusión social y económica, la concentración económica y política no se detuvo y la estructura productiva del país empezó a adaptarse a las exigencias de los capitanes del mercado mundial. El impulso inicial gene-

rado por la distribución agraria y por la demanda exterior generada durante la segunda guerra mundial siguió durante casi dos decenios más por la política del “desarrollo estabilizador” (Ortiz Mena, 1970), informada por la propuesta estructuralista cepalina del “desarrollo hacia adentro”, derivada del análisis de la evolución desfavorable a largo plazo de los términos de intercambio (Prebisch, 1950).

Uno de los pilares del pensamiento revolucionario fue la educación. En los tiempos del “Milagro Mexicano” el sistema educativo se expandió mucho, creando nuevas oportunidades y esperanzas. La visión oficial como una institución integradora de la población fue dominante, influída por las visiones del principio de siglo xx de José Vasconcelos, uno de los primeros secretarios de Educación después de la Revolución, quien manifestó su desdén hacia la población indígena. Sin embargo, la expansión del sistema escolar tuvo la función de integración nacional y control político, aunque nunca logró vencer las barreras sistémicas para impulsar la movilidad social que sus promotores presumían. Como muestra en el segundo capítulo, a pesar de los importantes aumentos en el financiamiento, el apoyo presupuestal era inadecuado, en comparación con otros países en condiciones similares. Tampoco es extraño que el sistema padecía de todos los defectos señalados por Iván Illich, con quien tuve la oportunidad de intercambiar ideas durante el tiempo que elaboré este texto, en sus trabajos sobre el tema, resumidos en *La sociedad desescalarizada* (1971). No es por demás señalar que las reformas ‘estructurales’ del sistema educativo que se están implementando hoy en día servirán para acentuar el proceso de filtro para seguir beneficiando a los grupos privilegiados sin responder eficazmente a las necesidades de una sociedad moderna.

Los mismos problemas de carencias presupuestales y visiones institucionales inadecuadas caracterizaban a todas las dimensiones de la política social. Como se muestra en el tercer capítulo, la integración económica internacional sirvió para intensificar los ritmos de trabajo, agudizar los problemas de salud de los trabajadores e intensificar los impactos ambientales dañinos de la industria. En este trabajo se da cuenta de una dinámica de cooptar a los sindicatos formales, a la vez que se toma nota del surgimiento de otras agrupaciones que estaban tratando de exigir cumplimiento de la legislación laboral. Como hemos visto desde inicios del presente siglo, esta tarea se está volviendo tremadamente más complicada a medida que la integración económica facilita la apertura de centros donde las condiciones de trabajo difícilmente pueden ser vigiladas y la administración pública carece de capacidades e interés para asegurar su cumplimiento.

En el plano macroeconómico, los “hacedores” de política abandonaron sus preocupaciones anteriores (durante el periodo del Desarrollo Estabilizador) de promover la creación de nuevas oportunidades económicas y sociales a favor de declarar a la inflación como el “enemigo número uno” de la sociedad. El cuarto capítulo ofrece una interpretación alternativa de sus orígenes y dinámica, situándola en el entramado del tejido social. La iniciativa privada, estaba sumamente preocupada por el aumento sostenido de los salarios reales en México durante el periodo anterior,¹ tendencia que tenía un impacto negativo sobre sus ganancias. En el capítulo la identificamos como una manifestación del conflicto social que estaba brotando de nuevo a medida que el gobierno estaba fallando en cumplir sus promesas. Como respuesta, las autoridades, conjuntamente con poderosos sectores empresariales, identificaron este problema como “una enfermedad” que tendría que ser desterrada a toda costa, imponiendo un régimen draconiano de represión salarial, conocido como “pactos sociales” que involucró la franca subyugación de las fuerzas sociales ante la “disciplina del mercado”. Esta disciplina salarial sigue treinta y cinco años después con tremendas consecuencias para la calidad de vida de las mayorías.

Finalmente, terminamos con un análisis de las respuestas cupulares al cambio climático. En el ambiente actual, todos los actores oficiales se han vuelto buenos ciudadanos, responsables, sustentables y ‘verdes’. Las empresas están buscando la denominación de “socialmente responsable” y reformulando sus productos, o por lo menos sus etiquetas, para que sean amistosas con el ambiente, dejando residuos reciclables y generando menos “gases de efecto invernadero” (véase Barkin en Utting, 2002). En este capítulo, se ofrece un triste examen de la forma en que los actores más poderosos están movilizándose para adaptarse a este nuevo contexto (más resiliente), volviéndose cada vez más cínicos y estridentes en declarar su cumplimiento con objetivos ambientalmente amigables, sin afectar el modelo de consumo o la estructura de la sociedad que genera cada día más conflictos sociales y contaminación ambiental.

En fin de cuentas, esta primera parte del libro ofrece un conjunto de trabajos protestando contra los cuerpos teóricos y los colegas que insisten en que se podrían manejar las contradicciones evidentes en nuestra sociedad con modificaciones menores en nuestro comportamiento o con elevar la capacidad técnica de nuestros análisis. Abarcando casi la totalidad de mi tiempo en México, se ofrece un testimonio de la dificultad de

¹ Aumentaron cinco veces en términos reales entre 1946 y 1976 (Barkin, 1991).

influir en los cambios dentro de las instituciones académicas. Las contradicciones que identificamos reflejan las grandes resistencias encontradas para externar nuestras inconformidades. Es claro que habrá que avanzar hacia una colaboración con grupos sociales comprometidos con ambiciosas transformaciones, algunas de las cuales están pintadas en las demás secciones del libro.

1. LOS LÍMITES DEL DESARROLLO CAPITALISTA: EL CASO DE MÉXICO¹

Durante varias décadas, el desarrollo económico de México se ha desenvuelto sobre la base del supuesto de que los beneficios derivados del crecimiento del producto nacional y de una industrialización progresiva se transmitirían eventualmente en forma gradual a las masas. Aunque los programas de acumulación capitalista nunca se fundamentaron en ilusiones con respecto a sus objetivos —el incremento de la ganancia por medio de la ampliación de sus mercados y del empleo de más trabajadores— el Estado nunca fue capaz de dedicarse de manera singular a perseguir estos objetivos. El desarrollo mexicano ha ido en forma sistemática en pos de la meta del estímulo al crecimiento económico proporcionando la infraestructura necesaria a la inversión privada y creando un ambiente propicio para la obtención de beneficios; pero el verdadero éxito del Estado ha dependido de su flexibilidad para responder cuando se hizo necesario a las demandas de los obreros y de los campesinos cuando solicitaban algunas medidas de participación en el proceso.

La característica principal del desarrollo económico mexicano durante el último medio siglo ha residido en su habilidad para incorporar de manera virtual a la totalidad de su población y a su estructura productiva dentro de los pliegues de las relaciones sociales capitalistas. Esto no quiere decir que todos los obreros mexicanos sean nuevos proletarios o que ahora toda la producción se realice con propósitos de lucro y por mano de obra asalariada; ciertamente esto no es así. Durante las últimas décadas, sin embargo, se produjeron profundos cambios en la forma de producir los bienes y en los mismos bienes producidos, lo cual ha hecho prácticamente imposible para cualquier grupo evitar la influencia del mercado en su vida cotidiana. Aún aquellas comunidades campesinas que han podido preservar o reconstruir sus formas cooperativas de producción se encuentran con que sus decisiones con respecto a lo que van a cultivar y cómo producirlo se ven influidas en gran medida por las fuerzas del mercado nacional e internacional, las cuales se encuentran más allá de su control y con frecuencia les son aún desconocidas. Lo mismo

¹ Publicado en *Revista Mexicana de Sociología*, 1984, vol. 46:(2), pp. 399417.

sucede con los patrones de consumo, que también han sido alterados en forma radical por el cambio en los estilos de vida, por las demandas de la fuerza de trabajo y las estructuras sociales, todo lo cual se relaciona con modificaciones en el aparato productivo como resultado de la inserción progresiva de la economía y la sociedad mexicanas en el sistema capitalista mundial.

En este capítulo presento un amplio bosquejo de este proceso. En la primera sección se examinan las transformaciones estructurales de la producción y se hacen algunas consideraciones en cuanto a quienes han sido los principales actores. La segunda sección se refiere a la naturaleza del proceso que asignó los beneficios entre los diversos grupos involucrados. Una tercera sección examina las contradicciones internas y externas que surgieron como resultado de décadas de acumulación capitalista, creando la profunda crisis en la cual se encuentra el país en la actualidad. Por último, se examina el debate en torno al desarrollo capitalista de México, a la luz de la evolución de la economía mundial en su totalidad.

1.1 EL ÉXITO DEL DESARROLLO CAPITALISTA

En medio de la crisis es a veces difícil reconocer la larga historia de éxitos que ha conducido al país a sus dificultades presentes. A lo largo de esta sección, el debate sobre la historia económica reciente de México se expresará en términos de los propios objetivos del sistema y se analizarán los instrumentos que se usaron para construir una estructura agrícola e industrial crecientemente diversificadas. La discusión comienza a partir de la premisa según la cual, no obstante las importantes diferencias políticas entre las administraciones presidenciales durante el último medio siglo, ha existido una congruencia notable en las metas generales. Los instrumentos para promover el desarrollo capitalista han cambiado con frecuencia, adaptándose a las diversas condiciones prevalecientes dentro del país y en la economía internacional. El compromiso común de promover el desarrollo industrial y de desarrollar un sector agrícola moderno, orientado hacia el mercado, está presente en todos los análisis, aun en aquellos que destacan las diferencias importantes entre las políticas sexenales.

Para definir y comprender las transformaciones que han ocurrido, una discusión acerca del cambio estructural debe establecer los parámetros. De manera tradicional, éstos se definen en términos de la distribución del producto nacional entre los diversos tipos de actividad económica. Así, la distribución del producto nacional, que se aleja de la agricultura

y va hacia la industria, se considera por lo general evidencia suficiente de las profundas modificaciones en la producción que han ocurrido a partir de 1940. Los datos sobre los cuales se apoya este análisis están disponibles en el siguiente cuadro:

CUADRO 1.1. DISTRIBUCIÓN SECTORIAL DEL PRODUCTO NACIONAL

SECTOR	1940	1950	1960	1970	1980
Primario	10	19	16	11	8
Secundario	25	27	29	34	37
Terciario	56	54	55	55	55

FUENTE: NAFINSA, *La economía mexicana en cifras*, México, 1978 y Secretaría de Programación y Presupuesto, 1981.

]]

Existen, sin embargo, maneras aún más reveladoras de examinar los cambios estructurales que han ocurrido. Los datos sobre la fuerza de trabajo son, a este respecto, elocuentes:

CUADRO 1.2. DISTRIBUCIÓN SECTORIAL DE LA FUERZA DE TRABAJO

SECTOR	1940	1950	1960	1970	1980
Primario	65	58	54	38	37
Secundario	16	16	19	23	26
Terciario	19	26	27	39	37

FUENTE: NAFINSA, *La economía mexicana en cifras*, México, 1978 y Secretaría de Programación y Presupuesto, 1981.

La comparación de los datos del producto y de la fuerza de trabajo sugiere las importantes modificaciones estructurales que tuvieron lugar en cada sector. La incapacidad de la agricultura y de la industria para absorber en forma provechosa a nuevos individuos dentro de la fuerza de trabajo los obligó a buscar empleo en el sector servicios, en el cual la productividad ha estado declinando sistemáticamente, en relación con los otros. La agricultura también ha ido creciendo con menor rapidez que la industria, pero debido a los cuellos de botella en el reclutamiento de la mano de obra en el resto de la economía, ya no pueden los campesinos y los trabajadores rurales abandonar simplemente las comunidades agrícolas en busca de horizontes más amplios; éstos no existen en México y las perspectivas de la migración ilegal hacia Estados Unidos también se han oscurecido.

Estas dos presentaciones del cambio estructural reflejan una característica importante del desarrollo mexicano: la extraordinaria polarización de la sociedad en todas sus dimensiones. Aunque se volverá a hacer re-

ferencia a este fenómeno en la sección siguiente, aquí es importante examinar algunas de las implicaciones de estas transformaciones. Un primer indicador podría ser el de la productividad. Algunos estudios recientes indican tremendas y crecientes diferencias en la productividad del trabajo y del capital en todas las partes de la economía mexicana. En la agricultura, por ejemplo, estudios microeconómicos de sociedades campesinas demuestran que las unidades agrícolas tradicionales son significativamente más eficientes en el uso de sus escasos recursos —tierra y capital— que cualquier otro tipo de organización productiva. Otros estudios han esclarecido disparidades productivas considerables entre productores, las cuales pueden explicarse por la diferencia en el acceso al crédito y a los insumos productivos modernos que por esa razón pueden ser adquiridos.

También son notables en la industria las diferencias en productividad, aunque en promedio son sustancialmente más altas que en otros sectores de la economía. Algunos estudios recientes han demostrado que estas diferencias están altamente correlacionadas con el ritmo acelerado de la concentración, la cual ha dado nueva forma a la industria durante las décadas recientes (Trejo, 1971; Hernández, 1983). Grandes firmas integradas están desplazando o absorbiendo a las pesquerías, con las consiguientes modificaciones en los productos, en el proceso de trabajo y en los grupos que controlan los medios de producción. Estudios anteriores habían demostrado que las empresas tradicionales habían sufrido una desventaja competitiva diferente en el proceso de modernización (Trejo, 1971). La nueva información confirma estos resultados, confirmando el proceso aparentemente interminable del aumento de la centralización del control de la producción y del control financiero; este último fenómeno no está todavía por clarificarse como resultado de la nacionalización del sistema bancario que hizo enfocar la mirada del público sobre la vastedad de las relaciones entre el sector financiero y la producción industrial.

En el sector servicios, la productividad ha caído en relación con los demás sectores como resultado del incremento de los desocupados rurales y urbanos que no encuentran otro tipo de trabajo. A pesar de los incrementos sustanciales en la productividad de la industria moderna de servicios (bancos, comunicaciones y aun transportes), que abarca la reorganización del comercio como resultado de la expansión de los centros comerciales y de los supermercados, la proliferación de comerciantes ambulantes y de trabajadores de servicios ha llegado a ser de nuevo un fenómeno común a lo largo de todo el país. Durante el auge de la prosperidad inducida por el gobierno y del *boom* de la época de la ilusoria riqueza petrolífera existió una marcada escasez en el mercado de trabajo,

la cual ha sido de nuevo revertida a medida que el subempleo se convierte en un fenómeno social crecientemente atemorizador. El sector terciario continúa siendo un pozo para los rechazados de los otros sectores, para los inadaptados sociales a los cuales la sociedad es incapaz de absorber productivamente dentro de sus pliegues capitalistas.

Las tendencias divergentes en el crecimiento de la productividad también reflejan la estructura cambiante de los bienes producidos en México. No sólo las grandes y medianas firmas han desplazado a los productores tradicionales, tanto en la agricultura como en la industria, sino que también han cambiado la fisonomía del país. Estos cambios han sido ampliamente documentados: en la agricultura, el cambio de la producción de alimentos básicos para la población por la de forrajes, la producción de artículos exportables y de frutas y vegetales de lujo fue el tema de una vasta literatura y el blanco de un esfuerzo funesto y de corta vida para restablecer el equilibrio (Barkin, 1982; Barkin y Suárez, 1982; Redclift, 1981). Los resultados fueron tan profundos que transformaron al país en un importante comprador de granos básicos en los mercados mundiales, con lo cual se puso punto final a la importante contribución histórica de la agricultura para reducir el déficit del país en su cuenta con el exterior. En el contexto actual de restricciones internas y de pobreza internacional, esto ha dado como resultado la reducción sustancial de los niveles nutricionales de importantes segmentos de la población y un deterioro general que se refleja en los indicadores de la salud pública.

En la industria, también, los cambios han sido espectaculares; desde 1962, el gobierno definió su compromiso con un programa de desarrollo basado en el eslabonamiento interindustrial a partir de un programa de producción nacional de automóviles. El país sostuvo un ritmo dinámico de crecimiento industrial (9.1% durante los años sesenta y 6.4% durante los setenta). Pero un examen de la distribución de este crecimiento entre sectores demuestra claramente su orientación hacia pequeños segmentos de la población (quizá 30%), que recibió los reflejos de la luz emitida por la prosperidad extraordinariamente concentrada durante varias décadas. Estas tendencias fueron exacerbadas durante los años setenta, como lo ponen en evidencia los datos del cuadro 1.3.

Estos datos reflejan la gran importancia que se dio a las industrias básicas y a la de bienes de consumo durable, las cuales claramente están orientadas hacia la demanda de los grandes capitalistas industriales y de los grupos de consumidores más ricos. Lo que estos datos no demuestran es la creciente dependencia que creó este patrón de industrialización, basado en importaciones extranjeras de maquinaria básica y aun en la de materias primas y componentes intermedios para mantener el

CUADRO 1.3. LA ESTRUCTURA DE LA PRODUCCIÓN INDUSTRIAL Y EL CRECIMIENTO

Sector	Participación en el producto manufacturero —1978— %	Tasa anual de crecimiento 1970-1976
Trabajo en metales y máquinas-herramientas	27.0	7.3
Metales no ferrosos	2.7	8.2
Instrumentos de precisión	0.5	13.9
Electrónica	1.8	11.3
Electrodomésticos	0.9	12.9
Automóviles y partes	6.5	8.3
Químicas	15.1	8.5
Química básica	2.0	10.3
Fibras sintéticas	1.8	12.3
Productos farmacéuticos	1.7	9.2
Pinturas	2.1	7.2
Caucho	1.4	8.8
Productos del petróleo	2.3	6.8
Industrias tradicionales	57.9	4.8
Alimentos y bebidas	31.0	5.1
Forrajes	1.5	8.7
Cemento	0.9	9.0
Vidrio	0.9	9.5
Hilos e hilados	4.7	3.0
Cuero	2.4	4.3
Papel	2.5	6.9

FUENTE: Secretaría de Programación y Presupuesto, Sistema de Cuentas Nacionales, 1978.

funcionamiento de esta estructura productiva; las importaciones de materias primas crecieron de 32% del total en 1954 a casi 60% en 1980. Sólo la industria de ensamblado y partes de automóviles representó 8 000 millones de dólares del total del déficit en la cuenta con el exterior durante los años recientes. La industria del acero, no obstante un amplio programa de inversiones del gobierno, se ha convertido también en un drenaje creciente del balance de pagos, puesto que requiere importaciones netas equivalentes al 10% de su producción total nacional, así como subsidios sustanciales, en tanto ocasiona daños ecológicos devastadores (Restrepo, 1983). Hay disponibles amplias evidencias que apoyan la opinión de que la dependencia de las importaciones de este patrón de industrialización sustitutiva de importaciones es creciente (por ejemplo, Ramírez de la O, 1980). Por otra parte, y a pesar de los sustanciales subsidios y de los esfuerzos de promoción de las exportaciones industriales, éstas no han sido diversificadas de manera importante; aun antes del *boom* de las exportaciones petroleras, los minerales en bruto representaban una creciente

proporción del total. Incluyendo ahora el petróleo, alcanzan a más de las tres cuartas partes del total. Incluso las tan proclamadas y subsidiadas “maquiladoras” o industrias de ensamblado de la región fronteriza emplean menos de 1% de la fuerza de trabajo y ni siquiera pueden hacer una contribución neta a la balanza de pagos del país.

Por último, un examen de las finanzas públicas revela la forma en que el gobierno ha afectado el crecimiento económico. Durante el último medio siglo, el gobierno se ha negado sistemáticamente a imponer impuestos sustanciales a los beneficios (del capital) porque, según sus argumentos, esto frena la inversión productiva privada. En consecuencia, ha recurrido al expediente de obtener ingresos, aumentando los impuestos a la renta y al consumo; los impuestos a la renta se elevaron de menos de 10% a más del 35% de los ingresos del gobierno entre 1940 y 1980, en tanto que los impuestos a las ventas (ahora valor agregado) subieron de prácticamente nada a 17% del total. Estas modificaciones, sin embargo, han incrementado más la regresividad de la estructura impositiva mexicana, puesto que sólo los asalariados (con un ingreso superior al salario mínimo oficial) y los consumidores cautivos de productos nacionales son gravados en forma sistemática, sin que puedan recurrir a ninguna forma de alivio cuando las tasas son relativamente altas. A pesar de los repetidos esfuerzos por realizar reformas y por mejorar los procedimientos de recolección, estas fuentes de ingreso han resultado inadecuadas para financiar los gastos oficiales, obligando constantemente al gobierno a buscar nuevas fuentes de financiación; durante décadas, las fuentes extranjeras fueron un expediente excelente y de bajo costo.

La inversión pública ha mostrado precisamente la tendencia opuesta. Es decir, los gastos han sido canalizados para promover directamente inversiones productivas provenientes de los segmentos más adinerados de la clase capitalista, tanto nacional como internacional. La escasez creciente de fondos gubernamentales en los años recientes muestra claramente las prioridades oficiales, incrementando el apoyo a las inversiones productivas en manufacturas, especialmente en las industrias básicas como son el petróleo y el acero, a expensas de los gastos en bienestar social. Como se sugirió antes, aun los gastos públicos en agricultura fueron realizados en su mayor parte en grandes programas de irrigación que beneficiaron a la clase de agricultores modernos, bien establecidos, a expensas de la vasta mayoría de productores campesinos; el resurgimiento del gasto en productos de la agricultura en 1980 es el aberrante resultado del funesto Sistema Alimentario Mexicano.

En resumen, la economía mexicana ha cambiado en forma dramática en el último medio siglo. La orientación de la economía hacia la produc-

ción industrial no sólo ha castigado a la mayoría de los productores directos que no han podido participar plenamente en estos programas, sino que también ha hecho que la economía fuera sistemáticamente incapaz de producir los bienes básicos que requiere la mayoría de la población para su supervivencia; entre los productos cuya oferta es escasa se incluyen alimentos, vivienda, servicios médicos y educación, para mencionar sólo unos pocos de los más importantes.

CUADRO 1.4. LA ESTRUCTURA DE LA INVERSIÓN DEL SECTOR PÚBLICO

SECTOR	1940	1950	1960	1970	1980
Agricultura	15	19	8	13	21
Industria	21	30	37	38	53
Transporte y comunicaciones	52	40	30	20	16
Bienestar social	10	10	23	27	9
Defensa y administración	2	1	2	2	1

FUENTE: NAFINSA, *La economía mexicana en cifras*, México, 1978 y Secretaría de Programación y Presupuesto, 1981.

En lugar de ello, la economía se ha estado modernizando, creándose un pequeño proletariado industrial y muchos sectores medios (intelectuales, burócratas, profesionistas y técnicos). Ahora puede producir una amplia gama de bienes de consumo durable y bienes de producción básicos, lo cual le da una apariencia de poder industrializante moderno; pero para sostener esta actividad debe importar su maquinaria y equipo básicos y muchos otros productos. El desarrollo tecnológico local ha sido virtualmente inexistente y los patrones de consumo han sido modificados para imitar un estilo de consumo crecientemente internacionalizado.

1.2. LOS BENEFICIARIOS DEL ÉXITO DEL DESARROLLO CAPITALISTA

Uno de los aspectos más notables de esta historia de transformación estructural consiste en las extensas mejoras en materia de bienestar social que se produjeron en un comienzo. Durante los años cuarenta y los primeros cincuenta, hubo continuos incrementos en los niveles reales de vida, marcados sólo por una declinación en la tasa de crecimiento durante la última parte de la década de los años sesenta. Al mismo tiempo, el ingreso real en el sector rural también ascendió a medida que aumentó la productividad y que se introdujeron nuevas cosechas. Se crearon

oportunidades de empleo con la expansión de la agricultura comercial, la agroindustria y los programas de inversiones públicas.

En tanto se elevaban los ingresos de los trabajadores y de los campesinos, se iba produciendo un cambio sustancial en la composición social de la población. El crecimiento de la burocracia continuó sin control hasta hace poco, expandiéndose diez veces desde 1940, hasta llegar a su nivel actual de 1.8 millones. Con la generalización progresiva de la educación primaria y el crecimiento de un sistema universitario que cuenta actualmente con más de 700 000 estudiantes, surgieron nuevos grupos importantes de profesionistas, creándose nuevas comunidades suburbanas que adoptaron los nuevos estilos de vida y patrones de consumo ofrecidos por la panoplia de industrias orientadas hacia el consumo.

En los niveles de vida, el gobierno proporcionó otras mejoras. Durante este periodo hubo un creciente esfuerzo por expandir el sistema de educación pública y por mejorar la calidad y el volumen de los servicios médicos a disposición de la población. Aunque es cierto que las escuelas todavía constituyen un mecanismo para estratificar y canalizar a la gente por clase social en las diferentes categorías ocupacionales, el acelerado crecimiento del periodo abrió oportunidades para muchos que fueron capaces de escapar de sus “senderos” y encontrar caminos de movilidad social y económica ascendentes. Al mismo tiempo, las mejoras en la salud pública redujeron las tasas de mortalidad, en especial entre los niños, y elevaron la esperanza de vida, en tanto que mejoraban lentamente los niveles nutricionales.

El desarrollo capitalista también creó un ambiente muy favorable para los inversionistas. Las barreras de tarifas proteccionistas y una legislación permisiva facilitaron el crecimiento de las industrias de bienes de consumo, las cuales prosperaron en el invernáculo de la demanda interna en rápida expansión proveniente de los sectores medios y de las clases superiores. Aunque siempre existió la amenaza de la “fayuca” (el comercio de contrabando de los bienes de consumo y de algunos equipos industriales) los mercados locales eran dinámicos y la competencia suficientemente limitada como para no constituir una amenaza para los beneficios.

La prosperidad generada por las altas tasas de crecimiento económico y la ampliación del mercado estimulada por un programa sustancial de inversiones gubernamentales alteró la estructura del control de la economía mexicana. A lo largo de toda la sociedad se consolidaron las grandes empresas y absorbieron a las más pequeñas. En la agricultura, el sector campesino se estancó, mientras que quienes practicaban la agricultura comercial aprovecharon las oportunidades de exportación, las demandas de los sectores medios y los nuevos requerimientos industriales para el

alimento de los animales; sus beneficios aumentaron mediante los programas de incentivos y subsidios del gobierno. La concentración y centralización industrial han sido ampliamente documentadas (véase Trejo, 1983), así como lo han sido sus implicaciones para el bienestar social (Tello, 1979; Barkin, 1975). También en las finanzas el control fue altamente centralizado, como se hizo bien evidente al quedar descubierto después de la nacionalización del sistema bancario en 1982.

La concentración acelerada del control sobre el aparato productivo ha sido mucho más importante que el alza de los niveles de ingreso en la determinación del efecto global de bienestar del desarrollo económico de México. En último análisis, como lo han demostrado las tendencias recientes, los incrementos en el ingreso monetario pueden ser rápidamente erosionados por una política de ingresos que en forma sistemática redistribuye los recursos en contra de los trabajadores. Esto es exactamente lo que ocurrió en México: a pesar de las décadas de rápido crecimiento de la fuerza laboral y de los incrementos reales en los niveles generales de vida, la crisis económica reciente, que empezó en 1976, erosionó progresivamente áreas de mejoras logradas por las clases trabajadoras del país. Desafortunadamente, los datos disponibles sobre la distribución del ingreso terminan justo en los momentos en que comenzó este deterioro. Son sin embargo ilustrativos.

Durante la década pasada se acostumbraba señalar la alta concentración de los ingresos personales durante el periodo de rápido crecimiento económico. Aun después de las medidas redistributivas relativamente fuertes tomadas durante la primera mitad de la década de los setenta, el Banco Mundial caracterizaba a México por tener “uno de los peores perfiles de distribución del ingreso de todas las naciones del mundo” (*World Development Report*, 1980).

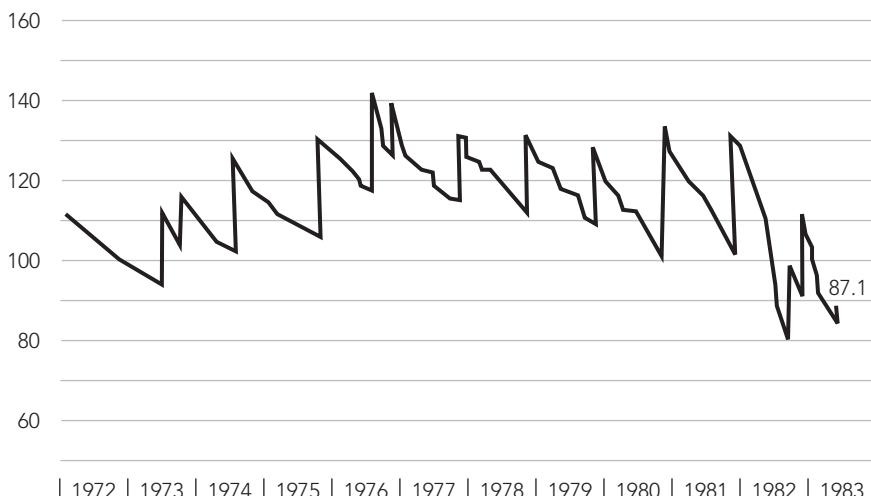
Los datos del siguiente cuadro reflejan con claridad un deterioro en la distribución del ingreso entre las clases sociales. La reducción en la parte correspondiente al 10% más rico de la población refleja una distribución dentro de los sectores superior y medio más que una inversión de las tendencias hacia la concentración. Es importante señalar que el dato para 1977 viene justo después del auge del programa sustancial de gastos del gobierno, ampliamente considerado como “populista” y, por lo tanto, redistributivo. Estos datos terminan precisamente en el momento en que se aceleró la declinación del poder adquisitivo de los salarios, especialmente si se considera la creciente proporción de la fuerza de trabajo que probablemente se ve obligada a trabajar con salarios que están por debajo del mínimo oficial (véase la gráfica 1). Es posible que esta tendencia empeore el año próximo.

CUADRO 1.5. DISTRIBUCIÓN DEL INGRESO PERSONAL

GRUPO DE INGRESO	1950	1963	1969	1977
El 20% inferior	5.1	4.2	4.0	2.9
Segundo quintil	6.2	6.9	6.5	7.0
Tercer quintil	10.3	9.8	9.5	10.0
Cuarto quintil	15.6	16.5	10.0	29.4
Quinto quintil	59.8	62.6	64.0	57.7
El 10% superior	49.0	49.9	51.0	40.6

FUENTE: Barkin (1975) y SPP, *Encuesta nacional de ingresos y gastos de las familias*, 1979.

GRÁFICA 1.1. PODER ADQUISITIVO EN LOS SALARIOS MÍNIMOS
(ENERO 1971 = 100)



FUENTE: elaborado por el CEESEP con datos de Banxico y c. n. de s. m., 9 de agosto de 1983.

Así pues, aunque el desarrollo capitalista estimuló inicialmente un proceso de mejoras reales en los niveles de vida, el proceso autocorrectivo del crecimiento económico ha invertido esta tendencia en los años recientes. Aun durante el auge del periodo de prosperidad, cuando los obreros y campesinos disfrutaban de importantes mejoras en su poder de compra real y de un acceso más amplio a los servicios sociales básicos, el capital se apropió continuamente, para sus propios usos de los beneficios producidos por el crecimiento. La concentración del ingreso personal y el crecimiento y centralización del control del aparato productivo fueron financiados por las ganancias extraordinariamente altas generadas en el ambiente excesivamente protegido al que un Estado muy solícito fue dando forma.

3. LAS CONTRADICCIONES DEL DESARROLLO MEXICANO

Históricamente, el capitalismo no funciona para permitir que los obreros logren mejoras de largo plazo en sus niveles de vida a costa del capital. Éste es precisamente el juicio que hicieron el capital nacional y el internacional con respecto a la evolución de largo plazo de la economía mexicana durante los años setenta, cuando se dieron pasos para invertir la tendencia y una vez más reestructurar la economía mexicana para ajustarla a las necesidades de la consolidación del mercado mundial. Esta internacionalización del capital ha funcionado dentro del marco de la crisis nacional e internacional para reorientar la producción y reformar la correlación de fuerzas políticas y para asignar los recursos entre los grupos sociales competitivos en México (Barkin y Rozo, 1981; Barkin, 1984). Las contradicciones creadas por los desarrollos durante las pasadas décadas han vuelto para quedarse, imponiendo una pesada carga al país, la cual estarán forzados a pagar sus clases trabajadoras. En esta sección se examinan estas contradicciones antes de efectuar un análisis sobre el camino futuro para el desarrollo mexicano.

Las múltiples contradicciones provocaron desequilibrios en toda la sociedad. El alza de los ingresos y los precios estables impidieron que la producción de bienes de consumo básico arrojara beneficios y la producción se restructure para responder a las demandas de nueva creación de los grandes y dinámicos sectores medios. La mejor educación, junto con la mayor incorporación de las regiones aisladas dentro de la sociedad nacional y las promesas retóricas de participación popular en un proceso político democrático, incrementaron las expectativas y las aspiraciones que sólo podían ser satisfechas por medio del incremento de los gastos estatales en servicios sociales y en subsidios destinados a mantener la estabilidad de los precios frente al alza de los costos y las altas ganancias. Pero los ingresos del sector público estaban virtualmente congelados porque el capital se negaba a pagar una parte mayor de los costos en forma de impuestos y otros sectores ya habían sido forzados a aumentar sus contribuciones.

También desde el punto de vista del sector externo el desarrollo mexicano se encuentra con problemas, los cuales fueron exacerbados por sus propias contradicciones. Las exportaciones agrícolas comenzaron a enfrentarse con algunas barreras restrictivas en los mercados exteriores, en tanto la demanda nacional iba absorbiendo una parte creciente de la producción de los nuevos productos de “alto valor”. Las demandas de ganado para satisfacer a los ricos del país y para los mercados extranjeros desplazaron a la agricultura destinada al consumo

humano en algunas de las regiones más prósperas del país, forzando a una reorganización de los trópicos mexicanos y a la deforestación de millones de hectáreas de tierra para dedicarlas a formas ineficientes de pastoreo extensivo. El sector de manufacturas nacionales resultó demasiado ineficiente para competir en los mercados internacionales y el drenaje de las reservas de divisas del país necesarias para pagar las materias primas, los productos intermedios y el equipo de capital —que eran insumos cada vez más importantes— se hizo demasiado gravoso; la situación se agravó después, a raíz de importaciones agrícolas básicas, lo cual convirtió al sector agrícola en otra fuente de problemas que pesaron sobre la balanza de pagos.

Así fue como la deuda externa creció progresivamente. Dado que los recursos nacionales eran insuficientes para pagar los gastos del gobierno y que el comercio exterior ocasiona un creciente desequilibrio, se requirieron ahorros externos para cubrir la diferencia. El rasgo significativo de este periodo (el de los años setenta) fue que la comunidad financiera internacional estaba deseosa (y aun ansiosa) de proporcionar el financiamiento necesario y podía hacerlo. Esta disposición favorable fue el resultado de otras contradicciones de escala mundial, provocadas por el repentino flujo de recursos líquidos de las naciones de la OPEP, que el sistema bancario internacional estaba tratando de utilizar provechosamente. Antes de eso, México había sido uno de los países favoritos de los funcionarios de las agencias financieras multilaterales debido a su estabilidad política y a su desempeño como modelo de desarrollo capitalista, tornándose aún más atractivo como deudor al anunciararse, a mediados de la década, el hallazgo de vastas reservas de petróleo.

Los conflictos nacionales por la distribución de recursos disponibles, que en otro tiempo hubieran tenido que ser resueltos por medio de luchas políticas internas, pudieron diluirse. Los programas de nuevos gastos o subsidios, la disminución de las barreras restrictivas de las importaciones y las políticas económicas liberales para nuevas inversiones fueron todos instrumentos para posponer el día de rendir cuentas. Todos estos instrumentos costaron dinero o restaron eficiencia al sistema, pero en apariencia los recursos externos estaban disponibles en cantidades ilimitadas. La paranoia de los países desarrollados respecto a una posible acción cartelizada futura ante el alza continua del precio del petróleo encendió el optimismo de la nación y se adoptó una actitud descuidada en cuanto al gasto y la reestructuración industrial.

El capital internacional se unió al de los empresarios nacionales para invertir en industrias nuevas y para inducir a los agricultores capitalistas a reorientar su producción hacia los mercados de manufacturas y del

exterior. Los nuevos proyectos industriales del sector privado se conjuntaron con los ambiciosos programas de desarrollo de la petroquímica y el acero para lanzar una nueva ola de construcciones. Esto sólo empeoró los ya severos cuellos de botella creados por la construcción de la infraestructura básica que fue necesaria para facilitar la exportación de petróleo que habría de financiar el proceso. Para algunos observadores el cambio de la estructura productiva fue motivo de preocupaciones, en tanto que para otros fue una marca de progreso y modernidad.

Las tensiones e incongruencias podían verlas todos. La creciente deuda con el extranjero era del conocimiento público. El cambio de la estructura productiva ocasionó una duplicación en el valor relativo de las importaciones totales representadas por bienes de consumo básico durante los años setenta (constituyeron el 7% del total de importaciones en 1970 y el 13% en 1980). Los déficits del sector público se convirtieron de pronto en un tema de debate abierto y de vocingleras reprimendas de impotentes legisladores. Los frustrados campesinos buscaron vanamente, una vez más, recursos para hacer productivas sus tierras y los obreros luchaban intentando mantener el valor real de sus salarios frente a la acelerada inflación. Los inversionistas, y aun algunos de los sectores medios, en respuesta a la incapacidad evidente del gobierno para controlar la situación, incrementaron aún más las contradicciones, llevando literalmente miles de millones de dólares fuera del país, convirtiendo al gobierno y al sistema bancario en un canal para atraer capital internacional barato al país, de tal manera que pudiera ser drenado hacia las arcas privadas en cuentas en el exterior.

Fue un periodo de intensa competencia. Las contradicciones fueron claramente visibles y los problemas eran comprendidos. El debate nacional con respecto al camino apropiado a seguir advertía acerca de los peligros de las políticas que se estaban adoptando. Fue un periodo de intensas críticas y de profundo conflicto. Duró lo que duró sólo debido a la codicia de la comunidad bancaria internacional. Su deseo de prestar volúmenes sin precedentes de capital especulativo la condujo a añadir su propia indisciplina a la de todos los poderosos participantes de la escena mexicana. Las medidas financieras para adornar los estados de cuenta individuales en los bancos y para evitar las agencias nacionales de regulación financiera en Estados Unidos y en otras partes, sólo crearon un fino velo extendido sobre los desequilibrios estructurales subyacentes.

4. LA CRISIS MEXICANA DESDE UNA PERSPECTIVA MÁS AMPLIA

Una característica sorprendente de la historia mexicana es la del periodo relativamente largo de prosperidad que disfrutó el país en su conjunto y la mayor parte de sus grupos sociales. El alza de los niveles de vida, la ampliación de los sectores medios y las actividades empresariales de altos rendimientos se combinaron para crear el “milagro mexicano”, como quedó inscrito en la literatura. Esta aberración en la conducta del sistema capitalista merece ser analizada.

Es importante hacer notar que el periodo comenzó con alguna medida de restricción, la cual fue reforzada por los acontecimientos que llevaron a las sustanciales devaluaciones del periodo 1948-1984. Fue un periodo de rápidos incrementos productivos financiados por la movilización de recursos nacionales no utilizados y por reservas internacionales acumuladas. El control político interno canalizó cuidadosamente mejoras limitadas en las condiciones de vida de segmentos cada vez mayores de la población. También los capitalistas fueron inducidos y estaban ansiosos por invertir sus ganancias en un prometedor mercado nuevo, ya fuera de manera individual o conjuntamente con el capital extranjero. La in tranquilidad laboral de la última parte de la década de los años cincuenta se explicó, por lo general, como el resultado de la codicia indisciplinada de unos pocos grupos cuya impaciencia podía haber alterado el proceso de crecimiento y redistribución ordenados.

Los años siguientes, de continuo crecimiento, comenzaron a requerir compromisos y limitaciones. Los gastos del gobierno no pudieron elevarse junto con las ganancias y los salarios en tanto se mantenía, sin conflicto, la estabilidad de precios. El modelo de negociación política, que mezclaba una buena cantidad de represión con dosis medidas de caridad para las mayorías y desbocada generosidad para el capital, requería más recursos de los que disponía el gobierno o el país como un todo.

En esta coyuntura el ambiente internacional comenzó a desempeñar un papel importante. México ofrecía un modelo de desarrollo económico alternativo que podría ser un contraste con las aspiraciones del expansionismo cubano, como algunos ideólogos del Consejo de Relaciones Exteriores podrían haberlo planteado. Por otra parte, Estados Unidos estaba envuelto en una lucha perdida (finalmente) en Vietnam, que provocaba sus propias contradicciones internas dentro de la sociedad norteamericana. La mano de obra mexicana, aunque nominalmente ilegal, era una parte importante de la escena productiva en diversas partes de Estados Unidos y constituía una pequeña válvula de escape para algunas de las contradicciones internas que se estaban desarrollando en

México. En este ambiente, no es extraño que el capital privado y el oficial respondieran favorablemente a los requerimientos mexicanos de mayores recursos, posponiendo y agravando de esta manera algunos de los mismos problemas que se estaba intentando resolver.

El capital internacional no podía permitir tal indisciplina en forma indefinida. El modelo mexicano, tal como evolucionó era extremadamente inefficiente y requería crecientes transferencias de recursos. Se necesitaban cambios estructurales para imponer límites a los diversos actores sociales y para reorganizar la producción de manera que el país pudiera transferir recursos, con mayor rapidez, a los centros internacionales de acumulación del capital. Los salarios reales tendrían que declinar, junto con los niveles prevalecientes de vida, con el objeto de liberar recursos para esta transferencia y para abaratrar la mano de obra mexicana con el propósito de que el capital internacional pudiera establecer nuevos centros de beneficios, más rentables, en el país. La nueva división internacional del trabajo es imponente: no sólo requiere recursos y productos; también necesita incorporar rentablemente entre sus pliegues a la fuerza de trabajo, en cada uno y en todos los países.

El nuevo modelo de desarrollo mexicano ha cambiado fundamentalmente la naturaleza del Estado así como el papel del país en la economía internacional. Ya no puede México permitirse ser la vitrina de exposición del desarrollo capitalista del tercer mundo; el costo está más allá de sus posibilidades, aunque la comunidad internacional estuviera deseosa de que así fuera. En lugar de ello, ahora debe ser un socio pleno del desarrollo capitalista mundial, contribuyendo con sus recursos, sus productos y su fuerza de trabajo al proceso global del poder económico centralizado. Como se dijo en el GATT, en su revista anual de la economía internacional en 1982: “En un sistema de economía abierta, una de las principales funciones de la política comercial es garantizar la congruencia de la política económica nacional entre las naciones y sobre un plano internacional.” Sin duda alguna esto significa la subordinación de los objetivos y las necesidades nacionales a los imperativos de la acumulación internacional.

Existe una alternativa posible, pero no dentro del marco de la integración económica internacional.

2. LA EDUCACIÓN: ¿UNA BARRERA AL DESARROLLO ECONÓMICO?¹

El desarrollo económico enriquece a la nación y generalmente propicia una cierta concentración del ingreso personal, por lo menos durante las primeras etapas. La educación, por el contrario, es un instrumento básico de democratización de la sociedad. Así va la sabiduría convencional sobre el tema. Se adscribe este efecto a la educación porque las personas con mayor educación tienen mejores perspectivas ocupacionales y mayor movilidad ocupacional, es decir, tienen mejores posibilidades para superar las limitaciones impuestas por las carencias culturales y materiales de sus familiares. Además existe comúnmente la creencia de que una difusión educativa conduce a una distribución más igualitaria del ingreso personal y que, de esta manera, la educación puede ser un mecanismo para corregir las tendencias observables en las etapas iniciales del desarrollo económico. La educación va todavía más lejos, según este razonamiento, preparando a la gente para su participación en la vida sociopolítica de la comunidad, lo cual facilita una distribución más amplia en el ejercicio del poder y la toma de decisiones.

Así, Seymour Martin Lipset (1966: 68) cita con aprobación la afirmación hecha para el caso puertorriqueño de que

la educación es el factor principal de destrucción de las barreras que se oponen a la movilidad social. La educación abre la estructura de clases y la mantiene en un estado de fluidez, permitiendo una circulación entre las clases mucho mayor de lo que de otro modo sería posible. Además, la educación crea aptitudes y capacidades importantes para el desarrollo económico, el que, a su vez, ofrece nuevas oportunidades a los individuos en las categorías inferiores.

De esta manera se plantea la necesidad de invertir en el sistema educativo para facilitar el crecimiento equilibrado del país, sin que surjan cuellos de botella causados por la escasez de cuadros preparados para dirigir y manejar la naciente planta industrial. Además, la ampliación de la base educativa es necesaria, según sigue la explicación tradicional, para

¹ Publicado en *El Trimestre Económico*, vol. xxxviii: 4 (núm. 152), 1971, pp. 951994.

la integración nacional —o sea, la creación de una cultura cívica para todos— y para la movilidad social y económica. En México, como en otros países, los planificadores de la educación han prestado mucha atención al diseño de un sistema que reúna las características necesarias para cumplir estas funciones. Han hecho hincapié en la manera en que la educación cumple simultáneamente sus dos funciones de alentar el crecimiento económico y la redistribución del ingreso en favor de los grupos populares.

El examen de la herencia de la historia educativa de México y de la situación actual en las escuelas no ofrece bases muy firmes para apoyar esta descripción optimista. Por el contrario, los datos disponibles sugieren que la expansión escolar no ha colaborado ni para una mayor movilidad ocupacional ni una redistribución del ingreso para el beneficio de los grupos más humildes. Nuestro análisis del desarrollo del sistema escolar y del crecimiento económico del país durante los últimos decenios, por el contrario, nos lleva a concluir que el patrocinio público de la educación en México no ha abierto avenidas de movilidad ocupacional para los grupos mayoritarios. Esto es consecuencia del número limitado de nuevas oportunidades de trabajo disponibles en el sector moderno de la economía en relación con el número de personas que actualmente tienen acceso al sistema escolar. El exceso de la oferta sobre la demanda de personas en los sectores económicos de mayor remuneración ha determinado la creación de mecanismos de selección basados en el número de años de asistencia escolar, el cual ha ido en aumento continuo. Pero la asistencia, en sí, está determinada, en gran medida, por el ingreso familiar, lo cual está estrechamente ligado a la clase social de los niños. El resultado ha sido la exclusión de la mayoría de la gente de las clases bajas de las mejores oportunidades.

En la primera sección de este trabajo presentamos una breve reseña de las hipótesis sobre el papel de la educación dentro de la sociedad para reforzar nuestra argumentación posterior. Veremos, en seguida, la relación entre educación e ingreso en México antes de examinar la estructura del sistema escolar mexicano. En esa misma sección usaremos datos sobre el acceso al sistema escolar y la supervivencia dentro de él, para poder describirlo adecuadamente. Con esta perspectiva, formularemos una hipótesis para explicar la aparente contradicción entre los resultados y las expectativas de la educación. Esta hipótesis se utilizará para analizar la relación entre el desarrollo económico y la educación.

El propósito de esta evaluación es el de sugerir la necesidad de una reconsideración a fondo de las cuestiones básicas que se formulan para el análisis del sistema escolar mexicano. Esta reorientación estaría dirigi-

da hacia una apreciación de la estrecha relación existente entre la educación y el crecimiento económico. Tal relación no consiste en un mero refuerzo de la educación a la capacidad de expansión económica, sino que es una función mucho más compleja. El resultado de la interacción entre el crecimiento y la educación es la concentración de los frutos del progreso económico y el robustecimiento de la estructura de estratificación social que actualmente rige.

2.1. EL PAPEL DE LA EDUCACIÓN EN EL DESARROLLO SOCIAL Y ECONÓMICO

Tradicionalmente, los economistas se han dedicado a confirmar y explicar las ideas comunes sobre el papel de la educación en el desarrollo económico. Muchas de estas ideas son compartidas tanto por la comunidad académica como por la población en general, siendo tales como: una mayor inversión en educación puede contribuir a elevar la tasa de crecimiento de la economía por ser una inversión de alta rentabilidad para los que invierten en ella; mayores gastos en la educación propician una disminución de la desigualdad entre los ingresos de la sociedad porque los incrementos pueden tener mayores efectos sobre los grupos más humildes; y, finalmente, el supuesto de que con mayores logros educativos es posible obtener mejores oportunidades económicas personales y romper las limitaciones impuestas por la herencia y el medio ambiente. No obstante que las limitaciones del sistema educativo para funcionar como un mecanismo de movilidad ocupacional y social están plenamente reconocidas, prevalece la convicción de que, con ciertas reformas, la educación puede jugar un papel importante como un factor democratizante de la sociedad. El objetivo de este trabajo es el de cuestionar esta suposición para el caso concreto de México.

Partiremos de dos observaciones iniciales: que las personas con mayor educación tienen mayores ingresos y que las disparidades entre ellos mismos son menores que las existentes entre personas con ninguna educación. Notaremos también la importancia de la educación para el crecimiento económico, no solamente en cuanto a la capacitación de personas para responder a las demandas de la industria y servicios modernos, sino también al facilitar el proceso de adaptación a la sociedad moderna. Señalaremos, finalmente, que la expansión del sistema escolar en México ha sido notable y que en 1970 casi 20% de la población mexicana estaba escolarizado, en comparación con 11% 20 años antes, lo que no es poca

hazaña si se toma en consideración la rápida expansión demográfica que caracterizaba al país.

Sin embargo, México continúa estando caracterizado por grandes desigualdades entre las clases sociales, mismas que se están agudizando. Una de las tesis de este trabajo es que, en parte, el sistema educativo está contribuyendo a acentuar este problema. En efecto, al igual que en otros países, la selección geográfica, ocupacional y según el nivel de ingreso el sistema funciona para limitar el acceso a la escuela a las personas de las clases más bajas.

En México, la selectividad en la educación superior es sumamente alta aun en comparación con otros países del mismo nivel de ingreso, con una estructura económica comparable, o con un nivel similar de asistencia universitaria. Otros sociólogos han señalado la existencia del mismo fenómeno en varios países en todos los niveles educativos. De hecho, se podría afirmar que son los sociólogos los que han dedicado más tiempo al estudio de un problema que los economistas apenas ahora están preocupándose por entender. A saber: la relación entre la educación y la distribución del ingreso o status social.²

Queda claro, también, que las oportunidades educacionales pueden ser efectivas solamente hasta el punto en que las personas puedan aprovecharlas y obtener utilidad de ellas dentro del contexto de la economía. Si no existen suficientes posibilidades de conseguir ocupación que le produzca mayores ingresos a una persona con educación en relación con otra no educada, el valor económico de la educación está limitado. Nuestra hipótesis es que no solamente la estratificación dentro del sistema escolar contribuye a las desigualdades personales observadas en México, sino que éstas se deben también a la función del sistema educativo como un mecanismo de filtro que selecciona las personas que pueden entrar a los sectores modernos de la economía, donde ofrecen mejores posibilidades económicas.

Si bien el examen del sistema escolar mexicano proporciona en sí una visión amplia de una de las posibles fuentes de desigualdad en México, creemos que resultaría incompleto, y quizá erróneo, un enfoque que se limitara al examen de la educación y los alumnos. La educación no es una institución que pueda funcionar fuera de un contexto macrosocial y, en consecuencia, sería difícil entender sus repercusiones sobre la so-

² Para mayor información sobre el interés de los economistas en problemas de la igualdad y la educación, véase Mincer (1970), Hollister (1970), Hansen y Weisbrod (1969). La literatura sociológica es más amplia; véase Anderson (1961) y otros trabajos en el mismo libro y Girard (1967).

ciedad si no enfocamos el análisis hacia sus interacciones con otras instituciones y sectores. Así, pues, el examen de los mecanismos de selección puede entenderse solamente dentro del contexto del mercado de trabajo y de las políticas de crecimiento que utilizan a la educación no solamente por sus funciones productivas de entrenamiento, sino también por su capacidad de selección de las personas más indicadas para su entrada al sector moderno y, como consecuencia, por su capacidad de limitar los ingresos de muchas.

Este enfoque analítico nos parece importante en la coyuntura mexicana actual [1970], dado el énfasis puesto en la reforma educativa y la popularidad del enfoque de la planeación educativa en función de las necesidades de mano de obra calificada para el desarrollo económico. Esta herramienta para la planeación parece ser sumamente útil en un nivel superior, dado el aumento continuo de la necesidad de personas altamente calificadas para elevar los niveles de productividad y para mantener al país al corriente, con respecto al desarrollo tecnológico mundial.³ No es nuestro papel cuestionar la importancia de asegurar una oferta adecuada de mano de obra calificada para el desarrollo. El enfoque de la planeación de la mano de obra puede servir para estimar los flujos educativos correspondientes aunque ha sido criticado a fondo en varias ocasiones. Tampoco podemos pretender poner en duda los programas de inversión pública y privada ni las suposiciones sobre las cuales están basadas las proyecciones de la demanda de mano de obra.⁴ El propósito de este trabajo es el de sugerir algunos de los peligros inherentes en la utilización en este enfoque, en el contexto actual del desarrollo socioeconómico de México. La utilización del mismo, implícita en muchas de las declaraciones oficiales sobre la evolución de la estructura escolar mexicana y la persistencia de los métodos actuales en la expansión del sistema educativo, no propiciarían la integración de la gran masa de mexicanos que no han podido conseguir trabajo en el sector moderno de la economía, hacia posiciones que les ofrecieran la oportunidad de una mejora relativa en sus niveles de vida.

³ Véase, por ejemplo, Hollister (1966) y Bowles (1970), especialmente el capítulo 3, para una crítica de este enfoque. Nota de 2017: es irónico que el mismo análisis es pertinente frente a las “nuevas” reformas “estructurales” del sistema educativo.

⁴ Convendría notar que varios analistas han puesto en duda la capacidad de la economía mexicana para absorber, en forma productiva, el flujo creciente de nuevos entrantes a la fuerza de trabajo en los próximos años. Revisese, por ejemplo, Ibarra (1970).

2.2. EDUCACIÓN E INGRESO

Si bien se dispone de poca información directa sobre ingresos personales por años de educación de los recipientes, la que existe indica una rentabilidad positiva y atractiva para las inversiones en educación en la mayor parte del mundo. En México había, hasta hace muy poco, solamente dos estudios al efecto (Carnoy, 1964 y 1967, y Selowski, 1967). Con base en los datos publicados podemos, sin embargo, decir algo sobre la relación entre la distribución del ingreso y la distribución de la educación, y sobre su evolución durante los últimos veinte años. Para 1960 podemos elaborar medidas más específicas sobre la relación entre educación e ingreso con base en una muestra del 1.5 % del Censo de Población (Bialostozky, 1970).

En este apartado, presentamos datos de un corte longitudinal y uno transversal para examinar la relación entre educación e ingreso. Los resultados del primero sugieren la ausencia de una relación fuerte entre la distribución de las dos variables que tradicionalmente se piensa tendrían una elevada correlación. A pesar de esto, la segunda parte del análisis, la transversal, muestra la existencia de tal relación en una forma aparente y fuerte. La yuxtaposición de los dos niveles de análisis señala el peligro de sacar conclusiones sobre cambios intertemporales con datos transversales y sugiere la necesidad de una nueva explicación del fenómeno. La suposición tradicional de que un mero aumento en el nivel y el número de la gente educada en el país traería no solamente un aumento en los niveles de ingreso, sino también una mejor distribución del ingreso no parece comprobarse en el caso mexicano, o en el caso de otros países donde se ha planteado la misma cuestión.

a] *Relaciones longitudinales*

Con base en los datos sobre la distribución del ingreso, analizados por Navarrete (1970), sabemos que en México ha tenido lugar un gran deterioro en la distribución del ingreso entre 1950 y 1963. Así, durante el periodo hubo un aumento en el coeficiente de Gini de 0.50 a 0.55.⁵ (El coeficiente de Gini varía de 1.0 a 0.0. Mientras más bajo sea el valor, más equitativa será la distribución.)

⁵ La cifra para 1960 y 1970 en el cuadro 2.1 está basada solamente en ingresos del trabajo y, como consecuencia, no es comparable con las otras, ni comparable entre sí. Nos parece que esta cifra es bastante elevada —indica un grado de desigualdad completamente fuera de orden— y como consecuencia no es confiable para fines de comparación.

Los datos censales indican que la distribución del acervo de educación entre la población cambió muy poco durante los años cincuenta y sesenta. Así, a pesar de un fuerte incremento en el sistema escolar —casi 250% en inscripciones— y un aumento de más de 600% en el gasto (a precios constantes) entre 1950 y 1970, el coeficiente de Gini, midiendo la distribución de la educación, no cambió en forma significativa entre los dos años. Es decir, entre las personas que pudieron haber terminado la escuela (mayores de 25 años en 1950 y de 30 años en 1960 y 1970) hubo poco cambio y en sentido opuesto al esperado en la distribución del número de años-personas de educación durante el periodo (cuadro 2.1).⁶

Otro aspecto notable es la mayor concentración en la educación que en el ingreso. Esto es sorprendente, en vista de la expectativa de que el aumento en el nivel educativo de la población —reflejado en el ritmo superior de crecimiento de la población escolar en comparación con el crecimiento demográfico— iría acompañado de un mejoramiento en la distribución del ingreso. Durante los años cincuenta y sesenta esta expansión no solamente no fue acompañada de una mejora en la distribución del ingreso, sino de una ausencia de cambio en las cifras de concentración del acervo educativo de la población.⁷

Hay, sin embargo, ciertas similitudes entre estos hallazgos y la experiencia de otros países, donde se dispone de datos relevantes. Hollister (1970) examinó la relación entre la distribución del ingreso y la educación y encontró “ausencia de una relación fuerte entre cambios educacionales y cambios de ingresos”, en varios países desarrollados tales como: Alemania occidental, Australia, Canadá, Dinamarca, Estados Unidos de América, Finlandia, Francia, Inglaterra, Noruega, los Países Bajos y Suecia. Hollister señaló que “en todos los casos, la educación está distribuida en una forma más equitativa que el ingreso”. De los datos mexicanos también podemos desprender la falta de una relación clara entre los

⁶ El coeficiente para la distribución de la educación fue calculado con datos del acervo de educación en el país; es decir, el número de personas con el número de años de educación cursado por cada uno. Se comparó la distribución de personas con la distribución del acervo, empezando con las personas que no habían cursado ningún año de estudio. Por ejemplo, el grupo de personas sin educación en 1970 representó 35% de la población; sin embargo, no recibió ningún peso en la consideración del acervo total de personas —años de educación en el país; en el caso opuesto de personas con 17 y más años de educación, éstos representaron solamente 0.2 % de la población, pero acumularon 1.1 % del total del acervo educativo en México en 1970. Para una discusión más extensa de la técnica para calcular este coeficiente. Véase Holguín (1971).

⁷ Aunque los datos de ingresos para 1960 parecen contradecir esta conclusión, cabe mencionar de nuevo la observación de que el coeficiente para la distribución del ingreso en 1960 es demasiado elevado con respecto a lo que uno podría esperar.

**CUADRO 2.1. MÉXICO 1950-1963: DISTRIBUCIÓN DEL INGRESO
Y DE LOS RECURSOS EDUCATIVOS (MEDIDO EN COEFICIENTES DE GINI)**

AÑOS	DISTRIBUCIÓN DEL INGRESO ¹	DISTRIBUCIÓN DE LA EDUCACIÓN PONDERADA POR:		
		Años de educación	Uso de recursos educativos ²	Rendimiento de la educación ³
1950	0.5	0.61 ⁴	0.83 ⁴	0.88 ⁵
1958	0.53			
1960 ¹	0.64	a) 0.61 b) 0.65 c) 0.58	a) 0.79 b) 0.82	a) 0.84
1963	0.55			
1970 ⁶	0.58	a) 0.55 b) 0.62	b) 0.81	b) 0.85

¹ La información para 1950, 1958 y 1963 proviene de Navarrete (1970: 1). El dato para 1960 fue calculado directamente de una muestra del Censo de Población de 1960 y se refiere exclusivamente a los ingresos del trabajo, véase Bialostozky (1970), y nota 4 de este trabajo.

² Calculado usando información sobre costos de la educación estimados por Carnoy (1964).

³ Calculado usando información sobre la rentabilidad de la educación presentada por Keesing (1968) basada en el trabajo de Carnoy.

⁴ Esta información se refiere a todas las personas en la población de 1950 mayores de 25 años. Fue necesario hacer supuestos sobre el nivel educativo de la población para interpolar los datos censales. Éstos son: que el grupo con 1 a 6 años de estudio tenía como promedio 2 años de educación; el de 6 a 9 años un promedio de 8; el de 10 a 12 años, 11; el de 13 a 29 años, 17. Con los promedios localizados a 3, 8, 11 y 16 años los coeficientes serían .56 y .78, respectivamente.

⁵ Usando 3, 8, 11 y 17 años como promedios para la interpolación de los datos censales.

⁶ Datos del Censo de Población de 1970. La distribución del ingreso refiere solamente a los ingresos de trabajo y están basados en interpolaciones burdas. 1960 y 1970 : a] todas las personas mayores de 15 años de edad; b] todas las personas mayores de 30 años de edad, y c] todas las personas en la población económicamente activa.

cambios educativos y los cambios en los ingresos, desde un punto de vista distributivo. Notamos, además, una excepción importante al patrón de uniformidad observado en los países más ricos: la educación está distribuida en una forma menos equitativa que el ingreso en México. Como veremos más adelante, parte de la explicación reside en la escasez de los recursos asignados a la educación.

La aparente incongruencia entre la expectativa de una fuerte relación entre la distribución del ingreso y la de la educación resultaron de preocupación. En un seminario en la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico se introdujeron varias consideraciones adicionales al análisis que desmintieron la supuesta relación directa entre educación e ingreso. Éstas incluyen la observación que: 1] las variaciones en las dos

distribuciones son sensibles a cambios en los factores de ponderación; 2] el efecto redistributivo de la educación puede ser compensado por otros cambios en la sociedad tales como la estructura de la industria, la composición por edades o razas de la población, etcétera; 3] “en el reemplazo de una ‘aristocracia’ por una ‘meritocracia’ el efecto neto sobre la distribución del ingreso no es muy claro”; 4] la distribución de recursos educacionales, en vez de los años de educación, puede ser la explicación para entender mejor la relación, y ésta sí puede estar empeorándose; y 5] los resultados de los datos transversales nos engañan con respecto a las tasas de rendimiento realmente observadas a través del tiempo (Hollister, 1970). Finalmente, cabe mencionar la hipótesis sugerida en este trabajo de que es erróneo concebir a la educación como una institución que funcionara independientemente de otras y, por lo tanto, no debe analizarse fuera del contexto dentro del cual funciona. Así, la explicación de la observada incongruencia entre los datos y las esperanzas de encontrar una relación entre la distribución del ingreso y la educación, radica en la determinación de ésta en función de aquél, como respuesta a las necesidades de los grupos más acomodados de la población.

Todos estos factores son interesantes para una investigación más depurada de la relación real entre educación e ingreso. Desde nuestro punto de vista varios de ellos son complementarios. Los primeros tres puntos mencionados por Hollister parecen tener una relación más estrecha con la hipótesis desarrollada en este trabajo, y los estudiaremos en el apartado correspondiente. El quinto parece bastante evidente pero incompleto por la falta de explicación del porqué; creemos que también está relacionado con la hipótesis general de que la educación no funciona sola e independientemente de las otras instituciones que la condicionan.

Examinaremos el cuarto factor aquí con algún detalle porque ya existe cierta literatura al respecto y es posible examinar datos para el caso mexicano. También es interesante por las incongruencias con otros países. La sugerencia de que los recursos educacionales no están distribuidos de la misma manera que lo están los años de educación no es nueva, pero últimamente ha encontrado apoyo adicional basado en trabajos empíricos. Meade (1964) señaló que el apoyo financiero del gobierno a la educación pudiera tener un efecto completamente opuesto al efecto igualitario de la educación primaria. Weisbrod y Hansen (1969, 1970) examinaron esta posibilidad en el caso del “sistema educativo que es supuestamente el más igualitario en todo el mundo, el del estado de California”, y encontraron que la especulación de Meade podía confirmarse. Subsecuentemente se confirmaron los resultados para el estado de Wisconsin (Hansen, 1970).

Esto está claro también en el caso de México, como mostraremos más adelante, donde los factores económicos, sociales y políticos se combinan para facilitar el acceso a la educación a los hijos de las familias de las clases altas. Una encuesta en Monterrey mostró en una forma bastante clara que “la educación empieza a operar como medio de movilidad social a partir de, prácticamente, el estrato de la clase media solvente” (Puente Leyva, 1969: 41). Los datos indicaron que mientras los miembros de las clases bajas podían mandar a sus hijos a la escuela primaria por varios años, sólo una proporción sumamente reducida de éstos logró avanzar a los niveles escolares intermedios. La situación aparece todavía más aguda si se toma en cuenta el hecho de que el sistema escolar está mejor desarrollado en las regiones más ricas del país —las zonas urbanas e industriales— y que en el resto la educación es accesible sólo a proporciones reducidas de la población y por un menor número de años. Trataremos este problema en el siguiente apartado.

Harbison y Myers sugirieron que en la medición de la educación se debe dar mayor ponderación a los niveles superiores de la educación por su mayor contribución al desarrollo económico. De hecho, en su índice compuesto del nivel de desarrollo de los recursos humanos ignoraron por completo el nivel primario y las diferencias en ingresos entre las personas en la mitad inferior de la población (medidas en logros escolares) para construir un índice de destreza educacional (1964: 32); ¡si consideramos la experiencia mexicana se debe ponderar la terminación de la carrera universitaria cincuenta veces más que una educación dos años arriba de la mediana a nivel nacional! Hollister (1970) eligió ponderar los distintos niveles de la educación por los costos totales de la misma (costos directos más ingresos no percibidos) para examinar este efecto en los Estados Unidos de América. Encontró que, al contrario de la distribución de la educación sin ponderaciones, los datos ponderados por diferencias en costos llegaron a ser más desiguales con el tiempo; esto es, el uso de recursos educacionales, tal y como lo definió, estuvo más concentrado en 1960 que en 1950 en su país.

Cálculos parecidos efectuados para México mostraron diferencias sorprendentes con estos hallazgos. Con base en los costos de la educación para 1962 (el único año para el cual disponíamos de datos adecuados cuando se escribió este artículo) encontramos pocos cambios en los coeficientes de Gini durante los años cincuenta y sesenta. De existir alguna diferencia, ésta consistiría en que la distribución del uso de recursos educacionales entre las personas en el sistema escolar fue ligeramente más igual en 1960 que en 1950 (cuadro 2.1). Hay poco cambio si usamos los rendimientos a la educación en vez del uso de recursos educativos.

Esto se debe, sin lugar a duda, al peso predominante de la escuela primaria dentro del total; cuenta con el 81% de la población escolar total.

A pesar de que las matrículas universitarias crecieron durante los años sesenta casi dos veces más rápido que la cifra correspondiente al nivel primario, había en las universidades solamente 2% del número de estudiantes de primaria en 1970. Por consecuencia, el alto grado de concentración en los niveles inferiores del sistema escolar implica que la rápida expansión de las inscripciones en los otros niveles no ha podido cambiar la distribución del uso de recursos educativos de la población en su conjunto.⁸

b] Relaciones transversales

La muestra de los datos censales de 1960 nos permite examinar la relación entre escolaridad e ingreso en aquel año. Además del aumento en ingresos correspondiente a un mayor número de años de asistencia escolar, lo cual era plenamente esperado, se observó también un cambio en la distribución del ingreso en los distintos niveles educacionales teniendo hacia una mayor igualdad en los niveles de mayor educación (cuadro 2.2). Estos resultados están más de acuerdo con los esperados, según la primera parte de este apartado y confirman la experiencia mundial con respecto a la relación entre educación e ingreso.

CUADRO 2.2. MÉXICO 1960: DISTRIBUCIÓN DEL INGRESO POR NIVELES EDUCATIVOS (MEDIDO EN COEFICIENTES DE GINI)

AÑOS DE EDUCACIÓN TERMINADOS	COEFICIENTE DE DESIGUALDAD EN LA DISTRIBUCIÓN DEL INGRESO DERIVADO DEL TRABAJO	INGRESO PROMEDIO DEL TRABAJO
0	0.67	421
1-3	0.62	482
4-6	0.55	698
7-9	0.50	1128
10-11	0.47	1508
12-14	0.46	1572
15 y más	0.47	2118
Promedio nacional	0.64	615

DATOS: Bialostozky (1970), cuadro 9-1, desglose especial.

⁸ Los cálculos cuantitativos están sujetos a fuertes limitaciones debido a la calidad de los datos en que se basan. Los datos para 1950 están basados en interpolaciones de datos sumamente agregados del censo y los costos usados para ponderar los distintos niveles tienen su base en 1962. Se desconoce el efecto sobre los resultados de usar costos actualizados para cada cohorte para medir la igualdad.

Como se puede ver del análisis de las siete categorías de escolaridad en las cuales dividimos la población, los coeficientes de Gini para la distribución del ingreso disminuyeron progresivamente, desde 0.67 entre los individuos sin educación hasta 0.46 entre los individuos con preparación universitaria. La alta ponderación del número de personas en el primer grupo mencionado produce una distribución global más cercana a la cifra elevada.⁹ Datos adicionales refuerzan este punto sobre la concentración del ingreso dentro del estrato de las personas con menos escolaridad y cuando las categorías están determinadas por grupos ocupacionales en vez de educacionales se observa el mismo fenómeno (cuadro 2.3). Aunque estos datos no se prestan a afirmaciones tan fuertes como en el caso anterior, la tendencia hacia una mayor igualdad entre las ocupaciones denominadas “más altas” es clara: a mayor nivel profesional, la distribución del ingreso derivado del trabajo y de la educación es más igualitaria.¹⁰ Se observa asimismo un aumento continuo en los niveles promedio del ingreso y de la educación con el paso de las categorías bajas hacia las más altas. La heterogeneidad del grupo de directores, gerentes, funcionarios, etcétera, puede ser la explicación de la baja cifra correspondiente a su nivel educacional promedio, pero esta excepción no invalida la conclusión de que la educación y el ingreso están relacionados estrechamente en el corte transversal, es decir, en un momento determinado la relación es fuerte y en la dirección esperada.

⁹ Los coeficientes para 1960 se refieren solamente a las personas en la fuerza de trabajo, y que el ingreso es solamente el del trabajo. Es interesante notar que en el grupo de 12 a 14 años de escuela los años adicionales de educación aparentemente no contribuyeron en gran medida al aumento del ingreso personal del trabajo; éste es un grupo con estudios universitarios incompletos y la diferencia con respecto a los egresados de preparatoria (o su equivalente) es bastante reducida, sugiriendo la existencia de un efecto “credencial” en este nivel. Aunque hay fuertes incongruencias entre el nivel del coeficiente de Gini en esta serie y en las otras, lo cual hace su comparación imposible, parece ser que la serie es consistente desde adentro, permitiéndonos hacer las comparaciones entre grupos mencionados en el texto. Sin embargo, siempre hay problemas con el uso de datos que muestran niveles marcadamente diferentes de la realidad.

¹⁰ Las diferencias señaladas en los cuadros 2.2 y 2.3 serían todavía más grandes si se pudiera agregar las personas realmente desocupadas a la fuerza de trabajo y calcular los coeficientes con esta información.

**CUADRO 2.3. MÉXICO 1960: DISTRIBUCIÓN DEL INGRESO
Y DE LA EDUCACIÓN POR NIVELES PROFESIONALES
(MEDIDO EN COEFICIENTES DE GINI)**

Categoría ocupacional	COEFICIENTES DE DESIGUALDAD EN LA DISTRIBUCIÓN		PROMEDIOS	
	del ingreso derivado del trabajo	del ingreso derivado de la educación	Ingreso del trabajo	Ingreso de la educación
1	0.49	0.32	2182	10.2
2	0.56	0.39	2043	6.5
3	0.32	0.30	1072	8.6
4	0.50	0.30	991	6.5
5	0.89	0.52	510	3.4
6	0.65	0.64	573	2.4
7	0.59	0.60	422	2.0
Total	0.64	0.58	615	2.9

DATOS: Bialostozky (1970), cuadro 9-1.

2.3. EL ACCESO AL SISTEMA ESCOLAR EN MÉXICO

Antes de intentar profundizar más sobre las contradicciones aparentes entre los datos transversales y los longitudinales conviene explorar un poco las características fundamentales del sistema educativo mexicano. En esta sección presentamos cierta información empírica sobre el funcionamiento del sistema escolar para entender la naturaleza de los mecanismos que han creado la situación descrita en el apartado anterior. Empezamos con el problema al nivel nacional antes de entrar en detalle a un nivel más desagregado para entender el proceso de selección que predomina actualmente.

a] *El acceso a la educación en México y su eficiencia*

A nivel nacional, los cambios en la educación han sido importantes durante los últimos decenios. La población escolar a nivel primario ha subido de 2 666 300 personas en 1950 a 8 085 300 en 1970 o sea un incremento de 23% durante los 20 años. Incrementos todavía más espectaculares han sido registrados en los otros niveles educativos: 1 000% en la educación media y 720% al nivel superior. Estos incrementos absolutos en la población escolar superan el crecimiento demográfico durante el periodo y, como consecuencia, han resultado en un mayor grado de satisfacción de

la demanda potencial de educación en México. En esta sección veremos algunos aspectos del problema nacional para enfocar con más precisión los aspectos regionales en la siguiente parte del trabajo.

Los fuertes aumentos en la población escolar de nivel primario han representado un aumento en la tasa de asistencia —o satisfacción de la demanda potencial— a la educación primaria, de 44% en 1950 a más de 66% en 1970, medida con relación a la población entre 6 y 14 años de edad. Esto quiere decir que aproximadamente dos terceras partes de la demanda de la población en edad escolar están siendo satisfechas actualmente; estas cifras también incluyen personas que terminaron su educación del nivel primario y pasaron al nivel secundario o salieron del sistema escolar.¹¹

En los otros niveles, el incremento en el número de estudiantes ha sido todavía más fuerte, pero la base de la educación media y superior en 1950 era tan reducida que la tasa de participación todavía está muy por debajo de la correspondiente al nivel primario. En 1970 el Censo de Población reportó 1 430 000 estudiantes asistiendo a los varios cursos de enseñanza media (secundaria, preparatoria, prevocacional y vocacional). Hay, además, otras 145 000 personas en distintas formas de enseñanza media profesional. En el nivel superior (incluyendo posgrado) la asistencia escolar es mayor que 150 000 individuos.

El mejoramiento en las tasas de satisfacción de la demanda indica también un aumento en la eficiencia del sistema escolar. Es decir, un mayor porcentaje de los niños que entran al primer año de primaria tendrán oportunidad de seguir estudiando hasta los niveles superiores. Según las estadísticas continuas de la Secretaría de Educación Pública (SEP) uno de cada tres estudiantes que se encuentra asistiendo al final del primer año terminará su educación primaria aprobando sexto grado. Estas estimaciones tienden a sobreestimar la retención escolar porque no consideran la deserción durante el primer año; desgraciadamente las

¹¹ Hay muchos problemas en los datos originales de los que sacamos estas relaciones. En 1969, según un estudio de Latapí (1971), la diferencia entre las estadísticas de la SEP y la del Censo de Población para el número de alumnos en la escuela era de aproximadamente 800 000 y hubo fuertes diferencias en la estructura de edades reportada por las dos fuentes: la SEP tenía las cifras agregadas más elevadas y reportó un número menor de personas mayores de 14 años asistiendo. Según las cifras estadísticas continuas el grado de satisfacción de la demanda potencial era superior a 80% mientras que el Censo confirmó solamente 66.5%. Es irónico que las cifras continuas tengan el efecto de agudizar el problema de la poca eficiencia escolar —aumentando la tasa de deserción en los primeros años del ciclo básico— por el sesgo al aumentar sistemáticamente el número de estudiantes en los grados inferiores de la escuela. Nosotros hemos hecho nuestros cálculos sobre la eficiencia del sistema escolar con base en las cifras de la SEP por falta de una alternativa factible. Véase Barkin (Apéndice) para una discusión más extensiva de las fuentes de información.

estadísticas no son del todo adecuadas para examinar este fenómeno por el alto grado de sobreenumeración de primeras inscripciones en la escuela primaria. Sin embargo, es posible estimar que la tasa de retención durante los seis años de primaria es de aproximadamente 25% actualmente. Esta cifra global oculta grandes diferencias entre las escuelas rurales y las urbanas. El bajo grado de retención se debe principalmente a la incapacidad de las escuelas rurales de proveer suficientes oportunidades a sus alumnos potenciales; de los alumnos de la generación que entró a primaria en 1958 terminaron solamente 5% en los planteles rurales y 42% en los urbanos (medidas con el sesgo hacia abajo mencionado arriba). En otras palabras, a pesar de los incrementos notables logrados en los últimos decenios en la capacidad del sistema primario para retener a sus estudiantes, hay todavía una fuerte deserción escolar que es más notable en las zonas rurales; eso es evidente en el cuadro 2.4 de este trabajo, donde se puede ver que la población escolar para la generación de 1958-1963 tenía ligeramente más estudiantes en escuelas rurales que urbanas para empezar, pero la relación era de 6.7 estudiantes urbanos por cada estudiante rural al terminar sexto grado.

Una vez saliendo de la primaria las tasas de retención bajan fuertemente. Para la generación que entró en la universidad en 1969 podemos observar que en 1964 solamente 58 se inscribieron en el primer curso de secundaria básica; de éstos, casi las dos terceras partes pudieron aprobar el tercer año de secundaria en el tiempo planeado (cuadro 2.4). La tasa de deserción en el ciclo superior de la educación intermedia era menor, pero podemos observar que al llegar al primer año de la universidad solamente 3% de los alumnos que se inscribieron en el primer año de primaria estaban todavía dentro del sistema escolar.¹² Desde luego, la acelerada expansión de los sistemas intermedio y superior viene aumentando las posibilidades de corregir esta situación, pero el problema está todavía lejos de resolverse.

¹² Es necesario aclarar que estas cifras estaban sesgadas hacia abajo por haber tomado el número de inscritos en el primer año de primaria como base. En el cuadro 2.4 se presenta una serie alternativa donde se basan los porcentajes en el número de personas aprobadas en el primer año de primaria. Las diferencias resultan de: 1] el alto grado de deserción durante el primer año de asistencia, y 2]) la sobreenumeración de la matrícula inicial debido a la doble inscripción y a cifras infladas por los maestros. También debe tomarse en cuenta que las series están construidas con base en un supuesto importante: los patrones de repetición por reprobación y reinscripciones no varían sensiblemente de año a año: este supuesto es necesario por no tener datos sobre las causas de la deserción y el grado de repetición que se observa dentro del sistema escolar mexicano.

**CUADRO 2.4. SUPERVIVENCIA ESCOLAR: PRIMARIA A UNIVERSIDAD.
GENERACIONES 1955, 1957, 1958**

Años	GENERACIÓN DE 1958 ¹			DATOS DE OTRAS GENERACIONES			
	Absolutos	Relativos	Urbano (%)	Rural (%)	1955	1957	1958
Primaria							
Estudiantes inscritos							
1958	Primer año	1823765	100	44	56	100	100
1959	Segundo año	1024732	56	55	45		
1960	Tercer año	799862	44	66	34		
1961	Cuarto año	613145	34	n.d.	n.d.		
1962	Quinto año	502823	28	84	16		
1963	Sexto año	118863	25	87	13		
Estudiantes aprobados							
1963	Sexto año	387533	21	87	13	26.23	31.45
Secundaria básica							
Estudiantes inscritos							
1964	Primer año	224361	12			12.05	18.24
Estudiantes aprobados							
1966	Tercer año	146058	8			9.38	13.08
Medio superior							
Estudiantes inscritos							
1967	Primer año	88439	5			5.48	6.8
Estudiantes aprobados							
1968	Segundo año	72719	4			4.45	5.88
Nivel Superior							
Estudiantes inscritos							
1969	Primer año	58332	3			3.98	5.11
							5.03

NOTA: incluye solamente estudiantes en cursos que permiten llegar al nivel superior.

n.d. No disponible

¹ Véase Barkin (1971a) para una discusión de los problemas metodológicos en la elaboración de estos datos.

² Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Enseñanza Superior, véase nota 9 para una explicación metodológica de las diferencias entre las dos series.

Con el fin de financiar este crecimiento en asistencia escolar, con el cambio del énfasis hacia los niveles superiores, el presupuesto educativo está creciendo más rápido que el gasto total del gobierno, por lo menos hasta el principio del decenio de los sesenta. Inmediatamente después de la segunda guerra mundial (durante el régimen del presidente Alemán) el gasto educativo representó 8.3% del presupuesto federal (Wilkie, 1970: 160-161) mientras que 15 años más tarde (durante el periodo del presidente Díaz Ordaz) el gasto había subido a 13.2% del total, reflejando un mayor énfasis en la educación. Durante el periodo 1950-1970 el

gasto público en educación creció a un ritmo de aproximadamente 11% anual en términos reales (Rivera Borbón, 1970: 70).

Es necesario, sin embargo, subrayar un hecho sobresaliente de la situación financiera de la educación en México: la parquedad de recursos. El presupuesto federal en México está entre los más reducidos del mundo, con respecto al producto interno bruto (Barkin, 1971b). Como consecuencia, México gastó solamente 2.1% de su PIB en la educación en 1965 (contra 0.9% en 1950), mientras otros países están asignando mayores partidas a este importante renglón (8.1% en Canadá, 6.6% en Estados Unidos, 5.6% en Cuba, 3.6% en Chile, 3.3% en Argentina) (Alejo, 1970: 230). Las implicaciones de la carencia de recursos para la educación son patentes: las posibilidades de ensanchar la amplitud de la educación y corregir sus deficiencias estructurales están bastante limitadas por la falta de posibilidades materiales para efectuar cualquier reforma. Como consecuencia, aun con el mejor programa de reforma educativa no sería posible esperar grandes cambios en la situación descrita arriba y en las siguientes páginas, si la reforma no plantea al mismo tiempo una nueva política de financiamiento para la educación.

b] Las desigualdades regionales y la educación en México

La educación no enfrenta, sin embargo, solamente problemas presupuestarios. Los adelantos en la asistencia escolar —sobre todo en los niveles superiores— han sido objeto de mucha autoalabanza entre los líderes educativos, pero ocultan grandes disparidades regionales que son de primera importancia para entender cómo funciona el sistema escolar en la actualidad. La estructura actual y el presupuesto limitado se han combinado para producir planes para la reforma educativa que son realmente desalentadores. Una evaluación de los planes para la educación en 1969 notó:

el hecho doloroso, pero todavía irremediable, de la continuación de las enormes diferencias de todo orden, pero particularmente en el económico y en el educativo, entre las distintas regiones del país. Estas desigualdades del desarrollo nacional, que han hecho pensar a algunos en la existencia de un coloniaje interno, desafortunadamente seguirán caracterizando a nuestro país por un largo periodo de tiempo (Palerm, 1969: 29).

Esta afirmación viene a complementar los datos transversales sobre el alto grado de estratificación que parece coincidir con el análisis del

acceso al sistema escolar hecho en la segunda sección. Parece que hay varias fuentes independientes que refuerzan la hipótesis de la falta de un efecto redistributivo a través del sistema escolar. Hasta el momento, la única evidencia directa sobre el asunto es el estudio de gastos, distribución del ingreso y el efecto redistributivo de los gastos públicos en bienestar social efectuado en Monterrey. Se encontró que pocas de las personas de los grupos socioeconómicos más bajos pueden mandar a sus hijos a las escuelas de enseñanza media y superior, mientras que la mayor parte de la población recibe algún beneficio del sistema primario (Puente Leyva, 1969).

Para obtener mayor información acerca de este problema hicimos una desagregación de los datos sobre asistencia escolar al nivel estatal y por áreas urbanas y rurales en el nivel primario, donde existieran datos. Esperamos poder analizar esta información para saber un poco más de las grandes diferencias entre estados y zonas del país que están ocultas en las cifras agregadas del cuadro 2.4. Desgraciadamente, este enfoque es una manera bastante indirecta de enfrentar el problema del efecto redistributivo de la educación en México; en vez de poder agrupar a los estudiantes en el sistema escolar por su estatus socioeconómico, tenemos que hacer la estratificación con base en su lugar de residencia. Desde luego, las diferencias que se pueden notar a nivel regional también están reproducidas dentro de cada entidad, como lo demostró la evidencia del estudio de Monterrey, y pueden solamente ser, por consecuencia, una subestimación del grado de discriminación que existe entre los grupos socioeconómicos de la población.

La relación entre las disparidades regionales en el desarrollo y el cumplimiento de las necesidades educativas (demanda potencial) es bastante comentada pero difícil de especificar por falta de un concepto concreto del desarrollo.¹³ Usaremos aquí un esfuerzo reciente para medir el bienestar socioeconómico de cada una de las entidades federativas mexicanas para estas comparaciones: esta medida está basada en un análisis de los componentes principales usando 12 variables para determinar un índice de desarrollo socioeconómico (DSE) para cada uno de los estados mexicanos durante el periodo 1940-1960 (Unikel y Victoria, 1970). Comparando esta medida con varias otras del cumplimiento del sistema escolar encontramos el resultado esperado o sea: que hay una alta correlación entre el nivel relativo de desarrollo socioeconómico de una entidad y la satisfacción de las necesidades escolares de su población.

¹³ En otro trabajo se hizo un análisis de las relaciones entre estructura económica y oportunidades educativas y se encontraron altas correlaciones. Véase Mir (1971).

Para empezar, encontramos que las tasas de participación de la población en edad escolar —o escolaridad— varían directamente con el DSE de cada entidad; la correlación de rangos al medir este fenómeno —usando el índice de Spearman— era de 0.71 en 1950, y 0.74 en 1970.¹⁴ Esto indica una alta y estrecha correlación entre el desarrollo y la escolaridad; el nivel de desarrollo de una entidad parece afectar en forma directa su capacidad de satisfacer su propia demanda potencial de educación. Aun de mayor importancia es la correlación todavía más estrecha entre el DSE y la capacidad de la escuela primaria para retener alumnos y asegurar la terminación de, por lo menos, el ciclo básico de la educación; el índice era 0.85 y 0.87 para las generaciones primarias que terminaron en 1955 y 1963. Así, la variabilidad entre los estados se reduce al mínimo con respecto a su grado de desarrollo y la supervivencia escolar en cada entidad. En otras palabras, las personas que viven en los estados más atrasados tienen menor probabilidad de llegar a asistir a la escuela y, una vez inscritos, la probabilidad es muy baja de que podrán completar el ciclo básico de educación en su lugar de residencia.

Las marcadas diferencias entre estados son todavía más agudas en los casos de regiones rurales y urbanas. A pesar de que la tasa de supervivencia en la primaria rural ha aumentado más rápido que en la urbana, las diferencias todavía son bastante grandes. La tasa de supervivencia —que muestra el porcentaje de personas que terminan el ciclo básico dentro de una cohorte determinada—¹⁵ en las zonas rurales —5.0%— era solamente 12% de la tasa registrada en el medio urbano —41.9%— para la generación que terminó la primaria en 1963. Estas cifras miden solamente el progreso de los estudiantes una vez dentro del sistema; sería todavía más abrumador el contraste si pudiéramos incluir datos sobre la tasa de satisfacción de la demanda potencial —o tasa de escolaridad— en las dos regiones. Las grandes diferencias en las tasas se deben a que las oportunidades en el área rural son menores por la falta absoluta de suficientes escuelas para satisfacer la demanda (Myers, 1965). Muchas de las escuelas ni siquiera imparten los seis años de enseñanza.

Dos puntos adicionales sobre el significado de estos datos son fundamentales. Primero, las diferencias entre zonas rurales y urbanas están

¹⁴ Técnicamente, la comparación para 1970 no es del todo adecuada. Por falta de información tuvimos que hacer la comparación con el rango de la SEP de 1960. Todos los resultados son significativos al grado 0.95 de confianza. Los datos a nivel estatal están en Barkin (1971a).

¹⁵ Una cohorte es una generación escolar. La cohorte de 1958, por ejemplo, terminó la primaria en 1963 y entró en la universidad en 1969.

basadas en la definición censal de las zonas. Según ésta, una zona rural tiene menos de 2 500 personas, mientras que una definición más funcional tomaría un nivel de 15 000 como un tamaño adecuado para definir un área urbana.¹⁶ Si usáramos esta definición más realista, habría muchas más personas en las zonas rurales y se verían todavía con más claridad las disparidades entre las zonas. Segundo, Raúl Benítez (1970) ha notado que, a pesar de la mejora en las tasas de escolaridad, se ha observado un descenso en las tasas de participación de niños de seis años de edad. Esto implica que, aun con estas mejoras, la edad a la cual el alumno pueda terminar el ciclo escolar es mayor y esto ocasiona un alza proporcional en el costo de la educación al estudiante (por el aumento en el costo de oportunidad —ingresos que no percibe el estudiante— de la educación al alumno); como consecuencia hay un sesgo más en contra de los grupos más humildes de la población.

Las marcadas diferencias regionales en oportunidades educativas están agudizadas todavía más por los patrones de migración interna que rigen actualmente en México. Muchos de los emigrantes empiezan la escuela en sus lugares de nacimiento y terminan sus carreras educativas en otras entidades de atracción migratoria; este fenómeno, en sí, tiende a afectar las cifras de retención escolar en las dos localidades en formas opuestas, especialmente sobreenumerando la retención en las localidades de destino, que son, a su vez, lugares más desarrollados. En los lugares de origen la sobreenumeración de deserción real indica, más bien, un fenómeno de rechazo de población estrechamente asociado a los niveles relativos de desarrollo. (Véanse los capítulos de H. Muñoz, O. Oliveira y C. Stern, en Balán, *et al.*, 1971.) Estas diferencias estatales aumentan a medida que ascendemos por la escala académica hasta llegar al nivel de educación superior, donde nos encontramos una concentración sustancial de las oportunidades educacionales en unos cuantos planteles. Este mismo fenómeno se observa en otros países y no es nada sorprendente encontrar que el índice de DSE y la tasa de participación de la población en la educación profesional estén relacionados; la correlación de rangos es 0.59. De la misma manera encontramos una correlación entre el índice de DSE y la tasa de supervivencia desde la primaria hasta el primer ingreso a la universidad; la correlación de rangos es 0.57.^{17 18}

¹⁶ Véase Unikel (1968) para una nueva clasificación de zonas urbanas.

¹⁷ La expansión universitaria durante los sesenta ha influido mucho en la disminución de las diferencias regionales. La concentración regional disminuyó sustancialmente como consecuencia, Lajous (1968).

¹⁸ Cabe oponerse a este tipo de análisis de la distribución estatal de las universidades

Varios otros hechos sobresalen del análisis de la educación posprimaria en México. Primero, el porcentaje de personas que entran a la secundaria, en comparación con los egresados de la primaria, era del orden de 58% en 1964; hubo muy poca variación entre los estados a este respecto, siendo la desviación estándar de solamente 4.3%. Una vez dentro del ciclo intermedio, sin embargo, la variación aumentó en forma notable. Aunque el porcentaje de alumnos inscritos en primer año de la secundaria básica que termina el ciclo (65%) está muy por encima de la cifra correspondiente al nivel primario, la variación es mucho mayor, siendo la desviación estándar en este caso de 24%. Estos datos indican una característica importante del sistema mexicano: su incapacidad de retener estudiantes en el sistema escolar en las regiones menos desarrolladas a pesar de sus aspiraciones evidentes de tratar de seguir a los niveles más avanzados.

Hay algunos datos adicionales que iluminan todavía más el panorama de la concentración de oportunidades educativas en los estratos socioeconómicos más altos. Según una encuesta hecha en la Universidad Nacional Autónoma de México, en la capital, en 1963, más del 43% de los estudiantes declararon pertenecer a grupos familiares con ingresos mensuales del décimo más rico de la población, más que el 75% de los capitalinos en aquel año. Además es notable que el ingreso promedio de las familias de los estudiantes en la UNAM era 3.2 veces superior al nivel nacional. Ésta es una indicación bastante concisa que ilustra el problema de la concentración de las oportunidades de lograr acceso a la educación superior (Lajous, 1968).

No parece necesario entrar en más detalle sobre el tema: los datos hablan del problema con bastante elocuencia. Las oportunidades educacionales están sumamente concentradas y las personas de las regiones atrasadas se encuentran en gran desventaja con respecto al resto de la población, ya si no por otra cosa, por la falta de instalaciones escolares adecuadas. El problema se agudiza todavía más cuando se agrega a estos problemas el costo de la educación "gratuita" y la falta de oportunidades de percibir ingresos mientras el estudiante está en la escuela. Esto último pesa mucho más sobre el presupuesto familiar en las clases bajas.

porque muchos estudiantes emigran a la capital nacional o regional para seguir sus estudios. Aunque sea cierto que haya marcada migración interna de estudiantes universitarios; nos parece importante el hecho de que muchos de éstos permanezcan dentro de las zonas donde se recibieron y el beneficio quede dentro del área de influencia del centro universitario. Éstas son las zonas de mayor desarrollo socioeconómico y ellas ofrecen las mejores oportunidades económicas y culturales para los graduados.

En este apartado hemos visto dos niveles de análisis referentes al problema del acceso a la educación en México. En el primero vimos que la pirámide educacional selecciona personas para la ruta hacia los niveles superiores de la educación. A pesar de los grandes avances, todavía una parte reducida —aproximadamente 25%— de las personas que logran entrar al ciclo escolar básico podrán completarlo. La expansión escolar ofrece actualmente la posibilidad de alguna educación primaria a las dos terceras partes de los demandantes potenciales. En el segundo, podríamos citar otro estudio, más extenso, para resumir nuestras conclusiones:

Estos resultados no son sorprendentes. Simplemente revelan la abrumadora influencia del lugar de residencia en la determinación de las oportunidades educativas. En el nivel primario, la brecha urbano-rural puede pronto quedar cerrada en el caso de los estados más desarrollados; en los predominantemente rurales, por lo contrario, podemos esperar que las discrepancias continúen agudizándose (Mir, 1971: 25-29).

Tanto en el nivel primario como en los niveles superiores, la perspectiva es que la brecha entre las entidades pobres y las ricas seguirá ensanchándose.

En términos generales, los datos sobre las disparidades regionales presentados en esta sección pueden también reflejar los problemas interpersonales que existen dentro de cada entidad: con excepción de los estados donde la tasa de asistencia es relativamente elevada, las personas en las clases bajas están sistemáticamente excluidas del proceso educativo. Aun en las zonas donde las tasas de participación son altas, los mecanismos de selección parecen excluir a las personas de las clases bajas después de los primeros años del proceso escolar.¹⁹ En México, el análisis refleja la importancia de la clase social de los padres para el grado de aprovechamiento de los hijos en el sistema escolar, y, como consecuencia, su propia clase social.

¹⁹ Ésta es, también, la conclusión de los varios estudios sobre la educación superior en Estados Unidos. Véanse, por ejemplo, los trabajos de Wiesbrod y Hansen para una descripción de varias experiencias estatales.

2.4. EL DARWINISMO SOCIAL EN MÉXICO: UNA HIPÓTESIS

A lo largo de este trabajo hemos venido señalando una serie de incongruencias entre las esperanzas con respecto a la educación y la realidad mexicana. Vimos al principio la falta de una relación a través del tiempo entre la distribución del ingreso y la de la educación, contrastante con la clara esperanza de lo contrario; esta esperanza se debe principalmente a la existencia de dicha relación en los datos transversales, analizados tanto en México como en otros países. Se suponía también que, en México, la educación debería ser el renglón más importante del gasto público, de acuerdo con las declaraciones oficiales de los líderes políticos máximos. Sin embargo, las múltiples demandas de recursos gubernamentales y el proceso de negociación para la asignación de éstas han resultado en un gasto educativo muy por debajo de las metas declaradas. La fuerte concentración geográfica de los recursos educativos que señalamos en el último apartado es el resultado, en parte, de la escasez de fondos y de una política que refuerza las tendencias actuales de la concentración del desarrollo de México en unas cuantas regiones. Se puede suponer que esta concentración, a su vez, explica parte del aumento en la concentración del ingreso personal en México.

Nos parece, sin embargo, que esta explicación no es del todo satisfactoria para entender el papel de la educación dentro del desarrollo mexicano durante las últimas décadas. Un análisis más completo debe, desde nuestro punto de vista, ubicar la educación dentro del marco socioeconómico y político mexicano y basarse en la interacción entre el sistema educativo y el conjunto de políticas económicas que lo condicionan. Para realizar esta tarea empezaremos con una descripción muy esquemática del desarrollo mexicano y procederemos a encajar la educación dentro de este marco.

Durante más de 30 años, México ha experimentado un crecimiento económico anual real superior al 6% y un aumento en su fuerza de trabajo de más de 3%; el ingreso per cápita ha aumentado a un ritmo histórico ligeramente inferior a 3% anual y en 1970 es superior a 8000 pesos anuales. Durante este periodo ha habido cambios estructurales en la economía, disminuyendo el sector agrícola y elevando las actividades secundarias. En 1939, el sector primario contribuyó con 24% al producto interno bruto (PIB), mientras que 30 años más tarde participó con menos de un 18% del mismo. Las cifras correspondientes a la industria manufacturera son 18 y 26%. Los cambios en la participación de los otros sectores de la economía han sido menores; es conveniente, sin embargo, señalar dos aspectos importantes de la economía mexicana: la elevada y

estable posición del comercio dentro del total —26%— y la reducida participación y tendencia descendente del sector gubernamental —2.7%— en contraposición con los demás países latinoamericanos (Ibarra, 1970).

El intercambio de lugares de la agricultura y la industria ha sido acompañado por cambios correspondientes en la estructura del empleo en México. De 1930 a 1970 la quinta parte del aumento total en la ocupación se registró en el sector primario: el secundario absorbió la tercera parte, y el sector terciario casi la mitad. Desde 1950 el sector manufacturero ha podido ensanchar su participación, tanto dentro del PIB como dentro de la fuerza de trabajo; debiéndose esto a su acelerada tasa de crecimiento —más del 7.5 % anual de valor agregado— y a su acelerada absorción de mano de obra: 5% anual (Ibarra, 1970). La importancia del sector manufacturero dentro de la pauta actual del desarrollo y su contribución al crecimiento en los últimos años nos lleva a la necesidad de examinar con un poco más de detalle su dinámica, lo cual haremos para poder relacionarlo con su demanda de mano de obra y estudiar su relación con el sistema escolar.²⁰

Durante los 20 años a partir de 1950, la industria manufacturera duplicó su empleo en más de un millón de personas. Con base en los datos disponibles podemos llegar a algunas conclusiones sobre los cambios en la estructura interna del sector. Al principiar el periodo las ramas alimenticias produjeron el 8% del valor agregado de la industria y emplearon un 20% de la mano de obra, siendo las cifras para 1965 de 6% y 24% (Banco de México, 1969). Es decir, estas empresas, caracterizadas principalmente como artesanales en un estudio reciente (Trejo, 1970), aumentaron su producción relativamente despacio, pero lograron elevar su participación dentro del total de ocupación industrial. Además, este aumento representa la absorción de casi el 40% de todos los nuevos entrantes al sector industrial; en otras palabras, dos de los cinco puntos de crecimiento anual de la fuerza de trabajo se deben a la dinámica del crecimiento de pequeñas empresas dedicadas a la molienda de maíz y nixtamal y de las más grandes en otras ramas alimenticias (incluyendo las dedicadas a la fabricación de bebidas y productos de tabaco) (Trejo, 1971). Otras industrias crecieron a ritmos más acelerados en términos tanto de absorción de nuevos trabajadores como de valor agregado. Éstas fueron las “que producen bienes de capital o intermedios, y que recibie-

²⁰ Desgraciadamente, las primeras tabulaciones del Censo de Población de 1970 han revelado fuertes discrepancias con los censos anteriores, lo cual hace imposible el uso de los datos ya disponibles para comparaciones con los años anteriores.

ron un importante estímulo del gobierno en la forma de subsidios y tarifas de protección durante el periodo” (Trejo, 1970: 112). Estas industrias son las más dinámicas en México y su crecimiento ha ido acompañado de un aumento en la productividad por trabajador. Sin embargo, la política de sustitución de importaciones y el cambio tecnológico se combinaron para limitar la capacidad de absorción, la mano de obra en varias ramas industriales. Actualmente, a pesar de su elevada tasa de crecimiento, el sector industrial en su conjunto —industrias modernas y tradicionales— puede absorber solamente la cuarta parte del crecimiento anual de la fuerza de trabajo total.

El análisis del crecimiento económico subrayó la importancia de separar el sector industrial del resto de la economía y de examinar la naturaleza del efecto empleo de las industrias modernas distinguiéndolo del observable en las industrias más tradicionales y de lento crecimiento. Vimos que aquéllas absorbieron menos mano de obra que éstas y que puede esperarse que en los próximos años el crecimiento dinámico esté acompañado de mejoras tecnológicas que seguirán absorbiendo menos mano de obra que lo deseable en comparación con la oferta disponible. Además, la transformación de la estructura industrial de pequeñas empresas tradicionales a grandes empresas modernas ha resultado en fuertes desplazamientos de mano de obra dentro de la industria (Trejo, 1970: 117-118). No es inevitable pero es improbable que la industrialización acelerada resulte incapaz de absorber los fuertes incrementos de mano de obra disponible en México. Esto es, en parte, resultado de la ineficacia industrial que ha subido costos y creado dificultades para la expansión de la producción. Por otra parte, los precios relativos del capital y mano de obra en el mercado privado han sido notablemente alterados con respecto a sus niveles sociales y han propiciado, como consecuencia, la tendencia hacia la adopción de técnicas de producción altamente intensivas en su uso de capital.²¹ Esto ha resultado en la situación paradójica de que la tasa de aumento de la relación capital-trabajo —la cantidad de inversión por cada trabajador— es más alta en México que en países más industrializados, como Italia, y se aproxima a la de Francia o Inglaterra (Sheahan, 1971: 25). Sería necesario adoptar nuevas políticas para impulsar el uso eficiente y en proporciones más apropiadas de los factores disponibles, siempre que el gobierno quisiera alterar la situación actual.

²¹ Esta descripción esquemática del desarrollo mexicano y los efectos del cambio de tecnologías y políticas gubernamentales sobre la absorción de la mano de obra está tratado en más detalle en Barkin (1970).

Estas medidas constituyen un programa mínimo necesario para enfrentar el problema del empleo en los próximos años.²²

En los primeros años de la expansión industrial hubo indicaciones de que muchas industrias tenían que recurrir a obreros no calificados para llenar sus necesidades. Las bajas iniciales en productividad por trabajador era una indicación de éste. Datos más recientes sobre la migración interna, tanto hacia la ciudad de México como a la de Monterrey confirman esta inferencia, sugiriendo que los emigrantes tenían mucho menos problemas para conseguir trabajo en los años cincuenta que en los últimos años. Esto es producto tanto de un ensanchamiento de la corriente migratoria —con la consecuente disminución de su preparación— como del estrechamiento de oportunidades dentro de las áreas urbanas.²³ Las razones del cambio en las posibilidades de conseguir trabajo son múltiples. Por un lado, el sistema educativo se ha ensanchado enormemente para permitir grandes incrementos en el número de egresados a cada nivel, siendo esta expansión relativamente más importante en los niveles superiores. Por otro lado, la demanda de mano de obra dentro del sector industrial está cambiando de naturaleza. Con la caída relativa en la participación de las industrias tradicionales, la mano de obra requerida dentro de la industria es de un más alto nivel. Esto es resultado tanto de la incorporación de nuevas técnicas dentro de las industrias como del cambio en la estructura de la organización de las empresas hacia la creación de grandes compañías que tienden a desplazar la producción artesanal. Como resultado, los industriales no se ven obligados a recurrir a obreros carentes de la preparación básica necesaria para satisfacer sus necesidades de personal. La oferta de egresados de las escuelas está aumentando lo suficientemente rápido como para surtir sus demandas. (Esto no quiere decir que los industriales estén satisfechos con la calidad de la preparación de sus nuevos trabajadores, lo cual no es cierto. Implica únicamente que pueden reclutar personas con mayor preparación educativa; personas mejor preparadas para recibir entrenamiento adicional en el trabajo.) Uno de los resultados de este proceso es que la expansión económica no se ha difundido ampliamente entre todos los grupos sociales del país. Como se sugirió en el segundo apartado de este trabajo, el ingreso en México está altamente concentrado en unas cuantas manos. El empeoramiento de la distribución desde 1950 es producto de la estra-

²² Para una discusión más amplia de políticas adecuadas, véase Little Scott y Scitovsky (1970).

²³ Véase Balan, *et al.* (1971), para una discusión más amplia de la migración interna en México.

tegia de desarrollo seguido en esta época. En parte es el resultado del aumento continuo en el número de personas empleadas en los subsectores agrícolas más atrasados y de la fuerte emigración de muchos de los restantes a las zonas urbanas donde vienen a constituir parte de la “oferta ilimitada de mano de obra”.²⁴ Operando conjuntamente con esto está el ensanchamiento del empleo dentro del sector industrial a bajos salarios iguales o menores que el salario mínimo.²⁵ Según el Censo de Población de 1960 se puede estimar que más de la mitad de la población ocupada en las actividades secundarias se encuentra en la posición descrita (Ibarra, 1970: 130). La encuesta de gastos familiares en 1963 confirmó esta impresión general: la tercera parte de las familias cuyo jefe está dentro de la fuerza de trabajo industrial gastó menos de 700 pesos mensuales; esto resulta ser, aproximadamente un ingreso per cápita igual al 30% del promedio nacional en aquel año. (La situación en el campo era peor: 70% de todas las familias en el sector agrícola reportaron estar en las mismas condiciones) (Banco de México, 1966.) El empeoramiento de la distribución del ingreso agrandó la brecha entre los pobres y los ricos. Fue la clase media —las personas en los estratos económicos entre el 70 y 95% de la población más rica— la que logró aumentar su participación a costa de los demás. La situación mexicana es notable no solamente por el aumento en la desigualdad entre 1950 y 1963, sino también porque sitúa a México en primer lugar entre los países industrializados en el Hemisferio con respecto a la concentración del poder adquisitivo. Esta situación y las tendencias históricas han llevado a un estudioso del tema a concluir que sería “inconcebible” seguir la pauta histórica, dada la información que hay sobre los otros países latinoamericanos (Martínez de Navarrete, 1972: 44-46). Sea cual fuere la posibilidad de cambiarla en los próximos años, el hecho es que la distribución actual es el resultado de la interacción entre el crecimiento económico y las instituciones sociales y políticas que se han formado en los años posrevolucionarios en México, y la educación es una de las más importantes de éstas.

Esta brecha es, en parte, el resultado de una estratificación dentro de la clase obrera. Desde luego, en una economía como la mexicana, donde hay grandes números de personas subempleadas —en el sentido de estar trabajando pocas horas o percibiendo ingresos sumamente bajos—, la

²⁴ Véase Eckstein (1968) para una discusión más a fondo del problema de la concentración del ingreso y el aumento del desempleo en el campo mexicano.

²⁵ Para mayores detalles sobre el problema del empleo y la productividad dentro del sector industrial véase Alejo (1970) e Isbister (1971) y las referencias mencionadas en ellos.

presión bajista en los salarios es muy fuerte para las personas que no están en los sectores modernos. Con una “oferta ilimitada de mano de obra” la influencia de los niveles de vida en el sector agrícola es grande y las posibilidades de aumentar los salarios de la mayoría de los trabajadores son limitadas (Isbister, 1971). Solamente en algunas de las empresas sindicalizadas o sujetas a otras presiones políticas o económicas se pueden observar salarios por encima de los promedios importantes en la economía. Muchas, si no es que todas las empresas más dinámicas en la industria de transformación se cuentan entre ellas. En otras palabras, los sectores de mayor crecimiento son, también, los sectores que ofrecen mejores condiciones materiales a sus empleados.

Los salarios en estas industrias están determinados en función de varias fuerzas que operan a otros niveles que el del reclutamiento de empleados. Para muchos obreros en estas industrias sus ingresos están muy por arriba de los niveles mínimos predominantes en las industrias tradicionales de las áreas urbanas. Como es de suponerse, es relativamente reducida la proporción de obreros que realmente pueden gozar de estos elevados niveles de salarios; mientras que persista la abundancia de obreros la mayor parte de la fuerza de trabajo seguirá viendo sus ingresos estrechamente ligados a los niveles de salarios prevalecientes en el campo.

La primera de las fuerzas tendientes a la creación de una élite en la clase obrera es la serie de salarios “mínimos” establecidos a nivel regional por el gobierno que en realidad sirven como topes para las personas empleadas en industrias y ocupaciones marginales o poco controladas (como la de la construcción o la del trabajo agrícola). En la industria moderna estos niveles oficiales tienen mayor vigencia y en las negociaciones resultantes de los otros factores descritos abajo son usados como bases para fijar salarios. Estos salarios mínimos están determinados de acuerdo con una estimación del costo de la vida en cada región e intervienen en el proceso de su negociación representantes de los empleadores, sindicatos y gobierno en cada zona. La segunda presión surge de estimaciones oficiales de los niveles topes, consistentes con el desarrollo “equilibrado” no inflacionario de México. No se sabe mucho del proceso de negociación entre los empresarios y el gobierno, pero la impresión general es que, durante el transcurso de las discusiones sobre el otorgamiento de exenciones fiscales, subsidios y protección arancelaria, también entran consideraciones de los límites dentro de los cuales pueden variar los salarios. Finalmente, en ciertas industrias sujetas a presiones sindicales, los salarios dependen de acuerdos políticos para la fijación de sus niveles. El resultado de estas fuerzas es la determinación de la diferencia entre el nivel de remuneración que regiría si no hubiera interven-

ción oficial y los niveles corrientes de salarios. El empresario toma los salarios casi como un factor predeterminado y exógeno y trata de conseguir los mejores empleados, al precio establecido.²⁶

No es de sorprenderse, dada esta situación, ni el exceso de oferta sobre la demanda para obreros en las industrias con salarios elevados ni la preferencia por parte de los empresarios por emplear a las personas con mayores niveles educativos. Dado que el empresario no se ve obligado a pagar salarios más elevados para conseguir empleados con mayor preparación educativa, es lógico que una de las consecuencias de las fuerzas descriptas arriba sea el alza en los requisitos educativos para entrar a trabajar en las empresas modernas. El beneficio resultante de la educación, para el empresario, consiste en la posibilidad de impartir programas de entrenamiento en el trabajo a niveles más elevados y en tener personas mejor preparadas para recibirlas.

De hecho, los requisitos educativos han ido en aumento paulatino, llegando a sobrepasar el del diploma primario, hasta llegar a exigir la asistencia o aun la terminación del ciclo básico de la secundaria. Mientras la oferta no esté limitada, el industrial podrá subir los requisitos mínimos sin temor de encontrarse con una falta de obreros.²⁷ Aun con los cuadros mejor escolarizados, tendría que incluir un gran elemento de entrenamiento en el trabajo durante un periodo inicial, ya que las escuelas, en su mayoría, no se esfuerzan por preparar a sus estudiantes para actividades directamente productivas. No lo ven como una de sus responsabilidades. Esto no quiere decir que la educación no contribuya a la productividad de los nuevos entrantes a la fuerza de trabajo. Su contribución es importante, no solamente por los conocimientos específicos que tienen aplicación en el trabajo —tales como procesos técnicos y enfoques para resolver problemas—, sino también por la mayor facilidad con que sus egresados

²⁶ Una explicación alternativa —más dentro de la teoría y funcionamiento del mercado— sería que la oferta de personas con mayores niveles educativos está creciendo a un ritmo acelerado en comparación con la demanda. Como consecuencia, la determinación de los salarios en el mercado está influida, en gran medida, por las fuertes presiones bajistas ejercidas por la sobreoferta de mano de obra sobre la industria en su conjunto. El único problema con esta explicación es su falta de capacidad para explicar las diferencias entre salarios en las empresas de una determinada industria o entre industrias.

²⁷ Hay algunos que proyectan la terminación del periodo de “superabundancia” de trabajadores agrícolas y la necesidad de elevar todavía más la razón capital-trabajo. Basados en “varios supuestos optimistas” llegan a sus conclusiones sobre la oferta y demanda para personas calificadas dentro de la fuerza de trabajo en 1980 (Keesing y Manne, 1970). Otros han desarrollado modelos reforzando la posición expresada en el texto (Ibarra, 1970). Nos parece que el primer modelo ignora muchas tendencias implícitas en el desarrollo industrial mexicano y que sus supuestos son demasiado optimistas.

pueden obtener el entrenamiento adicional necesario para llegar a ser empleados eficientes. Entonces, tanto el empresario como el individuo perciben importantes beneficios de los años adicionales de asistencia escolar. Pero un resultado de la creciente oferta y de las restricciones con respecto a la demanda es que dentro de las zonas mayormente desarrolladas —donde están ubicadas las industrias más dinámicas y la mayor parte de las escuelas de niveles superiores— es más difícil conseguir trabajo sin un cierto grado mínimo de asistencia escolar. Muchas personas que tenían la esperanza de que con unos cuantos años de escuela primaria podrían obtener buenos puestos se encuentran ahora sin los requisitos formales necesarios para conseguir los trabajos esperados.

Nuestro análisis sugiere que el alza en los antecedentes educativos necesarios para conseguir un buen puesto dentro del sector moderno ha tenido importantes implicaciones para las aspiraciones económicas de los estudiantes. Mientras que la escuela secundaria generalmente sigue proporcionando beneficios en la forma de buenas oportunidades ocupacionales a sus estudiantes, la rápida expansión de la escuela primaria no ha otorgado las mismas oportunidades a todos los suyos. En otras palabras, las personas que salen de la primaria antes de terminarla y aun los que se gradúan a este nivel, encuentran grandes dificultades para obtener un trabajo decoroso por la gradual subida de los requisitos educacionales de los empresarios. Esto sucede por el gran aumento en el número de egresados de la escuela primaria, con relación a las necesidades de trabajadores en los sectores que ofrecen las mejores oportunidades económicas. A los factores anteriormente mencionados como limitantes deben agregarse otras barreras a los aspirantes, tales como el requisito de pertenecer a un sindicato —lo cual limita la entrada a ciertos grupos de personas— o el pago de cuotas de iniciación. Desde luego, este fenómeno puede darse solamente en aquellas regiones donde la escuela posprimaria se ha desarrollado para poder surtir los cuadros necesarios para la industria local. En otras regiones más atrasadas, donde la escuela no está tan plenamente desarrollada como para ofrecer oportunidades de educación media y superior, el valor de la educación primaria todavía puede ser lo suficientemente grande como para garantizar la entrada del trabajador al sector moderno. No es extraño pensar, sin embargo, que estas regiones son las que limitan el acceso a la educación primaria a los grupos sociales más acomodados y, por ende, la educación tiene el mismo efecto estratificador que en las áreas donde existen niveles escolares más avanzados. Con el crecimiento en el sistema escolar hemos visto, entonces, que para mantenerse en un estrato determinado es necesario seguir aumentando el propio nivel de escolaridad. Solamente de esta manera muchas

de las personas pertenecientes a los grupos sociales que actualmente tienen acceso a los mejores trabajos y oportunidades económicas podrían evitar que sus hijos quedaran marginados en el futuro. Así, a pesar del éxito gubernamental logrado al agrandar el sistema escolar en todos sus niveles, los beneficios económicos que esta inversión hubiera podido prometer a los estudiantes se vieron disminuidos por la reducción en la amplitud de oportunidades ocupacionales abiertas a los nuevos graduados de cada nivel. Por supuesto, los beneficios a la sociedad en su conjunto han sido grandes en términos de surtir la mano de obra necesaria para proseguir con el programa nacional de crecimiento económico.²⁸

Es importante subrayar las limitaciones de esta explicación. No estamos refiriéndonos a toda la economía ni a todos los obreros que forman la fuerza de trabajo. La mayor parte de la fuerza de trabajo todavía tiene que encontrar su subsistencia dentro de la agricultura o las industrias que ofrecen salarios relativamente reducidos en comparación con las empresas incluidas dentro de los sectores aquí considerados. Esta hipótesis que relaciona la educación y el trabajo puede darse claramente sólo en aquellas partes de la economía donde los salarios, prestaciones y oportunidades son mayores; es decir, en el sector moderno de la industria y en ciertos servicios donde el crecimiento ha sido más dinámico y donde la tecnología y reorganización de la estructura de producción han cambiado las relaciones de trabajo y las responsabilidades y requisitos de los obreros. También se debe limitar la aplicabilidad potencial de este razonamiento a los nuevos entrantes a la fuerza de trabajo —los que no han acumulado experiencia o entrenamiento en el puesto— porque con los que actualmente tienen trabajo pudieran operar otros mecanismos que les abrieran nuevas oportunidades dentro del sector moderno. Estas limitaciones son necesarias para poder explicar la forma en que la educación podría contribuir a la estratificación social a través de sus relaciones con el mercado de trabajo.

Vimos, anteriormente, cómo funciona la estratificación del sistema escolar para proporcionar las mejores oportunidades a los hijos de las familias que habitan en las zonas más prósperas del país. En las regiones más rezagadas, las plazas en las escuelas primarias están disponibles en

²⁸ Para la exposición de un modelo que trate de explicar las incongruencias dentro del contexto norteamericano véase Hollister (1970). Su modelo no tiene semblanza en las hipótesis presentadas aquí, pero su objetivo es el mismo: explicar la falta de una relación a largo plazo entre la distribución del ingreso y la de la educación. Para un marco analítico más estrechamente relacionado con el presente trabajo véase Gintis (1971) y Bowles (1971) y las referencias en éstos.

números reducidos y se puede suponer que se encuentran ocupadas en mayor grado por las personas mejor acomodadas y las que tienen aspiraciones de que sus hijos emigren. En las zonas más avanzadas del país las facilidades escolares son mayores, pero, como vimos en el caso de Monterrey, están mejor aprovechadas por las personas de la clase media alta para arriba. La explicación de la selección con base en el estatus socioeconómico radica tanto en la distribución geográfica de las plazas como en los costos de la educación. Los requisitos formales y el número reducido de oportunidades limitarían efectivamente las posibilidades a los hijos de las familias humildes, aun si pudieran costear la educación "gratuita", es decir, si se pudieran mantener la familia y el estudiante sin percibir el ingreso que hubiera podido recibir éste de no estar asistiendo a la escuela.

Dada la concentración regional de las instalaciones escolares en las grandes urbes, donde también se está concentrando el desarrollo industrial, el efecto distributivo de los cambios sobre la población en el reclutamiento ocupacional dentro del sector moderno es bastante importante. El acceso a los nuevos trabajos en la industria y los servicios modernos depende en gran medida de un mayor número de años de asistencia escolar. Estos trabajos ofrecen la promesa de mejores salarios con aumentos en la productividad obtenidos con el empleo pleno de la capacidad instalada y nuevas inversiones. Los acuerdos sindicales y gubernamentales ofrecen también mejores perspectivas en estas industrias. La combinación del aumento en los requisitos formales y la estratificación escolar se combinan para limitar las mejores oportunidades en la economía a las personas que ya están en las capas más altas de la población, las familias de las clases alta y media alta. Éste es un proceso que continúa y quizás acentúa la ya bastante concentrada distribución del ingreso en México.

Así, mientras que las personas que tienen acceso al sector moderno pueden beneficiarse de las mejores condiciones materiales allí ofrecidas, esta hipótesis sugiere que el sistema escolar en México tiene el papel de un filtro socioeconómico. Un filtro que dificulta la movilidad socioeconómica que se supone que la educación primaria tradicionalmente ha otorgado. Vimos que hasta hace pocos años, la escasez de mano de obra escolarizada hizo posible todavía que la educación llenara este papel para los nuevos aspirantes al sector moderno; ahora esto es mucho menos probable. Esta descripción nos ayuda a entender la aparente contradicción entre el alza continua de la escolaridad de la población y el deterioro en la distribución del ingreso. Sugiere que el sistema educacional no es solamente un mecanismo de preparación de personas para el trabajo, sino también una institución de selección que ayuda a los empresarios a

seleccionar al mejor de los trabajadores disponibles; eso es, los que han sido mejor socializados y tienen ya las ventajas de los subsidios gubernamentales realizados a través del sistema educacional.^{29, 30}

2.5. CONCLUSIONES

Hemos examinado la compleja relación entre la educación y la economía. Una de las conclusiones sobresalientes del análisis es el grado de influencia que la clase social tiene sobre las posibilidades de aprovechar plenamente el sistema escolar y, como consecuencia, de beneficiarse de las oportunidades ofrecidas por el sector moderno de la economía. Pero la relación no es solamente unidireccional. Si bien es cierto que muchas oportunidades educativas no están disponibles para todos, también es importante notar que las limitaciones del crecimiento económico obstaculizan la capacidad de muchos grupos de aprovechar las oportunidades disponibles. Un cambio en la educación sin los cambios correspondientes en la estructura ocupacional y económica del país sólo conseguirá perpetuar muchas de las limitaciones anotadas en este trabajo.

Actualmente, sin embargo, el sistema mexicano no solamente no con-

²⁹ Uno de los efectos irónicos de este proceso de selección es la reducción de la eficiencia en el uso de los escasos recursos que se están canalizando hacia la educación. Por un lado, muchas personas que han recibido una educación de nivel medio o superior se encuentran frente a la imposibilidad de conseguir el tipo de trabajo más adecuado de acuerdo con su preparación formal; como consecuencia consiguen trabajos en otros campos. Por el otro, algunas personas que están educadas nunca llegan a participar en la fuerza de trabajo en forma directa y la sociedad no puede aprovechar los beneficios de las inversiones ya hechas.

³⁰ Si la hipótesis tiene alguna validez puede, también, poner en duda el enfoque pre-dilecto de los economistas neoclásicos al examinar la contribución de la educación al crecimiento económico (véase, por ejemplo, Mincer, 1970). Dado que el número de personas disponibles para un determinado trabajo está limitado artificialmente por un mecanismo diseñado para facilitar el proceso de reclutamiento y que el salario no se ve afectado por este proceso de limitación, una evaluación de las utilidades de las inversiones educativas que acepte los precios de mercado para la mano de obra con distintos niveles educativos puede resultar en conclusiones erróneas. Dado que las mismas personas determinan tanto la oferta de trabajadores como la demanda, el nivel de salarios no tiene que reflejar costos sociales. En muchos casos el trabajo actualmente ejercido por personas con altos grados de educación podría cumplirse con personas con menos educación y podría concebirse el caso de una reasignación de recursos humanos para lograr una mayor productividad total. Esto no va a ocurrir mientras el sistema no genere suficientes oportunidades de trabajo productivo.

tribuye a reducir las desigualdades entre los grupos sociales, las está agudizando. Vimos que la distribución del ingreso en México se ha concentrado todavía más durante los últimos dos decenios y notábamos que las personas que han logrado los mayores grados de escolaridad actualmente reciben niveles de ingresos superiores a los promedios nacionales y que éstos están distribuidos en forma más igualitaria. Es importante subrayar la importancia de este hallazgo: la participación en el sistema escolar y el acceso ofrecido por ésta a los mejores puestos en la economía no solamente proporcionan mayores ingresos, sino que a ese nivel propician una mejor distribución de los mismos.

El acceso al sistema educativo, que facilita estos beneficios, está bastante limitado. En parte, esto se debe a los reducidos recursos disponibles para el presupuesto educativo pero también, en gran medida, a la alta concentración de las oportunidades escolares en las zonas más ricas del país. La gran disparidad entre las oportunidades ofrecidas a las personas de las áreas rurales y de las urbanas para poder aprovechar las plazas escolares, está superada solamente por la disparidad entre las entidades federativas ricas y las pobres. Los efectos notados en este trabajo y en otros al nivel primario (Mir, 1971) son, sin embargo, todavía más agudos en los niveles superiores, donde las oportunidades son menores con respecto a la demanda total, y la concentración de la satisfacción de la demanda potencial es todavía mayor. Esto nos ha llevado a una situación en la que un gran porcentaje de los estudiantes en la máxima casa de estudios de México, la UNAM, vienen del 9% más rico de la población nacional. Podemos concluir, entonces, que la falta de capilaridad educativa hace muy difícil la subida de personas de las clases humildes a los niveles más altos de la educación en México.

Finalmente vimos que la interrelación entre la estructura educativa y la económica nos llevó a la hipótesis de que el sistema educativo no solamente no está proporcionando suficientes oportunidades a las personas de medios escasos, sino que están funcionando en forma activa como una institución de selección, impidiendo el progreso de las personas que no gozan de los privilegios de clase. En el nivel agregado, el desarrollo escolar ha sido consistente con el proceso de industrialización —proporcionando mayores números de personas con mejor preparación— pero en el proceso, ha creado un efecto de rezago en el sentido de que ha dejado sistemáticamente a la mayor parte de los mexicanos sin posibilidad de participación en la economía moderna.

Una conclusión de este análisis es que a medida que se han venido ensanchando las oportunidades educativas ha sido necesaria más educación para que una persona cualquiera pueda mantenerse en el mismo

estrato socioeconómico. A medida que se va subiendo, los requisitos educativos para entrar al sector moderno, donde se dan los niveles de vida correspondientes a la clase media, exigen que las familias de estos grupos sociales procuren mandar a sus hijos a la escuela por un mayor número de años. En otras palabras, *los cambios económicos exigen mayor preparación educativa, para mantenerse en el mismo nivel social.*

No es de sorprenderse, tampoco, del énfasis que se está poniendo en la reforma educativa en los niveles superiores. Tanto los asistentes a la escuela, como sus padres y otros demandantes potenciales, así como los industriales, se dan cuenta de la importancia de la educación y de su contribución a la productividad del individuo. Sin una reorganización de la enseñanza media y superior para ajustarla a las necesidades de una estructura económica y moderna, ciertas posibilidades de crecimiento se verán frenadas por falta de personas con las habilidades adecuadas. La reforma educativa es necesaria para garantizar un número suficiente de egresados con la preparación mínima necesaria para las oportunidades productivas que se están creando. Los grupos sociales tienen un fuerte interés en asegurarse de que la escuela emprenda esta tarea para posibilitar la entrada de su progenie a las mejores oportunidades de la economía. Son de esperarse mayores esfuerzos para hacer más flexibles los programas educativos y, posiblemente, para reducir el tiempo necesario para completarlos. Mientras tanto, en el nivel básico de la escuela las medidas de la reforma educativa tendrán, probablemente, efectos de un orden más cuantitativo. Es decir, habrá esfuerzos para aumentar el número de aulas y mejorar su distribución, pero sin grandes preocupaciones o posibilidades de cambiar la naturaleza de la enseñanza y hacerla más relevante para los trabajos dentro del sector moderno. Esto se debe a las grandes presiones que pueden ejercer las clases más altas para lograr que la mayor parte de los presupuestos adicionales que se otorguen para implementar la reforma educativa sean utilizados en los niveles superiores, que son los más estrechamente ligados al programa nacional de crecimiento económico. Pero sin mayores recursos no habrá los elementos necesarios para cualquier reforma.

Es deseable, sin embargo, aclarar que la educación no ha perdido su capacidad de favorecer la movilidad social para los que logran entrar en los niveles correspondientes. Aunque las probabilidades son menores, hay cierta posibilidad de que personas de las clases medias bajas y de las bajas puedan cursar hasta los niveles superiores y recibir los debidos beneficios. Desde luego, estas posibilidades son mayores en las zonas donde hay mayor concentración de facilidades escolares, como es el caso del Valle de México. En estas zonas las oportunidades de educación y

trabajo son mayores que en provincia y el ensanchamiento de las oportunidades educativas trae consigo la apertura de mayores canales de capilaridad educacional y, probablemente, social. Mientras esta expansión se acompañe de otra, correspondiente, dentro del mercado de trabajo no se pondrá en peligro la posición de los estratos más altos, pero sí se satisfarán las necesidades económicas del crecimiento.³¹

Finalmente, es conveniente subrayar la relación de la educación con el desarrollo económico. En la mayor parte de este trabajo nos hemos limitado a hablar de los beneficios de la educación para el crecimiento económico. Hemos visto la necesidad de hacer esta distinción porque la evolución de la economía mexicana en los últimos decenios ha mostrado que el aumento en el producto interno no se ha visto acompañado de una mejor repartición de la riqueza (o aun del ingreso). Si bien es innegable el mejoramiento en las condiciones materiales de vida de un gran porcentaje de la población en este periodo, las diferencias regionales y personales en México han seguido en persistente aumento.³² La educación ha jugado un papel importante al asegurar la disponibilidad de los recursos humanos capacitados necesarios para el crecimiento económico, pero no ha podido contraponerse a las tendencias concentradoras en la economía mexicana; por el contrario, su funcionamiento ha fortalecido esos movimientos.

Nuestro análisis sugiere, sin embargo, que el problema no radica en el sistema escolar y, por consecuencia, una mera expansión de éste no corregiría el problema. Nuestra hipótesis plantea la incompatibilidad entre la ampliación de oportunidades sociales y la pauta de desarrollo que no crea suficientes fuentes de trabajo bien remunerado para toda la población. Aunque el análisis sugiere que la educación agudiza las tendencias actuales hacia la concentración, el remedio de reestructurar el sistema escolar —si esto se pudiera lograr frente a los actuales intereses creados— solamente provocaría la aparición de otros mecanismos de selección para canalizar los beneficios del desarrollo hacia los grupos que actualmente gozan del poder y dirigen la estrategia del crecimiento económico.³³

³¹ Para una discusión más amplia de las posibilidades de que los individuos suban a pesar de las limitaciones de su clase social en México, véanse las discusiones del tema en Balán *et al.* (1971), y para una discusión teórica del problema, con datos norteamericanos, véase Rogoff (1961).

³² Para una discusión más extensa del crecimiento económico y sus relaciones con la posibilidad para el desarrollo véase Barkin (1970).

³³ Un análisis reciente de las dificultades del reformismo dentro de una determinada estructura de dominación económica y política aparece en Cinta (1971).

Debemos aclarar, antes de terminar este ensayo, algunas de las implicaciones para la política educativa que se pueden desprender de este trabajo. Uno de los propósitos ha sido el de destacar la relación integral entre los sistemas social, económico y político y una de sus más importantes instituciones: la educación. No es nuestro intento o nuestro deseo menoscabar la importancia que tiene la educación para el desarrollo humano y económico; al contrario, estamos convencidos de que la educación es importante para los dos y de que una mayor comprensión de ella y de sus relaciones con los sistemas social, político y económico facilitaría los intentos para reformarla.

Es evidente que habrá importantes esfuerzos para implantar una reforma educativa en México. Sin importar cuáles sean sus características específicas, parece imprescindible una reforma previa del sistema fiscal que permita al Estado captar mayores recursos y también un cambio en el proceso de asignación presupuestaria que deje un porcentaje mayor para la educación. Dentro del contexto descrito en la última sección del trabajo —en el cual vimos que la educación no puede jugar un papel clave para asegurar la movilidad socioeconómica para las capas bajas— una reforma educativa probablemente afectará principalmente a los niveles medios y superiores de la educación, siendo precisamente en éstos donde la entrada se encuentra más restringida para los miembros de las clases populares.

En el contexto actual, la educación no parece estar en condiciones para oponerse a todas las demás instituciones sociales. Es solamente una de varias instituciones que resultan de y afectan la estructura socioeconómica del país y no está estructurada para presentar un reto fundamental a todas las demás. Su incapacidad de promover la capilaridad social no es el resultado solamente de las limitaciones inherentes a su estructura; se debe, más bien y fundamentalmente a la pauta de desarrollo económico del país, que ha restringido la capacidad de absorción de mano de obra en trabajos productivos. Sin un cambio profundo en esta estrategia, dirigido hacia una mayor absorción de trabajadores en los sectores modernos, una reforma educativa no cambiaría la función que la educación actualmente tiene en el proceso de selección, reforzando inevitablemente la estructura de clases actualmente prevaleciente.

3. EL IMPACTO DE LA INTEGRACIÓN EN LOS TRABAJADORES MEXICANOS¹

con BLANCA LEMUS

Después de décadas de aislamiento, los encargados de la política económica han estado tratando durante más de dos decenios de acelerar la integración de México en la economía mundial. Si bien el país comenzó a “administrar la prosperidad” con base en el petróleo después de la primera crisis grave del peso en 1976, el Departamento del Tesoro inició conversaciones para la adhesión del país al Acuerdo General sobre Comercio y Aranceles (GATT) como parte de la llegada a su “madurez”. Inesperadamente, una efectiva coalición de los economistas académicos, sindicatos rebeldes y pequeños empresarios lanzaron una campaña nacional efectiva para detener la iniciativa; a pesar de sus amenazas de nefastas consecuencias para los trabajadores del país, obligó al gobierno a retirarse de la ronda de negociaciones de Tokio en 1980. Ese episodio resultó ser sólo la primera escaramuza en una batalla perdida por las fuerzas sociales en México. Un proceso acelerado de la integración económica internacional catapultó al país a una nueva era de libre comercio e inversión; finalmente se unió al GATT en 1986 (más tarde se transformó en la Organización Mundial del Comercio), siendo admitido en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos en 1992, y adherido al Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) en 1994.²

¹ Publicado en inglés en *New Solutions*, vol. 8:2 (nov.), 1998, pp. 243-252. Traducción de Blanca Lemus.

² El Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio fue creado en 1947 para promover un comercio más libre entre naciones como parte del proceso de reconstrucción después de la guerra; durante casi cincuenta años, tuvo éxito en reducir sustancialmente las barreras comerciales y la incorporación de muchos países en el pacto. En 1994, se transformó en la Organización Mundial del Comercio, con objetivos aún más ambiciosos, para abarcar servicios, derechos de propiedad intelectual y la inversión privada. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo es una consecuencia del grupo creado para administrar el Plan Marshall para la reconstrucción de la Europa devastada por la guerra; generalmente considerado como un club de naciones de “primer mundo”, con la incorporación de México, se ha ampliado su alcance para incorporar algunos de los países más ambiciosos en proceso de industrialización, y de armonización de las políticas de integración internacional. El TLCAN es un segundo paso en los esfuerzos de Estados Unidos para consolidar su influencia sobre las relaciones hemisféricas; primero fue el pacto con Canadá.

Por desgracia, las predicciones sombrías de los opositores a la integración han demostrado ser correctas. La calidad de vida, medida en tantas dimensiones como seamos capaces de imaginar, continúa deteriorándose aun cuando la prensa financiera del mundo celebra la asombrosa recuperación de México de su último combate con la depresión económica y su capacidad de adaptación frente a la crisis en Asia. En este capítulo se analiza por qué la globalización y la integración han sido tan eficaces en la reducción de los niveles de vida para los trabajadores y campesinos en México, incluso mientras los expertos siguen aplaudiendo los esfuerzos y hacen un llamado a la paciencia, acumulando descontentos. Aún más, sostenemos que esta disminución es un resultado inherente e inevitable que sólo puede ser frenado por movimientos internacionales de solidaridad eficaces, junto con la coordinación de luchas locales en escala internacional en contra de este proceso. Por último, ya que la nueva economía mundial es incapaz de satisfacer las necesidades de la mayoría de los pueblos del mundo que no encontrarán empleo dentro de sus pliegues, se deben hacer esfuerzos serios para apoyar sus luchas por la autonomía local e integrar las coaliciones más amplias que produzcan los bienes y servicios para los trabajadores y al mismo tiempo fomentar amplias mejoras en las condiciones ambientales.

3.1. LOS EFECTOS DE LA INTEGRACIÓN INTERNACIONAL

La integración internacional requiere un cambio profundo en los arreglos institucionales. En México, los líderes utilizan varios métodos, desde el completo soborno a diversas formas de coacción, para avanzar en su proyecto. Para comenzar el proceso, el nuevo equipo económico neoliberal redujo rápidamente las barreras al comercio internacional. Aunque ensalzado como una medida para aprovechar los “vientos de la competencia” para obligar a la industria nacional a ser más eficiente, no se ofreció apoyo a las miles de empresas que no tenían acceso a los recursos para modernizar sus plantas y aumentar la productividad; el resultado, la drástica reducción de los aranceles despejó el camino para una avalancha virtual de bienes de consumo importados, como consecuencia se perdieron casi dos millones de puestos de trabajo en las pequeñas y medianas empresas obligadas a cerrar durante los años ochenta.

En este nuevo entorno, el gobierno coloca a la inflación como el enemigo público “número uno”. Al igual que en la mayor parte del mundo occidental, el ataque ideológico contra la inflación demostró ser una

manera eficaz de revertir los logros sustanciales de medio siglo de lucha de la clase trabajadora.³ Para obtener el apoyo público para esta nueva dirección de la política, se ofrecieron una serie de ventajas muy concretas a los grupos sociales mayoritarios (migajas dirían algunos): sandalias y ropa barata fueron importados de China para los más pobres; los bienes de consumo procesados llenaron las estanterías de los supermercados; el crédito llegó a estar disponible para las computadoras personales y la electrónica de consumo; las autoridades aduaneras hicieron la vista gorda mientras los campesinos trajeron millones de coches usados al país con documentos de turista y luego se les concedió una “amnistía” para que los pudieran legalizar. Los más ricos no sólo fueron retomando por asalto el control del aparato productivo; debilitaron el control que tenían muchos sindicatos en las empresas y encaminaron al Estado para la privatización de muchas empresas públicas. También, transformaron a la Bolsa Mexicana de Valores en un nicho privilegiado para obtener beneficios especulativos libres de impuestos y donde las fortunas cuestionables podrían ser lavadas detrás de la pantalla del anonimato.

Increíblemente, a pesar de la historia de dos décadas de derrotas populares, portavoces de la mayoría de las organizaciones obreras y campesinas participaron en esta transformación. Las cámaras empresariales parecían falsos espectadores, sin entender que la nueva institucionalización pudiera dar un golpe de muerte a muchos de los que habían logrado sobrevivir a las primeras rondas de la poda. La burocracia sindical, estrechamente controlada, encabezó una serie innovadora de “pactos sociales” tripartitas (gobierno, trabajo y empresa privada) que controlaban efectivamente los salarios mientras que los precios seguían subiendo; durante los diez años que estos pactos han estado operando, el poder adquisitivo real de los salarios mínimos en México ha disminuido más de 50%.⁴ Dirigentes campesinos aceptaron el discurso de la modernización, y con ello, el inevitable final de la reforma agraria y además el aislamiento del campesinado que todavía comprende una tercera parte de la población. A la postre, muchos grupos de obreros y campesinos quedaron

³ El ataque ideológico contra la inflación en Estados Unidos y Europa Occidental fue eficaz en la transformación de la opinión pública en contra de las políticas keynesianas de estilo que habían sido tan eficaces en el apoyo a las políticas de una red de bienestar social desde la Gran Depresión. Véase Kirschner (1998) y Bonefeld y Burnham (1998).

⁴ Sólo una pequeña minoría de trabajadores en el movimiento sindical oficial pudieron escapar a esta política de “compresión salarial” a cambio de su agresivo liderazgo en apoyo a la “política impositiva” mexicana; incluso ellos vieron declinar sus salarios después de 1994. Véase D. Barkin, I. Ortiz y F. Rosen, “Globalization and Resistance: The Remaking of Mexico”, *NACLA Report on the Americas*, 30:1, pp. 14-29, enero de 1997.

enojados e incrédulos de que su liderazgo hubiera sido tan ciego como para haber aceptado las falsas promesas de una nueva vida de prosperidad —bienes más baratos, más obras públicas, crecimiento impulsado por las exportaciones y empleo— que sería provocada por la integración, el control de la inflación, y la privatización. Pero a diferencia de la gente en muchas otras partes, están menos convencidos por la afirmación oficial (prestada de la señora Thatcher del Reino Unido) de que “no hay alternativa”.

La integración internacional es un arma de doble filo para la salud de los trabajadores y los derechos humanos. Por un lado, con la imposición de las políticas neoliberales, los salarios reales son forzados hacia abajo, el empleo en el sector industrial se redujo drásticamente, y la inversión extranjera en el sector automovilístico y las maquiladoras aumentó bruscamente. Por otro lado, el mismo proceso ha permitido a organizaciones de base y grupos rebeldes de trabajadores mayor libertad de acción, así como una mayor presión por parte de organizaciones locales e internacionales para el cumplimiento de las normas laborales y ambientales. Como resultado, incluso mientras que las presiones destructivas para los trabajadores y los campesinos se intensifican, hay mayores posibilidades de apoyo colectivo a las luchas individuales y de organización política en los lugares de trabajo y comunidades, así como en el ámbito nacional.

Dos características más destacadas del nuevo orden económico en México son:

- a] Un cambio sustancial en la estructura productiva del país. La política de sustitución de importaciones creó una estructura industrial diversificada durante el periodo 1935-1970 permitiendo a México mantener una tasa promedio de crecimiento de más de 6% al año, creó una fuerza de trabajo industrial y una clase media profesional, mientras que el campesinado se animó a participar, creando un breve pero glorioso periodo de la autosuficiencia alimentaria para el país. Después de casi quince años, el programa orientado a la exportación y especialización en el sector automovilístico, algunos productos electrónicos de consumo, las operaciones de ensamblaje para la exportación (maquila) y la explotación de recursos naturales no han sido capaces de aumentar las tasas de crecimiento promedio más de 2%, con el consecuente deterioro de los ingresos per cápita y calidad de vida. Puestos de trabajo de alta productividad se han concentrado en los servicios financieros globalizados, sectores comerciales y de información, mientras que las oportunidades de empleo decente en la industria y la agricultura han ido disminuyendo.

La agricultura comercial también está creciendo rápidamente, como el TLCAN indujo reducciones en las barreras no arancelarias están entrando poco a poco al juego. Desafortunadamente, las condiciones de trabajo en los campos son deplorables y prácticamente sin regulación, ya que los intereses agrícolas locales son cautivos de las burocracias. A estas preocupaciones se debe agregar el uso abusivo de agroquímicos, con terribles consecuencias para los trabajadores y la salud comunitaria, la reducción de los mantos acuíferos regionales que afectan desproporcionadamente a los pobres que tienen poca influencia para hacer valer sus derechos de suministros adecuados, y el creciente número de accidentes con maquinaria agrícola, como operadores mal pagados y mal preparados para afrontar los retos de la producción globalizada.

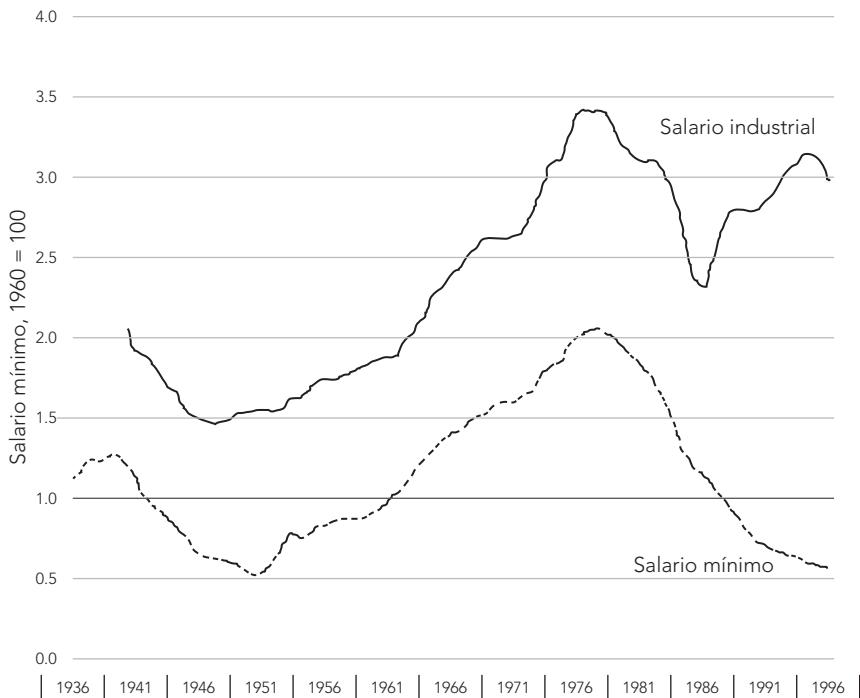
Para las personas sin un empleo decente, el sector comercial floreciente generó oportunidades para los vendedores ambulantes, tragafuegos, lavacoches y actividades delictivas de todo tipo. La desesperación de las crecientes filas de pobres crea un caldo de cultivo para el tráfico de drogas y oportunidades de corrupción minando a fondo la capacidad y credibilidad del sector público en todos los niveles de la sociedad, por lo que es cada vez más difícil hacer cumplir el creciente corpus de la legislación progresista que se discute a continuación.

- b] La disminución de los salarios reales y el aumento de la polarización social. La gráfica 3.1 ofrece una elocuente historia de la suerte de las personas que trabajan en el país. Para una pequeña minoría de los trabajadores sindicalizados en las o la mayoría de las fábricas transnacionales modernas controladas por el Estado, los salarios industriales fueron sustancialmente más altos que la media nacional; este grupo fue especialmente privilegiado hasta 1994, cuando la descomposición de la burocracia sindical frenó su estatus especial. El dramático descenso de los salarios mínimos afectó a un importante segmento de la población, el gobierno estima que más de la mitad de la población vive en la pobreza y cerca de un cuarto en pobreza extrema. Por el contrario, la riqueza se acumula en la parte superior para financiar un auge de la nueva construcción y una pantalla de consumo conspicuo tan excesivo como para provocar las críticas dentro de las propias filas de los beneficiarios.

Un fenómeno asociado es el notable incremento de mujeres y niños en la fuerza de trabajo. Mientras algunos celebran el enorme ingenio de las estrategias de supervivencia diseñadas por las mujeres cada vez más desesperadas, parece más apropiado lamentar el grado

de sacrificio que estas personas deben soportar en su lucha por llegar a fin de mes, con terribles consecuencias para las futuras generaciones que están siendo mal educadas y mal alimentadas debido a las presiones del momento.

GRÁFICA 3.1. SALARIOS EN MÉXICO 1938-1996



FUENTE: NACLA, *Report on the Americas*, 30: 4, p. 23.

3.2. EFECTOS MEDIOAMBIENTALES DEL NUEVO ORDEN ECONÓMICO

Sin extenderse sobre el punto innecesariamente, es importante mencionar los impactos medioambientales de estos cambios. Quizá el más dramático y sintomático es el rápido declive en los índices de calidad del medioambiente en las áreas industriales en ambos lados de la frontera México-Estados Unidos. Sumado a la falta de adecuados suministros de agua para soportar la población existente y las actividades productivas, los gobiernos locales del lado de México carecen de capacidades técnicas o administrativas para instalar y manejar una apropiada infraestructura

para procesar los flujos residuales que son generados por la industria maquiladora, incluso si fueran capaces de obtener los recursos financieros (que simplemente no están disponibles). En otras partes del país, también, la expansión de la industria se está llevando a cabo sin hacer referencia a la “capacidad de carga” de los ecosistemas locales, y especialmente a los suministros de agua. En mayor escala, el empobrecimiento generalizado de las personas y la creciente polarización social tiene de igual forma un profundo impacto medioambiental. Las personas están siendo forzadas a alargar sus jornadas de trabajo, buscando nuevas fuentes de ingreso, de cualquier manera marginal. Migración, nacional e internacional, denota un consecuente declive en el número de personas disponibles para las labores del hogar y tareas comunitarias; como resultado el mantenimiento del hogar y la infraestructura comunitaria está siendo pospuesto indefinidamente con un resultado directo en el deterioro en la calidad de los servicios colectivos como suministro de agua, alcantarillado, reparación de calles y edificios, y en la calidad misma de la vida.⁵

3.3. DESGARRADOR PERIODO LABORAL

Las organizaciones sindicales están pasando por un intenso y desgarrador periodo. Con la muerte de Fidel Velázquez en 1997, un militante líder sindical y fiel protagonista del régimen oficial, el movimiento obrero está en desorden. La CTM, la Confederación Nacional de Trabajadores en México, está intentando redefinir su misión y mantener la disciplina dentro de sus facciones. Grupos insurgentes están intentando forjar alternativas dentro de los márgenes institucionales; el Frente Auténtico del Trabajo (FAT) es cada vez más eficaz en la organización de plantas locales; su lucha por el poder, reconocimiento, y control en todos los niveles en que se lleva a cabo tiene efectos revitalizantes y debilitadores a la vez. El FAT, por ejemplo, recientemente ganó un voto de representación en una subsidiaria de la firma coreana, Hyundai, pero las autoridades locales del Ministerio del Trabajo y de la planta han sido capaces de posponer la aceptación de los resultados y, mientras tanto, más de una docena de los cincuenta y cinco trabajadores han sido despedidos; del mismo modo, en una planta de la GM, activistas que lograron organizarse con éxito

⁵ Boyce (1994) discute este tema con mayor detenimiento en su sugerente artículo, “Desigualdad como causa de la degradación ambiental”; véase también, Barkin (1998).

ante la empresa para hacer obligatorios los pagos de reparto de utilidades a los trabajadores fueron despedidos. En estos dos casos recientes, sin embargo, su proximidad a la frontera y la participación de empresas transnacionales ha creado importantes oportunidades para los movimientos de solidaridad internacional en el movimiento norteamericano; utilizan su comprensión del proceso de negociación comercial y legislativa para apoyar a los grupos locales mexicanos. Otros problemas que enfrenta el movimiento sindical son:

- a] Incremento de la inseguridad laboral. Los despidos en una planta tienen un importante efecto en aquellos que aún laboran dentro de la misma y en otros trabajadores de la región y la industria. Los sindicatos están en una posición muy vulnerable frente a una gestión *vis-à-vis* su poder de negociación disminuye, y las tensiones en el trabajo aumentan.
- b] Creciente conciencia de los graves efectos en la salud y seguridad en el trabajo y, por lo tanto, una mayor demanda de información por parte de los trabajadores. También hay una nueva voluntad de reconocer la importancia de esta situación para la agenda sindical.
- c] Hay una renovación en las demandas de adhesión a los acuerdos internacionales existentes acerca de la organización de los trabajadores y la implementación de las reglas existentes sobre la salud y seguridad del trabajador; en otros casos de acuerdos sobre los derechos de los trabajadores, las demandas son para el cumplimiento de los compromisos ya existentes.

3.4. EFECTOS SOBRE LA SALUD Y SEGURIDAD

La modernización industrial y la inversión están provocando importantes contradicciones que afectan la salud y la seguridad. Desde que la modernización y la reducción de personal son conceptos dominantes en la carrera para forjar una “ventaja competitiva”, nos encontramos con que por un lado, cuando una maquinaria moderna reemplaza un equipo obsoleto, puede haber un aumento de la seguridad; sin embargo, la eficiencia y la productividad, así como las nuevas prácticas de gestión laboral, están aumentando las cargas de trabajo y, con ello, el estrés y el agotamiento físico en el lugar de trabajo. La modernización, por lo tanto, intensifica los problemas creados por la disminución de los ingresos reales y aumenta la pobreza. Las nuevas tecnologías no siempre son benig-

nas, como en el caso de la industria azucarera donde la introducción de cosechadoras mecánicas para la caña de azúcar aumenta la exposición de los trabajadores al ruido y al polvo, ocasionado accidentes y enfermedades graves (Lemus, 1999). Muy a menudo, introducen nuevas tecnologías sin la capacitación adecuada para los trabajadores, lo que da lugar a accidentes y otros resultados desfavorables para la salud (Levenstein, 2008).

Las empresas están tratando de crear sus propias organizaciones, generando normas industriales y ambientales en aras de evitar una regulación estatal o internacional. En México, estos esfuerzos se concentran en el área de ecoeficiencia y se adhieren a las normas internacionales en las que el cumplimiento es importante para evitar que las empresas pierdan en la competencia mercantil. En otras áreas, donde los costos colectivos y externalidades siguen siendo importantes y no reglamentados, las presiones comerciales y mayor intercambio internacional están provocando un aumento en la descarga de desechos tóxicos y producción de contaminantes. La falta de créditos para las pequeñas y medianas empresas genera otros problemas de concentración industrial, ya que son incapaces de implementar programas para cumplir con las normas de salud, de seguridad y del medio ambiente, incluso cuando sería claramente rentable; ésta es una queja común de las empresas que participan en dos programas de producción limpia patrocinados por la Comisión para la Cooperación Ambiental del TLCAN y la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial.⁶

5. INSTITUCIONES QUE CAMBIAN

Las presiones sociales están cambiando el clima en cuestión de salud y seguridad de los trabajadores en México. Grupos de la industria en México están comenzando a patrocinar programas de capacitación y así participar en los esfuerzos de investigación para mejorar su capacidad de cumplir con las propuestas y regulaciones existentes. Aunque la mayor parte de sus esfuerzos aún están dirigidos a intentar bloquear la promulgación de estas normas o su aplicación, hay un creciente reconocimiento de la necesidad de más investigación y la colaboración entre las empresas para asegurar un mayor conocimiento y cumplimiento de las normas.

⁶ Un caso notable de eso es la industria de la curtiduría en León, Guanajuato. García (2013) examina este proceso en detalle (véanse también Blackman, 2003; Blackman y Kildegaard, 2010).

También están empezando a discutir el problema de la obtención de recursos para la capacitación del personal en salud y seguridad en el trabajo; su objetivo principal sigue siendo la Secretaría del Trabajo.

Hay una conciencia creciente de que las recientes medidas para promover la aplicación más estricta de las normas de salud y seguridad en el lugar de trabajo se asocian con una disminución de los accidentes reportados al Instituto de Seguridad Social en los dos últimos años. Estos datos, por supuesto, pueden ser el resultado estadístico de empresas que compiten para cumplir con las nuevas reglas y evitar multas informando menos accidentes. El resultado neto puede ser más bajo en los informes sin ninguna mejora real para la salud y seguridad de los trabajadores y con una menor capacidad para comprender la situación actual.

La privatización de los servicios públicos de salud en México está teniendo un impacto particularmente fuerte en los que están en la parte inferior de la estructura social. Los trabajadores se quejan de la mala calidad de la atención sanitaria. La medicina privada es una mejor solución, pero su costo está aumentando rápidamente y los sistemas de seguros privados son insuficientes. Otros servicios de carácter social, como la educación y el cuidado infantil, se desmantelan rápidamente o están hambrientos de fondos, mientras que el sistema de pensiones ha sido privatizado. Para aquellos que pueden permitírselo, sin embargo, el sector privado va en aumento según las oportunidades que presenta el mercado.

Finalmente, la comunidad académica y de investigación está empezando a responder a los desafíos en este campo. El programa pionero de Medicina Social en la Universidad Autónoma Metropolitana continúa, aunque en este momento se encuentra bajo ataque político de la jerarquía nacional de acreditación académica. Hay varios programas para la formación de personas en materia de salud y seguridad del trabajador y las organizaciones internacionales están comenzando a complementar los recursos locales; en un notable avance, están surgiendo esfuerzos para promover la producción más limpia. En diciembre de 1995, el Instituto Politécnico Nacional fue designado como el Centro Mexicano para la Producción Más Limpia, centrándose en una estrategia global para la reducción de sustancias tóxicas desde su origen en los procesos industriales, principalmente en las pequeñas y medianas empresas; el primer grupo de proyectos se ha centrado en galvanoplastia.

Del mismo modo, el Instituto Nacional de Salud Pública opera una serie de programas para evaluar el impacto de las aguas residuales en la salud de la comunidad y proponer soluciones alternativas. El aumento en la colaboración para la investigación y la formación en cuestiones de

salud ocupacional está surgiendo y algunas organizaciones sindicales están comenzando a tomar un papel más activo en un área que se suponía iba a estar en su ámbito de competencia desde el principio del siglo; sin embargo, los obstáculos son múltiples.

En conclusión, esta rápida visión general de la evolución de la situación de salud y seguridad de los trabajadores en México muestra claramente las dinámicas complejas y contradictorias que se encuentran en el trabajo. La propagación mundial de la producción y las finanzas genera una destrucción de los recursos, contaminando el medio ambiente, poniendo en peligro la vida de los trabajadores y de nuestra capacidad colectiva para sobrevivir. Hay algunos signos positivos con una mayor disposición para prestar atención a estos asuntos y permitir que se dediquen más recursos a la resolución de problemas. Pero también hay muchas oportunidades para los grupos de base y sus aliados para aumentar su influencia y ayudar a empoderar a las organizaciones que, en el pasado, habrían sido derrotadas por su anonimato.

4. INFLACIÓN Y DEMOCRACIA: EL CASO DE MÉXICO¹

con GUSTAVO ESTEVA²

INTRODUCCIÓN

Este texto intenta presentar, en términos sencillos y accesibles, una explicación de los procesos inflacionarios que actualmente se registran en nuestro país y apuntar algunas formas sociales de someterlos a control.

En las condiciones actuales del pensamiento económico predominante el intento sólo puede plantearse como un ensayo preliminar. Los expertos tienden a rechazar con desprecio las reacciones epidérmicas del “hombre de la calle”, ante las manifestaciones más evidentes de la inflación. Rechazan con semejante irritación los comentarios banales de los locutores de la economía, que compiten entre sí por el trofeo a la denuncia más agresiva y escandalosa sobre sus culpables favoritos: el gobierno, los sindicatos, los comerciantes abusivos, los monopolios, las transnacionales, etc. Sin embargo, al examinar las “explicaciones” que los expertos consideran satisfactorias, surge inevitablemente la impresión de que su creciente sofisticación se ejercita sobre cuestiones cada vez más irrelevantes; los análisis cobran belleza especulativa a medida que se alejan del mundo real. El “hombre de la calle”, por su parte, atrapado en el juego de fenómenos resultantes de la inflación que afectan adversamente su vida, se halla inmerso en esas realidades cotidianas que lo agobian; aunque, acaso por ello sus impresiones intuitivas se encuentran más cerca de un diagnóstico científico de la inflación que las versiones académicas, tampoco él puede llegar a formular una explicación clara y sencilla sobre lo que ocurre, para orientar su comportamiento, entre otras cosas por la influencia que ejercen sobre sus ideas las mistificaciones de la realidad que circulan en los mercados ideológicos como explicaciones “objetivas” del fenómeno.

¹ A este trabajo le fue otorgado el primer lugar del Premio de Economía Política Juan F. Noyola 1978, por El Colegio Nacional de Economistas. Publicado en *El Economista Mexicano* (1978), vol. xii (6), pp. 6-36.

² Gustavo Esteva es un luchador social e intelectual público desprofesionalizado. Autor de libros y columnista de *La Jornada*. Fue asesor de los zapatistas en sus negociaciones con el gobierno. Colabora con el Centro de Encuentros y Diálogos Interculturales y la Universidad de la Tierra en Oaxaca, y con diversas organizaciones, universidades y redes locales, nacionales e internacionales; gustavoesteva@gmail.com.

La ciencia ha de ocuparse, sin duda, de describir los fenómenos que estudia y analiza sus manifestaciones más evidentes, pero de esa manera apenas ha iniciado su tarea; un buen diagnóstico comprende el examen de los síntomas de una enfermedad, pero no se detiene en ellos. Cuando este diagnóstico permite descubrir la causa de la enfermedad: la terapia se concentra en atacar, como una intervención quirúrgica, por ejemplo. El tratamiento de los síntomas se sujeta enteramente a las necesidades y condiciones de la prescripción terapéutica fundamental, ya que ataca las raíces de la enfermedad. El problema del debate sobre la inflación radica en que el diagnóstico habitual caracteriza el fenómeno como una colección de síntomas interconectados, que operan en la forma de vasos comunicantes. Los expertos se ocupan, a niveles crecientes de sofisticación técnica, de definir los procedimientos más adecuados para controlar esos síntomas mediante la intervención sobre algunos de ellos. Al detener el diagnóstico en esta instancia, la discusión adquiere un carácter circular; tengan éxito o no, las medidas para controlar los síntomas no llegan a tocar los problemas de fondo, salvo para agravarlos. Los síntomas se hallan efectivamente relacionados entre sí aunque no por una conexión de causa a efecto: lo que ocurre en uno de ellos se transmite a los demás de diversas maneras. Las ondas inflacionarias pueden así moverse de un espacio económico a otro, pero de ese modo, lejos de extinguirse, adquieren vigor adicional.

En este texto se admite la hipótesis, que comparten muchos analistas pero pocas veces se lleva a sus últimas consecuencias, de que la inflación es un proceso que abarca a la sociedad entera. Sólo es posible explicarlo mediante un análisis global del funcionamiento de la economía. Para controlarlo, es preciso inducir un comportamiento de todos los actores del proceso que efectivamente concurran a ella. Se requiere, por lo tanto, que exista una comprensión *general* del problema, en torno a la cual pueda desatarse una acción igualmente *general* que contribuya a su solución. Sea cual fuere la calidad de las explicaciones de la cuestión elaboradas hasta ahora por los expertos, la incapacidad de transmitirlas a todos los sectores de la población, para organizar a partir de esa comprensión común aquellos comportamientos socialmente necesarios, se revela como una de las más graves ineptitudes de la ciencia económica en boga.

Se pretende aquí presentar de manera sencilla y comprensible un diagnóstico de la inflación actual. Se ha intentado, por ello, prescindir de los términos técnicos que no son estrictamente indispensables para la precisión teórica del análisis. Se ha preferido, por la misma razón, evitar la acumulación de cifras que ilustren los argumentos a funciones como su fundamentación cuantitativa. No se considera que ello reste validez a

la presentación del análisis, porque los hechos que se estudian han sido objeto de innumerables investigaciones de coyuntura y son ampliamente conocidas sus manifestaciones estadísticas. Las series que las recogen, además, presentan tales deficiencias, que todo análisis de la cuestión obliga a combinar el uso de esas informaciones cuantitativas con materiales empíricos de apoyo, que puedan dar validez a la investigación. De este modo, las presentaciones de los resultados se tornan de lectura difícil, a pesar de que el empleo generoso de cifras e índices no contribuye mayormente a enriquecer la exposición. Mantener bajo una bella cúpula la cimbra empleada en su contribución es un estorbo cuando se trata de apreciar su calidad; sólo necesitan hacerlo quienes temen que la construcción entera se caiga al retirarla. Sobre los economistas recae la principal responsabilidad de una opinión generalizada sobre su ciencia que Carlos Fuentes ha resumido de la siguiente manera: “la opinión económica es la opinión personal convertida en norma dogmática: la única opinión que se sirve de números para imponerse” (1978: 44).

Conviene precisar dos limitaciones explícitas de este trabajo. Diversas corrientes de pensamiento económico, entre ellas las que aquí se han seguido, estudian la inflación en el contexto de la crisis económica de la sociedad capitalista, como una de sus expresiones principales. En este trabajo, sin embargo, no es posible ocuparse de la crisis en sí; sólo se hace referencia a ella como marco de referencia indispensable para el análisis. Tampoco es posible tratar aquí los aspectos internacionales de la inflación, que aquellas corrientes consideran indispensable abordar al explicarla. Puesto que el trabajo busca ante todo suscitar esfuerzos concretos de nuestra sociedad para atacar sus problemas específicos, puede omitir sin grave daño el tratamiento de fenómenos a nivel mundial en cuya modificación poco puede influir nuestro país: para todo propósito práctico, es preciso considerarlos como restricciones insuperables.

En el texto también se elude otra cuestión trascendente. Desde nuestro punto de vista, no puede existir una solución definitiva de la inflación en nuestras sociedades, bajo el régimen de producción prevaleciente. Pero sólo un dogmatismo de esencia reaccionaria extrae como consecuencia de ese pronóstico la necesidad de adoptar una actitud pasiva ante los procesos en curso, a la expectativa de un estallido de sus contradicciones sobre cuyos restos pueda construirse la nueva sociedad. Pensamos que es posible avanzar un largo trecho en el dominio concreto de las fuerzas sociales que impulsan la inflación y en este campo de maniobras hemos concentrado el análisis, que por ello no necesita para su fundamentación o desarrollo, abordar el tema de la transición a otro régimen productivo o especular sobre las características de éste.

A pesar de sus diversas limitaciones, consideramos que nuestro intento se justifica. Ante una de las crisis económicas más severas de la historia de nuestro país, es necesario ocuparse más de la verdad de la transformación que de la transformación de la verdad. El debate académico y sofisticado puede pasar a segundo término y ceder su lugar a esfuerzos de transmisión del conocimiento acumulado, que puedan suscitar la participación colectiva en acciones que es urgente emprender para la transformación de nuestra sociedad.

4.1. LAS RAÍCES DE LA INFLACIÓN

a] *Los enfoques convencionales*

Para la mayor parte de la gente, incluso para los economistas especializados en el tema, la inflación es sinónimo de alzas en el costo de la vida: “un incremento continuo en el nivel de los precios” de las mercancías en los mercados (Frisch, 1977: 1289). Esto resulta natural, porque ese fenómeno es el aspecto más evidente del *proceso inflacionario*. Los precios, sin embargo, son sólo la expresión final de un proceso social mucho más complejo, cuyas raíces penetran profundamente en la estructura social y productiva de la sociedad. Por ello, los análisis de la inflación que solamente abarcan el fenómeno superficial de los precios no permiten explicarla y enfrentarla adecuadamente. En este ensayo sostendremos que *la inflación es reflejo y expresión de la contienda existente entre las diversas fuerzas que integran la sociedad*. Se manifiesta en ellos la interacción entre las diversas clases sociales, cuya lucha continua moldea la estructura productiva nacional y determina las reglas del juego mercantil y político a escala mundial, en cuyo contexto se mueve nuestro país.

Las versiones convencionales sobre el tema rechazan este enfoque. Explican la inflación como un fenómeno principalmente monetario, que se desarrolla casi exclusivamente en el ámbito de la circulación del dinero y de las mercancías. Este proceso afecta indirectamente la producción, a través de su impacto en las ganancias y en los ingresos reales de la población. Dentro de esta corriente analítica, se examinan opciones de solución a partir de los elementos identificados como causas del proceso: una cantidad excesiva de dinero en circulación; cuellos de botella en la estructura de la producción que limitan la disponibilidad de ciertos productos básicos para el consumo o para la exportación; incapacidad de los precios de reaccionar con flexibilidad ante las necesidades del mer-

cado, por la presencia de estructuras monopólicas en la producción o en la distribución, etc. Entre las causas de la inflación el análisis convencional incluye también fenómenos respecto a los que poco puede hacer un país cualquiera, como las tendencias inflacionarias de los mercados internacionales, o que parecen rebasar el ámbito de los fenómenos inflacionarios mismos, como el desequilibrio en las relaciones económicas con el exterior o la desigual distribución del ingreso.

A pesar de sus diferencias y contradicciones internas, la corriente monetarista encuentra un fuerte respaldo intelectual entre muchos economistas y dispone de un abultado instrumental analítico, cada vez más sofisticado. Un examen concienzudo de la literatura puede mostrar un claro desarrollo técnico en este campo de investigación; sus modelos, cada vez mejor elaborados, no sólo incorporan con mayor precisión las variables tradicionales (dinero, demanda agregada y sectorial, desempleo, uso de capacidad productiva, etc.), sino también algunas de definición compleja, como las expectativas y la transmisión internacional de precios a través del comercio.³ En sus diversas elaboraciones teóricas, se sugiere la manipulación de una amplia gama de instrumentos de política económica para modificar los movimientos en los precios, aunque sus esfuerzos se constriñen por lo general al campo de las políticas monetarias y fiscales y de las relacionadas con el comercio internacional.

Otros economistas consideran que la elevación de precios no disminuye su ritmo por medidas monetarias y fiscales, pues existen mecanismos más profundos que afectan directamente a las fuerzas sociales que actúan en el seno de cada sociedad. Esto fue reconocido en México en fecha temprana por Noyola, quien emprendió un estudio detallado del comportamiento de los salarios reales (Noyola y Rosado, 1951) y consideró que las causas primordiales de los aumentos en los precios se encuentran en factores reales en la economía. En su análisis de la situación económica de la posguerra abogó por controles sobre la producción misma y por una política de salarios flexibles, ajustados de acuerdo con las alzas en el costo de la vida (Noyola, 1956). En los últimos lustros, se ha extendido esta línea de pensamiento, al insertarse el examen de la inflación dentro del estudio más general de la crisis.

Los análisis marxistas han intentado explicar la inflación como un elemento integral “del problema (del) desplome y la depresión; la inflación es un medio para posponerlos o evitarlos, ya que retrasa la llegada de la verdadera crisis...” (Gamble y Watson, 1977: 249 y ss). Al considerar

³ Véase Frisch (1977), también Bronfenbrenner y Holzman (1963), y Laidler y Parkin (1975).

la inflación de los países “avanzados”, apuntan que el problema de los análisis que se concentra en los fenómenos monetarios radica en su “incapacidad de ubicar la crisis en el contexto de la producción capitalista y mostrar de qué manera el aumento secular en los precios, incluyendo los salarios monetarios, la extensión masiva de créditos, etc., así como el crecimiento del gasto público, son formas necesarias de aparición de las contradicciones de la producción capitalista en su última fase, la del capitalismo en declinación” (Bullock y Yaffe, 1979: 11).⁴ En relación con estos países, las nuevas elaboraciones teóricas sobre la inflación tienen que explicar cómo es posible que se presenten en forma simultánea tasas inflacionarias más altas y una tendencia al aumento en el desempleo. Se requiere explicar un fenómeno que ha dado lugar, incluso, a un nuevo término económico: la estanflación (estancamiento con inflación), que intenta captar la forma novedosa en que se manifiesta actualmente la situación en los países “avanzados”.

Los países “pobres” experimentan el problema de otra manera. También padecen la estanflación, pero en ellos se trata de un fenómeno endémico, carente por completo de novedad, como se analizará más adelante. El estudio de la crisis capitalista en los países avanzados es obviamente importante para lograr la comprensión del marco global en el cual se desenvuelven los países “pobres”: como en ellos, insistimos, la crisis es un estado permanente, al analizar su caso los teóricos no sólo necesitan explicar las causas de la inflación, sino además demostrar que las políticas que se derivan de sus análisis no causarán mayores problemas de estancamiento económico.

En todos los países capitalistas la dinámica económica está determinada fundamentalmente por la tasa de ganancia sobre el capital invertido por las empresas capitalistas; el avance de la acumulación directamente de las utilidades. Su tendencia histórica a disminuir ha llevado a un grado creciente de intervención estatal, para mantener la estabilidad de la moneda y asegurar la rentabilidad de la acumulación y el ritmo de crecimiento. En las nuevas condiciones, los gobiernos se encuentran ante una disyuntiva permanente; frenar la actividad económica, limitando la oferta monetaria, a fin de mantener la estabilidad en los precios y un alto nivel de utilidades que permita la acumulación privada, o alentar la actividad económica, mediante el aumento del gasto público, para reducir el desempleo y conservar la paz y la estabilidad sociales. Acumulación o prosperidad, he aquí la nueva contradicción del mundo capitalista moderno.

⁴ Los dos textos citados en este párrafo constituyen una introducción excelente a la teoría marxista de la crisis, junto con Alcaly (1978).

Para explicar la inflación en estas condiciones, en consecuencia, no es suficiente analizar los aspectos monetarios, que son los más evidentes de las estructuras económicas. Es preciso tomar en cuenta la contienda social entre los diversos grupos sociales, que se ha estado agudizando y expresa la pugna por lograr una tasa elevada de utilidad sobre el capital, de un lado, y por alcanzar un mejor nivel de vida obrero-campesina, por el otro.

A final de cuentas, aunque muchos economistas tienden a olvidarlo en la actualidad, desde hace tiempo se reconocía la naturaleza política de la inflación. Joan Robinson recordó recientemente que ya en 1939 Kalecki había examinado el problema de la formación de los precios y su relación con el empleo, llegando a la conclusión de que, “si el capitalismo puede ajustarse al pleno empleo, se habrá registrado una reforma fundamental”. “El análisis de Kalecki refuerza la concepción de Keynes —comenta la señora Robinson—, cuando señala que la *inflación es esencialmente un problema político* y destacó la relación entre la formación de precios y la proporción de los salarios en el producto de la industria” (Robinson, 1977; Kalecki, 1939, 1943).

b] *La inflación en países “ricos” y “pobres”*

Al analizar estos problemas, parece en verdad sorprendente observar las grandes diferencias en las tasas de inflación y sus variaciones entre los distintos países. En los países “ricos” sus niveles son generalmente “bajos” (inferiores a 10%) y muestran bastante estabilidad, con cambios relativamente moderados, aun tomando en cuenta los sobresaltos de los últimos años. Las fluctuaciones o elevaciones bruscas de la tasa de inflación que en estos países se consideran catastróficas o niveles que para ellos serían socialmente sostenibles, constituyen la situación normal en los países “pobres”. Si bien en todos los países el aumento en la tasa de inflación causa preocupaciones semejantes y los esfuerzos para someterla a control movilizan a todos los grupos sociales y particularmente a los gobiernos, los niveles y ritmo de cambio de la tasa de inflación que se consideran deseables o aceptables en uno y otro tipo de países y que se proponen como metas sociales son enteramente diferentes.

El examen de las cifras relativas a la experiencia inflacionaria en distintos países confirma estas consideraciones. Las series estadísticas sobre la evolución de los precios durante los últimos veinticinco años, elaboradas por el Fondo Monetario Internacional, muestran con claridad tales diferencias regionales. En los países *industriales* (según la clasificación del FMI) los precios crecieron a un ritmo promedio de sólo 3.9% anual durante el periodo

1952-1976, a pesar de las elevaciones derivadas de los aumentos en los precios de ciertos productos básicos que se registraron de 1973 a 1975 (hecho que se analiza enseguida). Los demás “países del Hemisferio Occidental” (excluyendo a Venezuela y a Cuba) experimentaron, en contraste, un incremento en los precios de 27% anual durante el periodo 1958-1976. De otro lado, mientras las cifras sobre la evolución de los precios en los países del primer grupo muestran bastante homogeneidad, entre las que corresponden al segundo grupo se observan agudas diferencias: desde la relativa estabilidad de algunos países del Caribe hasta los ritmos galopantes del Cono Sur en América Latina (véanse el cuadro 10.1 y la gráfica 10.1).

La revisión de estas variadas experiencias hace evidente la naturaleza política del proceso. Por ejemplo: el súbito aumento en los ritmos de cambio de los precios en los países industriales hacia mediados de los años setenta refleja claramente los exitosos esfuerzos de las grandes compañías productoras de petróleo para imponer una nueva estructura de precios en el mercado de energéticos.⁵ Otro factor que influyó en la aceleración del ritmo de incremento de los precios en esos años y mantiene su vigencia hasta hoy es la creciente competencia entre Estados Unidos de América, por un lado y Japón y Alemania Federal, por otro, en los mercados internacionales y en los santuarios del poder a escala mundial. Así resultaron anulados, en buena medida, los grandes esfuerzos nacionales de los años cincuenta y sesenta para contener las presiones inflacionarias. Tales esfuerzos habían logrado éxitos importantes cuando en el mundo prevalece cierto equilibrio entre grupos sociales antagónicos y entre países, al haberse puesto en marcha un programa común de recuperación y de expansión económica, con la ayuda interesada de Estados Unidos. En lugar de esos acuerdos de acción concertada, pasaron al primer plano los desacuerdos entre los diversos grupos de las sociedades nacionales, algunos de los cuales acentuaron su cuestionamiento del *statu quo*, así como los cambios bruscos en las reglas de juego internacional en materia de colaboración y ayuda mutua.

En los países “pobres”, a los que se suele llamar en la actualidad países del tercer mundo (o del cuarto y el quinto), nunca prevaleció una auténtica estabilidad de precios. En México, incluso, uno de los países con más

⁵ No hay que olvidar, al respecto, que la iniciativa que desató la “crisis del petróleo” de 1973 provino de las “Siete Hermanas” —las grandes empresas transnacionales de la industria petrolera— y no de los países productores de petróleo, aunque éstos, como es obvio, han recibido beneficios con la reestructuración mundial de la industria de energéticos impulsada por las grandes compañías. Los ingresos de estas empresas aumentaron de manera sustancial en 1973, el año del gran salto adelante: 53.3% en conjunto, 306.1% la Gulf Oil, 1 073.3% la Commonwealth Oil Refining. Véanse Tanzer (1975) y Blair (1975).

alto grado de estabilidad dentro de este grupo, el crecimiento del índice de precios al consumidor fue de 6.8% anual durante este cuarto de siglo.

Recordemos, sin embargo, que los promedios engañan. Los cambios responden a hechos concretos del mundo real. Aunque se sigue argumentando que esos cambios reflejan los que se registran en la cantidad de dinero en circulación o se deben a los cuellos de botella de la estructura productiva, no parecen capaces de explicar las agudas diferencias regionales que se observan en las estadísticas; se manifiestan de muchas otras maneras y tienden a ensancharse a pesar de la aplicación cada vez más general de las prescripciones terapéuticas de las ortodoxias monetaristas y estructuralistas. La persistencia misma del fenómeno exige llevar más lejos el análisis, para lograr una comprensión cabal del problema y de sus soluciones. Las experiencias de estos últimos años no permiten ya atribuir esas diferencias a las dificultades y limitaciones de los países "pobres" para aplicar el recetario tradicional de medidas de política, como se sugiere en algunos planteamientos convencionales. Aunque en algunos de estos países se ha observado un manejo torpe, ineficiente o sesgado de los instrumentos ortodoxos de control de la inflación, muchos de ellos han sido capaces de emplearlos con eficiencia, pero los resultados que han obtenido han sido muy distintos a los que esos mismos instrumentos parecen conseguir en los países "ricos". Esas experiencias recientes, incluso, han llevado a poner en duda en los propios países "ricos" la vigencia de aquellos planteamientos convencionales o de sus instrumentos de política. Se postula ahora la necesidad de "administrar la demanda" y "reconciliar las demandas contrapuestas", como adiciones fundamentales a las tradicionales políticas de control monetario y fiscal y de un manejo más adecuado del problema del empleo. Se comienza también a examinar la naturaleza de los mercados y se descubre —¡hasta ahora!— que no son los agricultores los causantes del alza en los precios de los alimentos, sino las empresas transnacionales que acaparan los productos para su beneficio y comercialización (Moore y Collins, 1977). Se identifican así controles monopólicos sobre los mercados y acuerdos tácitos entre empresas para repartirse el mercado o manipular los precios. Aun los teóricos del *establishment* se están viendo obligados a preguntarse si los diversos empleos de los instrumentos tradicionales y sus efectos aparentes en cuanto al control de la inflación se encuentran realmente asociados entre sí por una relación de causa a efecto, o se trata más bien de resultados simultáneos de otros fenómenos que las explicaciones convencionales no toman suficientemente en cuenta.⁶

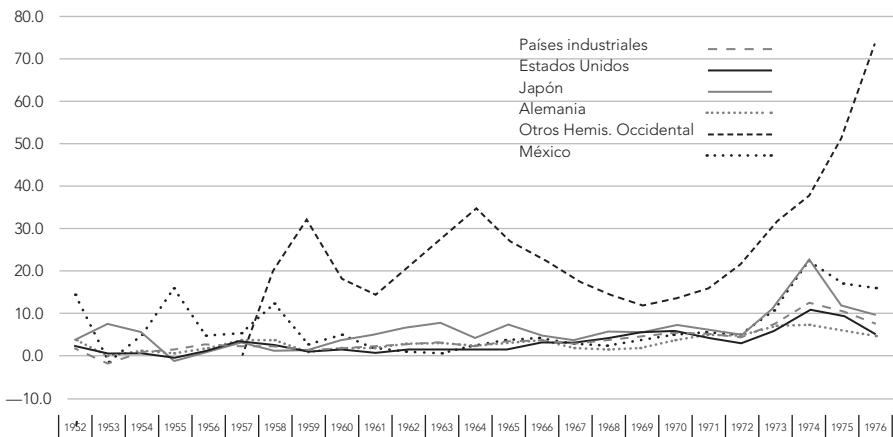
⁶ La revista *Perspectivas económicas*, núm. 21, 1978, distribuida por la Embajada de Estados Unidos, presentó un buen ejemplo de los planteamientos "revisionistas" de la teoría

CUADRO 4.1. PRECIOS AL CONSUMIDOR (VARIACIÓN PORCENTUAL)

	1952	1953	1954	1955	1956	1957	1958	1959	1960	1961	1962	1963	1964	1965	1966	1967	1968	1969	1970	1971	1972	1973	1974	1975	1976
Países industriales	3.6	0.5	0.9	0.5	2.0	2.9	3.5	1.2	1.9	1.8	2.5	2.6	2.3	2.8	3.3	2.9	3.9	4.8	5.6	5.1	4.5	7.5	12.6	10.7	7.7
Estados Unidos	2.2	0.7	0.4	-0.3	1.4	3.4	2.7	1.0	1.6	1.0	1.2	1.3	1.3	1.6	3.0	2.8	4.2	5.4	5.9	4.3	3.3	6.2	11.0	9.2	5.7
Japón	4.1	7.6	5.5	-1.3	0.8	3.1	1.1	1.3	3.7	5.2	6.8	8.0	4.2	7.3	4.9	4.1	5.6	5.6	7.3	6.3	4.8	11.7	22.7	12.2	9.7
Alemania	2.0	-1.8	0.3	1.6	2.5	2.1	2.1	1.0	1.5	2.3	2.9	3.0	2.3	3.2	3.6	1.7	1.6	1.9	3.4	5.2	5.5	7.0	7.0	5.9	4.6
Otros Hemis. Occidental	-	-	-	-	-	-	20.2	32.3	18.1	14.9	21.5	28.2	34.9	27.5	23.1	18.2	14.5	12.4	13.5	16.0	21.6	30.9	38.0	52.0	74.6
México	14.4	-1.7	4.9	16.0	4.5	5.4	12.5	2.6	4.9	1.8	1.2	0.6	2.3	3.6	4.2	3.0	2.3	3.8	5.1	5.7	5.1	11.2	22.4	17.0	16.0

FUENTE: *Internacional Financial Statistics*, Suplemento, mayo de 1977, FMI, Washington, D.C.

GRÁFICA 4.1. PRECIOS AL CONSUMIDOR (VARIACIÓN A 12 MESES)



FUENTE: *Internacional Financial Statistics*, Suplemento, mayo de 1977, FMI, Washington, D.C.

convencional en una serie de artículos sobre “El acertijo de la inflación”. Los artículos están firmados por eminentes “economistas políticos” como Paul McCracken, Alice Rivlin y G. William Miller. Véase, para una concepción distinta del funcionamiento de la economía norteamericana y una revisión crítica de las teorías tradicionales para resolver los problemas de aquella sociedad, Union for Radical Political Economics (1977). El libro ya citado de Gamble y Walton presenta también una revisión crítica de los empleos de la teoría tradicional o de la marxista e incluye una interpretación propia, muy interesante, sobre la experiencia inglesa y sobre las líneas en que se requiere avanzar para elaborar una nueva concepción intelectual y política de la teoría.

c] El fondo de la cuestión

Aquellas diferencias entre países respecto a las tasas de inflación y sus ritmos de cambio no parecen tan sorprendentes cuando se incluye en el análisis la cuestión del reparto del producto social y de los mecanismos que lo determinan en cada sociedad. Las diferencias en tasas de inflación y ritmos de cambio entre los distintos países son sin duda impresionantes, pero aún más lo son las diferencias en la relación entre salarios y ganancias, o sea, en las porciones del producto social que corresponden al trabajo o al capital, las diferencias en el grado de estabilidad de ese esquema de reparto y las diferencias en cuanto a los mecanismos sociales que lo determinan.

En los países “ricos”, la contienda social parece institucionalizada: en ellos existen acuerdos tácitos o explícitos entre los diversos grupos sociales, que permiten reducir al mínimo los enfrentamientos directos que alteren de manera brusca el esquema del reparto, lo que otorga a éste un mayor grado de estabilidad. Durante los años cincuenta se amplió la conciencia de la necesidad de un proceso ordenado de negociación entre los distintos actores —empresarios, sindicatos, gobierno— para determinar el reparto del producto social y se integraron diversos órganos —consejos de precios y salarios, juntas de política salarial, etc.— que adquirieron gran importancia en la definición de la política económica (*e.g.*, Fellner, 1958). Los esfuerzos de coordinación internacional no resultaron muy eficaces y en el plano nacional tampoco tuvieron gran éxito, porque cada grupo trató de usarlos para limitar los avances del otro, aunque estas iniciativas se moderaron a medida que amenazaban la paz social (*e.g.*, Nordhaus, *et al.*, 1974). Lo más interesante de todas estas experiencias es la relativa estabilidad que ha demostrado la distribución del ingreso personal durante largos períodos en la mayor parte de estas sociedades (Pen, 1971); las fluctuaciones resultantes de las guerras y otros fenómenos sociales que alteraban las pautas básicas de reparto fueron transitorios, lo que refleja la existencia de un profundo acuerdo social sobre el proceso de cambio, que se mantiene a través de las instituciones y los mecanismos de negociación social, a pesar de los esfuerzos para modificar los términos de ese acuerdo básico derivados de la omnipresente lucha de clases.

Tal estabilidad no existe en los países “pobres”, donde no se han logrado esos acuerdos institucionales. Sin cauce orgánico apropiado, la lucha por el reparto del producto social que en ellos se libra tiende a adoptar la forma de enfrentamientos directos, a diversos niveles de organización: al desbocarse, pueden poner en peligro la forma de organización social prevaleciente, para impedir esto se establecen formas de

control autoritario, que no suprimen ni encauzan institucionalmente esos enfrentamientos (por lo que no logran contener la inflación), pero eliminan sus manifestaciones más peligrosas y determinan, por la fuerza, el sentido de sus resultados en favor de los grupos que han sido capaces de establecer tal control.

La falta de acuerdos institucionales en los países “pobres” puede explicarse, entre otros factores, por la dificultad política de establecerlos en el contexto de profundas desigualdades en el reparto del producto social que los caracteriza (CEPAL, 1971), las cuales se derivan, a su vez, de la incapacidad orgánica de los grupos menos favorecidos para conquistar una posición relativa mejor en el esquema del reparto. Además de que se carece por lo general de las organizaciones sociales y políticas que permitieron concretar los acuerdos institucionales y dar cauce orgánico a las presiones y demandas de los distintos grupos, estabilizando su relación, el proceso mismo de institucionalización y estabilización tiende a implicar la consagración de las desigualdades y la brusca reducción de las expectativas de que se corrigen con rapidez, lo cual resulta políticamente inaceptable y sólo puede plantearse con base en procedimientos autoritarios. Cuando se trata de concertar un “acuerdo para el cambio”, surge una fuerte oposición política y económica de los grupos privilegiados que se verían afectados por él y a menudo logran boicotear, por lo que algunos gobiernos optan por promoverlo “de trasmano”, mediante políticas reformistas bien conocidas; cuando éstas logran profundizar suficientemente en las estructuras sociales, suscitan respuestas populares que rebasan el marco de referencia de los reformadores, quienes se ven obligados a reprimirlas.

De esta manera, parece posible concebir las diferencias entre los distintos países en cuanto a los niveles y ritmos de cambios de las tasas de inflación, como un reflejo del grado en que los diversos grupos sociales manifiestan su aceptación *general* de las condiciones en que se realiza el reparto del ingreso nacional y de los mecanismos institucionales y orgánicos a través de los cuales puede encauzarse la contienda social, en el afán de modificar el esquema de reparto prevaleciente. En este enfoque, no se descarta del análisis de la inflación la cuestión de la expansión monetaria: simplemente se le ubica en un contexto más amplio. Es posible concebir teóricamente y localizar en la historia situaciones en que se observa un alza brusca o continuada de precios, sin que aumente la cantidad total de dinero en circulación; esto puede ocurrir por la caída absoluta del consumo real —total o de algunas mercancías— de ciertos grupos sociales.⁷

⁷ Tal parece ser el caso en Chile después del golpe militar de 1973. Su política monetaria restrictiva fue acompañada por una fuerte reducción en el gasto público real, oca-

En las condiciones actuales del mundo, sin embargo, el aumento de la cantidad de dinero en circulación tiende a ser un fenómeno concomitante a la inflación: en la expansión monetaria se materializan los aumentos de precios. Ambos fenómenos son característicos del proceso inflacionario y expresan la manera en que la contienda social desborda el ámbito de las unidades productivas —donde se ventila la lucha cotidiana por el reparto del producto social— y se traslada a la órbita más global de los mercados. Los aumentos de la cantidad de dinero en circulación podrían propiciar ese movimiento, pero no son su causa.⁸

Si en la sociedad existen acuerdos institucionales y mecanismos orgánicos para encauzar la contienda social, el paso de ésta del nivel de las unidades productivas (donde pueden presentarse posiciones irreconciliables) al de la sociedad global, permite evitar los más agudos enfrentamientos directos de los diversos grupos sociales y propiciar una modificación progresiva, relativamente estable, del esquema de reparto del producto social.⁹ Esta situación se expresaría en tasas de inflación relativamente “bajas” y cambios moderados en las mismas. Si se carece de aquellos acuerdos y mecanismos, en cambio, el traslado de la contienda social al ámbito de la sociedad global puede agudizar y tornar caóticos los enfrentamientos directos entre los diversos grupos sociales, pues el cauce orgánico que les impone la unidad productiva (en cuya existencia misma coinciden por lo general los intereses de todos) no habría sustituido por otros cauces sociales globales que permitieran ventilar las diferencias de intereses en condiciones apropiadas. Éstas son las circunstancias que se expresan como una inflación “desbocada”, en que todos los grupos sociales y agentes económicos tratan de sostener o mejorar su posición relativa sin orden ni concierto, desconcertados, fuera de todo cauce orgánico. Semejante situación sólo puede resolverse, en general, a

sionando una aguda disminución en los niveles de consumo. Sin embargo, la inflación siguió, aunque a ritmos inferiores a los experimentados durante el gobierno de la Unidad Popular, cuando la lucha de clases no fue constreñida por la represión militar. Para un análisis temprano del proceso, véase Chossudovsky (1975)

⁸ “Una inflación sostenida sólo puede presentarse cuando la oferta monetaria se amplía con mayor rapidez que el producto; la cuestión que siempre surge es por qué y cómo la oferta monetaria se amplía de ese modo”, Gamble y Walton (1977: 247-248).

⁹ Tal era el caso en Estados Unidos en los años sesenta, cuando se observó una mejora sustancial en la posición de la clase obrera, producto de la militancia de grupos minoritarios y de las presiones generadas por la guerra. Los reveses sufridos por los mismos con la “Nueva Política Económica” de Nixon y Ford a raíz del fin de la guerra también es revelador. La incapacidad de controlar la oposición a esta política tanto a nivel nacional cuanto internacional provocó fuertes presiones inflacionarias que todavía en 1978 son motivo de preocupación política (véase, Barkin, 1975).

través de modalidades de control autoritario, que se ocupan de restablecer por la fuerza los esquemas previos de reparto del producto social o de modificarlo en forma más o menos radical, de acuerdo con los intereses de los grupos sociales que representen quienes ejercen ese control.¹⁰

d] Naturaleza política de los procesos inflacionarios

Conviene tomar en cuenta, en este contexto, que el efecto real de la expansión monetaria que habitualmente acompaña a los procesos inflacionarios, depende de los usos y destinos que se den a las cantidades de dinero en circulación. En la práctica, pueden complementar, sustituir en cierta medida, reforzar o incluso contradecir los acuerdos institucionales y mecanismos orgánicos que encauzan la contienda social. En la medida en que influyan en la conservación o modificación del esquema de reparto del producto social en una forma y con una intensidad y ritmo que correspondan al estado real de la contienda social, o sea, a las posiciones y capacidades relativas de las fuerzas sociales presentes en el proceso, contribuirán a evitar o someter a control social sus enfrentamientos directos. Cuando siguen pautas diferentes a las de las condiciones reales de la contienda social, probablemente acentúan esos enfrentamientos y estimularán su desarrollo a otros niveles. En el primer caso, se registrará el hecho —altamente paradójico y desconcertante para la reflexión convencional— de que un aumento en la cantidad de dinero en circulación estaría constituyendo un mecanismo de gran eficacia para reducir las presiones inflacionarias, sujetándolas a niveles manejables. En el segundo caso, la expansión monetaria reflejaba la incapacidad de hacer frente a los fenómenos en curso y se materializaron en ella tendencias profundas de la sociedad a la ruptura de sus cauces institucionales de concertación social, en el contexto de una inflación desbocada.

En consecuencia *las raíces de la inflación se localizan en la contienda social*. La idea de mantenerla bajo control (dentro de límites y ritmos de cambio “aceptables”) refleja la necesidad y la decisión de una sociedad determinada de resolver las contradicciones entre los grupos que la integran, en

¹⁰ En los países ricos, los esfuerzos para mantener el pleno empleo “significaron desechar uno más de los reguladores automáticos del capitalismo” (Gamble y Walton, 1977: 252). Marx observó al respecto: “No bien ... se dan circunstancias adversas que impiden la creación del ejército industrial de reserva, menoscabando la dependencia absoluta de la clase obrera respecto a la clase capitalista, el capital ... se declara en rebeldía contra la ‘sagrada’ ley de la oferta y la demanda y procura encauzarla con la ayuda de medios correctivos” (Marx, 1975, tomo I, vol. 3, p. 797).

cuanto a las condiciones en que se efectúa el reparto del producto social, a través de cauces orgánicos y acuerdos institucionales. Tal necesidad y decisión expresa, a su vez, la de asegurar que los enfrentamientos entre los grupos no pongan en peligro la organización social prevaleciente, en su estructura orgánica o en sus modalidades de funcionamiento. La inflación en sí misma o los mecanismos para someterla a “control” (a niveles “aceptables”) no determinan la intensidad de la contienda social o el sentido de sus resultados concretos: pueden conservar el esquema de reparto del producto social prevaleciente o modificarlo, según las fuerzas que impulsan o dirigen el proceso. Sin embargo, cuando éste rebasa los niveles “aceptables” (específicos de cada sociedad) puede operar como factor de desorganización social y llevar la contienda social a formas más agudas y caóticas de expresión.

De esta manera, las políticas y medidas para controlar o regular la inflación pueden ser de naturaleza conservadora o reaccionaria, al proponerse el mantenimiento del *statu quo*, respaldar un esquema de distribución del producto nacional socialmente injusto y fortalecer instituciones políticas que protegen los intereses de grupos privilegiados y propician la concentración del ingreso. Pero esas mismas políticas y medidas pueden operar como agentes de cambio de gran penetración y eficacia, promoviendo modificaciones radicales del sistema de reparto del producto social y estimulando el desarrollo de sistemas de negociación y concertación social que fortalezcan la capacidad política y económica de los grupos sociales más débiles. No hay aquí instrumentos “neutros” o medidas políticamente indiferentes. De ahí el interés, tanto para los gobiernos como para cada uno de los grupos que participan en la contienda social y son profundamente afectados por los fenómenos inflacionarios, de lograr una comprensión profunda de su naturaleza y características y de las formas de hacerles frente. La reacción espontánea del “hombre de la calle ante los aspectos más evidentes o aparentemente más dañinos de la inflación, aunada a la reacción miope y dogmática del técnico o del político atrapados en una reflexión convencional que sólo ve la superficie de los fenómenos y los acontecimientos del día, impulsa a menudo políticas y medidas que provocan efectos contrarios a los que se buscan. Las clásicas disposiciones para reducir la cantidad de dinero en circulación, por ejemplo, a menudo logran contener el crecimiento y el desarrollo pero no la inflación, y tienden a exacerbar los ánimos de la gente, llevando la contienda social a formas desarticuladas y violentas. El control artificial de los precios —que se exige por lo general a todos los gobiernos— como la restricción descuidada del gasto público de índole social, pueden tener los mismos efectos. El éxito de un grupo

social de que se atienda alguna de sus demandas específicas en relación con la inflación puede volverse en poco tiempo en su contra y acentuar las presiones inflacionarias generales. Medidas del gobierno que en un primer momento parecen aconsejables, pueden cortarle el camino poco después para que tome otras indispensables.

Al identificar las raíces de la inflación en la contienda social y señalar que los procesos inflacionarios manifiestan el desbordamiento de los cauces institucionales de negociación y concertación social, resulta evidente que la política aconsejable ante tales procesos consiste en fortalecer esos cauces y los mecanismos de acuerdo social global. Es preciso, insistimos, ir todavía más lejos para definir la orientación que ha de adoptar esa política. Aquel desbordamiento se produce, por lo general, ante la insuficiencia de esos cauces institucionales, cuando han dejado de corresponder a las condiciones concretas en que se desenvuelve la contienda social y no reflejan ya adecuadamente las posiciones y capacidades relativas de los diversos grupos sociales. El intento de regresar a ellos, a su condición previa, puede ser un remedio peor que la enfermedad. De lo que se trata, por lo contrario, es de transformarlos en la medida necesaria para que sean de nuevo capaces de encauzar la contienda social en sus nuevas fases de desarrollo. Comprender los procesos inflacionarios significa, en última instancia, tomar conciencia de los cambios que hacen falta en los arreglos institucionales globales de la sociedad, para ventilar sus contradicciones y resolver sus problemas de desarrollo económico y social. Actuar seriamente en la regulación de los procesos inflacionarios, sujetarlos a control, significa tomar medidas que involucran a todos los grupos sociales, con su cabal participación, para efectuar tantos cambios como sea necesario y viable en esos arreglos institucionales, con un claro sentido histórico de las inercias del pasado, las exigencias concretas de la coyuntura y las perspectivas de la evolución posterior, económica, social y política.

4.2. LOS RECENTES PROCESOS INFLACIONARIOS EN MÉXICO: ENSAYO DE INTERPRETACIÓN¹¹

En México, el reparto del ingreso nacional entre los trabajadores, de una parte, y los que controlan la riqueza, de la otra, ha tendido en las últimas

¹¹ Este apartado contiene únicamente una aplicación esquemática, sin pretensiones de análisis cuantitativo, del planteamiento anterior. Pensamos que los hechos a que se refiere son simplemente conocidos y han sido objeto de innumerables estudios de coyuntura.

décadas a ser cada vez más desigual. Desde que se inició el proceso moderno de industrialización comenzó a registrarse un progresivo deterioro en el sistema de distribución del ingreso personal, que refleja la constante ampliación de la brecha entre la porción del producto social que quedaba en manos de los trabajadores y la porción que recibían los capitalistas (Banco de México, 1973).

Durante muchos años, tales hechos y tendencias sólo parecían preocesar a los estudiosos, pues un sector estratégico de los grupos sociales cuya posición en el conjunto estaba sufriendo un deterioro relativo, lograron a pesar de ello cierta mejoría *absoluta* en su nivel de vida, gracias al rápido crecimiento de la producción agropecuaria y de la economía en conjunto. El hecho de que aquella mejoría no fuese tan rápida como este crecimiento (lo que reflejaba la acentuación de la desigualdad en el reparto) no era fácil de percibir. No parecía importar que la participación relativa de los trabajadores organizados en el ingreso nacional disminuyera, si al mismo tiempo se estaban elevando en términos absolutos sus ingresos reales, su nivel de vida. Desde el punto de vista de quienes obtenían los principales beneficios del proceso, se configuraba así una situación aparentemente ideal: podría presentarse una acelerada concentración del ingreso, sin que se registraran manifestaciones de descontento social excesivas, que pudiesen escapar a los mecanismos de control social y pusieran en peligro el mecanismo entero.

Relativa paz interna y bajas tasas de inflación, características de este periodo, son dos formas de referirse a un mismo proceso: una evolución en que parece perder vigor la contienda social y en que los enfrentamientos directos pueden mantenerse, en general, bajo control institucional fluido, porque las partes *principales* del convenio social reciban beneficios claros, aunque el reparto de los mismos sea cada vez más desigual. Dicho de otra forma: aunque haya desigualdad en el reparto *global* de todo el país o de cada unidad productiva, aunque unos reciben mucho más que otros por su participación en el proceso productivo, mientras una porción estratégica de los menos favorecidos logren una mejoría absoluta, así sea modesta, y mantienen la expectativa de seguirla teniendo, tienden a aceptar la situación y no es fácil que expresen por ello un descontento agudo o una gran inquietud de cambio. Parece abierto un futuro promisorio para todos.

Para la comprensión de los acontecimientos posteriores, es necesario analizar un poco más de cerca este proceso. Conviene, en primer térmi-

tura por lo que no se hace referencia a fenómenos y tendencias bien conocidos sin incluir las estadísticas respectivas.

no, precisar el significado de la relativa estabilidad de precios a lo largo del periodo a que nos referimos, que no es homogéneo al respecto. De 1935 a 1957 la expansión de la economía se presentó con aumentos significativos en los precios. En los cuarenta el ritmo de crecimiento del índice de precios al mayoreo con respecto al decenio anterior se triplicó: la tasa acumulativa anual fue de 11.2% en los cincuenta. Estos fenómenos alcistas se mantuvieron hasta los sesenta, cuando se adoptó una nueva estrategia de desarrollo, la del “Desarrollo Estabilizador”, que por un decenio permitió mantener la tasa de aumento de los precios al mayoreo al nivel de 2.6%. Al llegar a su término esta experiencia, se renovaron las tendencias alcistas, que llegaron a su nivel más alto en los últimos meses de 1976, cuando se registró una tasa superior a 4% mensual.

En las interpretaciones de estos fenómenos, se acostumbra atribuir la evolución de la primera parte del periodo, hasta 1957, a los factores provenientes del exterior: aumentos de la demanda de los productos del país y ampliación de sus reservas internacionales durante la segunda guerra mundial, registrados en forma paralela a las limitaciones para abastecerse de bienes de capital y productos intermedios; fenómenos inversos a los indicados en los primeros años de la posguerra; influencia del conflicto coreano y de la depresión económica norteamericana que se produjo a su término; etc. La misma línea de pensamiento se emplea para explicar las dos devaluaciones registradas durante el periodo.

En los términos planteados en este ensayo, resulta evidente que en los periodos de aguda tensión internacional, en medio de guerras “calientes” o “frías”, cuando el tumulto, si no el caos, define el funcionamiento de los intercambios mundiales, un país como México, plenamente insertado en ese mundo trastornado, resiente severamente el impacto de la evolución económica de los países avanzados, en particular de la que se registra en Estados Unidos. Debe tomarse en cuenta, asimismo, que el proceso de expansión económica productiva y ampliación simultánea de la oferta de bienes salariales y de la de artículos de consumo suntuario, características del periodo, resultó posible, en México, por la disponibilidad de grandes recursos productivos ociosos, que se encontraban en esa condición por una variedad de circunstancias. También debe tenerse presente la plena disposición de los inversionistas extranjeros a ampliar su participación en la economía y así financiar las importaciones mexicanas, cuyo rápido crecimiento era un factor clave en el proceso. Es útil, igualmente, recordar la existencia de algunos intereses estratégicos fundamentales, en el ámbito de las relaciones internacionales, cuyo mejor ejemplo puede consistir, acaso, en la ayuda “desinteresada” que nuestro país recibió desde 1943 en materia de asistencia técnica y financiera para

la investigación agrícola y la aplicación de sus resultados. Esta “ayuda” permitió, pocos días después, crear los enclaves de alta productividad en que se asentará una agricultura comercial moderna claramente complementaria de la norteamericana, en una estrategia de desarrollo agropecuario que con el tiempo sería conocida como la “Revolución Verde” (Hewitt, 1978).

En el contexto de nuestro análisis, sin embargo, parece posible poner el acento en otros aspectos del proceso, que pocas veces se incluyen en los estudios sobre la inflación. Cabe recordar también, por ejemplo, que la contienda social se intensificó continuamente a lo largo de la década de 1930, hasta llegar en los últimos años de la misma a niveles de severo conflicto social. Sin embargo, al coincidir estos fenómenos con el inicio de las hostilidades de la segunda guerra, el proceso se revirtió bruscamente. Fueron sometidas a control, primero, y luego a progresiva desintegración, numerosas organizaciones de trabajadores que habían tomado parte activa en la contienda social del decenio anterior. Perdieron fuerza, en particular, las organizaciones campesinas: al abandonar paulatinamente el primer plano del escenario político, que habían logrado retener desde el estallido de la Revolución, fueron incapaces de resistir la estrategia de desarrollo agropecuario que anuló buena parte de sus avances anteriores, ejercía una intensa presión sobre sus recursos y acelera su migración a las unidades o a las áreas de agricultura comercial. Se retrajeron también las luchas obreras en el plano político y concentraron su esfuerzo en algunos grandes sindicatos y confederaciones, de larga tradición de lucha, para la defensa de su situación económica, gravemente amenazada por la inflación y el desempleo.

Como es evidente, semejante evolución apenas podía disimular las tensiones sociales, cuyos brotes de violencia resultaban esporádicos pero se manifestaban constantemente por otras vías. La inflación, que operaba como un mecanismo eficaz de control o reducción del ingreso real de los trabajadores, no llegaba a desbocarse, entre otras cosas por el alto ritmo de expansión productiva, derivado de una acumulación acelerada y por el avance modesto pero constante en los ingresos reales de una porción estratégica de los trabajadores, la que integraban quienes habían podido mantener y consolidar sus organizaciones sindicales.

Años más tarde, Antonio Ortiz Mena, el secretario de Hacienda que organizó la nueva estrategia al agotarse las pautas de la evolución de estos años, se refirió a ella en los siguientes términos: “No debe olvidarse que durante el ciclo inflación-devaluación (como ha llegado a conocerse ese periodo) las utilidades aumentaron excesivamente” (1970). No resulta claro, en el contexto, una expresión como la de utilidades “excesivas”:

para el inversionista, las únicas ganancias “adecuadas” son las ganancias máximas que puede obtener. El comentario, en todo caso, caracteriza el sentido fundamental de lo ocurrido en el periodo. Sin embargo, el costo social de semejante proceso de acumulación no podía mantenerse indefinidamente:¹² alimentaba de manera constante las intensificaciones de la contienda social, que adquiere otras características a medida que logra abastecerse de nuevo la organización de los trabajadores. El proceso hizo explosión en 1958 —el año de más alta tasa de inflación en todo el periodo— cuando esa contienda social desbordó los cauces institucionales de negociación y concertación social y llegó a constituir una amenaza para la existencia misma del Estado. La respuesta social a estos acontecimientos, ampliamente conocida, puede contribuir a explicar el decenio de estabilidad consecuente: después de una severa represión, bajo estricto control militar, miles de trabajadores fueron despedidos, en pocos meses quedaron desarticuladas buena parte de sus organizaciones, su fuerza orgánica fue eliminada o quedó bajo control.

En ese contexto social y político, el decenio de la estabilidad organizó nuevos avances del proceso de acumulación, ahora con estabilidad de precios. Para proteger la tasa de ganancias, se apeló a diversos expedientes, asociados en buena medida a una más amplia intervención del Estado, que captó crecientes recursos a través del sistema fiscal (procedentes fundamentalmente de los trabajadores) y del endeudamiento. Tales recursos se aplicarán prioritariamente al estímulo de la inversión privada (obras de infraestructura que generasen las consabidas “economías externas”, concesiones, franquicias, etc.) y a la prestación de servicios sociales, con la función que ya hemos analizado. El incremento más rápido del salario real (en los sectores más adelantados) que el de la producción por hombre en este lapso, advirtió en su momento el licenciado Ortiz Mena, “no debe considerarse como un incremento de costos en detrimento de las perspectivas de utilidad, ya que éstas se han venido ajustando a las nuevas circunstancias del desarrollo estabilizador”. Por otra parte, agrega, “los empresarios se beneficiaron de una reducción en el precio relativo de los insumos debido a la flexibilidad de la oferta agrícola y de las importaciones de materias primas y productos intermedios” (1970). Todo ello permite entender la evolución del proceso de acumulación a lo largo del periodo. El coeficiente de inversión pasó de 12.7% en 1950 a 16.5% en 1958 y a 20.9% en 1967.

¹² Dice Antonio Ortiz Mena: “el costo social del ciclo recurrente de inflación-devaluación era inaceptable para los sectores de ingresos fijos: no se lograba compensar el deterioro ocurrido en la proporción de los sueldos y salarios en el ingreso nacional” (1970).

La contienda social del decenio de la estabilidad se había vuelto sorda, profunda. No podía expresarse de manera orgánica y clara. En la segunda mitad de los sesenta, sin embargo, no era posible ya desconocerla, a pesar de su contraste evidente con las formas que adoptó en el decenio anterior, las que condujeron a la lucha *organizada* de 1958. La crisis que empieza a mostrar síntomas preocupantes a partir de 1965, la crisis de una economía y de una estrategia de desarrollo, avanza en compañía de acciones desarticuladas, más o menos caóticas, a menudo planteadas como iniciativas sin destino. Son los años de las guerrillas, de las revueltas campesinas, de los grupos urbanos clandestinos. Son los años que conducen a 1968.

Las condiciones que sustentaban el proceso se habían ido modificando, en parte por su propia inercia. Para mantener el dinamismo requerido en la expansión de la producción básica, especialmente en el sector agropecuario, era indispensable aumentar acelerada y constantemente las erogaciones gubernamentales, tanto de gastos corrientes (subsidios a insumos y precios, asistencia técnica, etc.) como de inversión (infraestructura, crédito, etc.). Los gastos gubernamentales en servicios sociales (salud, educación, etc.), renglones básicos del mejoramiento en el nivel de vida de los grupos menos favorecidos en el proceso de desarrollo, también tenían que presentar un sostenido aumento, aunque sus niveles absolutos quedaban entre los más bajos del mundo: su existencia, de hecho, había sido el único factor compensatorio del deterioro registrado en el valor del ingreso monetario de amplios grupos, y a pesar de sus limitaciones mantenía la expectativa de una mejoría real en sus condiciones de vida, aunque el proceso económico real no pareciese ofrecérsela. Los inversionistas nacionales y extranjeros, por su parte, demandaban crecientes apoyos oficiales para mantener su expansión productiva y exigían el aumento de las franquicias fiscales, las facilidades financieras, las inversiones estatales de apoyo, los subsidios en diversos renglones de los costos de producción (transportes, insumos, etc.) y otras muchas concesiones. Estos apoyos habían sido de importancia estratégica en las etapas iniciales de la industrialización y acaso llegó a pensarse que con el tiempo dejarían de ser necesarios: en la práctica, sin embargo, se incorporaron de tal manera a las estructuras básicas de producción que su necesidad aumentó en vez de disminuir.

El Estado, en estas condiciones, quedaba sometido a una presión constante, de todos los grupos y sectores, para que aumentase sus gastos, inversiones y concesiones, a un ritmo más acelerado que el del incremento de sus recursos que podía derivarse del crecimiento de la economía. Las "soluciones de compromiso" agotaron pronto sus posibilidades. Perdi-

ron dinamismo, simultáneamente, las erogaciones gubernamentales en la producción básica, en particular en el sector agropecuario, y sus gastos sociales, mientras mantenía sus apoyos a los inversionistas nacionales y extranjeros. Sin estos ingredientes, perdió también impulso la expansión productiva que había permitido la modesta pero constante mejoría en el nivel de vida de buena parte de los trabajadores (especialmente de los organizados en sindicatos), a pesar del reparto crecientemente desigual del producto social. Los inversionistas nacionales consideraron insuficiente la tasa de ganancia y cedieron terreno ante las empresas transnacionales, que ya consideraban satisfactoria y acudieron en gran número.

Estos fenómenos, que se observan ya con toda claridad a partir de 1965, llevarían a prever una intensificación de la contienda social (y por ende un aumento en las tasas de inflación). Esto es justamente lo que ocurrió y las consecuencias de las desigualdades en el reparto se hicieron más evidentes cuando empezaron a mostrarse los efectos de la retracción relativa de la acción pública en la producción básica (especialmente con la disminución del énfasis en las erogaciones gubernamentales en el sector agropecuario) y la acelerada concentración de la producción industrial en los bienes destinados a grupos acomodados (orientación que podría permitir a los inversionistas compensar la disminución relativa de los apoyos oficiales). Medidas de emergencia, como la importación masiva de productos básicos (trigo y maíz, sobre todo), agravaron los problemas de origen, en vez de resolverlos (por la absorción improductiva de recursos públicos que representaban), y resultaban claramente insuficientes ante los problemas que se estaban agudizando: creciente desempleo, migraciones masivas a las zonas urbanas, estancamiento o progresivo deterioro en los niveles reales de vida de grandes grupos de trabajadores. La frustración colectiva que estos fenómenos provocan comenzó a expresarse en la intensificación de movimientos populares, dentro de un amplio espectro: desde explosiones circunstanciales más o menos caóticas de descontento social, hasta la proliferación o consolidación de organizaciones de trabajadores y campesinos, efervescencia estudiantil e incluso insurgencia armada de grupos localizados, como ya se ha mencionado.

En los últimos años de la década pasada y los primeros de ésta tales fenómenos provocaron cambios en las condiciones del reparto del producto social, sostenidos a nivel global por una expansión desmesurada del gasto público y al nivel de las unidades productivas por la presión social de los grupos menos favorecidos. Estas condiciones, aunadas a la relativa disminución de ciertos apoyos oficiales y al establecimiento de diversas restricciones a la operación privada (orientadas fundamentalmente a impedir un mayor deterioro en el nivel de vida de grandes

grupos de trabajadores), indujeron un retraimiento de la inversión privada nacional. Como consecuencia, el Estado se vio en la necesidad de emprender una nueva escalada de sus gastos, en un esfuerzo por mantener el nivel de la actividad económica global (e incluso su expansión), con base en inversiones públicas. Otros fenómenos contribuyen a reforzar esta evolución, impulsando con mayor fuerza en la misma dirección. Las presiones devaluatorias, por ejemplo, exigieron primero, por un largo periodo, erogaciones y medidas gubernamentales que compensaran la fuga de capitales privados y su inversión en activos líquidos (con acentuada dolarización de la economía), y luego, con la devaluación, dosis adicionales de la misma medicina al acentuarse bruscamente ese comportamiento de los capitales privados.

Los análisis convencionales de las más altas tasas de inflación que en estas condiciones se presentaron las atribuyen a la expansión monetaria que caracterizó el proceso, pues buena parte de los recursos públicos que se pusieron en juego provinieron de aumentos netos en la cantidad de dinero en circulación. Si este análisis se ubica en el marco más amplio del proceso descrito, el fenómeno adquiere otra dimensión.

Es obvio que las mercancías disponibles en los mercados pudieron circular a más altos precios gracias a que existían cantidades adicionales de dinero en circulación; es ésta una expresión tautológica del fenómeno. El proceso descrito, en otras palabras, sólo podía presentarse con expansión monetaria, o sea, con un aumento de la cantidad de dinero en circulación. A primera vista, este aumento tiene la “iniciativa” en el proceso: al circular más dinero sin haberse elevado la cantidad total de mercancías disponibles sus precios se elevan. Admitido esto, el mecanismo correctivo parece también evidente: si disminuye la cantidad de dinero en circulación, sin que se reduzca la cantidad total de mercancías disponibles, los precios disminuirán.

En la óptica adoptada en este documento, es pertinente preguntarse si esa expansión monetaria, destinada principalmente a sustentar el aumento en el gasto público, fue el *origen* de la inflación o constituye en realidad una *respuesta* ante los procesos en curso, y preguntarse, asimismo, por la *necesidad* de esa respuesta, considerando otras opciones (en caso de que las haya habido).

El financiamiento deficitario del sector público comienza a aumentar de manera acelerada cuando los enfrentamientos directos entre los grupos sociales —registrados a diversos niveles de organización y formas de negociación— no han llevado a una solución aceptable para las partes. Puesto que el aumento de la presión de cada una de ellas sobre la otra puede desbordar los cauces orgánicos dentro de los que se mueven, sus

presiones se canalizan hacia el gobierno. Éste se ve obligado a atender, simultáneamente, crecientes y vigorosas demandas populares que exigen un mayor gasto público (para generar empleos, prestar servicios sociales, subsidiar artículos de consumo popular, realizar importaciones masivas de estos mismos artículos, etc.) y exigencias acrecentadas de los capitalistas y otros grupos sociales (para que realice inversiones de apoyo, otorgue concesiones de diversa índole y otros estímulos, etc.) y para que no obtenga de estos grupos los recursos adicionales que requiere, a través de la reforma fiscal o por otros procedimientos.

La magnitud de las presiones ejercidas es bastante evidente, tanto las que expresan los inversionistas a través de comportamientos económicos (retracción de la inversión, fuga de capitales, etc.) o políticos, como las que se manifiestan en forma de descontento social más o menos difuso o presión sistemática de grupos populares organizados. De hecho, las presiones de los distintos grupos sociales representan un esfuerzo de modificar rápidamente el esquema de reparto del producto social. El modelo que había permitido a los trabajadores obtener mejoras reales, aunque sufriera deterioro su posición relativa en el esquema de distribución del ingreso, se había agotado años atrás, por lo que para mantener su nivel de vida o mejorarlo era indispensable modificar su participación en el ingreso nacional. El propio agotamiento del modelo, de otro lado, representaba para los inversionistas una reducción de los apoyos oficiales a que estaban acostumbrados (que era una forma de obtener una parte del producto social, que se les destina a través del gobierno), por lo que para mantener o incrementar sus ganancias necesitaban ampliar su participación en el producto a costa de los trabajadores o del fisco, sea a través de sus negociaciones contractuales, de aumentos en los precios o de cualquier otro mecanismo.

En estas condiciones, la intervención del Estado en el enfrentamiento directo entre los grupos sociales buscaba la conciliación. Aunque intentó lograrla a través de múltiples modalidades e instancias (en particular las asociadas a mecanismos tripartitas), pronto llegaba a los límites de su acción institucional y las presiones parecen conducirlo al empleo de expedientes autoritarios: *represión social*, si optaba por contener las demandas populares, camino que tenía un costo social y político elevado y creciente como se demostró en 1968, y que fácilmente podría convertirse en un callejón sin salida, un camino sin regreso o una simple posposición del conflicto, que reaparecía incrementado; o bien, “*represión del sector privado*”, si optaba por contener las demandas de los inversionistas nacionales y extranjeros, camino que parecía cerrado ante las condiciones internacionales concretas y los problemas internos, entre otras cosas porque así

se desestimulan aún más la actividad económica privada, ya retraída, y podrían agravarse adicionalmente los problemas que se intentaba resolver.¹³

Ante la incapacidad de imponer por la vía institucional una solución orgánica y a fin de evitar en la medida de lo posible esas vías “represivas”, todo hace pensar que el Estado optó por la vía indirecta del gasto público, que reducía a nivel manejable las tensiones sociales al dar atención a las demandas más urgentes o de mayor peso de los distintos grupos. La inflación que acompañó esta evolución del proceso aparece así como un producto no deseado del esfuerzo gubernamental, cuando *respondió* con gasto público deficitariamente financiado a las presiones sociales que amenazaba desbordar todo cauce orgánico. La evolución “natural” de tales presiones habría conducido, previsiblemente, a formas de confrontación que pondrían en peligro la organización social global; una de estas formas hubiera podido ser una inflación desbocada, que intensificara todavía más la confrontación directa entre las fuerzas sociales y provocaría un cambio en el esquema de reparto del producto social en sentido contrario al requerido, dada la correlación real existente entre esas fuerzas (insuficiente y débil capacidad orgánica de los trabajadores, en contraste con la amplia capacidad de acción directa de los inversionistas).

En estas condiciones, es posible suponer que la adopción de mecanismos de financiamiento deficitario del gasto público y su empleo sistemático, en diversos grados de eficiencia, como forma de reducir las tensiones sociales, permitió mantener el proceso bajo control social y evitar esas formas de confrontación, que además de los riesgos que impondría a la vida social implican un retroceso en el esquema de reparto. Conforme a este enfoque, en vez de ser *causa* de inflación, la acción pública aparece aquí como un factor que la modera, que evita su desbocamiento incontrolado y otras formas de desorden social, sin duda más dañinas que el desorden administrativo que acompañó el proceso.

Cuando cambia el ámbito del enfrentamiento, sin embargo, se modifican también las condiciones en que se realiza. Los diversos grupos sociales no se encuentran igualmente preparados para defender sus intereses en el contexto global y los acuerdos institucionales dan mayor libertad de acción a algunos de ellos, para obtener ventajas concretas y modificar, mediante la acción directa, su participación en el esquema de reparto del producto social. Al ejercer sus propios intereses en la contienda social a escala internacional, grupos financieros poderosos, sobre

¹³ Cabe observar que la “represión retórica” del sector privado que se empleó en estos años trajo algunas de las consecuencias cuya previsión inhibía la “represión real”, sin lograr sus objetivos.

todo los de origen extranjero, se encontraron en una posición favorable para forzar una devaluación de la moneda nacional. Esta devaluación facilitó y aumentó la transferencia de recursos monetarios y *reales* hacia los países centrales. A la vez, agudizó las tendencias hacia una reestructuración del aparato productivo nacional más acorde con las pautas de la nueva división internacional del trabajo, fomentando la especialización productiva en renglones de interés en los mercados internacionales y reduciendo la capacidad del país para abastecer sus propias necesidades.

La devaluación fue, en parte, consecuencia de la incapacidad de controlar la contienda social en los años anteriores. Los crecientes déficits en la balanza comercial fueron en buena medida el resultado de la política de gasto público y redistribución del régimen de 1970-1976, que trató de apaciguar a las masas campesinas y obreras con obras públicas de infraestructura, importaciones masivas de alimentos y servicios sociales, que no generaron trabajos productivos o ingresos permanentes. Esta política requiere de mayor endeudamiento externo y determinó que el país quedará más expuesto al impacto de la huida de capital. Tanto los que controlan la riqueza dentro del país como los banqueros internacionales no veían con beneplácito este “despilfarro” de recursos y actuaron para modificar tal orientación de la política, hasta lograr, finalmente, la devaluación del peso, con la cual se eliminaron, de un sólo golpe, las ganancias que los grupos mayoritarios habían conquistado en muchos años de lucha social.

La defensa obcecada de la paridad del peso por parte de las autoridades agudizó aún más las presiones especulativas, que llevaron a adoptar una política precipitada, anunciada sin los preparativos adecuados y bajo condiciones que estimularon la incertidumbre general. La devaluación acentuó la contienda social dentro del país de diversas maneras y lo dejó aún más expuesto a la férrea explotación ejercida a través de los mercados internacionales. La necesidad de acudir al Fondo Monetario Internacional, que se vuelve perentoria, tuvo un precio concreto: el compromiso de sujetarse a sus reglas de juego.¹⁴ La “política de austeridad” que

¹⁴ Es evidente que un país como México no puede, por sí mismo, modificar las reglas del juego del Fondo Monetario Internacional o hacer caso omiso de ellas, aunque en unión de otros países puede luchar para modificarlas. Pero es falaz el argumento que considera irremediables estos fenómenos y pregoná, consecuentemente, su pasiva y resignada aceptación: una especie de castigo de los dioses por un mal comportamiento económico. Para que el país se libere de los compromisos inaceptables que el Fondo impone no necesita destruirlo: basta que deje de necesitar su apoyo directo o indirecto, eventual o permanente: basta que organice sus fuerzas de desarrollo y encauce institucional, orgánica y democráticamente su contienda social. ello es muy difícil, sin duda, pero no imposible.

el país se vio obligado a aceptar, frenó el gasto público y la actividad económica durante más de un año. Al abaratir los recursos nacionales en moneda internacional, se aceleró el ritmo de inversión extranjera en el país, pues se volvió ventajosa la compra de empresas nacionales de mayor rentabilidad y la expansión de empresas nacionales, dadas las mejores perspectivas de exportación de una mano de obra cada vez más barata. Junto con las mejores perspectivas del gran capital internacional, los grupos pudientes nacionales también se aprovecharon de la situación, concentrando aún más el control sobre el capital, reforzando su asociación con empresas transnacionales y expandiendo sus operaciones y sus bases de generación de ganancias. La nueva coyuntura era favorable para cambiar una vez más el esquema del reparto, canalizando una mayor parte del ingreso nacional hacia el capital nacional e internacional.

En una situación como ésta, y sobre todo en el corto plazo, resulta inevitable que los trabajadores sufren diversas formas de deterioro en sus niveles de vida. Aunque las presiones para ejercer un control más efectivo de los precios se acrecientan, en la práctica pueden ser más efectivos los mecanismos institucionales para moderar las demandas de los trabajadores que los niveles de los precios. La retracción de la actividad económica privada nacional que forma parte del proceso no puede ahora ser compensada por una acción pública, sobre la cual se ejercen también presiones generales para evitar su aumento excesivo, lo cual contribuye adicionalmente a reducir los ingresos reales de los trabajadores (sobre todo a través del aumento del desempleo y la disminución en el ritmo de crecimiento de los servicios sociales y los subsidios al consumo), y se retroalimenta así, adicionalmente, la retracción en la actividad económica privada.

A pesar de esa retracción, la posibilidad de aumentar los precios y realizar operaciones más o menos especulativas permite a los inversionistas aumentar sus ganancias y ampliar su participación en el producto social, a costa de una parte de los trabajadores. Si bien aquel aumento en las ganancias, que equivale a mayor rentabilidad de las inversiones, llevaría a esperar una ampliación de éstas que daría lugar a una nueva expansión productiva que permitiera establecer un nuevo equilibrio entre los grupos económicos (a restablecer el anterior), la reducción en el ingreso real de los trabajadores y de su parte en el ingreso nacional que el proceso trae consigo impone limitaciones severas a tal expansión, por el lado de la demanda: aunque se incrementan sistemáticamente los activos líquidos de los inversionistas, por la acumulación de sus ganancias, no se traducen en proporción suficiente en inversiones reales, por la incertidumbre de las expectativas de la expansión, dados los niveles deprimidos de la

demandas, para cuyo incremento no inflacionario no se dispone de instrumentos de política apropiados, de aplicación viable.¹⁵ Este panorama podría emplearse como descripción general de la situación actual.

4.3. ¿QUÉ HACER?

El control de la inflación no es una cuestión de fe, ni de ideología. Necesitan lograrlo los gobiernos conservadores tanto como los liberales, los de izquierda como los de derecha. Nuestro catecismo secular sostiene, en lo fundamental, que lo que funcionó el siglo pasado funcionará en la actualidad. Redúzcase la intervención gubernamental, equilibrese el presupuesto, contrólese la oferta monetaria, manténgase la fe y todo marchará bien. En la actualidad, empero, existen empresas poderosas y sindicatos fuertes que influyen significativamente en los precios. Los gobiernos y sus presupuestos tienen un impacto decisivo sobre la vida económica. Como todo esto seguirá existiendo, es preciso adaptar nuestras políticas a esa realidad. Debe recordarse que nuestros catequistas dominicales también advertían que la fe no es sustituto de la acción y probablemente sabían que el camino del infierno está empedrado de buenas intenciones.

JOHN KENNETH GALBRAITH

La inflación se presenta como uno de los males más aterradores de la sociedad moderna. Causa la más seria preocupación en todos los sectores. Para los consumidores, sobre todo para los más humildes, representa una amenaza grave a la existencia misma. Para los productores, y en general para los que controlan la riqueza, constituye la posibilidad de que lo que han acumulado se consuma en el fuego inflacionario y que sus ganancias resulten ilusorias, lo cual les crea una gran incertidumbre y no es raro que suscite respuestas de pánico. Para los gobiernos, la inflación representa a menudo un síntoma de que ya no les resulta viable regular la

¹⁵ Es importante tomar en cuenta que la aceleración de corto plazo del ritmo de crecimiento de la producción que puede presentarse (y probablemente caracterizará la evolución del segundo semestre de 1978) es en buena medida ilusoria, a menos que se reviertan radicalmente las tendencias en la distribución. No sólo se harán presentes de inmediato los conocidos cuellos de botella de nuestra estructura productiva, sino que se agotará pronto la capacidad de rápida expansión basada en la atención de las demandas de los grupos acomodados y de los mercados internacionales.

contienda social y una presión desmesurada para que controlen un proceso que en realidad parece haber escapado de sus manos.

La respuesta habitual ante esta amenaza, que adquiere para muchos un perfil apocalíptico, comprende esfuerzos de control de la inflación que se definen como medidas para restringir la cantidad de dinero en circulación, romper cuellos de botella en la estructura productiva, mejorar los sistemas de distribución y comercialización de las mercancías e implantar o reforzar controles sobre los precios. La experiencia indica que estos esfuerzos resultan insuficientes e incluso contraproducentes, aunque en un primer momento parezcan conseguir resultados espectaculares. Como ya se dijo, a menudo detienen el crecimiento de la economía, no la inflación; funcionan como paliativos de algunos síntomas muy evidentes de la enfermedad inflacionaria, pero propician que ésta se desarrolle hasta estadios cada vez más agudos (mortales, en un sentido muy preciso); causan con frecuencia mayores males que los que pretenden remediar.

Tiende a pensarse que en los procesos inflacionarios se agudizan las desigualdades en la distribución del ingreso y que son los grupos más débiles quienes más resienten sus consecuencias. Esto resulta cierto, en general: en condiciones de estabilidad, los arreglos institucionales globales protegen, aunque sea de manera limitada, los intereses de los grupos menos capacitados para intervenir directamente en los procesos de negociación y concertación social; durante la inflación, estos arreglos tienden a ser sustituidos por la acción directa de los agentes económicos, en cuya interacción cuenta decisivamente su fuerza relativa. Por ello los grupos más poderosos pueden obtener claros beneficios durante un proceso inflacionario y los más débiles resienten el mayor perjuicio. Sin embargo, no siempre se pone énfasis suficiente en los peligros que encierra este avance de ciertos grupos. Por una parte, quienes obtuvieron ganancias importantes en el proceso se encuentran pronto con dificultades para invertirlas lucrativamente, por lo que tienden a adoptar comportamientos profundamente irracionales desde el punto de vista de la sociedad en su conjunto. De otro lado, las modificaciones en el esquema de reparto del producto social que así se producen no son fruto de la negociación social, sino de una acción que se realiza al margen de ella y no puede ser aceptada por los sectores sociales afectados. Por ello, la única forma de consolidar ese beneficio parcial para ciertos grupos se encuentra en formas autoritarias de control de los procesos sociales. Éstas, independientemente de sus consecuencias, de orden general en la vida social, sustraen esas ganancias a la mayor parte de quienes las obtuvieron y las concentran en los grupos más poderosos, que se integran al esquema autoritario.

Para atacar a fondo los problemas de la inflación se necesita en realidad sentar nuevas bases de negociación y concertación social entre los grupos económicos que compiten entre sí, cuando tratan de definir en su favor el esquema de reparto del producto social. *Se requiere, en rigor, un nuevo pacto social, que incluya nuevos proyectos de producción, participación y distribución social.* Al plantearlo, es indispensable tener presentes los factores y condiciones que debilitan o rompen los cauces anteriores, para precisar el sentido de los nuevos arreglos institucionales y la orientación general de los esfuerzos a realizar.

Durante varios decenios, pudo mantenerse en nuestro país una evolución del desarrollo que tendía a acentuar las desigualdades en el esquema de reparto del producto social, en virtud de que a pesar de ellas ciertos grupos de trabajadores lograban una efectiva mejoría en sus ingresos reales. Los arreglos institucionales de ese periodo cumplían, con razonable eficacia, la función de garantizar el proceso de acumulación, asegurar la mejoría real de los grupos de trabajadores organizados y mantener apropiadas expectativas de desarrollo en los demás. La estabilidad de precios característica de periodo puede verse, al margen de otras consideraciones, como prueba de éxito de los arreglos institucionales prevalecientes en ese lapso.

Las debilidades inherentes a este régimen de desarrollo llevaron a su agotamiento progresivo. Su éxito no puede medirse en términos de los resultados que se esperaban del modelo, en cuanto al desarrollo global, que no se consiguieron. La expansión lograda, a todas luces impresionante, tuvo costos económicos y sociales muy altos y sus consecuencias adversas se hicieron evidentes cuando tal expansión no pudo ya mantenerse y pasaron al centro de la atención general, una tras otro, profundos problemas de las estructuras de la producción y la distribución que se había ido desarrollando durante el periodo y se derivan directamente del modelo adoptado.

Fue preciso, en tales condiciones, intentar una nueva estrategia de desarrollo. En ella, el Estado asumió la responsabilidad principal de la expansión, con base en un financiamiento deficitario del gasto público, basado en proporción importante en el endeudamiento externo que cumplía diversas funciones: restablecer corrientes de inversión hacia los renglones estratégicos relativamente descuidados, mantener el flujo de recursos oficiales hacia los inversionistas privados y atender las demandas de los grupos que habían sufrido mayor deterioro. La estrategia suponía ciertas modificaciones en el esquema de reparto del producto social, principalmente a costa de las clases media y de algunos grupos privados. Todo ello exige nuevos arreglos institucionales, cuya aparente eficacia inicial

comenzó pronto a debilitarse ante dos factores concretos: por una parte, el esquema hubiese requerido una expansión casi geométrica del gasto público, por un periodo relativamente prolongado, lo que en la práctica resultaba imposible; en segundo lugar, y éste fue en realidad el factor decisivo, un cambio en el esquema de reparto de beneficio de grandes grupos de trabajadores se traduce de inmediato en una mayor demanda de productos básicos, especialmente alimentos, y el país resultó incapaz de incrementar la oferta disponible de los mismos en la medida necesaria, por el efecto combinado del deterioro existente en las estructuras básicas de la producción agropecuaria y sus limitaciones para importar.

Los nuevos arreglos institucionales, que apenas comenzaban a consolidarse, empezaron así a ser desbordados, tanto por los grupos que controlan la riqueza como por amplios sectores de la población. Aque-lllos tenían obvias razones para oponerse a tales arreglos y comenzaron a resentir el cambio en el esquema de reparto, por lo que emprendieron acciones económicas directas en la forma de aumentos de precios. Diversos grupos sociales, por su parte, algunos de ellos marginados por décadas del proceso de expansión, sintieron llegada la oportunidad de ejercer acciones directas en su beneficio. La creciente incapacidad del gobierno de atender simultáneamente todas las presiones que se ejercen sobre él, aunada a la creciente capacidad de los trabajadores del campo y de la ciudad de luchar para retener y proseguir sus avances en el esquema de reparto, acentuaron las tensiones en el curso de 1976, hasta llegar a la devaluación, cuyos factores determinantes se habían acumulado de tiempo atrás, pero tomaron brusco impulso con las reacciones privadas ante la evolución de los acontecimientos. Este fenómeno, por sí mismo y por las condiciones en que ocurrió, operó como detonante de un desbordamiento general de los arreglos institucionales, que ya se habían estado debilitando, el cual dio lugar a una grave eclosión inflacionaria. Con ella quedaron rotas las instancias de estabilización económica y social y sólo se mantuvieron, aunque en medio de graves dificultades, las instancias políticas definitorias de la organización social global, a su más alto nivel.

Las condiciones en que se desarrolló la profunda crisis económica que siguió a estos acontecimientos —sin duda una de las más graves del siglo— operaron en el corto plazo como factor de ajuste. La rápida recuperación de las ganancias y la mejoría en el “clima” de la inversión privada fue posible, entre otros factores, por la medida en que el nivel de precios resultó superior al de los salarios. Al agudizarse el desempleo y sufrir deterioro el ingreso real de grandes grupos sociales, la demanda efectiva de productos básicos alcanzó (a la baja) los niveles de oferta, con lo que se desaceleró la tendencia al alza en los precios de estos productos.

Los arreglos institucionales prevalecientes parecen haber permitido enfrentar la fase más aguda de la crisis y desatar un proceso de recuperación. Sin embargo, no se han ajustado y consolidado para ponerlos en correspondencia con una nueva estrategia de desarrollo y un nuevo esquema de reparto del producto social. El intento de reforzarlos que buscará su estructuración en los términos de los modelos anteriores llevaría rápidamente a su desbordamiento. Al plantearlos conforme a un nuevo enfoque, la cuestión estratégica está centrada en la producción básica. Cualquier avance en los ingresos reales de los trabajadores se traduce, como ya se ha indicado, en mayores demandas de productos básicos, sobre todo de alimentos; como no es posible aumentar en el corto plazo las importaciones, que se encuentran ya en el tope de la logística de internación, es preciso depender de los incrementos en la producción interna. En cuanto a ésta, no será posible confiar en la capacidad de expansión de la agricultura comercial para la producción tradicional y diversos factores, políticos sobre todo, restringen la capacidad pública de acción en el sector de economía campesina. En cuanto a la producción industrial de artículos básicos, tampoco es posible confiar en que los mecanismos de mercado puedan conducir a la utilización cabal de la capacidad ociosa disponible y a la reorientación de la actividad que se requiere, en virtud de la debilidad real de la demanda de productos básicos, de la capacidad demostrada por las empresas para consolidar sus ganancias sin emplear plenamente su capacidad y de otros factores.

Ha resurgido, en este contexto, el debate sobre la orientación de nuestra política productiva; que pone en entredicho el objetivo de la autosuficiencia con base en la tesis de las ventajas comparativas. Según esta línea, que ha logrado apoyo de diversos grupos en los últimos años, el país puede y debe confiar en su capacidad de exportación de petróleo y productos agropecuarios “altamente reditables” (carnes, frutales, hortalizas) para financiar cómodamente sus importaciones de alimentos. Frente a esta corriente, puede parecer obsoleta la reflexión de Keynes en torno a esta cuestión: “Simpatizo más, en consecuencia, con aquellos que reducirían al mínimo los entrelazamientos económicos entre las naciones, en vez de elevarlos al máximo. Las ideas, el conocimiento, la ciencia, la hospitalidad, los viajes, deben ser internacionales, por su propia naturaleza. Pero dejemos que los bienes se produzcan en casa, siempre que sea posible y razonable hacerlo; por encima de todo, dejemos que el financiamiento sea primordialmente nacional” (1933).

Obsoleta quizá... pero fundamental. La división internacional del trabajo que promueven las grandes empresas transnacionales no corresponde en modo alguno a los intereses nacionales y afecta muy ad-

versamente las condiciones de vida de la población. Para México, con su enorme potencial productivo de bienes básicos —alimentarios y de vestuario, vivienda y servicios sociales— la meta de la autosuficiencia no constituye una decisión coyuntural, sino una necesidad apremiante e inaplazable, frente a las advertencias y amenazas de las grandes potencias productoras de alimentos, que habrán de usarlos como arma política, y ante las necesidades internas de generar empleo e ingresos para la gran mayoría.

De nuevo, en consecuencia, parece quedar en manos del Estado la posibilidad de conducir el proceso de desarrollo, a través de arreglos institucionales que den mayor participación a todos los sectores y limiten drásticamente las acciones directas de agentes económicos aislados. En este caso, no se trata de que asuma directamente actividades de producción y distribución, como en el pasado inmediato, aunque también tendrá que actuar en este sentido; se trata, sobre todo, de que desempeñe su función *rectora* con eficacia y vigor, estimulando a todos los grupos sociales para que operen en términos de los objetivos trazados y mostrando su clara decisión de ejercer plenamente su autoridad con estos propósitos, sustituyendo, cuando sea necesario, a quienes no puedan o no quieran actuar como hace falta.

La estrategia de desarrollo que es preciso poner en marcha, supone cambios profundos en el esquema de reparto del producto social que afectarán los ingresos de quienes controlan la riqueza, aunque el acento se ponga en la expansión. Para que esto resulte viable, sin provocar reacciones de los inversionistas que pongan en peligro todo el proceso y dando cauce institucional a las presiones sociales de los grupos que han estado sufriendo deterioro en sus ingresos reales, parece indispensable que los nuevos arreglos institucionales comprendan, con la mayor participación de todos los grupos, una significativa *movilización del trabajo*: sólo ella, con una vigorosa acción estatal de concertación, puede dar empleo a los recursos disponibles y propiciar nuevas formas de acumulación, que permitan aumentar a la velocidad requerida la producción básica, específicamente en los renglones prioritarios de la producción agropecuaria, las agroindustrias y algunos rubros indispensables de la producción industrial.

Al plantear esta opción, conviene precisar el carácter de los arreglos institucionales a que se hace referencia, para distinguirlos de los que sugieren otras corrientes. Es sabido, por ejemplo, que la desconfianza de los keynesianos respecto a la competencia, en tiempos inflacionarios, les lleva a sugerir arreglos institucionales que modifiquen el comportamiento de las empresas y de los sindicatos, mejorando los procedimientos de

negociación colectiva. Mientras los keynesianos propugnan así una mayor intervención gubernamental para combatir la inflación, los antikeynesianos y en particular los monetaristas sugieren que se reduzca, lo cual también requiere cambios en los arreglos institucionales. Ambas corrientes consideran que “la clave para resolver la inflación la constituyen el gobierno y el sector estatal”: sin embargo, no disponen hasta ahora de “una teoría respecto al sector estatal y al creciente papel desempeñado por el gobierno en la economía; para ambas escuelas se trata simplemente de una intrusión más de lo ‘político’ en lo ‘económico’. Estos economistas se ven impedidos de realizar ese análisis, porque lo único fundamental que ven en lo ‘económico’ es el mercado, y todo lo que les preocupa es examinar los aspectos ‘económicos’ del comportamiento. A ello se debe que en general no están muy conscientes de las dificultades políticas que presentan sus remedios para la inflación” (Gamble y Watson, 1977: 117).

En este texto se atribuye también un papel de gran importancia al Estado: como se acaba de indicar, es indispensable que asuma cabalmente su función rectora del proceso de desarrollo, para encauzar los esfuerzos que permitirán enfrentar los procesos inflacionarios. Pero la modificación de los arreglos institucionales que aquí se plantea no tiene el mismo sentido que los propuestos por el pensamiento convencional y comprende dos aspectos diferentes: el asociado a la intervención del Estado en la economía, por una parte, y el que se refiere a la redistribución del poder político, por la otra.

Desde su origen, el liberalismo económico admitió, en la economía de mercado, la propensión a desarrollarse en el desorden: de ahí que dicha concepción quedase entrañablemente asociada a la del Estado gendarme. El principio que propone asignar los recursos sociales y organizar la producción en los términos de las ciegas fuerzas del mercado, atribuye a una mano *invisible*, a una fuerza *oculta*, la facultad de encauzar la vida social, aun a sabiendas de que no se trata de una fuerza única, previsora y consciente, sino de la suma metafísica de tantas inteligencias como productores y consumidores existan en una sociedad. “El mercado funciona —cuando llega a funcionar— como un ordenador *a posteriori* de la realidad, o sea, corrige y orienta a partir de la experiencia fallida, inevitable en el desorden que es su contexto natural. Para que funcione efectivamente, por ende, debe estar acompañado de una acción policiaca, o sea, de una fuerza que impida que ese desorden alcance grados que pongan en peligro la existencia misma de la sociedad. Desde la época del mercantilismo económico se produjeron tales desórdenes en todas las sociedades que se hizo indispensable introducir correctivos en el sistema.

Se requería que fuesen más eficaces y sutiles que la policía y que hiciesen frente a desórdenes como las crisis económicas, que se dieron tanto al nivel de la empresa como de la comunidad, de la nación o del planeta entero, y ante los cuales la policía parecía enteramente impotente.”

Ante la inflación, ahora, es preciso en aspectos centrales de la vida económica nacional y en particular para la asignación de los principales recursos de la sociedad, sustituir los mecanismos del mercado por un proceso consciente que oriente la actividad económica en función de las necesidades sociales. No se trata de burocratizar la economía, para sustituir con empleados públicos a los particulares sin alterar el sentido del proceso. Se trata de hacer de la planeación una actividad totalizadora, participativa y pública, a través de la cual se geste la posibilidad de que la sociedad se desarrolle como una voluntad consciente y autodeterminada.

Este aumento de la intervención del Estado en la economía para combatir los procesos inflacionarios exige, sin duda, introducir cambios en los arreglos institucionales actuales. Pero son aún de mayor importancia los que se requiere incorporar en cuanto a la redistribución del poder político, en función del cual podrá producirse la modificación sustancial del esquema de reparto del producto social que se requiere. *La participación real de los trabajadores del campo y la ciudad y de sus organizaciones en la definición y orientación de la política económica y en la realización de las actividades de planeación, no sólo es condición de legitimidad del Estado, cuya intervención en la economía ha de ampliarse, sino requisito del éxito en el empeño.* No basta la creación y fortalecimiento de foros que propicien la negociación y la concertación social. No es suficiente dar creciente transparencia a las decisiones del Estado y avanzar tanto como sea posible por el camino de la democracia formal. Es preciso, además, ampliar los esfuerzos de democracia directa en todos los ámbitos de la sociedad. Deben ser, ante todo, ejercicio cotidiano de las organizaciones de trabajadores, muchas de las cuales retienen pautas autoritarias de comportamiento; deben ser, igualmente, formas de expresión de la capacidad concreta de los trabajadores de organizarse para la producción o para el consumo; deben constituir ilustraciones concretas del significado de la solidaridad como norma de las relaciones sociales cuando se sustituye la homogeneización individualista de las sociedades de masas, vinculada a la competencia, por la puesta en ejercicio de la iniciativa creadora del individuo, en función de un interés social que se asume como propio.

Para hacer frente a los procesos inflacionarios, en suma, el camino principal consiste en fortalecer los arreglos institucionales y los cauces orgánicos para la negociación y la concertación social y para el ejercicio de la democracia directa. Se trata de lograr, bajo la función rectora del Estado y con la activa participación de

los trabajadores del campo y de la ciudad y de sus organizaciones, un cambio sustancial en el esquema de reparto prevaleciente, directamente asociado a un aumento en la producción básica, que se apoye en una efectiva y general movilización del trabajo y en una redistribución del poder político. Es obvio que se trata de un camino lleno de dificultades y tensiones, que corresponde a transformaciones profundas de la sociedad; pero incluso el más superficial examen de otras opciones (propuestas por diversos grupos), puede mostrar que implican aún mayores dificultades y desembocarían, de manera casi inevitable, en procesos irracionales y destructivos que pondrían en peligro toda la vida social. Si bien el rumbo que aquí se sugiere no puede proponerse como una panacea ni es solución “final” a los problemas de nuestra sociedad, acaso sea el único asequible para llevar a sus límites teóricos e históricos las condiciones prevalecientes... para rebasarlos, y hacer posible la construcción de una nueva sociedad.

5. VIVIENDO EL PACTO FÁUSTICO: LA RESILIENCIA PERVERSA FRENTE AL CAMBIO CLIMÁTICO^{1, 2}

INTRODUCCIÓN

El cambio climático es una de las amenazas más serias que actualmente enfrenta la sociedad humana y sus posibilidades de seguir en el planeta. Es uno de los fenómenos más evidentes que interactúan para reducir las posibilidades de mantener la vida humana, tal como la conocemos hoy en día. Además, hay algunos otros que también plantean graves problemas para la continuidad de la especie humana en la Tierra: la pérdida de la biodiversidad, cambios en usos y fertilidad del suelo, contaminación y reducción de fuentes de agua dulce, acidificación de los océanos, reducción en concentraciones atmosféricas de ozono, y la degradación de los ciclos globales de nitrógeno y fósforo (Rockstörm *et al.*, 2009).³ Aunque este ensayo se limita a la problemática del cambio climático, es importante no perder de vista la complejidad multidimensional y la envergadura del conjunto de los problemas ambientales que la actividad antropogénica está ocasionando al planeta y a la supervivencia de nuestra especie.

El punto de partida para el presente ensayo es una reflexión con base en la economía política crítica sobre los límites de nuestras posibilidades de enfrentar con éxito los retos planteados por las transformaciones en el “Sistema Tierra” a raíz de las dinámicas generadas por la sociedad humana.⁴ El marco para este trabajo es la estructura de los conflictos

¹ Publicado en *Veredas*, vol. 14 (27), 2013, pp. 7-20.

² El *pacto fáustico* se refiere a un “pacto con el demonio” en la leyenda clásica alemana de Fausto, según la cual una persona ofrecería su alma a Mefistófeles a cambio de favores diabólicos poderosos; según Wikipedia, es un referente cultural muy extendido de la cultura “occidental”. Fue immortalizado en la obra poética del mismo nombre de Goethe en 1808-1832 e inspiró la creación de una obertura de Wagner.

³ Este grupo de 29 científicos asevera que la humanidad ya ha traspasado las fronteras planetarias de tres: cambio climático, pérdida de biodiversidad y cambios en el ciclo global de nitrógeno. Sin embargo, su autor principal insistió en una plática en la serie “TED” en 2009 que todavía hay posibilidades de revertir la pérdida de resiliencia del sistema Tierra, <<http://www.stockholmresilience.org/planetary-boundaries>>.

⁴ Para una visión histórica de la evolución del pensamiento respecto al cambio climático y su relación con la evolución de la sociedad, véase Schoijet (2008).

ambientales, sociales y económicos en el plano global que se reproducen e intensifican en el ámbito nacional, impidiendo la puesta en motion de los cambios requeridos para enfrentar las profundas contradicciones que nos dominan, amenazando la virtual existencia de la vida humana y de otros seres vivos. Aunque son muchas y complejas, estas contradicciones pueden resumirse en dos: 1] el poderío de un “bloque hegemónico” de las grandes potencias económicas y políticas que controlan la dinámica económica y social y siguen insistiendo en el dominio de los combustibles fósiles para que funcione el sistema mundial, una resiliencia perversa,⁵ y 2] la inherente tendencia en el sistema capitalista actual hacia la concentración del poder político y económico a costa del bienestar de la humanidad en su conjunto y del equilibrio planetario que le lleva a destruir las condiciones necesarias para su propia reproducción.⁶

El cambio climático augura grandes trastornos en la naturaleza con implicaciones para toda la humanidad. En la sociedad mexicana en particular, los impactos serán mayores (véase sección final abajo), ya que la administración pública no parece estar preparada o tener la voluntad para ofrecer el liderazgo político requerido o movilizar los recursos necesarios para conducir las transformaciones productivas, sociales y geográficas necesarias para prepararnos para enfrentar los impactos previsibles. A nivel global, el aumento en las temperaturas medias, ocasionado por la creciente concentración de los gases de efecto invernadero (GEI) en la atmósfera, está provocando un derretimiento de los distintos cuerpos de hielo (glaciares), tanto en las alturas de las montañas continentales como en las zonas polares. La elevación de los niveles de los océanos aumentará la vulnerabilidad de muchos estados-islas y de todas las zonas costeras a las variaciones en la dinámica propia que resulta de los diversos fenómenos meteorológicos y a los desequilibrios ecosistémicos (Hallaigate *et al.*, 2013). Por otra parte, se anticipan otras transformaciones del clima que requerirán de importantes cambios en los sistemas de producción agrícola y su reubicación de las zonas tradicionales; estos cambios serán precisos tanto en las zonas de riego como en las de temporal, por los desplazamientos de las lluvias y un realineamiento de la distribución de recursos hídricos en los diversos mantos acuíferos por lo

⁵ Esta formulación fue presentada por Phelan *et al.*, (2013), combinando el análisis gramsciano del “bloque hegemónico” con el concepto de la resiliencia perversa de Gallopin (1997), resultado del dominio del grupo controlador de las energías fósiles en las negociaciones climáticas internacionales y en la formulación de políticas nacionales.

⁶ Conocido como la “segunda contradicción fundamental del capitalismo” (O’Connor, 1998).

mismo, así como en la disponibilidad de agua para la producción de temporal.

La disyuntiva que confronta a la sociedad en su totalidad y a cada uno de nosotros como individuos es si estamos dispuestos a modificar nuestros comportamientos y facilitar la emergencia de estos nuevos patrones de una manera ordenada y solidaria o si los distintos grupos sociales van a resistir estas presiones, provocando conflictos sociales que amenazarián al propio tejido social del país. La gravedad del problema en México ha sido ampliamente documentada en numerosos estudios, tanto por dependencias dentro del gobierno mexicano (*e.g.*, IMTA, 2009; Martínez-Austria, 2007) como de varias agencias internacionales (*e.g.*, Borja y De la Fuente, 2013).

5.1. EL PROBLEMA HEREDADO

El calentamiento global, resultado palpable de la acumulación de los GEI, es producto de la quema de combustibles fósiles y de otros procesos de consumo de recursos naturales y de producción que liberan los acervos de estos gases almacenados en los océanos, los suelos y en el subsuelo. En 2013 se registró una concentración de 400 partes por millón (ppm) de dióxido de carbono en la atmósfera por primera vez en tiempos modernos;⁷ los estudios geológicos muestran que sólo había niveles similares durante el Plioceno, unos tres millones de años antes, cuando las temperaturas terrenales no eran aptas para la vida humana. Este nuevo hito es un claro indicador del fracaso de las piadosas declaraciones de compromisos de la comunidad internacional de emprender acciones para limitar las emisiones de los GEI, con acuerdos para establecer complejos mecanismos firmemente anclados a una fe irrestricta en la capacidad del mercado para guiar las decisiones de los actores. Esta confianza

⁷ En Estados Unidos, la organización social 350 (350.org) construyó una red social para limitar las emisiones y detener las concentraciones atmosféricas por debajo de los 350 ppm. Además de movilizaciones y una marcha nacional, han organizado una campaña para que las universidades vendan los valores que tienen como parte de su patrimonio en empresas que producen las energías con base en recursos fósiles, parecida a la campaña que utilizaron en otra época para levantar una presión contra África del Sur para terminar con el Apartheid. Enfocada en los efectos más visibles del proceso de cambio climático, la movilización social no cuestiona los factores subyacentes del estilo de vida, el paquete de consumo o la profunda y creciente desigualdad reinante en la sociedad como factores causantes del problema (McKibben, 2011).

en el mercado se revela en los análisis de dos programas surgidos en distintas épocas: el comercio en “bonos de Kioto” (1992)⁸ y el programa más reciente, Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación Forestal (REDD), acordado formalmente en la reunión de Río+20 (2012).⁹ Las deficiencias de este enfoque de mercado se han revelado con bastante crudeza, como estos mismos análisis han demostrado, algunos de los cuales señalan la necesidad de modificar los procedimientos para tratar de lograr efectos más positivos.

A pesar del reconocimiento del peligro del calentamiento desde hace mucho tiempo, la comunidad internacional se ha visto obligada a enfrentar varios segmentos del bloque económico-político que se empeñan en negar el problema o postergar la posibilidad para que la comunidad internacional emprenda acciones significativas para frenar sus propios sistemas productivos particulares, para contribuir efectivamente a la reducción de GEI en la atmósfera. Los economistas han participado de manera ejemplar en respaldar este bloque hegemónico, con modelos sofisticados, demostrando que los costos requeridos para actuar efectivamente para frenar la generación de los GEI serían mayores que los costos incurridos para enfrentar los efectos del cambio climático.¹⁰ Aquí no es el lugar de recontar la larga y peleada historia de los esfuerzos para negar la gravedad del problema o la historia de las negociaciones internacionales y las complejas disputas políticas en los países signatarios del Protocolo de Kioto para implementar la legislación requerida para el cumplimiento de sus compromisos.¹¹

Hoy en día hay un creciente reconocimiento de que enfrentamos una grave crisis, con dimensiones casi desconocidas. Los debates científicos en el plano internacional dejan muchas dudas sobre la magnitud de los daños esperados y su distribución geográfica. Sin embargo, hay algunos aciertos al respecto que se pueden dejar plasmados: 1] es claro que el

⁸ Instrumentos financieros emitidos para implementar el Protocolo de Kioto de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático firmado para controlar cuatro GEI (CO_2 , CH_4 , N_2O , O_3). México es una parte de la Convención, sin compromisos fijos por ser considerado país en vías de desarrollo. Para una visión crítica del programa de comercio en carbón, véase la amplia discusión en Lohmann (2006, 2011).

⁹ A pesar de ser un programa relativamente nuevo, REDD ha incitado una amplia literatura crítica de fácil acceso. Véanse, por ejemplo, Boas (2011), Brown (2013) y Barkin y Fuente en capítulo 25 de este libro.

¹⁰ Sin embargo, una fracción importante de la propia profesión ha sido bastante crítica de los métodos y la información utilizada para realizar estos cálculos (Ackerman, 2009; Gay y Estrada, 2010; Estrada *et al.*, 2011).

¹¹ Para un análisis crítico del proceso para elaborar una política nacional en torno al tema en México, véase Estrada *et al.*, (2012).

derretimiento del hielo en la capa polar del Ártico dejará más accesible para su explotación a volúmenes grandes (pero actualmente incalculables) de reservas de combustibles fósiles; 2] habrá profundos cambios meteorológicos que llevarían a redistribuir los patrones de lluvias y un severo aumento en su variabilidad e intensidad; 3] habrá necesidad de hacer cambios en la agricultura, ya que las modificaciones en la disponibilidad de agua obligarán a estrictos ajustes regionales y en la distribución de productos y variedades; 4] se anticipan severas afectaciones en los sistemas costeros por los cambios en el nivel del mar, por mínimos que sean, y que posiblemente podrían obligar al abandono de asentamientos humanos alrededor del mundo.

La gravedad del problema en México está apenas conociéndose. Sin embargo, en el informe gubernamental que pretendió desmenuzar la situación, el prólogo —firmado por Nicolas Stern, quien encabezó el grupo que hizo una evaluación de la situación global (2007)— dice que “los costos de inacción serían tres veces superiores a los costos de mitigación” (involucrando una reducción de la mitad en las emisiones de GEI para el fin del siglo), éstos serían una excelente inversión pública (Semarnat y SHCP, 2009 y 2010). Datos más puntuales demuestran la necesidad de considerar medidas importantes para enfrentar las probables modificaciones en los patrones de lluvia (Quintas y Rosengauss, 2011) y de reestructurar la producción de alimentos básicos en México, tanto en términos de los productos sembrados como su distribución geográfica, para anticipar los cambios previsibles en lluvia como en bienestar de la población y de los propios productores (Turrent *et al.*, 2012).

Frente a la diagnosis preparada por el propio gobierno mexicano y la información disponible sobre los impactos esperados como consecuencia de los cambios climáticos, es llamativa la ausencia de una política concertada para enfrentar el problema. Aunque ninguno de los estudios aborda el problema de la distribución social de los impactos, resulta claro que una vez más, serán los más desprotegidos —los más pobres— quienes tendrán que enfrentarlos, un tema que retomaremos al final de este ensayo.

5.2. LA RESILIENCIA PERVERSA

El problema que enfrentamos hoy es el inmovilismo de la comunidad internacional, creado por los obstáculos políticos generados para implementar un programa efectivo de transformaciones sociales y productivas necesarias, que modificaría la emisión global de GEI y empezaría el pro-

ceso de reducir sus concentraciones en la atmósfera. La intensificación de la crisis ambiental actual es resultado de la capacidad de los grupos económicos dominantes de detener cualquier iniciativa social que modifique los comportamientos necesarios para un cambio. El poder y riqueza de este bloque hegemónico están anclados a un patrón de producción y de organización social fincado en el uso intensivo de energías fósiles y un modelo de consumo sin referencia a sus impactos en sus propias sociedades o en las demás y en el planeta; pero de mayor importancia es la prepotencia con que operan, tomando control de las estructuras políticas para su propio provecho, violando las normas éticas y aun las legales para proseguir con su objetivo primordial: la acumulación de capital.

Los biólogos han identificado con mucha claridad el fenómeno de la resiliencia del sistema planetario (Gunderson y Pritchard, 2002; Hansen, 2009). Vivimos en un complejo sistema socioecológico adaptativo que requiere procesos de resiliencia para mantener su funcionamiento y estabilidad (Berkes y Folke, 1998; Walker y Salt, 2006; Walker *et al.*, 2006). Sin embargo, en tiempos de crisis como el que viene acumulando, este grupo hegemónico ha impuesto su programa de reformas legislativas para actuar a través del mercado y con subsidios oficiales para solventar sus inversiones que no han contribuido a revertir la dinámica de emisión de GEI. Ha demostrado su capacidad de condicionar la conducta de la comunidad internacional y de la mayoría de las administraciones nacionales para evitar propuestas radicales tendientes a restringir la producción de energía con combustibles fósiles o de implementar sistemas productivos más “amistosos” con el medio ambiente y la salud de la sociedad, marginando a los exponentes de propuestas más radicales (*e.g.*, Kovel, 2002; McKibben, 2011; Rifkin, 2011). Esta forma de constreñir las posibilidades para que la sociedad se movilice para enfrentar lo que muchos consideran una gran emergencia planetaria en provecho propio es la esencia de la resiliencia perversa. Con el liderazgo de este grupo, la economía global está funcionando de una manera contraria a lo que exigiría un programa de adaptación impuesto por los límites existentes del sistema planetario, tanto en términos de sus consumos corrientes de recursos como, particularmente, en términos de su dinámica. La efectiva presión de este grupo dominante es notable, ya que sigue imponiendo su agenda e intensificando el alcance de su modelo a pesar de que la existencia de estos límites planetarios ha sido conocida desde tiempo atrás (siglo XIX) y fue demostrado por Nicolás Georgescu-Röegen (1971) y difundido de una manera impactante por el Club de Roma (Meadows *et al.*, 1972).

Más aún, la conciencia de los límites se ha generalizado a través de actividades de la comunidad internacional y del movimiento ecologista

en casi todos los países del mundo. En diversas ocasiones se ha declarado la importancia de tomar medidas contundentes para limitar los efectos nocivos de la actividad antropogénica. Se ha convocado a varios eventos de gran visibilidad y amplia participación internacional para reafirmar la convicción de su importancia. Así se realizó la primera reunión de desarrollo sustentable en Estocolmo sobre el “Ambiente Humano” (1972), que se derivó después en el Informe Brundtland, *Nuestro Futuro Común* (CMMAD, 1987), mismo que definió un camino hacia el desarrollo sustentable; posteriormente, se organizó la cumbre de Río de Janeiro en 1992, que produjo la agenda XXI, seguida por la Segunda Conferencia de Medio Ambiente y Desarrollo de 2012 en la misma ciudad, que fue momento para renovar la Convención de Kioto, mencionada arriba. Acompañando a estas actividades “oficiales”, la sociedad civil ha emprendido su propia agenda intensa de actividades para promover los mismos objetivos.

El hecho de que todavía se debate sobre las mejores estrategias para enfrentar el problema del cambio climático refleja el extraordinario poderío de este bloque hegemónico. Ha logrado paralizar a la sociedad frente a la evidente necesidad de abandonar el modelo energético vigente, no sólo remplazando las fuentes actuales con otras renovables, sino también, y quizás más importante, transformando las estructuras geográficas, económicas y sociales para reducir drásticamente su consumo. La resiliencia perversa, entonces, es reflejo de un entendimiento de la gravedad de la amenaza a su dominio actual y, quizás, de su reconocimiento de la misma estructura y dinámica del capitalismo.¹²

5.3. EL DILEMA MEXICANO

Algunos afirman que estamos al borde del desastre. La reconformación de la política nacional, la penetración de la violencia social y económica, la progresiva privatización de los espacios públicos y la marginación de importantes grupos sociales son manifestaciones crudas de la apropiación del país por nuestro propio “bloque hegemónico”. Al analizar el cambio climático tenemos una oportunidad para examinar con detenimiento los efectos de esta reconformación en la vida diaria de los mexicanos. Nos limitaremos a tres aspectos de esta problemática: la relación de los cambios previsibles en la distribución de las lluvias con la población, el im-

¹² Este análisis es refrendado de manera bien documentada y actualizada por Naomi Klein (2014).

pacto de cambios en los niveles de los mares y la seguridad o soberanía alimentaria.

- 1] Habrá que emprender una planeación cuidadosa para enfrentar la demanda generada por el crecimiento demográfico y los cambios en la distribución de lluvias anticipada en los próximos años. A pesar de las limitaciones en la información detallada de la población a nivel municipal, el análisis de Quintas y Rosengauss (2011) muestra una creciente polarización de la problemática hídrica: si bien la situación actual es dramática para unos 12 millones de personas en el Valle de México (que disponen de menos de 140 litros diarios por individuo) y grave para otros 20 millones (con menos de 250 litros diarios), 80% de la población nacional se caracteriza por habitar en zonas donde la disponibilidad es *extremadamente baja* por la clasificación internacional de referencia. Para 2030, el alcance de los dos grupos más carentes se ampliaría con otros diez municipios, concentrándose en la meseta central del país. Una política apropiada requeriría de mecanismos para cambiar los patrones actuales de migración interna y reubicar parte de la infraestructura productiva para aminorar las presiones sobre los recursos hídricos.
- 2] Hay aproximadamente 25 millones de personas que habitan en zonas costeras cuyas fuentes de agua dependen de acuíferos subterráneos alimentados por fuentes de agua dulce. Con la anticipada elevación del nivel del mar en los próximos años, es previsible que gran parte de estas personas tengan que migrar hacia otras partes del país por falta del vital líquido; estos movimientos podrían desatar enormes conflictos sociales. En contraste, por su atractivo escénico, es previsible que haya movimientos en el otro sentido, hasta estas zonas costeras, por grupos sociales acomodados que, para satisfacer sus necesidades, contarán con plantas desalinizadoras cuyo costo de operación elevará el precio del agua y ocasionará otros impactos ambientales por la necesidad de combustible para su operación; promovidos por grupos inmobiliarios, estos desarrollos contribuirán a profundizar las brechas sociales y económicas que caracterizan el periodo reciente en nuestro país.
- 3] Un número significativo de comunidades campesinas que realizan labores de temporal en el centro y sur-centro del país tendrán que considerar la posibilidad de desplazarse hacia zonas en el centro-sur y sureste del país donde la disponibilidad de agua será más abundante y confiable. Las previsiones sobre las necesidades de alimentos y las presiones en los mercados internacionales claramente indi-

can que habrá crecientes dificultades para conseguir los alimentos básicos de los mexicanos con la calidad y precio necesarios para ser accesibles en las condiciones sociales del país. Por esta razón, y considerando los cambios previsibles mencionados arriba, sería imperante empezar un programa de reconversión productiva de nuestro campo para asegurar una oferta adecuada para atender a la demanda anticipada (Turrent *et al.*, 2012).

5.4. CONCLUSIÓN

Esta mención de tres de los múltiples problemas que se presentarán en los próximos años es sólo un indicador de la envergadura de los problemas venideros. Para enfrentarlos, se requiere de cambios profundos en la política pública, cambios que no son prioridades nacionales para la clase política, cambios que no podrán realizarse si seguimos dependiendo del enfoque dominante, esperando respuestas de la iniciativa privada y de los mercados. Seguir con los modelos actuales que permiten el vaciamiento de la estructura productiva y polarizando la estructura social es someterse al “bloque hegemónico”, nacional e internacional. Éste es el *pacto fáustico* reinante que garantizará que el país no podrá enfrentar los “desastres naturales” que azotarán nuestro territorio y la sociedad en los próximos años.

PARTE II
EL DESARROLLO REGIONAL:
ESPEJO DE UN DESARROLLO DISTORSIONADO

INTRODUCCIÓN

Pidiendo prestado el título de mi libro sobre México, que ofrecía una visión un tanto pesimista de la perspectiva del país en el umbral de su integración a Norteamérica (Barkin, 1991), en esta parte retomo el análisis inicial que surgió de mi investigación como estudiante de posgrado en economía y de la privilegiada comunicación que disfruté con el general Lázaro Cárdenas. Me acuerdo de la última conversación que sostuve con él en la Tierra Caliente de Michoacán y Guerrero, cuando me respondió a una pregunta ingenua del momento: ¿Por qué la gente sigue respetándole y siendo tan leal, si es tan evidente que ellos no han resultado ser los más favorecidos por la Revolución y por sus actividades? De hecho, esta sección del libro ofrece varias perspectivas de la miriada de formas en que la política nacional y las acciones de los distintos gobiernos a nivel nacional y local están organizándose y operando para discriminar a la gran mayoría de los mexicanos que todavía organizan sus vidas en torno a algunos de los ideales máspreciados de la Revolución mexicana. Las partes siguientes de este libro ofrecen indicios de las respuestas que el expresidente esperaba que yo recuperara de los ejidatarios con quienes me presentó durante los días siguientes de nuestro viaje, parte de una base incondicional de admiradores. Efectivamente, ellos, y los muchos otros que he conocido en los años que siguieron, me han ayudado a entender su método y su mensaje, una herencia que él dejó y que el país todavía no entiende.

Esta parte empieza con un ensayo que causó tanta molestia cuando lo presenté como el capítulo final de mi disertación doctoral que me obligaron a quitarlo. No resultó aceptable sugerir que los programas ortodoxos de desarrollo eran contraproducentes: formaban el mensaje principal del programa del “Centro de Desarrollo Económico” del Departamento de Economía de Yale University. En contraste, al darlo a conocer entre mis nuevos colegas y amigos en América Latina, provocó una reacción muy favorable y empezó a difundirse ampliamente, convirtiéndose en una lectura obligada en los cursos introductorios del Instituto Latinoamericano de Planificación Económica y Social (ILPES) de la CEPAL. La idea de que el aumento en la riqueza podría agudizar las brechas sociales y económicas no era aceptable en los círculos ortodoxos, aun cuando era tan evidente a la gran mayoría de los economis-

tas terceromundistas y los que se dedicaban a su estudio con una perspectiva marxista.

El fenómeno de un desarrollo regional que empobrecía a los sujetos del proceso se repetía constantemente en los anales de la literatura desarrollista. El próximo capítulo integra el análisis económico con un examen de los impactos ambientales. Éste fue producto de uno de los primeros proyectos del recién creado Centro de Ecodesarrollo que ofrecía integrar un estudio con base en las metodologías de las ciencias sociales con otro de las naturales, precursor de la economía ecológica que surgiría un cuarto de siglo más tarde. La devastación que estaba experimentando el trópico húmedo mexicano en aras de la acumulación y de la integración nacional era impactante; pero igualmente aterrador era observar la frialdad con que las fuerzas políticas se reunieron con los intereses del capital para arruinar la vida de decenas de miles de campesinos quienes fueron arreados a un modelo de existencia absolutamente inhumano.

La tercera entrega (capítulo 8) lleva esta reflexión a un nivel nacional para un auditorio no especializado. Presenta un dictamen severo de la evolución regional del país. La descripción de la transformación espacial de la actividad productiva auguraba mal para las condiciones de vida de la mayor parte de los mexicanos. Preveía tendencias que aparecerían más tarde con la cínica toma de control de los recursos naturales por parte de los poderes “fácticos” que aun en ese momento se jactaban de ser “la fuerza viva” de México en el momento de la transición hacia el neoliberalismo.

Años más tarde una reflexión similar volvió a molestar a los diseñadores de la política para la protección de la biodiversidad. Después de años de investigación y colaboración con los comuneros en la zona de hibernación de la Mariposa Monarca, con base en trabajos apoyados por el Centro de Ecodesarrollo, lanzamos una propuesta de un modelo autosustentado por las propias comunidades. Sin embargo, la transformación del ecoturismo en imán de un nuevo estilo de ‘progreso’, motivaba a la Comisión de Cooperación Ambiental, creada con la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (conocido como TLCAN) y la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, a promover la zona como símbolo verde de la integración regional, una presa demasiada valiosa para dejar en manos de indígenas y campesinos que presumían como guardianes del bosque. El capítulo 9 da cuenta de esta tragedia, por la cual las comunidades siguen sujetas a un férreo control político en beneficio de caciques locales y capitales ajenos.

El capítulo 10 da cuenta de los impactos de una resistencia centenaria de grupos indígenas para defender su territorio en la selva del trópico

húmedo más grande de México. Azotado por un brote de incendios forestales sumamente inusual, aun para un año cuando El Niño tuvo un marcado impacto, los comuneros en las Chimalapas se movilizaron para tratar de entender su trasfondo (después de haber colaborado en su control). Frente a una embestida oficial intensiva que los culpaba del fenómeno, por una funcionaria que había inspirado esperanzas de un cambio en el régimen de protección ambiental, se organizaron con las mejores herramientas analíticas para descubrir la cruda y triste realidad: las conflagraciones fueron producto de intereses políticos y económicos que habían querido tomar control de sus territorios desde hace tiempo. Estos grupos aprovecharon la coyuntura, contratando incendiarios para crear áreas que podrían ser apropiadas para usos redituables para los inversionistas. La colaboración que produjo este capítulo fue premiada y el trabajo presentado en un foro internacional convocado por la Asamblea General de las Naciones Unidas, provocando una gran molestia en los círculos mexicanos del poder. A dos decenios de estos hechos, los indígenas de esta región siguen defendiendo sus territorios contra muchas de las mismas fuerzas políticas; ahora, los locales cuentan con el respaldo de un movimiento nacional que está exigiendo el cumplimiento de los acuerdos internacionales de los que daremos detalles en la última parte de este libro.

Esta segunda parte del libro termina con un análisis de la trágica incapacidad de nuestro país de enfrentar de una manera adecuada el reto de gestionar el agua. El recuento de la historia de su administración es testimonio de la avaricia y ceguera del organismo responsable para diseñar e implementar un sistema de agua potable al servicio de la población. No faltan cuadros bien capacitados para esta tarea, pero el modelo administrativo y el deseo de mantener un control centralizado sobre su operación se han combinado con los intereses políticos para producir la destrucción o contaminación de acuíferos y la construcción de una infraestructura inadecuada y mal diseñada para asegurar el abasto adecuado del agua potable. Igualmente trágica es la ausencia de capacidad de tratar las aguas residuales que resulta en enfermedades que redundan en un costo anual superior a lo que sería el costo deemplazar las instalaciones necesarias. Ahora que el país aceptó como suya la declaración del “derecho humano al agua” (2012), la clase política sigue insistiendo en marginar a la población de su administración en aras de un nuevo programa de privatizaciones en este sector; sin embargo, mientras redacto estas líneas, se ha aglutinado una muy bien organizada respuesta ciudadana que está luchando para crear un enfoque diferente <<http://aguaparatodos.org.mx/>>.

que los ingresos llegan a concentrarse cada vez más tanto a nivel personal como regional; aquellos que cuentan con el capital, o tienen acceso a él, pueden prosperar al llevar a cabo empresas redituables que generan mayores excedentes para reinversiones posteriores. La política gubernamental refuerza este patrón al aumentar las utilidades de las inversiones existentes y alentar reinversiones para acelerar el crecimiento económico. Las economías de escala y la aglomeración se combinan con factores culturales, políticos e históricos para favorecer la concentración de inversiones en una élite en algunos centros de crecimiento urbano rápido. Las instalaciones de producción que además no están construidas en estas áreas, generalmente están muy atadas a recursos naturales particulares o dependen de la disponibilidad de un tipo específico de trabajador que no se encuentra en las zonas prósperas.

Los programas de desarrollo regional responden a la necesidad —a veces política— de ocuparse de los problemas de áreas que quedaron a la zaga del crecimiento económico de un país. Por un lado, están planeados generalmente para hacer un uso mejor de los recursos naturales y humanos en el área y, por el otro, para alentar la integración de grupos aislados de la prosperidad económica. Al movilizar los recursos no utilizados, a menudo se espera que tales programas contribuyan al crecimiento nacional mientras se aumentan los ingresos de las regiones que habían quedado fuera del proceso de crecimiento.

Para ser efectivos, los programas de desarrollo regional deben desviar la actividad económica de los centros de producción existentes a las áreas seleccionadas para el desarrollo. Si los programas de inversión se concentran en actividades de producción primarias tales como agricultura y minería, entonces las posibilidades de crecimiento autosostenido están limitadas; las actividades de maquila también son autolimitantes, y a menos que se lleve a cabo un proceso de reinversión para establecer una base productiva creciente, resulta pobre la perspectiva del desarrollo regional. Para asegurar el éxito de tal proceso, con frecuencia es esencial que el gobierno proporcione subsidios especiales e inversiones de infraestructura. Sin embargo, a veces esta ayuda no es suficiente y para proteger el alto costo inicial de producción, se deben combinar medidas adicionales con una política coactiva de ubicación para alentar la descentralización.

Los programas de desarrollo regional, aunque tengan éxito, no necesariamente facilitan o permiten una redistribución del ingreso personal. A menos que se tomen medidas adicionales para proporcionar recursos financieros a aquellos que no los tienen, con limitaciones efectivas para excluir a las élites, los programas de inversión tan sólo proporcionarán a los ricos oportunidades posteriores para ampliar el alcance de sus acti-

vidades. El control sobre los recursos naturales potencialmente valiosos puede permitir al propietario mejorar su condición económica, pero solamente si dispone del crédito o capital necesario para explotarlos; en ausencia de tales recursos, es probable que el control efectivo sobre los recursos naturales pase a manos de aquéllos con las posibilidades financieras necesarias para desarrollarlos. Esto es, no sólo es necesario relocalizar la actividad económica, sino que es imperativo rediseñarla para facilitar el acceso de gente que, de otra manera, no podría tomar ventaja de las nuevas oportunidades.

Como se demuestra más adelante, este punto de vista del problema en dos niveles —la relocalización de la actividad económica y la apertura de nuevos canales de acceso— es clave para el entendimiento de algunos de los principales obstáculos para el éxito de los proyectos del desarrollo regional desde el punto de vista social. El punto que se expresa aquí es que en el primer nivel —el económico y de ubicación— es relativamente fácil llevar a cabo los objetivos manifestados; pero aun en este nivel, en el programa que se examina en este capítulo, el crecimiento regional autosuficiente no se logró debido al poco interés de subsidiar la industrialización regional. En el segundo nivel —el humano— los problemas estructurales de cambio son mucho mayores y tal vez no son apreciados plenamente por aquellos que tratan de hacer que las regiones se desarrolleen en lugar de lograr simplemente un crecimiento a una tasa más elevada: en México, parece que cualquier descentralización de la actividad económica que se haya alcanzado no alteró en forma sustancial la tendencia nacional de concentrar el ingreso y el acceso a las oportunidades económicas en unas cuantas personas.²

6.1. UN PROGRAMA DE DESARROLLO REGIONAL EN MÉXICO

El marco de este análisis es uno de los programas de desarrollo regional de más éxito en México, cuando se mide por el instrumental económico. Por lo menos durante un siglo se ha profesado en México gran preocupación por el desarrollo regional, pero el programa que se examina aquí en detalle empezó en 1947, con el establecimiento de una comisión

² La estrategia del crecimiento económico manifestada por el gobierno mexicano, de hecho perseguía explícitamente concentrar recursos para estimular ahorros e inversiones adicionales. La Secretaría de Hacienda, durante el periodo 1958-1970, claramente manifestaba esta política (Ortiz Mena, 1970).

gubernamental destinada a aprovechar las aguas de la cuenca del río Tepalcatepec, localizada en los estados de Michoacán y Jalisco, a unos 320 km al oeste de la ciudad de México (Barkin y King, 1971). Dentro de los estándares nacionales de México, el proyecto era pequeño, con una inversión total de unos 600 millones de pesos durante 20 años, y en un área de sólo 18 000 km²; la población total de la cuenca en 1965 era de 600 000 personas.

Uruapan y Apatzingán, dos ciudades de la región, son centros importantes de mercado y sede de oficinas regionales de agencias gubernamentales y de la Comisión del río Balsas. Uruapan, que se localiza en la zona templada, es la más grande de las dos (82 672 habitantes). Como sucede a la mayoría de las ciudades secundarias de México, la migración de zonas rurales, en este caso del área montañosa de los alrededores, ha aumentado la población. Los indios de Tierra Fría se mezclan con los mestizos para intercambiar artesanías y otros productos regionales en el gran mercado del pueblo. Apatzingán (44 819 habitantes) está en la Tierra Caliente y ha quintuplicado su población en los últimos veinte años, desde que se estableció la Comisión, como resultado de un gran aumento de la producción agrícola y la consiguiente necesidad de mano de obra.

Más de 60% de la inversión de la Comisión durante los primeros 20 años, se realizó en Tierra Caliente. Aunque Tierra Caliente durante siglos ha estado habitada por grupos de purhépechas (tarascos) y nahuas, la población estaba muy dispersa y sus tierras no se cultivaban por la falta de capital para desarrollar su potencial. A principios de este siglo, se establecieron inmigrantes italianos en la zona y construyeron obras de irrigación para plantar arroz, huertos de limones y criar ganado. Aprovecharon casi 64 000 hectáreas, que les fueron expropiadas en 1938 y convertidas en ejidos colectivos.³

Después de la expropiación, los trabajadores con la ayuda de bancos agrícolas del gobierno, trataron de aumentar el cultivo y sembrar nuevos productos. Con la construcción de las obras de irrigación y el incremento de las ya existentes en la región, se formaron nuevas comunidades y se amplió el área de cultivo. Además, se construyeron obras de infraestructura que han tenido efectos impresionantes en Tierra Caliente. Durante dos decenios de inversiones gubernamentales, los lazos de la región con el resto del país, consistentes en sistemas primitivos de caminos, que servían únicamente en la temporada de secas, se convirtieron en una red de carreteras de primera clase, también se construyeron aeropuertos y se

³ Se puede encontrar una descripción de su establecimiento en la región y su desarrollo subsecuente, en Cusi (1969), escrito por el hijo del colonizador original.

regularizó el servicio postal. Se aumentaron escuelas, hospitales y otros servicios públicos, y se redujo en gran medida la incidencia del paludismo y la disentería con el mejoramiento de las condiciones sanitarias. Los servicios de salud pública contribuyeron también a reducir la tasa de mortalidad del 16 al 10 por millar.

6.2. DESARROLLO AGRÍCOLA

La Comisión del Tepalcatepec dedicó la mayor parte de su energía y sus recursos a la agricultura. Entre 1950 y 1970, el área cultivada en Tierra Caliente aumentó 2.5 veces, mientras que la zona de irrigación aumentó a casi seis veces el tamaño de la extensión original. Un cambio lento de la agricultura tradicional de subsistencia a la de exportación, acompañó a la expansión del área de irrigación. El algodón desplazó al maíz como cosecha principal, pero recientemente el aumento de los costos ha forzado la disminución de la producción en el área; mientras que las cosechas de melón aumentaron en importancia. Cambiaron también las técnicas agrícolas y se triplicó el valor de producción por hectárea. El valor del producto agrícola en la región aumentó más de seis veces, en términos de precios constantes correspondientes a 1960. La composición cambiante de las cosechas a una zona de irrigación mayor, combinada con la mecanización y tecnología modernas, ayudan a explicar el gran aumento en el valor del producto.

Aun dentro de los estándares más conservadores de valoración de su productividad, el proyecto redituó a la nación un 13% sobre la inversión de capital gubernamental. Además del aumento considerable de la producción agrícola incluido en este cálculo, y de otros beneficios económicos que se omiten, la inversión social de la Comisión aumentó la calidad del medio ambiente de los habitantes de la región. Por lo tanto, de acuerdo con la mayoría de los estándares de valoración, el programa de inversión de la Comisión del Tepalcatepec fue, desde un punto de vista nacional, un empleo sabio de los recursos. Es decir, el aumento del ingreso y otros beneficios que se generaron con este programa de inversión, fueron mayores a aquellos que se hubieran esperado de haber invertido los fondos en cualquier otra parte del país.

Deben hacerse ciertas reservas a esta conclusión del análisis tradicional costo-beneficio que presenta un panorama tan positivo del efecto del programa de inversión pública en Tierra Caliente. Al no incluir en los cálculos el hecho de que las diferencias económicas entre clases sociales

**CUADRO 6.1. LA ECONOMÍA AGRÍCOLA DE TIERRA CALIENTE,
MICHoACÁN, 1950-1970**

	1949-1950	1954-1955	1959-1960	1964-1965	1969-1970
Área bajo cultivo (miles de hectáreas)					
	42.3	63.3	105.7	109.5	107.7
Porcentaje de tierra en cultivos principales					
Ajonjolí	18.6	12.6	10.1	11.0	14.2
Algodón	a	0.8	11.3	38.4	28.5
Arroz	16.2	18.4	13.1	11.0	5.8
Caña de azúcar	1.6	0.2	0.5	a	a
Frijoles	1.4	1.7	1.5	0.5	a
Limón	7.4	7.0	7.9	7.3	8.0
Maíz	52.7	52.1	44.9	18.3	31.6
Melón	0.6	2.1	4.3	5.5	4.7
Sandía	0.2	0.2	3.8	4.6	0.2
Otros	1.3	4.9	2.6	3.4	7.0
Porcentaje de las tierras irrigadas					
	36.3	49.8	68.1	81.7	70.0 b
Valor de la producción agrícola (miles de pesos de 1960)					
	33600		219000		252300 b

a. Menos de 0.05 por ciento; b, estimado.

FUENTES: Para 1950-1960, David Barkin y Timothy King, *op. cit.*, cap. vi. Para 1970, Secretaría de Agricultura y Ganadería, Departamento de Economía Agrícola.

dentro de la cuenca son ahora [1970] mayores que en 1950, y que el beneficio del proyecto para la región es diferente que el del país, se están ignorando algunos de los aspectos del bienestar más importantes planteados por programas de esta naturaleza. Buena parte del beneficio de la producción agrícola se dirige, a través del sistema bancario y del proceso de inversión, al desarrollo industrial de las regiones más prósperas del país; casi toda la fuerza hidroeléctrica se exporta a áreas industriales; y las partes más altas y frías de la cuenca, que suministran el agua para la prosperidad de Tierra Caliente, virtualmente no han experimentado cambio alguno durante este periodo. La pobreza que caracterizaba a Tierra Caliente ha disminuido, pero, como se muestra más adelante, no sin causar grandes diferencias en los ingresos personales de los habitantes del área, y dejando a la zaga las zonas más altas de la cuenca.

6.3. CRECIMIENTO DE LA POBLACIÓN Y MIGRACIÓN

En vista del estancamiento de la mayor parte de la región, no causa sorpresa que haya habido menos inmigración en la región de la esperada

en 1947 por los planificadores del proyecto. El desarrollo agrícola en Tierra Caliente atrajo emigrantes en busca de oportunidades económicas mejores; pero, en último término, esta inmigración no pudo contrarrestar la de las zonas más pobres de la región. Como resultado, el crecimiento total de la población de la cuenca fue ligeramente menor al índice natural de crecimiento entre 1950 y 1970; se estima que durante estos años, 39 000 habitantes (o sea 0.5% de la población) dejaron la región. Parece claro que el aumento del estándar de vida y la disponibilidad de oportunidades de trabajo adicionales resultaron atractivos cuando se compara con otras partes del país donde la emigración de áreas rurales parece crecer año con año. Las políticas gubernamentales no impulsaron un proceso de crecimiento económico autosostenido en la región, pero, en cambio, proporcionaron incentivos para la transferencia de ganancias a otras partes mucho más industrializadas del país.

6.4. FINANCIAMIENTO DEL DESARROLLO AGRÍCOLA

El programa de inversión proporcionó la infraestructura básica que hizo de Tierra Caliente un lugar muy atractivo en el cual se pudieran hacer inversiones agrícolas. Como con muchos otros proyectos en México, implícitamente se había supuesto que los empresarios se aprovecharían de las oportunidades lucrativas que proporcionaba la Comisión. Se tomó casi como artículo de fe el supuesto de que los productores individuales, al reaccionar ante las oportunidades productivas, harían una explotación rápida y eficiente de servicios de irrigación y de transporte.

Toda la producción agrícola de México está condicionada por la reforma agraria promulgada después de la revolución de 1910. Desde entonces, a los campesinos sin tierras se les han proporcionado parcelas que ellos mismos pueden cultivar. Aun cuando los ejidos fueron concebidos como unidades en las cuales los campesinos podrían trabajar y administrar colectivamente la tierra, la mayoría de los ejidatarios no trabajan sus tierras en tal forma, sino que las administran como si fueran propiedad privada. Sin embargo, una diferencia importante entre la tierra ejidal y la privada es que el ejidatario no tiene derecho legal de enajenar (vender, hipotecar, rentar, etc.) la tierra en cualquier forma, excepto en circunstancias especiales, y no debe permitir que la tierra esté inactiva por más de dos años si quiere retener el derecho de cultivarla. A pesar de esta disposición, algunos ejidatarios encuentran la forma de rentar o vender sus derechos para cultivar la tierra cuando es necesario hacerlo.

Esta situación parece ocurrir cuando la introducción de la irrigación permite cultivar cosechas comerciales. Sin el derecho de hipotecar la tierra, muchos ejidatarios se encuentran sin posibilidades de conseguir crédito para sus cultivos. El crédito es necesario para la producción de cosechas comerciales por su alto costo. En Tierra Caliente, el problema se agudizó debido a las inversiones iniciales que se necesitaron para preparar la tierra para su cultivo. La mayoría de las tierras mejores y más accesibles pertenecían a los ejidatarios, pero estaban cubiertas de maleza, arbustos pequeños y piedras que tuvieron que quitarse para facilitar el uso de maquinaria, que en la actualidad es casi indispensable para la producción del algodón. Esta operación era muy cara y estaba más allá de los medios de los ejidatarios y pequeños propietarios.

Aun después de que la tierra se preparaba para el uso de maquinaria, la siembra de algodón todavía resultaba un proceso muy caro. La práctica tan difundida de rentar equipo con operadores para hacer gran parte de este trabajo, eliminó a la mayoría de los rancheros la necesidad de hacer inversiones grandes en maquinaria e hizo posible el cultivo de parcelas relativamente pequeñas en forma casi tan eficiente como la de los grandes ranchos, también proporcionó otra salida de inversión provechosa para aquéllos con capital o acceso al crédito. Sin embargo, el costo del cultivo del algodón es mucho mayor que el de las cosechas tradicionales a causa de la mecanización y de la necesidad de aumentar el control de enfermedades y plagas en el área donde se expande el cultivo. Estos gastos han aumentado sistemáticamente durante los últimos años. Tanto los altos costos de inversión para preparar la tierra para cultivo, como los costos de renta de equipo para trabajar la tierra usando productos químicos para controlar las enfermedades y plagas y para aumentar la fertilidad, presentaron grandes obstáculos para que entraran en el cultivo de algodón personas con tierras suficientes y apropiadas.

El Banco Nacional de Crédito Ejidal (BNCE) se estableció en 1935, para ayudar a suministrar el crédito necesario sin aval, mediante préstamo a corto plazo para cosechas y con el fin de financiar la agricultura ejidataria. El Banco comenzó a operar en Tierra Caliente en los años cuarenta, financiando la producción de las haciendas que fueron expropiadas en 1938; financió principalmente la producción de las cosechas tradicionales de subsistencia, aunque dio apoyo también a algunos plantíos de arroz y experimentos ganaderos. Después de que se formó la Comisión del Tecalatepec y el agua de riego llegó a ser relativamente abundante, el éxito del experimento local y algunos esfuerzos privados provechosos con el algodón, indujeron al Banco a financiar en escala limitada la producción de esa fibra. Desde el principio, los recursos del Banco fueron in-

adecuados para proporcionar crédito a todos los ejidatarios; los prestamistas privados no deseaban prestar a todos los solicitantes, dada la falta de seguridad y experiencia con las cosechas comerciales de la mayor parte de los terratenientes potenciales que pudieran solicitar crédito.

La imposibilidad del BNCE para proporcionar el crédito necesario a los ejidatarios para cultivar algodón, contrasta con la expansión rápida de la superficie algodonera que financiaron las fuentes de crédito privadas, que se dieron cuenta del atractivo de la nueva cosecha. El sector privado no sólo financió la siembra, sino que comenzó a construir despepitadoras para procesar el algodón en rama de la región; generalmente fueron los mismos grupos financieros los que entraron en la construcción de las despepitadoras y en el financiamiento del cultivo, o en la siembra misma a través de acuerdos arrendatarios.

Los inversionistas tenían que financiar la producción de algodón para asegurar un suministro mínimo de fibra para sus plantas despepitadoras y para cumplir con sus obligaciones de mercadeo. A iniciativa de un grupo de agricultores no ejidatarios, el BNCE construyó en 1956 una despepitadora con componentes usados, y construyó otra al principio de los años sesentas; estas plantas beneficiaron a los usuarios ejidales y privados al transferir a los agricultores las ganancias del procesamiento de la fibra. Presiones subsecuentes y efectivas de parte de las otras firmas, y lo inadecuado de los recursos financieros, limitaron la capacidad del BNCE para ampliar sus operaciones; los grupos privados construyeron otras ocho despepitadoras.

Los prestamistas buscaron activamente tierra cultivada y muchos ejidatarios encontraron redituable rentar sus tierras a otros, en lugar de planificar cosechas tradicionales. Los ejidatarios rentaron sus tierras a otros que pudieran plantar algodón y, para 1960, los contratos de renta llegaron a ser muy comunes en la región. Los términos usuales permitieron que el arrendador limpiara la tierra y la preparara para la mecanización en lugar de pagar renta y poder usarla por dos años. Generalmente éste era un periodo suficiente en el cual se obtenía una remuneración atractiva de la preparación de la tierra. Se limpiaron aproximadamente 40 000 hectáreas durante cinco años.

Sin embargo, el arrendamiento se alargó más allá del periodo de dos años porque los ejidatarios aún no podían obtener el capital necesario para trabajar. En una encuesta, la oficina local de la Secretaría de Agricultura y Ganadería estimó que en 1965 cerca del 65% de los ejidos en los que se cultivaba algodón se rentaban a otros ejidatarios o a rancheros privados (“inversionistas”, como se les llamaba en la región). Se permitía continuar con este sistema ilegal, tal vez porque la cosecha se encontraba

dentro de los productos mexicanos de exportación de mayor importancia (Restrepo y Sánchez, 1969).

Más recientemente, la renta de tierras ejidales ha disminuido sustancialmente, a la vez que se ha reducido el área total de cultivo de algodón, ya que los costos continuaron subiendo. En una primera etapa, los costos ascendientes coincidieron con el debilitamiento del mercado mundial del algodón, y se indujo al gobierno de México para que eliminara los impuestos de exportación al algodón. Con la caída de las grandes tasas de utilidad que recibían de los agricultores, se hizo notable en la región un gran desencanto por los plantíos de algodón, especialmente de parte de los agricultores grandes. En respuesta parcial a esta tendencia y la importancia del algodón en relación con las necesidades de la balanza de pagos en México, el BNCE aumentó su financiamiento para la cosecha de algodón de producción ejidal; sin embargo, durante este tiempo las utilidades de los plantíos de algodón habían descendido un nivel promedio de 2500 pesos por hectárea a menos de 1000 (estos cálculos se sujetan a una gran variación en cualquier cosecha anual e incluyen el valor de la renta como elemento de costo).

Como resultado, el algodón se cosechó en menos de una cuarta parte del total de la tierra cultivada en Tierra Caliente en 1970, y los arrendatarios declararon haber cosechado sólo una quinta parte de esta superficie. Pero, debido a la importancia del algodón como una de las cosechas más destacadas en México, el gobierno había decidido un aumento de la producción en los años venideros.

El BNCE y otros dos bancos gubernamentales agrícolas aumentaron considerablemente sus operaciones de renta; financiaron un aumento de casi 50% de la superficie cultivada para la estación agrícola en Tierra Caliente, 1971-1972. De esta manera, muchos de los inversionistas privados que tenían también grandes inversiones en despepitadoras, tuvieron asegurado el suministro de materias primas para sus plantas de proceso sin tener que correr el riesgo de las utilidades bajas del cultivo. Los ejidatarios y otros cultivadores en pequeño reciben ahora los recursos para cultivar sus propias tierras, pero sólo en la medida en que la tasa de beneficio resulte poco atractiva para los otros.

Condiciones similares prevalecen para otros cultivos comerciales importantes en la región —melón y sandía—. El cultivo de estos productos está financiado principalmente por las empacadoras, que han contratado la exportación a Estados Unidos, algunas de las cuales son propiedad de extranjeros. Durante los tres meses de cosecha, la producción de melón en Tierra Caliente es una de las fuentes principales de exportación de fruta a Estados Unidos.

En ambos casos —algodón y melón—, así como otros cultivos en la zona, la etapa intermedia de preparar el producto para el mercado —despepitaje o clasificación y empaque— es más rentable que el cultivo de los productos. El BNCE proporcionó facilidades para eliminar a los intermediarios; estos esfuerzos se habían frustrado continuamente por presiones efectivas de los intereses privados que también querían entrar en este campo lucrativo. Grupos pequeños de ejidatarios han sido capaces de participar en la industria de empaque de melón, por los bajos requerimientos de capital inicial y porque encontraron que podían recuperar completamente su inversión en menos de tres años, mientras empleaban a sus parientes como trabajadores y garantizaban los mejores precios para la fruta. Sin embargo, los costos altos de construir una despepitadora de algodón excluyen iniciativas similares con este producto. Es probable que empacadores establecidos ejercerán una presión todavía mayor en el futuro para prevenir el establecimiento de empacadores adicionales de melón, en vista de la falta de crecimiento del área cultivada, y del peligro que tal competencia representa para su capacidad de llenar los requisitos de los contratos de exportación.⁴

Como se mencionó antes, la división implícita de responsabilidad entre los sectores público y privado de la economía, impidió que la mayoría de los agricultores en pequeño y los ejidatarios plantaran algodón u otras cosechas comerciales en sus tierras, hasta que las tasas de beneficio hubieran bajado sustancialmente. El crédito es esencial para la producción redituable de productos agrícolas comerciales; en Tierra Caliente los costos iniciales de preparación de la tierra se añadieron a los costos normalmente altos de producción, que están continuamente subiendo por la rotación inadecuada de cosechas y por la ausencia de defensas físicas naturales contra enfermedades y plagas. La escasez de crédito agrícola y su inequitativa distribución hacia los cultivadores en pequeño y ejidatarios provocó una concentración en los medios de producción que refuerza otros procesos concentradores en la cuenca del Tepalcatepec.

⁴ Después de un año de la fundación de la primera empacadora ejidal se ejerció presión efectiva de parte de grupos privados mayores para limitar el alcance de sus operaciones y amenazar su existencia. En diciembre de 1971, una serie de artículos que aparecieron en el diario capitalino *Excélsior* expusieron claramente los problemas que estos grupos de agricultores cooperativistas estaban enfrentando.

6.5. DESARROLLO REGIONAL Y CONCENTRACIÓN DEL INGRESO

El gran aumento en la producción agrícola de Tierra Caliente fue acompañado del aumento de la población y de la concentración del control de la tierra, lo cual facilitó a su vez la concentración del ingreso. En este apartado se examinan las causas de esta concentración y las posibilidades de un cambio en los patrones de distribución existentes.

El objetivo principal para llevar a cabo este programa de desarrollo regional fue un aumento eficaz de la producción agrícola. No sólo hubo un aumento considerable en la producción, sino que la mayoría de ésta fue para la exportación; el algodón es el producto más importante de exportación y el déficit persistente de la balanza de pagos es una preocupación constante entre los políticos mexicanos. El aumento de la producción trajo consigo un aumento en el empleo; es posible que en Tierra Caliente 25 000 personas más de las que se hubieran esperado estén empleadas en la actualidad. Además, otras 15 000 personas emigran anualmente al área para trabajar durante un periodo de tres meses en las cosechas del algodón y del melón.

Parece claro que ha habido mejoría en las condiciones de vida de los habitantes de esa área. La disponibilidad mayor de medios educativos y médicos se combina con el mejoramiento de las comunicaciones y transportes para hacer esta región más habitable. Estas mejoras elevaron la calidad de los servicios públicos en el área a un nivel ligeramente más bajo que el de otras comunidades rurales más cercanas al centro del país. El patrón de desarrollo de Tierra Caliente ha hecho posible que un número pequeño de habitantes reciba ingresos mayores al promedio regional, y goce de un nivel de vida sumamente alto.

Otros que tenían capital y contactos comerciales apropiados, pudieron obtener franquicias valiosas al suministrar insumos a los agricultores comerciales de la región, o abrir empresas de alquiler o reparación de equipo, o proveer asistencia técnica y de mercado a los agricultores de más éxito. Los aumentos de los costos de producción muy rara vez los afectan; al contrario, el aumento de estos costos se debe al aumento de servicios que ellos suministran.

Muchos de los financiadores de las cosechas de melón y algodón en la región, y otros que se establecieron en las diferentes industrias de servicios asociadas con el desarrollo agrícola, son inmigrantes del norte o de Estados Unidos. Invirtieron su capital y pudieron establecerse en forma independiente durante los primeros años de crecimiento rápido, o bien, asociándose con alguno de los grupos adinerados involucrados directamente en el financiamiento del cultivo. Generalmente eran per-

sonas que tenían contactos en su región de origen y que emigraron a Tierra Caliente específicamente para instalarse en este negocio nuevo. Llegaron con recursos financieros, conexiones comerciales y con la técnica mercantil para empezar inmediatamente.

Pero no toda la gente de Tierra Caliente tenía la fortuna de contar con capital suficiente para poder participar en el lado lucrativo de la industria de servicios o para rentar tierras en las que se cultiven cosechas comerciales. En 1970, más de la mitad (55%) de la fuerza de trabajo agrícola declaró el trabajo para otros como fuente principal de ingreso; este porcentaje no incluye el número considerable de familiares que no recibían pago por trabajar en sus propias tierras, el grupo tan grande de ejidatarios que trabajaron tierras de otras personas en períodos cortos durante el año, o los trabajadores migratorios que de acuerdo con el censo venían de otras partes. Ya que la mayoría de las personas percibían el salario mínimo, estas cifras sugieren que una gran proporción de población en esta zona vive a nivel de subsistencia.

Aun aquellos que trabajan sus propias tierras, no están en posibilidad de cultivarlas con cosechas comerciales. En 1970, el BNCE está proporcionando crédito para el cultivo de algodón a únicamente 33 de los 96 ejidos de la zona, y el sistema de irrigación que construyó la Comisión no tiene tamaño suficiente para suministrar agua a todas las tierras durante la época de cultivo. Algunos agricultores privados pueden obtener crédito, pero aun entre ellos mismos hay un alto grado de concentración en el control de tierras por parte de algunos agricultores y financiadores importantes. También, grupos privados, en algunas ocasiones, complementan el sistema de riego gubernamental con inversión en pozos; tales inversiones generalmente están fuera de las posibilidades financieras de la mayoría de las comunidades ejidales.

Parece irónico que entre más crece la disponibilidad de crédito oficial para el cultivo de algodón, más disminuyen las utilidades. Una sugerencia del que escribe esto era que una manera de atacar el problema podría ser reforzando la prohibición legal del arrendamiento de tierras; y la extensión del crédito ejidal parece ahora anticuada y aun errónea a la luz del aumento rápido de los costos (Barkin, 1969). Esto pudo haber sido efectivo en la redistribución del ingreso durante el decenio anterior, pero con el descenso de utilidades, el interés privado ha estado alentando tal redistribución del crédito que traslade a los ejidatarios o al BNCE los riesgos de los agricultores mayores (que a menudo son propietarios de las plantas despepitadoras).

La agricultura comercial y las empresas de servicios se enriquecieron debido al crecimiento del área y sólo unas cuantas personas estuvieron

en posibilidad de gozar indirectamente de los frutos del proyecto mediante el mejoramiento de las condiciones sanitarias y la mayor disponibilidad de servicios públicos; la diferencia entre ricos y pobres se hizo más grande y más rígido el sistema de estratificación social de la región.

El aumento en las desigualdades de Tierra Caliente que se menciona en esta sección, no ha sido medido hasta ahora. Es posible verificarlo en cierto grado con la información disponible sobre salarios diarios de los trabajadores de Tierra Caliente. En los dos últimos decenios, el salario real (*id est*, en pesos con un valor adquisitivo constante) de este tipo de trabajador no ha aumentado, a pesar del gran incremento en la producción y en el valor de las cosechas. Sin embargo, hay algunas excepciones importantes; en el periodo cumbre de la cosecha cuando ésta era especialmente grande, la tarifa de trabajo por destajo aumentó sustancialmente y los pescadores más hábiles tuvieron oportunidad de ganar hasta cuatro veces el salario diario que prevalecía. La mayoría de las personas que trabajaban en la cosecha eran de otra región, porque los nativos estaban ocupados con su trabajo cotidiano. Varios de los trabajadores de las plantas despepitadoras, empacadoras de melón y de otras industrias conexas, se agremiaron y también han obtenido salarios relativamente altos por su trabajo; lo mismo sucede con las personas que trabajan en las industrias de servicios en Apatzingán y en algunos de los pueblos más pequeños de la zona. Gran proporción de estas personas son inmigrantes de otras regiones del país o del extranjero que son atraídos al área por los salarios altos y los beneficios que ofrece. Esto sugiere que los beneficiarios principales de la prosperidad de la región son las personas que financian y controlan la venta y el proceso de los productos agrícolas, así como algunos de los emigrantes trabajadores de cultivos y otros empleados por las industrias auxiliares; los agricultores están en la posición más desventajosa.

6.6. LA PERSPECTIVA NACIONAL

El mejoramiento de la distribución del ingreso es parte de la retórica política en México desde hace mucho tiempo. Pero la evidencia estadística disponible sugiere que en lugar de seguir esta dirección, el esfuerzo de desarrollo mexicano se ha apartado de ese fin (Martínez de Navarrete, 1970). Las autoridades de la Secretaría de Hacienda han reconocido abiertamente su creencia de que la concentración del ingreso facilita el uso del ahorro para la inversión (Ortiz Mena, 1970), y se han adoptado

políticas que estimulen la concentración ulterior del ingreso. Entonces no es sorprendente que menos de 1% de las empresas manufactureras controlen casi dos terceras partes (64.3%) de toda la producción, que seis grupos banqueros controlen casi tres cuartas partes (72.9%) de todos los recursos bancarios privados, y que el 3.3% de todas las unidades agrícolas produzcan más de la mitad (55.3%) de la producción del sector. La estabilidad política de México creó un ambiente atractivo para la inversión extranjera y su estructura social altamente estratificada ha creado un patrón de consumo suntuario que hace tal inversión esencial para compensar el gran déficit de la balanza de pagos; al implantarse, tal capital extranjero ganó el control de más de la cuarta parte (26.7%) de las 938 empresas industriales más grandes a que nos referimos anteriormente, y este capital se concentró en los sectores industriales más dinámicos y modernos. Esta actitud, y con el beneplácito que las autoridades le han otorgado, explica en parte el crecimiento rápido que ha experimentado México durante los tres decenios pasados, pero el precio ha sido un aumento de las diferencias entre ricos y pobres, y especialmente entre los habitantes rurales y urbanos.⁵ Como se explicó anteriormente, aun cuando hubo un rápido aumento en la producción agrícola de la región, los beneficios se concentraron en manos de un grupo relativamente pequeño. En esta sección se hace un esfuerzo por situar la contribución de la Comisión del Tepalcatepec, antes mencionada, dentro del contexto del desarrollo nacional.

Aunque es claro que el proyecto de desarrollo regional tuvo éxito en lograr una tasa aceptable de recuperación de la inversión pública en Tierra Caliente, sus logros en inducir un proceso de crecimiento regional autosostenido fueron limitados. Desde que el área cultivable de la zona se estabilizó a un poco menos de 110 000 hectáreas, se ha visto poco aumento en la actividad económica; la suerte de la región depende en gran parte de la intensidad de las plagas de las cosechas y de las condiciones del mercado mundial del algodón, el melón, la sandía y el limón. Al completarse las inversiones iniciales en los servicios de procesamiento, hubo pequeñas construcciones adicionales de servicios productivos para la industria. Tampoco parece que en la región pueda haber un desarrollo ulterior de nuevas industrias en un futuro no muy lejano; otras industrias que debieran establecerse encuentran que el clima caliente y la falta de fuerza de trabajo estable y capacitado, son un serio obstáculo

⁵ Hay abundante bibliografía acerca de los problemas en México sobre la distribución del ingreso, que no sólo explica lo que pasa, sino que explora las razones de estos cambios. Véase, en particular a Tello (1971), Prieto Vázquez (1969) y Puente Leyva (1969).

para el desarrollo posterior. Un programa efectivo de descentralización regional o de desarrollo, debería incluir una reestructuración de la localización de todo programa de inversión pública nacional.

La reforma agraria pudo haber tenido éxito reduciendo la migración y estimulando el desarrollo regional en algunas de las partes más pobres del país. La distribución de tierras ejidales a un número mayor de campesinos fue efectiva en prevenir la migración de un gran número de personas a las ciudades. Sin embargo, esto se hizo a costa de aquellos que no abandonaron las áreas de subsistencia agrícola, rápidamente dejadas en el olvido. La concentración subsecuente de la inversión pública agrícola en algunas partes seleccionadas del país, dejó a la mayoría de los pequeños agricultores (y ejidatarios) a la zaga del desarrollo económico de la región. Al invertir sistemáticamente en grandes proyectos de irrigación y al desarrollar una tecnología intensiva en el empleo del capital para productos comerciales, el gobierno aseguró un aumento constante en la producción agrícola, pero no en el bienestar de toda la población agrícola. Como resultado, sólo 3% de las plantaciones (unas 75 000), que ocupaban 42% del área cultivada de México, produjo cuatro quintas partes del aumento del valor de la producción en México durante los años cincuenta (Eckstein, 1968); la concentración del ingreso dentro de la agricultura actualmente es mayor que en la economía como un todo, y la concentración de medidas de producción dentro del sector es, probablemente, más grande en la actualidad que en los albores de la Revolución.

El número de migrantes que atrajo la inversión pública a Tierra Caliente y otros programas de desarrollo agrícola a través del país, llega a ser aún menos significativo cuando se considera la fuga de personas del sector menos ventajoso de subsistencia agrícola el cual está constituido, en una buena parte, por el sector ejidal. El estancamiento de los ingresos de una gran parte de la gente del sector agrícola, contrasta fuertemente con el rápido crecimiento global de la producción agrícola. En general, éste es un problema que se ignora cuando se planea la asignación de la inversión pública y con frecuencia se lamenta en el análisis oficial de la economía mexicana (Navarrete, 1971).

Las inversiones en Tierra Caliente claramente se dirigieron a acumular una gran riqueza en la zona, pero sus beneficios se concentraron grandemente en manos de una minoría. Para llevar a cabo un programa de desarrollo regional efectivo, con oportunidades de empleo crecientes para las personas que no estén en posibilidad de participar en el surgimiento de la economía agrícola, hubiera requerido subsidios especiales y protección a las nuevas industrias para poder competir con los productores ya establecidos en las áreas más desarrolladas del país. Este tipo de

protección es semejante al que los países en desarrollo, incluyendo México, conceden a nuevas industrias; y la experiencia de Michoacán demuestra la necesidad imperativa de hacerlo. Como se muestra más abajo, esta medida no garantizaría que estas actividades contribuyeran a una redistribución del ingreso efectiva, a *menos* que se tomen pasos adicionales para proporcionar el acceso únicamente a grupos anteriormente marginados del proceso de crecimiento.

El reciente desarrollo de México se ha caracterizado por una tasa acelerada de concentración geográfica y personal de la actividad económica. Aparentemente cuando se llevan a cabo programas de desarrollo regional, éstos se seleccionan con base en su contribución al crecimiento económico nacional. En la mayoría de los casos no se proporcionan incentivos especiales y necesarios para el crecimiento regional. Tales programas, similares al proyecto de la cuenca del Tepalcatepec, podrían responder a las verdaderas necesidades de los habitantes de la región, pero el diseño del programa proporciona a la mayoría solamente beneficios menores, por ejemplo un mejoramiento en las condiciones sanitarias, mientras que canaliza sistemáticamente el grueso de los beneficios a grupos pequeños de inversionistas privados que ya participan en la estructura elitista de la sociedad.

Para cambiar la estructura se requerirá no solamente la garantía de recursos para personas que no tienen acceso competitivo al capital y a mercados de consumo, sino también una decisión explícita para dirigir partes sustanciales de la producción nacional hacia los grupos que estén fuera de la estructura actual del control político y económico. Estas innovaciones serían necesarias para una redistribución tanto personal y geográfica como de riqueza y poder.

6.7. CONCLUSIONES

La experiencia de la cuenca del Tepalcatepec no debe tomarse como un caso aislado de fracaso. No logró estimular el desarrollo “regional” ni reducir las desigualdades del ingreso. Detengámonos en los mecanismos que causaron dicha situación. México está en proceso de desarrollo capitalista al proporcionar estímulos a la inversión privada que, a su vez, proporcionará empleo y productos; ésta es la filosofía detrás del programa del desarrollo nacional. Sin embargo, esta filosofía se ha dirigido a un proceso de desarrollo con tendencias sistemáticas a concentrar el ingreso en manos de la clase media alta, a pesar de sus deseos expresos

de igualar el ingreso. La distribución del ingreso en México resulta muy concentrada en la actualidad cuando se compara con la de otros países industrializados o en proceso de industrialización en el Hemisferio, y durante los últimos veinte años esta tendencia se ha agudizado.

La política pública ha modelado la economía mexicana dentro de este patrón. Las medidas económicas subsidiaron inversiones nuevas y aseguraron tasas altas de rentabilidad a los capitalistas, mientras aumentan los costos al emplear fuerza de trabajo adicional; dentro de la fuerza de trabajo una élite se ha beneficiado de la legislación de seguridad social mientras que la mayoría de los trabajadores tienen que luchar penosamente por su subsistencia en ocupaciones marginadas y serviles. El crecimiento económico de México ha demostrado su incapacidad para proporcionar oportunidades de empleo suficientes a causa de los conflictos entre los intereses de los trabajadores y los capitalistas (Barkin, 1970). El sistema educativo refuerza este proceso al restringir el avance y al no proporcionar oportunidades a las personas de la clase media y baja (Barkin, 1971).

El mismo proceso se ha llevado a cabo en el ámbito regional. Las disparidades regionales aumentaron durante los primeros 60 años del pasado siglo, es decir, las diferencias entre los estados ricos y los pobres se agudizaron en cuanto se inició la industrialización. Esta disparidad es parcialmente el resultado de una serie de políticas que han colocado inversiones en algunas de las regiones subdesarrolladas sólo cuando han representado un claro beneficio para el desarrollo económico nacional. Las consideraciones regionales parecen ser secundarias y responden a necesidades políticas más que al deseo de lograr un equilibrio regional. El patrón de inversión refleja el poco deseo de sacrificar la tasa de crecimiento a corto plazo, a cambio de aumentar a largo plazo la igualdad entre regiones así como de una distribución más racional de la actividad económica y de la población. La estrategia actual consiste en subsidiar industrias y no regiones. (Hay una excepción: el Programa de Desarrollo Nacional Fronterizo se proyectó para contrarrestar la influencia del mercado norteamericano.)

Incluso el estímulo a la industrialización de nuevas áreas no implica necesariamente un mejoramiento en la distribución del ingreso dentro de estas áreas. Como se ha mostrado en el caso de la cuenca del Tepalcatepec, una parte considerable del aumento de la producción fue financiada por grupos que emigraron de partes más ricas del país. Sus recursos y experiencia ayudaron a aumentar la alta tasa de crecimiento de la región, pero también explica la concentración tan grande del ingreso que se observa actualmente. Este patrón de concentración es el resultado

directo de la actitud gubernamental que limita su papel al suministro de una infraestructura social y económica básica para la producción privada; ésta es una política que facilita la entrada a nuevas regiones y a nuevas industrias sólo a aquellos que tienen los recursos necesarios para financiar el crecimiento, o que pueden tener acceso al crédito.⁶ Quienes carecen de recursos o de acceso al crédito, son precisamente las personas que tendrían que beneficiarse de cualquier programa de redistribución del ingreso; sólo se beneficiarían si la intervención gubernamental ofreciera recursos productivos a los marginados.

Un programa eficaz de redistribución geográfica y personal requeriría no sólo la provisión de recursos a las personas que carecen de medios para producir y vender bajo condiciones comerciales; también sería necesaria una acción efectiva para impedir que las personas que ya están en los estratos más altos participen en los beneficios de estas nuevas empresas. Sin esta segunda acción las desigualdades existentes, que resultan de una mejor educación, mayor experiencia y mayores recursos financieros, indudablemente tendrían un efecto nocivo en la distribución final de los beneficios.

Parecería erróneo continuar basando esperanzas para una redistribución del ingreso, ya sea personal o regional, en la evolución normal de la economía capitalista. Mientras existan los grupos de ingresos más altos que han tenido acceso privilegiado a los mercados de capital, a los recursos educativos y a las nuevas oportunidades de inversión, el crecimiento económico dejará a los trabajadores a la zaga del desarrollo nacional. Esta posibilidad es todavía más seria durante el presente decenio que en el anterior, porque los sesgos de la tecnología moderna y de la eficacia de las políticas gubernamentales al estimular la inversión, reducen la capacidad de la economía para proporcionar suficiente empleo productivo.

En otros países en desarrollo, no comprometidos irrevocablemente con un desarrollo capitalista, la experiencia de México puede proporcionar algunas advertencias y puntos de guía para cualquier acción futura. La cuestión germinal planteada por Palerm en 1970 merece repetición aunque su respuesta es muy clara: ¿es el desequilibrio nacional un mero producto de la mala planeación, como sugieren algunos observadores, o, por el contrario, es el resultado de una planeación brillante pero guiada por objetivos poco acordes con los que se proclamaron en público? El desarrollo regional, como la redistribución interpersonal del ingreso, requiere una acción vigorosa del gobierno para *excluir* a las regio-

⁶ Este patrón parece repetirse de manera constante en la economía mexicana. Una discusión más amplia sobre este problema puede verse en Reyes Osorio (1966).

nes y a las personas más ricas de la participación del beneficio del desarrollo futuro. El poder y el bienestar deben redistribuirse, y esto requiere ciertamente un replanteamiento de la estrategia del desarrollo regional y nacional.

6. ¿QUIÉNES SON LOS BENEFICIARIOS DEL DESARROLLO REGIONAL?¹

El desarrollo, ya sea regional o nacional, es un proceso dual de enriquecimiento y cambio estructural. Por un lado, aumenta el ingreso al usar más productivamente recursos disponibles y acumulando recursos adicionales para aumentar la producción. Por otro lado, generalmente involucra la transformación de una economía de origen principalmente agrícola y de subsistencia a una estructura más diversificada en la que se genera un *superávit* que permite inversiones subsecuentes. Este proceso dual tiene su contraparte a nivel humano —un nivel a menudo ignorado por las personas interesadas en el desarrollo económico— que también involucra enriquecimiento y cambio estructural. En este caso, una nueva estructura social debe propiciar mayor movilidad social y una distribución del ingreso más equitativa.

Uno de los dogmas básicos del desarrollo económico ha sido la búsqueda desencadenada de niveles de ingreso más altos con el reconocimiento explícito de que esto puede, a corto plazo, causar algún deterioro en la distribución del ingreso —*id est*, mayor concentración en las manos de unos pocos—; los estudiosos creen, y los políticos lo afirman con agrado, que una vez solucionado el problema básico del ingreso bajo y de la tasa de crecimiento inadecuada, será más fácil atacar los problemas distributivos que el proceso de crecimiento inicial pudiera haber exacerbado, este ataque al problema de la concentración —sigue la sabiduría convencional— podría llevarse a cabo mediante un programa bien estudiado y diseñado de medidas impositivas y de gasto orientadas a redistribuir el ingreso.

Los programas de desarrollo regional pretenden reducir las diferencias de ingreso entre personas y regiones. Tales programas son necesarios porque el desarrollo capitalista crea desigualdades; éstas son el resultado de patrones autorreforzantes del crecimiento económico que generan la inversión y, a su vez, la reinversión de utilidades en los actuales centros de producción. El proceso de reinversión es un elemento importante para sostener el crecimiento económico y ayuda a explicar la manera en

¹ Publicado como el primer capítulo en D. Barkin (comp.) (1972), *Los beneficiarios del desarrollo regional*, México, Sep-Setentas. Disponible en Barkin (1976).

7. DESARROLLO REGIONAL Y REORGANIZACIÓN CAMPESINA: LA CHONTALPA COMO REFLEJO DEL GRAN PROBLEMA AGROPECUARIO MEXICANO¹

INTRODUCCIÓN

El agro mexicano está en crisis. Sus problemas no son nuevos, pero se agudizan: el ritmo de crecimiento de la producción ha disminuido; las exportaciones agropecuarias han perdido su dinamismo mientras las importaciones crecen; la agricultura de subsistencia está estancada, en tanto que la comercial goza de subsidios, de inversión pública y de recursos para ampliar su alcance y su control sobre el sector. La estructura de la producción sufre un cambio paulatino pero notable hacia productos de exportación y de consumo suntuario; la política oficial lo alienta canalizando créditos a la ganadería y sosteniendo altos precios para estos productos, a la vez que los productores de subsistencia tienen mayores problemas para conseguir los recursos que necesitan para mantener su producción. Como consecuencia, también hay una crisis social en el agro: el arrendatario y el campesino ven que su pequeña economía familiar es desplazada por nuevas formas de organización social, en las cuales carecen de control sobre el cultivo, la tecnología y aun sobre su propia participación en la producción; se transforman en asalariados, dependientes de una nueva burocracia estatal o empresa comercial, o en marginados sostenidos con subsidios oficiales o empujados hacia las ciudades perdidas que crecen alrededor de la capital de la república.²

El Plan Chontalpa es un buen ejemplo de estos problemas. Concebido en 1963 para resolver problemas, para romper cuellos de botella en el agro, el Plan ha absorbido 90 000 ha y 5 000 familias en un ensayo de modernización agropecuaria. Su propósito fue servir como modelo en la utilización del gran potencial productivo del trópico húmedo y para la reorganización del sector ejidal. Las nuevas unidades colectivas permitirían el manejo eficiente de grandes extensiones de tierra, sembradas con cultivos comerciales y labradas por los mismos ejidatarios, quienes dirigirían los ejidos colectivos. Hasta 1975 en el Plan se han invertido 1 500

¹ Publicado en *Comercio Exterior*, xxvii: 12, 1977, pp. 1408-1417.

² Para un análisis más extendido de esta problemática, véase Castell y Rello (1977).

millones de pesos, financiados en partes casi iguales por el gobierno federal (52%) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) (48%). Desde su inicio tropezó con grandes dificultades y no ha logrado sus metas relativas a la producción o a la incorporación de los ejidatarios a la gestión productiva. Los múltiples esfuerzos para reorganizarlo han conformado una estructura productiva eminentemente comercial, orientada hacia mercados extrarregionales, y la economía local padece de los mismos problemas de la nación en su conjunto: 1] creciente incapacidad de satisfacer las necesidades básicas de la población con la producción local; 2] proletarización del trabajo y 3] la marginación de numerosos campesinos del proceso productivo.

El Plan era parte de un importante esfuerzo del gobierno para modernizar el agro mexicano. La organización capitalista de la producción promueve la sustitución de la tecnología tradicional por una nueva tecnología y traduce rápidamente las señales de mercado en decisiones que cambian la estructura productiva, de acuerdo con demandas del mercado nacional e internacional; también alienta la expansión de empresas comerciales y organismos estatales que dirijan la producción en torno a sus propias metas y necesidades, a costa de los productores pequeños. Ellos pueden seguir trabajando sus tierras en forma parecida a la del asalariado o enfrentar la posibilidad de ser subempleados o desempleados en otra parte del país. Esta organización capitalista, sin embargo, no abarca todo el sector agropecuario porque una gran parte de sus recursos no son lo suficientemente valiosos como para merecer tal inversión; el desarrollo agrícola deja a los campesinos en las zonas más rezagadas con los peores recursos, sin oportunidades alentadoras a su vida de subsistencia.

Esta modernización no es producto casual de fuerzas aleatorias; más bien es resultado de un proceso deliberado de expansión capitalista hacia todos los rincones del país. La economía crece e incorpora nuevos recursos y grupos de personas al sector capitalista, sujetándoles a una racionalidad capitalista y despojando a los productores independientes de su capacidad de determinar el uso de sus recursos, aun cuando no puede desplazarlos de sus tierras por ser beneficiarios de la reforma agraria. La expansión capitalista, sin embargo, no es un proceso autóctono; el proceso en cada nación responde en gran medida a las necesidades de la expansión del capital en escala mundial. En México, la influencia del capital extranjero en el sector agropecuario es particularmente notable: hay mayor dinamismo en la producción de exportaciones porque son de mayor interés y rentabilidad al capital extranjero y gozan de más apoyo financiero; de igual manera, la ganadería recibe apoyo por el interés a

largo plazo de exportar ganado y por la necesidad de asegurar la oferta de suficiente carne a las capas nacionales acomodadas. Es imprescindible comprender la dinámica del sector agropecuario como parte de un proceso único de expansión del capital a escala internacional y analizar el efecto que éste tiene sobre la estructura de la producción y el bienestar de la mayor parte de la población mexicana.

En este capítulo examinamos el sector agropecuario a través del Plan Chontalpa. Su reorganización refleja las tensiones del sector y los problemas de producción, de mercados y de gestión. Los ejidos presentan problemas para la organización del trabajo, dado el papel que desempeña el campesinado con la producción capitalista. Sus problemas son los del sector y las soluciones adoptadas reflejan intentos tempranos del capital extranjero de influir en el desarrollo agropecuario, sin ser dueño de los recursos productivos en la zona.

7.1. EL DESARROLLO AGROPECUARIO

El Plan Chontalpa, lo mismo que los demás programas elaborados por la entonces Secretaría de Recursos Hídricos (SRH), respondió, en parte, a la perenne necesidad de promover la producción agropecuaria. El ritmo acelerado del crecimiento demográfico y los bajos niveles de alimentación de la mayor parte de los mexicanos, obliga a los gobiernos, desde la época cardenista, cuando menos, a impulsar la producción agropecuaria. Pero el sector primario también sigue teniendo gran importancia en México, por su contribución al crecimiento de la economía y a la acumulación de capital. Desde hace varios decenios, las exportaciones agrícolas han sido determinantes en el financiamiento de las importaciones de bienes de capital e intermedios para la industrialización. Las políticas de precios han logrado una constante transferencia de excedente económico del sector agropecuario hacia el industrial. A pesar de esta cuantiosa contribución del sector primario, la política de industrialización, por medio de la sustitución de importaciones y la promoción de exportaciones, no ha sentado las bases de un crecimiento autosostenido; se siguen agudizando los problemas de desempleo y subocupación, de concentración del ingreso personal y de desequilibrio en la balanza comercial. La inversión privada y pública de origen extranjero resulta, así, necesaria para impulsar el crecimiento y financiar los déficits en la balanza de pagos. Detrás de este marco, la agricultura retiene su importancia estratégica porque, al fracasar este modelo de industrialización,

constituye, junto con el petróleo, la única fuente potencialmente dinámica de divisas y es imprescindible que también logre abastecer las demandas internas de alimentos y materias primas.

En la agricultura el Estado cumple sólo parte de la tarea de promover la producción, pues por lo general ha dependido sobre todo de que los productores privados aprovechen adecuadamente las oportunidades productivas creadas por la intervención oficial.³ Estos esfuerzos públicos para facilitar el funcionamiento de la empresa privada en el sector agropecuario, generalmente han sido fructíferos. En efecto, desde los inicios de la Comisión Nacional de Irrigación (1927), una gran parte de la inversión total en el campo se destine, a la construcción de grandes obras de riego; han sido los agricultores privados —neolatifundios— los que, por razones bien conocidas y a través de mecanismos muy estudiados, han aprovechado este nuevo potencial productivo.⁴ Ellos han logrado que los nuevos distritos de riego sean en gran medida productivos y han contribuido en forma decisiva a la expansión agropecuaria. Una parte importante de esta inversión capitalista proviene de fuentes extranjeras, tanto de empresas agroindustriales transnacionales cuanto de créditos públicos canalizados a través de la banca mexicana, hacia aquellos renglones que las instituciones financieras estiman más convenientes.

El resultado ha sido bastante positivo: de 1935 a 1970 se logró aumentar el volumen de la producción agropecuaria a un ritmo anual de 5.2%, ligeramente superior al del crecimiento demográfico. Esto permitió que México siguiera siendo un país exportador de productos agrícolas y que la agricultura proveyera de materias primas a algunas de las industrias de transformación, como la textil y la alimentaria. Con las políticas actuales, que otorgan fuertes subsidios para la producción, la compra de bienes de capital (tractores, camiones y otros equipos pesados) y de insumos modernos (fertilizantes, semillas mejoradas, herbicidas y energía), no es de sorprender que los empresarios agrícolas tengan un índice de empleo por hectárea sustancialmente inferior al de los demás sectores de la agricultura mexicana.⁵

³ Para una discusión más amplia del papel del Estado en el desarrollo en México, véase el capítulo 6, “*¿Quiénes son los beneficiarios del desarrollo regional?*” en este libro.

⁴ El neolatifundismo es una categoría que se refiere a la concentración de un potencial productivo en el agro, generalmente asociado con la aglomeración de grandes superficies de tierra de manera “extralegal” y siempre incluyendo fuertes inversiones que permiten la utilización de tecnologías modernas y el empleo de asalariados.

⁵ Desgraciadamente, hasta el momento no se ha estimado el monto de estos subsidios ni existe un análisis de su efecto sobre el papel del capital extranjero en la reestructuración del agro mexicano.

Esto es natural, ya que en aquellas zonas donde existe completa libertad para organizar sus empresas, los capitalistas han logrado un alto grado de rentabilidad en el manejo del agro. Desde el punto de vista de la ganancia, tanto los subsidios para la compra de maquinaria cuanto los problemas de organización y de disciplina laboral, crean fuertes incentivos para el desplazamiento de la mano de obra en las labores agrícolas a gran escala, sobre todo en el noroeste, donde la tecnología moderna se adapta mejor a la organización capitalista del trabajo agrícola.

La consecuencia ha sido significativa: después de muchos años, durante los cuales se notó un gran dinamismo en la producción de granos para el consumo popular, la política agrícola cambió bruscamente, aleñando los productos suntuarios y de exportación. Como resultado, a partir de 1963 se registra un alto ritmo de crecimiento de la producción de productos de exportación, de productos industriales y de productos para las clases pudientes en México. Esto es resultado de las políticas agrícolas y de precios: mientras que se mantenían bajos los precios para productos primarios y subían los de los productos destinados a los grupos más acomodados y a la exportación, los productores comerciales respondían con cambios en la estructura de su producción. Desde el punto de vista de estos empresarios, el negocio seguía bien, pues las políticas de impulso a la producción y de precios les permitían aumentar sus ganancias, facilitando la reinversión y el crecimiento de sus empresas; los encargados de la política, por su parte, estaban satisfechos con el crecimiento de la producción y con la exportación que generaba las divisas requeridas por el crecimiento industrial.

Pero el crecimiento del sector neolatifundista no se ha extendido a toda la agricultura mexicana. La mayoría de los agricultores, tanto minifundistas como beneficiarios de la reforma agraria, sigue cultivando la tierra con técnicas tradicionales y no dispone de insumos mejorados y tecnología moderna. Estos productores no tienen la posibilidad de emprender cultivos costosos, como son los de exportación, por falta de acceso al crédito y a los conocimientos especializados y por el control monopolístico de los canales de comercialización. Se concentran básicamente en la producción de granos para el consumo familiar y para el intercambio en pequeña escala que les permite satisfacer sus demás necesidades elementales. Así, se puede entender el crecimiento del sector agropecuario como un proceso integral en que se alienta la producción comercial, por un lado, mientras que por otro se mantiene en el estancamiento al sector minifundista y ejidal. Esta misma política ha creado un grupo próspero y otro, más numeroso y creciente, de marginados, empobrecidos por la propia expansión del capitalismo en el sector primario.

Por esta misma razón la oferta de alimentos básicos ha perdido su

dinamismo a la vez que sigue aumentando la demanda de granos. Sin precios adecuados, los grandes agricultores prefieren la producción de otros cultivos de mayor rentabilidad. Aun cuando el gobierno elevó de manera notable los precios de garantía para algunos productos básicos en 1973 y se observó un fuerte aumento en la superficie sembrada con estos cultivos (maíz, frijol, trigo, cártamo, soya y ajonjolí), los cambios fueron temporales en los distritos de riego. Al recuperarse los precios relativos de los productos de exportación, los productores comerciales cambiaron una vez más la estructura de su producción. De esta manera se agudizaron las diferencias dentro del campo y aumentó la transferencia de recursos de la fracción más empobrecida del campo hacia los capitalistas industriales, por medio del sistema de precios. Los capitalistas industriales fueron beneficiados por la política de estabilización de precios urbanos para los productos básicos por su efecto en restringir los aumentos en los salarios de sus obreros. El resultado de este sistema fue la disminución previsible, por los sectores afectados, de la oferta comercial de productos primarios y el aumento de las importaciones de éstos para satisfacer las demandas más apremiantes de la población.

Ante este panorama, no debe extrañar que la política económica busque otros caminos para enfrentarse a los obstáculos estructurales que impedían la expansión del sector agropecuario. El capitalismo neolatifundista no puede incorporarse al ejido por razones legales y políticas y la absorción del minifundio es un proceso paulatino y prolongado. El arrendamiento ilegal de terrenos ejidales o la transferencia de los derechos de usufructo no son soluciones permanentes para impulsar el crecimiento de este sector, que actualmente ocupa más de 50% de la superficie total y de labor del país; las limitaciones económicas son grandes, ya que en muchos casos los arrendatarios no tienen garantías para realizar las inversiones fijas necesarias para mejorar la productividad de la tierra. Aún cuando los productores privados no han sido demasiado restringidos por la prohibición formal de la compra o del arrendamiento de terrenos ejidales o por la falta de inversiones fijas, las limitaciones institucionales en estas formas de ocupación de la tierra constituyen, en sí, un obstáculo casi insuperable para la expansión del neolatifundismo fuera de las mejores zonas productivas.⁶ El sector ganadero también se

⁶ El grado de arrendamiento y concentración de la tierra en los distritos de riego se exemplifica al señalar que en 1973 5% de los propietarios explotaba 37% de la superficie total, mientras que 86% de los usuarios disponían de 43%. El arrendamiento, por su parte, abarcaba en ocasiones a la mayoría de las tierras de riego del sector ejidal en varios distritos del norte y noroeste (Restrepo, 1976)

sintió frenado en sus posibilidades de expansión, ante la probabilidad de que, una vez hechas las nuevas inversiones en una ganadería más productiva, se expropiarán en beneficio de algunos de los grupos mayoritarios del campo que carecen de recursos propios.

Así, para los políticos, las posibilidades de seguir avanzando en el campo dependían, en gran medida, del aprovechamiento de zonas aisladas o subaprovechadas o de la reorganización de los sectores minifundistas y ejidales para aumentar su productividad por medio de la unificación de parcelas y la introducción de tecnología moderna a gran escala, es decir, de su integración cabal al sistema capitalista. Además, la falta de una infraestructura adecuada de caminos, de sistemas de riego y desagüe, de canales de distribución y comercialización eficaces, aparecía como un obstáculo a la expansión del aparato productivo capitalista en el campo.

7.2. LAS CONTRADICCIONES INTERNAS

Los problemas más agudos del desarrollo agropecuario mexicano no están aislados. Son producto de tendencias evidentes en la economía nacional y consecuencia de la influencia que ejerce el capitalismo internacional en el país. El creciente interés de las empresas agroindustriales originarias de los países industriales es producto del gran mercado mexicano para sus productos y de la abundancia de recursos naturales y mano de obra disponible que posibilita la exportación ventajosa de productos primarios o semielaborados. Más importante aún es la presencia extranjera, reflejo de la penetración capitalista: la movilización de recursos materiales y humanos y su transformación para servir a las necesidades de acumulación de capital a escala mundial. Sin entrar en gran detalle se presentan en este apartado ciertos procesos comunes de la expansión del capitalismo que condicionan la transformación de la economía nacional y la reestructuración del sector agropecuario.⁷

A medida que el crecimiento económico continúa, se ha registrado en México una acelerada concentración del ingreso personal (Banco de México, 1973). Hay diversos estudios y explicaciones de este fenómeno que se apoyan en la incapacidad del sistema impositivo para redistribuir

⁷ Para una discusión más extendida de este proceso, se recomienda la literatura sobre la internacionalización del capital en general y la referente especialmente a las agroindustrias. Véase, por ejemplo, los artículos de Palloix (1977), de Janvry y Garramon (1977), y Arroyo (1978).

el ingreso y en la falta de oportunidades de empleo para los grupos más necesitados. En el fondo, sin embargo, parece claro que es resultado de la centralización, en manos de unas cuantas personas, del control sobre los medios de producción en todos los sectores económicos debido al mismo proceso competitivo que cuenta con el apoyo de la política estatal.⁸ En el agro, por ejemplo, un décimo de las empresas agrícolas (los neolatifundistas) aportó 70% de la producción agropecuaria en 1970, mientras los minifundistas, en términos reales, cosecharon menos en 1970 que en 1960, a pesar del aumento continuo en sus números (Castell y Rello, 1977). De la misma manera, en 1965 menos de 1 000 empresas industriales (1% del total) vendieron las dos terceras partes de la producción manufacturera, y seis grupos bancarios controlaron tres cuartas partes de los recursos del sistema (Barkin, 1975). Evidentemente la centralización del capital ha seguido alejada de muchas maneras, en el decenio transcurrido desde que se hicieron estos estudios, dada la política de estímulos para la inversión privada, la política de precios y aun la de austeridad recién impuesta por insistencia del Fondo Monetario Internacional.

Los mismos factores que producen una pronunciada desigualdad en la distribución del ingreso personal llevan a un desarrollo desigual que también se manifiesta en la distribución espacial de las actividades (Corragio, 1974). Una gran parte de la actividad industrial se concentra en el Valle de México y otras tres o cuatro ciudades, mientras el grueso del crecimiento en la producción agropecuaria se concentra principalmente en los distritos de riego del noroeste del país. Estas zonas de crecimiento económico son también gran atractivo migratorio y como consecuencia se concentra en ellas una parte importante de las personas marginadas por el proceso de expansión del capitalismo que fueron expulsadas de las demás zonas.

Con la modernización de la agricultura en los distritos de riego y con la política económica de fomento a la agricultura comercial, ha habido un creciente desplazamiento de los pequeños agricultores y ejidatarios. Sus terrenos no alcanzan para sostener varias generaciones, a medida que crece la familia; incluso se han vuelto insuficientes para una sola, dadas las desfavorables condiciones de intercambio que prevalecen. Muchos campesinos se ven obligados a buscar trabajo como asalariados en el

⁸ El análisis marxista hace evidente el carácter superficial de conclusiones relacionadas con la distribución personal del ingreso y con la necesidad de examinar el control de los medios de producción —y del proletariado— para entender la dinámica a que se hace referencia en el texto

campo o en las ciudades. Expulsados del campo, se enfrentan a dificultades para encontrar trabajo en las ciudades.

La modernización del campo, a la vez, trae una transformación en la estructura productiva del sector agropecuario. Las distintas regiones del país se están especializando en diferentes productos agropecuarios y en gran parte su producción se orienta hacia la exportación, donde la ganancia es mayor. Así, las frutas y las hortalizas han tenido auge en el Bajío y en el norte del país; las grandes superficies para pastoreo extensivo se expanden para aumentar la cría de becerros, para la exportación en pie a Estados Unidos, mientras que las nuevas zonas productivas del sureste se abren a la explotación ganadera para el mercado interno. El proceso de especialización regional y los incentivos a la exportación son un resultado "natural" de la penetración del capitalismo y de una situación en la que las decisiones productivas obedecen a las "señales del mercado". La ausencia de un plan nacional restringe la injerencia del Estado en la programación de la producción agropecuaria y en la fijación de precios de garantía y de políticas crediticias; éstas son relativamente ineficaces frente a las señales de precios que provienen de los mercados internacionales y los abundantes recursos financieros de empresas transnacionales. Como consecuencia, el país experimenta crisis periódicas de abastecimiento de alimentos, resultado del uso de gran parte de sus mejores tierras para producir para la exportación. Esta estrategia ocasiona grandes riesgos en términos de fluctuaciones de demanda y precios. El mercado interno resulta un último recurso para el productor capitalista, una garantía cuando las mejores posibilidades de venta y ganancia en el extranjero se desvanecen.

Para que la agricultura capitalista funcione, requiere de una amplia y ágil oferta de créditos y de insumos que están controlados por intereses extranjeros. Una gran parte de estos recursos para la producción es del sector privado, en el cual la empresa transnacional tiene una influencia predominante. Aun cuando no son de participación mayoritaria en la producción, estas empresas disponen de financiamiento y de tecnología, conocen las ventajas de distintos sistemas productivos y tienen acceso privilegiado a las empresas productoras de insumos y maquinaria. También controlan los canales de comercialización, lo cual las coloca en una relativa posición ventajosa respecto a las nacionales. El sector público tiene limitadas posibilidades de responder a las demandas para promover el desarrollo; sus recursos siempre son escasos y tradicionalmente el sector agropecuario ha llevado la peor parte en la competencia con otros intereses nacionales para estos fondos, aunque en años recientes la prolongada crisis agrícola facilitó la asignación de mayores recursos a la

agricultura. Como ocurre en muchos otros países, la falta de fondos de inversión en México permite al Banco Mundial y al BID tener una influencia desmesurada en la elaboración de las políticas específicas de promoción agropecuaria para las líneas de crédito que ambos ofrecen para respaldar y complementar esfuerzos “nacionales”, en programas específicos que son de su interés. Ofrecen el financiamiento adicional para encauzar recursos nacionales hacia productos que estos bancos, junto con organismos como la Agencia para el Desarrollo Internacional (AID) de Washington, consideren conveniente, tales como los programas para productos de exportación y sobre todo para la ganadería. Así, la disponibilidad de los insumos fundamentales para la producción misma del país está controlada por grupos extranjeros, cuyos objetivos no siempre concuerdan con los mexicanos.

Esta dependencia se acentúa a medida que se sigue modernizando la producción. La tecnología necesaria para usar los nuevos insumos, cultivar grandes extensiones y aumentar o mantener la productividad, requiere de fuertes inversiones. La producción y el mercado para estos bienes están controlados por empresas transnacionales aun cuando hay una fuerte participación estatal; las transnacionales forman parte de los grupos que comercializan la producción o colaboran con ellos. Se ha creado una estructura monopolística, a escala internacional, que requiere de la participación de muchos trabajadores en México para la producción de bienes destinados a los mercados externos; los obreros están sujetos a un complejo sistema de control, disciplinados ante la amenaza del desempleo, por la organización del trabajo y por la sistemática explotación que les impide usar los conocimientos y la experiencia acumulados a través de años en la agricultura tradicional.

El resultado de este proceso es evidente. El país se enfrenta a una aguda crisis de abastecimiento a medida que su estructura productiva cambia. Los que fijan la política se encuentran en una contradicción generada por los conflictos de intereses entre los que quieren estimular la producción nacional de artículos básicos y los que pugnan por la especialización y la más plena inserción de la economía mexicana en la internacional. Los obreros y campesinos se dan cuenta de la existencia de un proceso que los manipula, quitándoles el poder de decisión y aun el control sobre la parcela a que tienen derecho. El sector agropecuario forma parte, pues, de una contradicción profunda: la economía se moderniza, integrando trabajadores y recursos mexicanos a un aparato productivo destinado a satisfacer demandas de mercados ajenos y a canalizar el control y los beneficios a unos pocos capitalistas extranjeros. La economía mexicana tiene una mayor capacidad productiva pero

menores posibilidades de movilizar sus recursos y su fuerza de trabajo para satisfacer sus propias necesidades.

7.3. LA PROMOCIÓN ESTATAL

Estas tendencias y contradicciones son bien conocidas en el país. El gobierno se muestra preocupado por la concentración del ingreso y de la actividad económica, por el creciente papel de la empresa transnacional en la economía y por la proletarización de la agricultura; pero orienta sus acciones a resolver otros problemas —estimular el crecimiento sectorial y las exportaciones— y en el proceso muchas veces contribuye a agudizar los demás. Esto no debe sorprender, ya que la dinámica de la economía capitalista produce estos resultados; el gobierno tiene bastante que hacer respondiendo a los obstáculos a que se enfrenta el crecimiento agropecuario como para cambiar la estrategia misma.

Se han escogido dos líneas principales para impulsar la producción: intensificar los programas de desarrollo regional y reorganizar las unidades productivas en el campo. La selección de estas líneas pone de manifiesto las limitaciones de otro tipo de estrategias que dependen del incremento del volumen de nuevos recursos materiales y humanos, como han sido los intentos de colonización, la exploración de áreas nuevas y la importación de recursos productivos. En cambio, las soluciones escogidas hacen hincapié en el mejor aprovechamiento de los recursos, existentes y conocidos, aumentando la productividad mediante programas de intervención oficial.

7.4. DESARROLLO REGIONAL

El desarrollo regional es una estrategia que intenta aumentar la infraestructura física e institucional, mediante la aportación de los recursos financieros y humanos necesarios para facilitar la producción rentable, en escala comercial. En general, como se mencionó antes, los programas de desarrollo regional no pretenden comprometer al Estado mismo en el proceso productivo; más bien, crean las condiciones idóneas para que los productores —ejidatarios, neolatifundistas y minifundistas— puedan aumentar los rendimientos físicos y sus propios ingresos.

Existen muchas razones para haber puesto tanto esfuerzo en la pro-

gramación regional en México; como estrategia tiene una historia de más de 30 años, pero se le ha prestado mayor importancia en los más recientes. Quizá uno de los más significativos es la fuerte concentración de la actividad económica en el centro del país, con la consiguiente migración que provoca un despoblamiento de zonas de gran potencial agropecuario subaprovechado. Se ha promovido la creación de parques industriales y ampliado el concepto de las zonas fronterizas donde se pueden producir bienes libres de impuestos para la exportación. En las zonas rurales se han intensificado las labores de promoción para la pequeña irrigación mientras que se han seguido realizando grandes inversiones públicas para la agricultura; en los distritos de riego resultan importantes las nuevas áreas de desarrollo agropecuario, por su aporte a la transformación de la estructura productiva. Es ahí donde se puede crear la especialización necesaria para fomentar la expansión del capital privado en el sector y promover las exportaciones.

El método que se utiliza para aprovechar los recursos desconocidos o subaprovechados es el de crear polos de crecimiento. El Estado invierte grandes cantidades de dinero en la infraestructura y en los preparativos necesarios para el comienzo de las actividades productivas organizadas por el capital privado o estatal. La nueva infraestructura facilita la extensión de una nueva organización de la producción a regiones aisladas, donde los grandes capitales cambian la forma de trabajo y convierten a los habitantes en asalariados. Este proceso no solamente modifica su condición laboral; cambia también su estilo de vida, insertándoles directamente en los canales de comercialización nacional mediante el debilitamiento de su capacidad para mantenerse autosuficientes. Su dieta, su vivienda y aun sus relaciones sociales tienen que adaptarse a las nuevas condiciones, conformadas por los esfuerzos oficiales para modernizar la estructura productiva e integrar plenamente a los campesinos y artesanos a la economía y política nacionales.

Actualmente se considera la inflexibilidad de la organización ejidal como uno de los más grandes obstáculos a la modernización del sector agropecuario mexicano. Más de la mitad de la tierra laborable del país está bajo la tenencia ejidal y no se le puede expropiar; una gran proporción de esta tierra está subdividida en pequeñas parcelas familiares, trabajadas con métodos tradicionales, donde se obtienen bajos rendimientos. Los contados casos de cultivo a escala comercial, como algodón, trigo y cártamo, sugieren que hay muchas otras oportunidades. Para el Estado, una de éstas es el reordenamiento de la tierra ejidal, para poder someterla a las nuevas modalidades de exportación, que permiten tanto la agrupación de las parcelas para su explotación en gran escala cuanto

la introducción de nuevos procesos de trabajo que faciliten la transferencia de parte del excedente generado por la modernización hacia los otros sectores donde se concentran las grandes capitales.⁹

Dentro de este marco, el ejido colectivo ha adquirido gran importancia, por ser una manera factible y atractiva de lograr la reorganización del sector ejidal. Se le concibe como una agrupación de ejidatarios en una sola organización, responsable del manejo de la tierra, para facilitar el aumento de la producción en el campo. Generalmente se supone que, como parte del modelo de transformación institucional, la creación del ejido colectivo debe contar no sólo con un pleno apoyo político, sino también con el compromiso de quienes se asocian para trabajar, lo que permite desarrollar una participación real del grupo en la toma de decisiones (Restrepo, 1976: 315). Pero este sistema trae consigo una posible contradicción: a la vez que se abre teóricamente la oportunidad de una mayor participación campesina en la gestión de una empresa productiva; en la práctica la introducción de un nuevo proceso productivo, en el cual los ejidatarios no tienen injerencia ni siquiera en las decisiones sobre el uso de su propia tierra, cierra dicha posibilidad. En efecto, la organización del trabajo de los nuevos ejidos está, en la mayoría de los casos, supeditada a la estructura productiva y la tecnología y las decisiones al respecto quedan fuera del control de los campesinos; asimismo, en el proceso de racionalizar la producción, la organización colectiva generalmente ocupa menos mano de obra y expulsa algunos obreros hacia otras zonas.

Sin embargo, la necesidad de reorganizar el sector agropecuario es tan apremiante que la organización colectiva tendrá que seguir siendo un instrumento de la política agraria, a pesar de la plena comprensión de esta contradicción entre los que toman las decisiones. Sería interesante examinar cómo se instrumenta esta forma de organización para tratar de atenuar algunos problemas o efectos nocivos.

7.5. EL PLAN CHONTALPA

Tanto la contradicción como las tendencias del desarrollo nacional se hacen evidentes en el Plan Chontalpa. Originalmente concebido como

⁹ Evidentemente, existen varias opciones para la reorganización del campo. La que se analiza aquí fue puesta en marcha por el régimen pasado en 800 ejidos. Para un examen de esta experiencia desde un punto de vista operacional véase Ecxstein (1976).

un programa de desarrollo regional (el Plan Limón, como primero se le conoció) tenía como propósito aprovechar un gran potencial económico para crear una agricultura diversificada, que daría pleno empleo a las 5 000 familias que viven en la zona. Por insistencia del BID se elaboró un proyecto congruente con las necesidades del momento: un programa de reforma agraria integral. La expropiación masiva de la tierra llevaría a una distribución equitativa, con obras de integración social que facilitarían el reacomodo de la población y su integración a la vida política de la región y del país.

El Plan contemplaba cambios ecológicos, económicos y sociales radicales. Los desmontes alcanzaron 40 000 ha, destruyendo el hábitat natural del cual se alimentaba la población. Con la construcción de la presa Raudales de Malpaso y la carretera del Golfo que unía el centro de la república con el sureste, se sentaron las bases para un aumento en la salinidad de las lagunas costeras y del manto freático, poniendo en peligro la producción de ostiones en un corto plazo y limitando la posibilidad de usar los nuevos pozos que se estaban construyendo para el riego. Pero estos cambios (algunos imprevistos) debían compensarse, según el pensamiento de los planificadores, con un aumento importante en el valor de la producción agropecuaria. Existía un detallado programa de reestructuración de la producción, que contemplaba arroz, maíz, cacao y hule hevea como productos principales, así como una gran variedad de otros artículos. Una pequeña parte de la zona tendría pastizales para mantener la ganadería extensiva que abastecería las necesidades locales.

La distribución espacial de la población se vio afectada por la construcción de 22 poblados nuevos, en los que actualmente viven casi 40 000 personas. Este reacomodo de la población permitiría que la Comisión del Río Grijalva proveyera un cierto mínimo de servicios públicos y sociales, como electricidad, agua, alcantarillado, escuelas, clínicas y administración pública. La organización familiar de la vida social y el trabajo también se vio transformada por la creación de sociedades ejidales que actualmente trabajan la tierra colectivamente. También se propuso la capacitación de los campesinos para que pudieran participar en la gestión productiva y en la dirección del Plan.

Tanto en los aspectos económicos como en los sociopolíticos, los planes originales han sufrido fuertes modificaciones. La concepción inicial de una zona de agricultura diversificada se alteró por la falta de apoyo oficial. Esto se manifestó en el retardo de la definición de la organización campesina y la falta de crédito. En su lugar, se optó por implantar la producción ganadera, que ocuparía más de la mitad de la superficie, complementándola con caña de azúcar que vendría a cubrir otra cuarta

parte. Los créditos para conformar este giro llegaron rápidamente, una vez que se había ganado el respaldo de los grupos de decisión a nivel nacional, quienes habían visto con cierta alarma la posibilidad de que una inversión de más de 1 000 millones de pesos fuera a beneficiar a una sola región en la cual tenían poca injerencia.

Tampoco se realizaron los propósitos iniciales de que hubiera una activa participación campesina en el manejo del Plan. Por un lado, la tecnología escogida no les era accesible, pues no sólo representaba un cambio brusco en términos de introducción de maquinaria y de insumos químicos, sino que también suponía el rechazo de sus conocimientos del clima y de manejo del ambiente. Los resultados técnicos y económicos no fueron buenos y los campesinos terminaron rechazando las posibilidades de aprender la nueva tecnología y utilizando sus conocimientos tradicionales en las parcelas familiares que se les entregaron. El Plan impedía la activa participación campesina dadas las exigencias institucionales de mantener control sobre sus respectivas áreas de autoridad; fue así como los técnicos y banqueros determinaron la estructura de la producción, el calendario de labores y la forma de realizar los trabajos del campo, a los cuales tenían que sujetarse los ejidatarios.

Los campesinos respondieron a esta situación con su único instrumento de resistencia: la negativa a cumplir con las demandas de trabajo. A pesar de la existencia de un instrumento legal que exige un mínimo de 140 días al año de trabajo en los ejidos colectivos, es muy frecuente que no pasen de 90 o 110. Así responden los ejidatarios a los bajos ingresos que reciben en muchas de las labores del campo. También encuentran fácilmente sustitutos que cubran sus deberes en el trabajo colectivo y en el trabajo de las parcelas familiares. Algunos, sin embargo, tienen acceso privilegiado a puestos de mayor ingreso y poder en los ejidos y organismos oficiales. Esto, junto con sus propios recursos, crea una nueva estructura de estratificación social que reproduce, dentro del Plan Chontalpa, el mismo patrón de creciente diferenciación social que se da en la nación: mientras que una pequeña minoría goza de ingresos relativamente altos, provenientes de sus “rentas” como socios ejidales y, en ocasiones, de sus trabajos especiales, la mayor parte son jornaleros, asalariados pagados por los ejidos o los bancos.

El Plan no ha logrado todavía hacer efectivo su potencial económico. Con la transformación de su estructura productiva, en 1970 se empezó a construir un ingenio azucarero y a preparar el terreno para la ganadería. Los rendimientos físicos de la caña en el campo y del azúcar en la fábrica son bastante bajos y obligan a subsidiar a los ejidatarios y al ingenio. Todavía es muy temprano para obtener ganancias de la ganadería, debi-

do a las fuertes inversiones requeridas en los primeros años. Se espera que los problemas técnicos de esta actividad se resuelvan en un futuro cercano. Con la expansión de la producción ganadera y el mejoramiento de las plantaciones de cacao, además de los planes para la agroindustria, los nuevos dirigentes del Plan tienen grandes esperanzas de que la zona sea rentable en 1977 (nunca se realizó esta etapa).

Desde afuera, el Plan tampoco presenta un panorama alentador. Los cambios sociales han colocado a la población en una posición confusa pues al mismo tiempo son socios en una empresa colectiva y jornaleros que dependen de la banca oficial; se les exige que participen en sus sociedades colectivas y se les niega la posibilidad de una injerencia efectiva. Fueron arrancados de una sociedad tradicional e insertados en la sociedad nacional en su eslabón más bajo. Económicamente, el Plan todavía no ha justificado la fuerte inversión pública ni ha generado las divisas necesarias para amortizar la deuda contraída para financiarlo. El costo por empleo creado es muy superior aun al que en los años sesenta presentaba la industria mexicana. En cuanto al ambiente, el Plan destruyó una gran selva sin remplazarla con una estructura equilibrada y todavía no pueden identificarse todos los daños. En el plano político, sin embargo, el gobierno sigue apoyando no solamente el concepto del ejido colectivo sino también el mismo Plan Chontalpa. Al comprender por qué, se entenderá un poco mejor la dinámica de la economía agropecuaria mexicana.

7.6. LA DINÁMICA AGROPECUARIA

No obstante la poca importancia relativa del Plan Chontalpa en el sector agropecuario mexicano, el esquema original y las modificaciones que ha sufrido son bastante reveladores de algunas tendencias importantes. Contribuyen a explicar la nueva estructura de la producción nacional; facilitan la comprensión de los efectos de los cambios tecnológicos y la organización del trabajo; finalmente, permiten un estudio más a fondo de la participación del capital extranjero en la conformación de la política económica nacional y en la producción.

No es por mero accidente que el Plan, a diferencia de los otros proyectos de desarrollo regional, fuera financiado con recursos internacionales. A fin de cuentas, este financiamiento y el apoyo del BID lo han sostenido, pese a la oposición inicial del Poder Ejecutivo Federal. En un primer momento, el Plan Limón fue concebido como un intento de “reforma

agraria integral” que pudiese servir como respuesta a las políticas de transformación estructural emprendidas por la recién nacida Revolución cubana, pues el BID fue creado para buscar opciones políticas que ofrecieran caminos alternativos al cambio social. El atractivo del Plan era, en aquel momento, la elaboración de un programa de reforma agraria integral que habría de beneficiar a un grupo rural, colaborando con el desarrollo del capitalismo privado regional. Fue precisamente este carácter local lo que creó la oposición entre las fuerzas políticas mexicanas y restringió los fondos para financiar la producción. El apoyo financiero solamente se recuperó cuando empezó a responder a ciertas necesidades de orden nacional y a tener congruencia con el patrón de expansión capitalista, promoviendo la exportación de productos agropecuarios y modernizando la agricultura tradicional para que generara nuevos excedentes económicos, transferibles a otros grupos.

El cambio hacia el desarrollo de la ganadería es un buen ejemplo de la injerencia de la economía internacional en la zona. Con la ventaja de un análisis más global del sector agropecuario, se puede afirmar que es parte de una estrategia internacional deliberada para aumentar la capacidad productiva de la ganadería mexicana y abastecer el mercado norteamericano con novillos para la engorda, producidos en el norte de México. Esto abarataría los costos de producción en aquel país y permitiría un uso más productivo de los excedentes de granos que se producen allí.¹⁰ A nivel nacional los mejores terrenos se hallan reservados a la producción especializada para la exportación, y la ganadería es un rubro de gran importancia, aunque también lo son los otros cultivos importantes de los distritos de riego. Con el uso de grandes extensiones en el norte de México para la cría de novillos de exportación, era imprescindible encontrar otras tierras que satisfarían el crecimiento de la demanda interna de ganado. El sureste o trópico húmedo fue seleccionado y la decisión fue financiada con créditos internacionales de la AID, el BID y el Banco Mundial y apoyada por el Banco de México por medio de su respaldo a la banca privada. Esta tendencia no significa un aumento sustancial en la oferta de carne para el mercado nacional; más bien representa la desviación de cierto potencial productivo hacia la satisfacción de las demandas de los mercados internacionales.

Esto se explica por la necesidad impostergable de encontrar nuevas fuentes de divisas, dada la severa crisis en el sector externo. La política

¹⁰ No es, quizás, una mera coincidencia que la Compañía Nestlé haya realizado inversiones en siete granjas lecheras en el Plan, como parte de esta reestructuración (véase Fernández Ortiz y Tarrio, 1977).

de sustitución de importaciones no logró reducir el déficit estructural y la política de promoción de exportaciones pudo aumentarlas sólo a un costo muy alto en subsidios. Con las políticas expansionistas de los años setenta la crisis se agravó y ni siquiera la devaluación de 1976 logró corregir el problema fundamental de una oferta inadecuada para la exportación. La incapacidad del sector industrial para responder a este problema, así como las limitaciones del turismo como fuente de divisas, han dejado al petróleo y al sector agropecuario como únicas fuentes importantes de las mismas. Así, la especialización regional que promueve la producción agropecuaria para las exportaciones constituye una parte importante de la política económica nacional.

Esta preocupación se manifestó claramente en La Chontalpa, con el cambio estructural de 1970. El viraje hacia la producción de caña de azúcar respondió a las esperanzas que tenía el país para cubrir parte de las cuotas de exportación transferidas de Cuba a otros países productores del dulce. En cuanto a la ganadería, orientada sobre todo al mercado interno, era necesario impulsarla porque las otras regiones estaban dedicándose a la exportación. Los mecanismos para realizar esta transformación fueron casi exclusivamente financieros: de repente había el crédito refaccionario para la ganadería y los directivos del Plan lo aceptaron.¹¹ El control de las fuentes de financiamiento agropecuario, así como la influencia de la banca internacional y el capital extranjero, en la conformación de una estructura productiva mejor adaptada a las necesidades del sistema capitalista internacional, son de gran importancia.

La restructuración productiva no pudo haberse dado, sin embargo, sin cambios radicales en la organización de la producción en la zona. Era necesario ejercer un control centralizado de los ejidos colectivos, por parte de las instituciones gubernamentales, para garantizar así la instrumentación del nuevo programa en todas sus facetas. También era imprescindible la implantación de un nuevo proceso de trabajo que permitiera el cultivo de productos destinados a mercados en otras regiones o países. Aunque la historia de las transformaciones institucionales resulte interesante en sí, por ahora parece suficiente presentar su resultado: la formación de ejidos colectivos controlados completamente por instituciones oficiales.

¹¹ La importancia de la ganadería tropical para el mercado interno y del financiamiento internacional fue confirmada en un seminario patrocinado por el Fondo de Garantía y Fomento para la Agricultura, Ganadería y Avicultura (FIRA) del Banco de México en 1976. Véase Secretaría de Agricultura y Ganadería y Banco de México (1976), uno de los tomos de esta publicación, el titulado *Desarrollo en general de la ganadería en los trópicos y financiamiento de la producción* es de especial interés.

El ejido colectivo permite superar las actuales limitaciones de la modernización del campo mexicano. El reparto masivo de la tierra en pequeñas superficies no permite una coordinación de los productores individuales; su reunificación sólo es posible en el marco del ejido colectivo, o de alguna otra forma parecida, ya que la transformación del ejido en propiedad privada no es políticamente posible. Pero con una organización colectiva no sólo es factible unificar parcelas individuales para la producción en gran escala, sino también modificar el proceso del trabajo para asegurar el cumplimiento de las labores del campo, aun cuando los mismos ejidatarios no estén dispuestos o no sean capaces de ofrecer toda la fuerza de trabajo requerida en los campos. De hecho, el ejido colectivo es un instrumento muy útil para alentar la expansión capitalista en el campo mexicano: permite reorganizar el proceso de trabajo utilizando la nueva tecnología en nuevas unidades productoras, más idóneas para la producción capitalista, convirtiendo a los ejidatarios en asalariados rurales y facilitando la contratación de jornaleros eventuales para suplir la oferta estable cuando se presenta la necesidad. El ejido colectivo es un buen marco institucional para imponer cierto control sobre la producción agropecuaria, sujetándola a una racionalidad capitalista ligada directamente a procesos internacionales.

Es interesante anotar, un poco al margen, la semejanza de este proceso con algunas de las transformaciones que se dieron durante la revolución industrial inglesa en el siglo XVIII. Se afirma, por ejemplo, que una parte importante del contenido de las modificaciones tecnológicas en aquel entonces tenían que ver no tanto con un mejoramiento en la productividad del trabajo, sino más bien con su aportación a la reorganización del trabajo. Es decir, la nueva tecnología permitía la concentración de los artesanos bajo un solo techo, con el control del capitalista quien pudo asegurar que los obreros se dedicaran todo el día a las labores manufactureras en lugar de pasar parte del día en el ocio o en actividades agropecuarias que eran sólo de beneficio familiar. La nueva tecnología acabó con el trabajo a domicilio, en el cual los capitalistas no podían controlar directamente el proceso de trabajo. Tenía ventajas no tanto por su aportación a la productividad laboral por unidad de trabajo, sino por la facilidad con que podía vigilarse al obrero y sujetarlo a la disciplina fabril, alargando de hecho el día laboral (Marglin, 1974).

En La Chontalpa también se observa un cambio importante en la organización de la producción mediante el uso de nuevas tecnologías, cuyas ventajas no se manifiestan en la productividad por hectárea; más bien contribuye a reorganizar el proceso laboral. Se sujeta a los obreros al control de la banca oficial, en este caso, y a los capitalistas privados en

otros, quienes imponen nuevas normas de trabajo. Se establecen metas en cuanto al trabajo físico por persona, basado en un sistema de remuneración a destajo que obliga al jornalero a cumplir o a recibir un sueldo inferior al mínimo que rige en la zona. De esta manera se convierte al agricultor tradicional en proletario, obligándolo a autodisciplinarse. En la medida en que no es eficaz, y en La Chontalpa el éxito es poco en lo que refiere a los socios del Plan,¹² la banca simplemente exige la contratación de otros jornaleros, entre los muchos subempleados de la zona, para el pleno cumplimiento de sus programas de cultivo. Así, la baja productividad laboral y la resistencia de los “beneficiarios” del Plan afecta muy poco la rentabilidad de las inversiones productivas.

La nueva organización del proceso productivo también facilita la explotación de superficies mayores. El capitalista puede aprovechar la nueva infraestructura, aumentando sus recursos financieros y reclutando nuevos cuadros de jornaleros del creciente grupo de marginados atraídos a la zona por el programa de inversiones públicas. Una comparación de los rendimientos físicos obtenidos por los socios en sus parcelas individuales, explotadas con tecnología tradicional, y en los terrenos colectivos donde funciona la nueva tecnología, muestra la poca diferencia (a veces son mayores en aquéllas). Así, en La Chontalpa, como en muchas otras partes del campo mexicano, la reorganización del trabajo no parece responder tanto a preocupaciones por la productividad de la tierra cuanto a la posibilidad de expandir el control capitalista a nuevas zonas, con las ventajas que aporta al proceso global de la acumulación de capital. Los capitalistas dirigen la expansión del cultivo y canalizan los beneficios hacia otros sectores donde puedan apropiárselos más fácilmente, sin necesidad de compartirlos con los asalariados (socios del Plan) que están trabajando en sus propios terrenos colectivos.

La nueva tecnología y el proceso productivo alientan también el crecimiento de las agroindustrias. El cultivo en gran escala y el uso de fertilizantes y plaguicidas crean una demanda de los productos controlados por empresas transnacionales. Obviamente, su uso aumenta los costos de producción, algunas veces en forma dramática, reduciendo las ganancias para los ejidatarios. En La Chontalpa el alza en los costos ha llegado a

¹² Mientras que los socios mantengan cierto poder político, siempre tendrán la posibilidad de exigir mayores pagos, en la forma de “utilidades” o de cuotas por el uso de sus terrenos, que les darán cierta libertad en cuanto a la necesidad de someterse al régimen proletario que se está extendiendo en la zona. Ellos constituyen, sin embargo, un grupo excepcional al que seguramente no le será permitido seguir viviendo de sus “rentas” durante mucho tiempo.

tal grado que un buen número de cultivos ya no es rentable. Así, aun cuando los rendimientos físicos puedan elevarse, la utilidad disponible para los trabajadores no aumenta en términos reales; el nuevo valor adicional producido se destina al pago de los intereses bancarios, los insumos químicos, la maquinaria, etc. Las empresas transnacionales se benefician directamente, o por medio de sus socios nacionales, dada su posición monopolística en los mercados nacional e internacional. Para los ejidatarios, el nuevo estilo tecnológico no sólo es un mecanismo para convertirlos en proletarios, quitándoles la independencia de los campesinos tradicionales, sino también es un sistema de producción que canaliza una gran parte de cualquier aumento en el valor agregado hacia grupos pudientes que pertenecen a otros sectores económicos.

Es importante señalar la diferencia entre este proceso y otro conocido como capitalismo de Estado. En efecto, la gran injerencia del gobierno en la realización del Plan, en la reorganización de los ejidos y en la organización y financiamiento de la producción, permitiría suponer que los beneficios se canalizarían hacia los grupos oficiales y el proyecto reportaría grandes ventajas para los burócratas y técnicos que allí trabajan. Pero éste no es el caso: hasta el momento, el Plan ha creado muchos problemas para todos los grupos oficiales comprometidos con él, ocasionando mucha inestabilidad laboral y grandes pérdidas financieras. Más bien, es conveniente analizar la intervención oficial como un esfuerzo que prepara el terreno para la participación del sector privado en una empresa productiva que reporte ganancias; las acciones gubernamentales se limitarían, en esta concepción, a aquellas actividades que no son rentables o que presentarían problemas de índole política con la gestión privada. En este caso, las actividades en que participa el sector privado incluyen la venta de insumos y maquinaria y la comercialización de la producción.¹³ El gobierno se ha preocupado por financiar gran parte de la producción, actividad que no ha dado resultados, y organizarla, incluyendo la reestructuración de los ejidos. Con esta perspectiva, es evidente que el Estado, una vez más, absorbe aquella parte de la actividad económica que presenta graves problemas, minimizando el riesgo de la empresa privada, nacional e internacional.

A fin de cuentas, la modernización de la agricultura lleva implícita una contradicción profunda, pues la promesa de mayores ganancias para los productores pequeños, de una mayor participación en la toma de deci-

¹³ La Nestlé opera siete granjas lecheras en la zona y su presencia ha ocasionado grandes problemas políticos para la empresa y los directivos del Plan, pues ha sido obligada a abandonar cuatro de ellas a pesar de su aparente rentabilidad empresarial.

siones productivas y de un mejoramiento en los niveles de vida, se enfrentan en la realidad a un nuevo proceso autoritario que impone una tecnología, un proceso de trabajo y una estructura de mercados sobre los cuales el agricultor no puede ejercer control alguno. En el caso de los ejidatarios de La Chontalpa el resultado ha sido una “modernización” de su vida social y económica, con todos los beneficios y contradicciones que esto implica. En su conjunto, el Plan refleja la tendencia más amplia de la agricultura nacional: su control por grandes capitales y su creciente integración en la división internacional del trabajo.

7.7. UNA EVALUACIÓN

Para un buen número de analistas nacionales estas tendencias no son causa de preocupación. Ellos consideran que la inserción de México en la economía capitalista internacional, con sus consecuencias positivas y negativas, es saludable para el avance del país. Citan, sobre todo, la contribución en términos de exportaciones, empleo y mayores ingresos que generan las actividades exportadoras. Ven con cierta complacencia el éxito con que México ha podido seguir aumentando sus exportaciones y diversificando el número de productos y mercados, aunque reconocen la importancia del estadunidense y el papel de unos cuantos productos.

Pero detrás de este éxito hay un sinnúmero de problemas a los que estos analistas no dan mucha importancia. El mayor impulso a la ganadería en el sureste para abastecer el mercado interno, requiere el desmonte masivo del trópico húmedo. Las consecuencias de la desforestaron son enormes, tanto por la pérdida de la riqueza silvícola como por los cambios en la ecología, en los vientos y en las lluvias. Las modificaciones occasionadas por el desmonte trascienden los límites regionales y los conocimientos al respecto son todavía muy limitados.

El efecto social de la modernización del agro y su inserción en los mercados internacionales también son motivo de preocupación. Se quita el control del uso de la tierra a los campesinos, convirtiendo a la mayor parte de ellos en jornaleros. Pero el avance del Plan no puede garantizarles suficiente empleo aun en su región de origen, y se les expulsa hacia la ciudad, donde crean “cinturones de miseria” (como también se les llama en La Chontalpa). Algunos pueden obtener mejoras por las oportunidades que se crean, pero la mayoría queda sometida al régimen proletario, con la inseguridad e inestabilidad que acarrea.

Para la economía nacional, la especialización trae consigo una profun-

da crisis de abastecimiento. La producción comercial destinada a la exportación está sujeta a los altibajos del mercado internacional que ni el país y aparentemente tampoco un grupo de países pobres, pueden controlar. La rentabilidad de las cosechas depende de la oferta de otros países, de ciclos económicos en los países compradores y del control que sobre el mercado pueden ejercer uno o más grupos económicos poderosos en la economía mundial. También implica que el país sea menos capaz, año tras año, de abastecerse con los productos que requiere para su propia alimentación y desarrollo económico. La creciente incapacidad del país para abastecerse a sí mismo provoca otros problemas en la política económica que a veces no se consideran al evaluar las políticas de desarrollo agropecuario.

Finalmente, la nueva tecnología y los insumos modernos que facilitan la transformación de la estructura productiva traen otros problemas. Requieren de fuertes importaciones e inversiones de capital extranjero que contribuyen a desequilibrar la balanza en cuenta corriente. Fomentan el crecimiento de empresas que van conformando la estructura productiva y aceleran las otras tendencias citadas. Es decir, a medida que se fortalece la agroindustria con fuerte participación extranjera, también se agudizan los problemas de abastecimiento nacional y de control sobre el proceso y la estructura del crecimiento económico nacional.

Es importante señalar, sin embargo, que todo este proceso de mayor penetración del capital internacional en el agro mexicano, así como la transformación en la organización del sector y en el proceso de trabajo, no es producto de una gran conspiración; más bien responde a la expansión inexorable del capitalismo. Esto no quiere decir que el país no pudiera frenarla, o aun luchar para cambiar o limitar sus efectos en el ámbito nacional. En México, los políticos no ven con alarma este proceso; el actual régimen más bien está alentando el proceso mediante la implantación de una política de austeridad y recuperación económica que tiene como base importante la participación activa del capital extranjero.

La Chontalpa es particularmente interesante a este respecto. La mayor parte de su producción no se destina a la exportación y hay relativamente poca participación directa del capital extranjero. A pesar de eso, el Plan refleja cabalmente los esfuerzos del capitalismo internacional para transformar la agricultura: su actual estructura productiva es congruente con un modelo de evolución del sector más adecuado a las necesidades de exportación; sus socios están en proceso de convertirse en proletarios; su organización del trabajo está sujeta al control de los grupos financieros. Aparentemente no es necesario que todos los elementos del aparato productivo sean controlados por el capital extranjero para que le sirvan

de apoyo; este caso muestra cómo la transformación del Plan en un “emporio capitalista” plenamente insertado en la economía nacional, permite tanto una coordinación (por intereses particulares) que libera los recursos de otras regiones para la exportación cuanto la explotación comercial por el capital extranjero.

Los actuales dirigentes del Plan tienen gran confianza en que podrán resolver algunos de los problemas técnicos. El éxito económico se logrará mediante la producción de ganado y caña de azúcar y la construcción de nuevas agroindustrias. Para ello tuvieron que destruir la concepción original, pues contradecía el modelo nacional, ya que tenía un carácter cuyos beneficios locales eran demasiado restringidos para las necesidades de acumulación de capital a escala nacional e internacional. El éxito trae consigo problemas sociales al dar origen a la falta de empleo y de ingresos seguros para la mayoría así como al despojo de los campesinos del ejercicio de sus derechos ejidales. Todavía queda por probarse si el Plan producirá los beneficios económicos que se esperan.

En La Chontalpa se ve claramente el avance del capitalismo mundial en México. El Plan fue reorganizado radicalmente para hacerlo congruente con la nueva estrategia agropecuaria nacional. Los ejidatarios de la zona tienen cierta posición privilegiada por el carácter experimental del proyecto, pero a fin de cuentas el Plan es y seguirá siendo un buen ejemplo del efecto social, político y económico de la expansión del capitalismo mundial a nivel local.

8. PARÁBOLA DE LA REGIÓN Y LOS EMPORIOS¹

8.1. EL DESARROLLO REGIONAL EN MÉXICO

Es tradicional hablar del desarrollo regional en México haciendo referencia al aprovechamiento cabal de los recursos hidráulicos. Este interés se reflejó institucionalmente en 1946, con la creación de la Secretaría de Recursos Hidráulicos —sucesora de la Comisión Nacional de Irrigación— dentro de la estructura política y administrativa nacional. Pero más que un cambio administrativo, el hecho simbolizó un nuevo enfoque y la importancia concedida al desarrollo agropecuario mediante el desenvolvimiento productivo de las cuencas hidrológicas que, a su vez, servirían como motor del incipiente desarrollo industrial, aportando el fluido eléctrico generado por las grandes presas. El amanecer de la nueva época trajo la creación de numerosos distritos de riego donde se concentrarían los recursos públicos y privados para impulsar la transformación del campo mexicano.

Fue un periodo de optimismo: se echaba a andar un nuevo patrón de crecimiento capitalista que ahora se conoce como “desarrollo estabilizador”. En 1962, los incrementos en la productividad agrícola y en la oferta interna de productos de consumo básico y de exportación, permitieron a destacados políticos declarar que el problema alimentario mexicano estaba resuelto. Según estas versiones, el sector agropecuario no sólo era capaz de alimentar a la población nacional, sino de generar también las materias primas y las divisas necesarias para el incipiente proceso de industrialización. El perfil geográfico del país evolucionó también de acuerdo con esa visión. Se crearon “polos de desarrollo”, centros de gran efervescencia económica, resultado de las obras públicas y los generosos incentivos oficiales para la inversión privada en actividades dirigidas a estimular la agricultura comercial. Esta política alentaba el neolatifundismo, es decir la expansión del capitalismo al agro con los resultados —casi inevitables— de concentración y centralización del control de los recursos más productivos (tierras óptimas, crédito, maquinaria, fertilizantes, etc.). Las cuencas y los nuevos distritos de riego constituyeron verdaderos

¹ Publicado en *Nexos*, núm. 35, 1980, pp. 27-38.

emporios capitalistas, atrayendo capitales nacionales y extranjeros para impulsar el desarrollo agrícola. El proceso fue particularmente virulento en el noroeste del país; ahí las milagrosas semillas mejoradas de trigo lograron no sólo el florecimiento del desierto, sino que produjera también jugosas ganancias para un nuevo grupo de capitalistas nacionales y extranjeros. Aunque la intención era crear una próspera zona de agricultura campesina, el capitalismo nacional e internacional la transformó a su antojo en región ganadera, con deplorables consecuencias humanas y ecológicas.

8.2. UNA CRISIS EN CINCO MANIFESTACIONES

Es bien conocida la contraparte urbana de este desarrollo agropecuario. La macrocefalia que abruma al área metropolitana de la Ciudad de México es el otro lado de la misma política que hizo la prosperidad de los agricultores modernos: otorgando incentivos a la producción, la inversión, el crecimiento y constriñendo al obrero y al campesino. Del mismo modo que el Distrito Federal (actualmente Ciudad de México), se fueron expandiendo desmesuradamente otros centros circunvecinos importantes, como Puebla, Toluca, Querétaro, y las áreas de Guadalajara y Monterrey. Existía un conocimiento de los peligros que podría acarrear este patrón de crecimiento; no hubo, sin embargo, la más mínima posibilidad política de evitarlos.

De modo que hicieron explosión las mismas contradicciones del proceso. En varios planos, las presiones y tensiones se unieron para obligar respuestas. Respuestas parciales, orientadas a resolver problemas aislados, incapaces de poner un dique a la crisis social en su conjunto conforme muchos negaban su existencia y los demás no proponían soluciones alternativas factibles para quienes estaban comprometidos con las estructuras existentes.

La crisis se manifestó de diversos modos. 1] La migración rural-urbana no sólo ofreció un material abundante para los antropólogos de la “cultura de la pobreza”, sino que ensanchó la población y el área física de las principales zonas metropolitanas del país. Los asentamientos espontáneos en las “ciudades perdidas” instalaron un fenómeno de significación mayúscula en el panorama nacional.

2] Una crisis ascendente de producción alimentaria. Como parte de la misma política de impulso a la industrialización y a la exportación de materias primas, la agricultura tradicional —sustento de la dieta básica

del pueblo mexicano— se vio fuertemente afectada y se mostró incapaz de seguir ofreciendo los productos básicos necesarios para el mantenimiento de la población. La agricultura de exportación prosperaba, mientras los campesinos y sus zonas de producción eran abandonados progresivamente.

3] Un déficit estructural en la balanza de comercio exterior del país. Se trata del fracaso de la estrategia original de sustitución de importaciones para reducir la brecha comercial, y de la ausencia manifiesta de una política de estímulos a la producción para la exportación. En este contexto, el sector agropecuario financiaba la importación continua de los bienes de capital e insumos intermedios, necesarios para la expansión del aparato industrial nacional.

4] Una crisis de confianza en el sistema, manifiesta en movimientos de franca insurgencia. El movimiento del 68 fue su expresión más significativa, y le siguieron la organización sindical y los movimientos campesinos, asumiendo distintos papeles contestatarios en los años siguientes a su fundación. Todos estos movimientos reflejaron la creciente polarización del país y la desconfianza de importantes grupos sociales en la capacidad del gobierno para enfrentar las distintas demandas con respuestas constructivas.

5] Un patrón de industrialización concentrada geográficamente y controlado por unos cuantos grupos de capitalistas nacionales y extranjeros. En ausencia de una política de descentralización, las normas establecidas ofrecieron fuertes ventajas a la aglomeración urbana: tarifas bajas para servicios y productos esenciales, acceso privilegiado a los centros del poder. Los tibios ofrecimientos de las administraciones estatales de terrenos baratos y exenciones de impuestos no lograron hacer un contrapeso frente a las ventajas de los centros ya establecidos. La política de desarrollo fronterizo tampoco generó el empleo o la revitalización esperada por los autores del programa; la franja fronteriza sigue siendo un importante problema socioeconómico para la política nacional.

El entierro de la concepción que inicialmente ceñía el desarrollo regional fue un corolario de la misma crisis. Podría fijarse su fecha en 1977, con el acto administrativo que fusionó a la Secretaría de Recursos Hídricos con la Secretaría de Agricultura y Ganadería. Esa vida limitada de treinta años mide con bastante exactitud el auge y fracaso de la política de localización industrial fundamentada en algunos distritos de riego.

8.3. LA INTERNACIONALIZACIÓN DEL ESPACIO MEXICANO

La nueva visión del desarrollo regional no apareció de golpe. Y las autoridades nacionales tampoco la han formulado en un programa coherente y articulado. Como sucedió con los programas de la posguerra, ha sido más bien un producto derivado de la estrategia nacional de crecimiento económico, una estrategia que tampoco ha sido explicitada a pesar de las numerosas publicaciones de planes sectoriales y, recientemente, del Plan Global de Desarrollo, 1980-1982. La nueva estrategia no es producto de una apertura hacia la economía mundial ni, internamente, hacia los sectores privados nacionales del régimen actual. El proceso viene desarrollándose desde todo el decenio anterior: con una creciente conciencia de las limitaciones de un estilo de desarrollo “hacia adentro”; paulatinamente se comenzaron a tomar medidas cautelosas para abrir la economía a los vientos de la competencia internacional; vientos que aceleraron el proceso de concentración y centralización del control monopolista en sectores importantes de la economía, incluyendo la agricultura moderna, la industria pesada, la industria de bienes intermedios para la producción de artículos de consumo inmediato, y la aún floreciente industria moderna de bienes de consumo. La estrategia no fue solamente producto de decisiones políticas internas; también se derivó de la aceptación implícita (y luego explícita) de la creciente inserción del país en la economía internacional de la internacionalización de la economía mexicana. Esto quiere decir que se generaron las condiciones conducentes para hacer coincidir con felicidad los intereses del gran capital nacional y el transnacional. La estructura productiva nacional tuvo que transformarse aceleradamente para acoplarse a las necesidades y conveniencias de la nueva división internacional del trabajo, al servicio de una clase capitalista que opera independiente —y por encima— de toda frontera nacional.

En el plano geográfico esta internacionalización está generando transformaciones mayores. Al reconocer la imposibilidad de seguir alentando el crecimiento de los actuales centros urbanos, se intenta promover, con una gran variedad de medidas fiscales, la descentralización de la industria nacional. Siguiendo con la idea de crear polos de desarrollo, se ha reforzado el programa de incentivos (subsídios) para asegurar el éxito de algunos parques industriales importantes en ciudades secundarias como San Luis Potosí, Saltillo o Monclova entre otras. La gigantesca inversión federal en la zona de Lázaro Cárdenas, Michoacán, también es foco de esperanza para los nuevos planificadores que van adicionando su compromiso en la zona con inversiones pesadas de múltiples empresas estatales en pleno auge.

8.4. EL REGRESO DE LOS EMPRESARIOS

Los problemas sociales, y sobre todo laborales, surgidos a raíz de la expansión del Programa Nacional Fronterizo, volvieron aconsejable su reconceptualización. Los problemas surgieron a pesar de que el programa logró crear unos 150 000 empleos y limitadas divisas en condiciones demasiado especiales como para representar una solución a problemas nacionales apremiantes. Además, el gobierno y los inversionistas reconocían que el mercado nacional era potencialmente tan importante como el de exportación; de modo que se redefinió el concepto de maquiladores, permitiendo su establecimiento en el interior del país para facilitar la generación de economías de escala y aglomeración que impulsaran el desarrollo industrial descentralizado.

La abierta colaboración del sector empresarial nacional y transnacional con el gobierno en turno favoreció otro viraje de la problemática industrial. Los primeros pasos inciertos de los empresarios de Monterrey y el Distrito Federal (actualmente Ciudad de México) para salir de las sombras, declarando abiertamente su poderío y su creciente dominio en la economía nacional, facilitaron la formación de importantes grupos económicos (conglomerados) que integraron las principales empresas con los nuevos complejos financieros (multibancos). Así empezaron a diversificarse sus imperios económicos y ellos a implantar nuevos patrones de control social y sindical; de esta manera provocaron una agudización de las tensiones industriales, ya deterioradas por la política abierta de restricción salarial impuesta por el Fondo Monetario Internacional y recogida por el actual régimen político. El resultado fue el principio de una verdadera descentralización industrial en ciudades secundarias que efectivamente dispersarán la localización industrial.

8.5. PETRÓLEO Y ALIMENTOS

El auge petrolero y las fuertes inversiones complementarias que supone, ha propiciado también la reconformación del espacio nacional. Ya sobra especificar la magnitud de este auge, cuyos efectos han alcanzado directamente a quienes vivimos en el territorio nacional. El impacto inflacionario a nivel nacional rebasa las posibilidades de las autoridades monetarias para controlarlo, no sólo por su timidez y su compromiso descarado con la teoría monetarista de política económica, sino por su adivinable falta de sensibilidad frente a las reacciones a largo plazo de la

represión económica de las clases proletarias y campesinas. Las zonas afectadas directamente por los descubrimientos (Tabasco, Chiapas, Campeche y ahora Chicontepec) constituyen verdaderos desastres ambientales y humanos; sus moradores padecen desempleo, pobreza, escasez de alimentos y vivienda, y desubicación social y física. Lo mismo ocurre en los centros de refinación y embarcación marina, donde la infraestructura no resulta adecuada a las demandas económicas y sociales creadas, pero sí genera prosperidad que se traduce rápidamente en importaciones, inflación y altas tasas de crecimiento económico, bases en que se sustenta la nueva influencia de México en la economía mundial.

La crisis alimentaria también requirió de atención oficial. El país dejó de ser capaz de alimentarse. Aun pudiendo obtener los alimentos faltantes para quienes pueden comprarlos, encuentra obstáculos para hacerlos llegar hasta sus destinatarios por falta de un sistema de transporte adecuado. Los movimientos campesinos registrados desde quince años atrás provocaron una respuesta oficial con la creación del Sistema Alimentario Mexicano (SAM) en 1980, respuesta que declara como meta la revitalización de las zonas tradicionales de agricultura de temporal donde se espera producir los alimentos faltantes y generar el empleo y la demanda efectiva que ensanche el mercado capitalista nacional. Es en efecto un programa ambicioso, que requiere de cambios profundos en el estilo de operación de la burocracia nacional y la distribución de dádivas; que ha evocado el cinismo profundo de analistas académicos, y que aún debe probarse en la realidad nacional. De alcanzar éxito provocaría un viraje en el equilibrio de la economía rural, y de no cumplir con sus funciones sociales aceleraría el ritmo de desintegración de la sociedad rural, sin ofrecer alternativas viables para 25 millones de personas.

En su conjunto, estas medidas sectoriales están cambiando el cariz del espacio mexicano. Tal conjunto es el producto de tendencias contradictorias en la economía nacional, imposibles de analizar con amplitud en un ensayo breve, y que están integrando efectivamente nuevas regiones nacionales a la economía internacional, al proceso de acumulación de capital a escala mundial. En este proceso, la estructura productiva se aleja cada vez más de la posibilidad de responder a las necesidades básicas más apremiantes de la población nacional. Se va logrando la descentralización, la integración económica en términos regionales, pero como elemento del proceso de la desnacionalización del país, como parte de su inserción en la economía internacional.

La omisión en este ensayo de la situación apremiante del Distrito Federal (ahora Ciudad de México) no responde a una despreocupación por las consecuencias humanas de su crecimiento macrocefálico. Es

evidente que los políticos nacionales son responsables de su crecimiento acelerado y desordenado en los últimos decenios. Los millones están en la Ciudad porque, no obstante las declaraciones en sentido contrario, es ahí donde está el poder de decisión, los recursos, las oportunidades y las esperanzas de grupos que ya no pueden creer en promesas de un pulpo político incapaz de resolver cuestiones de mera supervivencia. Pero nuestro objetivo fue situar el patrón de crecimiento geográfico en un contexto más amplio, un contexto donde la descentralización efectivamente está logrando frenar poco a poco el crecimiento demográfico de la capital. Las preocupaciones del medio ambiente también podrán mejorar la calidad de la vida física, expulsando industrias particularmente dañinas y acelerando el sistema de transporte colectivo para racionalizarlo. Pero la preocupación seguirá siendo la misma; habrá una ciudad gigantesca dentro de un espacio donde las actividades económicas estarán más dispersas, aun cuando el grado de control real siga aumentando y aunque el capital nacional y transnacional operen conjuntamente o de la misma manera para promover la internacionalización del capital en el interior de la sociedad mexicana.

8.6. CONSIDERACIONES FINALES

De momento hay dos preguntas primordiales. ¿Cuál es el precio que debe pagar este proceso de internacionalización? ¿Existen alternativas reales para los grupos sociales en México? El precio es enorme en términos de la tranquilidad social, directamente amenazada por el deterioro de las condiciones materiales y sociales de grandes sectores de la población. Los beneficios también son considerables, ofreciendo jugosas ganancias para los nuevos grupos económicos nacionales e internacionales que gustosamente participen en su integración al aparato productivo global de la economía capitalista. Hasta ahora el sistema nacional ha sido capaz de manejar estas tendencias contradictorias, pidiendo (y obteniendo) grandes sacrificios a los de abajo: en apariencia este pacto social está llegando a su fin. El aparato tecnocrático confía en que la descentralización geográfica contribuirá a resolver algunas de las tensiones, y tal vez estén en lo cierto. Lo que no parece tan evidente es la relación entre la dispersión geográfica y la democratización de la estructura económica. Sin una mayor participación —en términos de empleo y de ingresos— los remedios y las reformas resultarán efímeros.

Las alternativas requieren de cambios profundos. ¿Son estos cambios

posibles dentro del sistema? ¿O requieren de cambios del sistema mismo? El SAM plantea un nuevo papel para el campesino, pero los mecanismos para hacerlo realidad todavía no están claros. El gobierno enfrenta profundas crisis y las tendencias actuales, las directrices de políticas reales, sugieren una aceleración de los ritmos del presente en vez de ir hacia cambios estructurales. Lejos de incorporar a los desamparados, de transformar la estructura productiva, de compatibilizar la descentralización geográfica con el sistema de control económico, las perspectivas parecen diferentes. Son las organizaciones populares, al ofrecer programas de reestructuración profunda, las que podrán incorporar a grupos mayoritarios y ofrecer una solución satisfactoria a sus propias necesidades básicas. En su lugar, sin embargo, la política actual parece ofrecer una más plena incorporación de nuevos grupos y regiones al proceso de acumulación capitalista global, engendrando una mayor explotación, añadiendo su parte a la polarización sociopolítica que caracteriza a nuestra época.

9. DOS MILAGROS: MONARCAS Y CAMPESINOS¹

Hablar de la Reserva Especial de la Biosfera Mariposa Monarca es descubrir dos milagros: la supervivencia de la mariposa y la persistencia de la población indígena y campesina. Los dos fenómenos son extraordinarios: la mariposa, por su perseverancia milenaria de emprender dos veces al año un largo vuelo de más de 5 000 kilómetros; los campesinos, por su capacidad para resistir el embate político, recrudecido en los últimos años, en contra de los productores tradicionales. En sus propias formas, cada uno batalla por la supervivencia: a conciencia de las amenazas y sin muchas armas. Pero allí están. Nuestro reto es encontrar formas para que ambos puedan prosperar mediante el enriquecimiento de la región como zona productiva y turística.

En este trabajo sentamos las bases para la formulación de una estrategia de desarrollo sustentable que aprovecharía el ecoturismo como parte de un programa diversificado de desarrollo regional. Hasta ahora el ecoturismo no sólo no ha contribuido a la prosperidad en la región, sino que ha originado todo tipo de conflictos entre los campesinos y entre éstos y los agentes externos. Un proceso sustentable exigiría al ecoturismo integrarse como parte de la base productiva que permita a las comunidades vivir mejor mientras cuidan y aprovechan los bosques.

9.1. EL ECOTURISMO Y LA SUSTENTABILIDAD

Al ecoturismo le corresponde una gran responsabilidad por su compromiso con la sustentabilidad. Por eso tendrá que trascender la idea convencional de ser “traslape entre el turismo naturista y el sustentable” para abarcar las dimensiones sociales de la organización productiva y la conservación ambiental.² Un ecoturismo exitoso tendría que ofrecer a los visitantes la oportunidad de interactuar con la naturaleza de tal manera

¹ Publicado en Comisión Para la Cooperación Ambiental (CCA) (1999) *Memoria de la Reunión de América del Norte sobre la Mariposa Monarca 1997*, Montreal.

² Kreg Lindberg, profesor de Ecosistemas Forestales en la Universidad Estatal de Oregon, comentó en un intercambio sobre el tema que “en consideración de que el verda-

que su visita permita preservar y aumentar las cualidades especiales del sitio y de su flora y fauna. Al mismo tiempo tendría que facilitar a los habitantes locales un nivel de vida decoroso y a los futuros visitantes la posibilidad de disfrutar los atractivos actuales. Para lograrlo, el proyecto tendrá que contemplar la ampliación y diversificación de la base productiva, de modo que los habitantes que ofrecen estos servicios alcancen un estándar de vida sustentable.

El desarrollo sustentable, tema poderoso y controvertido, ha creado metas aparentemente imposibles para políticos e impulsores del desarrollo. La dificultad radica en que, en las actuales condiciones, ¡la acumulación de riqueza crea pobreza! Peor aún: uno y otro grupo contribuyen al deterioro; los ricos por su acceso ilimitado a recursos y fuentes de energía, y los pobres por carecer de alternativas. Entre las naciones más pobres, el abismo social no sólo les impide recurrir a los recursos naturales para aliviar su situación, sino que incluso agudiza el daño ambiental al expulsar a la gente de sus comunidades y negarle la oportunidad de construir sus propias soluciones.

Por esta razón, la búsqueda de la sustentabilidad implica una doble estrategia: por una parte, se tienen que romper las cadenas que limitan a la gente que busca fortalecer sus organizaciones o crear nuevas, y usar sus escasos recursos para buscar soluciones alternativas para sus problemas; por la otra, una estrategia de desarrollo sustentable tendrá que contribuir a forjar un nuevo pacto social, cimentado en el reconocimiento de que tanto la erradicación de la pobreza como la incorporación democrática de los desamparados a las diversas estructuras productivas son impostergables.

La sustentabilidad, entonces, es una lucha por conservar la diversidad en todas sus dimensiones. Las campañas internacionales para conservar el germoplasma, proteger a las especies en peligro de extinción y crear reservas de la biosfera están multiplicándose como reacción a la creciente ofensiva de la producción depredadora; muchas de las comunidades hostigadas luchan para defender su integridad como organismo social, sus derechos y su sobrevivencia mientras tratan de asegurar su subsistencia. La preocupación por la biodiversidad, en su sentido más amplio, abarca no sólo la flora y la fauna amenazadas, sino también la supervivencia de estas comunidades como guardianas del ambiente natural y como productoras.³

dero ecoturismo (es decir, el turismo natural realmente comprobable) es poco común, quizás nos quedemos con el ecoturismo como un objetivo".

³ Para una discusión sencilla de la sustentabilidad, véase Barkin (1998).

9.2. LA AUTOSUFICIENCIA: UN PRINCIPIO INELUDIBLE

La autosuficiencia es central para cualquier estrategia de sustentabilidad. La integración del sistema de comercio mundial promueve la especialización en todas las áreas productivas. En contraste, la sustentabilidad conduce a un menor grado de especialización en todas las áreas de producción y la organización social. Históricamente, la autosuficiencia alimentaria surge como una respuesta necesaria de muchas sociedades frente al peligro de depender del comercio internacional. Las ricas tradiciones culinarias ayudan a cubrir esta necesidad cuando se aplican los amplios conocimientos de las comunidades sobre las cualidades nutricionales y agroecológicas de granos, frutas, verduras, hierbas y especias. En algunas regiones, como en el oriente de Michoacán, se han aplicado políticas para desalentar la producción básica: la gente fue conducida hacia una especialización silvícola de graves consecuencias para la nutrición, el empleo y la capacidad comunitaria de mantener control sobre las tierras; la especialización forestal también trajo un deterioro ambiental con terribles consecuencias para el bienestar humano.⁴

Sin embargo, la autosuficiencia alimentaria representa sólo parte de una estrategia de diversificación productiva que es principio fundamental del movimiento sustentable. Históricamente, los campesinos no se han limitado a cultivar sus terrenos o a cualquier otra actividad productiva única; se han caracterizado más bien por la diversificación de sus actividades productivas de subsistencia. La transferencia de modelos de agricultura comercial para promover el desarrollo en el tercer mundo fue lo que llevó a políticas agrícolas erróneas, ignorantes de la naturaleza multifacética del sistema tradicional de producción rural. El desarrollo sustentable ha encarado directamente este problema al intentar reintroducir estrategias de diversificación, a medida que se enfrenta el problema de la escala de operación apropiada y la canasta de productos.

⁴ La pérdida de la capacidad de alimentarse con producción regional es un problema generalizado que conduce a malnutrición y hambruna. Ahora se reconoce que sus orígenes son en gran parte sociales más que técnicos (o de oferta); Sen (1981) es particularmente elocuente para exponer este punto. Otros han examinado en detalle el "origen social" de estrategias y crisis alimentarias (Barkin, *et al.*, 1991; Barraclough, 1991).

9.3. UNA ESTRATEGIA DE PARTICIPACIÓN DEMOCRÁTICA PARA LA DIVERSIFICACIÓN RURAL Y EL MEJORAMIENTO PRODUCTIVO

El desarrollo sustentable es una metodología para la reorganización productiva que incluye el aprovechamiento de experiencias de grupos locales de todo el mundo. Aunque su emprendimiento requiere de soluciones productivas arraigadas en los recursos disponibles, no podría lograrse sin una participación democrática efectiva para definir, planear e instrumentar los proyectos. La experiencia reciente ha dejado ver la importancia de crear redes de organizaciones para apoyar y defender este trabajo; sin el mutuo refuerzo de organizaciones no gubernamentales (ONG), las agrupaciones locales no serían tan eficientes a la hora de obtener fondos para sus proyectos, asistencia técnica para ponerlos en marcha y apoyo político contra la intransigencia o incredulidad de políticos e instituciones locales y nacionales (Friedmann y Rangan, 1993).

Sin embargo, el desarrollo sustentable no será aceptado fácilmente, pues implica una lucha política por el control del aparato productivo; requiere que se redefina no sólo qué y cómo producimos sino además a quién le será permitido producir y con qué propósitos. Para las organizaciones que participan en proyectos de desarrollo sustentable en áreas rurales, como la Reserva de la Monarca, los conflictos giran alrededor del control de los aparatos de la política local y el poder económico, además del uso de recursos. La lucha por asegurar en este proceso una mayor participación del campesinado, la población rural, las mujeres y otras minorías en desventaja, no conduce automáticamente al desarrollo sustentable. Una amplia participación democrática es el mejor instrumento para crear las bases de una distribución más equitativa de la riqueza, y un elemento fundamental para forjar una estrategia de desarrollo sustentable. Hasta ahora no se ha permitido la participación efectiva de las comunidades en la elaboración e instrumentación de los programas de desarrollo turístico.

Hoy en día se buscan mecanismos para una participación más efectiva de la sociedad civil en la gestión de gobierno en México. Hay proyectos de ley oficiales para garantizar mayor seguridad institucional a las ONG y otras agrupaciones de la sociedad civil: se ha empezado a crear mecanismos de colaboración y comunicación cuya eficacia mejoró gracias a la tecnología.⁵

⁵ La red mexicana de comunicación La Neta es un ejemplo de esfuerzo exitoso de la propia comunidad ONG por ofrecer acceso a las comunicaciones electrónicas y a la “supercarretera de la información”. Por otro lado, el Programa de las Naciones Unidas para

Sin embargo, los actuales proyectos de ley también incluyen la amenaza de un mayor escrutinio por autoridades políticas y fiscales preocupadas por la creciente fuerza de este movimiento y por su mayor eficacia para desarrollar proyectos sustentables a lo largo del país.⁶ Es evidente que estamos en una encrucijada importante que aumentará las probabilidades de una mayor participación popular en proyectos locales para fomentar el bienestar y la producción y, como consecuencia, iniciativas conducentes a un desarrollo más sustentable.

9.4. AUTONOMÍA LOCAL: UNA ESTRATEGIA PARA LA SUSTENTABILIDAD

La integración global está creando oportunidades para algunos y pesadillas para muchos. En esta yuxtaposición se requiere una nueva estrategia de desarrollo rural: una que revalore la contribución de la producción tradicional y de quienes la hacen posible. En la actual economía mundial, la mayoría de productores rurales del tercer mundo no puede competir. A menos que se les proteja de alguna manera, sus productos tradicionales sólo hallarán mercado dentro de los estrechos confines de sus comunidades pobres, comunidades que enfrentan un destino similar.

Para forjar una base productiva que permita a las comunidades prosperar y al mismo tiempo proteger a la monarca, será necesaria una nueva estrategia. Las políticas actuales alejan a los campesinos de sus actividades tradicionales y los expulsan de sus comunidades (Barkin, *et al.*, 1991). Campesinos y comunidades indígenas requieren de apoyos efectivos para emprender las nuevas actividades productivas que les permitirán continuar viviendo y produciendo en sus propias regiones. Aun con

el Desarrollo patrocina la Red de Desarrollo Sustentable, un sistema de comunicación electrónica y promoción de ONG, coordinado desde la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca, Semarnap (actualmente Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales Semarnat).

⁶ No es mera casualidad que el Banco Mundial reconozca la eficacia de las ONG. Como resultado, les ha encargado en México varios de sus proyectos de desarrollo social y el emprendimiento de algunos de desarrollo local y regional. También ha destinado fondos especiales para su participación activa en la evaluación de otros proyectos gubernamentales: sin embargo, el gobierno se muestra reticente a permitir al Banco ejercer estas partidas. De igual manera, el GEF (Global Environmental Facility), manejado por el Banco Mundial, está incorporando varias ONG en la puesta en marcha para la administración y evaluación de sus proyectos, especialmente diseñados para promover empresas sustentables; las áreas naturales protegidas constituyen regiones favorecidas para este programa que reconoce explícitamente la importancia de los principios enunciados aquí.

el estricto criterio de la economía neoclásica, este apoyo no debe concebirse como un caso más de proteccionismo ineficiente, puesto que la mayor parte de los recursos tendría un mínimo o nulo costo de oportunidad para la sociedad en general.⁷

Nuestra propuesta consiste en crear una *economía local autónoma*. Si fuéramos capaces de reconocernos como una sociedad drásticamente estratificada, el país estaría en mejor condición para seguir políticas que reconozcan y saquen ventaja de estas diferencias hasta mejorar el bienestar de todos los estratos. Una estrategia que refuerce a las comunidades rurales y posibilite la diversificación productiva hará que el manejo del crecimiento sea fácil en aquellas áreas comprometidas con la economía internacional. Aún más importante, tal estrategia ofrecería a la sociedad la oportunidad efectiva de confrontar activamente los cambios en la gestión ambiental y la conservación de sus recursos naturales, además de que le abriría oportunidades a los grupos particularmente capacitados y dispuestos para tal actividad.⁸

La economía política de la autonomía no es nueva. A diferencia de la versión actual que permea todas nuestras sociedades, confrontando a ricos y pobres, nuestra propuesta plantea la creación de estructuras para que el segmento de la sociedad que elija vivir en áreas rurales y emprender un programa alternativo de desarrollo regional encuentre el apoyo del resto de la nación. Este modelo de autonomía alterno comienza con la base heredada de la producción rural y sigue con el mejoramiento de la productividad mediante la agroecología. Además requiere de nuevas actividades productivas que aprovechen la herencia cultural y de recur-

⁷ Muchos analistas se resisten a concebir a los campesinos como productores eficientes. Según ellos, los campesinos trabajan en una escala demasiado reducida y con escasos recursos para ser eficientes. Sin embargo, en muchas partes de México y América Latina, si los campesinos dejaran de producir, sus tierras y los insumos que utilizan no estarían disponibles para el cultivo por agricultores comerciales. Los bajos costos de oportunidad de la producción primaria en regiones dominadas por campesinos e indígenas son producto de la falta de oportunidades de empleo productivo. La diferencia en los criterios sociales para evaluar el costo de la producción social y la valoración del mercado deriva de la determinación de los sacrificios que la sociedad en su conjunto tendría que asumir al adoptar una u otra opción. Sunkel (1991) plantea las bases para una estrategia “desde adentro”.

⁸ Gran parte de la literatura referente a la participación popular señala la aportación multifacética que la incorporación productiva de los grupos marginales podría ofrecer a la sociedad (Friedman, 1992; Friedman y Rangan, 1993; Stiefel y Wolfe, 1994). Así como se han examinado muy poco las estrategias de sustentabilidad específicas en las comunidades rurales pobres es evidente que muchos de los conocimientos analizados por los muy experimentados con los grupos de base (por ejemplo, Glade y Reilly, 1993) son congruentes con los principios enunciados por los teóricos y los analistas como Altieri (1999).

sos de la comunidad y de la región para el desarrollo posterior. Puesto que demanda respuestas específicas frente a un problema general, la concepción y desarrollo del programa depende en gran medida de la participación local. Mientras que los lineamientos generales son ampliamente discutidos, los detalles específicos de los programas de inversión necesitan las aportaciones directas de los productores y sus socios.

Lo nuevo es la introducción de una estrategia explícita para fortalecer la base social y económica que permita a estos grupos mayor autonomía. El reconocimiento y fomento de los grupos marginales se vuelve una alternativa que les ofrece mejores perspectivas de desarrollo. La propuesta de la economía autónoma podría mal interpretarse como una nueva encarnación de la “guerra contra la pobreza” estadunidense o el enfoque mexicano de “Solidaridad” para aliviar los peores efectos de la marginalidad. Sería un gran error; no se trata de una simple transferencia de recursos para compensar a los grupos atrasados por su pobreza, sino un conjunto integrado de proyectos productivos que ofrezca a las comunidades rurales la oportunidad de generar bienes y servicios que contribuyan a elevar sus estándares de vida mientras mejoran el ambiente en el que viven.⁹

9.5. LOS LÍMITES DEL ECOTURISMO: LA MARIPOSA MONARCA

El vuelo de la mariposa monarca entre Canadá y México se transformó en el símbolo del proceso de integración de las tres naciones de América del Norte. El fenómeno de su hibernación en México fue “descubierto” hace 20 años (1974-1976) cuando investigadores de la Universidad de Toronto, Canadá, trazaron en México la línea final del vuelo.¹⁰ Por

⁹ Para una discusión general, véase Barkin (1998). Funde (1994) ofrece un programa concreto para la reconversión de El Salvador basado en los principios discutidos en este trabajo. Las propuestas de grupos como la Red Interamericana de Agricultura y Democracia contienen ejemplos específicos de iniciativas de grupos de base para desarrollar programas como los aquí propuestos. El Centro de Ecología y Desarrollo en México propone un programa de desarrollo regional que es ejemplo directo de lo que planteamos (Chapela y Barkin, 1995).

¹⁰ De hecho, los campesinos de Angangueo, Michoacán, sabían del trayecto de las mariposas desde hace por lo menos 20 años, ya que por lo menos uno de ellos, trabajando como bracero en Canadá en los años cincuenta tuvo la curiosidad de preguntarse si eran las mismas que llegan a su región año tras año. Las siguió a pie, y con aventones, y confirmó el proceso; no se les ocurrió a los investigadores preguntarles a los campesinos, y su relato quedó como anécdota, que me contó en 1966.

supuesto, la presencia de la mariposa era conocida desde tiempos inmemoriales por los residentes locales y por un amplio segmento de la población en el oeste-centro de México. Sin embargo, fue la publicación en *National Geographic* de los detalles del trayecto de las mariposas lo que más contribuyó a la modificación de las condiciones sociales y económicas en la región.

Una vez anunciado al mundo, el espectáculo de la visita invernal del lepidóptero empezó a atraer a centenares de miles de visitantes. El decreto de la reserva especial, que se promulgó en 1986, abarcó varias zonas para “proteger” la región de las actividades humanas destructivas. Como resultado, mucha gente de la región ha venido tomando a mal a los intrusos, pues sus visitas anuales han incrementado la regulación gubernamental de sus vidas y ocasionado la pérdida de tierras, conflictos sociales intensos y agudización de la miseria.

Hay serios problemas económicos y sociales en el área protegida; muchos son manifestaciones locales de la crisis general de la sociedad mexicana, que dificulta la supervivencia de los pobres rurales y la defensa de sus actividades tradicionales. En el área protegida la gente resultó afectada por las medidas de conservación. La declaratoria de las zonas núcleo y de amortiguamiento en la reserva condujo a la prohibición o severa restricción de la actividad forestal tradicional sin que las comunidades recibieran compensaciones por la reclasificación de sus tierras ni oportunidades productivas alternas que les permitieran ganarse el sustento en otras partes de la región.

Los problemas de la región y de sus comunidades no comenzaron en 1986 ni pueden atribuirse solamente a las mariposas. Las estructuras locales de control caciquil fueron parte de la historia local desde tiempo atrás. La demanda industrial de celulosa y los mecanismos locales para concentrar la riqueza y las oportunidades, crearon presiones sobre el bosque y dividieron a las comunidades durante décadas. Las oportunidades abiertas por la expansión incontrolada del turismo y la distribución arbitraria del botín entre un grupo reducido de comuneros, agudizaron los problemas.

En este ambiente se requiere un nuevo acercamiento al desarrollo regional. Si bien hay un reconocimiento general de que el ecoturismo puede ofrecer a la gente nuevas oportunidades, queda claro que sin otras actividades productivas complementarias que creen trabajo e ingresos, los campesinos continuarán con sus actividades cotidianas tradicionales, esas que aceleran la destrucción ambiental y amenazan la viabilidad del bosque de oyamel donde la monarca pasa el invierno.

Hoy una red local de ONG y confederaciones de comunidades y grupos

productivos ha decidido crear estas oportunidades luego de reconocer los enormes costos ocasionados por los conflictos entre comunidades derivados de las estrategias que la burocracia impuso. Su principal limitación, a nuestra manera de ver, es la falta de un mecanismo para desarrollar las estrategias de producción viables; necesitan información acerca de los recursos y mercados, así como un mecanismo eficaz para canalizar los recursos. Pero sin un acceso privilegiado al crédito, tampoco podrán emprender las inversiones requeridas. Las organizaciones tienen que llevar el proceso de cooperación, sustentado en una amplia participación local, a una etapa superior que consiste en crear las empresas necesarias para capitalizar el ecoturismo y para la diversificación. Éste es el camino para crear una sociedad con mayor autonomía, la alternativa en la cual el ecoturismo contribuiría al conjunto de actividades que componen el programa de desarrollo sustentable.

9.6. HACIA LA CREACIÓN DE UNA CAPACIDAD PARA LA AUTONOMÍA LOCAL

La estrategia para promover una capacidad de desarrollo local autónomo y sustentable se compone, consideramos, de cuatro elementos fundamentales:

- 1] El reconocimiento de las comunidades locales como derechohabientes en los foros de discusión y gestión regional. Su eficacia participativa dependerá de la disponibilidad de recursos para que se involucren de manera efectiva en el desarrollo de proyectos productivos, incluida la reimplantación de sistemas tradicionales de producción de alimentos también tradicionales y otras necesidades fundamentales en dieta y organización social.
- 2] La diversificación de las actividades productivas. Un programa del manejo sustentable de los recursos naturales, sociales y culturales en la región podría relacionarse con la enorme demanda de la población mexicana por conocer su país y sus procesos naturales. No es una demanda limitada a los cuatro meses de visita de la monarca. Crear el conjunto de servicios turísticos y apoyos para el manejo ambiental de los recursos regionales abrirá una amplia gama de oportunidades para segmentos importantes de la región.
- 3] Reorganización de la actividad y los servicios turísticos. No es aceptable reforzar la estacionalidad. Las vacaciones principales de los mexicanos y el clima abren la posibilidad de que el periodo de visita

a la región se extienda a todo el año. La riqueza cultural, la diversidad biológica y étnica y las diferencias ecológicas hacen factible diversificar la oferta de servicios turísticos. De esta manera se generarían recursos para remunerar las labores de manejo ambiental y se crearían sinergias entre actividades hoy antagónicas.

- 4] Finalmente, el reconocimiento del valor de la contribución regional para la protección de la gran cuenca hidráulica Lerma-Chapala. Si aumenta la cobertura forestal y se realizan labores de conservación es probable que la región aporte a la cuenca un volumen de agua mayor, un valor que debe reconocerse con pagos a los comuneros. De igual manera, si se pueden revertir las actuales tendencias hacia la deforestación, es probable que la región se vuelva más efectiva para transformar en oxígeno los gases de efecto invernadero (bióxido de carbono), de donde pueden resultar beneficios colaterales importantes, pues en algunas partes del norte se empieza a vender estos gases a los generadores.

Estos pasos son fundamentales para que monarcas y campesinos sigan disfrutando de las bondades de la región. Las sociedades mexicana y estadounidense han demostrado la importancia y el valor de conservar esta región de hibernación. Ahora falta movilizar los recursos para que ambos milagros permanezcan.

10. LA CONSTRUCCIÓN SOCIAL DE LA DEFORESTACIÓN EN MÉXICO: LOS INCENDIOS DE 1998 EN LA SELVA TROPICAL DE LOS CHIMALAPAS¹

con MIGUEL ÁNGEL GARCÍA²

La deforestación es un proceso complejo, producto de la interacción de numerosos factores sociopolíticos y económicos con el medio natural. En México, una gran variedad de factores están involucrados: disputas por la tierra, luchas para controlar los gobiernos locales o lucrativos contratos de trabajo del sector público, competencia por obtener permisos para cortar madera, y el descontento con las arbitrarias (y frecuentemente injustas) decisiones administrativas acerca del acceso al agua, o los medios usados en la implementación de las decisiones para la protección de ciertas áreas. En un último análisis, sin embargo, dos problemas fundamentales se encuentran en el centro de los procesos de deforestación: 1] la profunda inequidad que caracteriza a la sociedad mexicana y la desventajosa posición de las comunidades forestales en las negociaciones con los gobiernos locales, estatales y federales, así como con el sector privado que es el comprador final de sus recursos; y 2] el profundo desacuerdo acerca de la importancia de proteger el medio ambiente y asegurar su integridad para las futuras generaciones mientras se provee de una razonable subsistencia bajo la base de los preceptos de la producción sustentable (Barkin, 1998).

A medida que se intensifican los desacuerdos acerca del control de los bosques y las adecuadas estrategias para su manejo, los diferentes grupos intentan proteger sus intereses y obstaculizan el avance de sus adversarios. Mientras que el campo de acción en esta lucha es generalmente el mismo bosque, algunas veces los perdedores obvios son capaces

¹ Documento preparado a invitación del Panel Intergubernamental de Bosques, creado por la Asamblea General de las Naciones Unidas para presentarse en el taller Norteamericano sobre las Causas Subyacentes de la Deforestación y Degrado de los Bosques, Winnipeg, Canadá, 1998. Publicado en F. Novelo y J. Flores (comps.) (1999), *Globalización, estado y actores sociales en México*, México, Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco, pp. 103-124.

² Miguel Ángel García es miembro fundador de la Asociación Civil, Maderas del Pueblo que ha acompañado a los pueblos de la zona de las Chimalapas en sus luchas para poder gestionar su región, según sus costumbres, durante muchos años; m_a_zules@hotmail.com.

de tomar ventaja de una apertura política, para llevar su caso a una audiencia más amplia y ganar alguna ventaja temporal. Sin embargo, inevitablemente, la lucha regresa a los bosques causando un costo devastador con la aceleración aún mayor del ritmo de la deforestación. Este año (1998), los cambios provocados por El Niño se unieron a la conspiración contra los bosques, incrementando su vulnerabilidad, con la alteración de los patrones climáticos, dejando los árboles especialmente expuestos a los daños causados por incendios que en otras circunstancias se hubieran extinguido por sí mismos, o pudieran haber sido fácilmente controlables.

La magnitud sin precedentes de los incendios de 1998 en los Chimalapas es una manifestación altamente visible y extremadamente viciosa de las luchas políticas y sociales en la región. Si bien es cierto que el fenómeno de El Niño creó las condiciones propicias para elevar el riesgo de incendio, aumentando el volumen de materia orgánica seca en el piso de los bosques, fueron las condiciones socioeconómicas las que surtieron el combustible que hizo que las conflagraciones ocasionaron los daños materiales y las desgracias humanas. Los conflictos sociales están creciendo en intensidad como resultado del rápido avance del proceso de la reforma neoliberal, que se implementa para acelerar la integración económica internacional, que está polarizando a la sociedad mexicana. En este ensayo, describimos las peculiares dinámicas del proceso sociopolítico relacionado con los incendios y exploramos sus implicaciones en una de las selvas tropicales más grandes que subsisten en Norteamérica, los Chimalapas, y en el proceso de deforestación en general. La región de los Chimalapas es importante, no sólo por la magnitud de su área de bosque tropical intacta, sino también porque la inusual y diversa concentración de flora y fauna hacen su aún gran biodiversidad especialmente valiosa; también es el hogar de diferentes grupos étnicos, los cuales han aceptado la responsabilidad de conservarla, como parte de su lucha por proteger y fortalecer su propia herencia cultural y productiva, lo cual la hace todavía más especial.

10.1. LA SELVA TROPICAL DE LOS CHIMALAPAS

El bosque tropical de los Chimalapas está situado en el corazón del Istmo de Tehuantepec, la estrecha franja de tierra donde el Golfo de México más se acerca al Océano Pacífico. Históricamente, parte del estado sureño de Oaxaca, sólo una pequeña fracción se localiza en el

estado de Chiapas. Incluso antes de que los nativos pagaran 25 000 pesos en oro para comprar los títulos de sus propias tierras en el siglo XVII, llegaron numerosos fuereños, atraídos por lo que ellos imaginaron era una fuente de inimaginable riqueza.³ Durante los siguientes siglos, la extraordinaria diversidad de los recursos naturales atrajo un gran número de exploradores para explotar los bosques. En las décadas más recientes, el vasto territorio “desocupado” se convirtió en un sitio ideal para crear potreros de parte de ganaderos ansiosos de aumentar sus hatos en el trópico. A pesar de las condiciones inhóspitas, también atraía la colonización, tanto de asentamientos espontáneos de personas provenientes de zonas con escasez de tierra en los altos de Chiapas, como por la transferencia programada oficialmente de campesinos y etnias de otras regiones del país.

Las fuerzas institucionales idearon una diferente visión de la selva tropical de los Chimalapas. Los practicantes y promotores del desarrollo lamentaron la falta de infraestructura para controlar los vastos recursos hidráulicos de la región; a principios de los años setenta, bosquejando repetidamente planes para construir un sistema imponente de seis presas interconectadas para almacenar agua en los valles y cañones y luego transportarla a través de un túnel de 40 km. que suministraría agua a un complejo petroquímico y regaría las planicies costeras (en el Pacífico) donde se pretendía sembrar cultivos de exportación. Otro proyecto se inició a mediados de los años ochenta, requiriendo de grandes inversiones en carreteras para facilitar el corte y extracción de valiosas maderas tropicales para exportación. Finalmente, intereses comerciales y ganaderos consideraron a la selva tropical como un obstáculo a eliminar como parte de sus ambiciones para la riqueza y modernidad; elaboraron planes para una autopista de cuatro carriles a través de la intocada selva, desde los altos de Chiapas hasta el centro de México.

Actualmente, los Chimalapas comprende un área cercana a las 600 000 hectáreas que reclaman dos comunidades indígenas: Santa María Chimalapa que controla 460 000 ha y San Miguel Chimalapa con 134 000. Además de estas dos comunidades que conforman las cabeceras municipales, numerosos pequeños asentamientos brotaron a lo

³ La corona española publicó un título colectivo de “360 leguas cuadradas” (más de 900 000 ha) de bosques “para todos los vecinos y sus descendientes del pueblo de Santa María Chimalapa”, miembros de la etnia zoque, en compensación por el oro pagado por don Domingo Plácido en 1687 (Archivo General de la Nación, 1937. Copia certificada del título de propiedad común). [El valor de dichas piezas de oro 300 años más tarde es probablemente equivalente a cerca de un millón de dólares, si las piezas fueran de un peso estándar, equivalente al centenario de hoy.]

largo de las laderas de los ríos y en los valles; existen 38 “congregaciones” formales, creadas con la autorización de las autoridades locales, mientras que otras 34 poblaciones están constituidas por colonos. Muchas de éstas últimas fueron formadas como parte de los esquemas gubernamentales de colonización, mientras que otras fueron simplemente creadas por invasores; en ambos casos, se apropiaron ilegalmente de tierras comunales y muchas son controladas por intereses de ganaderos apoyados por grupos políticos que activamente tratan de minimizar la efectividad de las instituciones de usos y costumbres de las etnias. Actualmente, la región está habitada por alrededor de 18 000 personas, 3 000 en cada una de las dos cabeceras municipales y las demás dispersas en los asentamientos reconocidos. Una quinta parte de la tierra ha sido deforestada para potreros.

10.2. CRISIS, CONFLICTO Y CONCILIACIÓN

Durante años la región ha sido escena de conflictos por el control de la tierra. La violencia se volvió cada vez más común, a menudo aprovechando las diferencias étnicas como pretexto para las provocaciones. Para reducir estas tensiones, en 1991, la población de origen zoque, que compone un tercio del total, invitó a miembros de los demás grupos étnicos, a campesinos y a mestizos a negociar pactos de convivencia; pero en la actualidad [1998] es más difícil controlar la violencia, porque sus raíces están firmemente enclavadas en una industrialización ambiciosa y un programa de infraestructura diseñado para transformar la región en un polo de desarrollo para las grandes firmas internacionales. Exacerbando la tensa situación, en 1995, el estado de Chiapas, modificó su Constitución para redefinir de manera unilateral sus límites territoriales, incluyendo no sólo las 12 000 hectáreas que históricamente habían sido reconocidas, sino adicionándose otras 148 000 hectáreas que han sido objeto de disputas desde el año de 1950 (inexplicablemente, las autoridades del estado de Oaxaca no han respondido formalmente a esta acción).

En 1987, un encuentro de ambientalistas y académicos preocupados por la protección de los Chimalapas resultó decisivo en la formulación de una estrategia de largo plazo para la protección y el bienestar de la población local y la región. La participación repentina en esta reunión de las autoridades comunales contribuyó a forjar una amplia coalición que transformaría los planes para convertir la tierra zoque en una reserva de la biosfera; de haberse concretado, habrían removido las comuni-

dades de la zona. Se había convocado al encuentro como una respuesta a las preocupaciones acerca de las consecuencias de décadas de explotación maderera, colonizaciones, expansión de la frontera agrícola y ganaderización del sureste de México; la selva tropical había venido desapareciendo a una tasa alarmante.⁴

Durante los subsiguientes cuatro años los ambientalistas y académicos se reunieron con las comunidades para concertar un nuevo programa para la zona. Por medio de una ONG local, Maderas del Pueblo del Sureste (Maderas), se propuso una figura innovadora “Reserva Campesina de la Biosfera” como alternativa social para proteger a las comunidades y la región con su densa concentración de biodiversidad. La necesidad de realizar una acción era lo más urgente ya que previos esfuerzos para proteger un ecosistema similar en la selva Lacandona, más hacia el sur, habían resultado inútiles a pesar de que había sido decretada oficialmente área protegida natural. Conforme exploraban las opciones, ONG, académicos y comuneros, se alarmaron con el avance de los planes de implementar los tres proyectos de desarrollo arriba mencionados.

Esta colaboración con las comunidades marcó un avance fundamental para la resolución de los conflictos ambientales. La insistencia de las autoridades de Chimalapas de participar en el diseño e implementación del plan de protección y gestión era crucial en la formulación de la propuesta final. La demanda para una Reserva Campesina constituiría el objetivo central durante los próximos años para la ONG, Maderas, la cual asumió la responsabilidad de coordinar las actividades de grupos externos a la región con las comunidades.

Los apoyos de fundaciones y organizaciones internacionales, junto con algunos fondos públicos, comenzaron a fluir para la puesta en práctica de una gran diversidad de esfuerzos para la conservación, producción y evaluación.⁵ Se había iniciado una infraestructura básica para mejorar las condiciones de vida de la población local, mientras que se habían creado pequeñas empresas para hacer un mejor uso de los recursos que venían extrayendo y ofrecer así mejores oportunidades a las comunidades. Asimismo, se emprendieron estudios para explorar este acervo natural de biodiversidad. Con apoyo externo, los zoque iniciaron un pequeño pro-

⁴ Hay una extensa literatura sobre la “ganaderización” de la producción rural y los esfuerzos de los ganaderos para reclamar superficies forestales para sus hatos. Véase, por ejemplo, Feder (1972) para el caso mexicano. DeWalt (1983) y Barkin *et al.*, (1991) ofrecen una visión global del mismo fenómeno.

⁵ Los apoyos más importantes fueron otorgados por el Fondo Mundial para la Naturaleza (wwf), la Fundación Rockefeller, el Instituto Synergos y la Agencia para el Desarrollo de Ultramar del Reino Unido (oda).

grama para educar a sus niños en su propio idioma y para promover su cultura, fortaleciendo las instituciones y autoridades locales; sin embargo, no todos estos proyectos fueron de fácil implementación, ya que los distintos grupos —comunidad, gobierno, fundaciones, ONG y expertos independientes— buscaban poner en marcha cada uno su propia agenda. Con el fin de establecer algún orden y crear canales efectivos de coordinación y comunicación, se crea en 1992 un grupo integrador, El Comité Nacional para la Defensa de los Chimalapas, que contó con apoyo de amplios grupos científicos, de la sociedad civil y aun del gobierno (Umlas, 1998). Esta iniciativa fue reforzada con el anuncio presidencial de crear reservas ecológicas campesinas en el sureste de México.⁶

El siguiente año, 1992, se aceleró el proceso, ya que varias figuras públicas apoyaron los esfuerzos innovadores de crear el plan de gestión. Se establecieron compromisos para reforzar las iniciativas locales y promover negociaciones para resolver los persistentes conflictos de tenencia de la tierra y los desacuerdos políticos. Como medida de las buenas intenciones del momento, el gobierno federal ofreció cambiar la ruta propuesta de una nueva autopista de Chiapas hacia el centro del país para no invadir a las comunidades, a pesar de que su construcción sería mucho más cara y requeriría de un viaje mucho más largo. Esta colaboración creó un nuevo dinamismo que contribuyó a consolidar las instancias comunales de gobierno y su capacidad de liderazgo, resultando en un ejemplar programa de manejo de recursos a largo plazo. Maderas ha madurado como una eficaz ONG, reconciliando las aspiraciones comunales con la disponibilidad de recursos provenientes de fuentes externas y apoyando de manera constructiva en la generación de capacidades locales de gestión y administración.

Desafortunadamente, a pesar de estos avances, poderosos intereses políticos de Chiapas y Oaxaca siguieron provocando nuevos brotes de violencia, a raíz de los conflictos agrarios no resueltos y de sus aspiraciones para aprovechar oportunidades que esperan que podrían surgir con un nuevo “mega-proyecto” transístmico, promovido por grupos comprometidos con la estrategia de integración internacional. La decisión unilateral del vecino gobierno de Chiapas para cambiar los límites estatales refleja no sólo una simple lucha por la tierra sino por cuestionar el modelo de desarrollo para la región propuesta por los zoque. En Oaxaca,

⁶ El Comité y la ONG local, Maderas del Pueblo del Sureste, son ejemplos importantes de una nueva forma de protagonismo social en México que contribuyen a facilitar la implantación de un modelo de desarrollo sustentable, alternativa al modelo neoliberal de integración económica internacional.

también, los cambios políticos agudizaron las tensiones: después de 1993, se desconoció la decisión de las autoridades estatales anteriores de permitir que avanzaran y maduraran los procesos locales de gobierno, respaldado por los programas internacionales que promovían la gestión sustentable local junto con las instituciones y culturas indígenas; una guerra continua y no declarada contra las comunidades se fue intensificando y además estuvo acompañada de una abierta campaña de ataques a Maderas del Pueblo que incluyó vanos intentos de suspender los apoyos recibidos de sus patrocinadores. Esta oposición fue motivada por una preocupación oficial justificada de que la participación de las bases y el control comunitario de los valiosos recursos naturales, excluiría a los más poderosos grupos industriales de la explotación de los recursos naturales de la región.

Asimismo, algunos grupos económicos poderosos del estado de Chiapas continúan promoviendo un modelo centralizado de cambio económico, fincado en un reordenamiento de los recursos naturales para exportar maderas finas, ganado y frutas y verduras de riego. La profunda divergencia en cuanto a los principios que rigen en los mercados y el papel de las comunidades en su propia gestión y gobierno ha ocasionado enfrentamientos particularmente violentos en los años recientes en los Chimalapas, que se reflejan de manera parecida en las negociaciones relacionadas con el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Como se verá, estas características estructurales tomaron un camino trágico a mediados de 1998 cuando los incendios forestales aceleraron aún más la deforestación en la región.

10.3. LOS BOSQUES MEXICANOS Y LA TEMPORADA DE INCENDIOS EN 1998: UNA PERSPECTIVA NACIONAL

Dos tercios del territorio mexicano son o deberían ser boscosos, con una amplia variedad de especies, dependiendo del ecosistema. Como resultado, México ocupa el onceavo lugar en volumen de recursos boscosos entre las naciones del mundo, y cuarto lugar, después de Indonesia, Colombia, y Brasil en cuanto a la biodiversidad de flora y fauna. Refiriéndose específicamente a las variedades de pino y encino, México ocupa el primer lugar.

Esta enorme riqueza fue seriamente dañada durante décadas de excesiva explotación, como resultado de las inadecuadas políticas de administración y desarrollo. Las políticas económicas discriminatorias afectaron

a la población rural en general, y a los grupos indígenas en particular, forzándolos a menudo a migrar hacia los más inhóspitos y frágiles ecosistemas del país, involucrándose en prácticas productivas y de manejo depredador que contribuyeron a la destrucción ambiental. Por otro lado, las políticas agrarias promovieron un control monopólico de compañías madereras sobre vastas regiones de bosques; las estrategias comerciales crearon mercados protegidos para los productos maderables; sin embargo, los más recientes cambios eliminaron estas restricciones, intensificando la explotación de la madera del país y favoreciendo la expansión de los ranchos ganaderos, especialmente en las selvas tropicales del sureste Mexicano, produciendo un peculiar patrón de deforestación que se volvió muy conocido en todo el mundo: el dramático contraste en las fotografías de satélite del bosque en la frontera que separa a México de Guatemala ofrece un desolador testimonio del carácter rapaz de la administración de los bosques en México. Aunque esta destrucción evolucionó rápidamente, las selvas tropicales mexicanas han sufrido aún más, declinando de unos 20 millones de hectáreas a tan sólo 2 millones durante el siglo xx.

Los incendios forestales son una persistente y destructiva fuerza causante del deterioro de los ecosistemas naturales. Debido a la inusual combinación de condiciones climáticas y meteorológicas antes y después del invierno de 1997-1998, atribuidos a El Niño, estos incendios tuvieron un particularmente fuerte impacto en los bosques y selvas mexicanas.⁷ Sus efectos fueron claros, aun para el ciudadano común, e inexplicablemente subestimado por varios grupos dentro de los gobiernos federales y estatales, incluyendo, más sorprendentemente a las mismas autoridades ambientales (la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca (Semarnap), hoy Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat)).

Las declaraciones de Semarnap trataron de mediatizar la gravedad de los daños a los bosques causados por los incendios. Intentaron minimizar su propia responsabilidad en el problema y su eventual solución, destacando que en México fueron menos significativos que en otros países,

⁷ Entre los problemas más importantes que aumentaron la vulnerabilidad estuvieron: las lluvias abundantes de 1997 que intensificaron la acumulación de biomasa; las heladas del invierno de 1998 que ocasionaron una desecación de la vegetación; los fuertes y persistentes vientos de febrero y marzo, a veces con la fuerza de un huracán, pero sin humedad; las lluvias tempranas que resultaron la mitad del promedio normal, y en el norte del país simplemente no llovió; El Niño causó muchos problemas graves, conduciendo a altas temperaturas y una de las sequías más agudas del siglo; y, en 1998, temperaturas altas récord en cada región del país durante la época de estiaje (Semarnap, 1998).

incluyendo a Estados Unidos. Este intento sin duda, estaba condicionado por los políticos del más alto nivel federal, quienes asignaron bajas prioridades a los programas de manejo ambiental conforme se intensificaban las presiones económicas; la prevención y combate a los incendios, nunca una alta prioridad, fueron específicamente señalados en estos recortes presupuestales y remplazados con piadosas declaraciones de preocupación. A inicios de la primavera, estos mismos políticos reconocieron la gravedad de la situación, pero actuaron con lentitud para solicitar asistencia externa, y sólo hasta después de que 17 campesinos murieron apagando fuegos en el estado de Puebla y de que los daños comenzaron a causar serios problemas más allá de las fronteras del país. Sorpresivamente, una vez que lo peor había pasado, las cifras preliminares dadas a conocer por la Semarnap, como veremos, subestimaron significativamente la gravedad de la experiencia. Después del establecimiento de las lluvias en julio, se dio a conocer que había habido 14 210 incendios desde el inicio del año hasta mediados de julio, afectándose 583 000 hectáreas, de las cuales sólo 27% (150 000 ha) comprendían bosques maduros.⁸ La misma fuente oficial declaró que los daños en Oaxaca habían sido de 47 500 ha y otras 129 000 en Chiapas, cerca de 30% del total de 1998.

El Consejo Técnico Consultivo Nacional Forestal (Conaf), un grupo promovido por el gobierno federal, que incluye a representantes de todos los sectores, al parecer no tuvo más alternativa que aceptar las cifras oficiales, señalando la gravedad de la situación: el número de incendios fue el doble de la media de incendios en el periodo 1992-1997 y 35% por encima de la cifra histórica más alta en 1988; el área afectada era tres veces el tamaño del promedio del mismo periodo. Las declaraciones de prensa también minimizaron la relativa importancia de esta información: "sin subestimar el daño", el área quemada fue sólo 0.41% del total de áreas de bosque del país.⁹ Como se sugiere abajo, estas cifras fueron increíblemente bajas.

En el periodo más álgido de los incendios forestales de 1998, las declaraciones de los más altos niveles de gobierno fueron explícitas al señalar a los supuestos culpables de esta tragedia. Los políticos identificaron

⁸ La fuente oficial de la Secretaría ya no está disponible en sus páginas públicas. Comparando, diez años antes, las cifras de los incendios forestales eran similares a los reportados para 1998. En 1988, se reportaron afectadas 518 000 ha sin alguna desgracia humana. Eso es, 65 000 ha menos que en 1998 cuando se mataron más de 70 personas durante las batallas para controlar los incendios. Considerando esta información los datos de 1998 no parecen creíbles.

⁹ Declaración final del Conaf, 30 de julio de 1998, difundido en el internet por miembros de ONG del Consejo.

como responsables a los pobladores rurales más pobres, quienes practican la agricultura de roza-tumba y quema en las selvas del sureste y a las comunidades campesinas en otras partes del país quienes regularmente usan el fuego como una herramienta agrícola para limpiar sus terrenos de malezas antes de la nueva temporada de cultivos.¹⁰ Nunca se reconoció la diferencia entre los campesinos con parcelas de subsistencia y los ganaderos quienes usan la misma técnica de roza y quema pero en escalas significativamente diferentes; mientras que los primeros abren pequeñas áreas para su propio uso, los segundos limpian grandes extensiones para extender sus potreros e incrementar el tamaño de sus hatos. En consecuencia, los campesinos pobres se transformaron en víctimas y se convirtieron en el blanco de una intensa campaña publicitaria intentando poner a la opinión pública en contra de los agricultores tradicionales. No se discutieron las razones por las cuales los campesinos optaron por estas prácticas; tampoco se inició una búsqueda seria de alternativas a la política que trataba de disuadir a los campesinos en zonas de la agricultura de temporal para que dejen de sembrar sus granos tradicionales, sin otorgarles los recursos financieros, ni los insumos requeridos, o la asistencia técnica que sería necesaria para que cultivaran otros productos.¹¹ Tan sólo dos meses más tarde de los incendios, las autoridades de agricultura “descubrieron” una inminente crisis alimentaria, ya que el país de nuevo se verá obligado a importar más de la mitad de sus necesidades de alimentos básicos.

La experiencia durante los incendios de 1998, sugiere que las estimaciones cuantitativas de las áreas dañadas son equivocadas. El dato de 47 500 ha para Oaxaca es absolutamente increíble. Sólo en la región de Chimalapas, por ejemplo, Maderas estimó que 210 000 ha habían sido

¹⁰ En su explicación de las causas de los incendios de 1998, la Secretaría publicó la siguiente lista: 54% fueron resultado de actividades agrícolas y ganaderas, 16% de cambios deliberados en el uso del suelo (*i.e.* incendiando alguna superficie para el cultivo o los pastizales) 10% por fumadores, 9% por fogatas, 2% por actividades forestales y la apertura de derechos de vía, con 7% atribuibles a otras causas (sembradíos ilegales, ferrocarriles, torres de transmisión eléctrica, etc.) (Semarnap, 1998).

¹¹ Las políticas a que se refieren son, entre otras: precios mínimos de garantía para los productos básicos que no cubren los costos reales de producción, restricciones sobre el acceso al crédito que evitaron que los de productos de pequeña escala cambiaren de área de sembradío o aumentaran su productividad, y políticas de comercio exterior que determinaron la importación masiva de alimentos baratos y de baja calidad para ir reduciendo el costo del programa de subsidio a las tortillas. Sin recursos para mejorar su producción, muchos agricultores de subsistencia se ven obligados a continuar sus prácticas tradicionales de roza-tumba-quema, sembrando las nuevas parcelas en medio del bosque a medida que volvieron improductivas sus viejas parcelas.

afectadas. Sus miembros participaron activamente en el combate a los incendios durante toda la temporada; realizaron estas labores, tanto de manera directa como en colaboración con el ejército mexicano y con expertos del Servicio Forestal de Estados Unidos, quienes fueron traídos al país para asistir en los esfuerzos de combate a los incendios. Desde el término de las conflagraciones, Maderas ha trabajado junto con la World Wildlife Fund (WWF), la Sociedad para el Estudio de los Recursos Bióticos de Oaxaca (SERBO), miembros de las comunidades locales, responsables de las brigadas de incendios, y funcionarios de la Semarnap; usando un sistema de información geográfica (SIG) desarrollado en los últimos años para programar el manejo de los recursos naturales y las inversiones, los polígonos definieron las áreas dañadas en la propuesta reserva; este trabajo reveló que los Chimalapas experimentaron un daño cerca de cinco veces mayor que el área reportada para todo el estado!¹²

Esta discrepancia sustancial entre los reportes oficiales y la realidad, es tan problemática como mistificante. No podríamos encontrar una explicación sensata a estas estimaciones minimizadas y pareciera evidente que en la totalidad del país fueron afectadas más de un millón de hectáreas, con una significante proporción afectada por daños serios como resultado de los fuegos subterráneos y los que se propagan en la copa de los árboles en lugar del piso, dado que éstos son los dos tipos de fuego más peligrosos y más dañinos.

10.4. HACIA UN MEJOR ENTENDIMIENTO DE LOS INCENDIOS EN LOS BOSQUES

¿Por qué los incendios forestales en México, se están volviendo cada vez más dañinos y más difíciles de controlar? ¿Son las prácticas de cultivo de los campesinos más pobres del país la verdadera causa del problema? ¿Las políticas para prevenir los incendios debieran asignar una primordial importancia a culpar a los campesinos de pequeña escala? Estas

¹² El equipo de Maderas participó en el grupo de trabajo encargado de evaluar la situación en la Selva Zoque, que incluye Los Chimalapas, El Ocote, Chiapas y Uxpanapa, Veracruz. En su primera reunión, los funcionarios de la Semarnap presentaron su estimación de 600 ha dañadas en Uxpanapa, cifra que se incluyó posteriormente en el informe nacional. Para los que estaban en las actividades de combate de los incendios o quienes habían viajado por la zona, la estimación del daño fue mucho mayor; usando la base de datos del SIG, Maderas estima que por lo menos 10 000 ha fueron afectadas. En este caso, la propia Secretaría devolvió el reporte a la oficina local para su revaloración.

preguntas son fundamentales para entender el papel de los incendios en la dinámica de la deforestación en México. Antes de continuar con nuestro análisis detallado de la experiencia en los Chimalapas, vale la pena explorar estas cuestiones a nivel nacional.

El frívolo diagnóstico de los incendios forestales ofrecido por el sector público, es tan peligroso como desorientador. El identificar a esta manifestación de empobrecimiento como la causa raíz de los incendios, sólo puede servir para desorientar las políticas públicas. No será posible extirpar el problema con la prohibición de la agricultura de roza-tumba y quema o de las quemas para limpiar los terrenos. Independientemente de que estas medidas puedan ser deseables, si pudieran ser consideradas obligatorias, su promulgación sólo incrementaría el sesgo de las políticas públicas contra los más pobres. En términos prácticos, también, es importante evaluar la acusación de que esta gente es culpable de causar los incendios: normalmente, el campesino de pequeña escala, quien limpia una hectárea o dos de vegetación secundaria, procura controlar su incendio, porque las consecuencias de que se extienda fuera de control son desastrosas para el mismo campesino (por ej. el secado de las corrientes subterráneas con una reducción en el flujo de agua, menos vida silvestre dada la menor cobertura, escasez de leña); las familias más pobres son las más directa y seriamente afectadas cuando estos incendios salen de su control. Durante décadas, si no es que más, estos campesinos han sido muy responsables en el manejo de los fuegos de tal forma que los hacen autolimitantes. En pocos casos, la resequedad de la maleza cambió las condiciones de manera dramática, cómo podría haber sido el caso en 1998, exponiendo los bosques a impredecibles peligros para los cuales los campesinos no estaban preparados.

Por otro lado, los ganaderos privados en el sureste limpian y queman en promedio 50 ha por año, incluyendo las partes más altas de las montañas donde pocos campesinos intentan trabajar. Limpiar terrenos para establecer pastizales es importante para los ganaderos, no sólo porque éstos cubren las necesidades del hato, sino porque es una manera de respaldar un reclamo o apropiación de la tierra, reclamo que frecuentemente es la causa de conflictos con otros campesinos quienes intentan defender sus derechos sobre los mismos terrenos; los ganaderos se preocupan poco por controlar los incendios y quizás, de hecho, sean renuentes a comprometerse a hacer los mayores gastos que implicaría una forma más responsable de limpiar los terrenos. Si los incendios se salen de control, ellos pueden intentar ejercer su poder económico y político para apropiarse de las áreas afectadas, o conservarlas como reserva para futuras expansiones de sus hatos ganaderos.

Sin embargo, en el contexto de los incendios forestales, los problemas no resueltos de tenencia de la tierra son incluso de una mayor importancia en México. En nuestra investigación preliminar para conseguir material de análisis con el fin de informar sobre los incendios forestales, resultó significativo que muchos de los incendios más graves en todo el país ocurrieron en áreas donde son comunes los conflictos sobre la tierra y los valores culturales, o donde las luchas políticas contra cacicazgos locales o el ejercicio arbitrario e impune de muchas formas de poder, son quejas comunes.¹³ Un fenómeno diferente pero asociado, es el permanente crecimiento y expansión de la producción y tráfico de drogas en México. El interés de los capos de la droga en provocar incendios, quizá esté relacionado con el deseo de extender los cultivos de opio y marihuana, así como en limpiar franjas de terrenos para establecer pistas de aterrizaje clandestinas o claros para dejar caer la droga; la inusual alta incidencia de fuegos de grandes dimensiones en áreas aisladas pudiera ser el resultado de operaciones de limpieza deficientemente controladas en adversas condiciones de extrema sequía, como las ocurridas en 1998.

Finalmente, para algunos de los pobladores más pobres en las regiones forestales, los incendios quizá hayan tenido los efectos perversos de liberarlos de la tiranía de la nueva ley forestal y del proceso acelerado de integración económica. Los propietarios de pequeñas áreas forestales, sin recursos ni acceso a la asistencia técnica y crédito, incapaces de competir en mercados abiertos regionales o globalizados, quizá incluso consideren su propiedad de los bosques como una restricción para mejorar sus niveles de bienestar. Con la limpia de los terrenos, éstos pueden practicar la agricultura de subsistencia o establecer cultivos comerciales a pequeña escala, a pesar de sus muy escasos recursos.

En conclusión, esta revisión sugiere que en México se incendió mucho más de lo que se nos informó y que las principales causas estructurales no son las que se señalaron en el discurso oficial. La declaración de la Conaf (nota 5), indirectamente confirma nuestro escepticismo acerca de identificar como culpables a los más pobres, notando que 84% del área forestal estaba ubicada donde no había industria forestal, y en gran me-

¹³ Los conflictos de valores culturales son importantes. En su trabajo de campo, Verónica Vázquez García notó: "En Ocotal Grande, una comunidad popoluca de Veracruz sufrió de los incendios que azotaron a todo el país en primavera de 1998: 16 ha de una finca cafetalera fueron destruidas porque la única familia protestante en la comunidad no colaboraba con las demás, que son católicas, cuando quemó su parcela antes de la siembra. El resultado fue desastroso, y me sirvió para entender la complejidad de los problemas ambientales, así como la manera en que los factores religiosos pueden influir en estos problemas". Comentario de David Barkin sobre el libro de Maier (1998).

dida no estaba sujeta a un programa de manejo forestal, conservación o restauración; el 16% restante estaba en áreas de bajos niveles de explotación. Para que tengamos la capacidad de revertir el patrón destructivo de utilizar los incendios como un arma peligrosa y velada para atacar a los grupos sociales más débiles, es urgente examinar los motivos y acciones de otros grupos sociales involucrados en conflictos locales como parte de la explicación de las causas subyacentes de los incendios y la deforestación.¹⁴

10.5. LOS INCENDIOS EN LOS CHIMALAPAS

Los incendios de 1998 en los Chimalapas afectaron más de un tercio de esta selva tropical. Contrariamente a las afirmaciones gubernamentales y aquéllas de la Conaf, muchos de los incendios de esta región ocurrieron en áreas con un plan de manejo local, en donde la mayoría de la población local participa en los esfuerzos de conservación bajo un programa de protección, retando abiertamente a los caciques y a las autoridades locales que están atadas a organizaciones políticas oficiales. La ONG Maderas asumió la responsabilidad de trabajar con la población local, para promover los programas de silvicultura como parte de un programa más amplio para dar forma a un proceso de desarrollo congruente con los objetivos comunales de conservar su herencia colectiva junto con la biosfera.

Los comuneros tienen una larga historia de organización comunal para prevenir y controlar los incendios. Sin embargo, en 1995, Maderas en colaboración con las autoridades locales, se comprometió a realizar un ejercicio de planeación para identificar aquellas zonas que son más susceptibles a la amenaza de incendios. No fue sorprendente descubrir una importante coincidencia entre estas zonas y tres importantes factores:

- 1] Conflictos agrarios y la expansión de potreros privados para ganado;

¹⁴ Un análisis detallado del nexo entre degradación ambiental en general y deforestación en particular, el conflicto violento y la escasez de la tierra respalda los hallazgos de nuestro análisis (Howard y Homer-Dixon, 1998). Adelson (1997) examina estas relaciones en mayor profundidad desde una perspectiva diferente; una de sus conclusiones principales es relevante: “Una mejoría del ambiente no ocurriría y no debe esperarse, hasta que los campesinos tengan alternativas económicas viables que les permitan sobrevivir sin causar mayor deforestación para ampliar sus campos de cultivo”. En San Lázaro, Marqués de Comillas, un campesino lo expresó así: “Estamos dispuestos a conservar la selva, pero no nos beneficiará. Cortamos los árboles porque no tenemos otra opción productiva”.

- 2] Expansión de la frontera ganadera por parte de los comuneros más solventes; y
- 3] El acelerado crecimiento del tráfico de drogas, en zonas que han sido claramente identificadas y señaladas a las autoridades federales por parte de las autoridades comunales.

El diagnóstico también analizó las condiciones que se hubieran necesitado para propagar los incendios. Se tomaron las decisiones basándose en la limitada habilidad para controlar los fuegos, las condiciones sociales existentes y los altos índices de humedad en las áreas de selva tropical y de bosques de niebla (donde normalmente llueve 11 meses al año) que hacen difícil que los incendios se prolonguen. Como resultado, se decidió concentrar las actividades en la zona oriente, donde se localizan las más grandes áreas de bosque templado y donde continúan los conflictos sobre tenencia de la tierra y sobre los límites entre los estados de Oaxaca y Chiapas. El análisis sugirió que estos factores eran primordiales en causar los incendios forestales en esta región.

Se entrenó y equipó a una brigada comunal especializada en combate de incendios para que vigilara esta zona. También fueron entrenados otros comuneros de la región. Esta estrategia funcionó bien durante 1996 y 1997, basándose en iniciativas individuales de comuneros que reportaban fuegos y estableciendo un mecanismo de comunicación para movilizar los recursos que se necesitaban. La gran limitante de este método era que para el momento en que se detectaban los humos de los incendios, éstos ya estaban muy avanzados; pero no se pudo disponer de recursos para la construcción de casetas de detección, para la compra del equipo necesario y para pagar salarios a guardabosques comunales; ja las comunidades se les indicó que la Secretaría de Hacienda no autorizaría este tipo de gasto! Maderas insistió y consiguió dinero de fuentes internacionales para adquirir parte de las herramientas, pero no pudo obtener recursos para las casetas (8 000 dólares cada una) y para pagar a los guardabosques. Para el momento en que llegó el equipo, 12 000 ha de bosques de pino con alta regeneración y de pastizales se habían quemado y varios incendios ya habían aparecido en el corazón de la selva, mismos que resultaban imposibles de controlar.

En todo el país los incendios incrementaron su intensidad y el humo viajó hasta Texas y Florida, provocando medidas de emergencia por parte del gobierno de Estados Unidos. Conforme la gravedad de la situación se volvió evidente, se solicitó ayuda externa. Personal del Servicio Forestal de Estados Unidos se unió a las tres brigadas especializadas de la Semarnap con equipo especializado; asimismo, se unió un creciente número de soldados

mexicanos. En México, los trámites burocráticos hicieron más lenta la llegada del equipo moderno al frente de fuegos, pero posteriormente un impresionante arribo de material reforzó a los cuadros humanos, y fueron incapaces de controlar varios de los puntos de fuego hasta que las lluvias llegaron un mes más tarde. Mientras que mucha de esta ayuda fue proporcionada por la Agencia Norteamericana para el Desarrollo Internacional (US AID), tres helicópteros *air cranes*, usados para transportar agua al corazón de la selva, fueron contratados por el gobierno mexicano a empresas privadas (dos fueron asignados a Chimalapas y el tercero a la vecina reserva de El Ocote) al costo de 5 000 dólares por hora; contratados durante 25 días, representaron un costo total de cerca de 3 000 000 de dólares.¹⁵ Es cierto que sin este apoyo aéreo, los daños forestales hubieran sido mucho mayores.

Hubo claras sospechas en la zona de que algunos de los brotes habían sido provocados. Un extraño conjunto de 17 diferentes frentes de fuego a lo largo de una misma latitud, abarcando alrededor de 100 km de este a oeste, empezó a arder en el corazón de la selva tropical alta y del bosque de niebla. Zona totalmente inaccesible, sin ningún poblado ni área de producción agrícola o rancho ganadero, los incendios en estas áreas húmedas en medio de la selva fueron los más enigmáticos; en las comunidades se hicieron cuestionamientos acerca de su forma tan peculiar, considerando su carácter secuencial y su aparente autoperpetuación. Se intensificaron las especulaciones de que éstos quizás hayan sido provocados para crear bases de contrainsurgencia con el arribo de tropas especiales de la “zona de guerra” chiapaneca, quienes no colaboraron con las brigadas de combate de incendios. Esta sospecha fue reforzada por el comentario de uno de los técnicos norteamericanos, quien identificó la huella singular de estos incendios con incidentes similares en Indochina.¹⁶

Cuando todo había terminado, 68 incendios forestales habían ocurrido durante 45 días. De los 17 en el corazón de la selva tropical, seis nunca fueron controlados. El 20 de junio, las tormentas tropicales finalmente acabaron con todos los incendios que permanecían. Para ese momento, 210 000 ha, 35% del área total, habían sido dañadas (el gobierno del estado fijó el daño en 25 000 ha, “de las cuales sólo un tercio era de bosque”).¹⁷

¹⁵ Hay que considerar esta suma a la luz de la falta de dinero para las casetas de observación.

¹⁶ Comunicación con los brigadistas en la zona y el experto norteamericano; el dispositivo tiene el apodo de “ping-pong” entre los norteamericanos, por la forma de sus continuos rebotes explosivos y son utilizados para el propio Servicio Forestal Norteamericano para, desde el aire, provocar cortafuegos en zonas de difícil acceso.

¹⁷ Minimizar el daño, algunos sugieren, podría relacionarse con las elecciones que se realizaron poco tiempo después. Los datos fueron publicados en *La Jornada*, 9 de julio de 1998.

126 000 ha fueron áreas de alta montaña y bosque de niebla; de éstas, 18 000 ha de bosque de niebla virgen fueron completamente quemadas.

10.6. LA NATURALEZA DE LOS INCENDIOS

Aunque las comunidades asumieron responsabilidad por algunos de los incendios, resultado de la falta de cuidado de algunos de sus miembros, otros fueron directamente relacionados con las actividades ganaderas. Sin embargo, la escala del desastre no puede explicarse por estos incidentes. Es particularmente significativo que algunos de los incendios más grandes y más incontrolables permanecen sin explicación.

En este contexto, entonces, nuestra búsqueda de las causas y motivos nos llevó a examinar la historia de la región y a identificar a los beneficiarios potenciales de los incendios. En un ejercicio de superposición de los planos de los ambiciosos proyectos de infraestructura del sector público de épocas pasadas sobre un mapa en que se localizaban los incendios, descubrimos una preocupante coincidencia entre dos grandes pero muy diferentes proyectos: tres presas propuestas a inicios de los ochenta, como parte de un proyecto “Chicapa-Chimalapa” evaluado por el Banco Mundial, y la ruta directa de la autopista planeada a inicios de los noventa desde Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.¹⁸ En discusiones dentro de las comunidades, descubrimos que el candidato oficial para el congreso local había sido por mucho tiempo uno de los promotores del proyecto de las presas, con su túnel de 40 kilómetros para conducir las aguas desde la selva tropical alta a los valles de la costa. De igual forma, el candidato a gobernador (ahora electo) en Oaxaca es uno de los más firmes promotores del llamado megaproyecto del Istmo, mientras que grupos poderosos en Chiapas estuvieron renovando sus reclamos para abandonar la larga desviación en la carretera acordada en 1992, y regresar a la ruta original que cruza la selva tropical; la zona de esta ruta original fue severamente dañada por las conflagraciones (todos los trabajos de la autopista fueron suspendidos en 1996, ya que estos reclamos fueron tomados en cuenta en los más altos niveles de gobierno).¹⁹

En nuestro análisis final, los incendios de 1998 son un reflejo del

¹⁸ No se incluyen los mapas en este libro; pueden encontrarse en la fuente original o con el autor de este libro.

¹⁹ Estas reflexiones sobre las causas subyacentes de los incendios de 1998 fueron reforzadas por seis artículos en un suplemento especial de *La Jornada Ecológica*, 27 de julio

complejo panorama de los conflictos sociales y económicos que están desgarrando las estructuras de la sociedad mexicana. Algunos fueron el resultado directo de la falta de cuidado e irresponsabilidad de campesinos pobres e indígenas intentando ganarse a duras penas su subsistencia en condiciones desfavorables; otros fueron el producto de ganaderos codiciosos, intentando expandir su riqueza y su control sobre los recursos. Pero los incidentes más serios pueden ser mejor explicados como producto de un profundo conflicto no resuelto alrededor de aspectos fundamentales de justicia social, valores ambientales y el modelo de desarrollo. Imposibilitados para usar la fuerza directa para atacar a los grupos indígenas de comunidades pobres quienes exitosamente se han aliado con campesinos pobres, y sin la capacidad de sacarlos de la región, los ricos y ambiciosos grupos industriales y financieros parecen estar usando todos los medios disponibles para bloquear los acuerdos políticos de épocas pasadas y la aún frágil conciencia ambiental y social de la época actual. No hay escrúpulos en esta guerra sin fronteras. Pero hay altos costos y víctimas reales.

10.7. CONCLUSIONES E IMPLICACIONES POLÍTICAS

Este análisis de los incendios forestales en Chimalapas durante la primera mitad de 1998 nos obliga a revisar el proceso de deforestación en México. No es correcto ni de utilidad culpar de esta terrible tragedia a los más pobres del país. Desviando la atención sobre las causas subyacentes de la deforestación, el gobierno intenta impedir cualquier discusión de los profundos problemas sociales y filosóficos causados por sus continuos intentos de acelerar el ritmo de la integración económica internacional. La ambiciosa infraestructura y programas de inversión productiva propuestos para la estratégica región del Istmo de Tehuantepec y los Chimalapas claramente plantean la cuestión de qué tipo de desarrollo y para quién. Éste es un tema que virtualmente se ha convertido en tabú en los círculos oficiales, de donde la gente honesta ha sido excluida. Estos esfuerzos por eliminar el debate e imponer una mano dura en la implementación de políticas económicas que amenazan el bienestar de los grupos locales están provocando una fuerte oposición y muchas formas de conflicto a través del país. En respuesta, algunas de las personas poderosas y grupos

de 1998, con el título: “El fuego: ¿Elemento purificador o factor de la devastación? Una reflexión sobre los incendios forestales.”

que se sienten agraviados por la incapacidad oficial para imponer de manera unilateral sus proyectos, están tomando los asuntos en sus propias manos, como sus antecesores lo han venido haciendo por generaciones. En Chimalapas, en 1998 los resultados fueron trágicos.

La gravedad de la situación es evidente tal como lo es la promesa personificada en un inusual acuerdo que reconoce las capacidades de las comunidades. Conforme planificaba sus esfuerzos de restauración, después de los incendios de 1998, la presidencia mexicana explícitamente aceptó este potencial en las comunidades de los Chimalapas, excluyendo a la región de la lista de 85 áreas de restauración ecológica en las cuales el gobierno federal implementaría sus programas sin ningún proceso de consulta a las poblaciones directamente afectadas. En lugar de ello, el ejecutivo, a través de la Semarnap, acordó firmar un acuerdo escrito que establece mutuos derechos y obligaciones en una “Comisión Técnica Comunal” que examinaría el problema en las parcelas en forma detallada y determinaría las técnicas específicas de restauración y reforestación en cada área. Al reconocer la legitimidad y autoridad de las comunidades, el acuerdo puede ser un importante avance para aceptar el modelo de administración de la selva que limitaría la deforestación a través de la protección de los bosques contra la explotación por parte de intereses externos y que retrasaría la integración violenta de la región al proceso de globalización, permitiendo a las comunidades implementar una estrategia alternativa.

Si México ha de aprender de esta experiencia, y evitar su repetición en el futuro, no será suficiente con mejorar los sistemas de combate a los incendios o la capacidad de prevenirlos. Tampoco será suficiente reconocer a las comunidades e invitarlas a la mesa de negociaciones y a los encuentros de planeación. Será imprescindible llegar a un consenso que permita a los grupos en conflicto alcanzar mutuas y satisfactorias soluciones de algunos de los asuntos más conflictivos de nuestros días: tenencia de la tierra, participación popular en la gestión y diseño de planes de manejo de recursos y, más importante, el mismo diseño del modelo de desarrollo. La mera enunciación de esta agenda imponente, hace evidente que es muy probable que la deforestación y los incendios forestales continuarán siendo nuestros compañeros de viaje durante muchos años. También es claro que si compartimos un objetivo común de protección de los bosques y de los ecosistemas de los cuales ellos forman parte, se debiera dedicar una atención mucho más seria a fortalecer las capacidades de las comunidades locales comprometidas a defender estos recursos como parte de su esfuerzo de sobrevivencia como individuos y como grupos.

11. LA INGOBERNABILIDAD EN LA GESTIÓN DEL AGUA URBANA EN MÉXICO¹

INTRODUCCIÓN

A pesar de un mandato constitucional, la descentralización de la gestión del agua urbana en México ha contribuido a agudizar la marginalidad social y la degradación ambiental. Frente a una pobre capacidad técnica y financiera de los gobiernos locales, el organismo federal —Comisión Nacional del Agua (CNA)—² ha tomado control efectivo, imponiendo un modelo tecnocrático y una orientación hacia la privatización del sistema o sus partes componentes (*e.g.*, tratamiento). Este modelo ha generado un patrón generalizado de sobreexplotación de los acuíferos, una gran irregularidad en el acceso al agua y una amplia violación del marco regulatorio, sobre todo entre los grupos campesinos, indígenas y los pobres en las ciudades. El resultado ha sido una generalizada polarización, obligando a los pobres a pagar más para su agua e infligiendo enormes costos sociales a estos segmentos de la población por los daños ocasionados a la salud humana por causas fácilmente evitables.

Aunque la descentralización es un tema central de la reforma administrativa, la CNA continúa siendo una organización semiautónoma encargada del cobro y vigilancia de las agencias locales del agua. Las administraciones locales que gestionan el agua urbana, son presionadas para cambiar sus estructuras de gestión, a fin de brindar un servicio adecuado en la parte hidráulica, sanitaria, económica y social; sin embargo, las

¹ Publicado en Soares, D., Vázquez, V., Serrano A., y Regalado, A. (eds.), *Gestión y cultura del agua*, Jiutepec, Morelos, IMTA, 2006, pp. 44-71.

² La Comisión Nacional del Agua (CNA), fue creada en 1989, como una agencia especializada que centralizara todos los temas relativos a la gestión del agua. Su amplia capacidad de acción le permite no sólo tratar con los problemas de manejo de los recursos de agua de la nación sino también mantener los expedientes sobre los recursos disponibles, así como los índices de la calidad del agua; es responsable, principalmente, de administrar la asignación de agua a todos los usuarios públicos y privados, coordinando el correcto funcionamiento de las agencias locales encargadas de gestionar los recursos hídricos para los consumidores y de los consejos regionales encargados de la gestión de cuencas y sistemas de riego. Como consecuencia, entonces, es responsable directamente por negociar los contratos y arreglos institucionales que ha llevado al país a la situación crítica en que se encuentra.

autoridades federales piensan que este estándar únicamente puede alcanzarse con la participación extensiva del sector privado. De ahí que numerosos programas están siendo implementados para incentivar la modernización de las infraestructuras y los sistemas administrativos, mientras incentivos especiales son puestos en marcha para fomentar y facilitar la participación del sector privado en este proceso.

En el ámbito de la gestión urbana del agua, la principal responsabilidad de la CNA es asegurar el buen funcionamiento de los organismos locales responsables para el suministro de agua para la población y para las actividades productivas. Esto incluye no solamente la planeación, construcción y operación de infraestructuras para la extracción, transporte y entrega del agua, sino también la negociación de transferencias entre cuencas, para abastecer a la población urbano-burguesa que no cuenta con un suministro adecuado así como a los sectores productivos urbanos en pleno desarrollo.

La gestión de las cuencas hidrológicas rurales también ha sido delegada. En este caso la gestión local de las cuencas (Consejos de Cuenca), ha sido señalada como una de las estructuras más innovadoras que pone en manos de los usuarios la toma de decisiones en relación con los sistemas de riego, pero además deja bajo su responsabilidad la gestión y asignación técnica, así como la obtención de recursos para financiar su operación y mantenimiento (Dourojeanni, *et al.*, 2002).

Para entender el porqué de estas contradicciones, inercias persistentes en materia de subsidios, inequidad e inefficiencia en el servicio, es necesario no perder de vista el marco legal y las instituciones que históricamente han gestionado el agua en México.³ Otro factor que debe ser tomado en cuenta es el cambio de régimen en el poder que acaba de vivir el país desde 2000, el cual llevó a la presidencia al Partido de Acción Nacional, de corte neoliberal, cuyo gobierno estipuló en su Plan Nacional Hidráulico 2001-2006 que el agua es un tema de seguridad nacional, cuya gestión por cuencas, debe tomar en cuenta la participación social (Constantino, 2006). El análisis presentaba evidencia clara de cómo estas directrices han quedado olvidadas en la práctica.

³ Desafortunadamente, estos consejos fueron concebidos como organismos controlados por los intereses más pudientes en sus regiones, sin una base amplia de participación de los pequeños productores (campesinos) y usuarios así como de otros grupos relevantes, los cuales llevan a cabo frecuentes esfuerzos de conservación que son cruciales para el mantenimiento y recarga de los acuíferos de los cuales dependen los consumidores urbanos e industriales. La devolución de poder a los consejos se acompaña de la participación del sector privado en algunos segmentos del servicio de aprovisionamiento y del proceso de producción.

El marco legal de la gestión de los recursos hídricos en México es abultado y complejo.⁴ Aunque defiende la propiedad de los recursos hídricos como bienes nacionales públicos, favorece la concesión privada y la transferencia de derechos en un mercado del agua no regulado ni reconocido abiertamente. Más allá de la conservación del medio ambiente y la participación social, su operación responde a los requerimientos que la presión privatizadora les está demandando. Las consecuencias de este modelo de gestión deben ser ampliamente estudiadas bajo la óptica de nuevos enfoques de gestión del agua que permitan una gestión integral del recurso (social, ambiental, política, cultural y recreativa, y, por qué no, económica). Aquí se propone para tal análisis, el enfoque de la Nueva Cultura del Agua.

11.1. LA NUEVA CULTURA DEL AGUA⁵

Nuestro análisis del extendido y complejo sistema de gestión del agua, del cual depende el país para su supervivencia, está basado en las aportaciones que ha hecho el movimiento por una Nueva Cultura del Agua (NCA) nacido en España. El concepto de la NCA ofrece un fuerte contraste con el enfoque dominante de gestión del agua que presupone la necesidad de satisfacer la demanda a través de obras públicas, aumentando la oferta para generar soluciones de balance hidráulico. Estas obras reflejan una visión de la explotación del agua que ignora los impactos sociales y ambientales, enriqueciendo a los sectores sociales establecidos de la élite política e industrial a costa de grandes segmentos de la población. La alternativa propuesta por la NCA parte de un modelo de desarrollo sustentable integral que evalúa las políticas para la apropiación social del agua en términos de su limitada disponibilidad, de los diversos valores ambientales del preciado líquido, así como su efecto sobre la equidad social e intergeneracional.

La NCA proporciona un marco para establecer criterios para la apropiación social del agua en la cual los administradores son agentes impor-

⁴ Para una reseña introductoria al marco constitucional y legislativo en México, véase Ortiz Rendón *et al.*, (1998).

⁵ Una introducción excelente al tema es Jiménez y Martínez (2004). Para mayores detalles de este enfoque, véanse los diversos capítulos de Barkin (2006), especialmente el de Arroyo (cap. 2), quien ganó el premio Goldman por su activismo ambiental en 2003, la introducción y el primer capítulo de Barkin y Klooster. También, véanse Esch *et al.*, (2006) y Arrojo (2006).

tantes, aunque no los únicos. Sin embargo, la NCA no contempla adecuadamente el papel del sector público en la regulación del manejo del agua y de los organismos públicos urbanos en su marco analítico. A pesar del énfasis fundamental en la gestión de la demanda, y su preocupación central por la protección de las cuencas, no considera de qué manera el sector público asegurará que cada agencia contribuya al objetivo global.

La NCA no fija una posición respecto a la privatización, salvo para insistir en que las decisiones estratégicas de financiamiento se deben tomar de una manera incluyente. El mercado, sin duda, genera incentivos para que la eficacia pueda generar mejoras importantes en la distribución y el uso productivo del agua, ya sea en los sectores agrícola, industrial, o urbano. Sin embargo, es ampliamente demostrado que las dinámicas del mercado son ciegas e ineficaces cuando se trata de la administración de los asuntos ambientales, éticos y de equidad. Por esas razones, aceptar el mercado como una “nueva varita mágica” que garantiza el giro hacia la Nueva Cultura del Agua sería un error. Por lo tanto, la privatización, así como la regulación en la administración del agua —sea privada o pública—, son temas que requieren un estudio y consideraciones cuidadosas.

La NCA utiliza el término *cultura* para significar la necesidad de un cambio de paradigma. En este marco, el agua no es simplemente un factor de la producción, sino que tiene un gran valor en todos los ámbitos sociales y económicos. Es parte integral de los paisajes culturales dinámicos y como componente crítico de la infraestructura del ecosistema. Integrar este marco analítico requiere cambios no solamente en el gobierno y la política, sino también en la totalidad de la sociedad.⁶ En México existe una clara dependencia en las fuentes de agua subterránea (CCA, 2003: 42) y, hasta ahora, la incapacidad del movimiento social para superar la oposición decidida de la autoridad (reforzada con el uso de la fuerza pública) de permitir la participación ciudadana en su gestión. El punto de partida del propuesto por la NCA, es la necesidad de introducir cambios radicales fundados en los principios de equidad, solidaridad, sustentabilidad ecológica, social, económica y gestión democrática. Para lograrlos, establece cuatro prioridades fundamentales como guías para formulación de la política:

⁶ La NCA se basa en una percepción del agua y de su relación con las personas radicalmente distinta a la que determinan las actuaciones de los organismos de gestión hídrica de nuestro país. En este sentido pueden distinguirse cuatro niveles de percepción del agua, que determinan cuatro modelos de gestión distintos entre sí. Éstos son el nivel hidráulico, hidrológico, ecosistémico y holístico (Arrojo, 2005; Jiménez Torrecilla y Martínez Gil, 2003).

- Agua como derecho humano
- Agua para las necesidades ambientales
- Agua para usos sociales y comunitarios
- Agua para el desarrollo económico

También señala la necesidad de castigar severamente los usos ilegítimos del agua. No se trata solamente de multas administrativas como propone la ley mexicana, sino de medidas para terminar con estas prácticas, que incluyen las extracciones excesivas del subsuelo y las descargas contaminadas a las corrientes superficiales, por mencionar sólo dos de las más significativas.

La situación mexicana de la administración del agua es diferente a la de España, incluyendo una mayor dependencia en las fuentes de agua subterránea, y nuestra carencia de un movimiento social coordinado que promueva una nueva cultura del agua. El punto de partida del propuesto por la NCA, es la necesidad de introducir cambios radicales para favorecer una Nueva Cultura del Agua fundada en los principios de equidad, solidaridad, sustentabilidad ecológica, social, económica y gestión democrática (Tagle y Barkin, 2008).

11.2. UN DIAGNÓSTICO DE LA GESTIÓN DEL AGUA URBANA EN MÉXICO

Una reforma constitucional en 1983 estableció la obligación municipal de tomar responsabilidad para la gestión del agua potable y el tratamiento de las aguas residuales (véase nota 4 y Olivares y Sandoval, 2009: 49-56). La mayor parte de estos organismos son pequeñas agencias improvisadas, compuestas por personal con poca experiencia administrativa y menos capacidad técnica. Sus directores distribuyen favores políticos y aprovechan su nombramiento para escalar en la jerarquía política. De las 2500 instancias locales, sólo 435 organismos semiautónomos, operados como agencias independientes, sea como parte del gobierno municipal o como concesiones (miembros de la Asociación Nacional de Empresas de Agua y Saneamiento, ANEAS). Menos de una docena tienen participación privada, empresas conjuntas entre las partes privadas y públicas, o son concesionarios que ganaron un contrato para la gestión de alguna parte de un sistema municipal de agua potable o de saneamiento. En México, varios de los gigantes del sector agua en el plano internacional —Suez (Ondeo), Aguas de Barcelona, Vivendi (Veolia)—, así como otras empresas internacionales de menor tamaño y algunas nacionales, participan en

la gestión de uno o más de los sistemas locales de gestión del agua y tratamiento de aguas residuales. Una aportación reciente es la concesión separada de los sistemas de aguas residuales como empresas independientes, a menudo bajo el esquema BOT (build, operate and transfer), en el que los costos son transferidos a los usuarios o al municipio (CNA, 2003). Actualmente, menos de un cuarto de los sistemas cuentan con plantas de tratamiento de aguas residuales, y menos de 22% de estas plantas son realmente funcionales.⁷

Los gobiernos locales en México confrontan un reto casi insuperable para asegurar servicios de agua potable y tratamiento de aguas residuales de una manera eficiente y económicamente viable, que al mismo tiempo sean también responsables social y ecológicamente. La mayor parte de los organismos locales operadores de estos servicios carece del financiamiento para modernizar su infraestructura, así como del personal y los conocimientos para actualizar sus estructuras administrativas y sus sistemas técnicos; por ende, no están en posibilidades de cumplir con las normas hidráulicas, sanitarias, económicas y sociales establecidas para un servicio adecuado. Como consecuencia, la CNA se ha visto transformada en una poderosa operadora, responsable no sólo de la vigilancia y regulación del sistema hidráulico nacional sino, también, encargada de su proceso de modernización; además, mantiene un control férreo y está intensificando sus esfuerzos para promover la participación del sector privado internacional en la modernización de esta infraestructura y su gestión.

La mayor parte de los sistemas de agua no son autofinanciables, aun si cuentan con el consenso de los usuarios para pagar sus cuotas, que es raro. La mayoría están plagados de enormes problemas; entre ellos, las fugas de agua a lo largo de los sistemas de distribución, los cuales son antiguos, mal diseñados, instalados con materiales y mano de obra inadecuados, y que arrastran décadas de negligencias.⁸ Para agravar la situación, la ausencia de una gestión sistemática de los ecosistemas de las zonas que proveen de agua a las zonas urbanas, resulta ominosa en el caso de las zonas de descarga de aguas residuales: estas aguas “negras” (o residuales), son frecuentemente encauzadas hacia los sistemas de riego de los campos horti-frutícolas, con producción destinada a los mercados locales (Lemus, 1995; Downs *et al.*, 1999).

⁷ Para un análisis detallado del tratamiento de aguas servidas en México, véase los capítulos de Jiménez Cisneros y Pacheco-Vega y Vega en Olivares y Sandoval (2009: 159-186).

⁸ Existen notables excepciones a estas generalizaciones que serán discutidas más adelante.

Complicando el problema de la gestión del agua, está la incapacidad de las autoridades mexicanas para asegurar el cumplimiento de las leyes, los estándares nacionales y los pagos para el acceso al vital líquido, sobre todo entre los grandes usuarios del agua: hay un abuso de los permisos para la explotación de los acuíferos y una ausencia preocupante de controles sobre su contaminación y, por otro lado, no existe una “cultura” de pago por parte de los usuarios.⁹ Estos problemas se agudizan por algunas facetas técnicas y políticas irresueltas en el sistema mexicano: el agua es propiedad de la nación, según la Constitución, pero se ha manejado como si fuera apropiable con criterios políticos; la administración sanciona su control por grupos regionales de poder y su aprovechamiento sin vigilancia y sin una rendición de cuentas. Ha surgido un jugoso mercado “paralelo” para transferir los derechos a otros usuarios comerciales e industriales; éstos compiten con los organismos locales, explotando los mismos acuíferos a expensas de los ecosistemas y el bienestar de la sociedad. Como si no fuera suficiente, los operadores también enfrentan el problema de conexiones ilegales; muchas veces se trata de empresas medianas y grandes con mucho poder local.

El servicio urbano de agua sigue siendo anárquico. No miden el consumo de muchos usuarios y otro tanto no están registrados —pequeños y medianos comerciantes e industriales en su mayoría— quienes se conectan al sistema sin registrarse. Finalmente, se presta poca atención al problema de la “nueva cultura del agua” la cual requiere de una discusión sobre cómo asignar el agua entre los distintos sectores y cómo asegurar su uso frugal o racional. No existen estrategias socialmente justas y aceptables, ya que tanto administradores como usuarios carecen de información y educación para modernizar y transformar las prácticas actuales.

En contraste, en el sector industrial, las empresas grandes están instalando sistemas de tratamiento y facilidades de reciclaje del agua, como respuesta a las multas aplicadas por la CNA por la descarga de aguas contaminadas. A pesar de grandes esfuerzos, la CNA estima que en todo su conjunto, el sistema urbano del agua en México tiene un coeficiente de eficiencia de menos de 30%, basado en las pérdidas de más de la mitad del agua que se distribuye a través de la infraestructura y un índice de recolección de cuotas de menos de 60% del agua que se factura realmente.

Es probable que el mayor significado de la reforma del marco regulatorio del agua en México, iniciada en 1992, sea el énfasis puesto en

⁹ Un funcionario responsable de una empresa líder internacional del agua cuestionaba la principal queja de la CNA, caracterizaba el problema, en cambio, como “una cultura de no cobro” en respuesta a las presiones políticas.

promover el proceso de privatización de los sistemas urbanos y la infraestructura hidráulica durante los próximos años. Como en la actualidad, en la mayor parte del mundo las compañías privadas controlan menos de 5% del consumo, pero, siguiendo el liderazgo del Banco Mundial, el gobierno argumenta que el sector público carece de capacidad administrativa, técnica y financiera para hacer frente a los desafíos para asegurar los suministros adecuados de agua con niveles altos de calidad, el tratamiento de aguas y los servicios de alcantarillado durante el próximo periodo (CNA, 2003).

Este análisis del sistema de gestión urbana del agua parte de la premisa, ampliamente aceptada, de que el sistema está muy mal gestionado y presenta grandes problemas por la falta de información precisa, la incertidumbre sobre el estado de los acuíferos de los cuales se extrae el agua, la ausencia de habilidades técnicas y administrativas para definir y llevar a cabo las funciones básicas de gestión, pero lo más alarmante es la falta de definición del alcance del sector agua en México.

En esta presentación examinamos algunos de los problemas generales y los detalles específicos de la gestión urbana del agua en México. Es claro que el país se encuentra en una encrucijada: sus ecosistemas están en peligro, así como las cuencas hidrológicas, los acuíferos están disminuyendo y el agua se contamina. Un análisis-diagnóstico de las operaciones de las compañías internacionales del agua que aquí operan, así como de los impactos sociales, económicos y ambientales, contribuye a comprender y hacer frente a los retos que enfrentan las instituciones, la clase política y principalmente la ciudadanía, para resolver y hacer frente a los problemas en la gestión del agua en México.

11.3. EL MARCO REGULATORIO

Existe un consenso internacional en torno a que los servicios públicos deben responder a las necesidades sociales, respetar el medio ambiente y cumplir con estándares técnicos y administrativos definidos y respetados cuidadosamente. Esta tarea requiere de una administración imparcial de regulación, con autoridad y maestría, para hacer cumplir los términos contractuales con las agencias operadoras, de tal suerte que la calidad del servicio esté garantizada para los usuarios, y que los ecosistemas de los cuales dependen, sean protegidos.

Quizá el mayor impedimento al mejoramiento de los servicios públicos en México sea la ausencia de un sistema efectivo de regulación o meca-

nismos para exigir la rendición de cuentas. El país carece de una capacidad independiente para vigilar el cumplimiento de la normatividad ambiental, administrativa, técnica y financiera. Para la actualización de los organismos locales, no existe ningún sistema eficaz que evalúe su actuación y asegure las mejoras de los organismos públicos o privados, a pesar de los programas desarrollados por el gobierno; incluso las comisiones estatales y los auditores son incapaces de certificar su actuación. La queja constante del gobierno federal es que a las empresas públicas les falta capacidad administrativa, técnica y financiera; estos desafíos se aplican igualmente al sector privado, debido a los obstáculos estructurales e institucionales.

A la luz del criterio internacional, la escena local parece extrañamente incoherente: a nivel nacional, la CNA es la responsable de administrar un sistema en que las agencias locales son más que nunca, dependientes de las aprobaciones federales para obtener financiamiento, así como de las pautas estructurales a seguir; sin embargo, estos apoyos no contribuyen a mejorar su habilidad para identificar y resolver los problemas locales. Formalmente, la CNA se limita a la colecta de indicadores sobre el funcionamiento de los organismos operadores locales; pero la mayoría de ellos no cuentan con una base de información sistematizada, así como con los procedimientos de análisis que les permitirían responder a estas demandas.

No existe vigilancia por parte de las autoridades federales y estatales de las agencias operadoras del agua, y los usuarios no cuentan con recursos formales de apelación en caso de aumentos inusuales de las tarifas por el suministro de agua o la suspensión del mismo. Por si fuera poco, los usuarios se han resignado a que la calidad de agua que reciben no cumpla con los estándares establecidos de calidad para el consumo humano, que el agua llegue esporádicamente, y que cuando la presión en las líneas de suministro es baja, el agua no suba hasta los tinacos. Las agencias locales del agua deben rendir cuentas a los alcaldes de las ciudades en que operan, escapando a las auditorías que el gobierno federal lleva a cabo a través de sus oficinas nacionales. Tal vez la única excepción a este patrón de falta de responsabilidad, sea lo referente a los programas financiados por fondos federales, fondos internacionales o agencias de desarrollo.

11.4. PARTICIPACIÓN PRIVADA EN LA DISTRIBUCIÓN DEL AGUA EN MÉXICO¹⁰

La privatización de la gestión del servicio del agua en México sigue siendo relativamente marginal. Existen únicamente cuatro áreas metropolitanas en las que las agencias internacionales del agua están participando. Resulta sorprendente que algunos sistemas sean gestionados por compañías privadas y que éstas no sean objeto de supervisiones efectivas. A continuación, ofrecemos una reseña de estas experiencias.

1] Aguascalientes, un centro industrial ubicado en la región semiárida central de México, fue el primer sistema en ser privatizado en 1993, bajo el espíritu neoliberal del gobierno federal; el socio extranjero es una filial del gigante francés Veolia. Irónicamente, el cambio institucional era opuesto a los intereses de la fracción empresarial del partido de derecha, el PAN; aunque las autoridades estatales tienen autoridad para regular las tarifas y establecer las condiciones de operación, la concesión logró modificar los términos, transfiriendo responsabilidades para brindar infraestructura y servicio en las comunidades “marginales” a los propios usuarios, con consecuencias terribles. Existen muchas quejas en torno a que la mala calidad del servicio y el deterioro de las fuentes tradicionales de agua, las cuales han sido literalmente “deseccadas”, causan hundimientos y grietas en el suelo, lo que ha comprometido la seguridad integral de muchas casas-habitación en las zonas pobres de la periferia urbana.

Las tarifas se encuentran entre las más altas de México, y el acuífero del cual depende la ciudad está siendo peligrosamente agotado sin que se apliquen medidas que busquen reducir el consumo o el cambio en la gestión de la cuenca hidrológica. Las instituciones locales de regulación han demostrado ser consideradas como “rehenes” de la empresa privada. Aunque ha sido negado por las autoridades, muchos expertos anticipan que de seguir así las cosas, la región será una de las primeras en sufrir una crisis por el agua que obligaría a reducir dramáticamente los planes de expansión económica de la región.

2] En 1993, un consorcio privado ganó la concesión por 20 años para gestionar el servicio de agua en Cancún; este grupo estaba encabezado por el grupo constructor mexicano GMD, su socio mexicano (Grupo Bal, un consorcio que incluye la empresa minera Peñoles y otras de los sectores de seguros y comercio como El Palacio de Hierro) y la división del agua (Azurix) del agresivo gigante americano, Enron. Cuando su socio

¹⁰ Todas estas experiencias están examinadas con gran detalle en los capítulos respectivos en Barkin (2006).

extranjero fue obligado a vender sus activos del agua por problemas financieros en 2001, se gestó un arreglo con otro de los gigantes del sector, Suez des Eaux (Ondeo), quien obtuvo un financiamiento con recursos públicos mexicanos del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras), para comprar la empresa local del agua, Aguakan, y ampliar la concesión durante diez años más. El organismo estatal está tratando de aprender cómo regular una compañía privada, mientras que sigue con sus responsabilidades administrativas para los servicios de aprovisionamiento y tratamiento del agua en las demás áreas de la Riviera Maya que están creciendo a gran velocidad; no tiene el personal técnico calificado o la plena autoridad legal para ejercer sus funciones de supervisión de la empresa de manera adecuada. La industria hotelera (aproximadamente 65% del volumen facturado) se queja de las altas tarifas del agua establecidas por el gobierno estatal, y menciona que la desalinización privada es una alternativa; los consumidores individuales se benefician de un costo accesible del servicio, como resultado de los subsidios cruzados que brinda la estructura tarifaria oficial. Observadores locales hacen hincapié en la falta de servicio en las franjas marginales de rápido crecimiento, en donde la gente tiene que comprar agua de camiones-cisternas para satisfacer sus necesidades.¹¹

3] Una compañía de capital mixto (privado-público) maneja el servicio de agua en Saltillo, ciudad industrial ubicada en el desierto del norte del país. Creada en 2001, es controlada por la compañía municipal del agua (51%) y Aguas de Barcelona (49%) a través de su filial mexicana, InterAgBar; ahora ésta es subsidiaria de Suez des Eaux. Aunque la junta de directores está integrada principalmente por empresarios locales, la empresa carece de capacidad de investigación, de experiencia técnica e incluso de la confiabilidad de sus fuentes de información; estas debilidades se extendieron a una evaluación contratada con consultores del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey que resultó inadecuada, al decir de todas las partes. De todas las experiencias de privatización en México, ésta es la más polémica; durante sus dos primeros años, las tarifas del agua aumentaron entre 32 y 68%, contraviniendo los términos de la concesión, los cuales estipulaban que el aumento a las

¹¹ En su defensa, la compañía comentó que no puede facturar el servicio de agua a los lotes que no tienen un título válido de propiedad de la tierra; históricamente, las facturas de agua han sido utilizados como una prueba para establecer residencia y propiedad, un movimiento que las autoridades públicas no sancionan, aunque en otras áreas las agencias encargadas del agua son a menudo parte de este proceso informal de “regularización”. Un problema similar prevalece en casi todas las zonas urbanas del país.

tarifas estaría limitado a la tasa de inflación, alrededor de un 11%. Una investigación del congreso local puso en evidencia múltiples irregularidades y descubrió graves conflictos entre trabajadores y directivos. A pesar de estos problemas y protestas enérgicas de los usuarios, la compañía es considerada exitosa en cuanto a la mejoría de la calidad del servicio y el aumento en la cobertura.

4] La mayor experiencia del sector privado en México son los cuatro contratos para la gestión del agua en la Ciudad de México. En 1994, la ciudad fue dividida en cuadrantes con el propósito de hacer las licitaciones públicas, crear un registro completo de los usuarios de cada zona, instalar medidores y hacer eficiente la recaudación de cuotas; los ganadores serían también responsables del mantenimiento de la red secundaria de abastecimiento a los usuarios. Se otorgaron las concesiones por diez años a empresas mexicanas con un socio extranjero que contaban con experiencia en el sector agua. En la década siguiente, las compañías fueron reorganizadas, y uno de los socios extranjeros, al ver la complejidad de la situación y el gran número de tareas que había que realizar, decidió vender sus acciones. A pesar del cambio dramático vivido en el gobierno de la Ciudad de México, cuando el partido de izquierda, PRD (Partido de la Revolución Democrática) ganó las primeras elecciones locales, la población aún no había tomado conciencia del cambio en las estructuras administrativas de su sistema de agua con el cual estaba en contacto directo; por si fuera poco, la renovación de estas concesiones (con cambios menores en las condiciones y duración de las mismas) fueron negociadas muy discretamente (en 2003-2004). Los términos del contrato así como la vigilancia de los mismos, es responsabilidad del semi-autónomo Sistema de Aguas de la Ciudad de México, el cual ejerce muy poca presión sobre los organismos operadores, mientras que las tarifas y costos de conexión al servicio son fijadas por la legislatura local; la eficiencia técnica y la recaudación se han incrementado, pero se estima que solamente tres cuartas partes pagan sus cuentas dentro del año de su emisión. Las empresas han contribuido a la creación de una base de datos computarizada de las lecturas de medidores, y los análisis permitieron mejorar el procedimiento de facturación y las prácticas de recaudación; además, se inició la identificación electrónica de fugas en la red secundaria de abastecimiento. Pero grandes segmentos de la población todavía carecen de un servicio adecuado, tanto en cantidad como calidad y las deficiencias en infraestructura han ocasionado gran sufrimiento entre importantes segmentos de la población a raíz de desperfectos y los subsecuentes hundimientos.

11.5. PARTICIPACIÓN PÚBLICA EN EL ABASTO URBANO DE AGUA EN MÉXICO

Los servicios de agua en la mayoría de las zonas urbanas de mayor población en México son brindados por organismos públicos descentralizados. Estas organizaciones paramunicipales conforman un grupo bastante heterogéneo, con competencias técnicas, comerciales, financieras y administrativas bastante diversas. Como reseña de la situación, mencionaremos tres ejemplos sobresalientes de la gestión pública, incluidos en Barkin (2006). El título de mejor sistema público de gestión en México se otorga generalmente al organismo de Monterrey, la segunda ciudad más grande de México. Otras agencias que compiten por el honor son las compañías de agua de la región fronteriza del norte; Tijuana, Baja California, centro de la plataforma de exportación de la industria maquiladora, que generalmente se reconoce como un ejemplo de excelencia, y Ciudad Acuña, una ciudad intermedia en la frontera norte. León, Guanajuato, un centro industrial de curtiduría y zapatos, fue el primer gran sistema de agua municipal descentralizado que no fue privatizado en los años ochenta, durante la fiebre de la reorganización neoliberal; la iniciativa de fortalecer la empresa pública surgió del PAN local (de vocación empresarial) quienes promovieron una política contraria a la ideología privatizadora prevaleciente en la administración priista federal. Estos organismos lograron asegurar la prestación de un buen servicio, ampliar la cobertura y mejorar la calidad, reduciendo las pérdidas por fugas en las redes de abastecimiento e incrementando la recaudación entre sus clientes. Sin embargo, sus cuotas para el servicio están entre las más altas de las que prevalecen en el país (CNA, 2008: 109); a pesar del nivel de sus tarifas, su autonomía les ha permitido ser más eficientes en la recaudación. Como resultado, estos sistemas disfrutan de la envidiable reputación de operar sin subsidios, aunque todavía reciben recursos públicos para extender los servicios a las comunidades marginadas.

En la mayor parte del resto del país, los servicios del agua son deficientes, inequitativamente distribuidos y groseramente ineficientes. El favoritismo político, los procesos administrativos obsoletos, el personal mal capacitado, el envejecimiento de las infraestructuras y su falta de planeación, así como la falta de recursos, han creado una telaraña impenetrable de secrecias y falta de información confiable que impide realizar diagnósticos eficientes. Este complejo sistema de obstáculos también sirve de escudo contra las auditorías y posibles intervenciones técnicas o financieras en los departamentos locales, mientras que la dirección generalmente insiste en su autonomía, rechazando las demandas de mayor

transparencia y sensibilidad social, aduciendo el carácter esencial de su servicio como pretexto para no revelar información. Desgraciadamente, en muchas jurisdicciones, el problema no radica en que la información se oculte o manipule; más bien, hacen falta sistemas de información que permitan la evaluación y planeación, desde el interior o desde el exterior.

Como resultado, se estima que generalmente, a nivel nacional, la eficacia global de servicio de agua urbano es de aproximadamente 30%. Este resultado es una medida combinada entre la estimación de eficacia física —proporción real de agua facturada a los clientes, comparada con el agua “producida” por las plantas de tratamiento de aproximadamente 60%, y la determinación de eficacia comercial —la relación entre el agua realmente pagada y el volumen facturado a los clientes— que se reconoce está por debajo del 50 por ciento.

Desde una perspectiva social, la situación se exacerbaba aún más por una serie de faltas de equidad que provocan que los pobres paguen más por su agua y reciban un servicio de menor calidad que otros grupos sociales. A diferencia de los patrones discriminatorios que estos grupos enfrentan en los sistemas privatizados, en donde el servicio es proporcionado mediante camiones-cisterna o tomas de agua colectivas de barrio, en muchas otras partes del país, sus contrapartes deben recurrir a los suministros de irrigación o canales del alcantarillado para satisfacer su necesidades de agua o bien, deben comprarla a los proveedores privados de agua que surten su mercancía en sus camiones-cisterna a precios tan altos “como el mercado los lleve”; están manejados por “piratas” del agua, como les han etiquetado, y quienes frecuentemente entran en conflicto con las autoridades locales del sector agua. Pero algunas comunidades periurbanas marginales no tienen la fortuna ni siquiera de escoger entre éstos; ellos deben obtener el agua de los arroyos cercanos, forzando a las mujeres —quienes son generalmente las responsables de la gestión del agua en la casa— a pasar hasta un tercio de su día laboral, ocupándose de tareas relacionadas con el aprovisionamiento de agua.

Otra fuente de inequidad es el resultado de la gestión injusta de los permisos para acceder a las reservas de agua del subsuelo por parte de las autoridades públicas. Históricamente, la concesión para perforar los pozos para uso individual y colectivo era otorgada por las autoridades federales con base en los usos finales del recurso, por períodos largos, a menudo de más de medio siglo. Ahora, todos los usuarios de agua, incluso los organismos locales encargados del agua urbana, deben pagar por su uso desde que se considera constitucionalmente que es propiedad colectiva de la nación; los organismos pagan por su agua de acuerdo con el volumen contratado, mientras que los dueños privados pagan una

cuota fija por los derechos del uso, especificados en sus concesiones. Como resultado del valor relativo cambiante de agua entre los usos potenciales, un mercado “informal” ha surgido para la transferencia (legal o ilegal) de estas concesiones entre los usuarios potenciales, con los dueños originales que obtienen una “renta” de su arriendo o venta, y los nuevos dueños disfrutan del derecho de agua para beneficio propio.¹²

En general, la gestión del agua pública en México es inadecuada. El agua es injustamente distribuida, con grandes ineficiencias y sin los mecanismos eficaces para involucrar a los usuarios en el proceso. La carga financiera para el funcionamiento del sistema en cada nivel del gobierno, transfiere sistemáticamente los costos al sector público —donde la estructura regresiva del sistema impositivo coloca una carga desproporcionada en los pobres y las clases obreras— mientras los beneficios son captados por los grandes usuarios de agua. Para agravar la situación, están los problemas de salud pública generados por la incapacidad para asegurar suministros adecuados de agua de calidad a gran parte de la población.

11.6. MANEJO AMBIENTAL Y TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS

Otro problema serio que se presenta frecuentemente en el sector del agua, es la ausencia de conocimiento y preocupación por el impacto ambiental en los recursos hidráulicos y el tratamiento de aguas residuales. A pesar de que la CNA tiene un grupo de especialistas dedicado a identificar cuidadosamente el proceso de la degradación ambiental sufrido en la mayoría de las cuencas hidrológicas mexicanas, ésta ha fracasado en la transmisión del sentido de responsabilidad y control en la administración local de los recursos hidráulicos. No existen evaluaciones sistemáticas sobre el impacto de las tendencias actuales en el uso del agua en los ecosistemas, y tampoco hay planes ambientalmente coherentes de contingencia para hacer frente a las emergencias que surgen cada vez con mayor frecuencia. Frente a la creciente escasez de agua urbana, la mayor parte de las propuestas oficiales recurren a transferencias de agua entre

¹² Existe una abundante literatura que documenta estos traslados; archivos periodísticos que denuncian las maneras abusivas en que las concesiones son adquiridas y se aprovechan de un sistema legal débil y de una estructura administrativa corrupta que permite a estos mercados informales funcionar con los tremendos costos sociales y medioambientales.

cuencas y a la construcción de presas, estrategias costosas que han ocasionado grandes daños ambientales (Arrojo, 2005; McCully, 2004). Las autoridades locales del agua carecen generalmente de las capacidades financieras y técnicas para cumplir con las normas establecidas; sin embargo, éstas deberían ser contempladas en la planificación a largo plazo.¹³

En el caso de la demanda, a menudo se hace referencia a “Una nueva cultura del agua”, pero los organismos locales del agua eligen regularmente extender sus áreas de acopio de agua, en lugar de transformar sus prácticas tradicionales de manejo de cuencas o de distribución del líquido. Tampoco hay campañas eficaces que promuevan el uso de tecnologías o sistemas de ahorro de agua en los programas arquitectónicos, ni para la capacitación profesional o modificación de reglamentos de construcción para tales propósitos. Las estrategias de cosecha y reciclaje del agua son virtualmente desconocidas en el sector público, incluso en las zonas más áridas de México, y las campañas del servicio público son especialmente torpes. De igual manera, no existe una preocupación auténtica ni una evaluación sistemática de largo plazo, de los impactos ambientales y sociales que ocasionan las descargas de aguas residuales no tratadas en las fuentes de agua superficial. Una excepción notable es el plan para intercambiar las aguas residuales tratadas de San Luis Potosí por el agua usada en las torres de alimentación de una planta de producción eléctrica, como parte de la solución a los problemas regionales del abastecimiento de agua.

México hace frente a una seria amenaza de peligros heredados, resultado de las fuerzas naturales e históricas que han depositado cantidades importantes de sustancias potencialmente peligrosas en sus cuencas. Los siglos de extracción minera y las décadas de moderna (*sic*) producción industrial y agrícola, han depositado grandes volúmenes de sustancias nocivas (arsénico, mercurio, Dicloro-Difenil-Tricloroetano mejor conocido como DDT, y plaguicidas organoclorados) que se han filtrado por lixiviación o sedimentación, hacia los acuíferos. Existe amplia evidencia de que estas sustancias presentan graves peligros para la sociedad; sin embargo, el gobierno se ha resistido firmemente a las tentativas concretas para legislar contra su uso, para hacer cumplir restricciones existentes

¹³ Aguas de Saltillo realizó un análisis geohidrológico a gran escala de sus fuentes de abastecimiento, con un grupo de expertos de su socio extranjero. Reporta que con medidas apropiadas para la conservación y manejo de la cuenca, podrá evitar la necesidad para una nueva y costosa infraestructura para acarrear agua desde lejos en el futuro previsible; desgraciadamente, el estudio se mantiene confidencial, creando suspicacias.

sobre su descarga, o de restringir su consumo.¹⁴ Dos ejemplos son suficientes para ilustrar estos problemas:

- 1] La presencia de concentraciones excesivas de arsénico, que se presentan naturalmente como resultado del agotamiento severo de los acuíferos en varias partes del México central, está conduciendo a problemas serios de contaminación en Guanajuato. También se han encontrado grandes cantidades del mineral en el 40% de las fuentes nacionales de leche, en el distrito de riego de La Laguna, Coahuila, donde se concentra en el forraje que es irrigado con agua contaminada.¹⁵
- 2] A pesar de un ejemplar programa internacional puesto en marcha para promover la utilización de una tecnología rentable que elimina descargas de productos químicos perjudiciales de la industria de curtiduría en León, Guanajuato, diez años más tarde la ciudad todavía está plagada por las descargas químicas que inciden sobre sus ecosistemas y la salud de sus obreros y habitantes. Sus plantas de tratamiento de aguas residuales no son las adecuadas para las descargas de la ciudad, y su empresa pública —reconocida por su excelente capacidad gerencial y el goce del pleno apoyo de los poderes locales y regionales— es incapaz de poner en marcha un programa de reducción de efluentes en sus puntos de origen, lo cual sería favorable para todas las partes (una solución ganar-ganar); se ha visto inmovilizada, sin poder librarse de los poderosos intereses económicos que controlan la política local. Por consecuencia, se debe continuar con el lastre de un acercamiento ineficaz y costoso del tratamiento de aguas que dejan un saldo mortal en el ecosistema y más específicamente en sus acuíferos (Blackman, 2003; Blackman y Kildegaard, 2004; Blackman y Sisto, 2003).

En la escala nacional, menos de un cuarto de todo el consumo urbano pasa por una planta de purificación de agua, y una proporción sustancial de las plantas potabilizadoras son inoperantes según la CNA. Numerosos estudios relatan que agencias locales no pueden asegurar el requerimien-

¹⁴ Aunque el tema es viejo en México (*e.g.*, Restrepo, 1995); es trágico que todavía no hay mecanismos efectivos para limitar las distintas descargas, que ahora se denominan “contaminación no puntual”, como resultado del creciente uso de agroquímicos no-orgánicos y otras de la intensificación de la explotación minera.

¹⁵ Aunque la fuente de arsénico en los dos casos es geológica, del sustrato, su liberación es consecuencia del abatimiento de los mantos freáticos ocasionado por una sobreexplotación de los acuíferos.

to operacional y las habilidades de mantenimiento; tampoco pueden sufragar los costos de la energía y otros gastos de operaciones que a menudo exceden presupuestos municipales debido a opciones tecnológicas inadecuadas, el impropio mantenimiento y los programas de modernización.

Actualmente, el tratamiento de aguas residuales es, por ley, obligatorio. Los grandes usuarios industriales pagan cuotas por descargas con base en su calidad y volumen y, como resultado, algunos han hecho esfuerzos concretos para instalar sus propias plantas de tratamiento de aguas residuales para la reutilización de estas aguas.¹⁶ Los municipios también se ven obligados a buscar soluciones a estos problemas, en un contexto de crisis financiera y una “cultura de no-pago” que prevalece en grandes partes del país. Una consecuencia es la invasión virtual de vendedores de tecnologías para el tratamiento de aguas residuales, que ofrecen soluciones “fáciles” a los organismos locales del agua, quienes se encuentran limitados para tomar decisiones óptimas debido a las fuertes presiones financieras y administrativas que enfrentan, un desconocimiento de las tecnologías existentes y la carencia de una cultura ecológica.¹⁷ Aún más, las luchas políticas por la apropiación de los beneficios de las aguas residuales sin tratar para el riego de cultivos, impiden la búsqueda de soluciones,¹⁸ y, consecuentemente, la aplicación de las tecnologías apro-

¹⁶ General Motors fue galardonado con el Premio del Agua de Estocolmo en 2001 por sus esfuerzos acertados en la reducción del consumo de agua en su planta de Ramos Arizpe en México; abundan ejemplos similares a través del país, y algunos se jactan en la publicidad corporativa de sus logros para la conservación del agua.

¹⁷ Un ejemplo de los retos para los gerentes de los organismos es la gran variedad de tecnologías disponibles para el tratamiento de aguas servidas. Muchas de las tecnologías convencionales, intensivas en uso de energía y generadoras de grandes volúmenes de desechos (a menudo tóxicos), son favorecidas por las empresas dominantes en los campos de la ingeniería y la construcción en los países ricos, porque las pueden entregar como sistemas “llave en mano” o con contratos BOT (construir, operar y transferir). En contraste, las plantas pasivas que emplean procesos biológicos son menos costosos, pero requieren capacitación de miembros de la comunidad para asegurar resultados operacionales óptimos; aunque ofrecen mejores resultados ambientales, sociales y aun financieros, la comunidad empresarial y la burocracia se oponen a su selección porque requieren de diseños específicos para cada sitio y generan menores ganancias corporativas.

¹⁸ En Zamora, Michoacán, los productores de fresas financiaron el canal municipal de desagüe de las aguas residuales en los años ochenta, para aprovechar los efluentes en sus campos como fertilizante para sus cosechas. El “crimen” se agravó al permitir a muchos de los jornaleros asentarse al lado de los canales de aguas negras, con resultados predecibles en términos de una merma en su salud. Asimismo, muchos campesinos en Hidalgo se han unido con otros grupos para oponerse a que las autoridades federales obliguen a la Ciudad de México a construir plantas de tratamiento que reducirían el flujo de efluen-

piadas e innovadoras para soluciones ambiental y económicamente sólidas. Una excepción notable es la planta de tratamiento ubicada en Villahermosa, Tabasco, que utiliza un proceso biológico pasivo en un pantano construido para tratar las aguas residuales del municipio.

En casi toda la extensión del territorio mexicano, el uso y el abuso del agua urbana está conduciendo a la destrucción ambiental con consecuencias dramáticas para la población y para la salud del ecosistema. En contraste con los preceptos del movimiento para una Nueva Cultura del Agua,¹⁹ que insiste en el control de la demanda y la integridad ambiental, el gobierno mexicano sigue sometiéndose a los dictados de la comunidad financiera internacional y de las empresas constructoras, insistiendo en las transferencias entre cuencas y la construcción de grandes infraestructuras para satisfacer la demanda. Continúa desatendiendo las consecuencias para la salud pública de la plétora de fuentes de contaminación por los nuevos proyectos industriales y agrícolas que intensifican los problemas sanitarios, mientras que desalienta activamente iniciativas para poner en práctica las nuevas tecnologías que pudieran revertir las actuales tendencias de degradación ambiental (Downs *et al.*, 1999).

11.7. ¿Y LA GENTE?

La participación pública en discusiones sobre la gestión del agua y las consecuencias para el medio ambiente en las actuales tendencias institucionales es desalentada intensamente. Aunque están centralizadas las decisiones sobre la gestión del agua en la Comisión Nacional del Agua, las decisiones más importantes, son de hecho, tomadas por otros grupos.

tes a sus campos, en donde se valorizan las cualidades como fertilizante de estas aguas negras, a pesar de sus efectos en la salud y en la calidad de sus productos. Este uso de las aguas negras está prohibido por la legislación nacional, pero las capacidades para exigir su cumplimiento son exigüas (Lemus, 1995; Downs, *et al.*, 1999).

¹⁹ Uno de los fundadores de la Fundación Nueva Cultura del Agua, Pedro Arrojo Agudo, recibió el Premio Goldman del Medio Ambiente por su liderazgo en apoyo al movimiento de base para “La Nueva Cultura del Agua” que nació en oposición al Plan Nacional Hidráulico en España, derogado en 2004 por el gobierno de Rodríguez Zapatero. El Plan proponía un gigantesco programa de obras públicas para efectuar transferencias masivas de agua al norte del país en aras de impulsar el crecimiento de la emergente economía del sur fincada en la agricultura y el turismo que requiriese de enormes volúmenes de agua para su funcionamiento. Para mayor información, una amplia bibliografía sobre el tema y acontecimientos actualizados consultar la página Web de la Fundación que lleva el nombre del movimiento, <<http://www.fnca.eu>>.

Por ejemplo: la Comisión Federal de Electricidad (CFE) tiene mucha autonomía para determinar el destino de las vías fluviales susceptibles de ser aprovechadas para la generación de hidroelectricidad; la Secretaría de Agricultura (Sagarpa) juega un papel dominante en las decisiones individuales para el diseño de políticas sobre el uso de grandes cantidades de agua dulce de México destinadas a la irrigación de cultivos; los organismos locales de agua intentan funcionar como si fueran soberanos con respecto al control del agua para los usuarios urbano-industriales; finalmente, los empresarios, dueños de derechos para la explotación de pozos "privados", a menudo hacen alarde de la violación de las regulaciones gubernamentales diseñadas para estabilizar los acuíferos. De manera propia, cada participante excluye a los demás grupos locales de la participación en las decisiones principales que afectan la asignación de agua y su manejo, y por consiguiente, el bienestar social.

Desafortunadamente, cuestionamientos sociales sobre la política pública y nuevas propuestas de proyectos generalmente enfrentan el silencio oficial y la movilización rápida de las fuerzas del orden para desmovilizar la acción colectiva. En las más recientes confrontaciones, las agencias de gobierno con frecuencia hacen infundadas promesas de compensación, reclamaciones exageradas de beneficios y aseguramientos de altos estándares de responsabilidad social, en caso de que exista cualquier daño o perjuicio. Cuando el Estado falla en honrar estas promesas, y la gente se moviliza para protestar, se encarcela, tortura o asesina a los líderes locales. Ocasionalmente las expresiones internacionales de solidaridad son eficaces para garantizar la promoción, conservación y protección de las garantías de algunos movimientos autónomos, como fue el caso de Rodolfo Montiel, quien logró detener la constante invasión a las montañas de Guerrero por la compañía *Boise Cascade*, por lo que recibió el premio Goldman del medio ambiente. En agosto de 2005, el premio "Chico Mendes" del Sierra Club le fue entregado a Felipe Arriaga Sánchez, compañero de lucha de Montiel, lo cual permitió que la violación de los derechos humanos en el problema de la tala ilegal en el estado de Guerrero, siguiera siendo tema de la agenda nacional; la sentencia en su contra fue derogada judicialmente unas semanas después. Sin embargo, aún persiste la impunidad y el encarcelamiento injusto —sobre todo de indígenas y campesinos que se han opuesto a la destrucción de los ecosistemas de los cuales depende su supervivencia.

Los funcionarios públicos han intentado relegar la gestión del agua en México a un nivel aparentemente técnico donde la opinión social es excluida. Las decisiones cruciales, como se dice, son demasiado complejas para que el ciudadano ordinario pueda participar. Incluso cuando se

convoca a las discusiones públicas y a las audiencias legislativas, se llama a los expertos académicos y a las autoridades con amplia experiencia administrativa a debatir estos temas; mientras tanto los ciudadanos comunes solamente pueden esperar para expresar sus quejas sobre faltas de menor importancia, inevitables en la calidad del servicio del agua, o de los errores administrativos. Las decisiones importantes sobre el diseño de los sistemas hidráulicos, del acercamiento para manejo de los efluentes, y de las estructuras de tarifa se deben confiar a los expertos merecedores de nuestra confianza, en espera de la representación de los intereses de la población en el ejercicio de su poder; cualquier insinuación de los intereses diagonales o privados que eliminan su trato sagrado por la confianza pública, es saludada con gritos de desdén o de “populismo” por la élite del poder.

En este escenario, para los funcionarios la oposición informada y los paradigmas alternativos son intromisiones inaceptables. Los intereses “colectivos” de la nación, definidos por la élite al servicio del capital, son siempre más importantes que los intereses directamente violados de los perdedores en la ecuación del poder económico. Sin considerar dónde queda la “razón”, la práctica actual en México ha llevado a la construcción cuidadosa de una gestión del agua nacional y de un sistema de uso, que están destruyendo los ecosistemas, envenenando a las personas y dejando al país mal preparado para enfrentar los desafíos de un desarrollo sustentable y equitativo. Las decisiones son tomadas sin programación y sin conocimientos adecuados, con base en confrontaciones entre grupos desiguales; los recursos derrochados, las personas prescindibles, y son otros los que sufren las consecuencias, aunque algunos oportunistas se benefician a corto plazo.

Presentamos, nuevamente, dos ejemplos que pueden ilustrar muy bien los problemas que enfrenta México en la gestión del agua:

- 1] La CFE propone construir el segundo proyecto hidroeléctrico más grande del país, La Parota, a corta distancia de la playa de Acapulco, Guerrero. El proyecto, de mil millones de dólares, contempla que el lago proyectado se formará detrás de una pared de 192 metros de altura que inundaría 14 000 hectáreas, desplazando a 25 000 personas. En vez de intentar negociar términos creíbles de compensación y programas para impulsar el desarrollo regional, o considerar modelos alternativos de gestión ambiental y generación de energía basada en la comunidad, las fuerzas gubernamentales intentaron sobornar inmediatamente a algunos líderes mientras que encarcelaban a la oposición más intransigente. A pesar de la solidaridad inter-

nacional movilizada para apoyar la coalición de fuerzas nacionales, elevando la apuesta y retrasando el proyecto, la CFE insiste iniciar su construcción y apaciguar a las comunidades con proyectos menores de obras públicas.

- 2] La propuesta para crear una compañía de capital mixto para el manejo del servicio del agua en Saltillo parecía muy popular cuando fue anunciada en 2001. El proceso de licitación fue organizado por la firma Arturo Anderson, que se hizo infame por su labor de engendrar el gran escándalo de la empresa norteamericana, Enron; uno de sus clientes ganó el contrato. La nueva compañía implementó aumentos “irregulares” de las tarifas, cerrándose frente a cualquier cuestionamiento público e incluso inculcó una gran preocupación en su socio mayoritario, el alcalde local. Los cuestionamientos sobre asuntos técnicos y las manifestaciones de descontento social fueron desacreditados en vista de los avances considerables en mejoras del servicio y las opiniones favorables en las encuestas de opinión pública. Una auditoría del Congreso local y la firmeza de un pequeño grupo de ciudadanos continúan manteniendo viva la discusión, mientras que las fuerzas internacionales de solidaridad, miden la correlación de fuerzas. En un ambiente donde no existen mecanismos de conciliación, donde no hay mediadores imparciales, prevaleciendo un ambiente político inestable, las preocupaciones de los grupos de base están aprovechando el momento para avanzar en su cuestionamiento de la firma, a pesar de la publicidad que hace la empresa sobre su capacidad para mejorar el servicio y consolidar su estabilidad económica.

11.8. CONCLUSIONES

A diferencia de muchos otros países en América Latina, en México ni el gobierno ni la sociedad civil han logrado implementar una agenda de reforma exitosa para la gestión del agua urbana. A pesar de numerosas protestas e innumerables movilizaciones por su mala administración, las contadas iniciativas para implantar nuevos enfoques y crear nuevos organismos para asegurar un servicio adecuado y digno no han resultado exitosas. La CNA y los organismos municipales en México siguen sin poder asegurar un servicio adecuado y accesible del agua urbana; la estructura resulta incapaz para proteger los ecosistemas de los cuales dependemos. El mayor obstáculo que enfrenta el país en el intento de alcanzar este

objetivo es la renuencia oficial para alentar o incluso permitir la participación social en la discusión de la gestión, vigilancia y gestión de los servicios públicos. Múltiples problemas como la ausencia de solvencia financiera, capacidad reguladora, y capacitación, tanto en la calidad como en la eficacia de servicio, impiden asegurar mejoras sustanciales en el servicio. Estos obstáculos seguirán como barreras infranqueables si no se permite a los grupos ciudadanos participar en la resolución de los problemas.

La experiencia de la participación extranjera en la gestión del servicio local no es muy alentadora y ofrece poco consuelo para los defensores de la privatización. Aunque han alcanzado mejoras importantes en indicadores importantes del servicio, como lograr mayor cobertura para sus áreas de servicios y eficacia en la recaudación, surgen dudas serias sobre el uso de prácticas financieras cuestionables que les redundan en mayores ganancias; en el caso de Cancún, la gente continúa preguntando cómo Ondeo logró que la banca oficial financiara su inversión en el negocio, mientras que las acusaciones contra la gerencia de Aguas de Barcelona por manejos financieros inadecuados en Saltillo (agudizado por la decisión municipal de negar responsabilidad para ejercer alguna función supervisora que correspondería a su propiedad mayoritaria de la empresa) confirman los temores sobre el impacto del capital internacional en el sector. El ejemplo de Aguascalientes confirma la necesidad de que se construya una capacidad reguladora independiente para proteger los intereses públicos. Finalmente, la experiencia en el Distrito Federal (actualmente Ciudad de México) es atípica, pues no permite generar beneficios corporativos en exceso, y hay un buen esquema de vigilancia y supervisión, lo que ha asegurado que las firmas alcancen los niveles de servicio esperados.

Por otra parte, los ejemplos excepcionales de organismos del sector público independientes operando servicios eficientes, ofrecen evidencia de que el gobierno puede reorganizarse para servir al público. A su manera, cada una de estas agencias ha generado experiencia, comprobando la posibilidad de una mejora en los servicios, elevando la confianza del público para que los usuarios estén dispuestos a pagar sus cuentas regularmente. Lamentablemente, los problemas irresueltos en el manejo de los ecosistemas siguen siendo un problema latente, y en algunos casos se han acentuado como en los casos de León, Guanajuato, y Torreón, Coahuila. Éstos son sólo dos ejemplos de los graves desequilibrios ambientales, que se presentan en un grado u otro, en casi todas las empresas, sean públicas o privadas. Representan un desafío que el gobierno nacional todavía no ha aceptado como prioritario y no está preparado a

enfrentar; carece de la voluntad política, y de las capacidades técnicas y financieras incluso para definir una agenda realista y eficaz en esta área.

Desafortunadamente, la mayoría de los organismos del sector público están pobramente preparados para satisfacer las necesidades de sus clientes o planear sus necesidades futuras. El actual esquema de descentralización no parece el más adecuado en un país carente de la preparación técnica y de los recursos financieros requeridos y con capacidades administrativas obsoletas. Ofrece una incubadora en la cual políticos ambiciosos pueden arrogarse el control del sistema para su enriquecimiento personal, sin que exista ningún mecanismo eficaz para asegurar beneficios y canales de participación para la sociedad.

En contraste, hay algunos ejemplos excepcionales donde las iniciativas locales han promovido mecanismos altamente originales y eficaces para resolver problemas locales. Se han documentado varios ejemplos en el país (Barkin, 2001). La evidencia de otros países sugiere la importancia y la eficacia de estimular iniciativas locales como un complemento y control sobre las administraciones públicas; en este contexto la experiencia de colaboración con organismos públicos exitosos ha probado ser muy útil (Hall *et al.*, 2009). Estas experiencias no sólo reflejan una capacidad de vigilancia y de resolución dinámica de conflictos, sino que a menudo crean agencias más eficientes que las estatales o las compañías privadas para proveer a poblaciones marginales, de servicios públicos (Satterthwaite *et al.*, 2005). Con apoyos apropiados, aseguran una distribución más equitativa de los beneficios obtenidos. Quizás una de nuestras tareas más importantes debe ser explorar la viabilidad de los nuevos modelos para la entrega del servicio del agua en México.

El sector público en México resultó tristemente mal preparado para su responsabilidad como anfitrión del Cuarto Foro Mundial del Agua (en marzo de 2006) y no ha mostrado una capacidad para superarse desde entonces, reflejado en su oposición actual de reconocer el derecho humano al agua en el Quinto Foro Mundial del Agua en 2009. La intransigencia oficial provoca conflictos innecesarios, aumentando la inconformidad popular y obligando a los ciudadanos a intensificar su belicosidad (reflejado en la película *13 Pueblos en defensa del agua, el aire y la tierra*, dirigida por Francesco Taboada [2008] y galardonado con el Premio de la Cruz de Bronce en Estambul en el Festival Internacional de Cine y Agua en 2009); también excluye el diálogo informado y el cuestionamiento respecto a asuntos técnicos, ambientales y sociales de gran importancia. Se hace alarde de las normas locales, y el discurso oficial es tan superficial que los observadores exteriores la consideran francamente vergonzosa. En los años siguientes al Foro en México la ciudadanía local en México

ha profundizado su comprensión de la gravedad de la situación y la necesidad urgente de informarse sobre los problemas serios que hay que afrontar. Las iniciativas de la Coalición de Organizaciones Mexicanas para el Derecho al Agua (COMDA) para abrir foros amplios ofrecen un ejemplo valioso que complementa la creciente capacidad académica para atender la emergente crisis del agua en México (Esch *et al.*, 2006).²⁰

²⁰ Para un análisis de la situación de la gestión del agua en otros países frente al IV Foro Mundial (véanse Balanyá *et al.*, 2005 y Emanuelli, 2009). Algunos sitios que actualizan la problemática de manera regular son: <<http://agua.org.mx> y <http://comda.org.mx>>.

PARTE IIIa
PROPUESTAS Y ESTRATEGIAS.
DIAGNÓSTICOS CRÍTICOS

INTRODUCCIÓN

La Revolución cubana era un evento singular en la historia de América Latina; despertó esperanzas en todo el hemisferio y abrió líneas de debate y de trabajo en muchos lugares. Resultó una experiencia muy importante en mi propia trayectoria profesional. Para un joven estudiante de economía buscando soluciones a los grandes problemas del momento, los debates y retos en torno a la Revolución eran de gran importancia; en el ambiente neoyorkino a principios de los años sesenta, las oficinas de la Escuela Monthly Review ofrecían una ventana extraordinaria a la discusión internacional y un lugar de encuentro para un constante flujo de “turistas revolucionarios” reportando sobre los acontecimientos. El director de la revista, Paul Sweezy, y su colaborador, Paul Baran, estaban avanzando en su libro, *El capital monopolista*, pero eran las discusiones en torno a Cuba durante algunos de los “Brown bag Lunches” cada semana las que crearon una gran impresión en mí. Baran (que no asistía regularmente), había escrito sobre el significado del excedente para el proceso económico unos años atrás (1959), tema que me sigue interesando hasta el presente (capítulo 29); pero en el momento los análisis del proceso revolucionario resultaban de enorme importancia, moldeando parte de mi trabajo como estudiante de posgrado y mis interacciones con Sidney Mintz, un antropólogo, especialista en el Caribe, con un gran conocimiento sobre el complejo proceso socioeconómico de la introducción y permanencia de la caña del azúcar.

Estos comentarios preliminares sirven para contextualizar las oportunidades que tuve de participar en la docencia en la Facultad de Economía de la Universidad de La Habana y redactar el artículo que inicia esta parte del libro. Tardó años en terminarse, mientras que discutíamos en Nueva York, La Habana y México sobre desarrollos teóricos y estrategias agrícolas apropiadas para la isla. Utilizar un aparato abstracto como la base del análisis es fruto de estas discusiones y de debates importantes con personas que fueron responsables de las decisiones monumentales del momento. El capítulo fue publicado originalmente en la nueva revista de la Facultad, un gran halago para un joven entrometido.

Estas experiencias y el cúmulo de investigaciones en el Centro de Eco-desarrollo, imprimieron un sesgo ruralista en mi trabajo que transformó mi visión del futuro. Los debates de los años setenta en los cuales parti-

cipé marginalmente dejaron claras las posibilidades y la importancia del campesinado para el país y el mundo. Elaborábamos la tesis de una nueva ruralidad frente a la tendencia urbanística de la globalización, una discusión que ocuparía gran parte de mi trabajo por años. En el capítulo 13 se presenta la idea de una renovada vitalidad en las áreas rurales, no sólo en México, sino a lo ancho y largo del globo; estaba tomando forma La Vía Campesina y había una gran efervescencia entre las varias organizaciones campesinas, que desgraciadamente se degeneraría por el corporativismo y cooptación característicos del sistema político mexicano.

Nuestro trabajo se enfocó en colaborar con comunidades dispuestas a experimentar con proyectos propios para la producción y el manejo del medio ambiente. Estábamos aprendiendo juntos cómo aprovechar las bondades de la universidad para dejar beneficios reales para el mundo rural. Sigo pensando que el énfasis que pusimos en la soberanía alimentaria en aquellos momentos es relevante, quizá aún más hoy en día, considerando la volatilidad en los mercados mundiales de alimentos y la vulnerabilidad que muchas regiones están experimentando por las diversas manifestaciones del cambio climático y otros problemas naturales. La protección de la biodiversidad, el rescate de tradiciones productivas sustentables y la organización colectiva están resultando determinantes para preparar a las comunidades a ejercer efectivamente su autonomía.

Esta sección termina con un recordatorio sobre el significado cultural del maíz. Resulta muy llamativo que a pesar de los peores augurios de un desplome en su producción por el Tratado de Libre Comercio, los campesinos lograron aumentar la producción al grado que terminaron con la importación del maíz blanco para el consumo humano; un complemento a este artículo es otro premiado en Inglaterra y México sobre esta historia de la producción campesina (Barkin, 2002; 2003a).

12. AGRICULTURA: EL SECTOR CLAVE DE LA ECONOMÍA CUBANA¹

Fidel Castro, en su famoso discurso *La historia me absolverá* de 1953, resumió perfectamente la desilusión cubana sobre la estructura económica existente así como el deseo de contarse entre los países de industrialización moderna:

Salvo unas cuantas industrias alimenticias, madereras y textiles, Cuba sigue siendo una factoría productora de materia prima: Se exporta azúcar para importar caramelos, se exportan cueros para importar zapatos, se exporta hierro para importar arados... Todo el mundo está de acuerdo en que la necesidad de industrializar el país es urgente, que hacen falta industrias metalúrgicas, industrias de papel, industrias químicas, que hay que mejorar las crías, los cultivos, la técnica y elaboración de nuestras industrias alimenticias para que puedan resistir la competencia ruinosa que hacen las industrias europeas de queso, leche condensada, licores, y aceites y las conservas norteamericanas, que necesitamos barcos mercantes, que el turismo podría ser una enorme fuente de riquezas; pero los poseedores del capital exigen que los obreros pasen bajo las horcas caudinas, el Estado se cruza de brazos y la industrialización espera por las calendas griegas.

Existen pocos ejemplos de la retórica latinoamericana que iguales la de Fidel, pero la insatisfacción que expresa se extiende por toda la región. A pesar de que Cuba era un caso extremo del desarrollo dependiente, muchas naciones están sujetas a los vaivenes del mercado internacional y a los intereses económicos de las naciones ricas. Todos los países que acaban de surgir desean industrializarse, y las élites dirigentes han prometido siempre “nirvanas” industriales. Sin embargo, pocos tienen la posibilidad de reconciliar sus estructuras económicas y políticas con las insistentes exigencias nacionalistas de las masas empobrecidas.

Durante los primeros años de la revolución, se prestó poca importancia a la planificación a largo plazo y a la elaboración de un programa congruente que abarcara varios sectores de la economía. En su lugar se

¹ Publicado en *Economía y Desarrollo* (Cuba) 1: 3, 1970, pp. 4475.

permitió cada administrador tomar las decisiones sobre la expansión de sus propias actividades sin medir sus efectos fuera de la empresa. Al mismo tiempo, se siguieron políticas encaminadas a aumentar el poder de compra de amplios sectores de la población: disminuyeron considerablemente las rentas, desaparecieron las tarifas de los servicios públicos y establecieron tiendas populares en todas las áreas rurales, para eliminar las tasas de interés usureras y los precios monopólicos que regían en la época anterior. Construyeron nuevas viviendas e instalaciones turísticas en todo el país para atender las necesidades de personas que nunca soñaron con tales oportunidades.

Estos programas se financiaron con reservas de la capacidad productiva, humana y de equipo, y mediante las divisas en dólares con las que podía contar Cuba por sus enormes exportaciones de azúcar. Todos los habitantes fueron movilizados para aumentar la producción y, a pesar de los efectos depresivos de las nacionalizaciones, la producción industrial en 1960 fue un poco más alta que la registrada en 1959 y aproximadamente 30% mayor que la de 1958 (Boorsteiin, 1968: 73). Sin embargo, para 1961, los inventarios preexistentes se agotaron y el embargo americano empezaba a hacer sentir sus efectos. Como resultado, la producción industrial total disminuyó; un año después se presentaron problemas similares en la agricultura. Los ambiciosos planes para expandir el área cultivada y diversificar las nuevas cosechas, tuvieron que reducirse debido al gran déficit en la balanza de pagos. No había con qué adquirir maquinaria nueva o fertilizantes. El efecto inicial del embargo ejercido por Estados Unidos fue particularmente severo, porque una gran proporción del consumo total de alimentos y de refacciones para la maquinaria se importaba de Estados Unidos.

La mayor parte de los programas de desarrollo económico se veían afectados por la insuficiencia de divisas y por una coordinación inadecuada; pero, en la eufórica atmósfera de los primeros años de la revolución, estos problemas fueron ignorados por los dirigentes e imperó un clima de optimismo general. (En la Oficina Central de Planificación los pesimistas proyectaban una tasa de crecimiento de 10% para los años siguientes.) Sin embargo, la dura realidad del desarrollo económico terminó por imponerse a los planificadores. La escasez y los desequilibrios de la producción que se presentaron en toda la economía obligaron a reexaminar la estrategia de industrialización.

En 1963, los dirigentes decidieron que la agricultura debería ser “el eje en el camino del desarrollo” (Cuban Delegation, 1967: 68). Esto constituyó un cambio importante de las decisiones *ad hoc* que se tomaban en los años anteriores. Representaba la toma de conciencia de que para

desarrollar la economía cubana era necesario planificar a largo plazo. Así, el nuevo régimen planteaba aprovechar aquel potencial productivo más fácil de movilizar para financiar la futura diversificación de la economía. La nueva política económica giraba en torno a la meta de la producción de 10 millones de toneladas de azúcar para 1970. Este cambio exigía sustanciales inversiones futuras en agricultura para mejorar la productividad y para diversificar y aumentar la producción total. La producción interna debía servir para sustituir la importación de alimentos y materias primas y además para generar excedentes y aumentar las exportaciones (Cuba, 1968).

12.1. CRECIMIENTO ECONÓMICO DESEQUILIBRADO: IMPACIENCIA E IDEOLOGÍA

Los cubanos rechazaron explícitamente el enfoque autárquico para alcanzar la autosuficiencia económica. La impaciencia y la ideología los han conducido hacia una estrategia de desarrollo desequilibrado —el que confía en la expansión del azúcar y de otros productos agrícolas para obtener más rápidamente el capital necesario para el crecimiento posterior.

Volvieron la vista hacia Marx en busca de directrices ideológicas. A pesar de que Marx pensó que el comunismo era la estructura social más adecuada para ser implantada en una sociedad altamente desarrollada, muchas personas de los países en desarrollo encuentran en sus prescripciones una forma atractiva para cruzar la brecha que existe entre una sociedad tradicional y una sociedad moderna. El comunismo puede funcionar mejor en una sociedad opulenta y de tecnología avanzada; puede proporcionar el modelo de desarrollo para un país en vías de desarrollo; puede ser el motor que facilite su tarea de satisfacer las necesidades humanas básicas.

La versión fidelista del comunismo estaba diseñada para servir como guía a Cuba en el cumplimiento de sus objetivos de crecimiento rápido y justicia social. El modelo marxista proporcionó los lineamientos para realizar un esfuerzo de desarrollo eficiente. No solamente hizo aceptable una forma de extrema centralización del gobierno, sino que también proporcionó las bases para la redistribución de los bienes de consumo. Un estricto control permitió que las masas disfrutaran de niveles de vida más altos sin desviar recursos para satisfacer el consumo. El desarrollo económico, que de otra forma se vería limitado por la cantidad liberada

para inversión, no se vio obstruido. Por lo tanto, se logró amplio apoyo popular para la nueva estrategia.

Las decisiones adoptadas desde 1963 reflejan la urgencia que experimentaban los dirigentes. Un examen cuidadoso de sus afirmaciones y políticas sugiere que los cubanos llegaron intuitivamente al camino que los economistas consideran óptimo para el crecimiento económico. La estrategia conocida como *turnpike*² (por su similitud con las carreteras de circunvalación de alta velocidad que se construyen alrededor de muchas ciudades) sigue la lógica de que el camino más directo entre dos puntos no es siempre el más rápido. Mientras mayor sea la distancia que los separe, es más rápido hacer un rodeo dentro de la vía rápida.

Los economistas han demostrado que cuando el periodo de planificación es suficientemente largo y los objetivos finales son específicos, es más conveniente dejar a un lado esas metas finales y concentrar los esfuerzos en lograr la forma más eficiente de aumentar la producción. Una vez que se ha logrado tener una base productiva más amplia, los planificadores pueden transformar la estructura económica mediante la inversión en nuevas industrias. De esta forma la sociedad puede disfrutar de los beneficios de la eficiencia económica sin comprometerse eternamente en la producción de bienes de capital que ésta implica.³

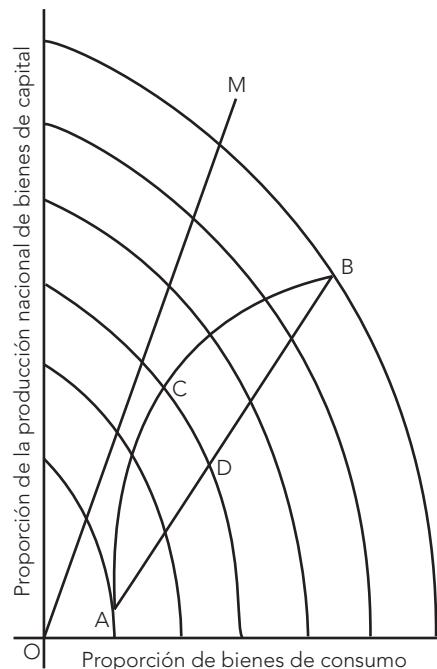
El examen de la figura 12.1 puede ilustrar este proceso. Si la posición inicial de la economía es A y el objetivo final es B, punto en que habría una alta tasa sostenida de crecimiento del consumo, entonces es más eficiente diseñar un programa de inversiones que obligue a la economía a concentrarse a corto plazo en la producción de bienes de capital (o bienes que puedan intercambiarse por bienes de capital, si se permite el

² Se utiliza el vocablo en inglés para evitar confusión; su sentido queda explicado en el texto. La referencia al modelo del *turnpike* en este capítulo no implica que los economistas cubanos lo hayan adoptado, con base en la presentación teórica en la literatura especializada. Más bien, es mi apreciación de sus decisiones respecto al diseño e implementación de un enfoque que aprovechó el potencial que ofrecía su sociedad y economía en el momento. El modelo original es de von Neumann (1945) y Ramsey (1928); fue popularizado por Dorfman *et al.*, (1958). Las políticas que resultan de la teoría *turnpike* son similares a las que resultarían de la combinación de una teoría dinámica de la ventaja comparativa y de las teorías que recalcan la importancia de lograr coeficientes de inversión más altos.

³ Las discusiones sobre los modelos de crecimiento *turnpike* revisten generalmente un carácter altamente complejo por su naturaleza técnica. Una de las versiones que más se aproxima al caso cubano al demostrar las relaciones que se dan entre la acumulación eficiente de capital y el comercio exterior es R. Findlay (1968). En muchos de sus trabajos, Maurice Dobb (1970; 1971) examina también los problemas de planificación óptima de las inversiones.

comercio) para lograr más rápidamente la meta propuesta. Esta estrategia es aconsejable debido a la existencia de una senda de expansión (OM) conocida como el rayo de Von Neumann, que expresa, a la par, equilibrio y eficiencia, es decir, que permite que la economía crezca a un ritmo más veloz. Al aprovechar el potencial de crecimiento que existe cuando la estructura económica se asemeja más estrechamente a la eficiente representada por el rayo de Von Neumann, los planificadores estarán en aptitud de mover hacia adelante la frontera de la producción más rápidamente que si estuvieran siguiendo una estrategia de crecimiento equilibrado y menos eficiente definida en términos de B (ADB). En estas condiciones, la inclusión en el análisis de los criterios de eficiencia global sugiere la necesidad de una selección deliberada que conduzca la economía a lo largo de la catenaria ACB. La teoría afirma que si la economía se dirige correctamente será posible lograr en un tiempo más corto el objetivo B siguiendo la “vía rápida” que dirigiéndose directamente, hacia el objetivo final desde el principio.

FIGURA 12.1



Cuando se utiliza este tipo de estrategia de desarrollo basado en un sector clave, las inversiones se asignan exclusivamente sobre la base de la eficiencia, al menos durante las etapas iniciales cuando elevar al máximo la tasa de crecimiento constituye el objetivo primordial. Debe incluirse por lo menos una importante restricción al formular el programa de inversión: la producción de bienes de consumo debe crecer a una tasa similar a la de la población. Se requiere otra modificación de la teoría original, cuando una economía depende en alta medida del comercio internacional: puede ser más ventajoso obtener los bienes de capital requeridos a través del intercambio, produciendo artículos exportables. En la gráfica esto requeriría modificar la leyenda del eje vertical, en los siguientes términos “proporción de bienes de capital y otros susceptibles de intercambiarse por éstos”. Por lo tanto, la forma de la catenaria está determinada por la necesidad de mantener el nivel absoluto de consumo per cápita y la inclinación de los planificadores para incluir en sus planes de desarrollo la posibilidad de comercio basado en la ventaja comparativa dinámica.

Las ideas de control central e igualdad del marxismo-leninismo facilitaron la evolución de un programa de desarrollo deliberado. Fidel y otros dirigentes siguieron siempre un enfoque pragmático de los problemas que planteaba la modernización. A pesar de que se cometieron numerosos errores de inversión (algunas veces como resultado de la intervención directa del primer ministro), las decisiones políticas se sustentaban sobre bases racionales. Por ejemplo, la estrategia del desequilibrio da prioridad al desarrollo de las industrias más eficientes.

La organización socialista permite que los planificadores canalicen las ganancias de las empresas rentables a la creación de nuevas industrias o a la expansión de las ya establecidas. Bajo el sistema capitalista, en donde la toma de decisiones es descentralizada y en gran medida se encuentra concentrada en el sector privado, se dispone de una proporción menor de las ganancias obtenidas para canalizarlas a nuevas inversiones, porque es más difícil contener los niveles de consumo.

Además, sin planificación central puede darse el caso de que se inviertan más recursos en la expansión de instalaciones de producción relativamente ineficientes o en nuevas líneas de la misma empresa. Con una economía socialista dirigida centralmente, los planificadores pueden tener mayor libertad para trasladar los beneficios e inversión de una industria a otra, de acuerdo con sus decisiones acerca de la importancia y eficiencia relativas de los diferentes productos. Estas condiciones permitieron que Cuba movilizara una mayor parte de su excedente para destinarlo al crecimiento económico.

La influencia del marxismo sobre la Revolución cubana determinó la temprana decisión de redistribuir el consumo favoreciendo a los pobres y aumentar la importancia de los servicios sociales públicos. Durante las fases iniciales del desarrollo se trazaron ambiciosos planes para invertir casi todo el aumento de la producción en la expansión posterior de la capacidad productiva. El sistema de racionamiento permitió un rápido incremento en el consumo de los pobres, especialmente los de las áreas rurales, sin incrementar el consumo agregado, trasladándoles los bienes de los grupos urbanos más ricos. Dado el éxito alcanzado por los programas iniciales de producción de bienes de consumo, se preveía la liberalización gradual de las restricciones que impone el racionamiento. Al mismo tiempo se dio mayor importancia a la asignación de servicios públicos colectivos para asegurar la participación igual de todos los grupos en el esfuerzo de desarrollo. Éstos incluyen la educación, la cual no solamente capacita al pueblo para participar más completamente en el esfuerzo de desarrollo, sino que es un elemento esencial en el proceso de participación.

Los cubanos modificaron el modelo económico para que incluyera el incremento de la población y la incapacidad de producir una amplia gama de maquinaria y artículos de consumo. Optaron por concentrarse en la producción de bienes agrícolas y desarrollar las relaciones comerciales con otras naciones, de forma que el equipo de capital requerido pudiese comprarse con las ganancias de las ventas de la agricultura. Desde su punto de vista, la agricultura era el sector menos costoso de desarrollar y representaba la forma más expedita de ensanchar su limitada base de exportaciones. Explicaron que con ello no solamente se abría la posibilidad de exportar una mayor proporción del incremento de la producción y de reducir las importaciones de comestibles, sino que también ofrecía la posibilidad de utilizar las reservas de tierra fértil que permanecían aún inexploradas. La productividad de la tierra y del trabajo podrían incrementarse sin exigir la cantidad de personal calificado y de importaciones de bienes de capital que requerirían otros sectores.⁴

El primer paso que se dio para instrumentar esta estrategia fue la declaración de 1963 sobre la meta de producir 10 millones de toneladas de azúcar para 1970. Algunos dudaron de la sabiduría de esta campaña, ya que se había acusado a la antigua dependencia cubana del azúcar de la

⁴ La descripción de la política económica cubana desde 1963 se basa en documentos oficiales y discursos de varios ministros. Esta sección se basa en uno de los documentos más informativos (Cuba, 1968). En la última parte de este capítulo analizaremos los datos de producción para comprobar si se siguió esta estrategia y en qué medida.

deplorable situación social y económica que prevalecía en vísperas de la revolución. Pero la elección de este sector, después del flirteo inicial con una ruta socialista más ortodoxa de rápida industrialización, no fue mera casualidad; Cuba cuenta con una aplastante ventaja comparativa en la producción de azúcar.

El azúcar es sólo parte del esfuerzo de desarrollo. La cría de ganado ocupaba el segundo lugar en prioridad. El objetivo era aumentar el hato ganadero y elevar su productividad para dar lugar a un rápido incremento en la producción de leche y carne. Simultáneamente se desarrollaron otras líneas agrícolas como parte de la primera fase de la nueva estrategia de desarrollo: esos productos incluyen frutas cítricas, arroz, café y tubérculos. Eran importantes por su efecto en reducir las importaciones y diversificar las exportaciones.

Los cubanos estaban plenamente conscientes de las limitaciones inherentes al desarrollo agrícola. No solamente saben que el mercado para una cosecha de azúcar mayor de 10 millones de toneladas era limitado, sino que también reconocen que las ganancias de exportación provenientes de otros productos agropecuarios no pueden continuar aumentando indefinidamente, ya que el área laborable era muy limitada. Aun con mejoras en la organización y en la eficiencia técnica, el sector agrícola no podía financiar grandes incrementos de los gastos de inversión durante mucho tiempo (Gutelman, 1970: cap. 7).

Por consiguiente, la próxima etapa de desarrollo se concentraría en la explotación de los amplios recursos mineros de Cuba. A pesar de que el contenido de importación de la inversión nueva en ese sector es más costoso que en el agrícola, la cifra es más baja y la producción de excedentes exportables es más alta que en otra industrias. Se preveía el desarrollo de industrias metalúrgicas para extraer las grandes reservas de laterita que se localizan en la Provincia Oriental para la producción de níquel, cobalto, aluminio, cromo, hierro, acero y subproductos. Otras industrias planeadas para este periodo se basaban en derivados del azúcar y en la riqueza potencial silvícola, todavía inexplorada.

Entre las muchas dificultades que puede presentar el enfoque *turnpike*, se cuenta el peligro de que los intereses creados durante el proceso de desarrollo pongan resistencia a los cambios requeridos para alcanzar los objetivos. La decisión sobre la división del presupuesto entre inversión y consumo puede crear un conflicto. Podría afirmarse que bajo cualquier situación, y con la mayoría de las estrategias, es posible alcanzar tasas de crecimiento más dinámicas efectuando más inversión. La tentación de desviar recursos hacia los bienes de inversión puede resultar mayor con la estrategia *turnpike* que con otras estrategias, y sus pro-

motores tendrían que desafiar a aquellos que deseen incrementar los niveles de consumo.

Al efectuar la selección de las técnicas de producción surge una dificultad adicional. Con frecuencia la selección se hace entre procesos de producción altamente mecanizados y los intensivos en mano de obra. La selección de la tecnología apropiada puede ser difícil, por la existencia de conflictos entre las metas propuestas de absorber gente en las actividades productivas en las que realizan una contribución social y las que plantean la necesidad de aumentar la productividad del trabajo, tan rápidamente como sea posible, para elevar el ingreso. Con la modernización de la producción frecuentemente se vuelve más costoso crear empleo para ocupar trabajadores adicionales. La producción mecanizada requiere mayor inversión y con frecuencia es más eficiente que el trabajo humano. Por lo tanto, si la absorción de trabajo es un problema, puede surgir un conflicto entre los objetivos económicos y los sociales. De ninguna manera la estrategia *turnpike* está exenta de costos. Eventualmente los cubanos tendrán que enfrentarse al problema de “salir”.

12.2. EL MARCO SOCIPOLÍTICO

Los cubanos eran cautelosos en lo que se refiere a sacrificar las metas sociales de la revolución en aras de un rápido crecimiento económico. Desde el principio estuvo claro que Fidel tenía el compromiso de eliminar el desempleo —que fuera la ruina del campesino en la época de la Cuba prerrevolucionaria—. En 1953, declaró que había “... seiscientos mil cubanos que están sin trabajo deseando ganarse el pan honradamente sin tener que emigrar de su patria en busca de sustento” (Castro, 1956: p. 61). La investigación que se realizó en 1958 describía la situación con gran detalle. La tasa promedio de desempleo era aproximadamente de 16.4%; se estimaba que los subempleados representaban el 30.2% de la población. La situación era más grave durante la época “muerta” que tenía lugar de agosto a septiembre, cuando el 20.5% de la fuerza de trabajo estaba totalmente desempleada. En el punto máximo de la zafra la cifra disminuyó a 9.1% (Cuba, 1958).

El Che Guevara expresó la preocupación de los dirigentes por los efectos adversos del desempleo en un discurso a una asamblea de obreros:

Ahora, el deber de este gobierno revolucionario es, antes que ninguna otra cosa, en términos económicos, atender a los desocupados en primer lugar, atender a

los subempleados en segundo lugar. Por eso es por lo que hemos luchado mucho nosotros contra los aumentos de sueldo, porque también aumentos de sueldo significan, por otro lado, un hombre menos que se ocupa. El capital del país es un todo, no lo podemos crear con una maquineta, eso es mentira, cuanto más moneda, menos valor tiene esa moneda. De modo que el capital es un todo, y con ese capital tenemos que desarrollar nuestro país, tenemos que pensar bien para hacer que cada industria que se ponga a trabajar sea la que dé en ese momento el mayor número de empleo, porque es nuestro deber, lo repito, primero, primero que cualquier cosa, hacer que todo el mundo coma en Cuba; después, que todo el mundo coma todos los días; después que, además de eso, todo el mundo se vista y viva decentemente en Cuba; después, que todo el mundo tenga derecho a asistencia médica gratuita y a educación gratuita.

Prosiguió diciendo: “a fines del año 62, es decir, dentro de dos años y medio exactamente, acabará el desempleo en Cuba” (Guevara, 1960: 8, 14). Aunque el Che señaló más tarde que “dentro de un régimen de justicia social las contradicciones entre el avance tecnológico y el pleno empleo deben resolverse con gastos improductivos” (Guevara, 1962).

Sin embargo, Cuba no tuvo que tomar este camino. Empezó atacando frontalmente los problemas de infraestructura, servicios educacionales, médicos y otros servicios sociales que exigían el trabajo de muchas personas y que eran insuficientes durante los primeros años de la revolución. Los esfuerzos por utilizar totalmente la capacidad productiva existente y por crear nuevas industrias absorbieron todavía más gente. Finalmente, la actitud beligerante de Estados Unidos hizo necesario mantener a muchos miles de trabajadores potenciales en pie de guerra en una economía que estaba luchando por incrementar su producción física. Así pues, los trabajadores fueron absorbidos productivamente en la construcción de casas, caminos, presas, etc.; en la expansión de la tierra arable y su explotación más intensiva; en la introducción de nuevos cultivos y tecnología; en la producción de insumos agrícolas y en el procesamiento de productos agrícolas; en la educación y otros servicios sociales; y en la defensa.

Por lo tanto, para el periodo en que se decidió cambiar la estrategia económica, el problema de Cuba era asignar su fuerza de trabajo relativamente escasa en la forma más eficiente posible, dados los bajos niveles de educación y entrenamiento que estaban reduciendo sustancialmente la productividad. El gran éxodo a Estados Unidos de trabajadores calificados y de profesionales de todas las ramas que se efectuó a medida que avanzaba la revolución, contribuyó a la disminución de la productividad y agudizó la necesidad de invertir una gran proporción de todos los recursos en capacitar a la población.

Puesto que había trabajo para todos, era más fácil instrumentar las políticas de distribución igualitaria. Uno de los primeros efectos de la revolución fue la redistribución del ingreso real de los centros urbanos hacia el campesinado rural. Casi desde el principio se establecieron tiendas populares, precios de garantía, servicios sociales mejorados, salarios rurales más altos y programas de construcción, para beneficio del campesino (Dumont, 1965: 55-57). Como lo expresó Ania Francos: “Una cosa es cierta; nada es demasiado bueno para los campesinos” (1962: 56).

Las ideas igualitarias tan comúnmente expresadas en otros marcos revolucionarios llegaron a ser el precepto que determinaba el diseño de las políticas; probablemente fueron la causa de que el actual régimen perdiera a muchos de sus simpatizantes de la clase media, pero crearon la base ideológica para que se diera la importante movilización del trabajo en la Cuba revolucionaria. Esas ideas ejercieron una influencia considerable en la decisión final sobre abandonar los incentivos materiales como premio al trabajo, que fue anunciada en 1966. La decisión de Fidel fue la culminación del largo debate sostenido entre muchos de los miembros del Consejo Cubano de Ministros de Economía y algunos destacados marxistas europeos, acerca de la forma más adecuada de alentar a la gente a trabajar a toda su capacidad y a contribuir a lograr las metas nacionales. El “Gran Debate” sobre esos temas, que tuvo lugar entre 1963 y 1965, reflejó el encuentro con los problemas económicos que forzaron el cambio de la estrategia inicial de desarrollo. Los abogados de la ética revolucionaria, encabezados por el Che Guevara, apoyado por Ernest Mandel y otros, se enfrentaron a los que apoyaban la racionalidad económica, encabezados por Carlos Rafael Rodríguez que contaba con el apoyo de Charles Bettelheim, René Dumont y otros entre los marxistas europeos.

Estos debates reflejaban también la competencia entre las formas de organización económica que prevalecían en Cuba por entonces; bajo el tutelaje del Che Guevara, el sector industrial se había dirigido rápidamente hacia el control y dirección centrales, mientras en el sector agrícola Carlos Rafael Rodríguez había creado un sistema descentralizado de autofinanciamiento dentro de un marco general de planificación central, reteniendo los incentivos materiales (Silverman, 1973).

La escasez de bienes y la incapacidad de otorgar diferenciales de salarios sustanciales fue otro factor que contribuyó a realizar el cambio hacia los incentivos morales. Además, para poder cumplir con la plantación a corto plazo y el cuidado de las cosechas agrícolas se necesitaron de los servicios de un número importante de trabajadores para efectuar tareas duras y sin calificación. Se habrían necesitado importantes diferenciales

de salarios para inducir a los trabajadores a dejar trabajos que frecuentemente requerían más aptitudes y que eran más productivos. El trabajo voluntario sin remuneración era la respuesta lógica, sobre todo considerando las importantes mejorías en las condiciones de vida para la mayoría en los años anteriores. Desde el punto de vista del gobierno, ese cambio era necesario para instrumentar los ambiciosos planes de inversión en los años siguientes, sin ocasionar presiones inflacionarias que "no habrían sido más que un sacrificio incontrolado de aquellos sectores de la población que tienen un ingreso menor" (Castro, 1970). El programa de racionamiento empezó con la carne y se amplió progresivamente hasta incluir casi todos los artículos alimenticios, vestido y bienes de consumo duradero. Ahora [1970] hay pocos bienes que no estén sujetos a racionamiento y todos tienen una gran demanda. Es bastante común ver largas filas esperando para comprar bienes no racionados tales como comidas de restaurante, transportes, reservaciones de hoteles, helado y aun lápices cuando están disponibles. Los libros y revistas se agotan casi tan pronto como son publicados.

A pesar de que aún subsisten grandes diferencias en los salarios nominales de diferentes grupos, las variaciones en los salarios reales son considerablemente reducidas debido a los altos precios de los bienes no racionados. Dado que los precios de los bienes racionados están controlados, la mayoría de la gente en Cuba tiene ingresos suficientes para comprar su cuota completa. La cantidad de bienes no racionados que puede adquirir una persona depende de su ingreso nominal y del tiempo de que disponga para buscar productos que comprar. Existe un esfuerzo por divorciar las ganancias monetarias de la productividad mediante la reducción de los diferenciales de salarios y solicitando a los trabajadores que no pidan el pago de tiempo extra. La igualdad se refuerza todavía más mediante la eliminación del ingreso por propiedad y por la provisión de una creciente gama de servicios sociales como educación, servicio médico, guarderías, actividades culturales e instalaciones turísticas (Barkin, 1972a).

La orientación igualitaria se reflejó en la decidida prioridad otorgada a la educación durante los primeros años y en los continuos esfuerzos por elevar al pueblo a un grado técnico más alto. En la Cuba prerrevolucionaria más de una cuarta parte de la población era analfabeta en contraste con el 3% de la población que se encontraba en condiciones similares en 1968 (Leiner, 1973). La espectacular campaña que se desarrolló para erradicar el analfabetismo fue seguida por un ambicioso plan educativo; la proporción de la población que asiste a la escuela se duplicó. Inmediatamente antes de la Revolución, 835 000 personas, o sea 12.8% de la población, asistía a algún tipo de escuela en Cuba; en 1967,

la cifra era 2.2 millones, es decir 26.6%. (De esa cifra aproximadamente 425 000 estaban en programas de educación para adultos.)

Los problemas sociales comunes con la mecanización no eran motivo de preocupación para los cubanos debido a los innumerables trabajos de nueva creación que quedaban vacantes. El objetivo de liberar hombres de los trabajos enajenantes reforzó la decisión de mecanizar, y cuando ésta se combinó con los principios igualitarios, llevó a los planificadores a buscar las formas de eliminar las tareas desagradables. Se realizan análisis de costos de la eficiencia relativa de métodos alternos de mecanización de la producción, pero las consideraciones sociales (no de mercado) desempeñaban un importante papel para influir en las decisiones acerca de la asignación del trabajo. La aversión y la dificultad de cortar caña, aunadas a la necesidad de trabajo adicional para laborar en otras actividades llevaron a otorgar una alta prioridad al diseño de una cortadora mecánica de caña. Otras tareas que se mecanizaron debido a la combinación de razones económicas y humanísticas eran el traslado de la caña en carretas con cargadoras mecánicas y el transporte del cemento, azúcar y otros productos. Otra innovación fue la total mecanización de la producción arrocera. Algunas de estas innovaciones podían comprenderse sólo cuando se piensa que las tareas desagradables son una utilización costosa de la fuerza de trabajo.

12.3. EFECTOS ECONÓMICOS DEL CONTEXTO SOCIPOLÍTICO

Puesto que el programa de desarrollo cubano convirtió a su economía que tenía excedentes de mano de obra en otra con escasez de ella, no puede sorprender que se haya otorgado prioridad a la elevación del nivel tecnológico de la economía. Fidel Castro y otros dirigentes señalaron frecuentemente la importancia de que un país en desarrollo debe estar a la vanguardia del desarrollo tecnológico y debe aplicar constantemente las innovaciones que resultan del desarrollo del conocimiento.

La tecnología era sólo un elemento en el esfuerzo por lograr la elevación de la productividad del trabajo. El esfuerzo masivo de educación también realizó una contribución al proporcionar miles de técnicos calificados. Durante los primeros años de la Revolución mucha de la gente calificada que emigró tuvo que ser remplazada. Por consiguiente se trazaron programas de fuerza de trabajo y se desarrollaron programas educativos para abastecer el personal calificado necesario a niveles intermedios y avanzados.

Los requerimientos de fuerza de trabajo para realizar el esfuerzo de desarrollo hacían imperativa la elevación de la tasa de participación del trabajo y el aumento de la jornada de trabajo. Se estimulaba a las mujeres a cubrir puestos anteriormente desarrollados por los hombres y a participar activamente en nuevas empresas productivas. Los estudiantes pasaban parte de su tiempo desarrollando trabajo productivo. Se solicitaba a todos los trabajadores contribuir con horas extras de trabajo voluntario para alcanzar los objetivos de producción. Estas medidas eran parte de un intento por afrontar el grave problema de corto plazo de escasez de mano de obra. A pesar de que todos estos esfuerzos representaron un éxito en cuanto al incremento de las horas-hombre trabajadas, la disminución de la productividad del trabajo y la organización ineficiente contrarrestaron parte de su valor.

No obstante que las nuevas inversiones y la educación ofrecen la promesa de elevar la productividad, los cubanos enfrentaron el constante problema de la disminución de la productividad en las ocupaciones tradicionales y del creciente ausentismo. Estos problemas eran, en parte, un reflejo del éxito del programa de racionamiento y de los esfuerzos redistributivos para mejorar, a expensas del habitante urbano, el bienestar material del campesinado. Sin embargo, la ineficiente utilización del equipo minó los beneficios esperados.

La disminución de la productividad del trabajo puede ser contrarrestada mediante la mecanización. El uso del equipo no sólo hace posible que los hombres sean más productivos, sino que frecuentemente estimula la productividad haciendo que los trabajadores tengan un ritmo de trabajo determinado por la capacidad de la máquina. Se esperaba que su utilización revirtiera la disminución de la productividad por la eliminación de los incentivos materiales. Sin embargo, los logros en este sentido resultaron limitados.

La estrategia revisada de desarrollo de los cubanos da respuesta a las severas limitaciones de su actual capacidad de exportación y es un análisis de su potencialidad agrícola inmediata. Se pidió a una población en constante crecimiento dar todo de sí misma, a pesar de que a todos se les garantiza un nivel de vida mínimo. Se prometió a los cubanos que, después de unos años de sacrificio material que requiere la estrategia *turnpike*, la producción aumentaría mucho más rápidamente permitiéndoles disfrutar un nivel de vida más alto en una sociedad igualitaria. Cuba podría ser una muestra del desarrollo socialista, justificando el desafío al imperialismo norteamericano. Sin embargo, después de los primeros momentos de explosivo optimismo, se evidenció que la construcción de la nueva sociedad requerirá un periodo más largo para convertirse en realidad.

12.4. DATOS ECONÓMICOS

¿Qué significa el desarrollo económico para el obrero cubano? A pesar de que los datos son incompletos, sugieren claramente que la inmensa mayoría, que fue pobre antes de la revolución, en 1970 estaba mejor en términos materiales a pesar de que el crecimiento de la producción agregada ha sido lento. Leche, carne, huevos, vestidos y muchos otros bienes, a pesar de estar racionados, son, sin embargo, más accesibles para los pobres que en la situación anterior. Algunos bienes no están racionados, el helado, por ejemplo (!!), y pueden obtenerse tras largas colas de espera. Los servicios de educación pública y atención médica están más extendidos especialmente fuera del área de La Habana.

Sin embargo, la estrategia *turnpike* impone la condición de extraer recursos del consumo. Los fondos de inversión deben utilizarse para el desarrollo de las industrias eficientes y para la constante expansión de la capacidad productiva. Para estas tareas también se necesitan divisas. En esta sección evaluaremos la forma en que los dirigentes tradujeron las aspiraciones de un desarrollo rápido en planes concretos de asignación de recursos a los sectores adecuados de la economía.⁵

a] Producción agregada

A partir de la revolución (y hasta 1970), la población de Cuba creció a un ritmo un poco mayor de 2.5% anual. Este crecimiento se ve contrabalanceado por una tasa de emigración de 0.5% desde 1961. En 1970, aproximadamente 8.3 millones de personas vivían en la isla. La fuerza de trabajo creció un poco más lentamente debido a la emigración. El considerable incremento de la participación de la mujer en la fuerza de trabajo aumentó la proporción de personas económicamente activas a cerca de 30%. El número de personas que trabajaban en la agricultura, la industria y el comercio permaneció relativamente estable, con excepción de la demanda temporal durante la zafra. Los aumentos en la producción de estos tres sectores se lograron por los aumentos de maquinaria y de trabajo registrados. En los servicios públicos, como educación, medicina y construcción, se utilizaron trabajadores adicionales.

El ingreso nacional real aumentó. Se elevó aproximadamente en 11% entre 1962 y 1965, pero después cayó a 6% (medido en pesos constantes

⁵ Para esta edición se han suprimido los cuatro cuadros: están disponibles en Barkin (1973) o del autor. [!?!]

de 1965) por la disminución de la producción de azúcar en 1966. Esto significa que el ingreso per cápita permaneció alrededor de su nivel de 1962, que era de \$500. El consumo per cápita aumentó en 7.4% entre 1962 y 1965, pero después se impuso cierta austeridad cuando la caída del ingreso nacional forzó a los cubanos a restringir el consumo individual a su nivel de 1962. Estas cifras están expresadas en términos agregados per cápita, lo que significa que el fondo de consumo total se incrementó tanto como para proporcionar cantidades de consumo iguales al incremento de la población.⁶

Mientras que los niveles de consumo personal permanecieron constantes, el gasto público se elevó rápidamente para ayudar a financiar los grandes incrementos tanto de los servicios sociales como de las actividades productivas. La inversión pública se elevó aproximadamente en un 50% entre 1962 y 1965; para 1966 representó casi la cuarta parte del producto nacional bruto. A pesar de que se registraron aumentos espectaculares en el gasto para ciencia y tecnología (122%), y para deportes y propósitos recreativos (136%), la mayor parte del gasto público se asignó a las actividades agrícolas e industriales.

Estos datos agregados reflejan una política de congelación o aun de disminución de los niveles de consumo personal para poder canalizar recursos hacia la inversión y hacia la dotación de servicios de consumo colectivo. Esto confirma la impresión del visitante de que los niveles de consumo de los bienes racionados, que abarcan ahora casi toda la gama de bienes de consumo, se restringieron aún más desde 1969 como parte del esfuerzo para disponer de más recursos para la cosecha azucarera. Al mismo tiempo se registró un continuo mejoramiento en la cantidad y calidad de los servicios gubernamentales como son educación atención médica, centros de atención para la niñez y otros bienes de consumo colectivo. Esto refleja el cambio de orientación de la economía cubana dirigido a lograr el mejoramiento de los niveles de vida individual a través de medios colectivos en lugar de individuales.

Mientras tanto, los recursos materiales se retiran del consumo individual para dar lugar a grandes aumentos en la inversión, a fin de elevar

⁶ Entrevistas con campesinos y el examen de algunas de las conclusiones de la investigación sobre el gasto realizada en 1957 por la Agrupación Católica Universitaria indican que los niveles de consumo son todavía más altos que lo que eran para los estratos más bajos de la población antes de la revolución. Las cifras per cápita deben tornarse con gran precaución, ya que la distribución del ingreso cambió sustancialmente y un gran número de miembros de los antiguos estratos superiores emigró. Además, como se destaca más adelante, los grandes aumentos en el consumo colectivo elevaron los niveles de vida sin elevar las cifras del ingreso personal.

la capacidad productiva del país. La proporción del producto nacional bruto que se invierte se elevó de 18% en 1961 a 24% en 1966; el aumento planeado para 1968 era de 31%.⁷ Éste es un indicador que revela la magnitud del sacrificio que se solicita del pueblo cubano.

A medida que el gran incremento de los fondos de inversión se canalizó hacia nuevas actividades se manifestaron nuevas prioridades. Cuando los programas de desarrollo maduraron, se trasladó a la producción una proporción creciente de toda la inversión, en lugar de dedicarla a los servicios sociales, los que durante los años iniciales de la revolución recibieron casi la mitad del presupuesto para nuevas inversiones. Mientras que el porcentaje de inversiones destinadas al bienestar social disminuyó en casi 45% entre 1961 y 1964, la inversión industrial y la agrícola duplicaron su proporción del fondo de inversiones que se incrementaba continuamente. En 1964, estos dos sectores estratégicos recibieron 60% del presupuesto de inversión. El cambio hacia la producción agrícola resultó en 50% de aumento de su participación en la inversión total, mientras que la inversión industrial permaneció casi constante (en pesos de 1965), y disminuyó un poco en términos relativos. La decisión de tratar de cosechar 10 millones de toneladas de azúcar en 1970 se refleja también en las cifras de inversión. En 1964, año posterior a la introducción de la estrategia *turnpike*, la inversión total en la industria azucarera tanto en el sector agrícola como en el industrial representó 15% del presupuesto total; 8.7% de las inversiones industriales se programaron para la industria del azúcar (United Nations, 1963: 287), mientras que un tercio de la inversión en agricultura se destinó a la producción de azúcar y servicios relacionados (Aranda, 1968: 76). Estas inversiones fueron más fuertes en años pasados a medida que la producción de la industria de maquinaria agrícola se elevó y a medida que las nuevas plantaciones aumentaron las áreas sembradas de caña de azúcar. También fue necesario realizar gastos en los centros de recolección en donde la caña se prepara para su envío al ingenio. Estos centros son una importante innovación cubana.

⁷ Así, en contraste con lo sucedido en 1962, se planeó la escasez de los bienes de consumo para permitir el incremento en la tasa de inversión. Sin embargo, parece ser que algunas de las escaseces que se presentaron durante la zafra de 1970 fueron imprevistas (Castro, 1970).

b] Datos de producción

De acuerdo con los datos de producción de las cosechas individuales, la esperanza de obtener rápidos incrementos en el producto todavía no se han realizado para algunos de los productos más importantes. El fracaso al que se ha dado más publicidad es el que se refiere a la zafra, que tuvo un agitado destino desde el espectacular éxito de 1961. En esa época se desarraigó la caña de grandes áreas en un esfuerzo por diversificar la economía agrícola y disminuir la dependencia de Cuba respecto del azúcar. Los esfuerzos subsecuentes para incrementar la producción y estabilizar la zafra a un nivel más alto todavía no resultaron. A pesar de estas decepciones y de las marcadas fluctuaciones del producto, la producción promedio, 5.6 millones de toneladas, durante los primeros once años de gobierno revolucionario (1959-1969) es un poco mayor que los 5.3 millones de toneladas promedio que se registraron en la década anterior.

Es innecesario decir que la frustración fue difícil de sobrellevar después de los largos años de sacrificios y de las grandes esperanzas que se habían forjado. Ahora, sin embargo, la nueva inversión en campos de caña, maquinaria cortadora y de transporte y la capacidad de los trapiches pueden empezar a amortizarse ya que los problemas mecánicos y administrativos fueron reducidos. La tarea más urgente de la década actual [los setenta] será la de corregir algunos de los desequilibrios que surgieron como consecuencia del gran esfuerzo nacional por alcanzar la meta de los 10 millones de toneladas de azúcar en 1970. Tras de la extensión de la zafra y de la movilización masiva de recursos materiales y humanos Cuba fue capaz de producir una cantidad récord de 8.5 millones de toneladas de azúcar refinada.

Los problemas de organización y los desequilibrios técnicos que se presentaron durante la zafra de 1970 son sintomáticos de la disyuntiva que existe entre la disponibilidad física de capacidad productiva y la incapacidad de utilizarla efectivamente. A pesar de que se disponía de una cantidad de caña más que suficiente para producir 10 millones de toneladas de azúcar refinada, sólo se produjeron 8.5 millones debido a fallas técnicas en las centrales, embotellamientos en el sistema de transporte, y mecanismos de coordinación inadecuados. Además, la experiencia de 1970 sugiere que si en los próximos años se va a dar prioridad a metas de producción de otros productos será necesario continuar restringiendo la cosecha azucarera a un nivel menor de los 10 millones de toneladas.

En la primera etapa del programa de desarrollo, el sector pecuario es el siguiente en importancia después del azúcar. El objetivo actual es un rebaño de aproximadamente 12.5 millones de cabezas para 1975, cifra

que representa más o menos el triple del número que se registraba en los primeros años de la década de los cincuenta. De acuerdo con los cálculos cubanos esto permitirá una oferta adecuada de leche y carne para el consumo doméstico, además de proporcionar entre 10 y 15 millones de dólares de exportaciones anuales. Los incrementos recientes de la producción de leche y carne han sido sustanciales. Sin embargo, todavía son insuficientes para cubrir una demanda de consumo interno más alta. Ambos productos se importan y están sujetos a racionamiento.

La producción de frutos cítricos, tabaco y café se está incrementando para ser exportada. El rápido aumento en la producción de los dos primeros productos refleja la expansión de las áreas cultivadas. La producción de frutas continuará creciendo rápidamente a medida que las nuevas plantaciones maduren; se planea cuadruplicar el área sembrada de árboles de cítricos. La producción de café disminuyó en el sector privado que es el que tradicionalmente lo ha cultivado; los cultivos recientes de las haciendas estatales todavía no se reflejan en las cifras de producción.

La producción de huevo y pescado se incrementó rápidamente debido a la introducción de nuevas tecnologías industriales y una moderna flota de barcos pesqueros. La producción de arroz disminuyó considerablemente después de la firma del tratado comercial con China. Cuando surgieron dificultades políticas Cuba inició de inmediato un programa para alimentar los cultivos, lo cual debe reflejarse en las cifras de este año. Cuba espera ser autosuficiente en arroz antes de 1975.

Además se realizaron grandes inversiones en industrias directamente relacionadas con la agricultura. Dos líneas notables eran aumentar la capacidad de las centrales azucareras y la construcción de dos grandes unidades productoras de fertilizantes. Se instaló una capacidad adicional para la producción de cemento y electricidad.

Todos estos programas, tanto en el sector agrícola como en el industrial, se vieron afectados por el esfuerzo de lograr los 10 millones de toneladas de azúcar en 1970. Este esfuerzo exigió trasladar recursos, tanto humanos como materiales, de otras actividades hacia el sector azucarero. La falta de cumplimiento de las metas de producción se hizo evidente en todos los sectores de la economía mucho antes de los fracasos más difundidos y analizados por el primer ministro en su famoso discurso del 26 de julio de 1970 (Castro, 1970).

Sin embargo, los lineamientos básicos de la estrategia cubana de desarrollo no se desvirtuaban por ese déficit de producción. Si la meta de producción de azúcar para 1970 se hubiese fijado en 8.5 millones de toneladas en lugar de 10 millones de toneladas (como lo sugirió Gutelman en 1966) probablemente los sacrificios en el resto de la economía

habrían sido menores; se habrían distraído menos recursos de otras áreas y habría sido posible lograr una coordinación más racional de los escasos servicios de transporte y de los recursos humanos.

Sin embargo, se decidió continuar con la estrategia de desarrollo descrita en los párrafos anteriores, a pesar de los decepcionantes resultados de la cosecha de 1970. Carlos Rafael Rodríguez fue bastante claro sobre este asunto en su discurso ante la XI Conferencia Regional de la FAO.⁸ Mediante una evaluación completa de la interrelación entre el azúcar y otros sectores de la economía es probable que se destaque menos la producción de azúcar durante los próximos años; los programas de cría de ganado continuarán de acuerdo a lo planeado a pesar de los embotellamientos en el transporte, causantes de la disminución en las entregas de leche y carne a los consumidores. Algunas de las metas de los cultivos de fruta y café fueron afectadas por las movilizaciones masivas de 1970, pero no se modificaron las metas de exportaciones de frutas. La construcción de elementos básicos de la rama agroindustrial, como el complejo de fertilizantes de Cienfuegos, se vio también afectada marginalmente por los sucesos que antecedieron y acompañaron a la zafra de 1970.

c] *El papel del comercio exterior*

Por lo que respecta al comercio internacional, Cuba continuó dependiendo de las exportaciones de azúcar y esa dependencia llegó a ser más intensa a medida que la producción ha aumentado. Las exportaciones no crecieron mientras las importaciones se elevaron. Como consecuencia, Cuba enfrentó una balanza comercial negativa cuyo déficit se incrementó constantemente. El 80% del comercio de Cuba se reorientó de los países capitalistas (Estados Unidos el más notable hasta 1961) hacia los países socialistas, dentro de los cuales la URSS ocupa el lugar principal; por eso, este déficit lo financiaron principalmente los países socialistas.

La dependencia histórica de las importaciones de alimentos no se supera fácilmente, como lo demuestra la reciente experiencia cubana. Sin embargo, la industrialización y las políticas de restricción del consumo han forzado un cambio de las importaciones de alimentos a las de equipo de capital. Antes de la revolución, las importaciones de alimentos declinaron su participación de 39% de todas las importaciones a 22.2% en 1958, pero esto se compensó por un aumento en las importaciones

⁸ *Granma*, 25 de octubre de 1970; lo volvió a reafirmar en julio de 1972 en una entrevista con Marta Harnecker publicada en *Chile Hoy*, 11 de agosto de 1972.

de bienes de consumo duraderos. Durante los diez años pasados, las importaciones de alimentos representan más de una quinta parte del total, pero la importación de equipo de capital fijo ha aumentado aproximadamente en 40% de su nivel de 22.6% de 1958.

12.5. CONCLUSIONES

El fuerte contraste entre las esperanzas de rápidos incrementos en los niveles de ingreso y las frustraciones sufridas al instrumentar la estrategia cubana de desarrollo merece alguna discusión. Durante más de ocho años los cubanos han estado invirtiendo proporciones constantemente crecientes del total de recursos, y consecuentemente restringiendo el volumen disponible para el consumo.

Dada la persistencia de la estricta restricción del consumo, surge naturalmente la pregunta de si estas inversiones han sido infructíferas, o cuándo empezarán a elevar el producto nacional. Las fuertes inversiones realizadas en años recientes fueron para instalar capacidad productiva para la producción de azúcar, ganado y frutas cítricas. Además del gran déficit en infraestructura económica (caminos, embalses, electricidad, etc.) que tuvo que ser subsanado para permitir la expansión de la producción agrícola, otras inversiones del complejo agroindustrial (fertilizantes, maquinaria, cemento, etc.) participaron de una gran proporción de la inversión total.

Estas inversiones se realizaron principalmente en bienes de producción intermedios que no estaban destinados a afectar directamente el volumen de bienes disponibles para consumo o exportación. En lugar de ello se dirigían a facilitar el éxito de otros planes de producción. Éste es el significado de la planificación a largo plazo, en la forma en que se utiliza en este artículo, la instrumentación inmediata de los programas que permitirán una elevación de producción más rápida en el futuro; los ejemplos más claros de este enfoque son los aumentos de capacidad de producción de fertilizantes y embalses. Se esperaba que después de un periodo adecuado de gestación habría un rápido incremento en la producción de los productos que utilicen esos insumos.

Ésta es la estrategia seguida por los cubanos, menospreciando las dificultades que confrontarían al intentar instrumentarla. La mayoría de los problemas que surgieron son resultado de una serie de supuestos acerca de la capacidad de las personas de funcionar a niveles productivos cercanos a los alcanzados bajo condiciones experimentales o de laboratorio;

se pasó por alto la falibilidad humana o material —y sin las reservas productivas para soportar los fracasos individuales, los golpes se transmitieron a través de todo el sistema (Pollit, 1971).

El inflexible deseo fidelista, que muchos han criticado, de establecer y mantener metas de producción irreales agravó aún más los problemas. No se trata de si esas metas son alcanzables o no, sino de las consecuencias negativas para el resto de la economía cuando se intenta alcanzarlas. Así pues, la prioridad indiscutible acordada para la producción de azúcar en años recientes, significó el abandono de muchos otros sectores de la economía. Si se hubiese logrado la meta de los 10 millones de toneladas, el sacrificio en los otros sectores habría sido exactamente el mismo; su fracaso fue resultado de problemas en la utilización de la capacidad de molienda y de errores humanos de coordinación —no una falta de capacidad física.

Durante toda la década de los sesenta, la lección que se demostró repetidamente fue la pesada carga que el subdesarrollo legó a Cuba. La falta de entrenamiento, de disciplina industrial, de infraestructura, y muchos otros factores tuvieron sus efectos en el cumplimiento de las metas de producción. En cada coyuntura surgieron problemas debido a la información insuficiente, inexperiencia, entrenamiento inadecuado, falta de insumos físicos o humanos, y muchas otras lagunas; no se evidencian con tanta fuerza en otros países subdesarrollados porque la concentración del esfuerzo para tratar de superar esos defectos es mucho menor —como menores son también los éxitos que se alcanzan—. Quizá uno de los aspectos más desafortunados es precisamente la incapacidad de aprender esa lección; al analizar los fracasos anteriores en varias ocasiones se reconoció la importancia de estos problemas —justamente Carlos Rafael Rodríguez dijo: “no hemos podido desarrollar parejamente los factores subjetivos y los métodos de dirección para emplear con máxima eficacia esos recursos y posibilidades [objetivos]” (*Granma*, 25 de octubre de 1970).

La experiencia de 1970 es un ejemplo excelente de algunos de los problemas que plantea la instrumentación de cualquier tipo de estrategia de desarrollo. Los cubanos abandonaron deliberadamente todos los mecanismos de mercado por el costo social que impondría retenerlos. Los sustituyeron por la dirección y administración centrales para movilizar a la gente y coordinar los esfuerzos de producción en una economía que carecía de reservas. Además, hicieron esto en un país subdesarrollado, sin información, entrenamiento, ni experiencia, que son los factores de los cuales dependen otros países socialistas; el resultado inevitable fue una serie de errores de planificación y de asignación —muchos de los cuales fueron previstos y predichos.

Sin embargo, los cubanos continuaban basándose en los lineamientos fundamentales de sus planes originales de inversión. A diferencia de los fracasos de los primeros años de la séptima década, la falta de ejecución de los planes de producción de 1970 no se interpretó como la revelación de contradicciones fundamentales de su enfoque actual (*Granma*, 25 de octubre de 1970: 10-11). No existían razones para dudar sobre su capacidad de elevar el consumo personal y reducir la importación de los bienes que pueden producirse localmente a medida que sus nuevas inversiones maduran —a pesar de que quizá se requiera más tiempo del que se había planeado originalmente—. Al mismo tiempo los cubanos anticiparon el mantenimiento de altos niveles de exportación de azúcar, y el aumento de las de frutas cítricas, café y otros productos para los cuales existen mercados, ya sea en países socialistas o capitalistas. El primer signo de distensión de las presiones internas sobre la oferta de alimentos fue la elevación de la ración de arroz de tres a seis libras en 1969. Sin embargo, este progreso se vio contrabalanceado en 1970 por serias restricciones en otros productos alimenticios, como resultado de los problemas ocasionados por la zafra. Durante los setenta, al aumentar la capacidad de producción de cemento y el trabajo por la mecanización agrícola, también era previsible incrementar la construcción de viviendas, manteniendo el presente ritmo de construcción de obras industriales y públicas.

El manejo del modelo *turnpike* de desarrollo facilita la comprensión de estos datos. En lugar de concentrar el análisis en los beneficios directos que los diez años de dirección central han otorgado al pueblo, se debe volver la atención hacia la estructura productiva de la economía que empezó a surgir con el nuevo impulso de inversión en la agricultura y en la industria relacionada con ella. Lo que se esperaba era la promesa del rápido crecimiento de la producción de determinados bienes de exportación importantes y de bienes de consumo. Sin embargo, estos éxitos resultaron más difíciles de alcanzar, aunque la dirección central de la economía y la perspectiva de igualdad fueron factores importantes que facilitaron el proceso en los setenta.

La estrategia *turnpike* implica muchas decisiones difíciles para el gobierno. Se debe delimitar cuidadosamente el espacio entre la demanda creciente de consumo y los requerimientos de los programas de inversión. El control central no sólo ayuda a instrumentar la estrategia sino también ayuda a resolver muchos de los problemas que pudiesen surgir. Para estar en condiciones de alcanzar rápidamente los objetivos, el gobierno debe tener posibilidad de movilizar a su pueblo. Para lograr un crecimiento rápido son necesarios esfuerzo y sacrificio. Debido a los

problemas económicos y políticos que pueden surgir, probablemente es imposible que un país escoja tal ruta a menos que esté en posibilidad de contar con la completa coincidencia de un número de circunstancias sociales, políticas y económicas. Asimismo, para entender el desarrollo económico cubano es necesario examinarlo dentro del contexto social y político más amplio.

13. LA NUEVA RURALIDAD Y LA GLOBALIZACIÓN¹

13.1. MEA [NUESTRA] CULPA

Un gran error de las políticas y de los estudiosos del periodo del desarrollismo fue el énfasis en considerar a las sociedades rurales exclusivamente como productores agrícolas. Los programas productivistas y asistenciales canalizaron la asistencia técnica y los recursos para elevar la productividad agropecuaria a expensas de otras actividades.² Al privilegiar los valores agropecuarios del mercado se castigó el carácter diversificado de sus sociedades y de su producción, y se ignoró la importancia de la producción no mercantil, relacionada con sus ecosistemas así como con sus sistemas sociales y culturales. Se ignoró también la aportación latinoamericana tan importante respecto a la evolución desventajosa de los términos de intercambio, tanto nacional como internacional, que cobró cara la terca insistencia en la producción campesina de cultivos básicos.³ Como corolario, se evaluaba a los productores como individuales, como maximizadores de rentabilidad parcelaria, en vez de respetar su pertenencia a sociedades complejas que funcionan de manera colectiva, como gestores de sus sistemas ambientales y productivos.

13.2. HACIA UNA COMPRENSIÓN DE LO CAMPESINO

El nivel real de vida de los campesinos se ha deteriorado seriamente en América Latina durante los últimos decenios. Durante estas décadas, la

¹ Publicado en E. Pérez y M. Farah (eds.), *La nueva ruralidad en América Latina*, Bogotá, Pontificia Universidad Javeriana, Maestría en Desarrollo Rural, 2001, t. II: 21-40.

² Sin embargo, nunca se les otorgaron los recursos suficientes para superar los bajos niveles de productividad, resultado de estructuras minifundistas, tierras y ecosistemas marginales, y controles políticos. Fueron impedidos de acceder a los avances de la Revolución Verde y cuando se les abrieron las puertas, descubrieron que los precios se habían tornado desventajosos.

³ El análisis de la evolución de los términos de intercambio (Prebisch, 1950, 1963), tan importante como explicación de la dinámica social y económica en los años cincuenta y sesenta, ha desaparecido de los trabajos con el dominio del enfoque neoliberal.

economía se transformó drásticamente y la gente fue “reasignada” a nuevos lugares en la sociedad y la estructura productiva. Muchas empresas paraestatales fueron eliminadas, al tiempo que el capital transnacional adquirió una importancia renovada como rector de la economía, haciendo así sentir su impacto virtualmente en todas y cada una de las dimensiones de la vida nacional. Las crisis políticas se han precipitado, una tras otra, agravando la cadena de crisis económicas de las que el país no parece ser capaz de liberarse. Esta historia sólo puede ser plenamente entendida dentro de la totalidad del contexto de la reforma institucional iniciada en 1985, como parte del programa de integración neoliberal a la economía mundial. El poder ejecutivo mexicano ha emitido una gran cantidad de declaraciones y panegíricos con la intención de reafirmarle a la gente, en la nación y en el extranjero, que el país se encuentra firmemente en el camino de la recuperación o que ya ha alcanzado niveles de primer mundo. Aún mientras escribo este documento en el umbral del nuevo siglo, y mientras algunos están (¿prematadamente?) tañendo las campanas mortuorias del modelo extremo de desregulación neoliberal, los equipos de tecnócratas que dirigen las economías en la región insisten en que los problemas actuales del país se están importando del extranjero en lugar de ser manifestaciones locales de los graves desequilibrios presentes virtualmente en todos los sectores sociales.

Como parte de las reformas institucionales se efectuaron medidas para acelerar la integración del campesinado a este mundo feliz. En muchos países los precios de los productos del campo fueron liberados, sujetándolos a los vientos violentos del mercado mundial; los arreglos comerciales de antaño fueron reescritos, rompiendo añejos acuerdos de acceso privilegiado, como es el caso del plátano centroamericano. En México, las protecciones revolucionarias ganadas por los campesinos durante las décadas de la lucha revolucionaria y durante el conflicto político posrevolucionario fueron desmanteladas para forzar la privatización de las parcelas. La hiperurbanización está rebasando los límites de la propiedad privada, incorporando las tierras agrícolas a las ciudades y las selvas al cultivo. Se habla de una reorganización del sector, la consolidación de las pequeñas parcelas en unidades de manejo más “eficientes”, que permitieran la capitalización de una economía lamentablemente atrasada, por lo que se necesitaba modernizar: la producción en el sector de alimentos básicos, los sembradíos comerciales y los bosques. Más aún, en todas partes se quejan de que el campo está sobre poblado: en México, los políticos se expresan con una gran prepotencia: “Es la política abierta de mí (*sic*) gobierno de

remover a la mitad de la población del México rural en los próximos cinco años".⁴

Al final del siglo, nos encontramos sufriendo las agonías de nuevas crisis. Los eruditos se encuentran discutiendo las causas fundamentales de los problemas agrícolas y agrarios: no logran ponerse de acuerdo en si éstos son producidos primordialmente por factores sociales, políticos o económicos, o quizás "simplemente" por los señores de la droga. Cualquiera que sea la respuesta, lo cierto es que los campesinos en este hemisferio están viviendo un periodo de turbulencia sin precedentes (por lo menos en el contexto de los últimos cincuenta años). Aun cuando los partidos políticos contienden por las victorias electorales, en un intento de constituir unas estructuras más democráticas, ningún grupo ofrece todavía un liderazgo real y los sistemas parecen estar a la deriva. No resulta sorprendente, entonces, el surgimiento de un gran número de grupos que buscan encontrar caminos independientes para la organización social y la producción, constatando así la posibilidad de reconstruir a la sociedad como un todo en los próximos años.

Las poblaciones campesinas e indígenas están, en este momento, a la vanguardia de esta búsqueda de alternativas. Si se piensa bien, resulta muy sorprendente que a pesar de más de medio siglo de intentos por remover al campesinado de su medio, a través de múltiples y variadas políticas discriminatorias, sociales y económicas, millones de personas continúen viviendo en este momento en sus comunidades rurales, o consideren a estas comunidades como sus verdaderos hogares, aún cuando algunos hayan sido forzados a trabajar en otro lugar. Todavía más sorprendente resulta el extraordinario esfuerzo organizado por el campesinado para transferir recursos a sus regiones y asegurar así la supervivencia de sus familias y la viabilidad de sus comunidades.

13.3. LA GLOBALIZACIÓN

Cualquier análisis de las circunstancias y potencialidad de los campesinos tendría que partir de la operación de la economía mundial. Para América Latina, la consolidación de los actuales esquemas de reorganización neoliberal representa la culminación de un proceso de la construcción

⁴ Expresado por el subsecretario de Planeación Agrícola de México en una conferencia pública que dio en la Universidad de California, San Diego, en 1991.

cuidadosa de un subdesarrollo⁵ con efectos sociales y ambientales particularmente agudos en las zonas rurales. Se han visto dos tendencias que resultan a la vez contradictorias y complementarias: la polarización social y la homogeneización de los procesos productivos y los mecanismos de inserción en la economía mundial. Para resumir esta dinámica, se pueden citar unos cuantos factores que dominan el proceso:

- Dominio del capital financiero, con control monopolista del mercado mundial.
- Libre comercio, con especialización productiva destruyendo sistemas regionales de mayor autosuficiencia y diversificación.
- Destructiva dinámica de competencia a nivel de empresas pequeñas y medianas.
- Desregulación y privatización de los activos sociales con la renuncia del compromiso de apoyar o proteger a los pobres y de los sistemas colectivos de seguro social.
- Exclusión explícita de grandes segmentos de la población de las posibilidades de una incorporación productiva.

13.4. LA DINÁMICA DEL DESARROLLO RURAL

Al examinar la transformación rural en las últimas décadas, suponíamos que a menos de que fueran capaces de convertirse en participantes exitosos del sector comercial agrícola, los campesinos se verían obligados a seguir cultivando sus cosechas de subsistencia tradicional a fin de garantizar un nivel de vida aceptable para sus familias y comunidades. Existe suficiente evidencia mundial que apoya la noción de que la autosuficiencia alimentaria entre las comunidades campesinas constituye un prerequisito esencial para su bienestar físico (Barkin, Batt y DeWalt, 1991). Más aún, a la luz del proceso de desarrollo no equitativo que discrimina sistemáticamente a los productores campesinos, en particular, y a los países pobres en general (Prebisch, 1963), muchos grupos defienden las

⁵ Para citar sólo a dos autores importantes, Celso Furtado (1977) y André Gunder Frank (1978), cuyas aportaciones seminales a nuestra comprensión del proceso han quedado al margen en los análisis más recientes. Otra obra fundamental en su momento de Cardoso y Faletto (1969), pone en tela de juicio el compromiso de los intelectuales con sus propias contribuciones, por las posiciones asumidas por el primer autor, siendo presidente de Brasil.

políticas de autosuficiencia alimentaria nacional como inherentes a un desarrollo equilibrado.⁶

Por eso, diseñamos un proyecto para investigar los impactos nutricionales del cambio en los patrones de producción campesina. Examinábamos la sustitución de los cultivos de subsistencia de productos alimenticios básicos, para el consumo familiar y regional, por los de producción orientada al mercado, impulsado por la rápida y creciente demanda de cultivos de exportación y forraje. Esperábamos encontrar disminuciones observables en los niveles nutricionales en las comunidades campesinas que efectuaron este cambio. Sometimos a prueba esta hipótesis, examinando ciertos rasgos fisiológicos de una muestra significativa de personas durante un periodo de crisis importante (1984-1996). La investigación no mostró mermas significativas en el conjunto de mediciones totales del bienestar nutricional, y en muchos casos pudimos reportar incrementos.⁷ El trabajo de campo incluyó cuatro comunidades muy diferentes, seleccionadas por su representatividad de condiciones sociales y ambientales en las regiones centro y norte del México rural.

Nuestro trabajo sobre la sustitución de sorgo por maíz durante los 15 años anteriores (1966-1981), mostró que había ocurrido una disminución nacional en el consumo per cápita de frijol y proteína animal durante el periodo en que se modificaron los patrones de cultivo en la agricultura campesina (Barkin y DeWalt, 1985). Los inesperados hallazgos de nuestros estudios comunitarios de micronivel en el periodo más reciente nos obligaron a reexaminar nuestra comprensión del proceso de cambio rural y el papel que jugaba un campesinado comprometido en asegurar su propio bienestar a medida que el Estado renunciaba a su responsabilidad de asegurar el bienestar social, misma que lo había caracterizado en la época anterior. Encontramos, de hecho, que los cambios observados durante este periodo de agudización de la crisis en la sociedad mexicana como un todo, y en el sector rural en particular, habían creado un nuevo ambiente para el cambio social y económico, que nos exigía reconsiderar el mismo proceso de desarrollo.

Hasta hace muy poco tiempo, el análisis de las zonas rurales no había

⁶ Con la consolidación de la Vía Campesina en los años noventa, la soberanía alimentaria volvió a ser una bandera política importante para la organización de muchos grupos con raíces en el campo (véase Declaración de Nyéléni (Malí), 2007, <<https://nyeleni.org/spip.php?article291>>).

⁷ Estas mediciones incluyeron peso, altura e indicadores relacionados tales como grasa corporal e ingesta calórica total. El trabajo de campo se llevó a cabo de 1984 a 1996 en colaboración con el Instituto Nacional de Nutrición Salvador Zubirán de México, con la participación de su director, doctor Adolfo Chávez.

tomado en cuenta lo que ahora surge como un hecho notable: a pesar de la acelerada urbanización en América Latina, una parte importante de la población elige quedarse en sus regiones de origen. Se ha dedicado una atención considerable a un fenómeno relacionado, la migración, pero aparentemente no existe un examen serio a la cuestión de por qué tan importante segmento de la sociedad ha decidido permanecer en sus comunidades o migrar en forma temporal (o incluso permanente) para poder permitir así que sus familiares puedan seguir viviendo en ellas.⁸

En el pasado, las explicaciones clásicas sobre los patrones demográficos, que observaban los significativos flujos de migrantes a las áreas urbanas y a Estados Unidos, se habían enfocado en la importancia de oportunidades para los individuos: los servicios de beneficio social, la infraestructura y el empleo. En ocasiones mencionaban, incluso en forma explícita, la irracionalidad de la gente que decidía quedarse citando toda clase de indicadores cuantitativos para demostrar que los migrantes podían en general disfrutar un nivel mayor de bienestar, cuando éste se medía con los índices internacionales, si abandonaban sus comunidades. Algunos acusaron a estos grupos de falta de información o de sufrir de una “inercia” tradicional que les impedía comportarse más racionalmente, mientras otros comentaban sobre la manera en que las comunidades receptoras desperdiciaban las remesas de emigrantes. Las políticas públicas se siguen diseñando dentro de este marco de referencia, asumiendo que si las condiciones se deterioran suficientemente, la gente podrá entender que moverlos de estas áreas rurales sería, con toda claridad, por su propio bien.

Ya no parece razonable continuar examinando bajo esta luz la supervivencia de las comunidades rurales. Un segmento tan grande de la sociedad mexicana no puede ser desestimado con tanta facilidad, categorizándolo como “irracional” o “tradicional”, si vamos a enriquecer nuestra comprensión de la sociedad rural y vamos a colaborar con los indígenas y los campesinos en sus esfuerzos para forjarse una vida mejor. Pensamos que lo que se encuentra en el fondo de nuestros hallazgos, es este esfuerzo por construir una estrategia diferente, ya no de mera supervivencia; esta estrategia fincada en la superación explica cómo la gente en las comunidades que estudiamos mejoraron sus dietas y sus condiciones de vida aun cuando el Estado los obligaba a cambiar sus cosechas de subsistencia para producir directamente para el mercado.

⁸ Dentro de los estudios de la migración, se dedica escasa atención a fenómeno del retorno de los migrantes a sus países, a pesar de las limitadas oportunidades que se tienen, cuando se compara con las que existen en Estados Unidos.

13.5. LA TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA EL SUSTENTO DEL MÉXICO RURAL

Las remesas de emigrantes provenientes de los trabajadores en Estados Unidos constituyen la segunda fuente más importante de divisas para México. Si bien la información parcial de las principales prestadoras de servicios financieros para la transferencia de fondos internacionales indica que manejan más de 7 500 millones de dólares, el Banco de México reporta ingresos de 5 000 millones de dólares por este concepto. Si sumamos a este flujo monetario, las transferencias enviadas por correo y traídas personalmente por los migrantes que regresan o por los amigos y familiares que vienen de visita, podríamos realizar un avalúo de la importancia de este recurso de apoyo para la gente rural en México.⁹

Como en muchas otras partes de América Latina, la supervivencia del México rural también depende de las transferencias efectuadas por miembros de la comunidad que trabajan en otras partes del mismo país. Es cada vez más común que las familias campesinas envíen gente a las zonas urbanas a trabajar en áreas de agricultura comercial, en la construcción, en el comercio, o en otros sectores de servicio, especialmente en el servicio doméstico. En algunos casos, los trabajadores de hecho se asientan en las proximidades de estos nuevos centros de trabajo, pero asumen una obligación seria en cuanto a seguir enviando dinero o llevar una despensa (mandado) con regularidad a su casa. Mientras que resultaría imposible cuantificar este flujo, sin una encuesta masiva y compleja para definir y medir el fenómeno, una revisión de los datos de encuestas existentes y las conversaciones con los investigadores que se han aproximado indirectamente al tema sugiere que difícilmente se ha apreciado la importancia de esta faceta de la vida rural.

Se ha mencionado un proceso diferente, pero relacionado (Massey y Parrado, 1994). "Descubrieron" y enfatizaron la importancia de los multiplicadores del empleo y el ingreso para analizar las transferencias a las zonas rurales. Cuando las transferencias se ejercen dentro de la comunidad en comida, en la construcción, o en otros bienes producidos dentro de la comunidad, multiplican su impacto por los circuitos inducidos de gastos realizados por los beneficiarios originales. En una economía como la de México, donde la política oficial desalienta a la producción para consumo local y donde muchas comunidades rurales son de hecho áreas donde escasea el trabajo, los efectos multiplicadores se verían reducidos

⁹ Con toda claridad todo este dinero no llega al México rural y cantidades sustanciales son robadas en el tránsito.

por la necesidad de importar (de otras partes del país o del extranjero) bienes y servicios demandados por los consumidores. Sin embargo, la observación respecto a los efectos inducidos de las remesas de migrantes es significativa, sobre todo por el impacto no sólo de las divisas, sino de las transferencias de otras partes del propio país.

En un intento de examinar la importancia de este flujo, tratamos de determinar su significado relativo en la economía rural. Con base en estimaciones muy burdas pero conservadoras, llegamos a la conclusión de que estas transferencias podrían representar por lo menos 40% del producto rural, significativamente más que cualquier fuente de ayuda gubernamental o de otros organismos no-gubernamentales. Así, la supervivencia del México rural es resultado de un programa de autodefensa sólido y concertado. A pesar de la imprecisión de las cifras, resulta claro que las comunidades rurales están contrarrestando con éxito el mandato de la economía global: haciendo caso omiso de la supuesta ineficiencia de sus sistemas productivos tradicionales y modificados, están determinados a sobrevivir y a preservar su estilo de vida diferente. Nuestra investigación, así como la de muchos otros expertos, indica con toda claridad el hecho de que a pesar de las aparentes ventajas de la sociedad urbano-industrial, y del aparente atractivo del empleo en Estados Unidos, un número importante de mexicanos informados y capaces están eligiendo deliberadamente ayudar a sus familias y a sus comunidades a quedarse donde están, reforzar las estructuras comunales y sociales junto con sus procesos productivos, para que las generaciones futuras tengan un lugar en el que puedan permanecer o al cual regresar; un considerable número de emigrantes están intentando hacer posible este retorno también. Esto hace imperativo para nosotros, entonces, que exploremos la razón por la que una proporción tan pequeña del recurso transferido ya se usa para apoyar iniciativas productivas de las que las comunidades podrían encargarse para incrementar su bienestar.¹⁰

¹⁰ Muchos informantes han mencionado, entre otras consideraciones, las barreras políticas y administrativas a las innovaciones planteadas por los campesinos. Con enorme frecuencia, las nuevas iniciativas son obstaculizadas en sus inicios por los caudillos locales que impiden que se pongan en operación, las plagan o, de hecho, las destruyen, como se documentó recientemente en el caso de los altos de Guerrero. En otros casos, la desalentadora burocracia administrativa y los costos del cumplimiento fiscal, además de las regulaciones laborales, impiden que la producción familiar a pequeña escala se convierta en un negocio exitoso.

13.6. LA BÚSQUEDA DE UNA ESTRATEGIA CAMPESINA EN MÉXICO

En las cuatro comunidades que estudiamos, como parte de nuestra indagación sobre el impacto del cambio en los patrones de cultivo, la mayor parte de las familias se mostraron capaces de proveerse con dietas mínimamente aceptables, estableciendo una serie de estrategias exitosas para complementar sus escasos ingresos provenientes de la agricultura. Encontramos, con sorpresa, una menor migración hacia Estados Unidos desde la comunidad más cercana a la frontera, unas cinco horas por tierra, que de la región más alejada. Por supuesto, como este ejemplo demuestra, la cercanía no es una variable definitiva para la migración internacional. Los ejidatarios de la más lejana siguen diversificándose hacia el comercio y una mayor cantidad encontraron empleo durante la semana en la ciudad más próxima que en la encuesta anterior; esta comunidad fue la que sufrió el mayor impacto a raíz de la integración internacional que trajo una gran afluencia de legumbres importadas, ya que varias personas nos comentaron sobre la merma de esta producción a raíz de la competencia. En general, lo que más nos llamó la atención en las cuatro comunidades fue la ausencia de una diversificación en sus actividades productivas, resultado de la cancelación de las fuentes de financiamiento para los productores de pequeña escala, independiente de su acceso a tierras de riego, que fue determinante en la primera encuesta. Así, el hallazgo de que el peso y la altura de los niños fueron más acorde con las normas mexicanas en 1996 que en el estudio anterior, a pesar de un deterioro relativo de los precios para sus productos agrícolas (sus términos de intercambio), es testimonio vívido de la creatividad de estas comunidades frente a la creciente crisis.

Estos hallazgos son de gran importancia para los que estamos interesados en colaborar activa y concretamente en el fortalecimiento de las comunidades rurales mexicanas. En muchas partes de la sociedad rural, los activistas, los académicos y los políticos reportan una mayor movilización entre las comunidades que tratan de forjar sus propias alternativas. Obviamente, el levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) en una de las regiones más pobres del país impulsó diversos y múltiples esfuerzos de organización rural, incluyendo proyectos de modernización y diversificación productiva.

En este sentido, la formación del Congreso Nacional Indígena (CNI) en México, a raíz del levantamiento zapatista, ha resultado determinante: reuniendo representantes de más de 60 organizaciones indígenas, el CNI ha abierto un espacio en el cual estos grupos pueden esperar apoyo para sus propios programas locales de fortalecimiento de sus organizaciones

tradicionales e introducir innovaciones productivas que contribuirían a elevar los niveles de vida. El impacto inmediato del movimiento zapatista fue el de conferirle una nueva respetabilidad al estatus de pertenencia a un grupo indígena.¹¹ El impacto acumulativo de este movimiento, que sólo recobró fuerza después de su primer congreso nacional en 1996, está todavía por conocerse. Sin embargo, los insistentes reclamos de tierras comunales por los huicholes en el occidente, la intensificación de las luchas agrarias y las acciones más pacíficas de otros grupos aislados en todo el país para implementar programas de capacitación y diversificación productiva, evidencian el interés renovado en la búsqueda de estrategias alternativas frente a la globalización.¹² Aun la represión abierta que enfrentan cotidianamente los indios rarámuri en Chihuahua y los pueblos indígenas en Guerrero se está ventilando y denunciando en la prensa nacional. En la selva de Los Chimalapas (Oaxaca), las autoridades de los indios zoque están acusando a grupos políticos específicos de incendiarios, concretamente de haber provocado algunos de los incendios forestales que ocasionaron tanto daño biológico y humano en la primavera de 1998 (véase cap. 11 de este libro).

Los pueblos indígenas de México no se encuentran solos en sus esfuerzos por forjar estrategias alternativas. Las ONG y las coaliciones de grupos comunales están instrumentando sus propios programas de diversificación productiva sustentable en respuesta a la devastación provocada por la integración económica y las políticas impuestas por las empresas transnacionales y sus aliados políticos. La instrumentación de las alternativas locales enfrenta enormes contradicciones y dificultades, que se hacen patentes cada vez que los administradores públicos son obstaculizados por sus superiores (conscientes de los peligros políticos de permitir que los grupos de base experimenten sus propias opciones), en la posibilidad de ayudar a las comunidades. De esta manera el compromiso político

¹¹ En México, la categoría de indígena es elegida por cada individuo. Así, el cambio de 8 millones de personas reportados como nativos en el libro seminal de Bonfil Batalla en 1987, a los 15 millones reclamando este estatus en el conteo poblacional de 1995 refleja la mayor "legitimidad" de la categoría, más que una explosión demográfica.

¹² Pablo González Casanova ha sido uno de los intérpretes más consistentes de la llamada del EZLN para que el resto de la sociedad mexicana responda a sus demandas para la autonomía y la construcción de caminos alternos para la organización local y el crecimiento. En su "Teoría de la Selva" (*Perfil de La Jornada*, 6 de marzo, 1997) elabora los resultados del Encuentro Intercontinental por la Humanidad y contra el Neoliberalismo convocado en Chiapas en agosto de 1996, ofreciendo una agenda para la acción para la sociedad mexicana; los documentos básicos están resumidos en EZLN, *Crónicas Intergalácticas*, un informe de la reunión. Desde entonces, sigue insistiendo en el significado del levantamiento para las iniciativas que ocurren en otras partes de México.

entre los niveles superiores para promover un modelo de inversión y de producción que sigue sus propios intereses en vez de los de las bases, queda definitivamente en evidencia.¹³

La búsqueda de las comunidades por alternativas sustentables frente a la globalización es el reto central que enfrentamos como investigadores al intentar comprender la evolución y el dinamismo que caracteriza la nueva ruralidad. La capacidad de las cuatro comunidades de resistir las presiones de la política económica nacional para abandonar sus “tierritas” y de evitar un deterioro devastador en sus niveles de vida es significativa: se organizaron, como miles de otras comunidades en la región, para defenderse y defender su forma de vida y organización social. La experiencia demuestra que las comunidades rurales son capaces de defenderse, de muchas y muy variadas maneras, a pesar de decenios de opresión y resistencia. Si vamos a colaborar con ellos en la reversión del deterioro, tendríamos que buscar la manera creativa de hacerlo, y utilizar bien los recursos que llegan desde afuera.

13.7. ENTENDER LAS NUEVAS RURALIDADES

Tenemos que aprender de las estrategias que actualmente tratan de poner en práctica las comunidades campesinas frente a la globalización. Los campesinos e indígenas, como gestores colectivos de sistemas sociales y ambientales complejos, están adquiriendo una creciente sensibilidad a la necesidad de fortalecer sus organizaciones comunitarias para defender sus culturas y sus sistemas productivos tradicionales, definiendo y afinando sus tradiciones para forjar sociedades sustentables.

Las nuevas ruralidades tienen que definirse regionalmente, incorpo-

¹³ El caso del megaproyecto para el desarrollo del Istmo de Tehuantepec ofrece un ejemplo revelador. Lanzado a finales de los años ochenta como una propuesta ambiciosa para construir un costoso sistema multimodal de transporte, incluía un ferrocarril automatizado de doble vía y una supercarretera de ocho carriles, como parte de un cruce interoceánico multimodal. Se contemplaban proyectos industriales, maquiladoras y un gran complejo petroquímico. Había desatado una fuerte oposición entre los pobladores locales, ecologistas, y otros, por los impactos negativos que avizoraban en el ambiente y en la capacidad de la región de surtirse de sus propias necesidades. La batalla respecto al proyecto reflejaba una continua lucha respecto a la integración internacional en los años venideros. En los tiempos más austeros que predominan con el cambio de siglo y de presidente, el proyecto quedó como letra muerta, remplazado por propuestas menos ambiciosas de los gobiernos locales.

rando en sus instituciones una nueva reflexión respecto a la necesidad de allegar recursos desde fuera para asegurar la defensa de sus territorios y sus comunidades. Con la creciente importancia de la migración nacional e internacional y los ingresos no agrícolas en la dinámica rural, es claro que las propias comunidades están reagrupándose; reconocen explícitamente una creciente incapacidad de sostener sus sociedades con base en los ingresos provenientes exclusivamente de sus propias producciones agrícolas; en todas partes se comenta respecto a una renovada importancia de remesas de parientes en otras partes y de dinero y productos traídos por los que laboran en actividades no rurales. A la vez, se requiere reexaminar las formas en que los estudiosos y las instituciones oficiales identifican y clasifican lo rural, ya que grandes contingentes de trabajadores del campo y muchas familias campesinas se encuentran en enormes campos de mano de obra migratoria, en pequeñas ciudades o aun en las zonas periurbanas de algunas de las grandes urbes del continente.

Hoy en día, entonces, contrario a los juicios que formulan los macroeconomistas, los campesinos no son actores atrasados, ensimismados en su compromiso férreo con el pasado. Más bien, son gestores de sistemas sociales y productivos complejos, donde comunidades y organizaciones campesinas están empeñadas en defender su propia identidad y en ampliar su capacidad para elevar su calidad de vida. Identificar y entender estas estrategias es una nueva tarea prioritaria.

14. SUPERANDO EL PARADIGMA NEOLIBERAL: DESARROLLO POPULAR SUSTENTABLE¹

El neoliberalismo está exacerbando la polarización de la sociedad en todas sus dimensiones. El ajuste estructural, con su programa de integración a la economía internacional y austeridad del sector público, ha reducido radicalmente las posibilidades de crecimiento equitativo y de satisfacción de las necesidades sociales. Para la mayoría de los latinoamericanos, esta apertura neoliberal es una pesadilla. La caída del ingreso real, el creciente desempleo y el acelerado retiro de las redes de seguridad social nos dejan pocas alternativas.

Un número significativo de personas, como sea, intenta construir sus propios caminos de sobrevivencia. En el presente muchas de estas estrategias no son más que arreglos precarios para asegurar el ingreso necesario a fin de mantener cuerpo y alma unidos. Comprenden una combinación de formas tradicionales de producción para incrementar el nivel de autosuficiencia local, financiado por otras actividades en la misma región u otra. En este momento la gente es forzada a emigrar, aceptando frecuentemente trabajos en las circunstancias más desafortunadas, con un deterioro consecuente de sus vidas y contribuyendo a la desintegración de la cultura y la sociedad.

Esta inesperada respuesta de millones, quienes no están dispuestos a aceptar la inevitable absorción del pantano neoliberal ofrece un punto de partida para estrategias alternativas, que son exploradas por innumerables comunidades y académicos en todo el hemisferio. Las contradicciones del desarrollo neoliberal son tan profundas que la comunidad internacional ahora reconoce su importancia como un camino para responder a la presente crisis y buscar una ruta progresiva de transición hacia un mundo mejor. Son tan importantes, que una nueva bibliografía se está enfocando en propuestas locales, incluyendo la exploración de problemas relacionados con la participación y el género, mientras que nuevas organizaciones han surgido para tomar ventaja de los espacios

¹ Publicado en N. Giarracca (comp.), *¿Una nueva ruralidad en América Latina?*, Buenos Aires, CLACSO, 2000, pp. 81-99. <<http://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/gt/20100929012426/6barkin.pdf>>.

políticos que esta apertura está creando y para utilizar los recursos que están disponibles (Martínez Alier, 1995).

Muchas de estas alternativas surgen del interés en la necesidad de buscar un nuevo enfoque de sustentabilidad. Este trabajo se concentra en los problemas para desarrollar una estrategia de desarrollo sustentable. La sustentabilidad se ha convertido en una parte importante de la discusión sobre el desarrollo. De igual forma, es cada vez más claro para profesionales y académicos que nuestra opinión sobre las estrategias de desarrollo debe cambiar. A menos que a los diferentes enfoques se les permita crecer, la estrategia de integración económica internacional prevaleciente destruirá nuestra capacidad de emprender esta tarea. Dichos nuevos enfoques requieren más que la defensa de nuestro medioambiente. La conservación de los ecosistemas de una región depende mucho más que de un reconocimiento político de la importancia del problema. También requiere del fortalecimiento y reconstrucción de la capacidad económica y social de la población con el conocimiento y las habilidades necesarias para emplearse en las actividades productivas requeridas para proteger y enriquecer los sistemas naturales en los que estos recursos existen. Este trabajo se da a la tarea de explorar una estrategia de desarrollo sustentable. Construye, sobre los principios de una base productiva diversificada, el uso creativo de los recursos locales y la participación local en la planeación e implementación.

La economía dual de hoy en día es un anacronismo. Mientras la internacionalización promete mayores ganancias para el capital, las contradicciones creadas por el empobrecimiento están provocando una intensa y amplia rebelión en muchas partes. En este ensayo se ha trazado la expansión internacional del capital y la manera en que integra a los recursos y a la gente en un sistema polarizado de gran riqueza acompañado por pobreza y despojo. La expansión ha creado vastas áreas deforestadas, sin posibilidades de ser cultivadas, con importantes grupos de gente viviendo en condiciones precarias en las áreas rurales o marginales urbanas. Este desperdicio de recursos naturales y humanos impone una pesada carga a la sociedad, no sólo en términos de oportunidades desaprovechadas, sino también por los costos del manejo de las tareas de control social.

14.1. SUSTENTABILIDAD

El desarrollo sustentable se ha convertido en un poderoso y controvertido tema, creando metas que parecen imposibles para los políticos y los

funcionarios de los organismos del desarrollo. Ahora todos formulan sus propuestas para el cambio en términos de su contribución a la “sustentabilidad”. Existe un reconocimiento amplio de que *no se pueden generalizar los niveles actuales de consumo de recursos per cápita en los países ricos a la gente que vive en el resto del mundo*. Muchos añaden que los niveles actuales de consumo no pueden ser mantenidos, ni siquiera para aquellos grupos que ahora disfrutan de elevados niveles de consumo material.² En este nuevo discurso, los recursos que nos rodean no son sólo el capital natural heredado, que incluye las materias primas (tales como productos del suelo y subsuelo, buena calidad del agua, aire, bosques, océanos y tierras húmedas), sino también la capacidad de la tierra para absorber los desperdicios producidos por nuestros sistemas productivos. Por supuesto, el análisis de los recursos también incluye consideraciones sobre la calidad de los ambientes construidos en los cuales vivimos y trabajamos (una introducción excelente para la discusión subyacente puede encontrarse en Wilson, 1992).

El interés en la sustentabilidad se ha globalizado, reflejando el miedo generalizado al deterioro de la calidad de la vida. Los sistemas productivos y los patrones de consumo existentes amenazan la continuidad de nuestras organizaciones sociales. Los patrones actuales de desarrollo son injustos y antidemocráticos. Como reacción, surge el espectro de la desintegración de los sistemas presentes: social, político, productivo y, aun, de riqueza personal. Una estructura diferente, más acorde con las posibilidades de la tierra para mantener y reproducir la vida, debe reemplazarlos.

La internacionalización ha obstaculizado este movimiento hacia la diversidad. Los poderosos grupos que modelan la economía del mundo (corporaciones transnacionales, instituciones financieras y poderes locales influyentes, entre otros) están haciendo lo posible para romper estos intentos individuales o regionales, moldeándonos dentro de grupos sociales más homogéneos y tratables. Querrán colocarnos, cual piezas de ajedrez, como soportes de la actual estructura de desigualdad, comprometiéndonos con empleos productivos. Y para aquéllos con suficiente suerte, con ingresos suficientes para llegar a ser consumidores.

² En este sentido, rechazamos la noción de que se está sustentando el crecimiento en sí mismo. Más bien es un proceso que se propone para elevar el nivel de bienestar de la gente en un ambiente que se está conservando.

14.2. AUTOSUFICIENCIA ALIMENTARIA Y RELACIÓN ENTRE PRODUCCIÓN Y CONSUMO

Una estrategia para promover la sustentabilidad debe focalizarse en la importancia de la participación local y en la revisión de la forma en que la gente vive y trabaja. La cuestión de la autonomía y la autarquía locales o regionales es una parte importante de cualquier discusión sobre la integración nacional o internacional. Asimismo, promover la autonomía no requiere sacrificar la cooperación y la coordinación entre comunidades y regiones, y que de esta manera puedan promover la autosuficiencia aun cuando produzcan para el mercado internacional; al contrario, esta cooperación contribuiría a fortalecer la autosuficiencia. El análisis de las secciones previas de sustentabilidad está en el extremo opuesto a las recetas de las reformas neoliberales. Pero aun así, los defensores de la sustentabilidad reconocen que las opciones no son tan simples: los productos y tecnologías industriales no serán rechazados simplemente porque implican control jerárquico y trabajo enajenado. La respuesta debe ser reflexiva y confrontar las realidades de una sociedad urbanizada global en crisis, en la cual algunas naciones son incapaces de ofrecer los medios para resolver las necesidades más elementales a sus ciudadanos, mientras que al mismo tiempo otros se enriquecen, saqueando los tesoros de la naturaleza. En lo que sigue revisaremos brevemente algunas de las estrategias propuestas para promover el desarrollo sustentable en diferentes entornos.

El primer asunto que debe ser tratado claramente es la autosuficiencia contra la integración. El sistema actual de comercio global promueve la especialización basada en los sistemas de monocultivo. La sustentabilidad no necesita ser equivalente a la autarquía o al aislamiento. Sí conduce a un grado de especialización mucho menor dentro de todas las áreas de la producción y de la organización social. La autosuficiencia alimentaria surgió como una necesidad de muchas sociedades debido a la precariedad de sus sistemas internacionales de comercio. Las tradiciones culinarias específicas surgieron de un conocimiento local altamente sofisticado de frutas y vegetales, hierbas y especias. Aunque la introducción de las tecnologías de la revolución verde elevó tremadamente el potencial productivo de los productores de alimentos, pronto descubrimos cuán duro fue alcanzar este potencial, y los altos costos sociales y ambientales que tal programa puede acarrear.

La autosuficiencia alimentaria es un objetivo controvertido respaldado por la demanda fundamental de la autonomía. Los partidarios del desarrollo rechazan unánimemente las llamadas de una posición extrema, aunque la declaración mexicana en favor de ese programa

en 1980 ante el Consejo Mundial de Alimentación fue ampliamente aplaudida por los representantes del tercer mundo. Hoy la discusión es más compleja, ya que hay acuerdo general sobre dos factores contradictorios en el debate:

- 1] Por un lado, la producción local de los bienes básicos que pueden ser producidos de manera más eficiente en otro lugar es un lujo que pocas sociedades pueden sostener, *si y sólo si* los recursos humanos y naturales no dedicados a la producción de estos bienes comerciales pueden encontrar empleo productivo dondequiera;
- 2] Por otra parte, una mayor producción local de alimentos básicos contribuye a elevar los estándares nutricionales y mejorar los índices de salud. En el ámbito de las sociedades actuales, en el que la desigualdad y las fuerzas discriminatorias contra los pobres rurales son la norma, un mayor grado de autonomía en la provisión de la base material para un estándar adecuado de vida parece ser una parte importante de cualquier programa de sustentabilidad regional. Contribuirá a crear más empleos productivos y un interés en mejorar la administración de los recursos naturales.

Hay algunas partes del mundo en las que la estrategia de la autosuficiencia constituiría un lujo dispendioso. Implicaría desviar recursos de otros usos que serían más productivos por su contribución económica, creando exportaciones que permitirían adquirir mayores volúmenes de alimentos. Pero aún en circunstancias en las que la importación al por mayor de los bienes básicos es recomendable, la gente interesada en el desarrollo sustentable cuestiona la modificación de las dietas locales que sean adecuadas a las posibilidades productivas de sus regiones. En la escena actual, la tendencia a sustituir los productos importados por los alimentos tradicionales es particularmente problemática, y presenta terribles consecuencias para el bienestar humano en muchas sociedades.³

La autosuficiencia alimentaria, sin embargo, es sólo una faceta de una estrategia más amplia de diversificación productiva, cuyos principios

³ La complejidad de la tarea de terminar con el hambre es ampliamente reconocida, pero la bibliografía reciente ha acentuado los orígenes sociales y no los técnicos (o basados en la oferta) de la carestía y el hambre. Sen (1981, 1992) es un exponente elocuente de este punto, mientras otros han entrado en gran detalle sobre los “orígenes sociales” de las estrategias alimentarias y las crisis (Barracough, 1991). La “modernización” de las dietas urbanas en Nigeria, sustituyendo al trigo y arroz por sorgo y maíz, es un caso espeluznante de creación de dependencia, reduciendo las oportunidades de los productores campesinos y elevando el costo social de alimentar a una nación (Andrae y Beckman, 1985).

son en gran medida parte del movimiento hacia la sustentabilidad. Los principios de un mayor autoabasto (en algunos trabajos en América Latina se usó la palabra *autoconfianza*) son fundamentales para todos los productos y servicios que una sociedad quisiera asegurarse a sí misma. Históricamente, los habitantes rurales nunca han sido “sólo” agricultores, o productores especializados en cualquier producto. Más bien, las comunidades rurales fueron caracterizadas por la *diversidad de sus actividades productivas en las que se comprometen para asegurar su bienestar*, son comunidades de administradores de sistemas complejos de recursos. Fue sólo la aberración de transferir modelos de agricultura comercial a la teoría del desarrollo en el tercer mundo lo que contribuyó a menospreciar el carácter multifacético de los sistemas locales de producción tradicional. Las estrategias de desarrollo sustentable enfrentan directamente este problema, intentando reintroducir esta diversidad, conforme se afellan a los problemas de escalas apropiadas de operación y multiplicidad de productos.

La diversificación productiva tiene que relacionarse con el patrón de necesidades y recursos locales. En la medida en que la gente no esté involucrada en el diseño e instrumentación de programas que le aseguren sus propias necesidades de consumo, tendrá menos conciencia del impacto de sus demandas sobre el resto de la sociedad y del ambiente natural. En consecuencia, el enfoque de la sustentabilidad confiere gran importancia para establecer una relación directa entre la gente que planifica la producción y aquella que determina qué niveles de consumo son posibles.

3. PARTICIPACIÓN POPULAR, JUSTICIA SOCIAL Y AUTONOMÍA

Las políticas de desarrollo sustentable no pueden ser diseñadas o instrumentadas desde arriba.⁴ Para tener éxito requieren de la participación directa de los beneficiarios y de otros que puedan ser impactados. Pero hay un acuerdo general de que su participación debe implicar más que

⁴ Stiefel y Wolfe sintetizan un gran rango de experiencias sobre la participación popular. Ellos hablan de la “decreciente capacidad del Estado para proporcionar servicios y reducir las desigualdades en el ingreso”, acompañada por una reducción igual en la “confianza pública en la legitimidad de sus esfuerzos”. No sorprende, entonces, que la comunidad internacional esté “...viendo la ‘participación’ popular como un medio de hacer que sus proyectos de desarrollo funcionen mejor, ayudando a los pobres a manejar su situación (y) como una dimensión indispensable de las políticas ambientales (...) que no pueden ya ser evadidas o pospuestas...” (Stiefel y Wolfe, 1994: 19).

un papel meramente de consulta. Para que tal enfoque funcione, se requiere que quienes detentan el poder se den cuenta de la necesidad de integrar a la gente dentro de las estructuras *reales* de poder con el fin de confrontar los problemas principales de nuestro tiempo. Ello implica una redistribución del poder tanto político como económico. Este prerrequisito es fundamental para cualquier programa de sustentabilidad, ya que la mayoría de los análisis técnicos destacan que los patrones que perpetúan estas desigualdades conducen a una mayor degradación ambiental (Boyce, 1994; Goodland y Daly, 1993).

Quizá los aspectos más reveladores de la literatura sobre sustentabilidad son el cúmulo de ejemplos sobre la forma en que la gente puede realizar “actos de solidaridad con el otro cuando el Estado no los está viendo” para resolver problemas comunes e iniciar experimentos creativos para la innovación social (Friedmann, 1992: 168-171; Ostrom, 1993). Por supuesto, el trabajo de Albert Hirschman (1962; 1973) ofrece ejemplos incontables de las formas en que las ONG y otros grupos de base han tenido éxito en forzar la presión para modificar proyectos de desarrollo como parte de su propia percepción de las prioridades del desarrollo.⁵ Sin embargo, bajo circunstancias especiales, el mismo Estado podría (verse forzado a) fomentar la “liberación” creativa de energías participativas para inspirar programas de desarrollo local y justicia social que también contribuyan a mover a la sociedad en la dirección de la sustentabilidad (Alves Amorim, 1994; Tendler, 1993).

Sin embargo, no debemos acelerarnos: mucha de la bibliografía muestra cómo y por qué el Estado no opera para fortalecer a los pisoteados. La difícil coyuntura de fines de los años ochenta obligó al gobierno mexicano a financiar esquemas de desarrollo de las bases a través de movilizaciones locales en comunidades dispersas por todo el país. El Programa de Solidaridad fue altamente respetado por las instituciones multilaterales como un proyecto efectivo de bienestar (y de voto), pero hizo poco por crear oportunidades productivas permanentes para los participantes, quienes rara vez pudieron continuar una vez que los programas oficiales terminaban. La copia colombiana del programa no promete ofrecer mayores oportunidades a los pobres. En su examen de los problemas de erosión del suelo, Blaikie va más allá para explicar cómo las señales

⁵ Rodwin y Schön (1994) nos ofrecen la oportunidad de explorar las contribuciones singulares de Hirschman a la teoría y práctica del desarrollo. Destacando la importancia de colocar a la gente al centro del proceso, hemos aprendido de Hirschman que, para tener éxito, estos actores deben llegar a sumarse dentro de los sistemas integrales de los cuales ellos son parte.

del mercado generalmente empujan a los gobiernos hacia programas que benefician a los ricos. Peor aún, gran parte de la investigación para mejorar la productividad agrícola está mal orientada, pero su crítica más general encapsula nítidamente mucha de la experiencia de desarrollo del pasado medio siglo: “el énfasis está en los bienes particulares aislados del contexto social, económico y ambiental” (1985: cap. 2).

El desarrollo sustentable, en el análisis final, implica una lucha política por el control sobre el aparato productivo. Requiere de una redefinición no sólo de qué y cómo producimos, sino también de a quién le será permitido producir y con qué fines. Para las organizaciones implicadas en proyectos de desarrollo sustentable en áreas rurales, el conflicto se centrará en torno al control de mecanismos de poder político y económico local, y el uso de recursos. La lucha por asegurar una voz mayor en el proceso para los campesinos, las poblaciones indígenas, las mujeres y otras minorías menos privilegiadas, no asegurará que sus decisiones conduzcan al desarrollo sustentable. Pero esa participación democrática de base creará los cimientos para una distribución más equitativa de la riqueza, uno de los principales prerrequisitos para el surgimiento de una estrategia de desarrollo sustentable.

14.4. LAS REGIONES QUE QUEDARON ATRÁS

La integración económica internacional no afectará a todo el mundo por igual. En el caso del TLCAN, por ejemplo, grandes segmentos de los tres países se mantendrán rezagados del progreso internacional. En alguna medida, esta gente se encuentra en regiones que tienen la oportunidad única de tomar ventaja de su estatus como marginada. Muchas de estas regiones están pobladas con grupos de origen indígena, que todavía atesoran gran parte de la experiencia que ha sido transmitida a través de las generaciones. Las investigaciones recientes en el tercer mundo sobre etnobotánica, etnobiología, agroecología, agrobiología y agrosilvicultura están intentando capturar algo de esta sabiduría. Este trabajo muestra que el potencial productivo de la agricultura tradicional es mucho mayor que el comúnmente pensado, que hay factores culturales que evitan la plena aplicación de este conocimiento (incluyendo por supuesto el desdén prevaleciente por la cultura indígena, excepto como un bien de consumo para los turistas e intelectuales excéntricos), y que algunos de nuestros descubrimientos de estos sistemas son transferibles entre culturas, así como útiles para mejorar los sistemas de cultivo usados por los

agricultores “modernos”. Finalmente, conforme hemos realizado más investigaciones sobre tales prácticas culturales indígenas, estamos aprendiendo que los que utilizan este conocimiento han comenzado a integrar los avances tecnológicos más recientes en sus prácticas tradicionales, a fin de mejorar la productividad y reducir la cantidad de trabajo requerida para la producción.

En estas regiones, el volver a desarrollar la “economía campesina” es tanto deseable como urgente. No es simplemente un asunto de rescate de culturas antiguas, sino tomar ventaja de una herencia cultural y productiva importante para proporcionar soluciones a los problemas de hoy y de mañana. *No es una cuestión de “reinventar” la economía campesina*, sino de reunirla con sus propias organizaciones para esculpir espacios políticos que les permitirán ejercitar su autonomía, definir formas en las que sus organizaciones guiarán la producción para ellos mismos y para comerciar con el resto de la sociedad. Una vez más, la identificación tecnocrática de los mecanismos productivos y la catalogación de los sistemas de conocimiento indígenas (que, por ejemplo, están ahora a la orden del día entre las corporaciones transnacionales en busca de nuevas fuentes de germoplasma para sus avances biotecnológicos) no van a revertir la estructura de la discriminación a menos que se acompañen de participación política efectiva (Núñez, 1998).

Estas regiones que han sido dejadas de lado tienen muchas oportunidades de explorar caminos en los cuales utilizar sus dotaciones de recursos en formas creativas. Entre las más importantes están los proyectos administrados por los grupos de las comunidades locales que comienzan a diversificar su base productiva, utilizando fuentes de energía renovable y evaluando el ambiente natural para desarrollar nuevos productos o encontrar nuevas formas de adicionar valor a las tecnologías y bienes tradicionales.

14.5. LOS CENTROS DE BIODIVERSIDAD

La comunidad científica y ambiental mundial se ha movilizado para identificar y proteger un creciente número de áreas particularmente valoradas. Estas “reservas de la biosfera” en las selvas y montañas y los centros culturales urbanos, “patrimonio de la humanidad”, son guardianes de parte de los tesoros naturales y producidos del ecosistema. Pero también son campos de batalla controvertidos, donde la ciencia y la comunidad están luchando por una definición operacional de la protección

ambiental y la sustentabilidad. Las líneas de batalla se dibujan con mayor claridad cuando se montan esfuerzos por crear áreas núcleo en los espacios designados como reservas de la biosfera, donde no se permite a la gente entrar. En algunos casos, la designación especial de zona protegida implica remover a los habitantes locales del área en nombre del ambiente. En una escala más general, el interés creciente por proteger las especies en peligro de extinción ha conducido a conflictos entre las poblaciones locales que han coexistido tradicionalmente con estas especies, explotándolas en formas sustentables, hasta que las poderosas fuerzas del mercado condujeron a tasas de exterminio que amenazaron la sobrevivencia de la flora y fauna y de las comunidades humanas.

Requiere de una solución generalizada para las necesidades y objetivos en conflicto de los grupos arraigados en estas regiones. El enfoque filosófico de la “sustentabilidad” ofrece algunas propuestas en este sentido. Una propuesta prometedora sugiere la creación de “reservas campesinas de la biosfera” o “clubes de restauración del vecindario”, en los cuales las comunidades locales son animadas a continuar viviendo dentro de la región, ahorrando recursos. A cambio, el “mundo exterior” aceptaría la obligación de asegurar que la comunidad sea capaz de disfrutar de una calidad socialmente aceptada de vida, con oportunidades económicas similares a aquellas de otros grupos, y participación política plena en todos los niveles. Un ejemplo particularmente importante de este enfoque es el intento de crear un modelo de este tipo en la región de Chimalapas del suroeste de Oaxaca, en México, un intento que inicialmente estaba comprometido con actividades predadoras para participar en (o ayudar realmente al diseño de) actividades protectoras como parte de la estrategia de diversificación productiva para el desarrollo de la comunidad, el cual incluiría ecoturismo pero no estaría limitado a este tipo de actividad, debido a que la investigación lo ha mostrado como demasiado esporádico e inseguro a los efectos de ofrecer seguridad económica a la mayoría de las comunidades (véase capítulo 10).

Los productores rurales marginados ofrecen una promesa importante: si se fomenta su producción, pueden sostenerse por sí mismos y hacer contribuciones importantes al resto de la sociedad. En contraste, si prevalecen las políticas rurales que los países del tercer mundo definen como eficiencia según el criterio del mercado internacional, basadas en la estructura política y tecnológica de las naciones industrializadas, los campesinos serán arrebatados de sus campos de siembra tradicionales, y las importaciones de alimentos comenzarán a competir fuertemente por las divisas, desplazando a los bienes de capital y otras prioridades nacionales como ha pasado en muchos países (Barkin, Batt y DeWalt, 1991). El en-

foque sugerido por la búsqueda de sustentabilidad y participación popular tiene el fin de crear mecanismos dondequiera que las comunidades campesinas e indígenas encuentren apoyo para continuar cultivando sus propias regiones. Aun con el criterio estricto de la economía neoclásica, este enfoque no debe ser descartado como un proteccionismo ineficiente, ya que la mayoría de los recursos implicados en el proceso tendrían poco o ningún costo de oportunidad para la sociedad en su totalidad.⁶

En efecto, proponemos la formalización de una economía dual. Reconociendo la permanencia de una sociedad drásticamente estratificada, el país estará en una mejor posición para diseñar políticas que reconozcan y tomen ventaja de estas diferencias a fin de mejorar el bienestar de los grupos de ambos sectores.

⁶ Éste es un elemento crucial. Muchos analistas descartan a los productores campesinos por trabajar a una escala demasiado pequeña y con muy pocos recursos para ser eficientes. Sin embargo, es importante y factible promover un incremento en la productividad consistente con una estrategia de producción sustentable, tal como la definen los agroecólogos: la propuesta de animarlos para mantenerse como miembros productivos de sus comunidades debiera ser instrumentada bajo las condiciones existentes. En gran parte de Latinoamérica, si los campesinos cesaran de producir los cultivos básicos, las tierras e insumos no serían simplemente transferidos a otros para la producción comercial. Los bajos costos de oportunidad de la producción primaria en las regiones campesinas e indígenas derivan de la falta de empleos productivos alternativos para la gente y las tierras de este sector. Aunque la gente generalmente tiene que buscar ingresos en el “sector informal”, su contribución al producto nacional sería magra. La diferencia entre el criterio social para evaluar el costo de este estilo de producción y la valoración del mercado está basada en la determinación de los sacrificios que la sociedad haría para tomar una u otra opción. La base teórica para este enfoque vuelve como punto de partida al ensayo inicial de W. Arthur Lewis (1954) y estudios posteriores, que encuentran su última expresión en la demanda de un enfoque “neoestructuralista” para el desarrollo de Latinoamérica (Sunkel, 1993). Sin embargo, estos autores no reconocieron la lógica de la alternativa campesina que es el punto de partida de este capítulo.

15. EL MAÍZ: LA PERSISTENCIA DE UNA CULTURA EN MÉXICO¹

El maíz nació en Mesoamérica para difundirse en todas partes del mundo. Sin embargo, hoy México figura entre los países donde más han crecido las importaciones del grano. No es como en otras partes, donde el maíz se usa casi exclusivamente para animales, donde la sociedad lo disfruta para sus palomitas, o sus elotes con sabor a dulce. En México, el maíz es asunto de vida y muerte y, si dependiera del Estado, crecientemente, sería de muerte.

En este capítulo se ofrece una visión particular de este proceso de la marginalización del maíz y de sus productores, para tratar de entender por qué los campesinos todavía continúan cultivando el maíz. Este milagro no lo es tanto, una vez que se entiende que la poesía del *Popol Vuh* sigue siendo certera. Como reza el texto, los mexicanos estamos todavía hechos de maíz: “Y así encontraron la comida, y ésta fue lo que entró en la carne del hombre creado, del hombre formado; ésta fue su sangre, de ésta se hizo la sangre del hombre. Así entró el maíz [en la formación del hombre] por obra de los Progenitores”.

Hoy, el maíz es el tercer producto agrícola de mayor importancia en el mundo, después del arroz y del trigo, cuando se mide por la superficie cultivada. Se cosechan casi 150 millones de hectáreas, con una producción mundial que supera las 600 millones de toneladas. En América Latina la producción es apenas de unos 85 millones de toneladas, con rendimientos inferiores en 40% a los promedios mundiales, pero bajo condiciones menos favorables que en otras partes del mundo. En América Latina se importó casi la sexta parte de las exportaciones mundiales de maíz en los años noventa y a México le corresponde más de la tercera parte de esas importaciones.²

Es increíble que México, cuna del maíz, criadero de la enorme diversidad de variedades que han sido el sustento de sus pueblos, quienes las utilizan de incontables maneras, y el origen de tanta riqueza para toda la humanidad, ahora depende de las importaciones para alimentarse. A finales del milenio, representaron la tercera parte de la producción,

¹ Publicado en: *Cuadernos del Desarrollo Rural*, núm. 40, 1998, pp. 17-27.

² Información con base en los datos de la Organización Mundial de la Alimentación y la Agricultura de las Naciones Unidas (<http://www.fao.org>).

subiendo en los noventa de un promedio de 20%. Estas importaciones no son cualquier cosa, ya que gran parte de ellas son producidas con semillas especialmente creadas para las demandas de los países ricos, donde impera el consumo de la carne, más que los granos; ahora mayormente con semillas genéticamente modificadas. En estos países el maíz, junto con su pariente cercano, el sorgo, es cultivado en enormes superficies bajo regímenes completamente mecanizados, para alimentar al ganado mayor —principalmente bovino— así como porcinos y aves en sus granjas de engorda intensiva. Este maíz, conocido como “amarillo núm. 2” en la Bolsa Mercantil de Chicago, predomina en el comercio mundial y es parte importante de las importaciones mexicanas, por ser la variedad más barata.

Sin embargo, también se producen variedades “mexicanas” fuera del país. Se ha visto un crecimiento importante de la producción de maíces de color (azules, guinda, etc.) en el sureste de Estados Unidos, y la implantación de variedades blancas (para nixtamal, la forma de preparar el maíz para elaborar tortillas), sembradas específicamente para el mercado mexicano y para el consumo de comidas mexicanas en Norteamérica. Desgraciadamente, hasta ahora, la estadística oficial no es capaz de registrar estas diferencias; por lo tanto, no es posible evaluar su volumen, pero, por los bajos precios pagados por las importaciones, es justo suponer que dominan las variedades ganaderas.

15.1. INCONGRUENCIAS: EL MAÍZ EN LA ECONOMÍA NACIONAL

En México, el maíz es, de lejos, el cultivo más importante. A pesar de que su producción “no es negocio” al decir de la inmensa mayoría de campesinos que lo cultivan, se cosechan entre 6 y 7 millones de hectáreas de tierras de temporal, la mitad de la superficie de temporal sembrada. Otro grupo de agricultores, quienes sí lo encuentran rentable por su acceso a créditos oficiales y sistemas privilegiados de comercialización, lo siembran en otros 1 o 2 millones de hectáreas bajo riego, más de la cuarta parte de las áreas abiertas al riego. Sólo hasta aquí podemos llegar con los números oficiales para describir lo que está pasando con el maíz en el agro mexicano. Para una descripción más fina de la economía habrá que recurrir a un manejo creativo de la información y la extraordinaria riqueza de las experiencias campesinas, contadas por ellos mismos y por los pocos estudiosos del campo que se dedican a este segmento tan rezagado de la sociedad nacional.

Para seguir con nuestra descripción del maíz en México, será preciso plantear algunas preguntas rectoras para guiar al lector en la comprensión de la singularidad de la economía mexicana del maíz. Hoy en día, por ejemplo, el precio oficial del maíz está por debajo del precio en el mercado, y ciertamente por debajo de su precio internacional de referencia. Y, sin embargo, se sigue sembrando, superando incluso las extensiones plantadas en los mejores años de antaño. Así, la primera pregunta que surge es: ¿por qué se sigue produciendo maíz mexicano?

El maíz no se produce solo. Requiere de la colaboración de grandes contingentes de personas, quienes trabajan para preparar las tierras, cuidar los plantíos y realizar la cosecha. La cosecha presenta sus propios retos, requiriendo una intensa labor con personas que no pueden ser pagadas por el valor de su tiempo o de sus esfuerzos, ya que el maíz no “vale” lo suficiente para costear el gasto. La segunda pregunta, entonces, es: ¿por qué la gente sigue trabajando en la milpa, el método campesino tradicional de producción maicera? La milpa es un complejo sistema de policultivo de temporal en torno al maíz.

Nuestras investigaciones han revelado, una y otra vez, que los campesinos se encuentran en la necesidad de trabajar fuera del campo para poder seguir cosechando. Es poco entendido, pero ampliamente conocido, que millones de mexicanos y mexicanas salen de sus comunidades para trabajar duro para que se puedan quedar allá sus familias y para que los que salen puedan regresar. La última pregunta es: ¿por qué sigue creciendo la población rural? A pesar de las penurias que pasan, y a pesar de las conocidas ventajas ofrecidas en las grandes y medianas ciudades del país —y de las oportunidades en el extranjero—. ¿Por qué siguen mandando dinero y mercancías a sus pueblos, para que la gente permanezca ahí?

A estos interrogantes nos dirigimos, y tendremos éxito en la medida en que se logren explicar estas aparentes contradicciones; como la insensatez, la irracional economía nacional del maíz no simplemente sobrevive, sino que sigue expandiéndose, gracias al compromiso de su gente y de los pueblos que la componen. Pero para llegar a explicar esta nueva verdad, esta realidad que traiciona a la ciencia, habrá que avanzar por pasos, usando los pasos de los campesinos que están construyendo su mundo y, en el proceso, obligándonos a reescribir los libros de texto, invitándonos a elaborar un nuevo método.

Por eso, estudiar el maíz es conocer el país. El maíz mexicano no es la mercancía del mercado mundial y el país del maíz no es el que se adhirió al Acuerdo Mundial de Comercio o que se adelantó para integrarse a la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico, el club de los ricos. Entender la economía nacional del maíz es, entonces, acercarse

a un camino diferente para abrir paso hacia un nuevo mundo —hacia las alternativas al mercado único, hacia las nuevas oportunidades que se requieren para construir el futuro, defendiendo lo tradicional.

15.2. LA ECONOMÍA DEL MAÍZ. LA VISIÓN OFICIAL

La agricultura mexicana de temporal está en crisis. No es capaz de generar ingresos ni empleos dignos para los campesinos, y menos aún, podría alimentar al pueblo. Mientras el país goce de un pequeño pero pujante sector agroexportador, la mayoría de los productores rurales estarán condenados a vivir en la marginalidad, encerrados entre los límites de sus sociedades tradicionales, superados por sus hijos que aprovechan las oportunidades de migrar hacia las regiones dinámicas del país y al exterior. Éste podría ser un breve resumen de la suerte del campesinado y de los pueblos indígenas de México, el panorama que pinta la estadística oficial sobre la suerte del México rural de hoy.

La estadística oficial ni siquiera da cuenta adecuada de la magnitud del sector y los esfuerzos que ejercen los campesinos para asegurar la producción y su permanencia en el México rural.³ Por ejemplo, según las cuentas nacionales, todos los productores primarios —agricultores, ganaderos, forestales y los del mar— contribuyen con 4% del valor agregado nacional; aún más marginal es la posición del maíz, cuyo valor oficial, incluyendo un estimado de la producción para el autoconsumo, difícilmente alcanzó 13% del valor de la producción primaria en el año 2000, es decir 0.5% del valor bruto del producto nacional. Este monto es muy raquítilo, a pesar de que labora en la economía rural el 16% de la fuerza de trabajo. El Censo de Población también informa que la cuarta parte de la población vive en localidades de menos de 2500 habitantes, y otro 14% en localidades de hasta 15 000 personas. Así, tenemos el diagnóstico oficial de que 40% de la población vive en zonas rurales pero menos de la mitad trabaja en el sector primario. Aun así, con 16% de la fuerza de trabajo, producen menos del 5% del producto nacional. Es evidente que los políticos ven en este panorama un sector que alberga una población poco productiva y superflua.

Entre los productores de maíz, también, se nota una clara diferencia-

³ Los datos son de fuentes oficiales mexicanas, todas consultadas en internet: INEGI, *XII Censo de Población* (2000); INEGI, *Sistema de Cuentas Nacionales*; Sagarpa, México, *Anuario Agrícola* (1999).

ción entre los millones de mexicanos que persisten en sus prácticas “antieconómicas” sembrando en condiciones de temporal, y quienes tienen acceso al agua y al crédito para sembrar en condiciones privilegiadas. Mientras se cosecha el maíz en la mitad del agro —56% de la superficie de temporal— su valor en los mercados es solamente el 18% del valor de la producción agrícola (sin incluir perennes); en contraste, el maíz de riego ocupa algo más que la cuarta parte de la superficie nacional regada (y sólo 14% de la superficie maicera), pero su productividad es 2.5 veces la del temporal, ofreciendo jugosas ganancias a estos productores que aprovechan los estímulos oficiales para seguir con el cultivo más intensivo en uso del agua en México. Esta centralización del cultivo es un tanto más ofensiva desde una perspectiva social, por haber sido canalizada hacia los tres estados fronterizos —Chihuahua, Sinaloa y Sonora— donde la escasez de agua ha cobrado un enorme costo humano de enfermedad y muerte entre los trabajadores en la maquiladora fronteriza y se ha vuelto un objeto de conflicto político con Estados Unidos.

No cabe duda, dentro de esta perspectiva, que nuestros creadores de política e impulsores de la integración económica quisieran dejar a los campesinos temporales a su propia suerte. Son parte de un sector que no tiene remedio —según su visión— y en el que la política no puede incidir frente a la poderosa influencia de la tradición. Los campesinos insisten en seguir sembrando y sus familiares están dispuestos a subsidiar esta producción con remesas traídas del extranjero y transferencias de sus trabajos en otras partes del mismo país. No sorprende, entonces, que la clase política vea con desdén al mundo rural, con sus campesinos exigiendo un mejor trato; no tendrían por qué ocuparse del agro si no fuera porque representa una amenaza de estallidos sociales, de continuar como un foco de atraso y pobreza.

15.3. LA ECONOMÍA DEL MAÍZ: LA VISIÓN CAMPESINA

Millones de campesinos siguen sembrando maíces criollos. Conscientes de que “no es negocio”, siguen produciendo crecientes volúmenes del grano para su propio uso, respuesta propia para mantener un estilo de vida que implica también asegurar la calidad de sus alimentos así como los ecosistemas en los cuales viven y producen. Pero, también venden sus excedentes a un segmento importante de la población que está mostrándose cada vez más sensible a las diferencias de calidad entre los granos importados y las variedades disponibles localmente. Sólo así podría explicarse la perseve-

rancia de los campesinos y en consecuencia la continua presencia de esos granos en los mercados nacionales. Veamos las evidencias.

Quizá lo que más llama la atención es la reacción de los campesinos a los cambios en la política nacional: lejos de ser actores pasivos, insensibles a los vaivenes de las políticas nacionales, muestran una sorprendente agilidad en adaptarse a los cambios en su entorno. Por ser el maíz un cultivo tradicional, adaptado por sus fieles a las exigencias de los ciclos climáticos en sus regiones, se esperaría encontrarlo en sus áreas de influencia —zonas que siguen siendo indígenas y campesinas—. Efectivamente, se cosechó más de la mitad del maíz de temporal en los seis estados con mayor número de indígenas; cinco de estos estados son los más pobres del país. No es de sorprender, entonces, que los políticos identifiquen el cultivo del maíz con el atraso cultural y la pobreza, ya que no podrían concebir que la gente funcione con otra lógica que la del mercado internacional.

Mantener la producción maicera es fundamental para defender la viabilidad de sus comunidades, de su estructura social, su estilo de vida, con estrategias que se ajustan a las condiciones políticas y del mercado en cada momento. Aún más asombroso, al examinar los datos con esta lente, se descubre una flexibilidad que es lo que menos esperaban los analistas de los campesinos. Frente a la caída acelerada de los precios reales del maíz desde 1995, los campesinos reaccionaron de una manera inesperada, defendiendo la producción de maíces criollos con un mayor uso de insumos financiados con otros ingresos en lugar de la mano de obra. En contraste, en los distritos de riego, se ha observado una progresiva reducción en la superficie cultivada, con una progresiva intensificación del cultivo, llevando a un aumento importante en la productividad. Es decir, la reacción campesina ha sido la opuesta a la de los agricultores comerciales: lejos de replegarse frente a la implementación de políticas desalentadoras, los productores ‘tradicionales’ han modificado sus estrategias productivas, reduciendo la intensidad de sus esfuerzos laborales.⁴

¿Cuál es la explicación de estas marcadas diferencias en las reacciones de los productores? Las presiones económicas han obligado a los campesinos a intensificar y extender su búsqueda de fuentes alternativas de

⁴ En las regiones productoras tradicionales del grano, los rendimientos varían mucho de una zona a otra, como respuesta parcial a los limitantes naturales de cada una, y a las restricciones socioeconómicas y políticas de la coyuntura. Sin embargo, llama la atención su capacidad de elevar los rendimientos cuando se presenta la oportunidad (entre los cinco estados más pobres los rendimientos varían de 1.2 a 2.6 toneladas por hectárea, comparado con un promedio nacional de 2.0).

ingreso para el sustento de sus familias y comunidades. Como resultado, las comunidades rurales sufren de una mayor escasez de mano de obra, sobre todo durante los períodos críticos para la preparación de las tierras y la cosecha. En épocas anteriores (1982-1992), cuando el precio relativo del maíz no había caído tanto como el poder de compra de los salarios mínimos, los maiceros aprovecharon la coyuntura invirtiendo más trabajo y contratando peones para elevar su productividad. En los noventa, con la mayor liberalización, coincidiendo con la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio con América del Norte (TLCAN), empezó una política distinta que castigó los precios del grano con relación a los salarios y desalentó el uso de mano de obra en la milpa; como consecuencia, era más lógico aumentar la superficie sembrada para mantener la producción, tarea que podría realizarse con mano de obra menos especializada y, sobre todo, con mujeres, gente mayor y jóvenes.

En los distritos de riego, en contraste, la misma política impulsó una intensificación de la producción. El gobierno siguió con su práctica de condicionar los permisos para la siembra de las valiosas agroexportaciones (frutas y hortalizas) a la siembra de maíz; como respuesta, estos productores aprovecharon la amplia disponibilidad de créditos baratos para elevar la producción con mecanización y el uso de agroquímicos. Como consecuencia, se observa una relativa estabilidad en la producción maicera nacional, tanto en las zonas de riego como en las de temporal.

Así, un examen más cuidadoso del maíz en México muestra que las grandes generalizaciones, basadas en promedios de un escenario tan variado, llevan a conclusiones erróneas y políticas equivocadas que resultan hasta dañinas y peligrosas para la nación y sus productores. Si bien es cierto que “el maíz no es negocio”, no es así por la falta de conocimientos o de esfuerzos de los productores o por su terco tradicionalismo que les impide adaptarse a las cambiantes condiciones naturales y políticas. Más bien, la producción campesina está respondiendo a otra lógica, incomprendible para los políticos y tan fundamental que perdura a través de decenios de discriminación y represión. A esta lógica nos abocamos ahora.

15.4. EL MAÍZ COMO CULTURA, COMO OPCIÓN DE VIDA

El cultivo del maíz es, para quienes lo cultivan, más que una mercancía o un satisfactor, como lo entenderían los economistas doctos, asentados en las altas esferas de la política nacional y de la banca internacional desarrollista. De hecho, los maiceros mexicanos insisten en cultivarlo a

pesar de todo. Si bien persiste una incomprendión de este fenómeno en ciertos círculos, ha surgido una extensa literatura para explicarlo y justificarlo como parte de la construcción de estrategias alternativas de los pueblos rurales frente al embate de una globalización homogeneizadora y empobecedora.

Como se ha hecho ver, la cultura del maíz no responde mayormente a una lógica productivista. Más bien, es un elemento —central, quizá— de una respuesta para afianzar las sociedades y sus organizaciones de base. Aun en el mercado internacional, que ha simplificado el producto a un concepto único —un grano genérico—, la realidad no es tan simplista, como si las grandes diferencias entre una variedad y otra no tuvieran mayor importancia para el consumidor, y como consecuencia para el intermediario y para el productor. Los mercados reales diferencian con premios y castigos entre el “amarillo núm. 2” para los animales, el palomero y los de colores, por citar sólo unos cuantos; muchos consumidores distinguen entre las cualidades de los granos blancos y los amarillos, entre los aptos para producir el *hominy* (comida del sureste norteamericano), el pozole de la meseta central de México y los tamaleros, por no entrar en las variedades cultivadas en Centroamérica o Colombia para sus platos locales.

Los agroecosistemas del maíz son muy complejos. Aun en las sociedades tradicionales, no todo se siembra en la milpa, el policultivo heredado de antaño que genera decenas de subproductos asociados al maíz. Los rendimientos no son del todo comparables y sus precios difieren de manera importante de una región a otra, e incluso dentro de ellas y a lo largo del año. Otra parte importante se cultiva en sistemas más especializados, produciendo para fines específicos, como es el uso para los animales menores de corral o para usos tradicionales en las comidas regionales (maíz pozolero, maíces de color) y otros tantos. Su comercialización tampoco es una constante, ya que la mayor parte de la producción temporalera de la milpa se consume dentro de la familia o localmente. Algo se vende de manera no anticipada, para financiar una necesidad urgente, pero éste tampoco viaja mucho. Poco es disponible para las demandas urbanas populares, que se surten con creciente frecuencia de los canales industriales, a través de la harina de maíz nixtamalizada o de las tortilladoras que fabrican el preciado producto con esta harina elaborada con granos importados de los mercados mundiales más baratos, normalmente los canales subsidiados de Estados Unidos.

Sin embargo, grupos importantes están incursionando en un mercado en crecimiento. Es un mercado poco conocido y menos entendido: el de los productos tradicionales basándose en maíces criollos, como son las

tortillas hechas a mano y vendidas por docenas o aun por unidades; las tortillas de color; tamales y pozole, por nombrar algunos de los productos tradicionales más comunes en el centro del país. En estos mercados el maíz se vende con sobreprecios importantes sobre los ‘normales’, hasta tres veces más. Los vendedores también son diferentes, a veces los propios miembros de la familia campesina, a veces vecinos u otros en las plazas urbanas que han ubicado o creado sus propios nichos en ambientes complejos. Este proceso de comercialización se ha vuelto más complejo y competitivo a medida que la marginalización social ha impulsado a comerciantes urbanos a invadir los espacios construidos por los campesinos e indígenas en las áreas metropolitanas. Sin embargo, aún en ellas, pero también en las ciudades intermedias, la venta directa de productos campesinos ofrece una alternativa económica importante para defender “la cultura del maíz”.

No obstante, no se debe menospreciar la importancia de la internacionalización de la economía del maíz. Desde la vigencia del TLCAN, las importaciones han crecido de una manera desmesurada, tanto para uso humano como para los pecuarios (véase cuadro 23.1). Si comparamos, por ejemplo, el decenio anterior al Tratado con los ocho años posteriores (hasta 2001), vemos casi una duplicación (91%) en los volúmenes, reflejando, tanto un aumento en la proporción del consumo importado (de 17% a 24%) como en los volúmenes requeridos para el mercado nacional; su costo era de aproximadamente \$600 millones en el periodo. Este elevado nivel de uso interno de maíz es resultado de la eliminación de restricciones históricas para fines que no fueran los del consumo humano aun en los años anteriores a la firma del Tratado; como consecuencia, se produjo una expansión estrepitosa de la demanda agroindustrial, tanto como alimento pecuario (y como alimento para una nueva industria, la de la producción controlada de camarones en granjas costeras) como para otros sectores: como almidones y fuente de fructosa. Para abastecer este nuevo mercado, entonces, se dio una liberalización efectiva (o sea, una apertura a ultranza) del mercado nacional del maíz, mucho antes de la firma del Tratado, que se ha reforzado desde entonces —a pesar de las protecciones para el campesino inscritas en el Tratado al respecto— con el resultado inevitable: crecimiento descomunal de las importaciones de baja calidad para surtir el mercado agroindustrial y de consumo popular urbano.⁵

⁵ Otra consecuencia inesperada, pero previsible, de esta apertura, es la contaminación genética de las siembras tradicionales resultado de su contacto pasajero con maíces genéticamente modificados importados, ya que no existía prohibición para el uso de estas

**CUADRO 15.1. PRODUCCIÓN E IMPORTACIÓN DE MAÍZ EN MÉXICO
(1984-2001)**

AÑO	PRODUCCIÓN NACIONAL (1)	IMPORTACIONES (2)	(2) / (1)
1984-1993	13589560	2315251	17%
1994-2001	18075307	4424008	24%
(1994-2001) / (1984-1993)	33%	91.10%	

FUENTE: base de datos electrónica de la FAO.

15.5. EL FUTURO DEL MAÍZ

¿Cuál es el futuro del maíz en México? Los “científicos” de hoy, los responsables de trazar el camino de la modernización, de la integración, han hecho explícito su desdén por el cultivo y la cultura de la cual se tratan de apartar. Para ellos, es una mercancía más, cuyas características idiosincráticas son propias del pasado. Es un cultivo de los pobres, una gramínea para los marginados, los indígenas y, paradójicamente, un lujo para los consumidores acomodados o con apreciación de tradición. Como tal, es herencia de un pasado sobrevalorado, una mercancía que no merece subsidio ni mucho menos el apoyo político; una estructura social y cultural que obstaculiza la modernización del país. En voz de un subsecretario del ramo se hizo explícito este rechazo en 1991: “Es la política de este régimen, remover del México rural la mitad de su población en los siguientes cinco años”.⁶ Si eso no fuera suficiente, a medida que se retiraron los programas de apoyo directo a la producción, motivados por el compromiso de apegarse estrictamente al nuevo sistema de desregulación para implementar el libre comercio, se ideó una nueva política de transferencias directas a los campesinos, en forma de becas o dispensas, la cual dependía directamente de sus características individuales (como padres de familia, con hijos que asisten a la escuela, y dueños de parcelas de tierra) más que como recompensa por sus actividades productivas.

Hasta ahora en este ensayo, hemos insistido en que las decisiones

nuevas variedades como alimento ganadero o en muchos destinos industriales. Para mayores detalles sobre esta problemática, véase Berlan, Durand y Hansen, 2001.

⁶ Enunciado por el subsecretario de Planeación Agropecuaria, doctor Luis Téllez, en la Universidad de California, San Diego (La Jolla). Este sentimiento fue confirmado por el titular en la época, profesor Carlos Hank González, y ratificado por las nuevas autoridades sectoriales en las dos administraciones subsecuentes.

plasmadas en la realidad del campo mexicano son consecuencia de una conducta cuidadosamente pensada por sus protagonistas. La población rural es pobre y se ha visto obligada a implementar nuevas estrategias para adaptarse a las exigencias del momento. Como es el caso de cada sociedad humana, insistir en no variar comportamientos tradicionales frente al dinamismo del mundo en que existimos o de los cambios naturales fuera de nuestro control, es una receta para la aniquilación social. En contraste, defender ciertos rasgos fundamentales de nuestras herencias mientras que modifiquemos otros ha sido siempre la responsabilidad principal de los líderes espirituales y sociales, manifestación de una solidez institucional que permite la supervivencia.⁷ Tildar de irracionales o antipatrióticos a estos grupos sociales es negar su capacidad de defenderse; es no tomar en cuenta los tremendo daños que los “desarrollistas” han ocasionado en sus sociedades. Desentenderse de las reacciones de los pueblos rurales, de ignorar sus importantes transformaciones para defenderse, es desconocer parte importante de la realidad nacional e internacional. Es, como lo expresan los globalifóbicos en el escenario internacional, un acto de soberbia con costos sociales inimaginables.

En el México rural de hoy, la persistencia de la cultura del maíz, y el crecimiento de las poblaciones campesinas, es evidencia de la incapacidad de la modernización y la integración de responder a las necesidades más básicas de gran parte de los mexicanos. Adoptar caminos de enfrentamiento no es una decisión fácil y no es la primera opción escogida por los pueblos como respuesta a las transformaciones en las políticas nacionales o sectoriales.

Durante decenios, las comunidades rurales participaron activamente con las instituciones oficiales para la tardía implementación de la Reforma Agraria de la Revolución mexicana. Se empeñaron en convertirla de una de las más exitosas del siglo XX en todo el mundo en un mar de fracasos. Se distribuyó casi la mitad de la superficie cultivable en el país, junto con grandes extensiones de zonas inhabitables, cuando las administraciones centrales empezaron a abusar del proceso. Sin un aparato técnico eficaz, sin créditos y sin investigaciones específicas para respaldarlos, los campesinos mexicanos lograron duplicar la productividad de la tierra sembrada de maíz conquistando la autosuficiencia alimentaria. De esta manera, el ejemplo de México es loable: no sólo revirtió la tendencia mundial hacia una creciente dependencia alimentaria, sino que

⁷ Quizás sea ésta la mayor lección de la magistral compilación y reinterpretación de los miles de estudios utilizados para analizar el impacto de la colonización europea en las sociedades del “tercer mundo” de Eric Wolf (1987).

además se logró con un aumento significativo en los niveles nutricionales de casi todos los grupos sociales más necesitados (Barkin, 1991a; 1991b; Esteva y Barkin, 1980). Este periodo, que se extendió desde los tiempos cardenistas (1935) hasta mediados de los sesenta, involucró a la sociedad mexicana en su totalidad, ya que convirtió al agro en el motor del desarrollo nacional e incorporó a los campesinos como baluarte de los gobiernos de la Revolución.

Pero los éxitos productivos en el campo y la colaboración política resultaron de corta duración. La fuerza del capital se impuso, revirtiendo la política de apoyo campesino, terminando con la distribución agraria y las protecciones constitucionales en aras de una política de formación de un mercado de tierras que impulsaría la modernización del campo. Las instituciones oficiales de abasto alimentario fueron transformadas, mientras que los campesinos y las comunidades indígenas se convirtieron, primero en antagonistas y, luego, en proponentes de su propio camino.

La política de apertura internacional agudizó el empobrecimiento y la marginalización en todas partes de la sociedad. El país se había vuelto urbano, no sólo por la transición demográfica, sino también por el vuelco hacia una agricultura industrializada. Para los campesinos, su suerte fue sellada con el dramático cambio en los patrones de abasto, sustentando en la importación masiva por empresas agroalimentarias de frijoles baratos y maíces de baja calidad para las harinas nixtamalizadas utilizadas en la fabricación local de tortillas.⁸

Frente a estos cambios, la respuesta campesina ha resultado ser mucho más creativa de lo esperado. Lejos de aceptar su suerte y abandonar a sus comunidades y sus tradiciones, han impreso un nuevo dinamismo en el campo, una nueva actitud hacia el cambio, que se manifiesta de muchas formas. Quizá el más notorio es el número de personas que sale en busca de trabajo con la intención de apoyar a la familia, a la comunidad, en sus esfuerzos no sólo por sobrevivir —por subsistir— sino para mejorar las condiciones físicas e infraestructurales que enfrentan.⁹ Estimaciones

⁸ Las autoridades desoyeron la acusación de la calidad inferior de éstas, por las cualidades de los granos y del proceso de cocción. El Instituto Nacional de Nutrición defiende este cambio, aduciendo la facilidad con que se podría enriquecer las harinas con micronutrientes que faltan en la dieta popular. Otros se apoyan en las investigaciones del Instituto Politécnico Nacional que muestran que las harinas industrializadas de maíz no ofrecen los mismos valores nutritivos, ya que la celeridad de la cocción industrial del maíz impide liberar los aminoácidos esenciales, convirtiendo las tortillas en una nueva comida “chatarra”, o fuente de calorías “vacías”.

⁹ Tan importante ha sido este esfuerzo que algunos gobernadores han tratado de utilizar de manera oportunista los “clubes” organizados por “paisanos” en los Estados

muy burdas sugieren que el monto de estas transferencias (sumando las del extranjero y desde otras partes del propio país, incluyendo el valor de los productos traídos de afuera) supera con mucho la magnitud de los programas asistenciales federales, llegando a más de 40% del valor total de la producción primaria del país (Hamilton *et al.*, 2003).

No habría que menospreciar la importancia del proceso de diversificación dentro de la economía rural en el último periodo. Se ha visto una amplia participación campesina en producción propia y por contrato de nuevos productos para mercados de nicho o con destinos agroindustriales y la proliferación de pequeños talleres para la confección artesanal o como parte de cadenas de producción de maquila de prendas de vestir y juguetes, por mencionar los más comunes.

El maíz nació en Mesoamérica y hoy en día sus pueblos están defendiéndose a sí mismos y a la especie como si sus vidas dependieran de ello. Quizá sea así. Pero no están solos, no están luchando contra la sociedad. Este análisis muestra que el temido embate oficial contra su cultivo por los campesinos mexicanos no ha sido efectivo, porque son muchos los elementos en la sociedad mexicana que limitan su eficacia. Sería mejor terminar con esta agresión e implementar una política que apoyara los esfuerzos de los pueblos y movilizara a sus energías no sólo para defendérse, sino en beneficio de la nación, de la dieta y nutrición de sus pueblos, y para contribuir a resolver algunos de los muchos problemas ambientales más candentes. Por eso, terminamos insistiendo que es

“EL MAÍZ, EL PAÍS”

Unidos para financiar obras locales; el gobierno federal intentó lo mismo. Sin embargo, los mexicanos en el extranjero se han mostrado renuentes a participar, frente a las frecuentes denuncias de su intencionalidad partidista.

PARTE IIIb
PROPUESTAS Y ESTRATEGIAS.
ESTRATEGIAS ESPERANZADORAS

INTRODUCCIÓN

Desde mis primeros debates con los expertos del desarrollo, me pareció inverosímil que se pudiera esperar que unos actores ricos podrían realmente asegurar el bienestar de los países pobres. Después de mis contactos iniciales con el grupo Cepalino, facilitado por los buenos oficios del general Cárdenas, me quedé convencido de la necesidad de generar un proceso de construcción económica centrado en el aprovechamiento de los recursos propios para atender las necesidades locales. Fue una veta de pensamiento muy rica impulsada en varias partes del mundo por grandes pensadores como Samir Amin (Dakar, Senegal y París, Francia), Walter Rodney (Guayana y Tanzania), Clive Thomas (Guayana), Norman Girvan (Jamaica), y Celso Furtado (Brasil), a muchos de los cuales tuve la buena fortuna de conocer. Estos pensadores y activistas fueron importantes en convencerme de la importancia de fortalecer la capacidad local para asegurar un bienestar social. A través de nuestras conversaciones me condujeron a conocer las experiencias de Inglaterra en las dos guerras mundiales y esfuerzos parecidos en otras partes que resultó en la propuesta de “La economía de guerra” que abre esta sección.

Como consecuencia, la autonomía seguiría siendo un tema constante en mis trabajos. Su conceptualización y puesta en práctica son los retos que todavía forman parte de la agenda del día. Pero para nuestros equipos, las iniciativas productivas no podrían desligarse del cuidado de los ecosistemas. Sin embargo, la irrestricta confianza de los economistas en el mercado y el comercio no dejaban duda de su absoluta incomprendición de la realidad del mundo en que vivíamos en México (y en el mundo entero). La idea ortodoxa de que a medida que la gente se enriquece, se dedicarían mayores recursos a revertir los daños ocasionados, o que se podrían recuperar los ecosistemas, eran supuestos sin ningún sustento que siguen guiando los economistas de buena (o no tan buena) voluntad. Muchas comunidades han adoptado sus propias respuestas, y con mayor frecuencia están logrando implementarlas (capítulo 17).

El siguiente capítulo (18) extiende este análisis, examinando las estrategias realmente propuestas por las comunidades. Llama la atención la diversidad de respuestas que están instrumentando y los mecanismos que están utilizando para asegurar su éxito. Un ejemplo de cómo la universidad podría colaborar en este proceso está descrito en el capítulo 19;

nunca deja de ser punto de cierta ironía que se basa en una propuesta de producir carne de puerco baja en colesterol, ya que la percepción popular de esta carne es que produce obesidad y es mala.

Cerramos esta parte con un recuento histórico de las luchas de las comunidades campesinas forestales que lograron romper muchos mitos sobre la gestión de recursos y su capacidad de colaborar sin instituciones estatales de por medio. Pero la admiración con que los expertos internacionales ven la gestión forestal en México es resultado de una cruenta lucha entre el gobierno y estas comunidades durante casi un decenio. El capítulo 20 traza esta experiencia, ofreciendo la esperanza de que se pudiera también reclamar para el bien colectivo la gestión de otros recursos naturales.

16. LA ECONOMÍA DE GUERRA: UNA ESTRATEGIA RURAL FRENTE A LA CRISIS¹

La crisis actual es [1982-1988] la más profunda y duradera de los tiempos recientes. En diferentes maneras casi todos los sectores y grupos sociales han padecido de sus efectos. A pesar de la enconada campaña electoral de 1988 en la cual se expresaron amplias demandas para una participación popular en la definición del rumbo que tomará el país, la administración de la crisis y sus ministraciones se mantienen exclusivamente en manos del ejecutivo. La base social ha resentido sus estragos —hasta ahora pasivamente—, sin que se le pida su opinión y mucho menos su colaboración en el diseño de un enfoque alternativo para enfrentarla.

La crisis que padecemos es del mismo modelo de desarrollo que requirió de la contratación de la deuda. Consideramos, a diferencia de los voceros oficiales y los mismos gobernantes, que la crisis no es de la deuda o de su financiamiento. Más aún, los enfoques propuestos por los actuales gobernantes para entender y salir de la crisis seguirán siendo ineficaces porque ni siquiera cuestionan la deseabilidad de su modelo predilecto de industrialización elitista, basado exclusivamente en la exportación y en los productos de alta tecnología.

La incapacidad de sortear la actual crisis no sorprende. Desde la perspectiva oficialista, la misma definición del problema casi excluye una búsqueda de solución entre los grupos mayoritarios. Ellos definen la crisis por la deuda, su servicio y el buen nombre del país en círculos internacionales. Su punto de vista no es original ni sorprendente; ni es exclusivo de los mexicanos, ya que es compartido por su contraparte en la banca multinacional y en los principales centros financieros extranjeros. En estos círculos, la solución a la crisis, entonces, descansa en aminar el servicio de la deuda mediante una renegociación de la misma: bajando las tasas, descontando su valor real, o recurriendo a otras artimañas para lograr un compromiso entre los objetivos de supervivencia de los países y de rentabilidad de los banqueros.

Lejos de resolver los problemas más apremiantes de la sociedad, estos enfoques convencionales los agravan. A medida que se ha desatendido

¹ Publicado en C. Rozo (comp.), *Los retos de la crisis*, México, UAM-X, 1990.

la producción para el mercado interno, la tasa de desempleo ha aumentado mientras que la capacidad de compra de los que retienen sus puestos se ha desplomado. Entre los productores, las pequeñas y medianas empresas se han visto diezmadas, mientras que la planta industrial, en general, se encuentra enormemente subutilizada. En el campo, existen millones de hectáreas subutilizadas, en manos campesinas ociosas, mientras que el país importa crecientes volúmenes de alimentos, capaces de producirse en estas tierras. En las ciudades, la infraestructura se deteriora por falta de mantenimiento, mientras que millones de mexicanos no tienen empleo. Los políticos exhortan a la exportación mientras que descienden niveles de consumo interno.

Para los grupos populares la crisis es simplemente otra oportunidad para que a los grupos en el poder se les exija más y prometan menos. Si bien es cierto que durante casi cincuenta años estos grupos sociales fueron excluidos del proceso de decisión y bruscamente integrados a una nueva sociedad nacional en construcción, también participaron en su crecimiento, gozando de mejores condiciones de vida y de consumo material. Demandaron y recibieron mejores salarios y servicios sociales (asistencia médica y educación) mientras continuaba concentrándose la riqueza. Las formas corporativas de integración despojaron a muchos grupos de su capacidad de concertación social y hasta de sus conocimientos heredados para defenderse productivamente. Aun en comunidades rurales, muchos se convirtieron en consumidores dependientes, sin posibilidad de la oferta de sus mínimos históricos de consumo.² Éstos fueron los años del “milagro mexicano”, el forjar de una nueva sociedad, un mundo proletarizado que privilegió a los inversionistas.

Para estos inversionistas el país también estaba evolucionando. Construyeron un aparato productivo importante. Pero el costo de estas mejoras era muy alto: la estructura productiva mexicana resultó poco competitiva en los mercados mundiales. Nutrida en el invernadero de la protección tarifaria, la producción industrial rápidamente encontró sus límites por la incapacidad económica de las mayorías para incorporarse a la sociedad de consumo de la que dependerían estas manufactureras para su prosperidad.

La crisis es producto de exigencias internacionales y de la propia dinámica del capital. La lógica de la economía internacional requería de una mayor participación de México. Su modelo autocentrado de desarrollo contribuía demasiado poco a la acumulación mundial. Los capitales inter-

² Para un análisis elocuente de este despojo que “constituye la sustancia de la agricultura campesina” véase Linck (1988).

nacionales vieron la necesidad de abaratar la mano de obra y los recursos naturales para insertar cabalmente al país en un nuevo orden económico internacional, más acorde con los intereses de ultramar. La política de austeridad o estabilización, como se le quiera denominar, es una expresión escueta del conjunto de medidas que se han usado para lograr este sometimiento de la fuerza de trabajo a las exigencias internacionales.

16.1. UNA ALTERNATIVA PARA EL PAÍS: LA DE GUERRA

Para enfrentar esta crisis es imprescindible rescatar lo disponible, movilizarlo para insertar una vez más a los mexicanos al proceso productivo. En vez de marginarlos, el modelo de desarrollo y de las relaciones económicas internacionales debe facilitar la reconversión del pueblo de nuevo en productor. Los esquemas actuales lo mantienen como consumidor empobrecido sin darle la oportunidad de producir. Un nuevo esquema tiene que ¡re-capacitar! a los mexicanos para tomar la iniciativa, insistir en la capacidad de los grupos organizados para usar los recursos disponibles para producir y crear empleos. Tenemos que participar activamente en identificar aquellas áreas donde existen capacidades ociosas y diseñar las modalidades para aprovecharlas.

La estrategia de *economía de guerra*³ descrita en las siguientes páginas es una alternativa atractiva para iniciar un proceso de reconstrucción económica. No se puede seguir posponiendo el momento de decisión; aun en las esferas más altas de mando se están dando cuenta de los límites a los cuales ha llegado el pueblo. El programa propuesto aquí ejemplifica la posibilidad de que exista una capacidad interna para superar los escollos del momento. Es necesario crear una conciencia entre los mexicanos de que los recursos internos son adecuados para enfrentar y superar la crisis. Si bien es cierto que está disminuyendo la pasividad frente a las exigencias internacionales, muchos grupos, especialmente entre las clases dominantes, niegan reconocer este potencial. Como consecuencia, buscan soluciones ancladas en negociaciones externas, en modificaciones de las reglas internas para captar más inversión extranjera. La primera tarea es eliminar en todos los grupos esta idea de impotencia. El país es rico y tiene los recursos humanos, naturales y tecnológicos

³ El término de la economía de guerra proviene del esfuerzo ciudadano exitoso para sustituir las importaciones de alimentos con producción propia en sus patios y en sus parques públicos en Inglaterra y Estados Unidos.

gicos para superar la crisis actual. Sin embargo, las soluciones propuestas en la actualidad no son las adecuadas.

Cualquiera que sea la estrategia adoptada, se requiere del liderazgo del Estado. Sus cuadros, encabezados por los educadores en colaboración con sus organismos de base, tendrían que concientizar y movilizar a las masas. Una estrategia que movilizara los recursos ociosos, tal como se propone en este documento, requeriría de una realineación de alianzas políticas y de un liderazgo aventado que colocara su confianza en estos organismos de base. Hasta ahora la sociedad está dándose cuenta de la profundidad de la crisis en que está inmerso el país. Todavía requiere difundir la idea de que el país podría reconstituirse con base en sus propios recursos. El reto sería desatar las energías del pueblo en una tarea colectiva. El riesgo de no controlarlas siempre existe; por eso, el gobierno no se ha atrevido hasta ahora. Pero el momento es propicio: se debilitan las bases de apoyo para el gobierno, se organizan las fuerzas de oposición y se buscan nuevos mecanismos de solidaridad nacional. La de guerra podría ser el instrumento para una reconstitución del poder.

Los riesgos de no encontrar una alternativa como la propuesta también son enormes. México es la segunda nación más endeudada de Latinoamérica. El proceso de ajuste monetarista y productivo no ha proporcionado bases para la solución al problema de la deuda o a la crisis económica y social de que forma parte. De no adoptar enfoques adecuados para enfrentar la crisis, es probable que la crisis siga con consecuencias impredecibles. Es necesario reorientar la discusión del problema de la deuda de una simple evaluación de arreglos monetaristas e institucionales para la restructuración, la moratoria, o el incumplimiento, hacia una base más realista: la urgente necesidad de cambiar la base productiva.

La *economía de guerra* reactivaría al país. Requiere de la participación activa de todos para su implementación. No podría prosperar sin el fortalecimiento de las organizaciones sociopolíticas, dentro de un ambiente de franco apoyo al Estado. Concebida en la tradición de la economía política latinoamericana, la economía de guerra reconoce las aspiraciones históricas para la participación de las masas en el desarrollo nacional. Al mismo tiempo, está firmemente enraizada en el sistema capitalista existente, basado en la propiedad privada de los medios de producción, la inversión extranjera y el comercio en los mercados internacionales; también mejoraría las fortunas empresariales existentes, sobre todo, las orientadas hacia los mercados domésticos. El nuevo modelo económico —la economía de guerra—, ofrece una aproximación constructiva para enfrentar la crisis actual, ya que facilitaría una reanudación del crecimiento económico, de amplia base, sobre un equilibrio sano y li-

beraría recursos adicionales que podrían ser utilizados para responder a las obligaciones externas del país. Mientras que implica una profunda remodelación de la producción para el consumo interno, la economía de guerra ofrece una forma de complementar los programas recientes que enfocan los esfuerzos de promoción en las exportaciones para la manufactura industrial y la maquila. La propuesta, como tal, debe ser evaluada como un medio para fortalecer, en vez de socavar, el desarrollo económico futuro de México.

El pensamiento convencional sobre estrategias de desarrollo ha restringido la discusión del problema de la deuda al terreno de las finanzas. Las muchas propuestas para su solución son predicadas en una de dos aproximaciones extremas. Ambas presuponen que la situación actual es insostenible y que las expectativas para una solución al problema, sin modificaciones dramáticas en las reglas del juego, no son realistas. Una se basa en la remodelación algo dramática de la deuda, incluyendo algunas posibilidades para distribuir las cargas de las devoluciones entre los diversos actores: deudores, acreedores y las naciones industrializadas. La segunda contempla una cancelación masiva de la deuda, ya sea de una manera conciliadora a través de negociaciones mutuas o en una respuesta unilateral a las presiones económicas políticas insoportables. Ambas asumen que la sustancial reducción de los recursos, permitida por la reprogramación o falta de cumplimiento a los compromisos, conduciría a una revigorización de las estrategias existentes.

Estos acercamientos ignoran el hecho de que México está en guerra. La guerra coloca al país en contra de sus banqueros, contra su gente. La guerra es contra las fuerzas —internas y externas— que amenazan su propia integridad como nación. La violencia de las políticas recesivas está desarmando la estructura social y económica, mientras que las políticas proteccionistas, la competencia internacional y la creciente carga del servicio de la deuda se combinan para dificultar la administración internacional. Para responder efectivamente a presiones contrarias, México debe reorganizarse. Sus prioridades deben ser reordenadas para aumentar la producción interna con el fin de satisfacer sus propias necesidades, y para generar las exportaciones para financiar un programa realista de servicio de la deuda. Una estrategia de economía de guerra requiere que las prioridades nacionales y políticas no sean dictadas por el mercado internacional: debe movilizar todos los recursos naturales, productivos y humanos. Una vez que los recursos hayan sido puestos en servicio, entonces la productividad y la eficiencia pueden convertirse en asuntos importantes.

La transición a una estrategia de economía de guerra debe ser instrumentada por el estímulo a la producción en pequeña escala para la sa-

tisfacción de las necesidades básicas que, en su momento, revigorizaría a la economía nacional en su conjunto. Esta estrategia implica la reincorporación de vastas áreas agrícolas y grandes segmentos de la población rural que han sido desplazados por el proceso de modernización que acompañó a la integración de México al mercado global. Esta inserción masiva de tierras y gente a la producción con los recursos disponibles domésticamente, podría ser estructurada para no competir con la producción existente para los mercados de exportación. La acrecentada producción local de artículos de consumo (comida, ropa y casa) y la infraestructura deben estar acompañadas de otros elementos de una política para economía de guerra, incluyendo la racionalización de los bienes disponibles para asegurar su distribución equitativa entre todos los grupos sociales y la limitación del consumo de bienes no esenciales que requieren de insumos importados.

La estrategia de economía de guerra crearía una nueva plataforma de crecimiento económico en México, así como en la mayor parte de Latinoamérica. Las necesidades de consumo básico del país serían procuradas internamente y ampliamente distribuidas para permitir un estándar más alto de vida con relación al actualmente posible para la mayoría de la gente. Las exportaciones continuarían siendo alejadas, pero con políticas que no penalizaran la producción doméstica de artículos de consumo popular. Con el más vigoroso impulso y una base más amplia de participación en la producción, más recursos estarían disponibles. En un país relativamente rico como México, tal estrategia generaría nuevos ahorros para el crecimiento posterior, basado en un uso más completo de la capacidad productiva actual. La producción privada podría expandirse sobre una base más sólida y la nación requeriría de menos bienes extranjeros. En consecuencia, la nación podría enfrentar más fácilmente sus obligaciones financieras internacionales restructuradas, haciéndose más próspera y estable como miembro de la comunidad internacional.

Este programa generaría millones de nuevos trabajos. Una primera ola de empleo estaría en la agricultura, donde de 1.5 a 2 millones de pequeños agricultores y trabajadores rurales serían empleados en cultivo intensivo. Indudablemente esto induciría a muchos habitantes ciudadanos, quienes están empleados marginalmente o dentro de la economía “informal”, a regresar a las áreas rurales, y especialmente a sus comunidades de origen. No es necesario que se adopten políticas especiales para la migración espontánea, ya que la acrecentada producción rural facilitará el autofinanciamiento de este movimiento. Incrementos subsecuentes en el empleo del mismo orden de magnitud estarían observados en las industrias que directamente apoyan a la producción agrícola y en aquellas que producen bienes de consumo

demandados por los nuevos agricultores y trabajadores. En su mayoría esta actividad tendrá lugar probablemente en centros de provincia, en vez de en la capital donde ya tiene un tamaño descomunal.

16.2. LA PROPUESTA: UNA ESTRATEGIA RURAL

La estrategia de la economía de guerra se basa en reactivar la economía nacional, elevando la producción para el mercado interno y los ingresos de los grupos de trabajadores del campo y la ciudad. La propuesta fundamental es estimular la producción de alimentos básicos en tierras ociosas de temporal en México para volver a conquistar la autosuficiencia alimentaria.⁴ Como se volverá a examinar al final, esta política debe combinarse con otras que restaren el poder de compra de los salarios urbanos para maximizar su beneficio para el futuro desarrollo del país. Esta combinación de medidas es factible y, de adoptarse, resolvería muchos de los problemas que se han señalado arriba. Un elemento clave del programa es elevar el precio oficial del maíz a un nivel adecuado para garantizar un salario mínimo por cada día trabajado a los productores que trabajan tierra de calidad mediana en las zonas de temporal. Estimamos que la producción interna de granos actualmente importados requeriría más de cuatro millones de hectáreas; esto está dentro de los límites de la tierra de temporal disponible.⁵ Para lograr una expansión de esta magnitud sería posible emplear el equivalente de 750 000 personas en condiciones de trabajo permanente durante el primer año del programa. Por el multiplicador de empleo se estima que habrá un empleo inducido adicional en el resto de la economía, aproximadamente 80% —es decir 600 000 empleos en los demás sectores—.⁶ Podría, incluso, ofrecer una alternativa atractiva al cultivo de los enervantes, por los altos

⁴ Para una discusión extendida de la historia de la autosuficiencia alimentaria en México y el impacto de la política agrícola sobre el sector, véase Barkin y Suárez (1985), y Barkin y DeWalt (1985).

⁵ Las importaciones en 1988 eran del orden de 7.5 millones de toneladas, de las cuales 2.5 a 3.5 millones son de maíz (2 a 2.5 millones de hectáreas) y 800 000 son de trigo (200 000 ha). La cifra de cuatro millones también incluye la sustitución de importaciones de sorgo, arroz y otros granos de menor importancia. En 1989, se estima que las importaciones pueden subir a más de 12 millones de toneladas.

⁶ Véase el trabajo seminal, en este sentido, de Etelberto Ortiz Cruz (1989) donde presenta estos cálculos y la metodología detrás de ellos. El 80% se refiere al sector agropecuario en su conjunto, seguramente, sería mayor si se pudiera desglosar el subsector de los pequeños productores de temporal, como se hace más adelante con los multiplicadores de gasto.

riesgos asociados con estos productos. Por la abundancia de naturales, México no tendría que sacrificar nada de sus cultivos de agroexportación en la implementación del enfoque sugerido.

Un programa ambicioso, pero de corta duración, el Sistema Alimentario Mexicano (SAM), demostró la capacidad de respuesta de los agricultores de temporal a los incentivos de producción. La única excepción a los sustanciales déficits en granos desde 1972, ocurrió en 1982, cuando los precios para los granos básicos fueron elevados temporalmente; alarmado por crecientes importaciones de granos y fortalecido por los altos precios del petróleo en los mercados internacionales, el gobierno mexicano ideó el SAM con el objetivo de estimular la producción de granos básicos en las regiones temporales. En la práctica no se limitaron los beneficios de las políticas para la producción agrícola a los pequeños productores de temporal. El SAM incrementó el uso de fertilizantes y otros insumos en las parcelas pequeñas, pero no aumentó de manera significativa la disponibilidad de créditos para inversiones productivas en las zonas de temporal; tampoco estimuló el desarrollo o la implementación de tecnologías adecuadas para estas zonas. Las políticas crediticias y la investigación continuaron privilegiando a las granjas comerciales sobre todo en los distritos de riego del noroeste. Sin embargo, los aumentos generalizados en los precios de garantía para los granos básicos redujeron el sesgo tradicional en contra del pequeño productor, alentando la producción temporal de granos destinados para el mercado.⁷ Como resultado, las importaciones de maíz de la Conasupo representaron el 3% de sus totales en 1982, en contraste con un promedio superior al 50% desde entonces. La siguiente administración (De la Madrid) desmanteló abruptamente al SAM en 1983, después de la fuerte caída en los precios del petróleo. Pero una enseñanza del SAM permanece vigente: aún con los sesgos importantes contra los pequeños productores rurales, ellos parecen estar dispuestos a responder con celeridad, a los precios remuneradores de granos y a otros incentivos económicos.

⁷ Evidentemente, es imposible cuantificar el impacto del SAM, por la base deficiente de información y las buenas condiciones climatológicas que prevalecieron durante 1981, el año de mayor relevancia para el programa. Pero no existe desacuerdo sobre el comportamiento espectacular durante este periodo. Andrade y Blanc (1987) señalaron que la producción de granos básicos fue sustancialmente superior que en cualquier otro periodo en la historia de México incluyendo periodos con condiciones parecidas. En este esfuerzo más serio para evaluar los impactos en la producción y los costos del SAM, estos investigadores encontraron evidencia de que, a pesar de su corta vida, el SAM estimuló la producción de alimentos básicos en las zonas de temporal dominados por pequeños productores (cf. Austin y Esteva, 1987).

Las políticas para implementar la estrategia de *economía de guerra* propuesta van más allá del SAM: incluyen incentivos para la producción y apoyo para la agricultura de temporal, mediante un aumento importante en los precios de garantía. También, incluyen un mejor acceso al crédito, insumos modernos, y tecnología capaz de aumentar los rendimientos en las tierras de temporal. De esta manera, la estrategia es consistente con el espíritu del SAM. Al mismo tiempo, este enfoque propone evitar las ineficiencias inherentes en el diseño del SAM que lo amenazaron durante su vida. En vez de los enormes déficits fiscales para subsidiar los insumos agrícolas, se elevarían los precios de los productos para crear un estímulo para la producción. Los subsidios para los insumos (sobre todo para el riego) serían removidos de las granjas comerciales para alentar un uso más racional y eficiente de estas tierras.

Precios más altos de los productos implicarían mayores precios para los consumidores. En la actualidad, el gobierno federal, a través de la Conasupo, subsidia el consumo de granos para todos los consumidores urbanos mientras que ofrece poco a los consumidores rurales. Estos subsidios generales ocasionan déficits presupuestales y se extienden a todos los consumidores urbanos, ricos y pobres por igual. Por el lado rural, las políticas actuales de precios crean una brecha entre los precios que reciben los agricultores como productores en el momento de la cosecha, y los (altos) precios que pagan los agricultores como consumidores en los mercados rurales meses después de la cosecha. Esta discrepancia entre los precios de productor y de consumidor alienta la producción de granos para el consumo propio mientras que la desalienta para su comercialización.

Sin una infraestructura adecuada para el almacenamiento, pequeños agricultores generalmente no son capaces de comercializar sus granos meses después de la cosecha. Más bien, se ven obligados a escoger entre 1] vender todo o parte de su producto a precios bajos después de la cosecha, comprando caro una vez que se agotan los stocks guardados para el consumo hogareño, o 2] almacenar cuanto pueden de su producto, usando los sistemas rudimentarios de que disponen para almacenamiento, aguantando pérdidas importantes a causa de plagas, pestes y deterioros, para satisfacer cuanto pueden las necesidades hogareñas anuales. Con los bajos precios en el momento de la cosecha, existe un fuerte incentivo para elegir la segunda alternativa, a pesar de su alto costo, en la forma de pérdidas en bodega, que se ven obligados a pagar para asegurar la disponibilidad de alimentos básicos para sus familias. Estas pérdidas representan una carga importante para el agricultor como para la economía mexicana en su conjunto, por las divisas requeridas

para financiar las importaciones alimentarias. Por eso la naturaleza de la economía de la pequeña parcela, en la cual la familia es tanto productor como consumidor de su propio producto, ofrece una explicación para la “paradoja” de aumentos de producción concurrentes con una creciente dependencia en las importaciones alimentarias en los años ochenta. Solamente una racionalización del sistema de precios al productor, para ofrecer incentivos a los pequeños agricultores para comercializar sus granos básicos, podría resolver esta paradoja.

Los elevados precios para los granos implican, *ceteris paribus*, precios superiores para los consumidores. Los grupos humildes que no tienen ligas económicas con la tierra, serían los mayormente afectados por los aumentos. Serían necesarios subsidios para asegurar que se cumplan los requerimientos alimentarios más elementales para estos grupos. Estos subsidios deberían ser otorgados directamente a los necesitados. A medida que aumentan los ingresos personales, los granos básicos representan una parte decreciente del gasto de la familia. Así, cuando se subsidia a todos los consumidores, el sector público ofrece un beneficio mínimo a los hogares de ingresos medios y altos, mientras que incurre en un déficit sustancial. Un programa de subsidios bien definidos subsanaría este problema. La factibilidad de un sistema de alimentos distribuidos según las necesidades en México existe en el programa actual de distribución de leche administrado por Liconsa (un subsidiario de Conasupo), que se ha convertido en un modelo de eficiencia, tanto dentro del país como internacionalmente.

16.3. LAS IMPLICACIONES ECONÓMICAS

Además de eliminar el déficit alimentario, las políticas para estimular la producción de granos básicos entre los pequeños productores tendrían un efecto positivo importante e inmediato sobre los ingresos de estas familias. Los aumentos en los ingresos rurales, a su vez, crearían un estímulo para la demanda de bienes y servicios dentro y fuera de la agricultura. La magnitud de estos impactos sobre el ingreso del pequeño agricultor y sobre la producción y los ingresos en toda la economía mexicana es notoria. (Estas estimaciones son presentadas en gran detalle en Adelman y Taylor, 1989.) En primera instancia, un aumento en los ingresos de los pequeños agricultores eleva la demanda de estas familias por productos y servicios del sector agrícola y de los demás sectores. La producción de estos bienes y servicios, a su vez, genera nuevos ingresos en la economía,

lo cual crea una segunda ronda de aumentos en la demanda por todos los grupos en la sociedad. Este proceso continúa en rondas sucesivas (progresivamente decrecientes) de aumentos de ingresos y gastos. Se estima que un aumento de \$1.00 en los ingresos del pequeño agricultor produce incrementos moderados en la producción agrícola y ganadera (\$0.14 a \$0.18) y aumentos sustanciales en las agroindustrias (\$0.57), industria (\$0.93), servicios (\$0.93) y comercio (\$0.69). En su conjunto, este aumento de \$1.00 en el ingreso del pequeño agricultor genera un incremento de \$3.57 en la actividad económica total.

El efecto sobre los ingresos personales también sería impresionante. Por ejemplo, los ingresos del obrero urbano y el capitalista urbano aumentan \$0.62 y \$0.66 respectivamente, como consecuencia de la nueva demanda por bienes y servicios urbanos. Estas cifras refuerzan la teoría de la industrialización empujada por las zonas rurales (véase, por ejemplo, Adelman, 1984). Una estrategia de *economía de guerra* basada en reactivar la economía del pequeño agricultor también tiene consecuencias favorables sobre la distribución del ingreso en México, sobre todo cuando se asocia con subsidios al consumo dirigidos a los grupos más necesitados (Adelman y Taylor, 1989). El 34% del aumento en el ingreso iría a los capitalistas, mientras que el 66 por ciento a los trabajadores, en contraste con el patrón prevaleciente actualmente que es de 72 y 28% respectivamente.

Muchos estudios de comunidades rurales ofrecen apoyo adicional para la afirmación de que los aumentos en los ingresos rurales crean un estímulo importante a la producción, tanto dentro como fuera de la economía rural (Barkin y DeWalt 1985, Adelman, Taylor y Vogel 1988). Los patrones del gasto de los grupos humildes en las zonas rurales, favorecen los bienes y servicios que tienen bajos contenidos de importaciones y son intensivos en el uso de trabajo en su fabricación (Lustig, 1987). Así, las políticas que elevan los ingresos de los hogares rurales de menores ingresos son las que tendrían los impactos más favorables sobre la generación de divisas y en la expansión del empleo en México.

16.4. LA ECONOMÍA DE GUERRA Y EL AJUSTE ESTRUCTURAL

Pero, ¿es factible tal estrategia?

La crisis económica de México ha desatado un programa de austeridad con repercusiones mayores sobre el crecimiento económico, el ingreso y la pobreza. Este programa de austeridad ha ido mucho más allá de las

recomendaciones tradicionales del Fondo Monetario Internacional. Ha requerido la combinación de represión salarial, de promoción de exportaciones, restricciones fiscales y devaluaciones masivas de la moneda. Los resultados del programa de ajuste han sido desastrosos. En 1986, el producto per cápita había caído a 10.3% por debajo de su nivel de 1980. Los grupos urbanos lo resintieron particularmente: el ingreso per cápita de los trabajadores marginales cayó 20.4%, mientras el de los obreros urbanos cayó 16.4%. A la vez, el déficit fiscal se elevó de 3.9% del PIB en 1980 a 9.2% con una inflación a niveles astronómicos: a finales de 1986 el nivel de precios fue 19 veces superior al de 1980 (una tasa anual de 63.7%). En 1986, la proporción de la población por debajo del nivel de la pobreza era de 51%: 41 millones de personas (Adelman y Taylor, 1989). Era evidente que el resultado de este programa de austeridad no era aceptable en términos de su costo en el bienestar del pueblo.

¿Cómo encaja esta estrategia de *economía de guerra* basada en el pequeño agricultor dentro de las políticas de ajuste estructural adoptados por México como respuesta a la crisis de la deuda de los años ochenta? En una serie de experimentos contrafactuales (Adelman y Taylor, 1989) se examinaron los efectos de políticas alternativas con un modelo intersectorial, incluyendo el que se propone aquí. Los resultados indican que esta estrategia no sólo es viable, sino que sería la clave para un programa exitoso de ajuste económico que conduciría a mayor crecimiento económico y menor pobreza.

El modelo de simulación sugiere que globalmente se reduciría la pobreza entre 15 y 27 por ciento de la población (entre 12 y 27 millones personas) con la estrategia del pequeño agricultor. Los beneficios tampoco se limitarían a los hogares rurales: todos los grupos en México estarían mejor, por los eslabonamientos entre ellos dentro del país. Esta estrategia es crítica para un buen programa de ajuste desde un punto de vista macro. Los experimentos indican que el superávit en balanza de pagos sería 47.3% mayor que el que se obtuvo en el año base de 1986, mucho mayor que las demás alternativas.

Finalmente, el estudio demuestra que el aspecto rural de la estrategia de *economía de guerra* no tiene que implementarse a costa de los obreros que también necesitan recuperar el valor de sus salarios. De hecho, si México combinara una política de restaurar el poder de compra de los salarios, para los empleados, con una política de apoyo a la agricultura de temporal de granos básicos, los ingresos de todos los grupos laborales aumentarían mientras que disminuiría el déficit fiscal en un diez por ciento de su nivel de 1986, y aumentaría el superávit en cuenta corriente (46.7%). En resumen, la *economía de guerra*, fundamentada en una polí-

tica de la autosuficiencia alimentaria, respaldada por una política de defensa del poder de compra del salario urbano, es una clave al ajuste exitoso de México para el futuro.

17. EL DESARROLLO AUTÓNOMO: UN CAMINO A LA SOSTENIBILIDAD¹

INTRODUCCIÓN

No podemos esperar a que los expertos se pongan de acuerdo para definir el desarrollo sostenible o a que las naciones latinoamericanas se comprometan a implementar estrategias idóneas. Enfrentar las contradicciones ecológicas de los sistemas productivos es una necesidad imperiosa. Los avances en nuestra visión del desarrollo sostenible, como un compromiso esencial para enfrentar los retos de la supervivencia de la humanidad, han puesto de manifiesto la trascendencia de la amplia participación ciudadana en el perfeccionamiento de la democracia. La incorporación masiva de grupos sociales de base como paso ineludible para establecer estrategias económicas que incluyan la conservación del ambiente, es uno de los retos fundamentales de nuestro tiempo. Por lo mismo, ahora es imprescindible diseñar políticas que faciliten esta incorporación, como parte de una labor para revertir la creciente polarización y promover la sustentabilidad.

Enfrentar los retos del desarrollo sostenible no consiste sólo en cuestionar nuestros patrones y prioridades de vida: también es poner en tela de juicio los valores básicos y el funcionamiento de los grupos más poderosos en todo el mundo. Para esta tarea es preciso entender los problemas y plantear soluciones. Educar para avanzar hacia la sostenibilidad es cuestionar todo y sembrar desde la escuela una semilla de optimismo en la sociedad. El desarrollo sostenible no es una meta: es un proceso que tendrá que abarcar a todos, un camino que tendremos que recorrer juntos para que la humanidad tenga la opción de perdurar.

El diagnóstico revela que las crisis derivan directamente de los avances del proyecto civilizatorio de moda: avances en la tecnología; aumentos en la producción y en la integración nacional e internacional y en sus secuelas, como pueden serlo la polarización social con un aumento inaceptable en el número de pobres y la profundización de su tragedia; la

¹ Publicado en H. Alimonda (comp.), *Ecología: Naturaleza, sociedad y utopía*, Buenos Aires, CLACSO, 2002, pp. 169-202, <<http://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/gt/20101002060759/9barkin.pdf>>.

escasez de satisfactores básicos; la destrucción y la degradación del ambiente, bosques y selvas, océanos y ríos, y los demás ecosistemas que albergan la incontable variedad de flora y fauna que nos proveen de vida y de los medios para mantenernos en el planeta. Inmersa en todas estas crisis está la transformación del papel de la mujer en la sociedad, obligándola, a la vez, a asumir algunas responsabilidades masculinas de antaño y buscar nuevos caminos para su propio desempeño.

Es evidente la necesidad de modificar este proyecto. Muchos tendremos propuestas para hacerlo y para identificar nuestra responsabilidad en el proceso. Las secciones siguientes buscan contribuir a una reflexión sobre la forma de realizar esta labor. Pero antes, anticipemos un poco, recorriendo el mundo presente y esbozando el mundo al que aspiramos.

17.1. NUESTRO MUNDO ACTUAL: POBRES, RICOS Y ALIANZAS SOCIALES

Por doquier, la gente pobre es acusada de destruir su entorno. Estas acusaciones justifican las políticas que después amenazan la propia existencia de los grupos sociales tradicionales y de sus sistemas productivos. Su incapacidad para adaptarse a la modernidad refuerza la idea de que son la causa del atraso social y económico. Para agravar la situación, se ha recurrido a “culpar a la víctima” de su propia situación y de su falta de progreso colectivo, fenómeno bastante común.

Esta percepción de la pobreza como agente de los problemas ambientales es equivocada. El debate convencional lamenta el destino de los pobres y la incapacidad de asignar recursos suficientes para atacar los síntomas de las carencias que persisten en medio de la abundancia de estas mismas sociedades. Hay que transformar el debate y examinar de manera crítica la acumulación sin precedentes de riqueza que ha polarizado a la sociedad y que ha propagado la pobreza. La reorganización del control y de la utilización del espacio y los recursos, engendrada por la intensificación de la producción, está violando los principios básicos de la naturaleza y amenazando la viabilidad de nuestras comunidades. Los pobres no saquean la tierra debido a su insensible desperdicio de recursos, sino por la falta de una distribución equitativa de la riqueza social disponible y por la manera despiadada con que los ricos y poderosos defienden su control. La disparidad en los sistemas sociales y productivos prevalecientes en Latinoamérica está conduciendo al desastre. Con el creciente desempleo y la discriminación contra los pequeños productores rurales y sus

camaradas en los sectores urbanos marginados, la degradación ambiental avanza aceleradamente.

Visto desde tal perspectiva, el sistema mundial está incrementando la polarización entre pobreza y riqueza; entre naciones, regiones, comunidades e individuos. Ahora, un grupo pequeño de corporaciones domina la estructura global de poder, guía la producción y determina cómo se distribuyen los elementos de bienestar. Ahora las comunidades compiten internacionalmente entre sí para seducir a los poderes corporativos y financieros y lograr que inviertan dentro de sus fronteras, sacrificando el bienestar de su población, la calidad de su infraestructura y su capacidad financiera, para ofrecer los servicios sociales fundamentales necesarios para una vida digna. Esta dinámica no conduce a la promoción del desarrollo sostenible. Las regiones incapaces de atraer la inversión sufren el innoble destino de los perdedores en la permanente olimpiada económica, condenándose al olvido en el escenario mundial; y muchas ganadoras experimentan un deterioro característico del “progreso económico moderno”. En su lucha por sobrevivir dentro del mercado global, muchos grupos sociales están condenados a la marginalidad y a la pobreza permanente. Pero algunas de las transformaciones en este nuevo orden global están generando nuevas oportunidades, realzando la posición excepcional de la mujer y de los grupos que han defendido su carácter étnico.

La teoría convencional del desarrollo busca soluciones a la pobreza en los cambios estructurales producidos por el mercado. Pero esta estrategia plantea dos preguntas medulares. La primera: ¿es viable un nuevo periodo de crecimiento posible o deseable, dadas las limitaciones ambientales? La segunda: de acuerdo con la trayectoria histórica, ¿existe evidencia demostrada de que los nuevos niveles de crecimiento proporcionarán mayor equidad económica, política y social entre los diversos grupos de naciones, regiones, comunidades e individuos?

La respuesta a ambas preguntas es *no*. Una estrategia de libre mercado no puede tender un puente sobre el abismo que existe entre los ricos y los pobres, característico de los dualismos de nuestros días. Más bien, debemos reconocer que los recursos naturales son limitados, que es necesario centrar las tareas educativas en superar la pobreza con programas de gestión local y participación directa, y lograr la sostenibilidad ofreciendo un programa de desarrollo para aquellos actualmente excluidos, lo que también mejorará las condiciones para el resto de la sociedad. Tanto el creciente número de pobres como los problemas ambientales en aumento exigen soluciones menos dependientes de los azares del mercado, que tomen en cuenta lo redundante que resulta para grandes

porciones de la población su inserción en la estructura actual de la producción y del crecimiento económico. Por el contrario, es conveniente crear un sistema en el cual las comunidades puedan sobrevivir sin una integración completa al mercado global.

Cuando nos acercamos a los excluidos descubrimos que, si se les da oportunidad y acceso a los recursos, emprenden acciones directas para proteger y mejorar el ambiente.² Desde este punto de vista, un modelo de desarrollo alternativo requiere de nuevas formas de participación de las comunidades campesinas e indígenas dentro de un programa de creación de empleos que incremente los ingresos y mejore los niveles de vida. Al recomendar políticas que fomenten y salvaguarden a los productores, para que lleguen a ser nuevamente actores productivos, vibrantes y viables, este ensayo desea contribuir al conocimiento de los pasos requeridos para promover la sostenibilidad.

Entre las muchas preguntas que surgen de esta discusión, las de mayor importancia pueden agruparse dentro de cinco áreas:

- ¿Cuál es la relación entre pobreza y degradación ambiental?
- ¿Pueden superarse los obstáculos para alcanzar la sostenibilidad mediante la elevación de los niveles de ingreso per cápita?
- ¿Pueden las políticas dirigidas a erradicar la pobreza contribuir también a reducir las presiones sobre el ambiente?
- ¿Están los ricos del mundo confrontando los problemas de la sostenibilidad responsablemente? ¿Cuál es su nivel de responsabilidad en las acciones dirigidas a la protección ambiental y a la conservación de las áreas habitadas por los pobres?³

La sostenibilidad no es posible en Latinoamérica mientras aumente la pobreza y se niegue a los pobres el acceso a los recursos necesarios para la mera supervivencia. El capitalismo internacional no necesita ya de

² La organización mexicana no gubernamental Promoción del Desarrollo Popular ha trabajado durante varios decenios recogiendo estas experiencias, fortaleciéndolas con sus trabajos de concertación, de encuentros y de asistencia técnica. Asimismo, promueve una visión del desarrollo autónomo y local documentado en numerosos estudios de caso (Schroyer, 1997). Cernea (1995) ofrece una valiosa evaluación crítica de estas experiencias.

³ A esta lista podría sumarse una pregunta acerca de la relación entre el crecimiento de la población, la pobreza y la sostenibilidad, casi obligatorio dentro de la tradición anglosajona. No la abordamos debido a que en Latinoamérica la mayor parte de las investigaciones muestran que el comportamiento de las variables demográficas depende de otros factores fundamentales de la naturaleza y del ritmo del desarrollo, tales como los discutidos en este ensayo.

crecientes ejércitos de desempleados para asegurar salarios bajos ni necesita controlar vastas áreas para asegurar un flujo regular de materias primas y productos primarios requeridos por su maquinaria productiva. Sin embargo, se siguen extrayendo grandes excedentes que desarraigán y empobrecen a la población. Se requieren, por lo tanto, cambios profundos para facilitar una estrategia de desarrollo sostenible. En la sección final exploramos tal enfoque, sugiriendo que es posible y necesario promover una alternativa: una estructura que permita mayor autonomía para que la gente reconstruya sus sociedades y produzca bienes y servicios en un diseño sostenible, mientras se expanden los servicios de protección ambiental.

17.2. RIQUEZA, POBREZA Y DEGRADACIÓN AMBIENTAL

a] *El contexto de la crisis actual*

La pobreza surge de las desigualdades profundas que caracterizan a nuestras sociedades. El poder económico y político se apropiá de los bienes de otras personas e incluso de sus derechos para disfrutar de un ingreso mínimo decente. Los problemas ambientales actuales de Latinoamérica reflejan la herencia de un patrón de desarrollo político polarizado. En esta sección identificamos las principales fuerzas que están determinando el proceso simultáneo de desarrollo y de empobrecimiento, y discutimos algunas de sus manifestaciones.

Aunque el proceso difiere grandemente de país a país, y aun en el interior de cada país, los resultados han sido notablemente similares. La colonización del pasado, y la neocolonización más reciente del continente americano, dieron origen a una serie sin fin de desplazamientos, apropiaciones y expropiaciones. El neoliberalismo de hoy profundiza esta dinámica. Conforme las olas sucesivas de colonizadores demandaron las tierras de mayor productividad, el uso de la tierra evolucionó de su vocación histórica (productora de los recursos básicos para la supervivencia humana y social) al énfasis actual en la producción de cultivos que aseguran una ganancia a los propietarios. Por más de quinientos años, los primeros pueblos de las Américas y sus sucesores han sido forzados una y otra vez a buscar refugio en condiciones cada vez más marginales. Ahora, no sólo los indígenas sufren esta ignominia: mestizos de las ciudades y del campo y migrantes de todas partes están condenados a sufrir la carencia de los que serían sus derechos humanos inalienables.

Hacia mediados del siglo xx, los empresarios rurales comenzaron a modelar una nueva tradición científica, utilizando los recursos estatales y corporativos para inventar lo que pronto se conocería como la “revolución verde”. Desplazando a los agrónomos que habían trabajado dentro de la tradición campesina, los técnicos introdujeron agroquímicos y maquinaria que utilizan fuentes de energía no renovables para aumentar la productividad. Más tarde harían lo mismo con biotecnologías.⁴ Respondiendo al espectro neomalthusiano, los diseñadores de la política presionaron a las instituciones multilaterales financieras y de desarrollo (FAO, BIRF, FMI) para expandir el alcance de la “revolución verde”. Insistiendo en la necesidad de privilegiar a las granjas comerciales, los modernizadores enfocaron sus esfuerzos a promover el desarrollo agrícola entre los grupos sociales empresariales a expensas de los campesinos. Estos empresarios se apropián de ganancias extraordinarias con un uso dispendioso del agua, la energía y los agroquímicos. En nombre del progreso, y para contrarrestar la amenaza malthusiana, siguen remodelando el hemisferio completo: haciendo florecer los desiertos, abriendo los bosques húmedos tropicales, desnudando las montañas, drenando los pantanos y humedales, y cortando las raíces que sustentan los manglares.

El sacrificio humano también es extraordinario. Por toda Latinoamérica las comunidades agrarias han sido desplazadas de tierras valiosas y han sido arrinconadas en regiones inapropiadas, de acceso difícil, con las tierras más pobres e inadecuadas y con la más precaria disponibilidad de agua. Engañadas o entrampadas en regiones y empleos insostenibles, encuentran difícil o prohibitivo continuar las tareas importantes de conservación del suelo y del agua y los manejos prudentes que fueron parte integral de su cultura ancestral. No tienen más alternativa que utilizar y devastar sus propios ambientes en su lucha desesperada por sobrevivir.⁵

⁴ Existe una amplia bibliografía tanto sobre los conflictos entre los agrónomos que trabajan con campesinos y los asociados con los productores modernos, como sobre la “segunda generación” de efectos de la revolución verde en comunidades y estructuras sociales (por ejemplo, Hewitt de Alcántara, 1976; Barkin y Suárez, 1983; Jennings, 1988; Barraclough, 1991). A principios del siglo xxi, el conflicto se está repitiendo en el caso de los organismos genéticamente modificados en la agricultura latinoamericana.

⁵ Aunque esto parece similar a la tesis de la “tragedia de los comunes” propuesta por Hardin (1968), el análisis es muy distinto, ya que se basa en un acceso desigual a los recursos, resultado de la profunda polarización social. De hecho, nuestro análisis de la tragedia nos lleva a la conclusión de que la apropiación privada de los “comunes” es el origen de esta degradación, ya que los grupos tradicionales se encuentran relegados a menudo a nuevos ambientes que no saben manejar.

El mercado acentúa esta tragedia. Con el deterioro que les provocan los términos del intercambio,⁶ muchos pequeños agricultores no tienen otra alternativa que buscar empleo donde sea, y frecuentemente se ven obligados a vender, transferir o simplemente abandonar sus tierras. La yuxtaposición perniciosa de los grupos sociales impuesta por el funcionamiento normal de la economía de mercado, no sólo limita severamente las oportunidades de las masas de trabajadores y campesinos, sino que convierte a muchos de estos grupos en olas migratorias que buscan nuevos lugares para sobrevivir, frecuentemente en áreas inadecuadas debido a la fragilidad de sus ecosistemas.

La expansión acelerada del segmento moderno de la sociedad rural está, en consecuencia, ocasionando mayores problemas ambientales en décadas recientes. Los trabajadores son envenenados en los campos por los plaguicidas, mientras que sus familias sufren por los efectos de la contaminación química y orgánica en sus comunidades. Los campesinos soportan condiciones de trabajo intolerables como seres humanos, pero a menudo salen del molde para enfrentar a estados militarizados en su lucha por un poco de dignidad. Los estragos ambientales acumulados por décadas han acelerado su ritmo e intensidad a tal grado que ahora son una gran amenaza para la viabilidad de incontables especies de flora y fauna, y para la misma sociedad humana. El clamor de los grupos ciudadanos y los ambientalistas organizados es testimonio de este fenómeno.

b] Una respuesta política inadecuada

Como respuesta a la devastación, nos encontramos ahora obligados a “racionalizar” el uso de los recursos naturales. Después de haber transformado la naturaleza, ahora debemos reconsiderar cómo proteger a nuestra sociedad. Frente a los controles impuestos sobre los productos importados por las naciones ricas, algunos utilizan químicos de manera más moderada o cambian a fórmulas menos dañinas; las gasolinas ya no contienen plomo y el agua está tratada. En los países latinoamericanos, los esfuerzos por promulgar un conjunto adecuado de regulaciones protectoras también han obligado a algunos productores a modificar sus

⁶ Los términos de intercambio definen el sistema de precios relativos que reciben los pequeños productores en sus mercados. Los productores rurales son víctimas de un proceso histórico donde los precios de sus cosechas no se elevan tan rápido como el precio de las mercancías que tienen que adquirir. Prebisch (1959) ofreció una primera formulación crítica de esta hipótesis, que ahora lleva su nombre.

prácticas, pero en muchos lugares las distorsiones burocráticas impiden hacerlas efectivas. Otros responden a las nuevas políticas que eliminan los subsidios a todos los productos de este tipo utilizando recursos con mayor cuidado, o cambiando las técnicas para reducir los costos o incrementar la productividad. Para los que así proceden, una combinación de sus propios intereses con las respuestas a las señales administrativas y del mercado, reforzada por una vigilancia social apropiada, puede conducir a una reducción progresiva del daño ambiental en regiones ya ocupadas con anterioridad por el sector comercial.

Sin embargo, aunque tales acciones en pos de la protección ambiental, en la producción y las estrategias políticas son movimientos en una dirección correcta y deben fomentarse, pocos pasos se han tomado para proteger a las poblaciones en riesgo. Mientras tanto, el eslabón político crucial que determina la correlación entre la expropiación de los recursos naturales y ambientales y la explotación de la gente, se relega al campo de las organizaciones de base: los organismos no gubernamentales, los grupos de mujeres, algunos grupos ambientalistas, organizaciones de los derechos de los trabajadores y los mismos productores directos. Soslayando una experiencia que demuestra cómo el desarrollo sostenible se coloca en un panorama más amplio de justicia social, derechos humanos y diversidad cultural, el ambiente político continúa reforzando el proceso social que penaliza a los pobres. El análisis oficial “culpa a las víctimas” por los dilemas que enfrentan y, sumado a las críticas devastadoras de la inefficiencia y corrupción burocrática, propaga la visión de que el mercado “libre” produce un uso mucho más eficiente de los recursos, mayores niveles de bienestar y una tasa mayor de crecimiento económico.

Los sistemas modernos de producción continúan su expansión disputando los derechos de los campesinos e indígenas por sus tierras más productivas y sus recursos más valiosos, y desecharando brigadas enteras de obreros para volver eficientes sus industrias. Las instituciones oficiales, nacionales e internacionales, desarrollaron nuevas estrategias para promover empresas globales y premiar a los agricultores comerciales por sus aportaciones al desarrollo nacional. Les aseguran acceso privilegiado a los recursos más valiosos de la sociedad en proceso de modernización: agua, tecnología, crédito y canales de mercado. Les regalan la tierra y los recursos naturales. La pobreza se acentúa por esta expansión, la cual frecuentemente condena a la devastación a ciertas regiones y a quienes viven en ellas. En la nueva arena política, la lucha de los pobres es cada vez más difícil. En el mejor de los casos, los grupos marginados pueden intentar reclamar una pequeña proporción de los presupuestos oficiales

para sus tareas; ahora reclaman a la comunidad mundial para que los entiendan y apoyen o instalan varias formas de resistencia para resolver sus peticiones. Aun cuando las reformas agrarias forzaron una redistribución de la tierra hacia los grupos campesinos e indígenas, como en México, Bolivia y Nicaragua, los recursos financieros y técnicos complementarios requeridos para ayudar a los nuevos propietarios fueron invariablemente dirigidos a otros usuarios.

c] *La dinámica de la pobreza*

Por encima de todos estos factores se encuentra el hecho de que la pobreza es la consecuencia histórica de los sistemas existentes de organización económica, los cuales continúan discriminando a los productores directos. Si bien es cierto que actualmente nuestras sociedades son mayormente urbanas y las escuelas se concentran en estas áreas, no podemos menospreciar el papel tan importante que tienen las regiones rurales para abastecernos de los elementos fundamentales para la supervivencia y para el manejo ambiental, que contribuye a contrarrestar el deterioro ocasionado por “el progreso”. Descubrimos que los productores rurales de pequeña escala no están dotados de cantidades comparables de equipo que les permitan elevar la productividad de la tierra y el trabajo. Sin embargo, es cada vez más preocupante el hecho de que la organización agropecuaria del tercer mundo los coloca en una desventaja, no sólo respecto de otros sectores, sino también en su lucha por competir con los productores de otras partes del planeta. En el tercer mundo carecen de acceso al apoyo técnico, financiero e institucional protector con que contaban antes los agricultores de otros países para enfrentar la competencia.

Estos problemas fundamentales pueden examinarse más fácilmente señalando algunas de las causas principales de la pobreza, las cuales permiten elaborar los lineamientos para una estrategia alternativa del desarrollo sostenible. No es éste el lugar para entrar en los detalles de estas facetas de la dinámica social, pero es fundamental mantener algunos procesos en mente cuando consideramos cómo construir alternativas (véase Barkin, 1998). Los siguientes son los obstáculos más sobresalientes a los esfuerzos sociales para proseguir con una estrategia para el manejo sustentable de recursos regionales:

- 1] Políticas macroeconómicas y sectoriales discriminatorias.
- 2] Sistemas inadecuados y polarizados de tenencia de la tierra.
- 3] Sesgo anticampesino en las instituciones de desarrollo.

- 4] Distribución desigual del ingreso y del poder político.
- 5] Políticas inadecuadas de empleo, castigando las actividades tradicionales.
- 6] Presiones contra las instituciones culturales locales.
- 7] La migración y la feminización de la pobreza.
- 8] El sesgo hacia la modernización urbana y la pobreza rural.

En este complejo telón que relaciona lo rural con lo urbano, las dicotomías de épocas pasadas no son útiles ya para el campesinado y el proletariado. El ingreso proveniente de fuentes externas a la comunidad es ahora una parte integral de los recursos locales, mientras que las múltiples habilidades adquiridas en estos empleos podrían contribuir a diversificar la base económica del campo. De manera inversa, las poblaciones rurales y su experiencia también tienen un gran potencial para contribuir al mejoramiento de la vida nacional. En todo el tercer mundo, las importantes diferencias en la productividad y los ingresos entre la industria y la agricultura han creado una barrera para lograr un desarrollo urbano más equilibrado, que incluiría un patrón diversificado de uso del suelo. Por ejemplo, la posibilidad de producir alimentos en áreas urbanas como parte de una respuesta al creciente desempleo podría bajar los costos de transporte y las tasas de crecimiento urbano. Asimismo, mejorar los niveles de vida y proteger el ambiente urbano requiere confrontar la imperiosa necesidad de crear empleos productivos en las áreas rurales.

17.3. EL COMERCIO Y EL AMBIENTE: LOS ERRORES DEL ESTADO Y EL MERCADO

El avance hacia el libre comercio se combinó con un proceso de integración regional. Los mecanismos del mercado remplazaron a las imposiciones burocráticas, permitiendo mayor libertad para el capital y las decisiones de inversión de los grupos empresariales. La competencia entre los grupos financieros surgió conforme tomaron ventaja de las oportunidades ofrecidas por la economía internacional para crear nuevas industrias y modernizar las viejas, traer nuevas tecnologías en un intento por superar los viejos problemas, y reubicar a la sociedad y a sus integrantes a fin de confrontar los cambios de la competencia internacional. Las agencias multilaterales de desarrollo comenzaron a financiar los cambios institucionales y productivos necesarios para im-

pulsar a muchos países de todo el mundo al mercado mundial. El nuevo clima de libertad económica generó las condiciones para altas ganancias, atendiendo las demandas del mercado internacional y de un nuevo grupo próspero de consumidores locales, principales beneficiarios de la nueva estrategia. Las bolsas de valores asumieron una nueva importancia como foco para los movimientos especulativos de capital que están influyendo de manera importante en las decisiones políticas y productivas. En Latinoamérica se sintieron rápidamente los efectos desestabilizadores de los movimientos de capital: los financieros internacionales impusieron fuertes límites a la posibilidad de los gobiernos nacionales para promover una estrategia popular de desarrollo sostenible, ocasionando costos particularmente onerosos a los trabajadores y a los campesinos.

Las negociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte y la Organización Mundial del Comercio fueron de gran importancia y visibilidad. Grupos opositores forjaron alianzas para tratar de derrotar estas iniciativas que, dijeron, ocasionarían graves daños ambientales y sociales. La internacionalización de la economía global acelera la especialización productiva, intensificando los problemas de degradación y destrucción de los ecosistemas. La mayor concentración de la riqueza y la agudización de la pobreza están haciendo cada vez más difícil la tarea de controlar y revertir el daño ambiental. Algunos grupos ambientalistas hacen hincapié en los altos costos que este comercio ocasiona en términos de contaminación por transporte y desperdicios del proceso de producción y una utilización más rápida de los recursos naturales, especialmente de la energía. Otros críticos fueron más allá, objetando la rápida difusión de un modelo de desarrollo insostenible e inalcanzable, que imponía el consumo creciente como base para mejorar el bienestar humano.

Justo cuando los gobiernos nacionales son forzados a reducir sus funciones tradicionales y a sacrificar parte de su base de ingresos públicos para atraer nuevas inversiones, se intensifica el ritmo de crecimiento económico. Sin desprenderse de su control político, están devolviendo muchas responsabilidades a las regiones (estatales o provinciales) y a las administraciones locales, las cuales no están preparadas para enfrentar esta carga. La carencia de personal técnico y sistemas administrativos modernos agudiza los problemas. Esto hace resaltar el interés por los daños ambientales y la destacada polarización conforme los comerciantes internacionales arrebatan los beneficios de la nueva apertura del sistema internacional.⁷

⁷ Para ejemplos excelentes de estas discusiones véase, entre otros, Low (1992), Arden-Clarke (1992) y Daly (1993). Un resumen de esta bibliografía fue preparado por la CEPAL (1996).

Pero la internacionalización crea nuevas contradicciones. No ha resultado fácil convencer u obligar a las empresas a que incluyan en el diseño y operación de sus proyectos de inversión los efectos ambientales y sociales causados a la comunidad. Hasta ahora, no se ha logrado que las compañías incorporen estas “externalidades” (es decir, los costos totales para el ambiente y la sociedad) en sus cálculos, o, salvo contadas excepciones, que sus planes de producción y expansión no contribuyan al deterioro del entorno en que operan. Preocupante es la práctica actual de estas corporaciones que se sirven de sus considerables influencias políticas y económicas para que se establezcan políticas que conducen a lo opuesto de lo que los economistas y ambientalistas considerarían las decisiones óptimas. Negocian subsidios o exenciones de varios tipos por servicios públicos (incluyendo impuestos locales, cargos por servicios de infraestructura municipal y tarifas de energía), que conduzcan a la elección de tecnologías que no están acordes con los mejores intereses del país o del planeta en términos de su impacto en el medio ambiente. Los programas públicos para atraer inversiones privadas a menudo fomentan un incremento en el empleo de maquinaria, desplazando a la mano de obra, y aumentan el uso de energía; a la vez, eximen a las nuevas empresas de su aporte para financiar las inversiones en servicios públicos requeridos para asegurar la producción. Como resultado, las nuevas inversiones privadas se dan con frecuencia a expensas del deterioro en la calidad de los servicios disponibles para la población local, incluyendo a muchos obreros que han emigrado en busca de trabajo. Así, se observa un aumento importante de producción con una merma sensible en la calidad de vida para todos los que habitan en la zona.

Las distorsiones en los sistemas de precios no son las únicas fallas del mercado. Durante mucho tiempo, los economistas han evaluado las diversas externalidades asociadas con la producción y la organización colectiva. De la expansión internacional surgen grandes preocupaciones conforme los nuevos inversionistas —alentados por la necesidad de generar divisas— aumentan la intensidad con que extraen los recursos naturales, con efectos deplorables para el ambiente. Muchos convenios de producción para el mercado internacional son de corto plazo, generando fuertes incentivos para elevar la intensidad de la extracción de valor —un problema que se está agudizando en las áreas de plantación forestal y de monocultivo agrícola del tercer mundo—. A menudo, la creciente intensidad de extracción en una región conduce al empobrecimiento de otras, ya que los métodos tradicionales de producción en las áreas forestales o costeras resultan demasiado costosos para permitir a la mayoría de los campesinos competir en los mercados nacionales e inter-

nacionales. Estos sistemas de producción especializada, localizados en la agricultura, la minería o la silvicultura, en áreas marinas o urbanas, con frecuencia son considerados por muchos expertos como los peores depredadores del medio.

a] La separación del consumo y la producción

La opulencia, la acumulación de riqueza y la desigualdad son una grave amenaza para la sostenibilidad del sistema global. Los patrones de consumo de los países más ricos están conformados por un aparato productivo que sólo prospera generando nuevas demandas de bienes para continuar creciendo. Su propia lógica le impide a las empresas o al mismo Estado definir un paquete socialmente deseable de productos para el uso individual y colectivo que satisfagan las necesidades básicas. Actualmente, las energías creativas se dirigen hacia el acrecentamiento del volumen de bienes con una elevación concomitante del uso de energía y otros recursos naturales, sacrificando frecuentemente la capacidad de la sociedad para enfrentar mayores metas sociales.

Con la creciente comprensión de la amenaza de la crisis ambiental, aumentan las presiones por tecnologías de producción y patrones de consumo más responsables. Aunque hay casos selectos donde los recursos son utilizados con mayor eficiencia y se presta mayor atención a la reducción y reciclaje de múltiples desechos, el problema fundamental es el imperativo hacia el crecimiento basado en el consumo de un volumen cada vez mayor de bienes y servicios, demandando más recursos y energía. Esto crea un modelo insostenible que las sociedades opulentas no están preparadas para contener, mucho menos para revertir.

Existe una contradicción fundamental en el interior de un sistema que promueve una creciente separación entre consumo y producción. La urbanización ciertamente contribuye a esta separación. Aun cuando haya una mayor conciencia de la necesidad de cuidar el ambiente, la creciente complejidad de los procesos productivos y las características del consumo urbano conducen a perder contacto con la relación intrínseca entre el bienestar ambiental y el humano. Se están olvidando las tradiciones y prácticas culturales que se perfeccionaron y transmitieron a través de generaciones para proteger el ambiente y las especies. Las presiones de la reorganización social y productiva han avanzado más allá de la capacidad de muchas de estas sociedades para adaptarse, con el resultado de que un número importante de éstas está sufriendo procesos acelerados de deterioro ambiental. Más que nunca, necesitamos

considerar las contribuciones que las adaptaciones de las antiguas y las nuevas tecnologías pueden hacer para mejorar el paisaje y los sistemas productivos deteriorados. Conforme avance nuestra comprensión de los sistemas tradicionales de conocimiento, será posible aprovechar algunos de los enfoques de manejo ambiental utilizados en unas sociedades para proteger los ecosistemas y mejorar la calidad de vida en otras áreas.

b] El análisis “económico” del “problema” ambiental

Frente a los retos de la “sostenibilidad”, los teóricos del desarrollo y sus colegas que formulan las políticas en las instituciones multilaterales, reaccionan justificando sus recetas con la estructura analítica y las herramientas de la economía neoliberal; es decir, se trataría de justificar el poder de los grupos ricos que dominan el mercado mundial. Como resultado, una parte importante del esfuerzo ha sido dedicado a cuantificar los costos monetarios de la degradación ambiental y a formalizar la búsqueda de soluciones en modelos económicos que ofrecen métodos para fijar precios a los recursos y asignar costos a los contaminantes y a los procesos de degradación.⁸ De acuerdo con estas ideas, la calidad del ambiente es una “mercancía” de lujo, que sólo puede ser valorada cuando la gente ha resuelto sus necesidades básicas.

Siguiendo con este enfoque metodológico, construyeron una “Curva Ambiental de Kuznets” para justificar su enfoque teórico. “Descubrieron” que las naciones más ricas asignan una proporción creciente de su ingreso nacional al mejoramiento ambiental. Así, algunos economistas argumentaron, por ejemplo, que el Tratado de Libre Comercio de Norteamérica contribuiría a mejorar el ambiente en la medida en que eleve la tasa de crecimiento económico y estimule la demanda por un ambiente más limpio, sin evidencia sobre el asunto.⁹

De la misma manera, los economistas neoclásicos no se detienen en ofrecer recomendaciones fundadas en su comprensión idealizada del funcionamiento de los mercados. Por ejemplo, Larry Summers, economista principal del Banco Mundial en su momento, y luego encargado

⁸ El Banco Mundial contribuyó a formalizar estas metodologías (*e.g.*, Pearce y Warford, 1993).

⁹ Desde un punto de vista estrictamente técnico, este análisis adolece de validez (Grossman y Krueger, 1993). El trabajo se basó en una descripción cuantitativa de estadística comparativa, que después usaron para derivar conclusiones respecto de un proceso dinámico. Esquiva otro asunto medular: quién pagaría los costos de la remediación ambiental y quién aprovecharía los beneficios.

de la política económica internacional de Estados Unidos entre 1995 y 1996, ofreció un ejemplo espléndido de este razonamiento cuando se le preguntó si “el Banco Mundial [no] debería fomentar mayor migración de las industrias sucias a los países en vías de desarrollo”. Explicó que “una cantidad dada de contaminación perjudicial para la salud debería hacerse en el país con el costo más bajo, que sería el país con los salarios menores”. Más aún, destacó que “la demanda por un ambiente limpio por razones estéticas y de salud parece tener una elevada elasticidad de ingreso”, ya que la gente de estos países tiene tasas elevadas de mortalidad infantil y no necesita preocuparse por las enfermedades provocadas por la contaminación, que sólo se manifiestan en la gente mayor (*The Economist*, 8/2/1992; Foster, 1993: 10-11).

El análisis ortodoxo va más lejos, ofreciendo suposiciones heroicas sobre el comportamiento humano. Como los pobres tienen urgencia en enfrentar sus necesidades de supervivencia, no pueden reflexionar en las actividades que sólo darán frutos en el futuro. Por eso, deberían aceptar la degradación ambiental a largo plazo y rechazar la inversión que debiera hacerse en actividades para la conservación del agua y reforestación; toman como supuesto que los pobres no estarían dispuestos a organizarse para el mantenimiento de ecosistemas. En consecuencia, “sólo después de que los productores pobres incrementen sus ingresos pueden volver su atención a la reducción de la erosión del suelo y a otros problemas ambientales de largo plazo”¹⁰ (Leonard, 1989: 4).

El crecimiento de la población es otra de las causas de la degradación ambiental, de acuerdo con aquellos que utilizan modelos de comportamiento de elección racional, línea fundamental de los que proponen las políticas neoliberales. Las altas tasas históricas de fertilidad les sugieren una receta política: la urgencia por imponer controles más estrictos sobre la natalidad. Más que admitir que el crecimiento de la población frecuentemente es un síntoma del fracaso de sus propias políticas económicas, y de la creciente marginación de los pobres, los políticos califican como irracionales a los grupos sociales que eligen procrear más hijos; entonces, tienen que ser más responsables e intervenir con programas de planifica-

¹⁰ Como se muestra en varios capítulos de este libro (véase, por ejemplo, capítulo 20), estas afirmaciones contradicen la evidencia histórica que muestra que las sociedades campesinas e indígenas invirtieron un gran esfuerzo y habilidades de organización social en el desarrollo de los sistemas principales para terrazas, riego y otros métodos que garantizaron la productividad de la tierra sin comprometer su fertilidad a largo plazo. Estos sistemas han sido comprometidos o desmembrados conforme las exigencias de la economía de mercado que han forzado a la gente a abandonar los métodos tradicionales de movilizar el trabajo para ejecutar tareas colectivas.

ción familiar, alfabetización femenina, estrategias de control social o medidas más autoritarias, si el primer enfoque falla (Ehrlich y Ehrlich, 1991).

En general, los economistas insisten en que el mercado es el mejor mecanismo que la sociedad tiene para la asignación de recursos. Incluso Herman Daly, un crítico muy conocido del pensamiento convencional sobre sostenibilidad, quien ha introducido consideraciones institucionales y biológicas en su análisis, comenzó uno de sus libros con la defensa de los mercados:

Estamos convencidos de la capacidad de los mercados y de su excelencia para ciertos propósitos que están en el corazón de las teorías clásica y neoclásica. Creemos que muchos propósitos públicos podrían ser mejor servidos por la aplicación de los principios del mercado que por el remiendo de los gobiernos ahora prevalecientes. [...] El análisis del mercado puede continuar jugando un papel extremadamente importante dentro de un contexto que ve el propósito de la economía al servicio de la comunidad (Daly y Cobb Jr., 1993: 19).

Ahora, la prioridad para los economistas es determinar el costo social de los recursos y flujos de desperdicios. De asignar precios correctos, argumentan, promoverían un uso más cuidadoso de los escasos recursos y una actitud más responsable hacia la generación y dispersión de desperdicios. Sin embargo, las decisiones acerca de cómo expresar estos asuntos en términos financieros no son simples cuestiones técnicas. Más bien implican cuestiones complejas sobre la distribución de los recursos y beneficios entre diferentes clases sociales y entre generaciones, sobre el control actual y futuro de los recursos y el papel de la tecnología en la sociedad. En pocas palabras, los debates técnicos entre los economistas enmascaran asuntos fundamentales sobre el funcionamiento presente y la evolución futura de la sociedad.

Las discusiones técnicas de los economistas neoliberales sotallan cuestiones importantes respecto del funcionamiento del mercado. Una vez que se decide cómo cobrar a la gente por usar recursos y por los daños al ambiente, habría que decidir cómo usar estos recursos para mejorar la calidad de la vida. La captación de parte de este valor puede ser una fuente de ingresos para ayudar al financiamiento de los enormes gastos necesarios para corregir el daño debido a una larga historia de maltrato a la naturaleza. El dinero puede ser utilizado también para compensar a las comunidades por la explotación de sus recursos, un mecanismo para pagar las inversiones requeridas para sustituir esos recursos con nuevas actividades productivas que garantizarán un empleo lucrativo en el futuro. Las reformas institucionales requeridas por este enfoque implican un

reordenamiento importante de las prioridades sociales y políticas, tema al que debemos retornar con frecuencia, pero que los teóricos y los políticos insisten en evitar.

c] *Una respuesta popular*

Frente a la tesis oficial de la necesidad de acelerar la internacionalización del capital con su correspondiente penetración del mercado global controlado por el capital internacional, las organizaciones no gubernamentales, en representación de los diversos intereses de la “sociedad civil” en el mundo, han comenzado a ofrecer modelos alternativos de desarrollo sostenible. Las ONG internacionales han librado una lucha contra los programas de ajuste estructural, movilizando a los grupos nacionales y locales en su contra por la carga desproporcionada que imponen a los grupos más vulnerables en el tercer mundo. Estos esfuerzos de organización continúan siendo especialmente efectivos debido a que no se limitan a los intereses sectoriales de grupos ambientalistas u otros interesados en los derechos humanos, los problemas de las mujeres, el trabajo o los campesinos. Comparten un análisis común que identifica a la desigualdad como uno de los problemas principales y, en consecuencia, a la participación democrática de base como la estrategia fundamental y el principio de acción política (Barkin, 1994; Gregory, 1992; Johnson y Cooperrider, 1991; Livernash, 1992; Cruz y Repetto, 1992; Mumme, 1993).

Aunque el Banco Mundial reconocía la existencia de estos grupos sociales desde 1975, la participación sustantiva de las ONG en la elaboración de sus análisis sólo comenzó después de un acuerdo suscrito en 1987, respecto a la necesidad de aprovechar la experiencia de las ONG sureñas y las organizaciones de base. A partir de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Ambiente y el Desarrollo realizada en Río en 1992, ha aumentado la colaboración oficial con las ONG preocupadas por el desarrollo y el ambiente. La organización de los grupos de base de todo el mundo, junto con el reconocimiento creciente del fracaso de las soluciones mercantiles para proporcionar respuestas a las necesidades de los marginados, están creando una nueva estructura en la que los defensores de la participación popular no sólo ocupan un lugar importante en los debates sobre la promoción del desarrollo sostenible, sino que también pueden participar en el diseño e instrumentación de programas de desarrollo nacional. Por supuesto, esto no resuelve los problemas más difíciles del conflicto de intereses entre los grupos sociales en cada país y región, el cual constituye la barrera más importante para el desarrollo sostenible.

17.4. UNA ESTRATEGIA DE PARTICIPACIÓN DEMOCRÁTICA PARA LA DIVERSIFICACIÓN RURAL Y EL MEJORAMIENTO PRODUCTIVO

El desarrollo sostenible podría ser un enfoque de reorganización productiva que aprovecha las experiencias combinadas de los grupos locales de todo el mundo. Las técnicas de instrumentación varían enormemente entre regiones y ecosistemas. Un común denominador permea este trabajo: la necesidad de una participación democrática efectiva en el diseño e instrumentación de los proyectos. Su importancia es evidente en los títulos de algunos de los excelentes escritos sobre el tema (Chiriboga *et al.*, 1991; Machado *et al.*, 1993; Núñez, 1993).

Otra lección proveniente de la experiencia con la base es la eficacia de las redes para mantener y defender este trabajo. Sin el mutuo reforzamiento que la agrupación internacional de ONG proporciona, las unidades individuales y las redes regionales no serían tan efectivas en la obtención de fondos para sus proyectos, en la obtención de asistencia técnica para su instrumentación y en el soporte político contra los políticos e instituciones intransigentes o incrédulas, tanto locales como nacionales (Friedmann y Rangan, 1993). Sin embargo, los éxitos se deben no sólo a la tenacidad y al sacrificio de los individuos comprometidos y a los participantes locales: también al surgimiento de una estructura nacional e internacional de soporte de trabajadores, campesinos, eruditos y activistas, deseosos de movilizarse para mantener los esfuerzos espontáneos; o bien grupos organizados de todo el mundo, que promueven proyectos de participación democrática para el desarrollo sostenible. Las organizaciones están formándose, las alianzas rehaciéndose, las experiencias reevaluándose.¹¹ En Latinoamérica, algunas se enfocan en la comercialización y su certificación, como los relacionados con el café orgánico (por ejemplo la Confederación Nacional de Organizaciones Cafetaleras en México) y la explotación sustentable de los bosques (por ejemplo, Forest Stewardship Council).

Pero el desarrollo sustentable no es un enfoque que será aceptado simplemente porque “su momento ha llegado”. La apertura de la comunidad multilateral a los grupos de base —incluyendo el compromiso a largo plazo de la Fundación Interamericana en Estados Unidos, el IICA en Costa Rica, y numerosas fundaciones de Europa— no es un gesto de

¹¹ Mientras se ha hecho muy poco sobre estrategias específicas de sostenibilidad en las comunidades rurales pobres, es claro que mucha de la experiencia referida por quienes la practican con los grupos de base (*e.g.* Glade y Reilly, 1993) es consistente con los principios enunciados por los teóricos y analistas como Altieri (1999).

buenas voluntades de los más poderosos hacia los más pobres: más bien, refleja el reconocimiento de que estos grupos han movilizado a la población y recursos para lograr mejoras palpables en los niveles de vida, mientras contribuyen notablemente a proteger el ambiente. Tales victorias señalan el principio, no el fin del proceso. Como tales, tampoco implican la aceptación de los objetivos de estos grupos por parte de las agencias oficiales, que claramente muestran mayor simpatía por los intereses del modelo de globalización con el patrón de especialización productiva y polarización social.

El desarrollo sostenible implica una lucha política por el control del aparato productivo. Requiere de una redefinición no sólo de qué y cómo producimos, sino también de a quién le será permitido producir y para qué fines. Para las organizaciones involucradas en proyectos de desarrollo sostenible en áreas rurales, el conflicto se centra alrededor del control de los mecanismos del poder político y económico local y sobre el uso de los recursos. La lucha por lograr una voz más efectiva para los campesinos, las poblaciones indígenas, las mujeres y otras minorías menos privilegiadas, no asegurará que sus decisiones conduzcan al desarrollo sostenible. Sin embargo, esa participación democrática creará los cimientos para una distribución más equitativa de la riqueza, uno de los principales prerrequisitos para el surgimiento de una estrategia efectiva de desarrollo sostenible.

17.5. desarrollo autónomo: una estrategia para la sostenibilidad

La integración global está creando oportunidades para algunos, y pesadillas para muchos. En la yuxtaposición de ganadores y perdedores, deben considerarse nuevas estrategias para el desarrollo rural que revaloricen la producción tradicional. Las nuevas estrategias tendrán que aislar, de alguna manera, a estas comunidades de la economía global, produciendo productos con cualidades especiales (orgánicas, genéricas, campesinas...) u ofreciendo servicios que puedan compensar, alentar e impulsar el fortalecimiento de sus actividades dentro de un manejo ambiental sustentable. El enfoque sugerido por la búsqueda de la sustentabilidad y participación popular, tiene el fin de crear mecanismos dondequiera que las comunidades campesinas e indígenas encuentren apoyo para continuar cultivando en sus propias regiones. Aun bajo el criterio estricto de la economía neoclásica, este enfoque no debe ser descartado como un proteccionismo ineficiente, ya que la mayoría de los recursos implicados en este proceso tendrían poco o ningún costo de oportunidad para toda la sociedad.

Las regiones que tienen muchas y mayores oportunidades de explorar usos creativos para su patrimonio natural son las que se están quedando atrás. Algunos de los más importantes proyectos de este tipo son administrados por los grupos comunitarios locales para diversificar su base productiva, usando fuentes de energía renovable y recursos locales para agregar valor con tecnología y prácticas tradicionales. Las posibilidades de encontrar nuevas formas de aprovechar este patrimonio natural son enormes, y las iniciativas para implementar estos proyectos como alternativas para estos grupos son cada vez mayores (Barkin, 1998).

Volver a desarrollar la “economía campesina” en estas regiones es tanto deseable como urgente. No es simplemente un asunto de rescate de culturas antiguas, sino de tomar ventaja de una importante herencia cultural y productiva que pueda proporcionar soluciones a los problemas de hoy y de mañana. No es cuestión de “reinventar” la economía campesina, sino de reunirla con sus propias organizaciones para esculpir espacios políticos que les permitan ejercer su autonomía, definiendo las formas en las que sus organizaciones guiarán la producción para ellos mismos y para comerciar con el resto de la sociedad. Una vez más, la identificación tecnocrática de los mecanismos productivos y la catalogación de los sistemas de conocimiento indígenas (que, por ejemplo, están ahora a la orden del día entre las corporaciones transnacionales que buscan nuevas fuentes de germoplasma para sus avances biotecnológicos) no van a revertir la estructura de la discriminación, a menos que se acompañen de una participación política efectiva (Toledo, 2000).

Proponemos la formalización de una economía autónoma. Reconociendo la permanencia de una sociedad drásticamente estratificada, el país estará en mejor posición para diseñar políticas que reconozcan y tomen ventaja de estas diferencias a fin de mejorar el bienestar de los grupos de ambos sectores. Una estrategia que refuerce a las comunidades rurales, promoviendo la diversificación, hará que el manejo del crecimiento sea fácil en aquellas áreas que establecen y desarrollan vínculos con la economía internacional. Pero más importante es que tal estrategia ofrezca una oportunidad para que la sociedad confronte activamente los cambios en el manejo del ambiente y la conservación de una manera significativa, con un grupo de gente calificado de manera única para tales actividades.

La economía política de la autonomía económica no es nueva. A diferencia del modelo actual que permea todas nuestras sociedades, confrontando a ricos y pobres, la propuesta pide la creación de estructuras de modo que un segmento de la sociedad que elige vivir en áreas rurales encuentre apoyo en el resto de la nación para instrumentar un

programa alternativo de desarrollo regional. Este modelo de autonomía comienza con la base heredada de la producción rural, mejorando la productividad mediante el uso de la agroecología. También implica la incorporación de nuevas actividades que se construyan sobre la base cultural y de recursos de la comunidad y de la región para su desarrollo posterior. Requiere respuestas muy específicas al problema general y, en consecuencia, depende fuertemente de la participación local para su diseño e instrumentación. Mientras los planes generales son ampliamente discutidos, los detalles requieren programas bien definidos de inversión de los productores directos y de sus socios.¹²

Lo novedoso de este modelo es la introducción de una estrategia explícita de fortalecimiento de la base social y económica para una estructura que permita a estos grupos mayor autonomía. Mediante el reconocimiento y fomento para la creación de una alternativa, proveniente de los grupos marginales, que les ofrezca mejores perspectivas para su propio desarrollo, la propuesta de la economía autónoma podría malinterpretarse como una nueva encarnación de la “guerra (norteamericana) contra la pobreza”, o como el enfoque mexicano de “solidaridad” para aliviar los efectos más nocivos de la marginalidad. Esto sería un gran error: no se trata de una simple transferencia de recursos para compensar a los grupos atrasados por su pobreza, sino de un conjunto integrado de proyectos productivos que ofrezca a las comunidades rurales la oportunidad de generar bienes y servicios que contribuyan a elevar sus estándares de vida y los de sus conciudadanos, mientras mejoran el ambiente en el que viven.

17.6. NUESTRAS TAREAS ACTUALES

En esta época de globalización, muchas comunidades rurales están construyendo conscientemente sus propias estrategias alternativas, una “nueva ruralidad”. La labor fundamental de los participantes académicos e institucionales comprometidos con fomentar estas nuevas ruralidades es abrir espacios institucionales y de mercado para que los campesinos e

¹² Boyce (1999) ofreció un programa específico para la reconversión de El Salvador, basado en los principios discutidos en este artículo. Las propuestas de los grupos como la IAF y la RIAD ofrecen ejemplos específicos de los esfuerzos que las bases están llevando a cabo para instrumentar alternativas como aquéllas discutidas en el texto. El Centro de Ecología y Desarrollo en México (antes, Centro de Ecodesarrollo) propuso un programa de desarrollo regional coherente con la estrategia propuesta en el área de invernada de la mariposa monarca; véase el capítulo 9 de este libro.

indígenas puedan seguir elaborando sus estrategias. Apoyar los proyectos de construcción de una nueva ruralidad, abarcando pueblos campesinos, indígenas y periurbanos, implica fortalecer la capacidad productiva en la agricultura, la ganadería y la silvicultura, por no mencionar otras actividades como la pesca, la caza y la cosecha. Pero para que sean sistemas productivos tienen que ser complementados con otras actividades que agreguen valor mediante su procesamiento y la conservación y protección de los recursos, a fin de evitar que la explotación no se vuelva otro mecanismo de destrucción de la naturaleza, de las fuentes de la riqueza y de la calidad ambiental y de la vida. Son éstos los valores en los que descansa nuestro esfuerzo para promover la nueva ruralidad.

Las comunidades no sólo demandan apoyos materiales y tecnológicos para asegurar una adecuada productividad y un uso apropiado de los recursos naturales. Requieren, además, de mecanismos para asegurar una remuneración justa para los nuevos productos que podrían ofrecerse en los mercados locales e internacionales y de un reconocimiento de los servicios ambientales que tanto hacen falta a los que estamos encerrados en ambientes globalizados.

Estas comunidades constituyen parte sustancial de la población que nos ofrece mecanismos para construir una nueva sociedad que contempla la coexistencia de redes sociales viviendo al margen de la sociedad globalizada. Los predicadores de los procesos integradores ofrecen un discurso de falta de alternativas; insisten en la bondad de la homogeneización de las sociedades y de sus procesos productivos. Junto con la especialización productiva que imprime el libre comercio, arrasan con la riqueza cultural y étnica, que es tan necesaria para la protección de la biodiversidad que tanto requerimos para la supervivencia del planeta y de la humanidad.

Las comunidades han superado con mucho los mezquinos programas oficiales para confrontar la pobreza. Si bien cuentan con limitados recursos, en muchos casos sus propias estrategias para enviar migrantes a otras partes y para atraer dinero y productos que aseguren su permanencia en las zonas rurales, exceden con creces el flujo de recursos canalizados hacia las zonas rurales desde los organismos gubernamentales e internacionales encargados del “desarrollo” o del “bienestar” rural.

Nuestra labor no es suplir estos recursos externos, ni enseñar a las comunidades cómo producir mejor. Poco favor les estaríamos haciendo al presumir que el superar la pobreza que padecen es sólo un problema técnico. Más bien, podemos participar, ayudando a vencer algunos de los numerosos obstáculos institucionales erigidos por grupos caciquiles, por el capital financiero, por burocracias fosilizadas, por sistemas de poder

tradicional, que temen el ejercicio autónomo de la gestión de los recursos naturales y la separación de estas comunidades de mecanismos clientelares de control político. En este contexto, al entender este potencial y las promesas que nos ofrece una renovada sociedad rural, sus partidarios tenemos la responsabilidad de limitar la actuación de estos mecanismos que coartan a las comunidades y a sus instituciones.¹³

Para terminar, recordaremos tres ejemplos de proyectos abordados en otros capítulos de este libro, que ofrecen una ventana a la labor del investigador en el campo de la sostenibilidad aplicada a la realidad mexicana. El primero, un análisis de la problemática del ecoturismo en la región de hibernación de la mariposa Monarca en el oriente de Michoacán. Segundo, el engorde de cerdos con aguacates para producir carne de alta calidad en condiciones campesinas. Y tercero, un proyecto para promover la producción de agua en zonas donde la presencia campesina es importante, que promete ofrecer un mecanismo para fortalecer estructuras sociales tradicionales y liberar a la mujer rural de labores pesadas mientras se mejora el ambiente y aumenta la productividad rural.

1] La Reserva Especial de la Mariposa Monarca fue creada en 1986 para proteger a esta preciosa especie. La mariposa llega a Michoacán para albergarse durante cuatro meses como parte de una migración espectacular que contempla un viaje anual desde México a Canadá desde hace miles de años. Desgraciadamente, por no considerar que los campesinos son parte integral de la región, la acción oficial ha acelerado un proceso de degradación ambiental en la región, ya que no ofreció a las comunidades participación alguna en un proceso para crear nuevas oportunidades de empleo y para manejar los servicios ambientales que atraen a casi 200 000 visitantes cada invierno. Nuestro trabajo fue encaminado a apoyar a las comunidades para elaborar una serie de actividades productivas que aprovechen los recursos de la región para generar empleo mientras se enriquece su sistema natural. Desgraciadamente, la avaricia política cerró las posibilidades para que las comunidades pudiesen concretar este potencial.

2] Como en el ser humano, al comer el aguacate el cerdo reduce el colesterol en su sangre y acumula menos grasa en sus arterias y su carne.

¹³ Son numerosos los proyectos que se están esforzando por apoyar a las iniciativas rurales. No se garantiza su éxito simplemente con respaldar a las comunidades, como lo ha demostrado vívidamente el caso de la Reserva de la Biosfera para proteger a la mariposa Monarca (Chapela y Barkin, 1995). Los múltiples elementos de coordinación, de concertación y de capacidad financiera que se requieren para hacer efectivo el potencial de una colaboración multidimensional, son evidentes en la constancia de los compromisos personales e institucionales de los casos exitosos (Barkin, 1998; Barkin y Paillé, 2000).

Este hallazgo nos sugirió la posibilidad de proponer una investigación para determinar la viabilidad de realizar una producción a escala comercial en condiciones campesinas. Después de identificar un empacador dispuesto a participar en el proyecto y comercializar el producto con un premio económico importante para los productores, emprendimos la organización de un equipo para determinar las normas para su puesta en marcha. Como las condiciones naturales limitan el número de cerdos por hectárea de huerta de aguacate, es un sistema idóneo para la sociedad campesina; más aún, como son la mujer y sus niños quienes se dedican al cuidado de los animales de traspatio, este proyecto ofrece una manera de fortalecer su papel económico y social en la comunidad. En 2001 se empezó a “liberar” la tecnología en un proyecto de producción comercial (capítulo 19).

3] La disponibilidad de agua en muchas regiones del país ha ido en descenso a raíz de la sobreexplotación de los mantes freáticos y de la creciente degradación de las partes superiores de las cuencas. Esto ha acarreado crecientes costos para el mantenimiento de los distritos de riego, incluyendo mayores costos de bombeo y de limpieza de los canales y de los cauces de los ríos. Como son los campesinos quienes han sido relegados a las partes superiores de las cuencas y han sufrido más las políticas de apertura del comercio agropecuario y de contención de los precios de básicos, tienen menos posibilidades de seguir con sus tradicionales labores de manejo del agua y del suelo. De revertir esta dinámica, remunerando a los campesinos con parte de los ahorros en las partes bajas de las cuencas derivados de un mejor manejo de la parte superior, es posible mejorar las prácticas de cultivo y de extracción de árboles, elevando la capacidad de captación y almacenamiento de agua en las cuencas. Combinando este programa con otro para garantizar agua potable de calidad a las comunidades participantes, a través de técnicas de recolección de agua de lluvia, sería factible mejorar las condiciones ambientales y económicas en grandes secciones del México rural. Como en el caso anterior, ello sería de especial beneficio para la parte más pobre de las comunidades, ya que son las mujeres las responsables de todos los aspectos del acopio, manejo y disposición del agua. De liberarlas de esta tarea, se estima que tendrían casi la tercera parte de su día laboral disponible para otros quehaceres (capítulo 23 de este libro y Barkin 2001).

18. RECONSIDERANDO LAS ALTERNATIVAS SOCIALES EN EL MÉXICO RURAL: ESTRATEGIAS CAMPESINAS E INDÍGENAS¹

¿Tienen el México y la América Latina rurales un futuro? Frente a la caída en ingresos personales y el aparente empobrecimiento, ¿pueden los millones de personas que viven en el campo tener esperanza de escapar del fango de la pobreza y la marginación social? ¿Por qué siguen viviendo así? En este texto enfrento estas visiones estereotípicas de la ruralidad, para reexaminar algunas de las suposiciones máspreciadas sobre la sociedad rural, y sugerir que hay numerosos grupos sociales trabajando activamente para fortalecer sus comunidades, para rehabilitar y proteger sus ecosistemas y para forjar un nuevo pacto social en el cual disfrutar de mayores niveles de vida a la vez que contribuir a mejorar en la calidad de vida de la sociedad entera. Esta visión alternativa de las comunidades rurales está basada en una revisión de la información disponible sobre estas sociedades, así como una reconsideración de las formas en que las comunidades se gobiernan a sí mismas y toman decisiones frente a presiones externas.

Durante la década del levantamiento zapatista, en 1994, el carácter cultural y demográfico del México rural parece haber cambiado. No tanto por las transformaciones que amenazan al país: la entrada de México al Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el fin del dominio político durante setenta años por un solo partido, como resultado de la apertura del proceso electoral, y la reestructuración de la producción y el consumo como parte de la globalización. Más bien, el país está volviendo a encontrarse con sus minorías étnicas —ahora representando más del diez por ciento de la población y quizá hasta un 15 por ciento, en vez de las estimaciones que señalaban la mitad de esta magnitud en años recientes—,² y con el significado cuantitativo y cualitativo de las

¹ Publicado en *Polis*, vol. 5:15, 2006, <<http://www.revistapolis.cl/15/bark.htm>>.

² Este cambio cuantitativo no es resultado de alguna transición demográfica dramática; más bien refleja una nueva realidad en la cual ser indígena es ahora objeto de orgullo a consecuencia del surgimiento del Movimiento Zapatista y la consolidación del Congreso Nacional Indígena (CNI) que ofrece una oportunidad para las docenas de grupos étnicos todavía existentes de discutir sus metas comunes y formular estrategias para la acción colectiva. En contraste con los 15 millones de miembros del CNI hoy [2006], la estimación

remesas que crecieron de menos de cinco mil millones de dólares a más de veinte mil millones.³

También nos preguntamos sobre la división entre lo rural y lo urbano, que tendrá que ser reconsiderada. Rechazamos la clasificación simplista de las autoridades estadísticas mexicanas quienes celebraron la modernización acelerada del país, proclamando que las tres cuartas partes de la población vivían en zonas urbanas, basados en su determinación de lo urbano como asentamientos mayores de 2500 habitantes. Un criterio más razonable, y más de acuerdo con los internacionales, sería de 15 000 habitantes, generando el resultado inesperado de que la población urbana no aumentó en el decenio de 1990-2000 respecto del 61% del total.⁴ Finalmente, y de modo contrario a las predicciones de muchos análisis estándar del sector agrícola, la producción de maíz en México ha crecido desde 10 a 12 millones de toneladas por año, a más de 20 millones de maíz blanco producido en condiciones de temporal, a pesar de la importación masiva del “maíz amarillo núm. 2” para usos industriales y pecuarios (Barkin, 2003).⁵

Nuestra tesis en este artículo es que el campesinado y la economía rural (incluyendo los grupos indígenas) están repositionándose en respuesta a la contracción de oportunidades en la sociedad urbano-industrial. Más aún, esta transformación es de importancia medular para la nación en su conjunto, ya que la consolidación de las comunidades rurales, el aumento en la producción de maíz, la diversificación de fuentes de ingresos y actividades productivas no agrícolas, y la inyección masiva

más autorizada del número de indígenas antes del levantamiento fue de 8 millones (Bonfil Batalla, 1987).

³ Este aumento cuantitativo en las estimaciones de los flujos monetarios en parte es resultado de cambios en los sistemas para la recolección de la información que ahora incluye no sólo a las instituciones bancarias, sino también transacciones por empresas que se dedican a la compra-venta de divisas e instituciones cuasibancarias como las uniones de crédito, empresas que se dedican a las remesas y otros que no fueron incluidos antes de 2002.

⁴ Aún más revelador es el tamaño y composición del campesinado. Aunque los datos de la fuerza laboral son especialmente difíciles de interpretar, indican que numerosas personas empleadas en la economía urbana tiene proporciones sustanciales de sus ingresos familiares de actividades secundarias en el sector agropecuario.

⁵ Maíz Amarillo núm. 2 es la variedad dominante manejada en la Bolsa Mercantil de Chicago. Es producido en Estados Unidos de América para usos industriales y pecuarios; casi todo es producido con semillas genéticamente modificadas. En años recientes la producción de maíz blanco ha aumentado en dicho país como respuesta a la demanda para el consumo humano, mucho del cual se utiliza en la producción de tortillas, o se vende a los mexicanos en Estados Unidos y para surtir una creciente demanda para alimentos “étnicos”, así como para la exportación a México.

de recursos financieros a las áreas rurales, están generando nuevas posibilidades para el desarrollo social autogestionado y procesos constructivos de gestión ambiental, llevando a nuevas prácticas de conservación del suelo y agua y de restauración de ecosistemas. Esta transformación estratégica debe considerarse como parte de un salto de paradigmas, hacia la construcción de una vía alternativa para el desarrollo social y económico que rechaza su incorporación al por mayor como sociedades marginales en un proceso globalizado de subdesarrollo, a favor de una sociedad en consolidación, forjando sus propias estructuras de autodeterminación (autonomía).

18.1. LA ECONOMÍA MAICERA

La producción de maíz en México sufrió una prolongada crisis como resultado de los altibajos de la política pública. Comenzando en los años treinta del siglo pasado con la reforma agraria, la producción creció rápidamente: se abrieron áreas nuevas al cultivo con la creación de los ejidos y la amplia disposición de los nuevos usufructuarios para sembrarlas, aun con la parquedad de herramientas, semillas apropiadas y conocimientos que caracterizaban a una clase social a la que se le había negado el derecho de satisfacer sus propias necesidades durante siglos. Con el pasar del tiempo, y un programa sistemático de asistencia técnica que fue abortado abruptamente a finales de los años cuarenta,⁶ los agricultores aprendieron gradualmente cómo aprovechar mejor sus tierras, obtener y seleccionar mejores semillas, y fertilizar sus cultivos de formas adecuadas, aumentando la productividad de sus siembras de granos básicos, así como los cultivos asociados, sembrados en los complejos sistemas tradicionales conocidos como milpa.

⁶ El equipo norteamericano que implementó el programa para mejoramiento de cultivos en México con base en la producción de semillas híbridas y mejoradas, con un énfasis inicial en la producción de trigo en condiciones de riego, fue tajante en su insistencia de que el gobierno desarticulara el Instituto Nacional de Investigación Agrícola que se dedicaba a mejorar las prácticas agrícolas y la selección de semillas para la producción maicera en condiciones de temporal. El líder de este equipo, Norman Borlaug, recibió el Premio Nobel para la Paz por su trabajo en elaborar esta tecnología que ahora se conoce como la Revolución Verde, e impuso un modelo de producción deliberadamente inaccesible a los campesinos pobres y los de temporal. Para mayores detalles de este incidente trágico en la historia de la comunidad internacional de investigación agrícola, véanse Barkin y Suárez (1982) y Jennings (1988).

Tan exitosa fue la estrategia que el presidente podía celebrar en 1962 que “México jamás tendría que sufrir la ignominia de producir tortillas con maíz importado” (Barkin, 1991). Desgraciadamente, como es el caso con declaraciones tan pomposas, es precisamente en el momento en que los políticos se congratulan, cuando la población debería preocuparse; ya que hacia finales del mismo decenio el país estaba importando 40% de sus necesidades de granos básicos.

Aumentó la producción una vez más en los años setenta, como respuesta de la política pública a la crisis rural, y otra vez unos años después con los estímulos artificiales para lograr la autosuficiencia alimentaria con el Sistema Alimentario Mexicano (SAM) que fue inaugurado con gran ceremonia en 1978 (Barkin y Suárez, 1985; Austin y Esteva, 1987; Fox, 1993). Sin embargo, estas iniciativas sucumbieron a la crisis macroeconómica de principios de los ochenta, y la política neoliberal que terminó con el compromiso público de estimular y sostener la producción campesina de alimentos básicos. A la mayoría de los observadores del escenario mexicano rural, la secuela de estas iniciativas —la desorganización del aparato del SAM y el deterioro sistemático de los términos de intercambio de la producción rural como consecuencia de la accesión del país al GATT y su adhesión subsiguiente al Tratado de Libre Comercio (TLCAN)— marcó la muerte anunciada de los campesinos temporales en México. Los estudiantes de los asuntos rurales reorientaron sus investigaciones para documentar la caída de la producción maicera, el creciente éxodo rural y el surgimiento de una nueva tendencia hacia la pluriactividad, un fenómeno que ya se estaba analizando en otras partes.

18.2. LA CONSTRUCCIÓN DE ESTRATEGIAS ALTERNATIVAS

Aparentemente, sin percibirse por los observadores locales y los políticos, el campesinado mexicano estaba formulando sus propios planes para enfrentar la profundización de la crisis agrícola y la reducción de las oportunidades en otras partes de la economía nacional. En todas partes del México rural se estaban reconociendo y fortaleciendo grupos locales de productores —cooperativas para comprar insumos y vender productos, organizaciones políticas y aun asociaciones de crédito—, a pesar de los esfuerzos explícitos de la burocracia por cohibirlos. En el vecino Estados Unidos, los emigrantes también estaban organizando clubes regionales y vecinales y grupos solidarios para defender sus intereses como trabajadores indocumentados, para facilitar la tarea de avanzar

en la lucha de conseguir un estatus legal (con la promulgación de la legislación de 1986), y para fortalecer sus lazos con las comunidades de origen de los participantes. Resulta claro que las decisiones de muchos de los emigrantes y sus familias siguen sin ser comprendidas por gran parte de los analistas, cuyos modelos académicos neoclásicos supusieron que los individuos actúan de manera aislada; en contraste, los minuciosos estudios de campo y el análisis político de las organizaciones campesinas confirmaron los fuertes lazos colectivos que respaldaron muchas de las decisiones de migración y los compromisos sociopolíticos de los individuos (Barkin y López Castro, 1992).

Llegando a finales del siglo, un fenómeno no anticipado y poco apreciado surgió, a pesar de la tendencia adversa en los precios de los granos: la producción temporalera de maíz blanco estaba aumentando de manera notable. Pasó casi desaparecido porque casi todos los comentaristas siguieron por sus caminos bien trazados, suponiendo que el campesinado no continuaría (y no podría continuar) produciendo el grano en las condiciones desfavorables políticas y económicas que prevalecieron en los mercados domésticos y que fueron exacerbados por las reducciones radicales en las barreras de importaciones permitidas por los políticos de corte mercantilista, empecinados en reducir las presiones inflacionarias y en complacer las recomendaciones de los gigantescos carteles comerciales que controlan el intercambio mundial de granos, y de las instituciones financieras internacionales. Se volvió práctica normal invocar el supuesto axiomático de que la agricultura de temporal era incosteable y que los campesinos siguen produciendo solamente para uso propio y para los mercados locales, obligados a subsidiar su producción con remesas e ingresos fuera de la granja. Aunque la estadística oficial registra volúmenes récord de la producción maicera (grano blanco), los analistas de la sociedad rural siguen lamentando la profundización de la crisis.

En este contexto, ni los académicos ni los políticos consideraron necesarias mayores explicaciones de la dinámica de la sociedad rural, porque la mayor parte de la sociedad mexicana estaba convencida de la amplitud de la crisis que estaba englobando a las sociedades rurales alrededor del mundo capitalista, extendiéndose desde las economías de los países ricos del norte hacia las del sur empobrecido.

Con los datos disponibles sobre la producción maicera y nuestras experiencias de trabajo de campo en México, resulta claro que las comunidades están involucradas en un complejo proceso de construcción de sus propias alternativas sociales y productivas, respondiendo al reto de la globalización. Aunque estos procesos son, en gran medida, parte de los esfuerzos locales para fortalecer “la cultura del maíz” frente al ataque

explícito contra el campesinado por parte del Estado, la fortaleza de estos movimientos de resistencia se extiende mucho más allá de la crisis inmediata. Como resultado de los nuevos patrones de intercambio, el sector rural en México está recibiendo transferencias privadas que exceden en cuarenta por ciento el valor total de la producción rural. Estas transferencias toman la forma de remesas de otras partes de México y del extranjero, así como de productos traídos por parientes, contribuyendo con las comunidades y asegurando la continuidad de estas comunidades rurales (Hamilton *et al.*, 2003). Grandes contingentes de personas de las áreas rurales están saliendo en busca de empleo en la construcción, los servicios, la agricultura comercial y otros sectores; muchos están trabajando fuera de sus comunidades para mantener sus sistemas productivos, aun cuando son conscientes de la “irracionalidad” financiera de esta estrategia: están subsidiando su producción de maíz con parte de estos ingresos.

Sin embargo, resulta que su producción no es tan irracional —ya que crecientes grupos de consumidores urbanos ahora están buscando tortillas de maíz blanco hechas a mano y vendidas por docena, o aun menores cantidades, y dispuestos a pagar hasta tres veces más el precio prevaleciente en los expendios mecanizados. Asimismo, las tortillas “de color”, los tamales cocidos con maíces criollos, el mole, el pozole y docenas de otras comidas tradicionales de las culturas indígenas y campesinas, se venden a precios elevados por vendedores campesinos (mayormente mujeres) en muchas partes del país. Estos mercados se han vuelto más y más complejos y competitivos a medida que la marginación social ha orillado a los vendedores comerciales a invadir los espacios conseguidos por los indígenas y campesinos en las áreas metropolitanas; sin embargo, éstos continúan defendiendo y expandiendo sus mercados con éxito. La venta directa de productos campesinos sigue ofreciendo un complemento significativo para las comunidades que luchan por defender “la economía del maíz” (Barkin, 2002).

18.3. LAS TENDENCIAS OPUESTAS

Con todo, no todos están participando ni beneficiándose de estos desarrollos novedosos o emergentes. La migración está cobrando su precio en los hogares en todo el territorio mexicano: las mujeres frecuentemente son dejadas detrás, continuando con una pesada existencia y con la esperanza de que sus parejas sean capaces de enviar algún dinero para

ayudar a que la familia pueda seguir subsistiendo. La integración internacional exacerbía aún más los problemas de los productores rurales: *a]* permite la ilimitada importación de productos agrícolas y ganaderos en condiciones tales que los productores difícilmente pueden competir con ellas; *b]* polariza aún más a la sociedad rural, ya que beneficia a aquellos favorecidos por los capitales foráneos o susceptibles de obtener contratos de exportación, mientras que el resto del sector está bloqueado por su incapacidad de obtener créditos, o de llegar a las instituciones enfocadas a la investigación de cultivos producidos por campesinos pobres o de consumo masivo en México; y *c]* promueve el uso de tecnologías y prácticas comerciales que, en efecto, privatizan el campo y amenazan las prácticas milenarias de protección del germoplasma heredado (semillas), por la vía de la introducción no regulada de organismos genéticamente modificados (OGM, transgénicos).⁷

La política gubernamental en México, y la de las agencias financieras y políticas internacionales, consolidan aún más este proceso, devaluando la producción rural y la contribución social de los campesinos al desarrollo nacional. Las estadísticas nacionales de ingreso menosprecian la producción comunitaria para el consumo local (así como el trabajo de las mujeres en el hogar), y el gobierno ha tratado de subvertir a las asociaciones locales de crédito y cooperativas a las que perciben como anacronismos en una sociedad moderna tratando de integrarse a la economía global. Por supuesto, la intransigencia oficial frente a las demandas de algún margen de autogestión por parte de los grupos indígenas, sólo sirve para polarizar aún más a la sociedad mexicana.

18.4. FORJANDO ALTERNATIVAS PARA LAS SOCIEDADES RURALES

Frente a la promoción gubernamental de la organización corporativa de la producción rural, estamos viendo la consolidación de una dinámica nueva en muchas comunidades rurales que reclaman su derecho y su capacidad para crear sus propias alternativas. A raíz de la falta de oportu-

⁷ La introducción de semillas genéticamente modificadas facilita a las empresas transnacionales un control de la producción maicera con el argumento (cuestionado) de aumentar la productividad. Ha desatado gran controversia ya que amenaza el germoplasma originario y plantea problemas colaterales por sus requerimientos de agroquímicos y la evidencia de que provocan alergias en los consumidores. Una evaluación completa de la problemática fue realizada por la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad (Álvarez-Buluya y Nelson [coords.], 2014).

tunidades en los sectores urbano-industriales y los esfuerzos exitosos de estas comunidades para crear alianzas con otros grupos regionales e internacionales, se está experimentando el surgimiento de numerosas propuestas creativas para modelos alternativos de desarrollo, proponiendo distintas estrategias para fortalecer su autonomía económica y política. Es claro que no podemos seguir concibiendo a la sociedad rural como un campesinado comprometido con su asimilación en un proceso único de modernización ligado a la dinámica de la integración económica internacional. Más bien, nos encontramos con mucha gente tratando de consolidar a sus comunidades y forjar alternativas que les otorgarían una mayor autonomía. Ni el campesinado ni la producción maicera están desapareciendo. De hecho, la sociedad rural es más fuerte que nunca, a pesar de las presiones políticas y la dinámica del mercado. La gente está probando nuevas formas para combinar sus diversas actividades, al mismo tiempo que sigue produciendo sus cosechas básicas y protegiendo sus tierras y ecosistemas, está generando nuevas oportunidades productivas. Además, millones de emigrantes también están integrados a las estrategias emergentes de desarrollo de sus comunidades de origen; no sólo están enviando remesas para asegurar buenas cosechas, sino que también están aportando a las economías locales con inversiones en tierras y ganadería, en nuevas construcciones residenciales y en proyectos locales de producción e infraestructura.⁸

De esta riqueza de experiencias, descubrimos un resurgimiento de programas autogestionados para revitalizar el campo, dirigidos a la conservación y rehabilitación de los ecosistemas locales. Al respecto, una mejor revisión de la relación entre la migración y las comunidades de origen muestra que existe un compromiso creciente para forjar estrategias alternativas, reduciendo su vulnerabilidad a intercambios mercantiles leoninos, permitiéndoles prosperar sin subordinarlas al mercado y las relaciones proletarias que han resultado explotadoras, debilitándolas en los últimos lustros. Muchas de estas comunidades están involucradas en proyectos originales que están contrarrestando los efectos económicos y ambientales desfavorables de los procesos normales de la expansión de los mercados, que es el tema de la última parte de este libro. Al presente, hay más de 15 millones de personas en comunidades campesinas e indí-

⁸ El gobierno federal y algunas instancias locales han tratado de aprovechar (o participar en) estos procesos, creando sus propios programas, nombrados dos por uno o tres por uno, en los cuales complementan el dinero de los migrantes con aportaciones oficiales; estos esfuerzos no han tenido los resultados esperados porque se desencantaron rápidamente los migrantes con la corrupción asociada con la contraparte oficial.

genas involucradas activamente en estos proyectos para la construcción de soluciones colectivas para la producción no mercantil o para las producción no capitalista;⁹ y cada una está involucrada en procesos que movilizan sus recursos locales además de otros que provienen de otras regiones, para fines colectivos.

También estamos reconociendo la importancia de considerar y valorar las aportaciones de estas nuevas estrategias rurales, las cuales están contribuyendo a elevar la calidad de vida para los que viven en estas comunidades.¹⁰ Reduciendo la erosión e intensificando la cosecha de la lluvia a través de la reforestación, prácticas de siembra con curvas de nivel y otras técnicas agroecológicas, o proponiendo nuevas maneras para que los grupos urbanos puedan familiarizarse y apoyar a las comunidades rurales como ecoturistas o como compradores de sus productos, introduciendo nuevos productos y, sobre todo, alimentos, y fortaleciendo su capacidad de administrar sus propios ecosistemas y contribuyendo a la gestión de las áreas naturales protegidas, estas comunidades están produciendo lo que se llama “servicios ambientales”, tan importantes en los esfuerzos para revertir el calentamiento global y la desertificación.

Aunque sería un error terrible subestimar la envergadura de la crisis que afecta a todos los mexicanos, y las sociedades rurales en particular, sería igualmente erróneo desatender la importancia de las alternativas que se están construyendo. No importa cómo se evalúe, gran parte de la población rural en México es pobre y no puede esperar las mismas oportunidades que disfruta su población urbana. Los niños nacidos en las áreas rurales sufren de desventajas estructurales. En las circunstancias actuales, no pueden vencer estos obstáculos simplemente con cambiarse a una zona urbana; sus decisiones de aprovechar su herencia cultural, de fortalecer sus comunidades y proteger sus ecosistemas, ofrecen alternativas constructivas que refuerzan su lucha por la autonomía y mejoramiento en su calidad de vida.

⁹ La diferencia entre la producción no mercantil, para el consumo local o el intercambio regional, y la producción no capitalista que involucra a la producción controlada por las comunidades o por cooperativas, está analizada en detalle en otros capítulos de este libro (*e.g.*, 19, 22 y 30).

¹⁰ Es irónico que algunos profesionales en el Banco Mundial también han llegado a esta conclusión, aunque todavía se encuentran en aprietos para demostrar que la institución como tal aceptará sus análisis (Ferranti *et al.* 2005).

19. PRODUCCIÓN DE CARNE DE PUERCO “LITE” COMO ESTRATEGIA DE DESARROLLO SUSTENTABLE DE CAMPESINOS MICHOACANOS¹

con MA. DE LOURDES BARÓN y MARIO ALVIZOURI²

INTRODUCCIÓN

Durante siglos, la crianza de animales de traspasio ha sido un elemento central de una estrategia diversificada de consolidación de la comunidad en las sociedades campesinas de todo el mundo. Las corporaciones transnacionales han atacado sistemáticamente esta estrategia, imponiendo nuevas tecnologías que hacen no competitivas a las unidades familiares de pequeña escala (Suárez y Barkin, 1990). Con la introducción de nuevas razas, diseñadas para aprovechar las ventajas de los sistemas industriales de engorda intensiva, las economías de escala generadas por las nuevas tecnologías de producción de pollo y cerdo desplazaron del mercado a los productores de traspasio. No resultaron capaces de competir con los grandes capitales que estaban incursionando en la industria; aunque los sistemas tradicionales resultaron más eficientes para utilizar los desechos de cocina y esquilmos agrícolas para la engorda, requirieron de mayor tiempo para poder engordar los animales antes de ser sacrificados, aumentando los costos financieros de manera desmesurada.

La economía de traspasio es central en cualquier estrategia de manejo sustentable de recursos regionales por el apoyo que representa para la economía campesina. Ofrece una manera de guardar pequeños ahorros y sobrantes para generar un mecanismo de acumulación simple que

¹ Publicado en *Espiral*, vol. xiv, núm. 26, 2003, pp. 109-134. Narcedalia Hernández Chávez (2002) dirigió y analizó el trabajo en las comunidades. Amelia Tuminaro realizó un análisis del mercado de aguacates como parte del trabajo de campo.

² María de Lourdes Barón León es Doctora en Ciencias Sociales por la Universidad de Guadalajara, Investigadora Nacional Nivel I, 2o. Lugar Premio Estudios Agrarios 1998 de la Procuraduría Agraria (compartido con V. Toledo y P. Alarcón), Profesora Investigadora de la Universidad Autónoma Chapingo desde 1996, con trabajos sobre economía campesina, mercados de trabajo rural, y sustentabilidad con enfoque de género: baron_leon4@yahoo.com.mx. Mario Alvizouri Muñoz (†), médico, fue Director de Investigación del Hospital Civil de Morelia y Profesor en la Facultad de Medicina de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo con estudios en Estados Unidos. Desarrolló una amplia investigación en conejos, seres humanos y cerdos para reducir el colesterol y controlar la arterosclerosis con dietas de aguacate.

sirve a la familia y a la comunidad para financiar gastos mayores o imprevistos, o bien para el autoconsumo. La diversa producción del traspatio siempre ha sido una parte medular de las estrategias de sociedades campesinas para profundizar su capacidad de defender la autosuficiencia, y la cría de especies menores es fundamental para su éxito. Su papel ha sido tan importante que las grandes empresas han visto la necesidad de elaborar estrategias para transformar la lógica de la producción de las especies menores, integrando a sus productores en redes locales de subcontratación para generar sistemas intensivos de producción sujetos al proceso de acumulación capitalista (Ascencio, 1985). En el proceso, las grandes empresas se han esforzado por reducir las posibilidades que tiene la familia para defender su capacidad de autoabasto, tratando de sustituir la lógica de la autosuficiencia por la acumulación centralizada de capital, mediante procesos de elevación de la productividad y de control del proceso de producción, por medio de tecnología e insumos manufacturados.³

En nuestra búsqueda de estrategias para promover el manejo sustentable de recursos entre comunidades rurales era imprescindible enfocar parte de nuestra investigación al traspatio. En la meseta neovolcánica de Michoacán, la sabiduría vernácula advertía el efecto de dejar libres a los cerdos criollos en las huertas de aguacates: estos animales no producían manteca y por lo tanto los carniceros castigaban fuertemente su precio al venderse.⁴ Encontramos que los puercos alimentados con aguacate caído tenían niveles de colesterol sanguíneo más bajos y producían carne más suave y con una composición distinta de grasa. Consideramos factible diseñar modificaciones en las dietas tradicionales de los animales de traspatio para volver rentable su engorda, con el fin de fortalecer la economía regional y el papel de la mujer como una nueva fuerza social. Para instrumentar el proyecto, comenzamos trabajando con un grupo que

³ Esta lógica domina las industrias de puercos y gallinas en los países industrializados. Los granjeros de pequeña escala han visto su integración en los sistemas regionales de cría y engorda como un mecanismo para complementar sus raquíicos ingresos de sus actividades agrícolas. En este proceso se encuentran produciendo mercancías (animales) en condiciones totalmente controladas por las empresas contratistas, quienes dictan las normas para las estructuras y la operación, surten el capital y los insumos, y fijan los precios de los productos finales. Los granjeros asumen gran parte de los riesgos biológicos y económicos, pero encuentran estas actividades como una forma relativamente fácil de tratar de financiar su patrimonio y proteger parte del estilo de vida del granjero independiente que caracteriza a cierto segmento de sus sociedades.

⁴ Hoy hay más conciencia del impacto que los puercos tienen en las huertas y como costumbre ahora recolectan la fruta caída para llevársela a los animales.

pretende aglutinar políticamente a las alrededor de 350 comunidades y más de medio millón de personas en el México centro-occidental, quienes comparten una herencia étnica común (purhépechas o tarascos, como fueron llamados por los conquistadores). En la investigación y el trabajo de comunidad se proponían utilizar los desechos agrícolas locales para bajar los costos en la producción de una carne de calidad (puerco *lite*), por la cual se puede obtener un precio mayor. Como parte del proyecto, encontramos que las comunidades están respondiendo, llevando a cabo una serie de medidas de limpieza ambiental para mejorar las condiciones de vida en la región.

19.1. MANEJO SUSTENTABLE, POBLACIÓN INDÍGENA Y TRADICIÓN

Los estudiosos de la sustentabilidad sostienen críticamente que los modelos de desarrollo crean simultáneamente riqueza para unos cuantos y pobreza para las mayorías. En las áreas rurales, la pobreza obliga a la gente a abandonar las viejas tradiciones de manejo de los ecosistemas que por siglos se habían realizado. Históricamente, este proceso ha debilitado la viabilidad de las comunidades rurales, que desarrollaron sistemas productivos para cubrir sus necesidades básicas con sus ricas tradiciones sociales y culturales. Existe evidencia actualmente de que si las estrategias de manejo rural exitosas permiten asegurar mejores condiciones de vida y mayores ingresos, los campesinos no sólo cuidarán el ambiente, sino que llevarán a cabo aquellas tareas que se requieren para proteger sus escasos recursos naturales, mientras que contribuyen a sanear el ambiente en que habitan, así como el habitado por otros sectores sociales (Barkin, 1998; Toledo, 2000).

Los problemas actuales tienen sus raíces en los patrones de asentamiento creados durante la Colonia (siglos XVI al XIX). Conforme los conquistadores fueron expropiando las mejores tierras, las poblaciones indígenas fueron relegadas a ecosistemas cada vez más marginales. Estas áreas con frecuencia fueron muy diferentes a los lugares en los cuales se establecieron originalmente, y sus poblaciones nativas fueron obligadas a pagar tributo a los conquistadores, cuando no fueron esclavizados. Estos cambios no fueron nuevos, ya que el comercio y la guerra fueron elementos comunes aun en las sociedades más antiguas (Wolf, 1982). Con la independencia, los grupos indígenas siguieron siendo empujados a áreas cada vez más inhóspitas y frágiles, de la misma manera que los esquemas transferían a los campesinos a las selvas lluviosas tropicales.

Las comunidades indígenas continúan bajo una presión creciente. Sus condiciones de vida se han deteriorado conforme sus sistemas de producción han demandado más que tierra; anteriormente, estas comunidades producían cultivos para consumo humano en tierras de temporal, desarrollaban artesanías, criaban animales y cultivaban hortalizas (incluyendo puercos, gallinas, frutas y hierbas) en sus traspatrios. Sin embargo, a medida que iban comerciando con un mercado crecientemente internacionalizado, sufrían por las condiciones leoninas que les impusieron los comerciantes regionales y las tendencias en los mercados mundiales (Prebisch, 1959). Los más afortunados podían proteger su acceso a otros recursos, como un lago o río para pescar, y enfrentar sus necesidades de agua, o un bosque para obtener madera o cazar. Al paso del tiempo, las comunidades indígenas acumularon una rica experiencia en el manejo de estos recursos, desarrollando sistemas sofisticados de manejo que gradualmente se integraron a sus prácticas cotidianas. Continuaron con sus actividades comerciales, entre ellos y con otros, manteniendo y modificando sus tradiciones, adaptándolas a las cambiantes condiciones, fortaleciendo sus comunidades y su identidad, eligiendo proteger los valores y prácticas más apreciados en cada momento histórico.

Este proceso es crucial debido a que incorpora la innovación como una parte permanente de la práctica social, un medio de mantener y aun de fortalecer la tradición.⁵ Algunos ejemplos recientes de cambios en las actividades productivas para proteger una tradición valiosa entre los purhépechas se pueden ilustrar con la fabricación de *huanengos* deshilados y bordados, hechos por las mujeres, para convertirlos en blusas y vestidos de estilos más comerciales para el turismo; todo ello sin necesariamente cambiar su propia vestimenta dentro de las comunidades (Arias, 1997); o el cambio en la manera de fabricar loza de barro, reduciendo su contenido de plomo, con fines comerciales por un grupo de mujeres purhépechas, conservando sus decoraciones tradicionales, y preservando simultáneamente la fabricación tradicional para el comercio local (Absalón, 2000). Este proceso incorpora la innovación como una parte permanente de la práctica social, un medio de mantener y aun de reforzar la tradición.

Las comunidades no solamente han adaptado sus productos, sino que

⁵ Parte importante de este proceso de conservar y fortalecer la tradición consiste en filtrar o descartar aquellas partes de la cultura que resultan obsoletas. Este complejo proceso de reexaminar constantemente estas características de la práctica cultural es una labor fundamental de los grupos rectores de la sociedad, de la cual depende la supervivencia social.

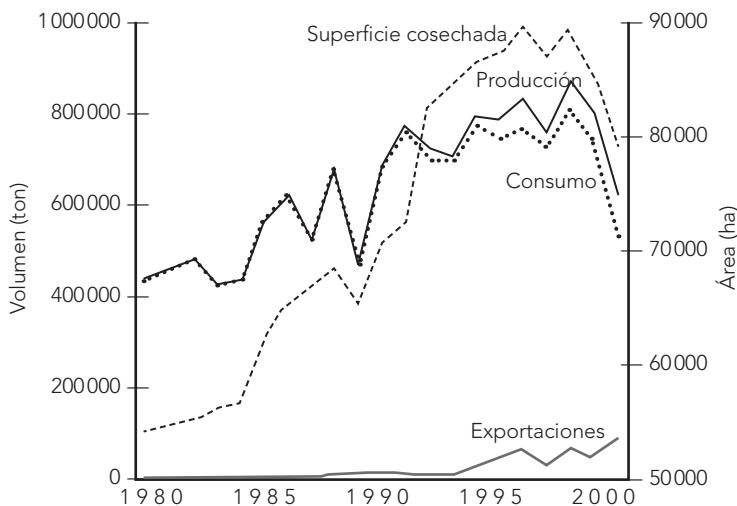
han conservado y modificado los lugares tradicionales de producción para adecuarlos a las nuevas exigencias, tanto por los cambios sociales como por los técnicos. Por ejemplo, una de las comunidades piloto, Caltzontzin, nos ha mostrado que, pese a un cambio de ubicación física de la comunidad en los años cuarenta, debido a una erupción volcánica, y habiendo perdido prácticamente todo lo que la gente poseía, la comunidad restableció la producción de traspato y la adaptó a las nuevas condiciones de clima y espacio (Hernández, 2002).

En la actualidad, los purhépechas, como otros grupos indígenas en todo México, intentan ejercer un mayor control sobre sus recursos naturales, así como sobre su vida económica y política. Conforme adquieren una mayor capacidad de autogobierno, sus organizaciones sociales y políticas han iniciado el desarrollo de estrategias para instrumentar sus propias demandas por una autonomía local y una diversificación productiva (Nación Purhépecha, 1993). La innovación en la crianza de puercos reportada en este documento ofrece un ejemplo de un medio de instrumentar cambios para mantener y fortalecer la tradición.

19.2. PRODUCCIÓN Y DESPERDICIO DE AGUACATE

Los aguacates son originarios de México, y nuestro país es uno de los mayores productores del mundo. El área de mayor producción de aguacate en México es justamente la Meseta Tarasca, situada en el estado de Michoacán, en donde se produce cerca del 80% del total nacional [2000]. La variedad comercial dominante, el aguacate Hass, es un híbrido que fue desarrollado en Estados Unidos a partir de variedades mexicanas y centroamericanas, e introducido a la región a finales de los años cincuenta; desde entonces ha crecido de manera importante. Esta variedad de aguacate es sabrosa, carnosa, de hueso pequeño, de cáscara gruesa que facilita su transporte y comercialización (Gallegos, 1983; Solares, 1983). Su alto contenido de aceite tiene una composición de ácidos grasos que le confiere las cualidades que transforman el proceso metabólico en los cerdos y los seres humanos (Alvizouri *et al.*, 1992). Entre 1995 y 2000, se produjeron anualmente entre 700 000 y 1 000 000 de toneladas de esta fruta (gráfica 19.1). Las exportaciones mexicanas de aguacate aportan cerca de 45% de las exportaciones mundiales de aguacate; sin embargo, éstas representan menos de 10% de la producción mexicana de aguacate. Los mexicanos consumimos casi ocho veces más de aguacate per cápita, en comparación con los consumidores del resto del mundo.

GRÁFICA 19.1. AGUACATE: PRODUCCIÓN Y EXPORTACIONES 1980-2000



FUENTE: Centro de Estadística Agrícola, Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural y Alimentación. Base electrónica de datos.

Sin embargo, no todos los productores pueden aprovechar la bonanza exportadora. Aunque los precios de exportación son sustancialmente mayores que los precios locales, los riesgos financieros y los estrictos estándares de control de calidad de exportación excluyen a muchos, especialmente a los de las huertas más pequeñas. Estas huertas están en un rango de 1 a 5 ha, en contraste con las comerciales, que llegan a tener más de 500 ha. Existen alrededor de 6000 productores de aguacate en cerca de 90 000 ha (Stanford, 1999). Aunque los árboles de aguacate sólo producen fruta durante algunos meses, la variedad de altitudes y microclimas de la región permiten una cosecha de diez u once meses al año. Los calendarios de cosecha, procesamiento y envío son prácticamente permanentes, conforme los productores han aprendido a ajustar sus cosechas y relocatear la producción de manera que se asegure un flujo continuo de fruta. Partiendo de que la mayor parte de la producción local es para el mercado interno, existen considerables desequilibrios entre la demanda y la oferta. Como resultado, hay volúmenes importantes de la fruta que nunca llegan al mercado. En las empacadoras, donde la fruta se prepara para los mercados locales y de exportación, grandes volúmenes son rechazados o desperdiciados. Históricamente, mucha de esta fruta se dejaba en los campos, pero con las regulaciones sanitarias cada vez más estrictas, esto ya no es posible para los productores intere-

sados en el lucrativo mercado de exportación. Más recientemente, entonces, las empacadoras han optado por desechar la fruta que no puede venderse en las barrancas cercanas; creando nuevos problemas ambientales. Otras agroindustrias, que utilizan la fruta de baja calidad para guacamole y aceite, para propósitos industriales, medicinales y cosméticos, también generan importantes volúmenes de desperdicios. Calculamos que más de 10% de la producción de aguacate podría utilizarse para alimentar animales.

La producción de aguacate ha traído un incremento importante en el uso de agua y agroquímicos que compiten con los bosques tradicionales de pino de esta región. Los impactos sobre el nivel freático han provocado problemas para algunas comunidades, incluyendo a San Lorenzo, una de las localidades que habíamos seleccionado para el estudio piloto. En respuesta a las exhortaciones para hacer un uso más cuidadoso del recurso y para elevar las recargas de los acuíferos, algunas de las grandes huertas están introduciendo riego por goteo para reducir sus demandas del líquido. Pero, la expansión productiva convirtió a la tala forestal clandestina en un serio problema.

La introducción de un uso alternativo para los aguacates de desecho en la engorda de puercos pretende ofrecer respuestas a varios de estos problemas ambientales. Se espera que fortalezca la adopción de actividades complementarias de manejo del ecosistema y otros cambios en las prácticas ambientales de la comunidad que contribuirán al proceso de desarrollo de un programa sustentable de manejo de recursos en la región. Un ejemplo inmediato de los beneficios colaterales inesperados que encontramos por la necesidad de mayores volúmenes de forrajes para combinar con los aguacates suministrados a los puercos, es una intensificación en el cultivo de la milpa, para generar más grano y los forrajes asociados que son aptos para los animales. Otro ejemplo es la iniciativa de instalar retretes con tecnología compostera que trae un sinnúmero de beneficios indirectos (Farley, 1997).

19.3. LOS EFECTOS MEDICINALES DEL AGUACATE EN LAS DIETAS PARA HUMANOS Y PUERCOS

Este proyecto tiene sus orígenes en la observación del efecto de la práctica vernácula de soltar algunos puercos para su engorda en las huertas aguacateras. Se observó que la grasa de estos animales mantenía una calidad líquida; también se detectó que la fruta tenía una estructura

química similar a la contenida por el aceite de oliva, con alto contenido de ácidos grasos mono y poliinsaturados. Aunque nunca se había estudiado, la respuesta metabólica en los puercos era de conocimiento popular, ya que su carne era despreciada por los carníceros que imponían un castigo en su precio de compra por la falta de manteca sólida, un subproducto muy cotizado por sus usos tradicionales. Con base en estudios del aguacate, se inició un proyecto clínico en el Hospital Civil de Morelia para tratar pacientes con hipercolesterolemia basada en ejercicio y una dieta rica en aguacate. La hipótesis fue ampliamente comprobada en la práctica clínica, encontrando que los aguacates podrían convertirse en parte medular de un programa de tratamiento de este problema de salud (Alvizouri, *et al.*, 1992).

Esta experiencia halagüeña sugirió la posibilidad de inducir efectos similares en cerdos para apoyar una estrategia de manejo sustentable de recursos en la región aguacatera en beneficio del pueblo purhépecha. Aunque son los habitantes milenarios de la región y productores, los indígenas habían permanecido marginados por la forma de manejar el auge comercial de la fruta, que quedó en manos de un grupo de neolatifundistas (Stavenhagen, 1968). Se proponía fortalecer la economía regional, utilizando estos conocimientos vernáculos para impulsar una nueva actividad remunerativa en la región indígena. Después de especificar una dieta más precisa para los puercos para la engorda, se pretendía introducir animales que serían alimentados con una combinación de fruta y forrajes que permitiera a las familias locales utilizar los aguacates de desecho y otros productos locales como pastura y la caña del maíz como sustitutos para los granos que se solían administrar a los animales. En una primera etapa, encontramos que los puercos alimentados de esta manera experimentaron cambios sustanciales en su metabolismo y en el contenido de grasa de su carne. Una segunda fase experimental⁶ fue requerida para determinar las dietas óptimas, el tiempo mínimo de sometimiento a la dieta y explorar los mejores medios para introducir estos cambios en las comunidades.

Con este conocimiento y la evidencia científica de que la carne contiene menos colesterol que el puerco comercial, fue claro que se podría ofrecer un producto para un segmento creciente del mercado regional, que busca productos alimenticios más saludables. Con una estrategia de comercialización adecuada, esta carne podría venderse con un sobre-

⁶ En esta etapa, resultó muy importante la colaboración de diversos académicos de la Facultad de Veterinaria de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, así como del Hospital Civil de Morelia.

cio que la hiciera atractiva como actividad complementaria dentro de la economía campesina regional.⁷

19.4. CRIANZA DE PUERCOS: LA CREACIÓN DE TRADICIONES PURHÉPECHAS

La crianza de puercos fue introducida en la región por los conquistadores españoles durante el siglo XVI. Los purhépechas fueron obligados a iniciar la realización de esta actividad en sus comunidades como parte del tributo que pagaban a los gobernantes coloniales. Los puercos eran enviados para alimentar a los esclavos de las minas y a los mismos españoles.

Aunque no hay una historia precisa sobre la introducción del puerco en las dietas locales, el puerco se convirtió en una parte importante de la cocina regional mexicana, y actualmente Michoacán es renombrado por su pozole y sus carmitas, platillos tradicionalmente reservados para las fiestas, especialmente en Navidad y en la Candelaria, así como para la época de cosecha del maíz. La manteca también es importante, ya que se usa para cocinar mole y corundas, otros platillos ceremoniales que actualmente se comen con frecuencia. Sin embargo, hay platillos que se preparan sin manteca, como antes de la Colonia, haciendo referencia a las tradiciones culinarias originales (prehispánicas): en sus fiestas, por ejemplo, ellos distinguen muy bien, y prefieren las corundas tradicionales (sin manteca) de las corundas con manteca, generalmente rellenas, como los tamales, y realizadas para el consumo de los turich, o personas provenientes de fuera de la comunidad; si bien han incorporado la manteca y carne de cerdo a otros guisos ceremoniales, como el mole que se ofrece en la cosecha del maíz, el pozole que se come en navidad, etcétera.

Ahora, la crianza de los puercos sigue siendo una parte importante en la organización social. En aquellas comunidades en donde los líderes tradicionales todavía juegan un papel importante en la organización social y política, como San Lorenzo, la familia normalmente ofrece carne de puerco como parte importante de la comida principal durante los días que dura la cosecha de maíz. La recolecta es una actividad en la que colaboran todos los miembros de la comunidad. El evento se vuelve festivo, se ofrece comida especial y la distribución de un costal de maíz como

⁷ Los resultados de este trabajo están publicados en todo su detalle en Barkin, Barón y Alvizouri (2003).

símbolo de gratitud a cada uno de los participantes, ya que los pagos en dinero no son comunes en esta cosecha.

La continuidad e importancia de estas tradiciones entre los purhépechas es notable. Desde 1940, han existido diversos intentos de gobiernos sucesivos para integrar a los indígenas a la cultura nacional, erosionando algunas tradiciones. No obstante, en Michoacán, gran parte de la población nativa conserva exitosamente lo que considera importante, como su lengua materna y el fogón, aun cuando éste coexiste con una estufa de gas, ya que tiene un sentido simbólico e importancia para ciertos usos culinarios. También persisten y aun prosperan los mercados tradicionales, las actividades productivas, la ropa (especialmente entre las mujeres, y con mayor importancia en las fiestas y como atuendo cotidiano de las mujeres mayores) y los productos artesanales útiles en los hogares locales y como atractivos *souvenirs* para los turistas.⁸ Junto con los productos, estas tradiciones y las estructuras de gobierno local heredadas han sobrevivido en grados diversos en las distintas comunidades.

A pesar de haber perdido su orientación comercial, las familias comúnmente engordan uno o dos puercos por año, algunas veces incluyendo una marrana para producir los lechones. Sin embargo, con la introducción de nuevas razas de puercos a fines de los años sesenta, su sistema de producción cambió rápidamente, afectando a los michoacanos y a todo el país. Las nuevas líneas de animales son alimentadas con granos, normalmente adicionados con suplementos nutricionales, hormonas y antibióticos, como medida profiláctica. La agroindustria construyó granjas intensivas de gran escala, donde los puercos se engordaron bajo un régimen muy estricto para minimizar el tiempo requerido y maximizar las tasas de conversión de alimentos en carne, medida en peso vivo. Un nuevo cultivo, el sorgo, se introdujo en México como base de esta dieta, debido a sus altos rendimientos físicos, rápida mecanización, bajo precio y falta de control gubernamental (DeWalt, 1985). Mientras los precios del sorgo fueron bajos, esta nueva tecnología permitió que el precio de la carne bajara, y que los productores en pequeña escala pudieran continuar engordando puercos, remplazando sus animales de razas criollas por otros de nuevas razas. Sin embargo, cuando el precio de este grano subió, junto con otros insumos,

⁸ No es posible menospreciar la importancia del turismo nacional e internacional; algunas organizaciones de afuera patrocinan a los artesanos para apoyar esta faceta de la economía y de la sociedad tradicional. Aun cuando se nota una clara tendencia de modificar los productos de acuerdo con las modas y las preferencias de los clientes, el proceso productivo y la organización social del cual son una parte fundamental se ven fortalecidos por la vitalidad de estas actividades. Ahora son elementos importantes de las complejas estrategias que conforman para su supervivencia y la construcción de su autonomía.

incluyendo el costo de los lechones, la productividad de la tecnología de engorda ha hecho que los pequeños productores salgan del mercado, ya que no han podido competir con las ventajas del sistema fabril. Las economías de escala contribuyeron a una baja sustancial en los costos de producción (Suárez y Barkin, 1990), pero no son accesibles para el pequeño productor de traspatio.

Estas transformaciones asestaron el golpe final a la crianza de cerdos de traspatio con propósitos de venta. En el proceso, la misma economía campesina fue debilitada, ya que otra fuente de ingresos desaparecía, junto con algunas de las sinergias sociales y ambientales. En las pequeñas comunidades rurales del país, las familias fueron obligadas a buscar nuevas fuentes de ingreso, conforme la producción familiar diversificada se convertía en una estrategia de sobrevivencia insostenible. Los trabajos urbanos de construcción y servicios, y el trabajo migratorio para participar en la agricultura de otros lugares del país fueron alternativas atractivas, junto con la búsqueda de trabajo en Estados Unidos.

Esta nueva estrategia se hizo particularmente evidente en una de las comunidades donde se realizaron los estudios de caso. Caltzontzin es un nuevo pueblo creado por la gente desplazada de un pueblo que había sido reubicado en la Colonia y posteriormente destruido como resultado de la erupción del volcán Paricutín, en 1943. Las instituciones comunitarias y el liderazgo tradicionales estuvieron bajo una gran presión, y la gente rápidamente hizo la transición hacia una economía semiurbanizada, donde la agricultura y la producción de ganado fueron relegadas a un estatus marginal. Aquí, la urgente necesidad de nuevas fuentes de ingreso indujo a la gente a convertirse en maestros y buscar cualquier empleo disponible. Sin embargo, mucha gente en el pueblo nuevo reintrodujo los sistemas tradicionales de cultivo y producción de traspatio, y todavía hoy han decidido participar en este proyecto con los desperdicios del aguacate de las empacadoras cercanas.

En otras comunidades que no han sido desplazadas, y más lejanas de los ámbitos urbanos, como San Lorenzo, todavía se observan formas tradicionales de crianza en cuanto a razas criollas; alimentación basada en esquilmos agrícolas, maíz y desperdicios; el lugar en que se engordan y sus formas de matanza. Sin embargo, sus economías debilitadas han buscado estrategias de diversificación de actividades, que incluyen la migración (en el país e internacional) de algunos de sus miembros, y la intensificación en el uso de productos del bosque, patente en los más de 40 talleres y aserraderos que usan la madera de su porción de bosque (Hernández Chávez, 2002).

Conforme a las políticas nacionales para acelerar el ritmo de moderni-

zación, basadas en la integración económica internacional, fueron incorporándose a la realidad nacional, los pilares de la economía campesina fueron dramáticamente debilitados durante el medio siglo precedente, imponiendo grandes presiones sobre sus organizaciones comunales y su estructura social. A todo lo largo y ancho del país, la economía de los pueblos fue empobrecida y la creciente brecha entre lo urbano y lo rural fue produciendo una profunda transformación en todas las dimensiones de la vida en México (Barkin, 1998; Rubio, 2001).

19.5. UNA ESTRATEGIA ALTERNATIVA PARA LA ECONOMÍA RURAL

Para mediados de los años noventa, era claro que la estrategia nacional de la integración regional era incapaz de ofrecer oportunidades atractivas para mucha gente pobre en México. En todo el país, estos grupos sociales estuvieron buscando activamente alternativas que les permitieran preservar muchas de las estructuras de su organización tradicional y la calidad de vida que los pequeños pueblos ofrecen. El equipo interdisciplinario identificó las cualidades metabólicas del aguacate como elemento coadyuvante para enfrentar algunos de los retos para crear o aprovechar nuevas oportunidades del mercado para la diversificación productiva. Encontramos una decidida respuesta favorable a las estrategias propuestas entre las comunidades purhépechas, comprometidas con revertir el debilitamiento de su economía y de su sentido de identidad étnica (Barón y Barkin, 2001).

Esta búsqueda de alternativas para preservar la comunidad rural se hizo tan poderosa que fue transformada en un movimiento social nuevo (Barkin, 1998). Asumió muchas formas, desde el dramático levantamiento indígena de los zapatistas en enero de 1994, hasta los esfuerzos menos espectaculares pero de amplia participación de los campesinos, para asumir un mayor control de sus economías locales, quienes iniciaron sus propias empresas y desarrollaron nuevos mecanismos para fortalecer a la economía rural. Esta iniciativa fue particularmente importante en áreas con gran población indígena, como la región purhépecha michoacana, donde una organización regional emergió para tratar de instrumentar nuevos enfoques de mejoramiento económico y consolidación institucional.

En esta coyuntura, la posibilidad de introducir una innovación productiva que fortaleciera un pilar tradicional de la economía familiar —el corral de traspatio— pareció particularmente promisoria. Los puercos todavía seguían siendo importantes en la economía local, tanto por su importancia en la cosecha de maíz y vida ceremonial, como por la faci-

lidad con la que podían criarse y venderse en tiempos de necesidad. A pesar de representar una contribución marginal en términos de ingresos, muchas familias todavía los engordaban como fuente de carne o como parte de una compleja estrategia de diversificación que siempre ha sido central en la lógica de la comunidad campesina.

Nos acercamos a los líderes locales y a miembros de las comunidades con el propósito de introducir modificaciones en la dieta de los puercos engordados en los corrales de traspatio. Ofrecimos una estrategia que bajaría los costos mientras se producía un producto de mayor calidad que podía obtener un sobreprecio en el mercado. El propósito estuvo diseñado para mejorar la economía local, reciclando productos de desecho y haciendo rentables las actividades tradicionales. Enfocándonos en la engorda de puercos, una actividad que se había hecho central en la organización comunal, esperábamos que la propuesta contribuiría a fortalecer las culturas locales. Partiendo de que las actividades de traspatio eran del dominio de la mujer, también esperábamos que contribuyeran a incrementar su participación en la gobernanza comunal y la vida económica. Más aún, debido a que propusimos que los puercos siguieran engordándose dentro de la unidad familiar, con el propósito de reducir los posibles impactos ambientales adversos, la actividad estaría muy descentralizada y requeriría amplia participación familiar, mientras se eliminaba la contaminación. A pesar de que la propuesta era aparentemente atractiva y simple, esperábamos una resistencia significativa por los importantes cambios que implica.

19.6. CONSTRUYENDO LAS BASES DE LA SUSTENTABILIDAD: LA INTRODUCCIÓN Y ADAPTACIÓN DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS

El esfuerzo inicial por desarrollar dietas óptimas para engordar puercos con bajos niveles de colesterol confirmó la experiencia en la región. El entusiasmo por la nueva tecnología entre nuestros interlocutores excedió nuestras expectativas. Aunque el proyecto todavía se encuentra en sus etapas iniciales, es claro que la innovación se acepta y que el obstáculo mayor para su instrumentación plena será la necesidad que la gente de la región tenga de estar al pendiente de la calidad de las dietas y las condiciones en que los puercos son engordados en los chiqueros de los traspatios.⁹

⁹ La comercialización parece no presentar mayores obstáculos, ya que las cualidades de la carne no están en cuestión y la aceptación del producto con un sobreprecio parece bastante extendida.

La crianza tradicional de los puercos todavía es una parte importante de las comunidades purhépechas como San Lorenzo y está siendo reintroducida en pueblos más aculturados como Caltzontzin. Existen algunas personas bien capacitadas (incluyendo veterinarios) para promover este crecimiento y la comunidad parece estar lista para recibir esta innovación, precisamente porque permite a sus pobladores retener el control sobre el proceso productivo. En retrospectiva, la innovación propuesta resultó fácil de instrumentar debido a un diseño que cae dentro de la estructura existente de la vida del pueblo y de su organización cultural y política. Aunque se basa en una actividad en declinación, los cambios propuestos son claros para todos los participantes y su lógica comercial es atractiva, especialmente dentro de la precaria economía rural de la actualidad. También influyó la creciente presión para que los hombres migren, debido al imperativo de buscar trabajo donde sea, para que el proyecto fuera recibido con entusiasmo. La crianza de animales es una actividad que las mujeres históricamente han manejado y ellas han recibido la propuesta con gran interés; la nueva actividad contribuiría a mejorar las condiciones sanitarias para la familia, ya que crea una oportunidad para abrir una discusión sobre asuntos ambientales, como la calidad del agua, la instalación de baños para la familia, la disposición de las excretas porcinas y el tratamiento de las aguas residuales.

Conforme la producción de “puerco bajo en grasa” fue de sus fases experimentales a la instrumentación, encontramos una demanda creciente entre los pobladores para participar en la nueva industria. Desde nuestra perspectiva, la del manejo sustentable de recursos y la participación popular, otro asunto atractivo del programa es su escala limitada: el volumen de producción está inherentemente restringido por la oferta de aguacates de desecho y los límites del traspatio; no podría ser rentable utilizar fruta de calidad comercial para los puercos. Incluso, hemos encontrado que los puercos consumen el aguacate aun cuando esté iniciando su proceso de descomposición. Así, la nueva tecnología reducía los problemas de salud humana y ambiental comúnmente asociados con la producción porcina en gran escala. Anticipamos que habría suficiente producción que amerite la construcción de un rastro pequeño, certificado, para el sacrificio de los animales y el procesamiento de la carne, operado por la organización de las comunidades purhépechas, proporcionando una oportunidad de crear empleos e ingresos para la organización, mientras que eleve la calidad de la carne disponible en la región y en los nuevos mercados.

20. MANEJO FORESTAL COMUNITARIO: ¿PUEDE LA ECONOMÍA VERDE CONTRIBUIR A LA JUSTICIA AMBIENTAL?¹

con MARIO FUENTE²

México se encuentra inmerso en un profundo debate entre los distintos actores que participan en las diversas estrategias de apropiación de los bosques. Las fuerzas internacionales están promoviendo activamente políticas para maximizar el secuestro de los gases de efecto invernadero (GEI) a través de una variedad de programas, pero más recientemente reunidos bajo la rúbrica de la iniciativa de la ONU para la Reducción de Emisiones por Deforestación y Degrado de los bosques “más gobernanza” en los países en desarrollo (REDD+). El gobierno nacional ha sido cada vez más aquiescente en el apoyo a las propuestas nacionales e internacionales del sector privado para aumentar los beneficios económicos que se pueden extraer de los bosques existentes y la creación de nuevas plantaciones, y al mismo tiempo tratar de modificar los planes de gestión comunitaria para calificar en la participación de la financiación disponible de los programas internacionales. En contraste, muchas comunidades rurales participan activamente en programas diversificados y complejos para equilibrar las demandas de generación de oportunidades productivas comprometidas con el equilibrio ecológico y la condición de bienestar material y social de sus miembros. Cada uno de estos actores se está moviendo hacia adelante con diferentes enfoques, a menudo en direcciones opuestas, que están generando conflictos sociales en varios niveles. Estos conflictos están contribuyendo a los problemas políticos aparentemente irresolubles porque el país carece de canales institucionales eficaces para la negociación de conflictos ambientales y económicos como los que surgen en México. En este artículo se expone la forma del nexo institucional en el que esta situación se reproduce a sí misma, con especial énfasis en las contribuciones que ofrece la silvicultura comunitaria.

¹ Publicado en inglés en *Natural Resources Forum*, vol. 37 (3), 2013, pp. 200-220. Traducción de Mario Fuente.

² Mario Fuente Carrasco es Profesor-Investigador Titular en el Instituto de Estudios Ambientales de la Universidad de la Sierra Juárez en Oaxaca. Es Doctor en Estudios de Sustentabilidad de la Universidad de Tlaxcala y biólogo de la Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco. Ha enfocado sus investigaciones al tema de la sustentabilidad desde una perspectiva de la justicia ambiental. Es Investigador Nacional nivel I: fuente@unsjj.edu.mx.

Nuestro enfoque en la silvicultura comunitaria en México es particularmente notable debido a su importancia para la participación local en la conservación de los recursos naturales y la utilización y el amplio reconocimiento de esta experiencia como un modelo sobresaliente de la toma de decisiones colectiva y la gestión eficaz de los recursos de propiedad común (Antinori y Rausser, 2007). Los recursos forestales de México son sustanciales, representan más de una cuarta parte de la superficie del país, unos 55 millones de hectáreas. Más de una cuarta parte de esta área está actualmente controlada por las comunidades, como resultado de un proceso largo y a veces polémico para reclamar sus derechos sobre las tierras que fueron derogados por el gobierno federal cuando se distribuyeron como parte del programa de reforma agraria en las décadas siguientes a la promulgación de la constitución posrevolucionaria de 1917.³ Esto es generalmente reconocido, ya que las comunidades fueron capaces de recuperar el control de sus tierras e instrumentar cambios dramáticos que han contribuido a mejoras sustanciales en la gestión de los ecosistemas, contribuyendo esto a mejoras sustanciales en el sistema de salud forestal.

La considerable literatura que ha surgido en los últimos años se refiere a la diferente lógica implícita en el proceso de toma de decisiones de las comunidades que ha contribuido a los cambios notables en los sistemas forestales durante el último cuarto de siglo. En la discusión que sigue se muestra que los cambios recientes son el resultado de una profunda diferencia en el enfoque conceptual surgido del proceso de gestión de la comunidad, en contraste con los procesos de toma de decisiones de los actores de orientación comercial, que dominaron la industria forestal antes de los cambios institucionales que fueron tan importantes durante el último cuarto del siglo xx.

Si la política de gestión forestal ha de ser eficaz para enfrentar los desafíos del cambio climático y contribuir al desarrollo sostenible, tendría que tomar en cuenta estas profundas diferencias, reconociendo la capacidad de las comunidades para poner en marcha sus propios programas multidimensionales de manejo forestal para conservar sus ecosistemas, mientras forja sistemas productivos que permitan a sus miembros disfrutar de las mejoras en su calidad de vida y la producción de bienes para la satisfacción de necesidades básicas de los otros grupos de la sociedad. Las lógicas profundamente contrastantes derivan de dos diferencias centrales que conducen a diferentes resultados en la justicia ambiental: el

³ Para una breve revisión histórica y las varias interpretaciones de esta larga, sangrienta y ecocida lucha por recobrar el control sobre los bosques, véase Hinojosa (1958), Cárdenas (1967), Mendoza (1976), González (1981), Simonian (1995), Klooster (2003).

horizonte de tiempo que cada uno emplea en la evaluación de opciones y el papel de los factores no económicos y sobre todo no monetarios en la elaboración de sus programas de producción. Al formular políticas para promover una gestión sostenible, se descubre que cuestiones de justicia social requieren distintos enfoques cuando se trata de la propiedad privada o la social.

20.1. ¿CÓMO PUEDE EL MANEJO FORESTAL COMUNITARIO CONTRIBUIR A LA JUSTICIA AMBIENTAL?

Las políticas para promover el desarrollo sostenible de los bosques con justicia ambiental requieren que los esfuerzos para facilitar la mitigación de y adaptación al cambio climático alienten a las empresas comunitarias a convertirse en participantes activos, basados en tradiciones y visiones de sus regiones locales. Como resultado, el énfasis actual en la “economía verde” (EV) podría ser visto como un problema de gobernabilidad por las empresas comerciales o agencias públicas cercanas a los centros de decisión; en cambio, sostenemos que una política forestal más eficaz debe basarse en un enfoque más matizado que considere la diversidad como un producto deseable adicional. En esta sección, hacemos hincapié en la importancia cultural del territorio y exploramos cómo las comunidades contribuyen al proceso de promoción de la justicia ambiental.

En todo el mundo las comunidades rurales indígenas que habitan en los ecosistemas forestales, con alrededor de 60 millones de personas (Stavenhagen, 2008: 142), han demostrado ser eficaces para asegurar la conservación y al mismo tiempo mejorar su propia calidad de vida. Esto es particularmente cierto en México, donde un gran número de personas y áreas forestales han dedicado mucho tiempo a procesos complejos para defender sus derechos e implantar diferentes sistemas de organización productiva (sección II). México ocupa el primer lugar mundial en el número de empresas comunales que se gestionan colectivamente (Bray *et al.*, 2007); muchas se encuentran en el estado de Oaxaca, la zona en la que nos centraremos para un estudio de caso.

Alrededor de 80% de los bosques del país se distribuyen entre 8500 comunidades con estructuras de tenencia ejidal y comunal, donde viven cerca de 12 millones de personas.⁴ De esta superficie, más de la mitad se

⁴ En las estadísticas del Censo de 2010 se muestran sólo 6 millones de personas que hablan alguna lengua indígena. Si el criterio se amplía para incluir a los campesinos con

encuentra en los territorios indígenas, reflejando 500 años de la expansión colonial y poscolonial. En estas áreas existe una fuerte coincidencia de la diversidad étnica y biológica, tanto natural como cultivada, como resultado de siglos de ocupación de los pueblos cuyas prácticas culturales continuarán protegiendo los ecosistemas por su contribución a su supervivencia cultural y el bienestar social (Boege, 2008). La interrelación entre lo natural y lo social es evidente en una serie de indicadores importantes: la diversidad biológica; relaciones integradas de las sociedades con sus ecosistemas; la conservación y la protección de las cuencas hidrográficas y los diversos procesos de mantenimiento de las fuentes de agua; los centros de origen de la domesticación de muchas especies vegetales que son actualmente de gran importancia; y su importancia como centros para la diversificación y la experimentación de plantas domesticadas —sus recursos fitogenéticos—. El estudio definitivo de la diversidad biológica y cultural señala que estas regiones son el hogar de más de 15 000 de las 29 000 especies recolectadas en el país (Boege, 2008). El recuento de las experiencias personales de los grupos campesinos de todo el país es testimonio de la importancia ecológica de la memoria biocultural que las comunidades indígenas continúan salvaguardando (Toledo y Barrera, 2008).

Muchas de las comunidades consideran que esta diversidad cultural fortalece su capacidad de mantener los programas de manejo equilibrado, asegurando el bienestar social y la conservación. Las discusiones actuales sugieren la ansiedad con que este enfoque se ve amenazado por los esfuerzos para aplicar el paquete de políticas de la ev. El Estado mexicano está jugando un papel crucial en la promoción de la comercialización, al tiempo que reconoce el potencial de las organizaciones comunitarias. Existe un acuerdo generalizado de que las características únicas de las organizaciones sociales son medios eficaces y eficientes de avanzar por una senda de desarrollo sostenible, de forma similar a los propuestos por el Panel Intergubernamental de Cambio Climático y el Foro Intergubernamental sobre Bosques de las Naciones Unidas.

a] Uso multifuncional, en lugar de monofuncional, para la apropiación de los ecosistemas; es decir, además de las responsabilidades ampliamente reconocidas para realizar actividades relacionadas con la conservación y la restauración, un modelo diversificado implicaría la generación de numerosos usos diferentes no extractivos, y valores tales como el enriquecimiento cultural, así como medidas para descubrir y

algún patrimonio mesoamericano, tenemos la cifra expuesta en el texto. El Congreso Nacional Indígena tiene representados a 15 millones; Toledo (2014) reporta más de 20 millones.

explotar los usos de los productos forestales no maderables (Alcanda, 2007). Esta concepción de la ordenación de los bosques incluye diversas funciones de los ecosistemas, tales como los de la regulación (de los gases, el clima, el agua, el suelo, la polinización), hábitat (el refugio y el cuidado), producción (alimentos, materias primas, recursos genéticos, medicinas), y la información (estética, recreativa, científica, cultural). La heterogeneidad topográfica y el crecimiento de áreas boscosas en áreas indígenas generan mayores problemas para la planificación espacial y temporal, ya que deben ser considerados como parte de la tarea de ordenamiento territorial.

b] La ejecución de los procesos para aumentar la diversidad biológica mediante el fomento de la utilización de un conocimiento detallado de las áreas, para identificar las medidas de protección. En lugar de los inventarios, el énfasis en el aumento de la resiliencia de los ecosistemas para mejorar la vitalidad de una región es primordial, en sustitución de un enfoque en la conservación o un programa basado en el valor de los “servicios”. Esto implica la generación de una rica interacción metabólica entre las personas y sus entornos (González de León y Toledo, 2011).

c] La incorporación de criterios éticos se basa en una serie de referentes socioculturales y materiales, derivados de mecanismos para la distribución de los ingresos, para aumentar el bienestar regional y la participación de los miembros de la comunidad en un amplio espectro de actividades, que van desde lo productivo y de subsistencia a lo recreativo y cultural. El enfoque igualitario a la mejora de la calidad de vida no sólo incluye la generación de nuevos conocimientos al tiempo que refuerza la tradición, sino también la consideración de lo sagrado y el enriquecimiento de su patrimonio biocultural. En un plano político se trata de la insistencia inquebrantable en la democracia participativa (directa) en todos los procesos de toma de decisiones de gestión comunitaria.

20.2. EL FONDO DE DESARROLLO FORESTAL COMUNITARIO EN MÉXICO

El actual movimiento de la silvicultura comunitaria en México tiene sus raíces en la Revolución mexicana (1910 a 1917). Durante todo el siglo xx, las comunidades se sumergieron en una relación intensa y conflictiva con el Estado y el mercado. La reforma agraria (artículo 27 de la Constitución de 1917) establece una propuesta radical para la propiedad de redistribución a través de dos vías: por un lado, la creación de extensiones limitadas de la propiedad privada y, por otro, la distribución de

control social que, a su vez, creó dos categorías de tenencia: propiedad comunal y un sistema ejidal. La organización comunal iba a ser una forma de restitución de las tierras pertenecientes a muchas personas de la República de Indios; incluso hoy en día, una parte significativa de las tierras comunales en México está en manos de las comunidades con raíces en las culturas mesoamericanas. En contraste, el ejido era una forma jurídica original que implicó una superficie mucho más grande, prometiendo la perspectiva de prosperidad para los grupos campesinos sin pretensiones de tierras heredadas; en otras palabras, el Estado otorgó tierras como un acto de justicia social, una de las exigencias básicas de la lucha revolucionaria. El manejo forestal comunitario de hoy tiene sus raíces en el sistema de tenencia social (colectiva) de la tierra.

Otro proceso significativo en la evolución del manejo forestal se da durante el proceso conocido como el modelo de *industrialización por sustitución de importaciones*. Dada la necesidad del Estado mexicano por reactivar la producción de celulosa, formula una reforma en la ley forestal de 1940 en la que se introdujo un nuevo mecanismo para activar la extracción forestal en territorios de propiedad social: las concesiones forestales a través de empresas privadas llamadas Unidad Industrial de Explotación Forestal. Con este mecanismo se extrajeron grandes cantidades de recursos forestales demandados por el modelo de desarrollo, pero a la vez capitalizó al campo a través de la construcción de caminos y diversos aserraderos, así como la capacitación a los campesinos para involucrarlos en tareas de extracción de madera y la creación de mercados locales y regionales. Estas acciones modificaron de manera significativa la relación mantenida entre las sociedades rurales y sus bosques. Las concesiones fueron otorgadas tanto a empresas privadas como paraestatales. Durante este periodo se estableció un pacto de gobernabilidad entre el estado y el campo mexicano, en el cual el sector rural era un componente básico para el incipiente desarrollo urbano e industrial. El campo proporcionaba no sólo mano de obra, sino que aportaba alimentos a bajo precio. Las instituciones gubernamentales favorecían, a su vez, determinadas prebendas para mantener esta estabilidad socioeconómica a través de diversos programas gubernamentales dirigidos al campo. De esta forma, en las comunidades forestales era compatible social y económicamente la extracción de madera y la producción agrícola. En este periodo México se constituyó en una de las pocas naciones que alcanzaron ciertos niveles de autosuficiencia alimentaria.

El deterioro del modelo de desarrollo basado en la industrialización por sustitución de importaciones llegó a su máxima expresión en el cambio de gobierno de 1982, y con ello se abrió otra etapa clave en la emer-

gencia del manejo forestal. Este momento histórico representó un viraje significativo de la vida política y económica nacional: la transición hacia una política económica tomando como apuesta la apertura de los mercados internacionales como motor del desarrollo nacional. Esta transición se da en la coyuntura de una de las mayores crisis económicas (devaluación) y el último intento del Estado mexicano por recuperar su protagonismo en el desarrollo (ejemplo de ello es el intento fallido de la nacionalización de la banca). En este contexto problemático se da un movimiento nacional de comunidades forestales que se oponen a la renovación de las concesiones forestales en manos de empresas privadas o estatales. Como una estrategia de gobernabilidad derivada de la movilización campesina, el jefe del Ejecutivo del Estado mexicano anula el decreto de renovación de las concesiones forestales ya otorgadas. Con ello se abre un nuevo capítulo en el desarrollo forestal comunitario.

Un cuarto periodo se puede identificar con las acciones gubernamentales para acelerar la integración de México a la economía internacional, ésta se inició con la adhesión al Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT) en 1986 y continuó con otras modificaciones estructurales, culminó con las negociaciones para la creación del Área de Libre Comercio de América del Norte en 1994 y la modificación del artículo 27. La nueva apertura favoreció la importación de madera de fuentes menos costosas que las empresas forestales comunitarias. Sin embargo, la contribución de estas comunidades a la paz social (gobernabilidad, en la jerga administrativa) obligó al gobierno a mantener sus programas y negociar apoyos para las nuevas organizaciones forestales comunitarias. En Oaxaca, por ejemplo, se dio un proyecto para estimular estos esfuerzos, el Proyecto de Gestión Sostenible y Conservación de los Recursos Forestales en México que gozó de generosa financiación del Banco Mundial.

Una quinta etapa se inició a mediados de la década de 1990 con la aplicación intensiva de políticas públicas con intenciones divergentes. Entre las dirigidas a apoyar el enfoque de gestión de la comunidad estuvieron los “pagos por servicios ambientales” (SAO, 2010) y la “certificación forestal” (Anta, 2006), así como programas complementarios que promueven el ecoturismo comunitario y la conservación participativa (CDI, 2006; COINBIO, 2008). Pero esta intención de privilegiar la gestión comunitaria participativa en el programa de Áreas Naturales Protegidas fue transformado por la incursión de los intereses comerciales que buscan el beneficio privado; este cambio generó un debate continuo entre el desarrollo comercial y el control comunitario para la conservación y el bienestar local (Toledo, 2005).

Casi al mismo tiempo, con el aumento del déficit comercial, un renovado impulso en la producción nacional de celulosa y madera condujo a la promoción de la silvicultura comercial. Las políticas públicas que compiten se unieron en torno a la reforma de 1997 de la Ley Forestal que permite un modelo tanto multifuncional de los bosques naturales con beneficios directos para los que controlan los recursos e indirectamente para la sociedad (servicios ambientales, biodiversidad, etc.), como un modelo de silvicultura basado en el monocultivo. En la práctica, la lucha por definir esta política tuvo importantes consecuencias para la distribución de los costos y beneficios generados por los conflictos ambientales y económicos emergentes.

Mientras la incorporación de plantaciones comerciales estimuló la industria forestal, la política también permitió restringir plantaciones comerciales de árboles de las áreas de gestión de la comunidad. Sin embargo, los criterios establecidos para el fomento de los dos tipos de bosques reflejan la preferencia de la política oficial por el desarrollo comercial: los dos programas de “reforestación” y las plantaciones forestales comerciales fueron dirigidos explícitamente a poderosos intereses con estrechos vínculos con el sector financiero (Rudiño, 2008).

En el Programa Estratégico Forestal 2025 (Conafor, 2001), se alentó a las plantaciones por su contribución al equilibrio macroeconómico. Aunque la política forestal no excluye la silvicultura comunitaria (en oposición a las plantaciones comerciales), la preferencia por la integración económica internacional y las políticas de ajuste estructural aumentan el conflicto entre estos paradigmas y generan conflictos socioeconómicos distributivos. Esto es evidente en el Plan Nacional de Desarrollo (2007-2012) que intenta armonizar el Desarrollo Humano Sostenible con una mayor competitividad del sector en la economía global. Una revisión cuidadosa de las asignaciones presupuestarias confirma el sesgo en contra de los programas comunitarios.

La fase actual de la política de gestión forestal se involucra directamente con las políticas internacionales para la EV. Esta nueva configuración, que salió triunfante en el cónclave de Río + 20, es importante porque reconoce el fracaso del Protocolo de Kyoto para atender a los desafíos del cambio climático, la crisis ambiental, y la crisis financiera mundial, así como los derechos de las comunidades indígenas. Para seguir adelante, la política exige la incorporación de instrumentos de mercado en los diseños de políticas, con especial énfasis en REDD+, basado explícitamente en la financiación internacional del Forest Carbon Partnership Facility

(FCPF)⁵ del Banco Mundial. Con este fin, el gobierno mexicano promovió activamente REDD+ en la COP 16 en Cancún (2006), con su “Visión de México”, aunque también se ofreció a diseñar políticas de apoyo al desarrollo rural sostenible mediante el manejo forestal comunitario y la conservación de la biodiversidad; la Agencia Nacional de Bosques fue acusada de preparar una propuesta para el FCPF (Conafor, 2011).

20.3. PREMISAS DE LAS ESTRATEGIAS PARA UNA ECONOMÍA VERDE EN EL MANEJO FORESTAL

La actual estrategia de desarrollo forestal se basa en una serie de programas que se han convertido en el centro de la discusión internacional. En vísperas de la Cumbre de Río + 20 y del agotamiento del Protocolo de Kioto, se puso en marcha un intenso esfuerzo para promover los instrumentos basados en el mercado para una ev. Uno de los documentos más influyentes en este sentido fue el del UNEP (PNUMA), *Towards a Green Economy*. En su sección sobre bosques destaca cinco áreas de oportunidad en las se puede invertir en el sector de manera “verde”: 1] las áreas naturales protegidas; 2] los pagos por servicios ambientales; 3] la certificación de los productos forestales; 4] las plantaciones forestales, y 5] la agroforestería, dejando un lugar especial para REDD+, como un fuerte catalizador para la ev (UNEP, 2011). Estas áreas de oportunidad serán particularmente fructíferas, según el informe, en los países más pobres con un alto grado de biodiversidad. Un punto de especial interés, desde nuestra perspectiva, son las diferencias que surgen entre las estrategias adecuadas, en función de los ecosistemas, que van desde los monocultivos de árboles exóticos que son muy importantes (para la ev) en comunidades indígenas con un alto grado de diversidad biológica (y étnica). En el resto de esta sección, nos centraremos en las premisas teóricas y éticas que subyacen en la ev; a éstas volveremos más tarde para contrastarlas con los argumentos que apoyan el manejo forestal comunitario. En el análisis final, sin embargo, la ev se basa en la idea de que la gente debe estar dispuesta a pagar para proteger el medio ambiente, porque los servicios que recibimos de una naturaleza

⁵ El FCPF es descrito por el Banco Mundial como un grupo de “18 contribuyentes financieros [que] ayudan a 35 países forestales tropicales o subtropicales a desarrollar los sistemas y políticas para REDD+, y también les proporcionan pagos basados en la reducción de sus emisiones”.

bien conservada son mucho mayores que los costos para la sociedad en su conjunto para protegerla; utilizando el concepto de excedente del consumidor, el modelo demuestra que tiene sentido que la gente sea respetuosa con los ecosistemas.

El discurso dominante para el desarrollo sostenible en el documento de la UNEP (2011) está firmemente basado en la teoría económica neoclásica. La economía ambiental y de los recursos son áreas especializadas con las que el programa sugiere resolver el conflicto entre los procesos productivos y la sostenibilidad de las zonas forestales. Desde esta perspectiva, los bosques proporcionan dos tipos de servicios: como fuente de materias primas y energía para la producción y un sumidero de residuos, es decir de GEI. Por lo tanto, la tarea que enfrentan los responsables políticos es crear mecanismos de mercado para enfrentar el desafío del medio ambiente; en su idioma, el desafío que enfrentan los economistas es traducir estos servicios en una lógica de mercado, es decir, asignarles valores monetarios. Con los valores adecuados, será posible diseñar instrumentos útiles para reducir la necesidad de fuentes de energía y otras materias primas y así mitigar los impactos de la producción sobre el medio ambiente; estos instrumentos podrían incluir los impuestos ambientales y los permisos para las emisiones (o contaminación) (Montefrio y Sonnenfeld, 2011). Este enfoque de la solución de problemas del medio ambiente incorpora los siguientes supuestos:

- 1] En lugar de ser parte del problema, el mercado ofrece una oportunidad y los instrumentos para una asignación más eficiente de los recursos con el efecto de la regulación y la reorientación de la conducta de los “actores”. El uso de precios para la valoración de la naturaleza en un entorno de mercado les permite cambiar sus hábitos (de consumo o de producción forestal) a formas que son menos perjudiciales.
- 2] Los mecanismos para la reducción de los problemas ambientales se basan en instrumentos para incluir los costos ambientales en la contabilidad; facilitaría la delimitación de la propiedad, fijando los precios de los recursos naturales y los servicios ambientales. Los análisis de costo-beneficio monetario se convierten en la herramienta de evaluación preferida.
- 3] La monetización abre la posibilidad de una indemnización por daños y perjuicios y la sustitución de “capital natural” para los capitales producidos en las empresas socialmente, usando precios para medir la rentabilidad. La gobernanza ambiental se lograría a través del intercambio negociado en lugar de la resolución de conflictos, eludiendo

la cuestión de las desigualdades entre los agentes, tanto en términos de responsabilidad como de acceso a las necesidades básicas.

- 4] Dado que uno de los principales atributos de los bosques en tierras indígenas es su diversidad biológica, la economía ambiental ha ampliado su perspectiva de la escasez a uno de los posibles usos o valores contingentes. Independientemente de esta innovación, su anclaje en la teoría neoclásica le obliga a aceptar una serie de axiomas cruciales: el mercado como regulador de la actividad económica; la interacción entre la oferta y la demanda determina los precios de equilibrio de una “mercancía”; el concepto imaginario de “utilidad” es revelado por las preferencias individuales en el mercado, reales o simuladas; estas preferencias son una medida de los beneficios; la transformación de estas preferencias en los precios monetarios es un reflejo de una “voluntad de pago”; y, por último, esta disposición está ligada a un “bien ambiental”, como la biodiversidad, que está directamente relacionado con el excedente que el consumidor se presume que recibirá por este bien.

En esta lógica, por lo tanto, la biodiversidad se expresa como un valor monetario a partir del cual el consumidor puede obtener un “beneficio”, basado en la diferencia entre la disposición a pagar y lo que realmente está costando. El método para realizar esta valoración suele ser, o bien el análisis de costo-beneficio o el uso de los costos de oportunidad, con base en los precios del mercado mundial; esto implica una serie de cuestiones graves, no menos importantes, entre ellas que el proceso de formación de precios en los mercados mundiales que está fuertemente influido por la distribución desigual del poder entre los grupos sociales, las considerables diferencias de nivel de vida entre las naciones, y el control cartelizado del comercio mundial de mercancías tomado de la naturaleza.⁶ Otro gran problema con este modelo es que no cuestiona el asunto serio de qué grupo de la sociedad debe pagar los costos de la conservación y quién debe hacer el trabajo que implica esta conservación; éstos son asuntos que quedan a la negociación entre las partes muy desiguales. En consecuencia, este enfoque monetario no resuelve efectivamente las preguntas difíciles acerca de lo que podrían ser mecanismos equitativos para la organización de las transferencias entre los grupos sociales, asegurando que se realizará el trabajo necesario, incluso si los precios reflejan los intercambios equitativos.

⁶ Esta corta reflexión se suma a la muy larga literatura de problemas de intercambio desigual dentro y entre grupos y naciones (cf. Roberts y Parks, 2009; Clark y Foster, 2009).

20.4. UN CASO DE ESTUDIO: EL MANEJO FORESTAL COMUNITARIO EN LA SIERRA JUÁREZ DE OAXACA Y JUSTICIA AMBIENTAL

En el contexto mexicano, los bosques de Oaxaca son importantes y las comunidades han sido pioneras en tratar de asegurar que estén bien gestionados (Bray *et al.*, 2003). El estado es el cuarto mayor productor de madera, pero sólo utiliza dos tercios de su capacidad productiva. Hay un gran número de organizaciones de producción colectiva (283) y tratan de proteger eficazmente su considerable biodiversidad: de las 4831 especies de flora, 702 son endémicas, 62 amenazadas y 24 en peligro de extinción (GEO, 2011: 163). Las comunidades de la Sierra Juárez ofrecen un ejemplo de los esfuerzos locales por diseñar e instrumentar programas para la gestión sostenible de sus recursos (Mathews, 2011). La experiencia ha sido analizada a fondo; parte de la literatura que describe esta historia deriva de su impulso inicial de la contribución teórica de Ostrom sobre el gobierno de los bienes comunes (1990) que la considera adecuada para describir los procesos de la apropiación social de los ecosistemas forestales (Winder, 1993; Chapela, 1999; Kettler y Ramírez, 1999; Klooster, 2003; Bray y Merino, 2004; Mitchell, 2006;). Hay siete factores que influyen en esta importante dinámica:

- a] Un alto grado de biodiversidad. Esta región montañosa abarca la latitud más amplia de una zona bien conservada, en México —y el mundo— que se extiende desde los bosques bajos perennes a 200 metros sobre el nivel del mar, pasando por los bosques montanos mesófilos, con el pino-encino que se sitúa en 3100 metros sin interrupción, incluyendo masas puras de *Oreomunnea mexicana*, similares a las que existían durante el Mioceno en la zona norte de Chiapas. Por sus características singulares, la región se considera como un “bosque congelado en el tiempo” y una de las más antiguas del mundo (Rzedowski y Palacios C., 1977).
- b] Un área estratégica para la política de conservación. Entre sus atributos ampliamente reconocidos está su designación como una Región Terrenal Prioritaria por la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad; un área para la conservación de las aves, debido a la existencia de especies en peligro de extinción; una ecorregión prioritaria para la conservación por el Fondo Mundial para la Naturaleza (wwf) debido a que tiene los bosques mesófilos más grandes y mejor conservados de México (Arriaga *et al.*, 2008).
- c] El reconocimiento por las instituciones internacionales (como Smart-

Wood) para el desarrollo de las empresas forestales comunitarias con programas de gestión social y ambientalmente responsable. Importantes volúmenes de madera están certificados por el Forest Stewardship Council (FSC) sobre la base de tres criterios: impacto ambiental, viabilidad económica e impactos sociales (fsc, 2008). El Banco Mundial eligió esta zona para implementar su proyecto piloto para la gestión sostenible de los bosques; una serie de fundaciones de beneficencia y agencias de conservación también tienen una presencia significativa en la región al igual que la Comisión para la Cooperación Ambiental (parte de la institucionalidad del Tratado de Libre Comercio de América del Norte), el Departamento para el Desarrollo Internacional del Reino Unido, y el Fondo Global para el Medio Ambiente (Chapela, 1999: 111).

- d] La importancia de los recursos hidrológicos y climáticos. La región es considerada como un “termómetro climático” para la estimación y la regulación de las precipitaciones y para el estudio de cuestiones relacionadas con la gestión del agua y el cambio climático nacional (Gómez *et al.*, 2008). Se trata de una fuente de agua para uno de los ríos más importantes del país, el Papaloapan.
- e] Un alto grado de multiculturalidad. Un segmento importante de su población tiene raíces en la civilización mesoamericana, incluyendo los chinantecos, los zapotecas y los mixtecos (cdi, 2006). Estas comunidades con sus distintas formas de organización sociopolítica incorporan diferentes perspectivas (cosmologías), en contraste con el proyecto “único” de modernización del modelo eurocentrífugo dominante de la racionalidad económica (Fuente, 2009).
- f] Un alto grado de organización comunitaria y de responsabilidad. Las diversas formas de organización colectiva y la participación se basan en su cohesión territorial y cultural. La toma de posesión de sus bosques comunitarios por las empresas privadas y paraestatales reforzó su determinación y su sentido de la solidaridad (Fuente y Barkin, 2011). En el proceso, ratificaron su compromiso de mantener la propiedad colectiva de cara a los esfuerzos del gobierno nacional para la emisión de títulos de propiedad individuales.
- g] El gobierno mexicano otorgó el Premio al Mérito Forestal a varias comunidades por la combinación de las prácticas de producción sostenibles con una amplia distribución de los beneficios, la protección forestal y la diversificación de productos, incluidos los productos no maderables del bosque, las setas, la trementina, el ecoturismo y el embotellado de agua de manantial.

Como se sugiere en esta enumeración de las características regionales, las comunidades manifiestan un alto grado de heterogeneidad entre ellas. Las diversas experiencias de las comunidades agrarias de la región reflejan sus ecosistemas diferentes, la dotación de recursos y sus historias sociopolíticas. La importancia de la justicia ambiental para estas comunidades contrasta con las metas orientadas al mercado del paradigma contrastante descrito en el apartado anterior.

20.5. MANEJO FORESTAL COMUNITARIO Y LAS RESPUESTAS A LA ECONOMÍA VERDE

Las comunidades forestales en los bosques de la Sierra Juárez de Oaxaca tienen una gran experiencia en el aprovechamiento de los diversos programas públicos que históricamente fueron diseñados para canalizar fondos para aliviar los peores síntomas de la pobreza y la compra de quiescencia social. Aunque ahora etiquetado como “instrumentos de mercado”, y oportunidades de inversión (UNEP, 2011: 169), la mayoría de los “pagos por servicios ambientales” vinieron directamente del gobierno y de contribuciones voluntarias de los presupuestos corporativos (Chinoin Pharmaceutical, Televisa y Gamesa) y no de los Mecanismos de Desarrollo Limpio creados en virtud del Protocolo de Kioto (SAO, 2010). La región es de especial interés tanto por razones académicas como políticas debido a su singular historia: *a]* la tenencia colectiva de la tierra; *b]* la importancia de los bosques naturales frente a los bosques plantados; *c]* la importancia de las empresas comunitarias; *d]* la importancia de las comunidades indígenas con cosmologías propias que desafían los enfoques capitalistas.

Hoy en día existe una creciente presión para que las comunidades participen de manera explícita en los programas de EV para que puedan seguir recibiendo recursos externos para los programas de conservación y diversificación forestal que apoyan sus esfuerzos en curso para el desarrollo comunitario y la consolidación. A la luz de nuestro análisis de las lógicas contrastantes de gestión forestal social y la EV, en esta sección se evalúa la respuesta de las comunidades a la creciente disponibilidad de recursos en los distintos programas internacionales, pero sobre todo teniendo en cuenta la consolidación de una gran parte del esfuerzo internacional bajo la rúbrica de REDD+.

Desde los primeros años del siglo XXI se ha producido una proliferación de organismos no gubernamentales que se ofrecen para ayudar a

canalizar recursos internacionales para financiar la conservación local. Muy concretamente, desde principios de siglo, ecologistas y activistas locales comenzaron a movilizarse para justificar su participación en la administración de las nuevas oportunidades, con sus generosos subsidios para gastos administrativos. En lo que sigue presentamos nuestras observaciones de la forma en que las comunidades están reaccionando a este proceso y el impacto en sus patrones históricos de manejo de recursos naturales y la organización comunitaria.

Uno de los primeros programas en los que las comunidades participaron involucró la certificación de la producción de madera. La certificación forestal (ecoetiquetado) ofrece una oportunidad de acceso a los mercados en la EV (Swan, *et al.*, 2010). El uso de esta herramienta de mercado se considera como una estrategia importante para mejorar los ingresos (Damette y Delacôte, 2011), así como para la protección de la biodiversidad y la mejora de la capacidad de recuperación de sus ecosistemas. En Oaxaca, la relación positiva entre la certificación y la conservación de los recursos forestales es particularmente evidente (Anta, 2006). Sin embargo, Fuente *et al.* (2012) muestran que estas comunidades se enfrentan a serios problemas al tratar de centrarse en este enfoque, como parte de sus esfuerzos para aplicar un programa de justicia ambiental. Las principales limitaciones podrían ser: *a*] menor producción de madera que limita el número de compradores potenciales; *b*] no hay procesamiento de la madera para productos de mobiliario donde existiría un mayor beneficio; y *c*] el etiquetado ecológico no diferencia entre el origen de la madera de los bosques naturales y las plantaciones forestales que ofrecen una ventaja. Hay una complementariedad entre la certificación forestal y los mayores ingresos, pero esto requiere el desarrollo de estrategias para el comercio justo. Las actividades de certificación forestal son financiadas por el gobierno mexicano, pero no como instrumentos del mercado, a pesar de que contribuyen a la economía verde.

Las actividades basadas en “pagos por servicios ambientales” (PSA) están diseñadas explícitamente como instrumentos de mercado. Sin embargo, como señalamos al comienzo de esta sección, hasta hace poco estos programas se han financiado con cargo al presupuesto del gobierno federal y se consideran como programas oficiales.⁷ Cuando se revisa la

⁷ En contraste con las formas en que estos programas están funcionando en Oaxaca, los programas mejor financiados para la protección de la Reserva de la Mariposa Monarca en Michoacán no han contribuido al fortalecimiento de las comunidades locales. Las diferencias se explican por la falta de consideración de las características especiales de la población campesina que ha tratado de ofrecer un turismo alternativo y el esquema de la

literatura considerable sobre estos programas, y las propuestas y evaluaciones de proyectos, tanto en fuentes publicadas como en la “literatura gris”, nos encontramos con que, si bien las actividades están diseñadas para asegurar la conservación continua de los bosques primarios en la región, casi todos los involucrados reconocen que los fondos se utilizan para una amplia variedad de servicios de la comunidad y de ecosistemas distintos a los que se especifica en los documentos. El SAO inició uno de los primeros programas que se ejecutan en la región, utilizando las directrices del Fondo Prototipo de Carbono (SAO, 2005). Desde entonces, el alcance y la intensidad de las actividades relacionadas con los servicios ambientales se ha incrementado, con las asociaciones entre los intermediarios locales, grupos nacionales como ProNatura y grandes grupos internacionales como Forest Trends (Katomba), aunque también hay participación de algunas grandes firmas internacionales de inversión, como lo demuestra el informe anual elaborado por Bloomberg y Forest Trends (Peters-Stanley *et al.*, 2011).⁸

Mientras que con un número de los programas de PSA se siguen canalizando recursos a algunas de las comunidades de la Sierra Juárez, el énfasis cambiará drásticamente para concentrarse en el marco de REDD+. Aunque la delegación de México hizo una presentación agresiva en la XVI Conferencia de las Partes en Cancún en 2010 apoyando este enfoque, su aplicación ha sido lenta. La “Estrategia Nacional” (Conafor, 2011) sólo entró en funcionamiento a finales de 2012, con una convocatoria de propuestas de las instituciones locales académicas y de investigación, las comunidades indígenas y rurales, y otras entidades públicas y privadas para un programa “México-REDD+” piloto que será probado en Oaxaca; financiado por la Agencia de Desarrollo Internacional de Estados Unidos, la idea es generar proyectos de demostración y estudios en las comunidades de la Sierra Juárez con el apoyo de The Nature Conservancy, Rainforest Alliance, el Fondo Mexicano para la Conservación de la Naturaleza, el Woods Hole Research Center y la Institución Carnegie para la Ciencia.⁹

conservación como una alternativa al programa de PSA, administrado conjuntamente por la Secretaría de Medio Ambiente y WWF (Barkin, 2003).

⁸ El informe anual se prepara en forma conjunta por las dos organizaciones con el apoyo de numerosas fundaciones privadas, agencias de la ONU y la Agencia Noruega de Cooperación para el Desarrollo.

⁹ La iniciativa de cinco años crea un “Mecanismo de Cooperación Cambio Climático” (el marco para el programa de preparación de México REDD+) dirigido a establecer las políticas de mitigación del cambio climático sólidas y fortalecer las ya existentes. El programa trabajará con académicos locales y las instituciones de investigación, las comunida-

El tercer instrumento de mercado que se está implementando consiste en las plantaciones forestales. Como ya se ha mencionado, este enfoque tiene una aplicación limitada en la Sierra Juárez de Oaxaca porque la ley forestal nacional prohíbe específicamente las plantaciones comerciales en las regiones donde los bosques naturales son dominantes o tienen una específica “vocación forestal”. Esta disposición se incluyó debido a una historia larga y muchas veces violenta de intentos de cambiar los patrones de uso de la tierra a través de diversas acciones de partes externas interesadas (cf. Barkin y García, 1998; Downing *et al.*, 1992). Como resultado, en lo que sigue, nos centraremos en el PSA y REDD+.

En el análisis anterior planteamos la cuestión de si las comunidades contribuyen a la gestión sostenible de los recursos regionales debido a su incorporación efectiva en la EV con su uso de instrumentos de mercado o si los factores extraeconómicos están mayormente involucrados. En favor del segundo enfoque, sostenemos que los grupos prefieren la gestión comunitaria sobre el mercado para la toma de decisiones. Nuestro análisis sugiere que existe un programa de manejo forestal sostenible en la Sierra Juárez con cuatro razones: *a]* la silvicultura es una parte importante de una estrategia de diversificación de la producción; *b]* las comunidades producen otros “productos” y servicios de los ecosistemas forestales como parte de sus actividades normales; *c]* la conciencia ambiental ha aumentado como resultado de las luchas políticas contra la invasión de intereses externos que tratan de tomar el control de los recursos locales, incluyendo el agua, la madera y los minerales; y *d]* la composición social de estas comunidades mesoamericanas se caracteriza por su compromiso de defender sus actuales estándares materiales de vida y sus ingresos, un principio básico de la justicia ambiental.

Las oportunidades creadas por la decisión de centrarse en la Sierra Juárez de Oaxaca como un programa piloto en la iniciativa M-REDD de USAID parece estar inspirado, al menos en parte, en el fuerte contraste en la lógica de las comunidades indígenas, en comparación con los supuestos subyacentes de los intereses comerciales cuyas estrategias fueron diseñadas en otros lugares. La composición del grupo de trabajo creado para instrumentar el “Programa Social para REDD+ en Oaxaca”, para enfrentar el cambio climático refleja el carácter especial de estos grupos sociales; se compone de grupos o redes que tienen una larga tradición de defensa de los derechos de la comunidad y los paradigmas colectivos en la cara de la política nacional para promover la integración social y cultural, junto con la producción para el mercado nacional, en función del trabajo asalariado.¹⁰

des indígenas y rurales, y otras entidades públicas y privadas.

¹⁰ Entre la silvicultura y los grupos agrarios incluidos en el grupo de trabajo son: Unión

Esta iniciativa establece tres principios básicos:

- a] Que las iniciativas REDD+ sean dirigidas hacia las comunidades no hacia los individuos; los pagos se harán para las tareas asignadas, lo que limita el acceso a la tierra o al uso y manejo de los bosques, teniendo en cuenta que las acciones no van a llevar a la destrucción o degradación de la tierra a largo plazo;
- b] Que las iniciativas de REDD+ no puedan ser practicadas para dividir a las comunidades, o crear problemas entre ellos o su sistema de cultivo y el gobierno basado en “usos y costumbres”. Más bien, deben ser diseñadas como un mecanismo para fortalecer la organización social, mejorar la calidad de vida, aumentar el conocimiento y mejorar la administración local, teniendo en cuenta las futuras generaciones y el futuro del planeta;
- c] Que las iniciativas de REDD+ no deben responsabilizar a las comunidades por el cambio climático; los pagos que reciben no deben considerarse simplemente como un medio para mitigar los efectos del cambio climático en sus cultivos, en sus dietas, o su infraestructura (carreteras, escuelas, hogares, comunicación) y las actividades productivas o, en el peor de los casos, utilizarse únicamente para actividades humanitarias en tiempos de desastre. Por el contrario, deben ser utilizadas deliberadamente para fortalecer la resiliencia de las comunidades.

Los pueblos indígenas de la Sierra Juárez tienen una larga historia, firmemente arraigado en las culturas mesoamericanas de las que son todavía una parte. Insisten en su singularidad, no sólo por las diferencias genéticas, sino también porque sus raíces se nutren de tradiciones sobre la base de un proceso colectivo de aprendizaje acerca del mundo y de su convicción de que su propia continuidad como pueblo depende de su conocimiento de su entorno. Es en este sentido, por lo tanto, en el que se habla de la primacía de la justicia ambiental como una dinámica de refuerzo mutuo que no sólo respeta su entorno, sino también insiste en el respeto de todos los miembros de la comunidad.

de Comunidades del Sistema Comunitario para la Biodiversidad (UC-Sicobi); La Unión de Comunidades Forestales Zapoteca Chinanteca (Uzachi); La Coordinadora Estatal de Productores de Café del Estado de Oaxaca (CEPCO); la Unión de Comunidades Indígenas de la Región del Istmo (UCIRI); el Comité de Recursos Naturales de las Chinantla Alta (Corenchi); La Unión de Comunidades Forestales Ixtlán-Etla-Oaxaca (Ixeto). Organizaciones no gubernamentales simpatizantes y grupos académicos que apoyan la autonomía de la comunidad y las instituciones locales en el lugar de las instituciones nacionales también están participando.

20.6. CONCLUSIONES: LA POLÍTICA FORESTAL NACIONAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEBE DIFERENCIAR ENTRE LOS ECOSISTEMAS Y LAS PRÁCTICAS DE GESTIÓN

Históricamente, la formulación de políticas para el desarrollo nacional ha promovido un proceso de integración nacional para asegurar la igualdad de oportunidades para todos. Este enfoque está firmemente arraigada en el supuesto de que el individuo es el jugador clave en la vida social y que las instituciones liberales cuidadosamente construidas en el mundo moderno son las más adecuadas para la protección de la sociedad y su continuidad, con la mejora de los niveles de vida. En este sentido, la tarea del gobierno ha sido identificar los objetivos políticos que protegen a todas las personas y guían sus acciones para garantizar el respeto por el medio ambiente. Este enfoque dio lugar a una serie de profundas contradicciones que han continuado intensificando los problemas sociales de la desigualdad, la enajenación, y una sensación de impotencia ante la creciente violencia y la falta de oportunidades. Exacerbando estos problemas es evidente el deterioro de los ecosistemas de los que dependemos y el descubrimiento de nuevos e innumerables problemas ocasionados por el maltrato a nuestro planeta. Es en este contexto en el que las propuestas de la EV se han centrado en REDD+ como instrumento de política para mejorar las condiciones ambientales o por lo menos para asegurarse de que no continúen deteriorándose. Un examen de las metodologías para la evaluación de la eficacia de estas propuestas, firmemente atados a los mercados mundiales y los precios con sus mecanismos de concentración de la riqueza y el poder, demuestra que la justicia ambiental requiere diferentes paradigmas y la incorporación de los propios productores en el proceso.

Esta conclusión surge de seguir la historia del logro del manejo forestal comunitario en la sierra de Oaxaca, donde las comunidades locales están tratando de mantener la calidad de sus vidas y evitar la degradación de sus ecosistemas sobre la base de sus propias cosmologías, derivado de una profunda interacción de la sociedad con el planeta, un metabolismo social radicalmente diferente del de la sociedad dominante occidental. Si hemos de aprender de estas diferencias, es importante reconocer que los responsables políticos deben, como mínimo, encontrar formas de permitir que esos pueblos puedan participar activamente en la protección y mejora de sus ecosistemas para que ellos también puedan mejorar su calidad de vida.

Una de las principales características de estos bosques es su alto grado de biodiversidad. Éste es un elemento esencial en la construcción de la

capacidad de recuperación que caracteriza a la región, una dinámica que contribuye a su forma actual de la sostenibilidad. La EV ofrece poca información sobre las formas en que los diversos factores culturales y biológicos interactúan para producir este resultado. La Sierra Juárez de Oaxaca es un ejemplo de la creciente toma de conciencia de la importancia de comprender el planeta como un bien común y nuestra necesidad de desarrollar instrumentos de política sensibles para facilitar las tareas de la población local en su gestión.

Esta experiencia implica la comprensión de los pueblos que han definido diferentes prioridades que las del mercado mundial. Estas nuevas prioridades parecen ser absorbidas por la singular iniciativa de colaboración en Oaxaca que está explorando un enfoque político diferente, que combina la búsqueda del equilibrio de los ecosistemas con el equilibrio social, con la participación directa de los ‘beneficiarios’ en la solución de sus problemas, y la búsqueda de mejoras sostenibles en la calidad de sus vidas; éste es el verdadero significado de la justicia ambiental.

PARTE IVa
RESISTENCIAS Y ALTERNATIVAS.
LA CAPACIDAD DE RESISTIR

INTRODUCCIÓN

Muchas comunidades mexicanas se encuentran receptivas a las propuestas de organizaciones no gubernamentales (ONG) para facilitar su participación en proyectos que combinan nuevas oportunidades para sus miembros con procesos de restauración de sus ecosistemas. Por supuesto, las propias comunidades están conscientes de que existe la posibilidad de que estas ofertas estén diseñadas para engancharlas en procesos clientelares o políticos para fortalecer a los grupos en el poder. Con frecuencia, las mismas ONG y otras organizaciones sociales se encuentran en una dinámica de cooptación que ha contribuido al debilitamiento de varias de ellas; este problema es particularmente notable durante períodos electorales, pero ninguna oferta de apoyo comunitario podría evaluarse sin considerar esta faceta de la administración pública mexicana.

El primer capítulo de esta sección ofrece un análisis de uno de estos proyectos, operados por una ONG (asociación civil) local que propuso poner en práctica un proyecto de rehabilitación ecosistémica frente a la destrucción que habían sufrido los altos de la Sierra Madre del Sur, frente a la Bahía de Huatulco. El trabajo involucró la capacitación y movilización de comuneros en toda la región y creó una nueva dinámica de participación que fortaleció a las comunidades. El informe termina antes de su desenlace final: desgraciadamente, en plena operación, la Comisión Nacional Forestal le “cortó sus alas” precisamente porque el Centro y las comunidades no estaban dispuestos a colaborar en las campañas electoreras del partido oficial.

Sigue la propuesta para crear un mecanismo para movilizar a la sociedad para enriquecer y proteger sus recursos hídricos mediante un mecanismo financiero en que los usuarios del agua, mayormente urbanos, contribuirían para que las comunidades fueran compensadas por las labores de proteger sus cuencas regionales. La idea del Fideicomiso surgió de discusiones en algunas de las regiones más necesitadas de labores de restauración de sus acuíferos subterráneos y la incapacidad de las instancias encargadas de su gestión para llevar a cabo estas labores. En el ambiente centralizador y autoritario que reina en el sector del manejo de recursos naturales y, en particular, en el del agua, la propuesta no prosperó. Sin embargo, las discusiones que resultaron de su presentación en numerosos foros públicos sirvieron para despertar conciencia de las po-

sibilidades de una acción ciudadana frente a la actitud clientelista de la autoridad. Esta iniciativa fue parte de una larga trayectoria en la cual participamos un gran número de académicos comprometidos con enfrentar el problema de la gestión del agua que actualmente toma la forma de una propuesta ciudadana para una nueva Ley General de Agua que pone en operación el principio del Derecho Humano al Agua, establecido en la reforma del Artículo 4 de la Constitución de 2012.

En el siguiente capítulo ofrecemos una discusión de la problemática de la educación para la conservación. Desde antes que la UNESCO declarara la Década de la Educación para la Sustentabilidad, se había creado una instancia oficial para impulsar la inclusión de materias ambientales en los programas escolares, comprendiendo tanto materiales didácticos como actividades interactivas. El Cecadesu (Centro de Educación y Capacitación para el Desarrollo Sustentable) empezó con un liderazgo muy activo y creativo que se encargó de esta labor a nivel oficial. En el ámbito universitario había otras dinámicas e iniciativas con personas muy dedicadas a promover su inserción en los programas de estudio; desgraciadamente, había muy poca respuesta en el campo de la economía, salvo tratar de fijar precios a los recursos naturales y a los servicios ambientales. Como aportación a esta discusión, participábamos en un seminario que debatía la posibilidad de ampliar el alcance de esta disciplina, una discusión que fue bien recibida, pero con fuertes resistencias a su incorporación transversal en los programas de estudio de la economía. Actualmente, el resultado es que parte importante de estos temas están incorporados como “pegostes” en programas de las Facultades de Ciencias, en vez de promover un verdadero programa de Economía Ecológica, como se ofrece en otros países.

Estas iniciativas y discusiones trascendieron a los niveles cupulares de la pirámide científica que convocó a varias reuniones para discutir el problema de la sustentabilidad y el sentido mismo del concepto de progreso. En uno de estos encuentros, presentamos la provocación de que el sustento mismo de la medición del avance económico está en discusión en muchas partes del mundo. Es claro que el mismo origen del concepto de Producto Nacional Bruto no estaba concebido para decir algo sobre el bienestar humano o social. El capítulo 24 retoma muchas de las discusiones internacionales sobre formas alternativas de contemplar el problema de “felicidad” o de progreso, para sugerir que son las propias respuestas de las comunidades, a través de sus propios sistemas de conocimiento, sus cosmovisiones, que nos pueden informar sobre el sentido del “progreso”, con un significado bastante diferente de lo que se discute en los círculos dominados por la economía ortodoxa.

Finalmente, en esta sección incluimos un ensayo que resume los resultados de nuestras interacciones con numerosas comunidades involucradas en la construcción de nuevas estructuras institucionales. Escrito para enriquecer una discusión entre economistas heterodoxos norteamericanos, el objetivo era plantear la idea de un nuevo entorno social para la convivencia y la producción. Aquí se introduce de manera explícita la importancia de la demanda de autonomía que es tan central en las interacciones entre muchas comunidades originarias. Esta problemática se reproduce tanto en Norteamérica como en otras partes del mundo indoamericano. La idea de que los indígenas y campesinos podrían ser actores protagónicos en la transformación social es algo muy importante que requiere de una profunda revisión de muchas de las teorías de cambio social elaboradas por grupos progresistas y marxistas en todas partes. Estas comunidades “tradicionales” están logrando revalorar sus propios procesos de cambio que les permite fortalecer sus tradiciones y de esta manera prepararse para ofrecer liderazgo para los cambios que necesitamos; ésta es una lección importante que trasmittió Eric Wolf (1987) en su magistral libro sobre la historia mundial vista por un antropólogo.

21. LA PARTICIPACIÓN LOCAL EN LOS PROYECTOS DE DESARROLLO SUSTENTABLE¹

CON EVELINDA SANTIAGO²

INTRODUCCIÓN: LA APROPIACIÓN LOCAL DEL DISCURSO SUSTENTABLE

La crisis ambiental es producto de un proceso irracional de apropiación de los recursos naturales. Esta apropiación es generada de dos maneras: primero; un acto urgente de las culturas dominantes por adueñarse de un mayor número de recursos naturales para transformarlos en bienes de consumo, provocando con su producción la emisión de tóxicos; y segundo, un acto de sobrevivencia de los habitantes de las zonas marginadas, pertenecientes mayormente a los países del tercer mundo. Desde este punto de vista, la problemática ambiental es un problema social y cultural que se presenta a raíz de los fines de la depredación. En otras palabras, mientras unos pocos depredan con fines de lucro, una porción mayor de individuos depreda para sobrevivir, es decir, la crisis ambiental es el resultado de una progresiva crisis espiritual de las culturas occidentales u occidentalizadas y una acelerada crisis material de las culturas tradicionales.

Uno de los aspectos más sobresalientes de la crisis de la modernización es la escasez de agua en los centros urbanos, industriales, así como en las zonas rurales, causada por la creciente demanda demográfica; el mal uso del líquido en la producción; las descargas industriales y domésticas a los afluentes; la tala inmoderada de árboles y la introducción de la ganadería y la agricultura tecnificada en las zonas rurales sin exigir una mínima responsabilidad por sus impactos. Tanto la escasez de agua como el sobrecalentamiento de la tierra y los otros fenómenos ecológicos son problemas cada vez más visibles, los que han motivado tanto a académicos, intelectuales, científicos y políticos a involucrarse en la búsqueda de so-

¹ Publicado en inglés en J. Johnston, M. Gismondi y Goodman, J. (eds.), *Nature's Revenge: Reclaiming Sustainability in an Age of Ecological Exhaustion*, Toronto, University of Toronto Press, 2006, pp. 183-201. Traducción de Evelinda Santiago.

² Evelinda Santiago Jiménez es Doctora en Ciencias en Planeación de Empresas y Desarrollo Regional por el Instituto Tecnológico de Oaxaca. Actualmente es Profesora-investigadora adscrita al Departamento de Ciencias Económico-Administrativas del Instituto Tecnológico de Puebla e Investigadora Nacional nivel I: mariaevelinda.santiago@itpuebla.edu.mx

luciones que mitiguen la crisis. Sin embargo, algunos de ellos lo hacen sin dejar de tener como punto central la racionalidad económica mercantil (Leff, 1998), lo que ha dado como resultado la continuidad de la estrategia desarrollista a través de un discurso liberal del desarrollo (Escobar, 2004; Santiago, 2001), que maquillado de verde está dando el afianzamiento del “popular” desarrollo sustentable diseñado por la comisión Brundtland (WCED, 1987). Éste tiene tintes biocolonizantes en donde los habitantes de las megadiversidades no tienen cabida; si no es como informantes ecológicos, además de ser definidos como rescatables para que no se pierdan los datos sobre los ecosistemas.

Aunque el discurso sustentable —promovido, mayormente, por las instancias burocráticas internacionales y algunas ONG de los países industrializados— es sólo un camuflaje de la racionalidad capitalista, ha sido inspirador de otras concepciones alternativas, fincadas en la apropiación, localización y reorientación de la configuración dominante. Estos discursos y perspectivas alternativas han sido cultivados principalmente en los países del Sur, en parte por teóricos, intelectuales o técnicos que están trabajando en las localidades y en contacto con procesos sociales que articulan sus demandas en términos de defensa del territorio, desarrollo alternativo, autonomía, sustentabilidad y autosuficiencia (Toledo, 2000). Normalmente, estas propuestas están diseñadas desde un punto de vista local, donde los habitantes ubicados en las reservas ecológicas son los protagonistas de la recuperación y preservación de sus recursos. Cuando son exitosos, ese tipo de proyectos iniciados localmente, son un gran contraste con las formas de materializar el desarrollismo tradicional, tema examinado en la siguiente sección.

21.1. DESARROLLISMO

Los proyectos de desarrollo emanados de las instancias gubernamentales han tenido la característica de ser impuestos en las zonas donde existen recursos transformables en mercancías. Éstos se han diseñado pensando en su rentabilidad particular o social sin ofrecer oportunidad alguna de participación a los habitantes locales en su estructuración y puesta en marcha. Debido a esto, los proyectos han provocado brotes de resistencia y confrontaciones entre promotores y los originarios de las zonas “desarrolladas”, porque más que proyectos democráticos, son lugares para la implantación de estructuras colonizantes, usadas por las instancias de gobierno para generar feudos modernos para el control y la represión.

Por ejemplo, en el territorio administrado por Fonatur (Fondo Nacional de Turismo) en las Bahías de Huatulco,³ el beneficio del uso de los servicios públicos —como el agua potable— es una prioridad para aquellos usuarios con mayor poder adquisitivo, mientras que la gran mayoría sufre por su carencia o disponen de ella a medida que aceptan las condiciones del organismo.

Lo anterior nos hace caracterizar a los proyectos de desarrollo como una nueva colonización en nombre de la modernidad y el desarrollo, al expropiar los terrenos comunales con garantías mínimas. Produce un proceso de exclusión de los actores locales; una manera de subordinar a los lugareños, al contratarlos como mano de obra barata y en puestos mínimos; una propuesta de desarrollo carente de oportunidades reales; imanes que atraen la inmigración para llenar las necesidades creadas; mecanismos que ponen los recursos naturales a disposición de los nuevos dueños de los proyectos sin velar por la regeneración de los mismos; y procesos que ocasionan daño ambiental, subsanados con la creación de áreas naturales protegidas, marginando a los mismos moradores. Es decir, los proyectos, como el de Bahías de Huatulco, sí han llevado el “desarrollo”, pero para los inversionistas nacionales e internacionales; sin que éste incida en la elevación del bienestar de los locales. Cuando los proyectos se ven obligados a considerarlos, a menudo es de manera soslayada, ofreciendo paliativos que no resuelven sus necesidades básicas, y que muchas de las veces agudizan sus problemas de salud e ingresos.

En este capítulo, examinamos una alternativa: Administración Integral de los Recursos Naturales (AIRN), que transforma las propuestas tradicionales, induciendo a los actores locales a participar activamente en la administración de sus recursos naturales de manera integral, esto aumenta su capacidad para atender sus propias necesidades y generar nuevas fuentes de ingresos regionales. Este enfoque, diferente, asume que los recursos naturales han sido y son la fuente de sustento de los sujetos, ya que siempre han aceptado su importancia y a menudo se organizan para emprender actividades para su cuidado. El planteamiento (AIRN) está basado en la premisa de que los habitantes, dentro de sus culturas y en interacción con el resto de la sociedad de la que también forman parte, constantemente experimenten con nuevas propuestas productivas para que fortalezcan su sociedad y diversifiquen su

³ La institución federal controla una gran parte de los beneficios sociales que se llevan a las tierras expropiadas, como es el cobro de la distribución del agua potable y el mantenimiento de las zonas urbanizadas a través de la corporación afiliada a Fonatur denominada Baja Mantenimiento Operacional.

economía. Al incluir nuevas actividades dentro de sus formas de vida, los locales diseñan alternativas que los previenen de convertirse en *refugiados económicos* en los centros urbanos nacionales e internacionales. Ellos también aprenden cómo contribuir al desarrollo de su región sin sacrificar su dignidad, evaluando nuevas actividades mientras desarrollan nuevas relaciones entre su cultura y la cultura dominante. Esta interiorización les provocaría dejar de ser parte de la gran franja de mano de obra barata para convertirse en los protagonistas de su propio desarrollo regional sustentable. El nuevo enfoque busca fortificar a las comunidades para evitar la pobreza extrema y la degradación ecológica en los territorios. Además, los conflictos entre los desalojados y los técnicos disminuirían, ya que reconoce que los locales tienen la primacía sobre el territorio porque llegaron primero. Es decir, esta propuesta puede contribuir a reducir violentos litigios legales o movimientos políticos que sólo traen luchas fratricidas, en las que regularmente mueren sólo personas y líderes de la parte agraviada, al defender sus territorios y sus culturas.

Una manera de evadir conflictos está en el *compartir conocimientos* a través de la *educación y habilitación en nuevas tecnologías*, así como en la *actualización de las tecnologías tradicionales*, ambas fusionadas a la problemática local-regional. Esto es posible a través del entrenamiento de los locales para que se formen como profesionales y técnicos comunales, quienes se convertirían en microempresarios, dueños de los servicios y productos sustentables que se ofrecerían al resto de la sociedad. En este sentido, los comuneros aprovechan sus recursos naturales sin poner en riesgo su hábitat porque, al mismo tiempo que toman una porción para alcanzar su bienestar, irían reconstruyendo y conservando los ecosistemas. Es decir, la idea es inducir nuevas formas de apropiación en las que una parte de los recursos sirvan para alimentar los servicios y sistemas productivos; otra para que los habitantes continúen con los usos tradicionales de ellos; y finalmente la más importante, estaría abocada a la reconstrucción y conservación de las diversidades ecológicas erosionadas.

La esencia de la propuesta (de AIRN) está fundamentada en la *recreación de la cotidianidad local*, en la misma escena donde se realiza la reconstrucción de los ecosistemas y se inducen los proyectos productivos. Esta estrategia evita fincarse en las confecciones frías y acartonadas que pululan en los escritorios de la ciudad. El AIRN, rechaza la visión de considerar incapaces a los comuneros para diseñar sus propias estrategias de desarrollo y, por el contrario, los exhorta a definir las formas de cómo, dónde y cuándo se llevarán a cabo. En otras palabras, promueve la participa-

ción activa de los locales, de tal manera que es un proceso que propicia un *amalgama integral y sustentable de lo selecto⁴ de las dos sabidurías generadas por la humanidad*: la de las sociedades industrializadas y la de las sociedades tradicionales. No promueve una autarquía ilusa en las comunidades indígenas y rurales, pero sí tiene como meta caminar hacia la *autosuficiencia* alimentaria, energética, económica, y en general de sus necesidades básicas, para que estén en condiciones equitativas para realizar intercambios socioeconómicos justos con el resto de la sociedad. Es importante decir que, el control comunal local de sus territorios con sus formas de gobierno tradicional, no amenaza al Estado-nación; este paradigma reconoce que es necesario un gobierno fuerte que regule las relaciones regionales y del país con el resto del mundo, ya que los habitantes de estas localidades saben que se encuentran en desventaja y están conscientes de que no podrían relacionarse efectivamente con el mundo exterior. Sin embargo, AIRN propicia la catalización de un proceso político que fortalezca a los habitantes, al hacerlos conscientes del *uso alternativo de sus recursos naturales*; motivando que los defiendan de maneras más apropiadas y flexibles, y con una sincronización más democrática entre sus normas y las normas de la sociedad dominante.

La *participación activa* de las comunidades indígenas y rurales dentro de los procesos de reconstrucción y preservación de los ecosistemas es vital porque las comunidades rurales e indígenas, regularmente, son quienes se encuentran en los lugares de mayor riqueza ecológica. Los habitantes de las zonas rurales conocen los tiempos de recreación de los ecosistemas y saben cómo deben ser tratados. Estos conocimientos provienen de un desarrollo cultural basado en un proceso de interacción singular social y ecológica. Por esa razón, los campesinos se hacen responsables y asumen la tarea de “guardianes de sus bosques” sin ninguna prestación adicional, es un trabajo más que deben realizar para poder hacer uso de sus ecosistemas denominados “Bienes de la Nación”. Es decir, los programas de rescate de ecosistemas, además, agregan dentro de su planificación “cómo rescatar a estos pueblos”, porque los ven como parte de la “fauna” puesto que portan un conocimiento amplio de su entorno natural; por lo tanto, a las culturas de esos habitantes las consideran en peligro de extinción. Esta estrategia transforma los problemas indígenas en problemas ecológicos, tratándolos como subordinados en lugar de reconocer sus derechos políticos de igualdad (Assies *et al.*, 2000). El proceso del AIRN reconoce la necesidad del *control territorial* por los

⁴ Por selecto se considera todo aquello que no dañe los sistemas ecológicos de una región o localidad.

locales porque los habitantes no podrían proteger y reconstruir un territorio sin un poder político. Esta premisa de control territorial, basada en la *articulación de cierta autonomía* (Regino, 1999) es el crisol donde se construye la recuperación de su dignidad, a través de la rehabilitación ecológica de “su” territorio y no el del patrón, del amigo o del gobierno. El control territorial es toral para los comuneros porque es en el *espacio local-regional* donde construyen día a día sus diferentes proyectos de vida, ya que es el uso de la biodiversidad territorial lo que les permite crearlos, recrearlos o abandonarlos. Este concepto de territorio se amplía desde el lugar donde están ubicadas sus viviendas hasta donde logren colectar la flora y cazar la fauna necesaria para su sobrevivencia. Éstos son los lugares de donde toman el material para hacer sus viviendas (morillos), obtener sus alimentos (animales del bosque y del río; siembra de maíz) y la energía para cocinarlos (leña).⁵ El control del territorio les ofrece una capacidad de autogestión, por lo tanto, la posibilidad de la continuidad de su línea de sangre a través de la herencia de la parcela a sus hijos. Este es el caso de estudio examinado en este capítulo.

21.2. EL MEGA RESORT BAHÍAS DE HUATULCO

La belleza paradisíaca del mar del Pacífico Sur, con el constante cambio del paisaje del bosque y las estacionales variaciones de color, llenaron de sueños a los políticos mexicanos. Al mirar la riqueza de los ecosistemas —apenas tocados por mano humana— y la pobreza material de los 300 habitantes de la comunidad de Santa Cruz se propuso un esquema de desarrollo de la parte frontal de la playa que siguiera con el éxito logrado en Cancún, en el sureste mexicano. A finales de los años setenta, los campesinos y pescadores recibieron gustosos al entonces presidente de la República José López Portillo y a la secretaria de Turismo, Rosa Luz Alegría, en su paseo de reconocimiento de la zona. Ninguno pensó que la visita tuviera, años más tarde, la repercusión que tuvo en sus vidas y en las vidas de los habitantes de los alrededores.

En 1984, durante el siguiente gobierno, regresaron funcionarios menores a ejecutar lo que se había dispuesto: expropiar 21 163 hectáreas comunales en 30 kilómetros de franja costera. El fin: construir la infraes-

⁵ Los recursos naturales para los habitantes de las localidades rurales e indígenas tienen una connotación de uso, tradición en decadencia debido a la crisis material en que viven, más que de comercialización a gran escala.

tructura apropiada que atrajera a los inversionistas extranjeros, principalmente, y nacionales deseosos de levantar grandes hoteles que compitieran con cualquier destino turístico internacional,⁶ transformando las Bahías de Huatulco en otro imán que contribuyera al desarrollo nacional. Hoy, Huatulco es un gran elefante blanco en temporada baja, que medio se colorea en temporada alta con turismo nacional procedente de la capital, regularmente. Aunque Huatulco se pone un “poco de rubor en las mejillas” en épocas de vacaciones, las grandes avenidas que llevan a las Bahías están vacías, carecen del bullicio de Acapulco o Cancún. A los comuneros, ahora extraños en lo que eran sus antiguas tierras, no les molesta mucho esto, porque de cualquier manera ellos no participan de la derrama económica como lo hacen los dueños de los grandes hoteles o los trabajadores traídos de otro lugar. Los hoteleros no contratan, comúnmente, a gente de la región para ejercer puestos de alta responsabilidad; pareciera que los habitantes están vetados para obtener esos trabajos. El puesto más alto que logran alcanzar en la zona hotelera es el de capitán de meseros, a pesar que el comunero ostente un documento que lo avale como licenciado en Administración de Empresas Turísticas u otro diploma profesional.

Los campesinos se preguntan ¿para quién fue el desarrollo? Se contestan que no fue para ellos. Nunca estuvieron incluidos dentro del paquete de desarrollo, quizás sólo como sirvientes de los dones y las doñas que llegan a Huatulco, pero no como socios del desarrollo. Antes de que Fonatur estableciera su feudo en las Bahías, los campesinos vivían de manera autosuficiente, sembrando maíz en sus parcelas y pescando el fruto del mar para venderlo entre los habitantes de la región. El sentimiento de pobreza no era parte de su realidad ni llegaba a los grados que hoy ellos perciben. Eran dueños del mar y de las parcelas de tierra adentro; aunque fueran comunales, con ellas regían su propio destino.

El 17 de abril de 1984, el *Diario Oficial de la Federación* publicó a manera de notificación, la solicitud que la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología hacia a la Secretaría de la Reforma Agraria para la expropiación de una superficie de 21 189 hectáreas de terreno,⁷ perteneciente a la

⁶ No es la intención de este ensayo describir la problemática que han vivido las comunidades de la costa de Oaxaca con la llegada del desarrollo. Sin embargo, se hace referencia a ello para ponerla como un ejemplo de lo detractor que ha sido el pensamiento tecnificado de las instituciones gubernamentales, al percibir que ellos tienen la verdad de lo que es el bienestar para los habitantes de esta nación. También, al mismo tiempo, se utiliza para hacer una comparación con la propuesta de desarrollo que ofrece el Centro de Soporte Ecológico en el próximo apartado.

⁷ Aunque la solicitud fue por esa cantidad, el número que Fonatur tiene a su cargo es de 21 163 hectáreas.

comunidad de Santa María Huatulco.⁸ Abruptamente el proyecto de vida de los habitantes de las rancherías ubicadas en las Bahías de Huatulco fue truncado por las autoridades, sin que se les preguntara si les interesaba o no cambiarlo por un terreno de 200 metros cuadrados donde vivirían en casas de concreto ubicadas en La Crucecita —pueblo sustituto de sus comunidades: Santa Cruz, Bajos de Coyula y Bajos del Arenal.

Los comuneros insisten en que no se oponían a la expropiación. Lo que ellos no aceptan es la forma en que se llevó, a través de una guerra de baja intensidad en donde corrió el dinero que compró el consentimiento de las autoridades locales y la presión psicológica hacia los “revoltosos”, como Fonatur llamaba a los líderes —para que desistieran de su lucha—. La resistencia fue minada cuando fue asesinado el líder principal, Alfredo Lavariega, la noche del 4 de noviembre de 1989. Muchas de las promesas están aún por cumplir. El complejo turístico, entonces, fue concebido y puesto en marcha dentro del discurso del desarrollo colonizador, desmembrador de los proyectos de vida rurales, excluyente y provocador de la verdadera pobreza material y cultural. Las comunidades rurales e indígenas no se oponen a la llegada de la modernización a sus vidas, lo que no aceptan es que los excluyan durante todas las facetas de su vida, que incluye una educación de calidad en los niveles básicos y profesional para que puedan participar de manera efectiva. Se les arrebató su vida y se les hizo a un lado, no se les preparó para tomar las ventajas que traen las nuevas oportunidades. Aún así, el gobierno no entiende por qué se incrementa cada año el número de pobres y no se da cuenta de que él mismo lo provoca con sus “buenas” intenciones desarrollistas. Esto sucede porque no se toma un espacio amplio para reflexionar sobre los impactos ecológicos y sociales antes de irse de misionero a sacar a los “indios” de su atraso. Pero los campesinos tienen esperanza de convertirse en los protagonistas del desarrollo que el gobierno federal trajo a su territorio. En los noventa una organización inusual llegó a la región, proponiendo un programa para la administración de los ecosistemas en el que las comunidades locales podrían participar.

⁸ Convenio celebrado el 23 de mayo de 1984 entre Nacional Financiera, Fonatur, Bienes Comunales de Santa María Huatulco, la Secretaría de Reforma Agraria, la Secretaría de Turismo, la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología, el Gobierno del Estado de Oaxaca y la Presidencia Municipal de Santa María Huatulco.

21.3. EL CENTRO DE SOPORTE ECOLÓGICO

Los inicios de la operación del Centro de Soporte Ecológico (CSE) se remontan al año 1992, cuando la filial de Fonatur, Baja Mantenimiento y Operación, solicitó a profesionales y académicos realizar una evaluación de los recursos naturales de la faja costera de las Bahías de Huatulco para su eventual uso sustentable. Durante el proceso, también se evaluó la batería de los pozos de agua que había perforado Fonatur en el río Copalita. Después de realizar trabajos de observación se encontró que existía una pérdida y un abatimiento en los niveles freáticos, repercutiendo en la altura del nivel en los pozos de agua.

Los resultados de los trabajos de campo no fueron del todo alentadores. El balance del agua de la costa había cambiado por las grandes cantidades extraídas y la filtración había disminuido notoriamente por la destrucción de la cubierta boscosa en la mayor parte del territorio. Los suelos estaban erosionados, y siguen erosionándose, por la misma pérdida de la cubierta forestal y por prácticas agrícolas que favorecen la pérdida de suelo. Las cuencas deforestadas y los cauces de los ríos están en un proceso de desertificación grave. Las condiciones anteriores originaron que el agua desapareciera totalmente en varios ríos importantes de la costa y esté por desaparecer en los demás, a menos que exista un cambio sustancial en los patrones de uso del agua y de uso del suelo. A partir de este hallazgo, el CSE estructuró su propia estrategia que revirtiera la dinámica desfavorable que existía —y aún existe— en la costa de Oaxaca.

La estrategia diseñada por el CSE está basada en un programa de reforestación de las tierras altas de la costa para regenerar y conservar los bosques. A través de la regeneración y protección del bosque, el centro también tiene la esperanza de crear oportunidades de empleo en las comunidades para hacer que el proyecto sea autofinanciable después de un periodo de ser subsidiado. También espera que esta estrategia impacte directamente en el problema regional de agua; reduciendo el flujo del agua en la superficie del suelo, y contribuir en la estabilización del flujo de los ríos, por lo tanto parar el proceso de desertificación (Barkin y Paillé, 2000; 2002). De esta manera, nace un proyecto con tintes ecológicos, pero que debido a las circunstancias se convierte en un proyecto sustentable a medida que algunos grupos comunales aceptaron adoptarlo como propio, consecuentemente ganando control de sus ecosistemas y de su economía local. Al crear procesos productivos “amigables”, el CSE colaboró en la generación de nuevas fuentes de ingresos congruentes con el programa general de extender y proteger el bosque.

El proyecto del CSE ha distado mucho de los programas fundamentados en el cuidado de la naturaleza dentro de parques ecológicos, donde la gente local no tiene un lugar legítimo. Contrariamente, el proyecto propone ser un catalizador para la recuperación de la vida digna de los habitantes, fortaleciendo las instituciones locales y diversificando la estructura productiva. Explícitamente rechaza las características de los programas paternalistas y clientelares implementados en México durante el periodo posrevolucionario, desde 1917. Sin embargo, uno de los problemas que viven las propuestas del Centro es la restricción por los retrasos en las entregas de dinero; debido a los trámites burocráticos de las fuentes de financiamiento que las apoyan: organizaciones internacionales con representación nacional, las autoridades de los gobiernos nacional, estatal, municipal y local. Para resolver estos problemas, el CSE forjó un modelo nuevo de administración basado en fideicomisos que incorporan a todos los socios que tienen que ver con la toma de decisiones, incluyendo las comunidades, los usuarios del agua y las agencias de financiamiento.

Sin embargo, esta característica hace que las alternativas ofrecidas por el CSE sean incluyentes porque involucran, dentro del proceso de la “producción de agua”, a todos los actores que pudieran ser beneficiados o afectados por la propuesta de desarrollo.

Por otra parte, la inducción de los programas en las comunidades de la costa de Oaxaca tiene tres objetivos: *a]* reconstruir y conservar las cuencas y los bosques de la región; *b]* aprovechar de manera sustentable los ecosistemas, y *c]* acompañar a los habitantes de la región Costa de Oaxaca en la recuperación de su dignidad. El primer aspecto busca llevar agua a los mantos freáticos de manera constante, dentro del segundo y el tercero se busca dar a los habitantes de estas regiones la posibilidad de reconstruir sus sociedades a través de la apropiación de sistemas productivos alternos. Es decir, al mismo tiempo que los campesinos estarían recuperando los ecosistemas, estarían utilizándolos de manera racional; a la vez se van capacitando en tecnologías limpias y actualizando sus tecnologías tradicionales en la cotidianidad, al ir resolviendo problemas prácticos. Un programa para el uso sustentable de los recursos naturales involucra usar los subproductos que traen los esfuerzos de mantenimiento, hacer uso de las ramas resultantes de podas y de la corta de arbólitos que obstruyen el crecimiento de otros. Lo anterior, evita que ellos escojan la tala de sus montes para venderlos al postor más cercano, que no es el que paga más, regularmente, o escojan la migración a los centros urbanos y abandonen el proyecto.

Si el proyecto del Centro de Soporte Ecológico no tomara en cuenta la potencialidad enorme que existe en el conocimiento tradicional mantenido por las comunidades, el proyecto ignoraría la realidad local y sería

uno como todos los proyectos generados en un escritorio de ciudad. La relación entre el Centro y las comunidades está formalizada a través de la figura jurídica denominada Sociedades en Solidaridad Social (triple S), sociedad que tendrá una vigencia de 15 años. La triple S está comprometida en generar fuentes de trabajo que permitan obtener ingresos a sus socios; así, como a conservar los recursos naturales de la región dentro de un contexto de producción, industrialización y comercialización de madera en rollo y productos forestales. Para transmitir algo del sentido de la calidad de la estrategia de intervención, se examinan los detalles de las diferentes maneras en las que las comunidades adaptaron las oportunidades creadas por el Centro de Soporte Ecológico.

21.4. PARTICIPACIÓN LOCAL EN XADANI, PETATENGO Y EL ACHIOTE

Romantizar a las comunidades sería un craso error porque son *culturas híbridas* (García Canclini, 1989) que viven apropiándose de elementos socioculturales del resto de la sociedad para poder sobrevivir —paradójicamente— dentro de sus formas de expresión. Esta disponibilidad ha abierto espacios en los que diferentes personajes construyen cotos de poder, incrementando la polarización entre los dos proyectos de vida que dividen a las poblaciones rurales: uno con tendencia capitalista y otro con permanencia en lo tradicional. Muchas de las comunidades rurales e indígenas son, hoy, el campo de batalla de los nuevos mensajeros de occidente, a los que hemos llamado, caciques de nueva cuña:

- a] *cacique económico*: el tradicional finquero o comerciante que sirve de intermediario entre el mayorista y el campesino;
- b] *cacique político*: es el cacique moderno, campesino de la élite, aquel que ha vivido o estudiado fuera de su localidad, quien, generalmente, es el coordinador de los programas traídos del exterior, el representante de algún partido político o el que gestiona ante las instituciones gubernamentales beneficios para la comunidad;
- c] *cacique religioso*: éste ha dejado de ser sólo el “padrecito” de la iglesia del pueblo, ahora está personificado por los líderes de las diferentes religiones que llegan a salvar las almas de los pobres “indios”, a los que aún se les sigue considerando *infieles* (Ricard, 2000; Villoro, 1996).

Se ha observado que cada uno de los diferentes caciques, de una u otra forma, presionan económicamente a los campesinos, haciéndoles

creer que el camino de la salvación está pavimentado, ya sea por el diezmo que entregan o por el pago para tener la “posibilidad” de inscribirse en un programa de apoyo al campo. La presencia cotidiana de los salvadores —económicos, políticos o espirituales— es una fuente de división continua que compite por la atención preferencial de los campesinos, incitándolos muchas veces a que rechacen otras propuestas diferentes a las que a ellos les urge que abracen. Estas situaciones hacen que la llegada de nuevos extraños —regularmente mensajeros del bienestar espiritual o material— a la comunidad levante olas de desconfianza entre la población, con mucha razón porque ha sido presa del despojo y del engaño por muchos años. Un ejemplo, de ese rechazo, fue la llegada del CSE a las comunidades enclavadas dentro de las inmediaciones de la cuenca del Río Zimatán; al principio causó alegría porque para los campesinos significó la posibilidad de obtener algo gratis, pensando que la invitación tenía el carácter similar a las actividades que realiza el gobierno en periodo de elecciones. Sin embargo, cuando el programa ya se fue estableciendo dentro de la región, sólo un pequeño número de habitantes se adhirió a él, haciéndose a un lado aquella parte de la población que pensó y piensa que la estrategia puede ser una medida para arrancarles de las manos la poca o mucha tierra fértil a la que tienen acceso. Estos pensamientos, inducidos por las diferentes partes que desean obtener la privilegiada atención de la mayoría de los habitantes, y como resultado de las experiencias vividas a raíz de la llegada del Desarrollo Turístico de Bahías de Huatulco, presentan al CSE como una fuente divisoria más dentro de la vida de los comuneros.

Sin embargo, los individuos que han aceptado la propuesta continúan participando con bastante entusiasmo. Éste es el caso de los habitantes de la comunidad llamada Santa María Petatengo, donde un grupo de 25 comuneros, no sólo trabajan con ahínco en la reforestación, sino que solicitaron que la agrupación estuviera enmarcada dentro de una “personalidad jurídica”. De tal manera, que el Centro buscó la más idónea y en 1998 se constituyeron como una Sociedad de Solidaridad Social —“triple S”—. A esta sociedad se les unen, en temporada de reforestación, comuneros que no son socios, pero que forman parte de la comunidad, tomado a la actividad como un empleo temporal. Estas personas no tienen una presencia definitiva, principalmente, porque carecen de tierras y las que tienen —si es el caso— las utilizan para la siembra de maíz.⁹

⁹ En el trabajo de campo realizado en las tres comunidades se encontró que en El Achiote 57.14% de la población posee tierras comunales; 42.85% posee tierras privadas y de las 14 familias, 21.42% declara tener propiedad mixta y sólo 7.14% trabaja en tierra prestada.

Estos comuneros, que laboran ocasionalmente dentro de los programas, son nuevos en los poblados, a los que llaman “avecindados”, gente allegada a la región por unión matrimonial, expulsión de sus pueblos, profesar otras religiones o ser vistos como amenaza al afiliarse a partidos políticos diferentes al hasta hace poco institucional (Partido Revolucionario Institucional). El ser avecindado les dificulta tener una buena cantidad de hectáreas suficientemente fértiles para obtener el maíz necesario para sobrevivir durante el año, ya que el número de habitantes en crecimiento hace que éstas escaseen. Para tener un ingreso adecuado para la alimentación familiar se contratan como mozos¹⁰ en la preparación de la tierra, la siembra y la cosecha de maíz, o yéndose a “pizcar”—léase cosechar— café cuando es la temporada; tomando trabajos temporales cuando el gobierno los promociona, como el apagar los incendios forestales en la temporada de secas o bajando a La Crucecita, el pueblo que da servicio al proyecto turístico, a realizar labores en el ramo de la construcción o en los restaurantes, ya sea como meseros o ayudantes en la cocina.

Las comunidades son pequeñas y ubicadas en un extenso territorio; tomándose en representación tres de ellas: Santa María Petatengo, El Achiote y Santa María Xadani. Petatengo, es un pueblo fundado en 1972 por 30 ciudadanos,¹¹ donde hoy, la mayoría son integrantes de las triple S. Esta participación se debe a la cohesión que se ejerce a través del control paterno, más que materno, por la necesidad de apoyo mutuo para cultivar la tierra; además, tienen un historial de concreción de procesos autonómicos como el convertirse en Agencia de Policía Municipal, liberándose de la autoridad administrativa de Xadani. La cohesión a través de redes interfamiliares, también se manifiesta entre los habitantes de El Achiote —una población pequeña de 14 familias—. Esta distinción, hace pensar que la conformación de un proyecto comunal es más posible porque existe una interconexión familiar directa (hermanos, tíos, sobrinos, hijos, etc.) o indirecta (compadres), es decir que dentro del pueblo todos son familia de una u otra manera, haciendo posible una comunicación rápida y de apoyo mutuo.

En contraste, en Santa María Xadani la división interna es muy grande

¹⁰ Mozo, para los habitantes de la región, es aquella persona que trabaja en la preparación, siembra y cosecha de la tierra y recibe un sueldo por ello.

¹¹ Se denomina ciudadano al jefe de familia que es el representante de todos sus miembros. Se reconoce como ciudadano a un varón que contraiga matrimonio, pero desde los 18 años un muchacho tiene la obligación de prestar servicios a la comunidad para que pueda tener derecho a los bienes de la comunidad.

debido a los diferentes caciques presentes en el pueblo. No permiten que los procesos catalizadores, como los inducidos por el Centro, sean aceptados si no tienen un carácter paternalista o clientelar. En estos momentos, los xadaneros ven con no muy buenos ojos a los de Petatengo porque están empezando a concretar una de las alternativas productivas: el torneado de ramas de árbol para la construcción de muebles y bates de beisbol. Además, Xadani condicionó su participación formal al proyecto, hasta comprobar que los habitantes de Petatengo tengan un éxito económico en la transformación de ramas en bienes de consumo. En El Achiote la reforestación es realizada por todas las familias y el proceso alternativo del cual se están apropiando es el de la fabricación de alebrijes.¹² Lo hacen en sus horas libres y de manera comunal. Es decir, unos labran la madera, otros la pulen y curan con gasolina, y otros la pintan. Como ya se dijo antes, la relación es estrecha porque se trata de una red de relaciones familiares acostumbrada a trabajar en comunalidad, debido a sus carencias. Hoy, la ranchería, ubicada a 3 kilómetros de Xadani, cuenta con energía eléctrica y un teléfono rural, obtenidos en el año 2000 y 2001 respectivamente.

Las respuestas mencionadas anteriormente, permiten entender que, aunque las comunidades se encuentran a distancias relativamente cortas, cada una de ellas va tomando su tiempo para construir su propia estructura productiva y articular la cierta autonomía que viven con el resto de la sociedad. No hay recetas hechas para diseñar un proyecto de desarrollo de una región o del territorio que abarque un ecosistema definido; sin embargo, pueden existir guías que apoyen en el diseño cotidiano —como la AIRN— que tenga como eje motor la participación y anuencia de los habitantes locales. A este proceso se le puede agregar la formación, paralela, de redes de intercambio justo con el resto de la sociedad; redes que contemplen el respeto a las áreas que pudieran impactar, debido a las demandas, el ámbito social, cultural, económico o ecológico del territorio.

Las comunidades están activamente involucradas en un complejo proceso de negociación para la integración del nuevo proceso en sus estructuras sociales tradicionales y productivas. Esto requiere cambios continuos en los papeles sociales y cambios en las alianzas políticas dentro de la comunidad y con las fuerzas externas. Como podrá observarse en la

¹² Figuras fantásticas labradas en madera por las comunidades de la Costa de Oaxaca representan a los animales de la región como son: ardillas, venados, pumas, entre otros. Por lo tanto, son piezas diferentes a las que se labran en los Valles Centrales del Estado de Oaxaca.

sección siguiente, también involucra traducir diferentes concepciones, del mismo fenómeno, a un aceptable entendimiento mutuo.

21.5. LOS TIEMPOS DE LOS DIFERENTES PROTAGONISTAS

El fortalecimiento interno de las comunidades se ha ido dando paulatinamente. Sin embargo, el proceso ha encontrado áreas de oportunidad a desarrollar, reconstruir, inventar o detallar. Lo anterior significa que, además de la desconfianza natural de los habitantes, existen contratiempos inmersos en las negociaciones con las fuentes de financiamiento y el trámite burocrático de los permisos para el aprovechamiento de los recursos; sin dejar de mencionar las “patadas debajo de la mesa” de los demás agentes externos que desean ser los únicos en *acompañar*¹³ a las comunidades en la construcción de un proceso de desarrollo endógeno. Otro obstáculo significante se refiere las diferentes maneras en que las partes miden los cambios y los ritmos de adopción de las innovaciones propuestas. Estas variaciones en las concepciones del tiempo son en sí mismas extremadamente importantes para entender la dinámica del proceso de cambio. Esta serie de tiempos¹⁴ son:

- a] los tiempos de las comunidades enmarcados dentro de sus estructuras de gobierno tradicional: asambleas;
- b] los tiempos de las fuentes de financiamiento nacionales e internacionales para otorgar el presupuesto para la generación de la infraestructura física y humana necesaria que potencie a las comunidades como protagonistas de los sistemas productivos y de servicios sustentables; y,
- c] los tiempos de las instancias burocráticas gubernamentales para emitir los permisos necesarios para el aprovechamiento de los recursos naturales.

¹³ Debido a que la característica de los apoyos a los habitantes rurales siempre ha estado fincada en su planeación en un escritorio lejano del lugar, por alguien que no conoce nada, ni de la cultura, ni del ecosistema; se propone que el “experto” ya no diseñe las alternativas de acuerdo a su inspiración, sino que las construya con la participación activa de los implicados y que se remita a acompañarlos en todo el proceso de definición hasta la apropiación del mismo por parte de la comunidad.

¹⁴ La palabra “tiempos” aquí se utiliza para hacer referencia a las etapas involucradas en el proceso de concreción de un evento o actividad. La observación sobre los tiempos a conjugar fue hecha por el arquitecto Jorge Rocha, antiguo residente del Centro de Soporte Ecológico.

En este tenor, se ha observado que la “sustentabilización” de espacios definidos de tierra se lograría cuando los tiempos humanos se acotaran a los tiempos de recreación de la naturaleza. Éste sería el cuarto tiempo a conjugar y el más importante a considerar por ser el “proveedor” de los recursos a aprovechar.

Este acoplamiento es algo complejo de estructurar ya que, tanto los intercambios de información, como la construcción del proceso productivo alternativo, se dan dentro de dos culturas diferentes: una, donde sus códigos culturales están definidos a partir de una relación más cercana con la naturaleza y la otra, con el código cultural de las leyes del mercado capitalista. La experiencia sugiere que se requiere la calibración de la relación entre los tiempos humanos, mencionados antes, con los tiempos ecológicos. Esto nos hace inferir que el logro de una “sustentabilización” suficientemente flexible necesita de la participación de un “socio intermediario” que sea capaz de definir ventajas y carencias del territorio que sirvan para diseñar estrategias que lo conviertan en un espacio sustentablemente competitivo, sensible a las necesidades y demandas de todos los protagonistas involucrados, y consciente de la importancia de su papel como catalizador del proceso de reconstrucción de la diversidad social y ecológica que se está realizando.

La práctica de una ética particular debe ser el sello que marque la capacidad de gestión, ya que su trabajo estriba en ser un *articulador de culturas*¹⁵ que está, al mismo tiempo, catalizando la construcción de un proceso político, al capacitar a los habitantes en habilidades que desconocen y al mostrarles caminos para interactuar con el resto de la sociedad. Indudablemente, una de las partes, del conjunto de actividades, más difíciles de armonizar es la sincronización de las culturas. Para disminuir la presión, se cree imperante hacer communalidad,¹⁶ con el objetivo de

¹⁵ Una especie de traductor de las concepciones de las recreaciones de la vida dentro de ciertos ambientes —tecnificados o aún apagados a la naturaleza—. Es decir, un embajador de la diversidad sociocultural y ecológica. Éste puede ser una institución de gobierno, universidad o de la sociedad civil.

¹⁶ Comunalidad es el hecho de involucrarse en las formas de gobierno de los pueblos, a las que se les denomina: usos y costumbres. Floriberto Díaz (indígena mixe) expresa que “la comunidad, sus formas de autogobierno y reglas normativas (usos y costumbres) tienen mucho que ver con aspectos ligados a la tierra, al idioma y a la educación”. Díaz se refiere a la comunidad no sólo como un conjunto de casas con personas, sino personas con historia, pasado, presente y futuro, que no sólo se pueden definir concreta, físicamente, sino también espiritualmente en relación con la naturaleza toda” (Robles y Cardos, 2008). En este sentido, los habitantes de las comunidades utilizan este espacio para realizar acciones de recreación y transformación de la naturaleza, teniendo como vínculo de primer orden los sistemas productivos creados a través de la relación estrecha con la tierra. Alrededor

poder hacer una conceptualización intelectual y diseñar acciones acorde a los “usos y costumbres” de la localidad, además de ganarse su confianza. Estos conocimientos se utilizan para que los procesos logren alcanzar un cierto nivel de fluidez, sin que se trastoque la premisa del intercambio justo y sin dejar de poner una especial atención a los tiempos de recreación de la naturaleza.

El requerimiento de un “socio intermediario” podría verse como un impedimento para el logro de la construcción de autonomía local y regional de los pueblos porque crea una dependencia de un intermediario entre las tres partes: la cultura occidental, la cultura tradicional y la naturaleza —que define el ritmo general de los proyectos.

Sin embargo, debido a la situación actual de los pueblos marginados se tiene que confiar y buscar la “mejor oferta” personificada, ya sea, en ONG, gente de la localidad, de la sociedad civil o del mismo gobierno. La mejor estaría representada en aquel intermediario que tenga, como virtud, la sensibilidad para calibrar las dos culturas de manera justa y que cuente con especial respeto por la diversidad cultural, social y ecológica. El intermediario, de esta manera, estaría en las condiciones para acompañar a las comunidades interactuar con el resto de la sociedad, permitiendo su fortalecimiento al ir aprendiendo a sortear los problemas que van presentándose —ya sea provocados por la tardanza en la emisión de permisos para el aprovechamiento de los recursos naturales o por la oposición de los sectores dominantes dentro de la población—.¹⁷ Las comunidades tendrían la oportunidad de ir trazando estrategias conjuntamente con el “socio” que les permitiría internalizar el proceso de

de esta relación hombre-tierra se generan las diferentes formas de expresión que le dan sentido a los usos y costumbres. Al cambiar una de las partes se empiezan a desarticular las demás expresiones amarradas al núcleo, empezando a perder la razón de permanencia en las localidades cercanas a la naturaleza; así como la preservación de las tradiciones poco congruentes con el sistema dominante. Si se pierde el sentido de lo que significa la tierra para el hombre —en términos de trabajo y sustento—, la comunidad inicia un proceso de desintegración que la lleva a hacer concesiones a los sistemas dominantes en la búsqueda del sustento —por ejemplo se tiene la migración a las grandes urbes.

¹⁷ Esta situación es la que hace precisamente objetar la viabilidad del proceso autonómico a través de proyectos de reconstrucción ecológica, porque están sometidos a la “buena voluntad” de agilización de los trámites por parte de las instancias financieras. Además, sin la inclusión de leyes constitucionales que les respalden, se encuentran inermes ante las políticas emitidas por el gobierno y se corre el riesgo de dar por terminado un proyecto si se hace una observación desde la élite gobernante para su conclusión. Sin embargo, el proceso político local le da espacio a las comunidades para encontrar las formas de conformar sus propias estrategias, a través del fortalecimiento que encierran las experiencias.

aprendizaje e iniciar el hacerse cargo de sus propias generaciones de ingresos con pasos cortos y firmes. Asimismo, los habitantes del mundo rural se adentrarían en el proceso de establecer los términos en que se va fundamentando la articulación de su autonomía comunal con las condicionantes sociopolíticas y económicas del resto de la sociedad.¹⁸

El CSE fue un socio intermediario efectivo entre la comunidad y las instituciones políticas nacionales por un largo tiempo. A diferencia de muchas otras ONG mexicanas, fue cuidadoso de no apropiarse ninguno de los recursos, ya sea que provinieran del gobierno mexicano o de fuentes internacionales, para enriquecimiento personal, ni siquiera para financiar otros proyectos. Cuando se combina con la efectividad en implementar las actividades productivas descritas en el capítulo, se adquiere una reputación positiva en los círculos oficiales como un colega confiable y un conductor de programas diseñados para promover administración local efectiva, además capaz de balancear las concepciones de tiempos para lograr las metas y avanzar en los objetivos. Desafortunadamente, fue menos efectivo para trascender las divisiones dentro de la comunidad, divisiones que fueron usadas por individuos oportunistas y por intereses políticos que restringieron la efectividad del CSE. Cuando las condiciones naturales también se vuelven adversas —limitando la habilidad de plantar más árboles y el aseguramiento de la producción para la subsistencia local como resultado de una extensa sequía ocasionada por un ciclo del fenómeno meteorológico de El Niño— muchos de los participantes locales fueron forzados a migrar en la búsqueda de ingresos, como resultado el CSE ha tenido que suspender las operaciones.

¹⁸ Se puede inferir que el proceso las convertiría en comunidades administradoras de tecnologías modernas y sustentables, sin que esto les imponga percibir el mundo dentro de una cosmovisión occidental, a menos que ellas así lo decidan. Sin embargo, el hecho de que ellas permanezcan dentro de sus formas tradicionales de vivir no quiere decir que no sean modernas, lo son, porque viven en este momento histórico y no en el pasado, dentro de una *cultura híbrida* (García Canclini, 2001) debido al resultado de combinaciones de patrones modernos con patrones tradicionales: esto significa que no son sociedades atrasadas —como suele llamárseles— sino que son sociedades que han decidido quedarse dentro de las inmediaciones de la naturaleza, aunque apropiándose de conocimientos externos y recreándolos dentro de sus estructuras productivas y socioculturales para que les sirvan como marco de articulación con el resto de la sociedad, dentro de su propia visión.

CONCLUSIONES

La llegada de Fonatur a las costas de Oaxaca provocó negociaciones desventajosas para los habitantes locales, los que finalmente se quedaron con las limosnas que el gobierno federal decidió entregar. En este contexto, llega una ONG con una propuesta diferente de desarrollo, negociado en términos donde se permite la participación activa de los comuneros y se comparten conocimientos que ayudan a construir un proyecto de vida cercano a lo integral. La diferencia entre la propuesta de desarrollo llevada por Fonatur y la del Centro de Soporte Ecológico se encuentra en que, el primero fue un proceso que no tomó en cuenta las restricciones existentes en los recursos naturales, al no analizar la perdida de bosque en las zonas altas de la costa y la desecación que se estaba produciendo. Contrariamente procedieron a hacer pozos en las márgenes del Río Copalita sin establecer un proceso de reversión de la deforestación sufrida por el saqueo de madera. Además, las comunidades fincadas en la zona costera sufrieron el despojo de sus tierras, al que llamaron expropiación por ser zona federal, al recibir un pago magro por sus hectáreas o, en algunos casos, sólo el alambre que definía la demarcación de sus terrenos. Por otra parte, se impusieron nuevas normas de vida, diferentes a las que los habitantes tenían, al condicionarlos a vivir en paredes de concreto sin la posibilidad de hacer uso de los recursos naturales que consideraban propios. No permitieron que la población participara ampliamente en la definición de los servicios que ofrece el desarrollo turístico, tomándolos sólo como mano de obra barata.

El CSE, en contraste, operó un proyecto de desarrollo con financiamiento limitado, pero comprometido en hacer un programa que mejorara la habilidad de los comuneros para administrar el ecosistema local y, en el proceso, disfrutar un estándar de vida mejorado. Diez años más tarde, su propuesta ha empezado a ser apoyada a medida que la severidad de la crisis ambiental pone en relieve la importancia de los sistemas indígenas de conocimiento y la biodiversidad local. Sin embargo, la economía internacional los valora como parte de la “fauna” a rescatar porque guardan los secretos de los ecosistemas en peligro de extinción (Assies *et al.*, 2000).

El proceso de reconstrucción y preservación que están llevando a cabo las tres comunidades de la Costa de Oaxaca tiene como base la rehabilitación de sus bosques y cuencas. El Centro de Soporte Ecológico propicia la participación activa de los comuneros y el fortalecimiento de los lazos con la tierra al proponerles el aprovechamiento de sus recursos naturales de manera sustentable. De esta manera ellos tomarán el control de su

territorio al ver las posibilidades que les ofrecen el cuidado y restablecimiento de sus ecosistemas. Sin embargo, las propuestas no han sido recibidas con bombo y platillo por los comuneros, contrariamente se ha llegado a pensar que la intención es el despojo y el beneficio por parte del CSE. El Centro estableció convenios por quince años en el modo de triple S; en este sentido, tanto el Centro como las triple S se encuentran en un proceso de observación, por el resto de los habitantes, hasta que prueben ser la alternativa que cubra en primer lugar, las necesidades básicas y en segundo lugar, que sea el canal de comunicación que les sirva de base para reconstituir sus sociedades.

22. LA PRODUCCIÓN DE AGUA EN MÉXICO: APORTACIÓN CAMPESINA AL DESARROLLO MEXICANO¹

22.1. EL RETO

Hasta ahora, pocos han cuestionado la costosa infraestructura construida para extraer agua del subsuelo y reencauzar los ríos, almacenándola en presas, trasladándola largas distancias, e incluso elevándola a grandes alturas. A pesar de que aún se usa la mayor parte del agua disponible para fines ganaderos y agropecuarios, se requieren volúmenes cada vez mayores para las áreas urbanas y zonas industriales. Sin embargo, las exigencias del medio ambiente están obligando a los gobiernos a dejar de pensar en el agua como un recurso natural renovable inagotable, virtualmente disponible en cantidad ilimitada. Como resultado, en todo el mundo hay esfuerzos encaminados a reducir la demanda de consumo de agua, proteger las fuentes de suministro existentes y asegurar que se mantenga la calidad de los recursos después de que han sido utilizados. Se busca concientizar a la población sobre la necesidad de conservar y reciclar el agua, al mismo tiempo que se trabaja en el desarrollo de sistemas de tratamiento más efectivos y menos costosos.

Actualmente, sin embargo, no existen mecanismos apropiados que aseguren la conservación y reconstrucción de las fuentes naturales de agua. Estas fuentes son el origen de la mayor parte del agua que es distribuida (ya sea naturalmente o mediante sistemas modificados por la sociedad) y que abastece los mantos freáticos del subsuelo, los ríos y las presas, que son la fuente más inmediata de agua para el desarrollo. No hay profesionistas encargados de la administración de los recursos naturales en aquellos ecosistemas en los cuales se originan nuestros suministros de agua, ni tampoco existen programas sistemáticos para incrementar la capacidad de captura de una mayor proporción de agua pluvial a nivel nacional, y almacenarla de manera que se mantenga su calidad y entonces ponerla al servicio de la sociedad.

Las instituciones de desarrollo rural y las compañías de generación de electricidad se han unido en todo el mundo para forjar una infraestruc-

¹ Publicado en *Cahiers des Amériques Latines*, vol. 40, 2003, pp. 19-32.

tura hidráulica de gran escala, creando oportunidades para algunos privilegiados y pesadillas para aquellos cuyas tierras han sido inundadas (Barkin y King, 1970; McCully, 1996). Las empresas y las autoridades responsables del recurso agua generalmente construyen y mantienen la infraestructura para almacenamiento y distribución del agua disponible para uso doméstico o industrial; raras veces se involucran en incrementar la disponibilidad del agua en fuentes ya existentes.² (Por supuesto, existen numerosos esfuerzos por obtener el control sobre ciertos abastecimientos “naturales” de agua o hasta de redistribuir su producción en el tiempo y el espacio, a través de acciones como construcción de presas y bombardeo de nubes.) Los patrones globales climáticos también están cambiando debido a factores que no están comprendidos del todo. Se han presentado modificaciones significativas en el tiempo y el espacio de los patrones históricos pluviales, cambios que ejercen impactos severos en los sistemas productivos y las áreas urbanas. Como resultado, no es extraño que la gente examine el problema del balance hidráulico y argumenten que en un futuro no muy lejano, muchos conflictos sociales se originarán en la lucha por el acceso al agua.³

Este ensayo se enfoca en la escasez del agua. El problema puede ser atacado en su origen si las comunidades rurales agropecuarias se movilizan para incrementar el abastecimiento de agua para sus propias necesidades, así como para la sociedad en su conjunto. Modificando nuestra perspectiva y concentrándonos en aumentar la capacidad de la sociedad en producir agua además de lograr un uso más efectivo, una serie de beneficios interrelacionados mejorarán dramáticamente tanto las condiciones de salud como las productivas en algunas de las comunidades agropecuarias más pobres de México, a la vez que reducirá la escasez del agua en las regiones en cuestión. El análisis se enfoca en las investigaciones científicas, técnicas y sociales hacia el perfeccionamiento de nuestra

² Un cambio importante en la concepción de dichas empresas o agencias fue implementado en las cuencas que alimentan a la ciudad de Nueva York. Como respuesta a una orden de la Agencia para la Protección del Medio Ambiente ordenando la construcción de una planta de tratamiento de agua para reducir la contaminación en las vertientes regionales, se propuso un ambicioso programa para modificar las prácticas agropecuarias. Después de un programa piloto que comprobó su efectividad, la EPA aprobó la propuesta alternativa y Nueva York está financiando la implementación de este programa entre los granjeros de la región en lugar de construir la planta de tratamiento de agua, mucho más costosa (Appleton, 2002).

³ Consultar los números especiales del *International Journal of Water Resources Development*, “Compartiendo Recursos Hidráulicos”, vol. xi: 4 (diciembre de 1995), y “Manejo de Aguas Internacionales”, vol. XIII: 3 (septiembre de 1997), así como Biswas (1996).

capacidad colectiva de producir agua, capturando una mayor proporción de agua pluvial, especialmente en áreas de mayor presión por la falta de suministros. Lo anterior involucraría la implementación de nuevos métodos para la colección y almacenamiento del agua para necesidades locales, el desarrollo de las prácticas de manejo del suelo y agua para reducir el escorrimiento del agua y la consecuente erosión, y mejorar la capacidad del ecosistema para absorber el agua. Los volúmenes crecidos tendrían que ser canalizados hacia mantos freáticos, lagos, reservas, o estructuras de almacenamiento como presas; el agua sería conservada y su calidad mejorada para luego ponerla al servicio de la sociedad. Tal proyecto es idealmente propicio para los sectores de campesinos de la población en gran parte del tercer mundo, y particularmente en México. Son ellos quienes ocupan partes sustanciales del territorio en el que el agua tiene gran demanda y donde la modernización de la producción y el abandono de los cultivos tradicionales e incluso de tierras, han reducido significativamente la capacidad de absorción de los variados ecosistemas.

22.2. LA PRODUCCIÓN DE AGUA

Es importante explicar por qué llamamos a este proyecto “la producción de agua” en lugar de “la cosecha de agua pluvial”, un título mucho más común. Históricamente, la constitución natural de la tierra y la vegetación facilitaba la filtración del agua hacia los mantos del subsuelo. Las cuencas naturales de almacenamiento se expandieron por medio de procesos que respondían a la disponibilidad del agua. A medida que los asentamientos humanos ocasionaron el aumento de la demanda del recurso agua, los niveles naturales de reabastecimiento disminuyeron y los mantos freáticos se redujeron.

El problema de la administración del agua en general se ha ido transformando en programas costosos para financiar la construcción de obras públicas para la colección, transporte y almacenamiento en grandes presas (McCully, 1996). Esta solución “moderna” es parcialmente una respuesta a los crecientes problemas de la degradación de la tierra como resultado de prácticas agrícolas inapropiadas y los nuevos patrones de cultivo, reduciendo la capacidad de muchas regiones de permitir que el agua se filtre al suelo. Como las demandas efectivas de agua para los agricultores, industriales y ciudadanos están sumamente concentradas, esta infraestructura del agua ha estado localizada preferentemente para servir a una clientela adinerada y moderna. Crea posibilidades para que

los grupos sociales privilegiados tomen ventaja sobre las oportunidades que generan estas inversiones. Como resultado, un círculo vicioso de degradación del medio ambiente y modernización agrícola en las partes más bajas de las cuencas productivas ha polarizado aún más las regiones en cuanto al control de la producción y de los recursos. Las comunidades más pobres se encuentran relegadas a las áreas marginales, contribuyendo aún más al deterioro por la falta de recursos e incentivos para proteger sus áreas, sin plantear la urgencia de revertir el daño causado por décadas de negligencia.⁴

Redefiniendo el problema para incrementar los suministros de agua en países como México, es posible identificar métodos para elaborar nuevas políticas. Nos enfocamos en la organización social en lugar de simplemente hacerlo en las obras públicas que se requieren para recolectar el líquido; una vez controlada y captada, el agua puede ser canalizada a estructuras de almacenamiento para su aprovechamiento posterior. De esta forma, podemos explorar la importancia obvia de que la disponibilidad del agua no solamente dependa de los recursos naturales y tecnológicos. Tomar en cuenta estos procesos sociales es crucial si se van a diseñar políticas para impulsar a la gente a modificar sus técnicas de cultivo y las prácticas de manejo del suelo y agua en las regiones más altas de las cuencas, a las cuales muchas comunidades indígenas y campesinas han sido relegadas. Esto podría ser un método efectivo para incrementar los suministros de agua en muchas partes del país, puesto que son éstas las regiones que reciben mucha del agua pluvial que podría ser capturada para usarse directamente, así como para transportarse a otras áreas para su empleo productivo.

Por eso, decidimos reorientar el análisis hacia este complejo proceso social, identificando al proyecto como “la producción de agua”. La modificación de estos procesos sociales para aumentar los suministros de agua requiere de una reorganización de los sistemas productivos actuales y la estructura social. Para instrumentar la propuesta, exploraremos el desempeño de varios proyectos que se han centrado en las comunidades de pequeños agricultores para mejorar las técnicas de manejo del agua y del suelo en varias partes de México. Este proyecto está diseñado para

⁴ La negligencia histórica generalmente es el resultado de medidas públicas que explícitamente discriminan la producción de cultivos alimenticios tradicionales a favor de productos comerciales de alto valor, de exportación o para el ganado. Con la consolidación del mercado internacional de granos, las comunidades locales son orilladas a continuar utilizando sus prácticas tradicionales de manejo del medio ambiente o incluso seguir sembrando aquellos cultivos que mejor se adecuan a sus regiones y estructuras sociales (Barkin, 1991).

promover la formulación de una política nacional sobre la producción de agua según los lineamientos presentados en la última parte del artículo.

22.3. AGRICULTURA Y EL PROBLEMA DEL AGUA EN MÉXICO

Las comunidades campesinas se empobrecieron. Con los precios de sus productos en declive y sus costos en aumento, los campesinos sufrieron una pérdida de poder adquisitivo; sin acceso a nuevas tecnologías y la disminución de la fertilidad, todo como consecuencia de presiones externas, estas comunidades carecían de recursos para adquirir los diferentes tipos de fertilizantes y en las cantidades apropiadas, mientras que las plagas parecían aumentar su impacto destructivo. La emigración se intensificó, no sólo atrayendo a las nuevas generaciones carentes de tierras, sino también a aquellas cuyas tierras ya no podían ofrecer el sustento necesario para mantener a una familia, aun con los bajos niveles de subsistencia a los cuales se habían acostumbrado. El deterioro ambiental se aceleró con la compactación del suelo, la erosión y la deforestación, resultado de técnicas de labor inadecuadas; muchos creen que incluso las lluvias se han vuelto más irregulares, intensificando aún más el daño causado por los procesos de cultivo inapropiados. Menos agua penetra en el suelo para alimentar los mantos freáticos y las corrientes superficiales aumentaron sus velocidades con un creciente efecto destructivo, creando problemas para abastecer a los distritos de riego con los volúmenes requeridos.

Este círculo vicioso no ha pasado desapercibido. Las propias comunidades estaban al corriente de sus problemas, y buscaron soluciones de organismos del país e internacionales. Se tenía la noción general de que una respuesta comprensiva requiere de programas multifacéticos diseñados para los microecosistemas agropecuarios específicos. A pesar de que el tema del agua era prioritario, las respuestas oficiales generalmente fueron burocráticas y autoritarias; raramente abordaban las necesidades directas de las comunidades más pobres y virtualmente nunca atendieron a aquellos que no tenían sus propios suministros de agua. La medida oficial más importante que se implementó fue la devolución del control de los distritos de riego a sus usuarios, quienes fueron encargados del financiamiento de su mantenimiento y operación. Asimismo, se fortalecieron las estructuras administrativas y técnicas de los distritos de locales de agua potable y aumentaron las tarifas del agua para que fueran autofinanciables (Austin y Esteva, 1989; Appendini, 2001; Barkin y Suárez, 1985).

Pocos programas respondían a las necesidades comunitarias locales. Sin embargo, éstos fueron defendidos por grupos pequeños de expertos trabajando directamente con grupos comunitarios como parte de programas más amplios del gobierno o financiados directamente por organizaciones no gubernamentales (ONG). Estos proyectos generalmente se enfocaron en el mejoramiento de técnicas para el manejo del suelo y del agua que permitieran una diversificación de la producción y un incremento de la productividad. Los esfuerzos más ambiciosos atacaban el problema frontalmente, movilizando a la gente para emprender obras públicas que contribuyeran a reducir o incluso revertir la erosión; las pequeñas estructuras que promovían ayudaron a reconstruir las pendientes dañadas o crear terrazas, usando diversos métodos que incluían la siembra de árboles y otros rompevientos que permitían cosechar los granos, legumbres y frutales.⁵ ONG y algunos proyectos universitarios de desarrollo rural también empezaron a trabajar en las comunidades, frecuentemente identificando los problemas del agua como un factor que limita el mejoramiento de la base productiva local.

A pesar de ser bien intencionados, la mayoría de estos programas son fundamentalmente mal diseñados. Parten de la suposición de que estas comunidades deben implementar su desarrollo local con sus propios recursos, o con aquellos de organismos foráneos con subsidio directo. Aunque identifican el problema en el contexto amplio de una cuenca (Hernández Garciadiego y Herrerías, 2001), no se ha creado ningún mecanismo en el que se reúna a todos los participantes en un esfuerzo conjunto para mejorar la capacidad de la región en su totalidad para recolectar una mayor proporción de la oferta disponible de agua. Más aún, el apoyo financiero de estos programas es débil, ya que está fundado sobre la base de la obtención del financiamiento externo, público o de beneficencia, en lugar de compartir equitativamente los costos del programa, tomando en cuenta la capacidad de pago y los beneficios directos.

⁵ Entre estos proyectos uno de los más conocidos es el patrocinado por el gobierno del estado de Oaxaca, llamado “Lluvia, Tequio y Alimento” y otro en Michoacán utilizando un gran número de estructuras pequeñas (presas de gavión) para cambiar los patrones de flujo superficial, controlando los flujos de agua y la captación aluvial para reconstruir pendientes deterioradas. El corto periodo de éxito de ambos programas ofrece un claro testimonio de su carácter político y la necesidad de una base institucional alternativa para un funcionamiento exitoso a largo plazo.

22.4. LAS COMUNIDADES CAMPESINAS DE PEQUEÑA ESCALA Y EL FUTURO DE LA AGRICULTURA MEXICANA

Sólo cuando la crisis económica nacional impuso la urgente necesidad de un gobierno austero, se hizo notorio que el agua estaba entre los muchos recursos naturales limitados cuyo uso tiene que estar regulado más cuidadosamente y cuyo financiamiento debe cederse a los usuarios. El marco legislativo se actualizó y la nueva Comisión Nacional del Agua (CNA) fue responsable de tratar de establecer el orden. Como el resto del sector público, la CNA dirigió su atención a las demandas de las áreas urbanas y agrícolas a gran escala. Los productores agrícolas a pequeña escala fueron considerados anacrónicos; sus sistemas de producción tradicional en áreas de productividad marginal fueron considerados un obstáculo para la modernización por sectores. De hecho, en 1991, la Subsecretaría de Planeación Agrícola estableció que una de las metas prioritarias de la administración era ¡eliminar la mitad de la población rural de México en los siguientes cinco años!

Un nuevo programa de modernización rural fue puesto en práctica para abrir el camino a la integración del nuevo Tratado de Libre Comercio (TLC). Siendo más parecido al soborno político que a un estímulo a la producción, el Programa Nacional para el Campo probó ser efectivo intensificando las presiones económicas contra las comunidades rurales. Si bien la emigración aumentó de manera espectacular, muchas familias campesinas no abandonaron sus comunidades o sus tierras, contrario a las expectativas de los nuevos burócratas; en cambio, los que fueron dejados atrás continuaron trabajando cultivos de subsistencia, tratando de garantizar cantidades mínimas de alimento de calidad para uso local. Sin embargo, parte importante de la población estaba ausente, por lo que sólo se completó una parte de las tareas de cultivo con consecuencias devastadoras en cuanto a la fertilidad del suelo, erosión, e invasión de plagas; por supuesto, la producción declinó precipitadamente.

Puede parecer sorprendente, en estas circunstancias, que los campesinos de todo México eligieran seguir viviendo en sus comunidades. A pesar de su sesgo urbano, el censo todavía reporta que más que la tercera parte de la población es rural [en 2000]. Aun cuando grupos considerables son obligados a emigrar en busca de ingresos, hay evidencia significativa del compromiso colectivo de defender la integridad de estas comunidades rurales, algunas de las cuales tienen tantos habitantes que están clasificadas como urbanas en las estadísticas oficiales. No es éste el lugar para explorar las razones del porqué hasta 30 millones de campesinos mexicanos continúan desafiando a los políticos, incrementando sus

propias transferencias de fondos hacia los sectores rurales, retando así el declive de la productividad y la disminución de los programas de apoyo gubernamental. Un análisis de los recursos disponibles para el desarrollo de las comunidades,⁶ confirma el potencial de un programa nacional para la producción de agua basado en la participación de comunidades campesinas como se sugiere en la próxima sección.

22.5. EL FIDEICOMISO PARA LA PRODUCCIÓN DE AGUA EN MÉXICO

Proponemos la creación del Fideicomiso para la Producción de Agua en México (FIPAM). Este fondo sería financiado con aportaciones de los grandes consumidores (principalmente usuarios agropecuarios e industriales) e institucionalmente sería distinto a las organizaciones encargadas de efectuar los cobros actuales para financiar la distribución, almacenamiento, tratamiento y disposición del agua. Esta nueva cuota sería recabada por un fideicomiso encargado de desarrollar la capacidad institucional y técnica, y promover un programa de producción campesina de agua rural. Esta agencia financiaría programas diseñados para aumentar la productividad de actividades rurales que contribuirían a incrementar la capacidad regional de retener agua y lograr su almacenamiento en los acuíferos. El fideicomiso ofrecería compensaciones permanentes para las comunidades que incrementen satisfactoriamente la disponibilidad del agua en su región. Como un aliciente más para participar en el programa, el fideicomiso también sería el encargado de promover y financiar nuevos sistemas de cosecha de agua pluvial para ser administrada localmente garantizando una disponibilidad adecuada de agua potable para usos domésticos.

Para implementar este programa, el FIPAM capacitaría a grupos de personal técnico sobre métodos y sistemas alternativos que pudieran ser aplicados en México. El objetivo del programa sería modificar las condiciones locales para incrementar la capacidad de los sistemas naturales para retener agua pluvial con el objeto de contribuir a una mayor productividad agrícola, al tiempo de mejorar la capacidad de los ecosistemas para absorber los flujos excedentes, almacenarlos y transportar el agua a través de sistemas subterráneos naturales para reabastecer los mantos freáticos y ser utilizada en otras partes.

⁶ Estimamos que las transferencias financieras hacia las regiones rurales más pobres de México alcanza un ingreso de por lo menos 40% del valor de la producción rural.

La justificación para crear un fideicomiso independiente, financiado por cuotas de los grandes usuarios, está basada en los beneficios sustanciales que recibirían tanto ellos como la sociedad en su conjunto.⁷ A través del programa se aumentaría el flujo de agua pluvial a los mantos freáticos y reduciría la erosión en las cuencas. Los beneficios se manifestarían en la reducción de costos de bombeo de agua de los mantos freáticos así como el mejoramiento de la calidad del agua disponible; dichos beneficios serían captados primeramente por los productores con acceso privilegiado a los insumos productivos y al crédito para financiar su producción. Debido a esta distribución desigual de los beneficios, es necesario un mecanismo como el propuesto para el FIPAM, para motivar a las comunidades en las áreas marginadas a reorganizar su producción y especialmente a emprender las acciones de largo plazo que sean necesarias. Hasta la fecha, el país no cuenta con métodos para confrontar la severidad de los problemas ocasionados por la escasez de agua; los procedimientos existentes continuarán agotando los suministros y favoreciendo los mecanismos de recolección y almacenamiento sin aumentar la disponibilidad, contribuyendo a intensificar los conflictos respecto al agua en el futuro.

Nuestro proyecto prevé el desarrollo de un sistema nacional donde las comunidades serían compensadas por elaborar sus propias propuestas para la producción de agua. Se trabajaría localmente, y junto con el equipo técnico que satisfaga sus necesidades, para desarrollar métodos específicos para modificar las prácticas agrícolas locales, incluyendo las técnicas para el manejo de agua y suelo, para alcanzar los objetivos del programa. Un comité técnico evaluaría estas propuestas y distribuiría los fondos para los mejores proyectos. El Fideicomiso también colaboraría con las comunidades para asegurar que las propuestas sean depuradas y que se incorporen nuevas técnicas. Un proceso continuo de evaluación enriquecería aún más la lista de propuestas alternativas que podrían ser empleadas en trabajos futuros.

El programa para asegurar el suministro de agua potable para uso doméstico es una parte importante de la propuesta. Muchas de las comunidades con mayores posibilidades de incrementar la producción del re-

⁷ En Colombia se está experimentando con un proyecto como el que se propone aquí para México; enfocado en el abastecimiento de agua potable para uso urbano, el enfoque contempla financiar las obras de conservación y reconstrucción de microcuencas con contribuciones de los consumidores. Se anticipan beneficios para todos los grupos participantes, ya que se reducirían los costos de garantizar un abasto adecuado de agua para las urbes, mientras que se financian labores de manejo ambiental que de otra manera no serían costeables. Rudas (1995) explica la teoría económica que demuestra la distribución de beneficios y la forma de determinar las tarifas apropiadas.

curso agua no tienen acceso adecuado al agua potable; aun cuando existen volúmenes suficientes disponibles, las deficiencias en los sistemas de recolección, almacenamiento y distribución crean obstáculos e imponen una carga enorme a la comunidad para asegurar el suministro necesario para la vida diaria. Estos obstáculos casi siempre son sobrelevados por las mujeres, quienes realmente son las responsables del proceso de administración del líquido así como de los considerables efectos secundarios no intencionales de la baja calidad del agua: deficiencias nutricionales resultantes de problemas gastrointestinales y otros problemas médicos. Consideramos la instrumentación de un programa nacional que supere estos problemas como una prioridad y un incentivo adicional para que las comunidades participen en el programa de la producción de agua.⁸

El FIPAM ofrece una oportunidad única para desplegar un nuevo proyecto de desarrollo rural en México. En lugar de subsidiar a los productores aquejados por la baja productividad, esta propuesta innovadora aumentará la productividad en las áreas donde prevalece la producción tradicional; como componente de un programa para enfrentar uno de los problemas más serios de los productores comerciales y la industria, ofreciendo un mecanismo para iniciar la cooperación entre grupos hasta ahora antagónicos. La llave del éxito de este programa es la formulación de una política donde los resultados positivos sean comprendidos por todos los participantes: anticipando los posibles conflictos sobre los suministros de agua mediante un aumento en la disponibilidad total, en vez de enfocarse en la redistribución o racionamiento que requiere que algunos ganen a costa de otros.

⁸ No es coincidencia que un proyecto de doble propósito también fortalecería la capacidad institucional de la comunidad para participar en el programa. El programa de agua potable liberaría recursos sociales importantes de lo que es ahora una carga molesta y, junto con la productividad mejorada de las prácticas agrícolas perfeccionadas (sin sacrificar la diversidad del esquema de producción prevaleciente en muchas de estas comunidades), produciría un ingreso adicional para la comunidad. Con retribuciones directas del FIPAM para financiar los costos adicionales del trabajo, es posible que los beneficios combinados induzcan alguna disminución de las presiones migratorias, además de fortalecer la eficiencia productiva y la capacidad de organización de las comunidades.

23. REPENSANDO LA EDUCACIÓN ECONÓMICA PARA LA CONSERVACIÓN¹

Planteando el problema de la conservación como economista es complejo, ya que requiere indagar sobre el punto de referencia más preciado de la profesión: ¿es posible proseguir con el crecimiento económico mientras que se plantea la necesidad de ser más cuidadoso con los recursos naturales y la biodiversidad? Para el economista, hablar del crecimiento implica abordar el proceso de acumulación y la mayoría considera que es la única forma de plantear la posibilidad de superar los escollos del desarrollo, el camino para crear la capacidad de elevar el nivel material de vida de la población, y como consecuencia, su bienestar. En este capítulo, se examinan algunos de los fundamentos de este pensamiento, identificando algunos de los sesgos fundamentales en la visión económica de los problemas actuales, para luego plantear una perspectiva diferente, nacida en un nuevo paradigma —el de la economía ecológica.

La economía ecológica ofrece una visión fresca que pone la producción al servicio de la sociedad y de los ecosistemas en que funciona. Plantea como principio básico la prioridad de un trato respetuoso de la población en su relación con su medio natural. Para facilitar esta relación es imprescindible comenzar con un pacto social que promueva un nivel mínimo de satisfactores para todos los sectores de la sociedad: no se limita sólo a los servicios prometidos por la Revolución mexicana —educación, asistencia médica, alimentación, y justicia— porque también alcanza la promesa de empleos dignos, acceso a la tierra para quien la trabaja y la conservación de los recursos naturales en beneficio de la nación. En su compromiso con la conjugación de los principios de la eficiencia, que son tan importantes para un grupo importante de economistas, con los de la justicia social y la protección ambiental, la economía ecológica también es tenaz en su insistencia para garantizar también el bienestar de generaciones futuras. Para realizar sus objetivos, la economía ecológica insiste tanto en el proceso como en las metas para asegurar que los procesos productivos sean diseñados para mantener una máxima participación social en la realización de las tareas pendientes. Como veremos,

¹ Publicado en A. Barahona y L. Almeida (eds.), *Educación para la conservación*, México, UNAM, 2005, pp. 51-65.

entonces, educar para la conservación implica no sólo identificar las necesidades materiales prioritarias, sino también asegurar que la población, organizada en sus diversos grupos sociales, étnicos y vecinales, esté ampliamente involucrada en su implementación.

23.1. VISIONES ECONÓMICAS ENCONTRADAS

Entrando en materia, es necesario introducir algunos de los puntos de partida de las diversas perspectivas de los economistas. Para los que dictan las políticas que guían la economía mexicana a comienzos del siglo XXI, su gran preocupación es la de mantener la inflación bajo control para generar las condiciones atractivas y necesarias para impulsar la inversión privada en actividades productivas, empresas que impulsarían el crecimiento económico y la generación de empleo. Según su razonamiento, el control de los precios es fundamental para asegurar la certidumbre en los costos y, como consecuencia, en la rentabilidad de estas actividades empresariales. La necesidad de controlar los precios domina todo, y los costos sociales y ambientales que ocasionan están justificados por el objetivo final: asegurar la confianza y la dinámica de la comunidad inversionista. Poco importa que los instrumentos para lograr este control resultan en una sobrevaluación del peso para asegurar que productos baratos entren el país para ejercer presiones bajistas en todos los sectores de la economía nacional; las tasas de interés controladas en un difícil equilibrio, bastantes para atraer suficientes flujos de capital para compensar la escasa disposición de los mexicanos de invertir en su propia economía y para limitar los costos en que incurre el gobierno para financiar sus actividades. Los que entienden sus consecuencias hablan de las desafortunadas consecuencias colaterales: insuficiente generación de empleo, desmembramiento de la estructura productiva, inadecuados ingresos fiscales para financiar la infraestructura necesaria para el desarrollo y cumplir con las garantías constitucionales de un salario “social” digno.

En contraste, otros economistas recuerdan las razones de fondo por las estrategias de antaño que tradujeron la herencia de la Revolución en política económica. Insisten en volver a una estrategia de industrialización nacional, en la reconstrucción de la capacidad productiva y para generación de empleos, y en un programa de gasto público que garantizara un mínimo de servicios a todos para facilitar su plena participación en la reconstrucción nacional. Estos economistas impondrían nuevos impuestos sobre las empresas y el capital, similares a los que predominan

en los países pudientes; financiarían una expansión significativa de la capacidad para generar no sólo empleo sino condiciones dignas para todos los sectores sociales. En vez de fijarse en el sector externo, volverían a fomentar la capacidad doméstica para satisfacer necesidades sociales y de las demás empresas. Dejarían de lado el énfasis actual en restringir el acceso al crédito, para fomentar la inversión, y sobre todo la reinversión, y el resurgimiento de mercados regionales que favorecen a los productores locales.

Ambas visiones polarizadas de la política económica —y las múltiples variaciones ideadas por los estrategas profesionales— exaltan el carácter mercantil de las relaciones sociales en la sociedad mexicana. Reflejan estrategias enfrentadas que privilegian a distintos grupos de productores: la primera, con su orientación externa, deja al mercado internacional la responsabilidad para reestructurar el aparato productivo e impulsar la dinámica interna de acuerdo con las prioridades señaladas por las prioridades del mercado mundial; la segunda finca su racionalidad en un compromiso para fomentar las actividades en el interior del territorio nacional para entrelazar a los productores en cadenas productivas cada vez más integradas para promover la creación de empleos e intensificar los efectos ‘retroalimentadores’ que aseguran una reducción de las fugas en los circuitos económicos.

Hasta ahora, los exponentes de las dos siguen dejando de lado consideraciones fundamentales de los impactos en la relación de la producción con la sociedad y sus ecosistemas. Sus preocupaciones para elevar el volumen de la producción y asegurar el bienestar de sus principales partidarios —empresas, obreros, campesinos, etc.— y su ceguera profesional les ha permitido descartar como irrelevantes consideraciones sobre los requerimientos de recursos naturales en sus aparatos productivos, salvo las relacionadas con la evolución de su disponibilidad o de sus precios. Tampoco, se ocupan mayormente de los problemas de la extracción de estos recursos o de los efluentes de los sistemas de producción o de las nuevas costumbres de consumo que están sustituyendo productos e insumos no biodegradables o reciclables de los que antaño se ocupaba la naturaleza. Para todos estos operadores de la política económica, se colocan en segundo (o tercero) plano sus impactos en la calidad y aun la sobrevivencia de los ecosistemas, de sus bosques, sus cuencas, sus desiertos y selvas tropicales. Como en gran parte del tercer mundo, en los debates recientes sobre el problema del deterioro ambiental los economistas mexicanos han dicho explícitamente que el reto principal (*¿único?*) es asegurar el ritmo de crecimiento de la producción o el bienestar de la población y después ocuparse del reto de la calidad ambiental.

El resultado en México, así como en casi todas partes del mundo, es un sistema económico que cada vez es menos adecuado para atender a las necesidades de su población y las exigencias de la naturaleza de que dependemos. Se han creado materiales educativos y explicaciones didácticas que exaltan y justifican los avances observados durante “los gobiernos de la Revolución”, sin percatarse de los crecientes estragos que el ‘progreso’ está dejando en su estela —colonias de personas envenenadas o lisiadas; ríos muertos y mantos acuíferos contaminados; desiertos, montañas y selvas desnudados o desfigurados. Lejos de ser un producto de profesionales mal preparados o de errores pedagógicos, estas incongruencias surgen de una comprensión distorsionada del funcionamiento de nuestra sociedad y de una idea equivocada de la importancia de la naturaleza para nuestra propia existencia.

23.2. LA DINÁMICA DE LA DEGRADACIÓN Y LA MARGINACIÓN

Para ilustrar lo arraigado que están estos procesos y distorsiones en las instituciones en nuestra sociedad, basta señalar algunas de las características más dominantes que moldean nuestras mentes y degradan nuestros ecosistemas:

a] *Políticas macroeconómicas y sectoriales discriminatorias.* Como en los régimen coloniales del pasado, los impuestos y las regulaciones a la producción y a la exportación, los sistemas complejos de acceso al comercio con el extranjero (tipos de cambio sobrevaluados y tratados de libre comercio que dejan desprotegidos a los productores nacionales) son herramientas utilizadas que impiden el florecimiento de los mercados locales dentro del país. Ahora, el incumplimiento de las promesas de apoyo al campo y la incapacidad de agilizar la actividad entre pequeños productores y artesanos que eran el sustento de las economías regionales han transformado a nuestra sociedad, de un gran demandante de la cornucopia de enseres domésticos, muebles y vestimenta, a otra consumidora de las mercancías importadas de ultramar.

Otras facetas de la agenda de política pública tienen el efecto de aumentar el producto mientras exacerbán las diferencias sociales que colocan a México entre los más desiguales en el mundo. Los beneficios de la revolución verde, que condujeron a incrementos significativos de la productividad, fueron captados por aquellos grupos capaces de obtener acceso a los conocimientos técnicos, los financiamientos y la infraestructura. Transformaron las bondades de estos avances en su opuesto,

creando sistemas de cultivo que requieren del uso de agroquímicos que envenenan los suelos y las aguas subterráneas y generando productos transgénicos que nos exponen a riesgos desconocidos y amenazan la integridad del tesoro de germoplasma natural con que el país está dotado.²

La inversión pública y los incentivos económicos han fomentado actividades que agudizan nuestros problemas y reducen nuestra capacidad de respuesta. Algunas de las industrias más usuarias de agua, también son las más contaminantes: azúcar, papel y celulosa, siderurgia, petróleo y curtiduría. A pesar de existir mecanismos para revertir sus efectos nocivos, la privatización y la política oficial siguen menospreciando el impacto del agua contaminada sobre la salud humana y de los ecosistemas, de accidentes en los centros de trabajo y las lesiones, quemaduras, cánceres y demás males en las comunidades, y de la inferior calidad de los productos que emanan de estas factorías. Lejos de promover una rehabilitación de los ecosistemas degradados y el fin a estas desgracias, en vez de aplicar la normatividad para asegurar que nuestra leche y agua potable no estén contaminadas con arsénico, de evitar la contaminación de otros alimentos con metales pesados, y de promover sistemas colectivos de transporte para enfrentar el reto de la contaminación atmosférica, la política nacional está transfiriendo responsabilidad para la vigilancia a los propios transgresores, ¡confiada en que los mercados internacionales asegurarán la calidad de nuestros ambientes locales!

Tales programas no sólo han tenido efectos devastadores sobre el ambiente, sino que también son destructoras de la sociedad. Productores nacionales son desplazados por importaciones, poblaciones enteras arrancadas para que puedan trabajar en las maquiladoras, servir a la industria como mano de obra barata, o emigrar hacia las aceras pintadas de oro al otro lado de la frontera norte. Las poblaciones locales son reubicadas desventajosamente, o aun exterminadas, mientras la productividad de los ecosistemas de nueva explotación declina con rapidez; el Estado carece de una capacidad para construir la infraestructura urbana requerida y trata de encomendarla a la iniciativa privada que exige jugosas ganancias y relajamiento de normas ambientales y de seguridad.

Para revertir estas tendencias se requeriría transformar la conciencia

² Existe una amplia literatura tanto sobre las fieras luchas entre los agrónomos mexicanos que trabajaron con campesinos y los asociados con los productores modernos, patrocinados originalmente por grupos norteamericanos. El empobrecimiento del campo fue seguido de la retirada del Estado del campo, remplazado por un ejército de investigadores y vendedores al servicio de empresas transnacionales que siguen impulsando el desplazamiento de sistemas tradicionales de cultivo y semillas nativas por los elaborados en los laboratorios privados (*e.g.*, Hewitt, 1976; Barkin y Suárez, 1982; Mooney, 2002).

social e implantar un programa distinto para contrarrestar los efectos destructivos del control corporativo. Éste facilitaría la aplicación de los principios de la agroecología a la agricultura de pequeña escala, reduciendo su dependencia de las prácticas destructivas y de los agroquímicos desarrollados para la producción de cultivos comerciales. Los productores del campo podrían relacionarse con los artesanos y los fabricantes de satisfactores básicos, creando nuevas alianzas sociales para el apoyo mutuo entre el campo y la ciudad. Un énfasis renovado sería colocado en los alimentos populares, muebles, medicinas tradicionales, y otros productos producidos por los campesinos o sobre sus prioridades ambientales, tales como proyectos de microescala para el manejo de la tierra y del agua (Toledo, 2000; Barkin, 2001). Por supuesto, se requeriría la concurrencia de nuevas generaciones bien preparadas para colaborar a elevar la productividad, asegurar la calidad y facilitar su distribución entre una población adecuadamente informada sobre las ventajas para los diversos grupos sociales y para la naturaleza de este proceso de reconstrucción económica. No es una mera coincidencia que tales políticas también conduzcan a la creación de sistemas de desarrollo sostenible. Pero no es un proceso fácil, ya que requeriría de un cambio profundo en actitudes y una nueva conciencia, solamente posible a través de modificaciones fundamentales en la educación, como veremos más adelante.

b] *Sistemas inadecuados de acceso y control de los recursos naturales.* La desigualdad de acceso a los recursos naturales y la inseguridad en la tenencia de la tierra son obstáculos fundamentales para mantener y mejorar la calidad del ambiente. A pesar de las ganancias de la Revolución mexicana y su reforma agraria, la propiedad de la tierra y el control de los recursos naturales que fueron otorgados a las comunidades, se mantienen altamente concentrados. Los sistemas inadecuados de tenencia y las concesiones privadas para explotar los bosques y los yacimientos minerales dificultan las iniciativas locales comprometidas con las tareas de conservación de agua y suelo. También estorban la distribución del crédito, impidiendo la inversión y otras acciones para aumentar la productividad. Estos problemas se vuelven más serios por el desconocimiento oficial de la propiedad comunal de importantes extensiones y los conflictos respecto a su uso, surgidos a menudo de manipulaciones oficiales para manejar esos recursos para el provecho privado; se agrava el problema con la falta de voluntad de los grupos políticos de respaldar los esfuerzos sociales para rehabilitar sus ecosistemas. La “tragedia” de la sobreutilización en tales casos es tan importante por el enfoque de mercado que asigna precios a estos recursos, como es documentado en una gran literatura que también sirve como evidencia de la gran capacidad y voluntad de

importantes segmentos de la población mexicana para detener esta destrucción. Sus propuestas, plasmadas en muchos documentos técnicos, tendrían que incorporarse a los textos de educación de la conservación y generalización de estas experiencias y transformar nuestro entender de la factibilidad de un desarrollo sostenible (Boege y González, 1997; Ostrom *et al.*, 2002; Currie-Alder, 2004).

Irónicamente, las reformas agrarias también tienen efectos perniciosos, que impiden a los beneficiarios proteger sus propios recursos. En muchas situaciones, las regulaciones limitan o prohíben varios tipos de transacciones con la tierra (*e. g.*, renta o alquiler) y limitan a los beneficiarios en su búsqueda de crédito; excluyéndolos, en consecuencia, del sistema bancario comercial. La aplicación de estas restricciones por las burocracias gubernamentales ineficientes y corruptas refuerza un sistema de privilegios que ha frenado la movilidad social y las mejoras agrícolas. Desafortunadamente, la carrera precipitada para escribir una legislación que “libere” a la tierra para su uso de la manera más productiva, otorgando títulos de propiedad y animando a las comunidades rurales a asociarse con el capital privado, puede exacerbar los problemas existentes. Si el campesinado no tiene acceso independiente a los mercados de capital y la asistencia técnica, no se le puede asegurar una capacidad autónoma para negociar efectivamente con inversionistas potenciales.³ Las propuestas para el desarrollo sustentable tienen que reconocer la necesidad de afianzar la capacidad local para ejercer el control local sobre la tierra y los recursos de que dependen las comunidades para su sobrevivencia.

c] *Sesgo elitista en las instituciones de desarrollo.* El sesgo anticampesino y antiobrero entre las agencias internacionales de desarrollo y las nacionales de acción pública es particularmente preocupante. Los recursos son sistemáticamente negados para apoyar los enfoques “campesinos”, “obreros” o “populares” que buscan resolver sus propios problemas y fortalecer sus organizaciones sociales. Estos grupos son considerados retrógrados e incapaces de incorporar innovaciones a sus sistemas productivos; aún más, se consideran como obstáculos a la modernización productiva, ya que la protección de sus derechos y sus iniciativas restan rentabilidad a la empresa privada. Los efectos económicos de la protección oficial de la producción privada son especialmente problemáticos: la mano de obra se abarata y los recursos naturales son devaluados por las presiones com-

³ Esto sigue siendo una preocupación de muchos que analizan las modificaciones del Artículo 27 de la Constitución Mexicana, promulgadas en 1992, facilitando la transferencia de tierras y la subdivisión de las partes comunales. Para mayores detalles, véanse los varios números de la revista *Cuadernos Agrarios* de México.

petitivas de otros productores quienes disfrutan de crédito e insumos baratos. Más grave todavía, desde la perspectiva de la educación para la conservación, es el menosprecio que sufren cuando se convierten en defensores de sus propios recursos, convirtiéndose en blancos de ataque por ser “ambientalistas”.

Para un analista sensible de economía, este sesgo es evidente en la manera diferencial en la que los precios de los productos campesinos y comerciales son fijados en los mercados nacionales. Es frecuente que las agencias reguladoras oficiales y los grandes compradores en mercados locales y nacionales se niegan tratar con organismos de productores o castigan los precios o los términos de pago (imponiendo largos plazos para la cobranza); asimismo las decisiones acerca de la importación de bienes básicos impactan negativamente a los productores de pequeña escala con mayor frecuencia que a los sectores prósperos. Una vez más, es fundamental reconocer cómo nuestros sistemas dominantes de educación dejan fuera los detalles de operación de mercados, reduciendo nuestro entendimiento de las posibilidades y el potencial para que colaboremos en promover las iniciativas para el desarrollo regional sustentable.

El surgimiento de las ONG como mecanismos para revertir este sesgo, tanto global como dentro de las burocracias locales, es un punto notable de la transformación institucional, que se relaciona directamente con la ampliación de las estrategias alternativas del desarrollo rural, un tema al que regresaremos. Para señalar la importancia de estos avances, es suficiente notar la creciente importancia de las diversas iniciativas de comercio justo, productos campesinos, marcas propias de artesanos, y mercados de trueque entre diversos grupos de productores y consumidores.⁴

d) Distribución desigual del ingreso y del poder político En relación con los puntos anteriores, el sistema de caciques regionales y control partidista de las instituciones oficiales es frecuentemente uno de los obstáculos principales para la instrumentación de las iniciativas comunitarias para la producción local y sustentable. La falta de transparencia en los sistemas de control de acceso a los recursos y los mecanismos para otorgar concesiones para la explotación de servicios, ha propiciado un sistema de destrucción de la herencia cultural y del patrimonio natural que tanto

⁴ Es oportuno mencionar que hay iniciativas oficiales que han contribuido a fortalecer la independencia y solidez de algunas de estas empresas. El Fondo Nacional de Empresas Solidarias, de la Sedeso, apoya a centenares de éstas con créditos, asistencia técnica y ferias para la comercialización. Sin embargo, son pocos los mecanismos para asegurar que las dependencias oficiales les apoyen para que tengan acceso a sus licitaciones y reciban contratos. El sector social ha resultado más eficaz en asegurar que sus esfuerzos tengan salidas mercantiles adecuadas.

aprecian muchos grupos sociales. Las formas que el caciquismo toma son demasiado numerosas para ser enumeradas aquí, pero los efectos son similares, y reminiscentes de las historias contadas sobre los caballeros señoriales de la época medieval. Una jerarquía de poder, algunas veces atada a los partidos políticos, que se extiende del Estado a las comunidades rurales, con frecuencia juega un papel determinante en la disponibilidad y distribución de los paquetes de ayuda, los proyectos de empleo y los programas de beneficio social.

e] *Políticas inadecuadas de empleo.* Aunque la tasa de crecimiento de la población es generalmente descendente, todavía se mantiene por encima de la del crecimiento de la fuerza de trabajo productiva. En los últimos años, no se ha logrado recuperar totalmente las pérdidas de puestos en la economía formal, resultado de la acelerada inserción de nuestra economía en el mercado global. En todo el tercer mundo, uno de los más serios problemas que enfrentan los planificadores es la creación de empleos remunerados. Tradicionalmente una fuente importante de subsistencia para gran parte de la población, el empleo agrícola ha caído precipitadamente en las décadas recientes, en gran medida por las facilidades ofrecidas a las grandes empresas transnacionales para importar granos subsidiados a los países donde domina la producción campesina.

La apertura de las economías a la competencia internacional complica los problemas de dos formas: primero, las actividades productivas tradicionales están dejando de ser rentables, conforme los bienes de consumo importados desplazan a los producidos localmente; los mismos vendedores encuentran mayor ganancia en importar que en comprar productos nacionales. Segundo, la inversión extranjera trae nuevas tecnologías y aumenta la escala de producción, reduciendo la tasa de creación de empleo por debajo de las necesidades sociales.

Agravando el problema aún más está la política mexicana de mano de obra barata. Frente a un discurso de fortalecimiento del sistema educativo, los niveles de cumplimiento educativo y la calidad de los programas no están a la altura de las necesidades nacionales. El apoyo para el desarrollo científico y tecnológico, para la conservación de los recursos naturales y para las áreas naturales protegidas es menor de lo prometido y carente de estrategias congruentes con las prioridades nacionales. Sólo en estas tres áreas es enorme el potencial para generar empleo y movilizar importantes grupos de comunidades para elevar la producción y la calidad de vida.

f] *Presiones contra las instituciones culturales locales.* Conforme los campesinos y artesanos son transformados en trabajadores “proletarizados”, adquieren todas las responsabilidades de tales grupos, sin ninguno de

los beneficios que podrían provenir de tener un ingreso seguro de retorno por su trabajo productivo (Barkin, 1998). Esta transformación de la fuerza de trabajo es notable en muchas comunidades donde los sistemas tradicionales de ayuda mutua y trabajo voluntario para proyectos de la comunidad están desapareciendo con rapidez sin remplazos adecuados. La autoridad de la comunidad tradicional está siendo erosionada y desplazada por nuevas formas de imposición autoritaria.

El largo proceso de expulsión de los grupos indígenas hacia las tierras cada vez más relegadas es uno de los factores más importantes que contribuyen a la pérdida de la identidad cultural en nuestro país. En muchos casos, los nuevos colonizadores no tienen acceso o ignoran la información heredada sobre cómo manejar los ecosistemas que han ocupado. Esto se intensifica con los compromisos oficiales para implantar los sistemas tecnológicos de las zonas templadas, los cuales raramente son adecuados para las nuevas áreas ocupadas, con frecuencia en las bajas planicies de los trópicos. En muchos de estos casos, como veremos, se hace necesario generar un nuevo tipo de conocimiento apropiado, de modo que las poblaciones que se establecen puedan ser sensibilizadas a nuevos enfoques sostenibles para la sobrevivencia productiva.

Sin embargo, en años recientes hay tendencias positivas. Muchas comunidades están asumiendo una nueva responsabilidad para la rehabilitación y conservación de sus entornos naturales. Asimismo, están buscando formas de recuperar algunas de sus costumbres tradicionales, desde ceremonias y vestimenta, hasta formas de organización social y política que contribuyen al rescate y generación de nuevas (viejas) formas de conocimiento que se están reconociendo como “ciencia posnormal” (Funtowicz y Ravetz, 2000). Sería esencial incluir esta corriente en una revaloración de la propiedad intelectual en manos de las comunidades, factor virtualmente ausente del pensamiento económico dominante.

g] *La migración y la feminización de la pobreza.* El papel de la mujer en la sociedad ha cambiado drásticamente en décadas recientes. Con la proletarización de la fuerza de trabajo y la mayor dificultad para satisfacer las necesidades sociales con la producción de bienes agrícolas y rurales, muchas familias han desarrollado complejas estrategias de sobrevivencia que implican migración y mayor participación en la fuerza de trabajo proletaria. Aun cuando más mujeres son trabajadoras asalariadas y migrantes, también existe una tendencia mundial hacia más familias encabezadas por ellas. A diferencia de épocas pasadas, en que el problema dominante de la mujer era el manejo de la casa y la crianza de los hijos, ahora asume la carga adicional de proporcionar la subsistencia básica y resolver otras necesidades familiares. Estas nuevas obligaciones no han

disminuido las prácticas discriminatorias que limitan el acceso de las mujeres a la educación y a las oportunidades económicas.

Conforme el ambiente se va degradando, la vida se va haciendo más difícil, complicando las tareas de las mujeres. Además de las presiones creadas por la falta de oportunidades laborales adecuadas, la amplia distribución de narcóticos, los conflictos intrafamiliares y las nuevas enfermedades sociales y ambientales que superan con mucho las posibilidades de la familia para enfrentarlos, tenemos estructuras sociales y políticas que enfrentan a los individuos contra sus vecinos y sus entornos. Gran parte de la población todavía no cuenta con fuentes salubres de agua y casi todos padecemos de sistemas para tratar nuestras aguas residuales. En miles de comunidades la búsqueda de combustible para el hogar requiere viajes más largos por la deforestación, obligando a los comuneros a sacrificar los árboles más jóvenes en laderas de mayor pendiente; de modo similar, la tarea de asegurar la disponibilidad de agua también se está haciendo más ardua. Tal carga afecta la nutrición familiar, ya que los huertos donde se cultivaban frutas y vegetales y se criaban pequeños animales de traspatio a través de desperdicios y esquilmos agrícolas, con frecuencia ya no pueden producirse por la presión de realizar otras actividades. El análisis económico pone estos problemas en segundo plano, cuando una política nacional para enfrentarlos contribuiría a detener la degradación y movilizar grandes contingentes para construir una sociedad más saludable y sustentable, a la vez que genera la dinámica necesaria para impulsar el problema de inadecuados ritmos de desarrollo.

h] El factor urbano y la pobreza rural. La urbanización en el tercer mundo está creando redes de áreas densamente pobladas, en gran parte con migrantes rurales. Crecientemente, las familias rurales reciben remesas de dinero de sus parientes en las ciudades —y a través de la migración internacional— para su mera subsistencia. Conforme se expanden las áreas urbanas, ellos hacen demandas enormes de recursos y de lugares para depositar su basura y sus aguas servidas, sin ninguna contraprestación para responder a los problemas de la mayor parte de la gente pobre. (Arroyo *et al.*, 2002).

En este complejo telón que relaciona lo rural con lo urbano, las dicotomías de épocas pasadas no son útiles ya para el campesinado y el proletariado. El ingreso proveniente de fuentes externas a la comunidad es ahora una parte integral de los ingresos rurales, mientras que las múltiples habilidades adquiridas en estos empleos contribuyen a diversificar la base económica de las áreas rurales. De manera inversa, las poblaciones rurales y su experiencia también tienen un gran potencial para contribuir al mejoramiento de la vida nacional. En este momento, lo están haciendo

do de una manera sorprendente: han logrado recuperar la autosuficiencia en la producción de maíz blanco para el consumo doméstico.⁵ Para una nueva educación para la conservación, sería importante considerar estas respuestas populares como evidencia de la posibilidad de alternativas y como parte del proceso para la incorporación de todos los sectores sociales en la construcción de estas estrategias. No es suficiente la generación de productos que apoyan la conservación y la sustentabilidad, también es fundamental implantar la idea de que las decisiones sobre el consumo y el ordenamiento de nuestras comunidades de parte de los que no pueden participar directamente en la producción son parte integral del proceso de la conservación. Por supuesto, también sería importante reconsiderar la posibilidad de producir alimentos en áreas urbanas como parte de una respuesta al creciente desempleo que podría bajar los costos de transporte y las tasas de crecimiento urbano.

Con el deterioro del empleo y la discriminación contra los pequeños productores, no sorprende que la degradación ambiental avance rápidamente. La gente está siendo obligada a entrar en la fuerza de trabajo informal, donde los salarios reales y los ingresos siguen deteriorándose. Pero a diferencia de tiempos pasados, se está observando una nueva tendencia de tratar de fortalecer las comunidades campesinas, aprovechando nuevas posibilidades y las remesas para experimentar con nuevas formas de producción, con nuevos productos y con nuevas formas de comercialización. Desde esta perspectiva, vemos que frente a la desidia oficial, son los propios campesinos e indígenas quienes están generando nuevos programas para la creación de oportunidades propias, mejorando sus niveles de vida y protegiendo sus ecosistemas.

23.3. RECONSIDERANDO LAS ALTERNATIVAS: EDUCACIÓN ECONÓMICA CUANDO OTROS MUNDOS SON POSIBLES

Replantear la educación económica para la conservación requiere reconsiderar los parámetros de otra organización social. La educación económica actual está fincada en varios mitos fundamentales que permean

⁵ Lo están haciendo con una intensificación del cultivo (aumentando la productividad) y con la mejor utilización de semillas criollas mejor adaptadas a los campos. Parte importante de sus cosechas está comercializándose directamente a los consumidores, en su mayoría como productos terminados de calidad altamente apreciados por los consumidores, quienes pagan precios justos por la calidad (Barkin, 2003a).

todas las dimensiones de la vida social. Entre ellos encontramos los siguientes: la iniciativa privada es más eficiente que el sector público; el comercio internacional trae beneficios económicos para todos los participantes; los precios reflejan el valor de los productos; la iniciativa privada puede responder a los retos de la degradación ambiental de forma adecuada; el mercado generará las oportunidades necesarias para superar los problemas de la pobreza y el subdesarrollo.

Como hemos visto en este ensayo, la realidad es otra. Si vamos a prepararnos para readecuar nuestras instituciones para la conservación y la construcción de una economía sustentable, es urgente plantear dos tareas fundamentales:

- a] Facilitar la tarea de abrir espacios para los grupos que quieren avanzar con sus propias estrategias; y
- b] Entender la necesidad de implementar políticas que promuevan estas actividades y permitir a las comunidades emprenderlas sin ser atacadas por estructuras políticas y comerciales que protegen a los grandes poderes de la economía mundial.

No es éste el lugar para analizar la dinámica de la economía mundial que haya generado las distorsiones y los sesgos examinados arriba. Más bien, nuestra tarea es plantear los elementos para estrategias alternativas que deben informar el diseño de programas educativos para promover la conservación y la construcción de estrategias para el “manejo sustentable de recursos regionales”.⁶ Estas alternativas requieren que estas comunidades se aíslen de alguna manera de la economía global, produciendo productos con cualidades especiales (orgánicas, genéricas, campesinas...) u ofreciendo servicios que puedan compensar, alentar e impulsar el fortalecimiento de sus actividades dentro de un manejo ambiental sustentable. El enfoque sugerido por la búsqueda de la sustentabilidad y participación popular tiene el fin de crear mecanismos dondequiera que las comunidades campesinas e indígenas encuentren apoyo para continuar arraigados en sus propias regiones. Aun bajo el criterio estricto de la economía neoclásica, este enfoque no debe ser descartado como un protecciónismo ineficiente, ya que la mayoría de los recursos

⁶ La expresión “manejo sustentable de recursos regionales” refiere a una literatura que analiza las nuevas estrategias campesinas e indígenas que crean alternativas autónomas —es decir, independientes de la sociedad globalizada— para fomentar otro modelo de sociedad. Véase Barkin (2000) y los otros textos sobre esta “Nueva Ruralidad” para mayor información (Giarracca, 2000).

implicados en este proceso tendrían poco o ningún costo de oportunidad para toda la sociedad; pero un programa de educación para la conservación tendría que privilegiar estos esfuerzos y concientizar a los estudiantes respecto a sus bondades.

Irónicamente, las regiones que tienen muchas y mayores oportunidades de explorar usos creativos para su patrimonio natural son las que están quedando atrás, aisladas de la globalización. Algunos de los más importantes proyectos de este tipo son administrados por los grupos comunitarios locales para diversificar su base productiva, usando fuentes de energía renovable y recursos locales para agregar valor con tecnología y prácticas tradicionales. Las posibilidades de encontrar nuevas formas de aprovechar este patrimonio natural son enormes y las iniciativas para echar a andar estos proyectos entre grupos buscando alternativas para ellos mismos son cada vez mayores.

La educación económica para la conservación tendría que reexaminar las bondades de la “economía campesina” en estas regiones; es tanto deseable como urgente. Comunicar su lógica y sus aportaciones al progreso nacional no es simplemente un asunto de rescate de culturas antiguas, sino de tomar ventaja de una importante herencia cultural y productiva que pueda proporcionar soluciones a los problemas de hoy y mañana. No es una cuestión de “reinventar” la economía campesina, sino de reunirla con sus propias organizaciones para esculpir espacios políticos que les permitan ejercer su autonomía; definiendo las formas en las que sus organizaciones guiarán la producción para ellos mismos y para comerciar con el resto de la sociedad. Una vez más, la identificación tecnocrática de los mecanismos productivos y la catalogación de los sistemas de conocimiento indígenas (que, por ejemplo, están ahora a la orden del día entre las corporaciones transnacionales que buscan nuevas fuentes de germoplasma para sus avances biotecnológicos), no van a revertir la estructura de la discriminación, a menos que se acompañen de una participación política efectiva (Toledo, 2000).

Proponemos integrar el análisis de esta economía autónoma como parte fundamental de la educación para la conservación. Reconociendo la permanencia de una sociedad drásticamente estratificada, el país estará en mejor posición para diseñar políticas que reconozcan y tomen ventaja de estas diferencias a fin de mejorar el bienestar de los grupos de ambos sectores. Una estrategia que refuerce a las comunidades rurales, como un medio que haga posible la diversificación, facilitaría el manejo del crecimiento nacional y generaría nuevas posibilidades para vínculos con la economía internacional. Pero más importante es que tal estrategia ofrezca una oportunidad para que la sociedad confronte activamente los

cambios del manejo del ambiente y la conservación de una manera significativa, con un grupo de gente calificada de manera única para tales actividades.

La economía política de la autonomía económica no es nueva. A diferencia del modelo actual que permea todas nuestras sociedades, confrontando a ricos y pobres, una educación para la conservación que tome en cuenta la aportación original que pueda ofrecer un segmento de la sociedad que elige volver sustentables sus programas de producción debería tener influencia, contribuiría a generar apoyo en el resto de la nación para instrumentar un programa alternativo de sustentabilidad para la nación. Este modelo de autonomía está comenzando con la base heredada de la producción rural, mejorando la productividad mediante el uso de la agroecología. Está incorporando nuevas actividades que se fincan sobre la base cultural y de recursos de la comunidad y de su región. Requiere respuestas muy específicas a un problema general y, en consecuencia, depende fuertemente de la participación local para su diseño e instrumentación.

En esta época de globalización, muchas comunidades rurales están conscientemente construyendo sus propias estrategias alternativas, la nueva ruralidad. La labor fundamental de los participantes académicos e institucionales comprometidos con fomentar estas nuevas ruralidades es abrir espacios institucionales y de mercado para que los campesinos e indígenas puedan seguir elaborando sus estrategias. Apoyarlos requiere de programas de educación para la conservación, para integrar a la sociedad en sus esfuerzos para forjar economías locales capaces de instrumentar el manejo sustentable de recursos regionales. Este apoyo, tanto en la conciencia como en las actividades concretas, abriría nuevos mercados y un apoyo social y político para que puedan contribuir a la vida nacional, sin sufrir los sesgos de antaño.

La incorporación de esta estrategia a la nueva agenda educativa transformaría la educación económica en un sustento real para la conservación. Los proyectos no sólo requieren de los apoyos materiales y tecnológicos para asegurar una adecuada productividad y el uso apropiado de los recursos naturales. Requieren, además, de los apoyos sociopolíticos y culturales para asegurar la integración de estas sociedades a la vida nacional, pero en sus propios términos. Estas comunidades constituyen parte sustancial de la población que nos ofrece mecanismos para construir una nueva sociedad que contempla la coexistencia de redes sociales viviendo al margen de la sociedad globalizada. Los predicadores de los procesos integradores ofrecen un discurso de falta de alternativas; insisten en la bondad de la homogeneización de las sociedades y sus procesos

productivos. Junto con la especialización productiva que imprime el libre comercio, arrasan con la riqueza cultural y étnica que es tan necesaria para la protección de la biodiversidad que tanto requerimos para la supervivencia del planeta y de la humanidad.

Las comunidades han superado con mucho los mezquinos programas oficiales para confrontar la pobreza. Si bien cuentan con limitados recursos, en muchos casos sus propias estrategias para enviar migrantes a otras partes y para atraer dinero y productos que aseguran su permanencia en las zonas rurales, exceden con creces el flujo de recursos canalizados hacia las zonas rurales desde los organismos gubernamentales e internacionales encargados del “desarrollo” o el “bienestar” rural.

Nuestra labor no es tanto suplir estos recursos externos, ni enseñar a las comunidades cómo producir mejor. Poco favor les estaríamos haciendo al presumir que es sólo un problema técnico el superar la pobreza que padecen. En sociedad tras sociedad, encontramos un sinnúmero de obstáculos institucionales erigidos por grupos caciquiles, por burocracias fosilizadas, por sistemas de poder tradicional, que temen el ejercicio autónomo de la gestión de los recursos naturales y la separación de estas comunidades de mecanismos clientelares de control político. En este contexto, al entender este potencial y las promesas que nos ofrece una renovada sociedad rural, sus partidarios tenemos la responsabilidad de crear una nueva cultura que los reconozca y los acepte como actores responsables capaces de contribuir en sus propias formas a superar los problemas sociales y ambientales que actualmente padecemos.⁷

⁷ Son numerosos los proyectos que se están esforzando para apoyar las iniciativas rurales. No se garantiza su éxito, simplemente se trata de respaldar a las comunidades, como lo ha demostrado vívidamente el caso de la Reserva de la Biosfera para proteger la Mariposa Monarca (Barkin, 2003b).

24. ENFOQUE HETERODOXO PARA ENTENDER EL PROGRESO EN EL SIGLO XXI¹

con BLANCA LEMUS²

Plantear la pregunta “¿Qué es el progreso?” nos ofrece un enorme reto en la coyuntura actual. Las propias definiciones del concepto están imbuidas por los contextos políticos en que estamos insertos o, en algunos casos, en las propuestas de nuevas estrategias con las que quisiéramos (re)construir el mundo. Siguiendo la reflexión de Antonio Gramsci (1999: 677-682), esta ideología del progreso es inseparable de la filosofía del devenir, mancuerna evidente en las discusiones que surgieron de una nueva dinámica social que quisiera imponer el neoliberalismo de hoy. Sin embargo, en vez de recorrer las muy trilladas discusiones de las limitaciones del contexto actual, escogemos caminar con las propuestas que nos sirvan para movernos hacia delante con otra ideología y otra visión del futuro, para superar los crecientes obstáculos sociopolíticos, económicos y ambientales que hoy impiden a las sociedades avanzar.

Los indicadores dominantes relacionados con el progreso son generalmente aquellos asociados con el empleo, el hambre, las capacidades,³ en fin, el bienestar de la población. Recientemente con frecuencia se agregan a éstos unos indicadores de la calidad del ambiente en que vivimos, tales como deforestación, contaminación del agua y del aire y proporción de las exportaciones que son productos primarios. Parece relevante en esta contribución enfocarnos en los condicionantes fundamentales que podrían determinar cómo avanzar hacia un mejoramiento en cada uno de los indicadores seleccionados.

Para empezar, sería útil avanzar hacia otro extremo, hacia una propuesta alternativa a la medición del bienestar a través del producto interno bruto (PIB) o sus partes componentes. Nos referimos a la propuesta surgida en el Reino de Bután, iniciado en 1972 por el rey Jigme Singye

¹ Publicado en M. Rojas (coord.), *La medición del progreso y del bienestar: Propuestas desde América Latina*, México, Foro Consultivo de Ciencia y Tecnología, 2011, pp. 111-117.

² Blanca Lemus Ruiz es Doctora en Medio Ambiente del Trabajo de la Universidad de Massachusetts, Lowell, y médica por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Es jubilada de las Facultades de Medicina y Biología de esta Universidad y sigue colaborando en investigaciones con el Dr. Barkin: urapeti@gmail.com.

³ Por razones meramente de facilidad, usamos este término en español para encuadrar los conceptos avanzados por Amartya Sen de “capabilities” y “functionings”.

Wangchuck, para poner en práctica un sistema alternativo de medición de la riqueza de un país basado en la “felicidad interna bruta” (FIB). Este concepto propone medir la riqueza de las naciones por el bienestar real (subjetivo) de los ciudadanos, por la alegría de vivir, por las sonrisas y no por el dinero o las posesiones materiales, como hace el PIB. Su idea inicial fue asegurar que la “prosperidad fuera compartida por toda la sociedad y fuera equilibrada con la conservación de las tradiciones culturales, la protección del medio ambiente y mantener un gobierno que responda a las necesidades de sus gobernados (Revkin, 2005)”.⁴

Aunque los ingresos personales en Bután se mantienen entre los más reducidos en el mundo, la expectativa de vida aumentó unos 20 años de 1984 a 1998, saltando de 43 a 66 años; la tasa de alfabetización ha pasado de 10% en 1982 a 60% al día de hoy, y la tasa de mortalidad infantil, de 163 muertes por cada mil habitantes a 43.3.⁵ En este tenor hay un fuerte compromiso de Bután con la conservación del medio ambiente. Las leyes de Bután reservan 70% de sus tierras para la “cobertura verde”, de las cuales 60% deben ser bosques. Sin restar importancia a los problemas que este pequeño país enfrenta con su elevado desempleo, la percepción que sus habitantes tienen de su calidad de vida como “buena” es de suficiente importancia para que se considere al FIB como un indicador al que se le está otorgando una importancia inusitada en todo el mundo.⁶

24.1. LA MEDICIÓN DEL PROGRESO Y DEL BIENESTAR. PROPUESTAS DESDE AMÉRICA LATINA

En la Encuesta Mundial de Valores, Inglehart encontró que los países latinoamericanos registraron mucha más “alegría” subjetiva que la que sus niveles económicos sugerirían (Inglehart, 2004). De igual manera, un equipo multinacional organizado por el Banco Interamericano de Desarrollo publicó un informe extensivo de su evaluación del asunto, con sus propias metodologías, aseverando que los datos sobre las percepciones y

⁴ Agradecemos mucho a Gabriel Torres González de CIESAS-Occidente su discusión del tema y sus aportaciones que nos llevó a incluir este material en esta nota.

⁵ Consultado en internet, en <<http://www.elnamoreno.net/2009/12/el-fib-vs-pib-felicidad-contra-desarrollo/comment-page-1/>>.

⁶ Es notable la proliferación de trabajos sobre la felicidad desde la difusión de la experiencia de Bután. Véanse, por ejemplo, el video producido por la International Society for Ecology and Culture (Norberg-Hodge *et al.*, 2011), y los libros sobre el tema editados por casi todas las editoriales con materiales sobre el desarrollo.

los valores individuales en una variedad de países en la región revelan grandes discrepancias con la estadística sobre sus condiciones de vida o las opiniones de los funcionarios encargados de la administración pública; ciertamente hay una gran divergencia entre los niveles de ingreso y sus niveles de satisfacción; éstos no se limitan a cuestiones monetarias, ya que abarcan, según los estudios, cuestiones sobre la naturaleza de sus fuentes de empleo y la calidad de la vida urbana, entre otros (Lora, 2009). Podríamos agregar, como dijo Albert Einstein, que “no todo lo que puede ser contado cuenta; y no todo lo que cuenta puede ser contado”. Y es que la medición de la felicidad incluye aspectos subjetivos, no materiales, como la influencia de las relaciones sociales, la autonomía y la autodeterminación, entre otros.

No es éste el lugar para repasar las interminables discusiones sobre los indicadores de la pobreza o sus significados. En muchos otros círculos, estudiosos del tema están tratando de entender lo que hace que la gente sea feliz o cuáles son los determinantes de una buena calidad de vida. A través del mundo académico el reto de definir el concepto parece estar más allá de nuestras posibilidades actuales, por caer en la incertidumbre. Lo que sí es cierto es que hay una creciente sensación de que las definiciones dominantes de las ciencias sociales no contribuyen a una comprensión adecuada del tema.

Por lo anterior, abordar el tema del progreso es más apremiante que nunca. La pregunta obligada sería: ¿Cuáles son los elementos que comprenderían un avance en este sentido? Parece claro que algunos de los elementos más comunes para responder a esta pregunta serían algunos de los componentes del índice de la FIB tales como la educación y la asistencia médica. Así, por ejemplo, con este viraje de énfasis en la política (social) nacional, en Bután se aumentó la expectativa de vida, hito similar a lo que se logró en Cuba, demostrando la gran separación entre los beneficios sociales y las exigencias del crecimiento económico. Sin embargo, hoy día, nuestras pretensiones de avanzar hacia una buena calidad de vida no podrían limitarse a estos instrumentos de la política social; es evidente que en muchas sociedades sufrimos de un deterioro en nuestra calidad de vida, resultado de la erosión de la red y la solidaridad social (con sus consecuencias asociadas de inseguridad pública y violencia personal), la incapacidad para garantizar un mínimo de los satisfactores básicos a través de programas sociales, ayudas económicas o el mercado, y el vertiginoso y escandaloso deterioro en la calidad medioambiental. Éste es un tema multifactorial y, por ello, plantear el reto del progreso requiere de una visión multidisciplinaria y una revaloración de algunos de los elementos fundamentales que normalmente asociamos con la sociedad “tradicional”.

En general, cuando se plantean problemas como el bienestar o el progreso, se nos remite a las políticas del desarrollo. Nos enfrentan hoy con la consigna de promover el desarrollo para obtener el bienestar, una encomienda que ha resultado esquiva, por no decir más. Es evidente para muchos que la consigna del avance económico ofrecido por los economistas no nos ha llevado hacia un camino adecuado. Esto lo podremos entender mejor una vez que examinemos el proceso de desarrollo; sin entrar en mayores detalles, recurrimos a la ya clásica obra de Gilbert Rist (2014)⁷ quien ofrece una definición iluminadora del desarrollo:

El “desarrollo” consiste de una serie de prácticas, a veces en conflicto aparente entre sí que requieren —para la reproducción de la sociedad— la transformación y destrucción del medio ambiente y de las relaciones sociales. Su meta es aumentar la producción de mercancías (bienes y servicios) producidos para el mercado y, por medio del intercambio, para satisfacer la demanda efectiva (2014, p. 13).

No es necesario desmenuzar esta definición, como lo hace Rist en su trazo histórico del concepto y su análisis del estado actual del tema, para darse cuenta de lo adecuado de esta frase para describir los objetivos de las políticas que buscan promover el desarrollo y su distanciamiento de las variables normalmente asociadas con calidad de vida. Ofrece una explicación interesante, empezando con señalar que a pesar de los loables y necesarios esfuerzos de la cooperación y la ayuda internacional, éstos “tienen poco impacto, comparado con las muchas medidas impuestas por la implacable lógica del sistema económico” (Rist, 2014, p. xi). Sin el afán de reproducir la totalidad de su argumento, basta anotar tres presuposiciones subyacentes en la práctica del desarrollo y, por ende, en la medición del progreso: evolucionismo social, individualismo y economicismo (Rist, 2014).

En lo que sigue, proponemos introducir algunas reflexiones sobre dos alternativas a este pensamiento; estas alternativas son dos cuerpos filosóficos y analíticos que están tomando forma para organizar el trabajo intelectual que debe acompañar la búsqueda de nuevas formas de comprensión. Si bien estas notas se limitan a la literatura académica, es importante anotar la relevancia de los movimientos sociales que están motivando e impulsando el trabajo escolástico y la tenaz resistencia que se está encontrando en los ámbitos institucionales, que no están dispues-

⁷ La primera versión fue publicada en Francia en 1996 y esta traducción de su tercera edición es testimonio de su importancia e impacto. Una traducción en español de una de las ediciones anteriores fue publicada en 2002, pero no circuló en México.

tos ni siquiera a explorar sus posibilidades, mucho menos a considerarlos como posibles sustitutos para las variables del pensamiento ortodoxo. Estas dos importantes líneas de reflexión alternativa son: *Decrecimiento* y *Buen Vivir*. Relacionados con éstas se encuentran otros dos cuerpos académicos que tienen sus propios lugares en la literatura: la economía ecológica y la economía social y solidaria,⁸ líneas en las cuales se ha acumulado una literatura abultada y que están sufriendo enormes problemas de debilitamiento a medida que muchos participantes están ampliando sus alcances y consideraciones en un esfuerzo por tratar de acercarlas a las metodologías y los contenidos de los campos dominantes.

24.2. EL DECRECIMIENTO

El “nuevo” campo del decrecimiento toma como su punto de partida con base en una diagnosis crítica de la situación actual a:

Una élite internacional y una “clase media global” [que] están causando grandes estragos al medio ambiente mediante el consumo conspicuo y la apropiación excesiva de los recursos humanos y naturales. Sus patrones de consumo llevan a mayor daño social y ambiental cuando es imitado por el resto de la sociedad en un círculo vicioso de búsqueda de “estatus” a través de la acumulación de posesiones materiales.⁹

⁸ De hecho, algunos consideran que el propio desarrollo del “decrecimiento” en Europa responde al desencanto con la “colonización” de la “economía ecológica” de muchos analistas de corte neoclásico (ortodoxo), que se han fugado de la economía ambiental por las atinadas críticas de su incapacidad de abarcar consideraciones biológicas y de justicia social; pero frecuentemente hacen esta transición sin transformar sus metodologías o aun sus paradigmas. De manera similar la “economía social y solidaria” está sufriendo su propia ausencia de precisión a medida que se mezclan objetivos sociales y políticos que motivaron los movimientos cooperativistas y sindicales de antaño con los de los impulsores de políticas sociales del Estado más eficaces, organizaciones comunitarias y las acciones caritativas de las iglesias. Últimamente, se ha ampliado todavía más el alcance de este campo con la incursión de las grandes empresas transnacionales que reclaman su propio derecho de entrada con sus inversiones en “responsabilidad social y ambiental” que las hace merecedoras de apelaciones estrictamente controladas (por ellas mismas) como “empresa socialmente responsable” (su denominación mexicana).

⁹ De la “Declaración de Barcelona, 2010”, resultado de la Segunda Conferencia Internacional sobre el Decrecimiento Económico para la Sustentabilidad Ecológica y la Equidad Social convocada en Barcelona en marzo de 2010. Para más información sobre el tema, consultese entre otras fuentes a <<http://www.degrowth.eu>>.

En la reunión internacional de donde surgió esta declaración, los adherentes a esta escuela de pensamiento ofrecieron una crítica que se extendió a las empresas transnacionales, las instituciones financieras y los gobiernos, e insistieron en sus profundas causas estructurales. Asimismo, señalaron que las medidas para enfrentar las crisis mediante impulsos al crecimiento económico sólo servirán para agudizar las desigualdades sociales y acelerar la degradación de las condiciones ambientales, provocando un desastre social y generando deudas económicas y ambientales a las futuras generaciones y sobre todo a los pobres.

Los asistentes afirmaron que el reto principal del momento actual es cómo realizar lo que ellos ven como la inevitable transición al decrecimiento económico, que tendrá efectos benéficos para el medio ambiente, en un proceso que también sea implementado con equidad social a niveles nacional y global. Las propuestas ofrecidas por los participantes en esta escuela de pensamiento abarcaron todas las dimensiones de la actividad productiva y social. Una parte significativa de los proponentes de alternativas se manifestaba optimista sobre la posibilidad de implementar cambios en los estilos de vida y en la organización de las comunidades para reducir la huella ecológica de los distintos grupos sociales. En sus críticas del modelo actual, hay una clara tendencia a proteger y fortalecer los derechos de los individuos y de reducir la escala de acción social y productiva para enfatizar lo local sobre lo global. Sin embargo, en esta Segunda Conferencia Internacional sobre Decrecimiento Económico hubo una fuerte tendencia a enfocarse hacia el diseño de reformas que podrían discutirse e implementarse en el seno de la organización actual de las sociedades ricas de donde provenía la mayor parte de los participantes; resultaron fallidos los pocos esfuerzos para introducir una discusión acerca de la posibilidad de poner en práctica estos cambios en el sistema actual de organización capitalista.

Aunque esta corriente de pensamiento toma sus impulsos intelectuales del campo de la economía ecológica, no plantea mecanismos para enfrentar las contradicciones fundamentales surgidas de la organización actual de la sociedad y su economía. Mediante su ambiguo compromiso de reducir la escala de producción y de consumo de los acomodados en los países “avanzados”, sus propuestas apuestan a la posibilidad de una transición suave hacia un “de-escalamiento”, hacia una economía de “estado estacionario”. Postula la posibilidad de la reorganización de las sociedades “ricas” para liberar recursos que dejarían espacios políticos y productivos para que se pudieran reorientar sus energías a su propia realización social y asegurar niveles adecuados de vida para sus poblaciones. Muchas de sus propuestas son tecnológicas, ofreciendo un nuevo despliegue físico y

productivo que hace caso omiso de las estructuras institucionales y corporativas que las impedirían, e ignoran por completo su dependencia en los países del “sur” para sostener aun un estilo de vida más austero.

24.3. BUEN VIVIR (*SUMAK KAWSAY*)

El concepto del “Buen Vivir” es una traducción o adaptación de la expresión en lenguas andinas quechua y aymara, definido en el preámbulo de la nueva Constitución de Ecuador como “una nueva forma de convivencia ciudadana, en diversidad y armonía con la naturaleza, para alcanzar el buen vivir, el *sumak kawsay*”. Elevado a principio constitucional,¹⁰ el *sumak kawsay* reconoce los “Derechos de la Naturaleza” y una nueva ciudadanía compleja, “que se construye en lo social pero también en lo ambiental. Ese tipo de ciudadanías son plurales, ya que dependen de las historias y de los ambientes, y acogen criterios de justicia ecológica que superan la visión dominante tradicional de justicia”. Expresado por Alberto Acosta, uno de sus protagonistas en el escenario ecuatoriano:

El valor básico de la economía, en un régimen de Buen Vivir, es la solidaridad. Se busca una economía distinta, una economía social y solidaria, diferente de aquella caracterizada por una supuesta libre competencia, que anima al canibalismo económico entre seres humanos y que alimenta la especulación financiera. A partir de esa definición constitucional se aspira a construir relaciones de producción, de intercambio y de cooperación que propicien la eficiencia y la calidad, sustentadas en la solidaridad. Se habla de productividad y competitividad sistémicas, es decir medibles en avances de la colectividad y no sólo de individualidades sumadas muchas veces en forma arbitraria (2010).

A diferencia de la forma de abordar el problema de la existencia de crecientes segmentos de la sociedad que requieren de caridad o transferencias oficiales para su supervivencia, este enfoque de una economía social y solidaria ofrece un contraste con la organización proletaria de la vida comunitaria. Su planteamiento rebasa con mucho las reformas propuestas por muchos de los participantes en los debates fincados en las visiones economicistas que no contemplan abandonar la acumulación individual o corporativa a expensas del bienestar colectivo. El *su-*

¹⁰ La contraparte boliviana, “vivir bien” (del aymara, *suma qamaña*), es la base con que se elabora la nueva Carta Magna de aquel país.

mak kawsay exige reorganizar la vida social y la producción económica, transformando el papel del propio mercado, domándolo para estar al servicio de la sociedad en vez de su papel actual como determinante de las relaciones sociales.¹¹

La visión del *sumak kawsay* es una de una concatenación de equidades económicas, sociales y políticas, que sustentan una organización diferente de la sociedad y su relación con la naturaleza. Estas equidades, expresadas en nuestro lenguaje político, comprenderían la igualdad y la libertad, la justicia social (productiva y distributiva) así como la ambiental; es evidente que se requieren acciones dramáticas para revertir las inequidades actualmente existentes (Acosta, 2010). De aplicarse este principio, constituiría una base sólida para reorientar el aparato productivo y las relaciones políticas y culturales, revirtiendo las inequidades que quebrantan los derechos y obstaculizan las posibilidades de una democracia efectiva. El progreso, en este sentido, se definiría en términos de una organización social y productiva que genera directamente a la igualdad, que produce la justicia social a través de la democracia directa.

24.4. OPERACIONALIZANDO

Los principios enunciados en este texto son parte integrante de una larga tradición de enunciados de los movimientos sociales. Nos remontamos a los albores de la Revolución francesa a la Comuna de París, las comunas de Richard Owen o las comunidades intencionales de las sectas protestantes y judías, y las luchas obreras del siglo XIX. La mayor parte reprimida de una manera u otra con trágicos saldo de masacres por las fuerzas al servicio de un modelo de construcción del concepto del “progreso” que ha traicionado a la humanidad y al planeta.

Hoy los que buscamos otro modelo de progreso nos damos cuenta de que “lo pequeño es bonito” de que Schumacher (1973) todavía tiene mucho que enseñar. Asimismo, nos vemos obligados a preguntar si la afirmación de Marshall Sahlins no sería más cierta que nunca: afirmaba

¹¹ Este punto es fundamental en los escritos de Karl Polanyi (2003) quien argüía la necesidad de volver a “incrustar” o arraigar el mercado en la sociedad, en contraposición con la situación moderna donde la economía domina a las relaciones sociales. Una amplia discusión del tema del “buen vivir” está presentada en las páginas de la revista *América Latina en Movimiento*, publicada en Ecuador y disponible libremente en línea en <http://alainet.org>; se recomiendan los números 452-454 de principios de 2010.

que los cazadores-recolectores ofrecen un modelo de una sociedad realmente cómoda (*affluent*):

Las poblaciones más primitivas del mundo tienen pocas pertenencias, pero no son pobres. La pobreza no es una cantidad determinada de bienes, es una relación entre medios y fines; es, sobre todo, una relación entre personas. Ser pobre es una categoría social. Como tal, es una invención de la civilización. Ha crecido con la civilización, de una vez como una diferenciación envidiosa entre las clases y como una relación tributaria que podría volver a los campesinos agrarios más vulnerables a los desastres naturales que cualquier campamento invernal de los esquimales de Alaska (Sahlins, 1983).

¿Será cierta la afirmación de algunos estudiosos críticos de que los campesinos del medievo trabajaron menos que el obrero industrial hoy día?

Pretendemos que estas reflexiones nos dejen con algunos indicadores y muchas lagunas e interrogantes. Para documentar la dinámica infructuosa de los esfuerzos actuales como los programas para alcanzar las “metas del milenio” o los efectos destructores de la organización actual de la sociedad, podemos recurrir a las mediciones de expectativa de vida, de niveles educativos, de tasas de morbilidad y mortalidad por grupos de edad, grupos sociales y género. Asimismo, podemos incluir como elementos fundamentales diversos indicadores de desigualdad económica y geográfica, de índices de acceso a infraestructuras sociales y culturales. Podríamos añadir diversos esfuerzos para identificar la relación entre la producción y el bienestar humano, por ejemplo, las variables relacionadas con la libertad de asociación en sindicatos y su eficacia para proteger los derechos laborales reconocidos internacionalmente; asociada con esta dimensión estaría la cuantificación de la salud y seguridad en el trabajo y la previsión para el bienestar más allá del periodo laboral de la vida de los trabajadores.

Sin embargo, gran parte de estas mediciones esquiva la crítica fundamental de las visiones alternativas; es decir, una descripción de la organización actual de la sociedad y de su aparato productivo, con todas las mediciones mencionadas, no toma en cuenta la manera en que el proceso contribuye al enriquecimiento de unos cuantos a expensas de la mayoría. A fin de cuentas, mientras persista este control concentrado (y dinámicamente creciente) será mínima (o nula) la posibilidad de revertir las observaciones patentes de creciente pobreza y exclusión de enormes grupos sociales.

Pero un verdadero progreso social y ambiental también requeriría una toma de nota de la dependencia de la sociedad en la extracción de recur-

sos naturales, tanto renovables como no renovables. Sería imprescindible la reducción de esta dependencia, así como una clara reducción en las diversas formas de producción de efluentes contaminantes y sobre todo de los tóxicos, incluyendo los gases de efecto invernadero. Asimismo, sería importante elaborar mecanismos para detectar las necesidades de rehabilitación de los ecosistemas y las posibilidades de protección efectiva de algunas áreas que conservan recursos vulnerables o en peligro de extinción, incorporando procesos para integrar a las poblaciones locales en estas labores, aprovechando sus conocimientos y sus propias organizaciones, con reconocimientos apropiados que les permitirían vivir dignamente. Sin embargo, no todas estas labores son susceptibles de cuantificación, aunque sea reconocida la importancia de revalorar el significado de estos ambientes relativos a la producción material.

En contrapartida, hay otros indicadores en diversas etapas de elaboración en diversos círculos internacionales para enfrentar los muchos problemas ambientales ampliamente reconocidos. Algunos incluyen los mencionados arriba, así como la intensidad energética de la producción y de los asentamientos humanos y los volúmenes de gases de efecto invernadero generados globalmente y en diversos sectores económicos. Sin embargo, los actuales mecanismos para controlar las emisiones globales están permitiendo a los mayores depredadores seguir con sus prácticas y a sus clientes seguir con sus patrones de consumo, a costa de comprar algunos servicios mal pagados de los productores en el tercer mundo; ahora ensanchado con un nuevo sistema de pagos a comunidades mediante el programa de REDD, elevado a nivel de otro mecanismo de desarrollo limpio en la fallida cumbre de Cancún en 2010. Por eso, sería necesario empezar a ser mucho más crítico sobre el uso de los actuales indicadores de calidad ambiental para tratar de implantar procesos para avanzar en un camino hacia el “progreso”. En el sentido de una ética global es inaplazable reconocer a todos los seres humanos el derecho moral de satisfacer sus necesidades básicas, de cumplir sus deseos de una vida mejor, de conservar las funciones vitales necesarias de los ecosistemas y de disponer de un acceso justo a los recursos globales.

Este repaso del estado actual del pensamiento de frontera sobre el tema de cómo impulsar el bienestar social refleja una visión pesimista respecto al proceso en el contexto capitalista. Nuestra reflexión crítica sobre el “progreso” refleja la dificultad de entender y medir el concepto dentro del contexto epistemológico dominante hoy día. Rechaza la propia valoración dominante de la producción, que equipara necesidades básicas con las superfluas, acepta una discriminación contra diversos grupos sociales y el factor de género, y condena la mayor parte de los

indicadores actuales a una distorsión fatal. Criticamos también la tendencia de subnumeral (menospreciar) las consecuencias del (ab)uso de los recursos naturales y a los grupos “subalternos”, ya que el medio ambiente, al ser afectado negativamente por la actividad humana, coadyuva a la degradación de la dignidad de las personas y de las sociedades, o lo que podríamos decir, limita la posibilidad de un buen vivir. Rechazamos la visión de enfocar nuestras esperanzas para enfrentar las contradicciones únicamente en las innovaciones tecnológicas. Visto así, las dificultades parecen insuperables.

24.5. HACIA EL RECONOCIMIENTO DE ALTERNATIVAS

En contraste, la búsqueda de nuevas estrategias, como las que se están implantando por los numerosos grupos que se han desligado de o están en proceso de desligarse de los circuitos nacionales e internacionales de la economía, ofrece evidencias abundantes de la capacidad social y la posibilidad de construir los mundos alternos. Frente al pensamiento dominante en la academia y entre los organismos promotores del “desarrollo”, una mirada de cerca a las organizaciones campesinas e indígenas muestra que muchos participantes en organizaciones miembros de la red internacional de vía campesina, están implantando sus propias estrategias de innovación tecnológica y organización social, lo que les está conduciendo a la construcción de un futuro optimista para ellos mismos mientras que contribuyen a proveer importantes servicios ambientales para las naciones de que son parte. Estas innovaciones sociales y tecnológicas han generado una amplia gama de nuevos productos que logran dar mayor valor a los espacios productivos tradicionales, nuevos sistemas para la gestión de sus recursos sociales y naturales y nuevas formas para su gobernanza. Las innovaciones abarcan nuevos espacios geográficos y nuevos grupos sociales, generando nuevas oportunidades sociales y económicas, retirando estos mismos del dominio del capital o de la posibilidad para su futura expansión.

Hemos denominado esta visión como la *nueva ruralidad comunitaria*, una realidad donde dominan las ideas de *comunalidad* (basada en cohesión social, democracia participativa, trabajo comunitario y la centralidad de territorio), *autonomía* (formación político-social), *autosuficiencia*, *formación político-cultural*, *redes de apoyo*, *diversificación productiva* y *de mercado* (desarrollo de fuerzas productivas comunitarias, generación de excedentes), y finalmente, *gestión sustentable de recursos regionales* (ordenamiento,

restauración, conservación, aprovechamiento). La práctica real de las comunidades es fuente de enorme fuerza social, dando contenido a estos criterios metodológicos, vinculados con una contribución fundamental en la orientación de los procesos de innovación tecnológica para la construcción de la sustentabilidad: la articulación de la responsabilidad social y solidaria, así como la responsabilidad ambiental. Se destaca, en ese sentido, la emergencia de la *asociación comunitaria* (comunalidad) como un mecanismo alterno a las funciones desempeñadas por el *mercado* y por el *estado* en la asignación de los recursos y en el desarrollo de capacidades tecnológicas, incluyendo la orientación hacia la innovación tecnológica. Con su capacidad de generar excedentes y canalizarlos hacia una nueva forma de acumulación no capitalista, han logrado desatar procesos de innovación tecnológica desde la construcción de otras racionalidades; de que otros mundos son posibles guiados por los principios de la *justicia social*, la *equidad intergeneracional* y la *gestión sustentable de recursos regionales*, con una reorientación hacia lo colectivo (en oposición a lo individual); al desarrollo del bienestar (en oposición al crecimiento); y el respeto a la explotación de los recursos naturales (en oposición al capital). Lejos de ser ideas emanadas de una torre de marfil, el planteamiento es una síntesis de la praxis y de las aspiraciones de las organizaciones sociales actualmente en marcha, encaminadas en las múltiples rutas de su propia transformación.

De esta manera, las sociedades en proceso de esta construcción social alternativa están también reconociendo su compromiso con otra forma de “contrato social”, una asociación comunitaria heredada de la cultura mesoamericana (Robles y Cardoso, 2008; Martínez Luna, 2003). Es una perspectiva ética diferente a la racionalidad económica fincada en intereses individuales para la asignación de recursos; descansa en los procesos de apropiación social de la naturaleza y por lo tanto en los procesos de innovación tecnológica guiados por los compromisos de una verdadera sustentabilidad. Requiere de un compromiso colectivo, de una aceptación de sujetar la voluntad individual a las decisiones colectivas.¹² La construcción de otros mundos ofrece un tajante contraste con las visiones dominantes que otorgan al individuo el derecho de resguardar su interés particular rechazando su participación con la comunidad, en función de su interés egoísta, si no le conviene (Villoro, 2003: 48-49).

La construcción de alternativas reales para “otros mundos mejores” genera otro camino hacia el progreso, otra visión del futuro. Los mate-

¹² Plasmado con fuerza artística en la película *Corazón del tiempo* (Alberto Cortés, 2009), filmado entre las bases zapatistas en las tierras de la Selva Lacandona.

riales recopilados en la literatura alrededor del mundo que documentan esas experiencias contrastan con la presentación ortodoxa de una multidisciplinariedad e interculturalidad pasiva; el *diálogo de saberes* incorpora de manera explícita las implicaciones de la posibilidad de la “negociación” y “democratización del conocimiento” (Toledo y Barrera, 2008). Presenta, entonces, el reconocimiento de los saberes —autóctonos, tradicionales, locales— que aportan sus experiencias y se suman al conocimiento científico y experto; *pero implica a su vez el disenso y la ruptura de una vía homogénea hacia la sustentabilidad; es la apertura hacia la diversidad que rompe la hegemonía de una lógica unitaria y va más allá de una estrategia de inclusión y participación de visiones alternativas y racionalidades diversas...* (Leff, 2004: 326, cursivas nuestras). Esta construcción de otros mundos, ¡ofrece esperanzas insospechadas!

25. PRINCIPIOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ORGANIZACIONES SOCIO-ECONÓMICAS ALTERNATIVAS: LECCIONES APRENDIDAS DESDE EL TRABAJO FUERA DE LAS ESTRUCTURAS INSTITUCIONALES¹

INTRODUCCIÓN

El “desarrollo a escala humana” y la “economía solidaria” son términos que caracterizan la más alta aspiración de los científicos sociales preocupados con el impacto del progreso económico en el bienestar de las personas. Nuestra experiencia nos muestra que los obstáculos fundamentales al desarrollo humano se encuentran relacionados con la incapacidad de los individuos y, más significativamente, de sus organizaciones, de empoderarse. Las estrategias alternativas pueden ser exitosas si ellos logran asumir exitosamente el control sobre la gestión de sus recursos humanos, naturales y materiales mientras mejoran su capacidad de definir los límites de sus esfuerzos en autogobernanza, especificando las esferas de autonomía local y los contactos con los mercados nacionales e internacionales, a fin de impedir un inevitable movimiento autodestructivo hacia la autarquía.²

Es cada vez más común encontrar a las comunidades exigiendo el ejercicio de esta autonomía al plantear las consideraciones éticas acerca de la complejidad del desarrollo. A pesar de que el enfoque liberal del desarrollo, como Sen (2002) entre otros, demanda que el desarrollo económico trascienda de sus tradicionales puntos de maximización de bienestar personal, algunos analistas todavía no reconocen la importancia de confrontar los impedimentos estructurales al ejercicio de las libertades

¹ Publicado en inglés en *Review of Radical Political Economics*, vol. 41(3): 2009, pp. 372-379.

² La importancia de la autonomía no puede ser exagerada. Esto amerita una comprensión y estudio detallado; para una reciente introducción revisese el material en “Multicultural Autonomies in Latin America: A Necessary Condition for Sustainable Development in Latin America” que está destinado “a establecer nuevos parámetros sociales para una sociedad civil convivial mediante una investigación de las estructuras básicas de los procesos autónomos en marcha en las sociedades indígenas de América Latina”. Cf. su página de internet, <http://www.latautonomy.org> y Gabriel *et al.* (2007) y Gabriel y López y Rivas (2008).

individuales y los mecanismos institucionales que sistemáticamente se apropián del trabajo y de los recursos que la gente dedica a la producción para el mercado.³ A pesar de que ellos no toleran tal comportamiento, implícitamente permiten la transferencia de este valor de los recursos —en su forma financiera— a los centros económicos globales y de poder político. Así, intensifican el proceso de polarización que caracteriza a la actual economía global; muchos liberales rechazan o no aceptan la realidad percibida por los analistas en el “Sur Global”, que consideran discriminatorios los múltiples procesos de monopolización de la producción, intercambio desigual y la subordinación proletaria, características inherentes de la economía de libre mercado. Por eso, numerosos grupos sociales se encuentran afectados por el abuso del poder político o del mercado controlado por corporaciones transnacionales.

En este entendido, el “enigma del desarrollo” no puede ser resuelto por un simple aumento de las tasas de ahorro o por la promoción de las empresas productivas locales; la mayor acumulación ha demostrado ser un motor traicionero para la intensificación de las desigualdades e incluso la privación de los derechos. Algunos profesionales honestos se han enfocado en mejorar las capacidades humanas, generando nuevas capacidades para superar los obstáculos a los logros individuales, y por lo tanto al desarrollo social. Sin embargo, este enfoque relega la dinámica subyacente de la acumulación a un papel secundario. Algunos se desentienden del proceso básico del ejercicio monopólico de poder en el área política y la operación de los mercados; consideran que pudiera ser controlado mediante la creación de instituciones con servidores públicos capaces de promover las oportunidades individuales y permitiendo la “libre e igual” interacción de las fuerzas sociales.

Como una alternativa, algunas sociedades marginadas están fortaleciendo sus actividades tradicionales y forjando nuevas estrategias. Están centrándose en renovar sus conocimientos y en sus métodos productivos ancestrales, incorporando elementos tecnológicos y avances científicos útiles, convirtiéndose en gestores e innovadores. A la vez, están experimentando con nuevas estructuras de gobernanza, para participar en las negociaciones con instituciones regionales, nacionales e internacionales.

³ La importancia de este punto es enfatizada por los estudiosos que analizan la centralidad de los componentes estructurales requeridos para “rectificar las desigualdades sociales o corregir desequilibrios ecológicos (mediante) [...] cambios en las instituciones y prácticas sociales”, como Hill (2006) tan convincentemente lo expresó. Véase también el número especial de *Maitreyee* (núm. 6, octubre de 2006) tratando con el “poder como una parte integral del análisis social dentro del marco del desarrollo humano”, publicado por el *Human Development and Capability Association*.

La necesidad de forjar estrategias viables requiere del control de su espacio geográfico y político, incluyendo alianzas entre personas que estén buscando nuevas respuestas a las fuerzas globales de marginación y exclusión. Los trastornos políticos en Argentina, Bolivia, Brasil, Cuba, Ecuador, Uruguay y Venezuela no están muy distantes de algunos de sus centros en estos mismos países, o en otros como México. Sin embargo, son mal entendidos como caos y oportunismo por Estados Unidos. Estos procesos de conflicto y acomodo están inspirando nuevas olas de experimentación política e innovaciones en nuestros países.

La dificultad de integrar algunas de las epistemologías modernas dentro de las organizaciones tradicionales y sistemas de conocimiento está generando nuevas formas de colaboración y producción, así como consolidación política y social. Las experiencias brevemente mencionadas en este documento ofrecen un intento de explicar por qué es necesario expandirse más allá del mejoramiento de sus capacidades individuales y del ejercicio de sus libertades individuales si las sociedades están por librarse de las camisas de fuerza impuestas por la internacionalización económica mundial con su imperativo de “libre” intercambio en los mercados. A pesar de que el impulso para el bienestar individual continúa siendo significativo, en este ensayo me gustaría subrayar la primacía de las determinaciones colectivas del valor de sus actividades y poner atención en los derechos colectivos, asegurando la viabilidad de los procesos comunitarios para la participación individual.

25.1. CONSTRUYENDO UNA CONCEPCIÓN DE LOS NUEVOS CAMPESINADOS

Las comunidades con las que trabajamos están intentando desarrollarse en consonancia directa con sus entornos naturales, respondiendo a las presiones naturales que emanan de los ecosistemas de que ellas dependen. Hoy en día, muchos científicos reconocen el significado del cúmulo de conocimientos acerca del funcionamiento del mundo natural de estas comunidades; comunidades que desarrollaron interesantes e innovadoras soluciones a problemas complejos, reconocidas por comunidades locales en todo el mundo y codificadas dentro de sus tradiciones religiosas y laicas y luego formalizadas en textos sagrados, en historias orales, o por los “guardianes de la palabra”. Recientemente, una nueva práctica académica humildemente reconoce nuestra deuda heredada a estas numerosas tradiciones, produciendo un rico acervo de entendimientos sobre el funcionamiento del mundo y de los caminos en los cuales podría-

mos atender de una mejor manera a nuestras propias necesidades y las del planeta.⁴

En nuestros equipos de trabajo en México, colaboramos con comunidades que están luchando por escapar de la dinámica de marginación social y económica (Barkin, 2000). Muchas fueron empobrecidas sistemáticamente desde la independencia hasta hoy mediante procesos de integración económica internacional. Durante el medio siglo, desde que Estados Unidos inauguró su primer “programa de desarrollo” en 1947, se siguieron condenando crecientes números a las columnas de la pobreza, aun cuando se suavizaron algunas de las peores manifestaciones de pobreza, tal como la corta esperanza de vida y la alta mortalidad infantil. En este artículo, ofrecemos varios ejemplos en los cuales equipos universitarios de trabajo fueron capaces de interactuar con estas comunidades para fortalecer sus proyectos colectivos. Esta experiencia está basada en la idea de que la gente codifica sus sistemas de conocimiento para intentar manejar mejor sus ecosistemas y producir los bienes que necesitan para su propio bienestar y para mejorar sus condiciones.⁵

25.2. INNOVACIÓN PARA MANTENER LA TRADICIÓN

Durante siglos, la cría de animales de traspatio ha sido un elemento central de las sociedades campesinas de todo el mundo. Las empresas transnacionales han socavado sistemáticamente esta estrategia mediante la imposición de nuevas tecnologías que hacen que las unidades familiares a pequeña escala sean inviables. La selección genética produce nuevas razas de aves de corral y de cerdos mejor adecuadas a las condiciones de las fábricas para reproducirlas y engordarlas, lo que causa el desplazamiento de las razas tradicionales, las cuales llegan a ser más eficientes en el procesamiento de los flujos de los residuos domésticos en las pequeñas granjas, sin embargo, requieren más tiempo de crecimiento antes de ser comercializadas. En nuestra búsqueda de estrategias de gestión de recursos regionales sostenibles, descubrimos que el aguacate es saludable, ya que contribuye a bajar los niveles de colesterol en la sangre de las per-

⁴ Para más información sobre este trabajo véase, por ejemplo, Funtowicz y Ravetz, 1993; Ravetz y Funtowicz, 1999. Algunas colecciones de artículos analíticos y estudios de caso pueden encontrarse en Frey, 2000; Berkes y Folke, 1998.

⁵ Este enfoque se elabora más extensamente en Barkin (1998) así como en Toledo (2000).

sonas y de los cerdos! (Un colaborador nuestro realizó los estudios para comprobarlo, y después elaboró un protocolo para tratar a sus pacientes, aplicándolo después para la arteriosclerosis.) Mediante la introducción de pequeñas modificaciones en las dietas tradicionales de animales de traspatio, ayudamos a las comunidades a producir carne baja en grasa que se vendió en los mercados regionales con un sobreprecio; el proyecto fortaleció el papel de la mujer en la comunidad, ya que ellas controlan los traspatios. Diez años después, es evidente que el enfoque todavía es aceptado.

En retrospectiva, la innovación propuesta resultó relativamente fácil de implementar porque el diseño se ajustó a la estructura existente de la vida del pueblo y de su organización política. Aunque está basada en una actividad en declive (crianza de cerdos), los cambios propuestos eran bien distinguidos por todos los participantes que entendían claramente la relación entre la dieta y la nutrición de los animales; la lógica comercial también fue convincente, especialmente dentro de la precaria economía rural de hoy. Dado que la concentración en esta actividad histórica recae en las mujeres, el proyecto también logró impulsar su función en la vida política de la comunidad. Por otra parte, con una creciente conciencia de la necesidad de mejorar las condiciones sanitarias, como resultado de la mejora de canales de información y de la preocupación por la salud, el proyecto también estimuló la discusión de los problemas ambientales, como la calidad del agua y la eliminación de aguas residuales así como su tratamiento (Barón y Barkin, 2001).

Un desarrollo interesante que surge de los trabajos sobre la carne de cerdo “lite” fue el descubrimiento de las cualidades nutricionales de la verdolaga, rica en omega-3, que podría ser valiosa para la alimentación de las gallinas que producen huevos, al ser “enriquecidos” con este tipo de grasa. La planta se puede incorporar fácilmente en la dieta de las gallinas ponedoras, desplazando el omega-9 de las yemas de huevo, para producir un producto que tendrá un impacto menor sobre el colesterol de los consumidores. Este programa es una consecuencia lógica al proyecto de cerdos en la sierra central, el aprovechamiento de una preocupación por la integridad de los ecosistemas con el fin de introducir una nueva actividad que promete generar nuevas fuentes de ingresos para los participantes.

Estas experiencias ofrecen una ventana singular en el proceso de desarrollo. En vez de concentrarse en las personas y su capacidad de participar de manera efectiva en las actividades de gobierno regional, el enfoque aplicado aquí se une a la búsqueda de actividades más productivas con estrategias para aumentar las capacidades colectivas y poner en

práctica programas para la gestión sostenible de los recursos regionales. Las comunidades se están convirtiendo en promotoras activas de programas comunitarios que están incrementando la participación en la diversificación productiva. La característica importante de este proceso es la relación entre iniciativas individuales y de decisión colectiva para el progreso regional.

25.3. RECUPERACIÓN DEL TERRITORIO, REHABILITACIÓN DE LOS BOSQUES Y FORTALECIMIENTO DE LAS SOCIEDADES TRADICIONALES.

Las sociedades indígenas, empujadas a las montañas por las sucesivas oleadas de expansión productiva de los conquistadores, ahora se encuentran herederas de valiosos recursos en los nacimientos de las cuencas fluviales, los recursos requeridos para el desarrollo urbano-industrial. Junto con los problemas del cambio climático global y otros fenómenos ecológicos, la falta de agua se está convirtiendo en algo particularmente grave, llevando a una búsqueda desesperada de soluciones para mitigar la crisis. Muchas de las propuestas recientes para la “producción sostenible”, están basadas en la racionalidad económica individual y en un discurso del desarrollo liberal, avanzar a una estrategia de desarrollo “moderno” en el que las corporaciones y los gobiernos no van más allá de un proceso de “lavado verde” como actividad corporativa (Escobar, 1995; Leff, 1995; Utting, 2002). El discurso de la sustentabilidad frecuentemente camufla una lógica capitalista y está teñida con una medida grande de biocolonialismo, una estrategia en la cual las comunidades indígenas y campesinas que habitan en regiones megadiversas no participan, excepto como informantes ecológicos y como objetos para ser rescatados.

No obstante, más recientemente, esta estrategia también inspira enfoques alternativos, basados en la apropiación local de esos conceptos por gente consciente de que la riqueza de los conocimientos heredados puede ser usada para mejorar los problemas medioambientales. Estas perspectivas y discursos alternativos han sido cultivados principalmente en los países del sur, en parte por teóricos, intelectuales, o por profesionales que trabajan directamente con personas que expresan sus demandas en términos de la defensa de su territorio, desarrollo alternativo, autonomía, sustentabilidad y autosuficiencia (Toledo, 2000). La más exitosa de esas propuestas es designada desde un punto de vista en donde los habitantes llegan a ser los protagonistas de la recuperación y la preservación de sus recursos.

Nuestros proyectos mexicanos se basan en una larga historia de lucha por parte de los diferentes grupos sociales y reflexión por pensadores sureños, quienes promueven enfoques alternativos de sustentabilidad. Los principios básicos de este trabajo son; *a)* la participación activa de la población local en el diseño y puesta en marcha de planes y programas, con lo que genera una capacidad para el automanejo y una recuperación de instituciones sociales así como de su identidad cultural; y *b)* el mejoramiento de la diversidad ecológica como parte de un programa que contribuya a la diversificación de la base económica local (Bonfil, 1996). Por lo tanto, la sustentabilidad en sí es un complejo conjunto de ideas entendida de forma diferente por cómo las personas asimilan las enseñanzas de sus propios comportamientos. Desde una perspectiva de mercado, el modelo permite a los “guardianes de los bosques” abstenerse de unirse a la fuerza de trabajo proletaria de bajos salarios⁶ —una oportunidad transitoria, concentrada en los polos de desarrollo— para que puedan convertirse en protagonistas de su propio desarrollo regional sostenible.

Otro caso involucra la “reconstrucción” de una cuenca. Se trataba de revertir la deforestación y compensar los excesivos saqueos de los recursos resultantes de un desarrollo megaturístico. Un programa de rehabilitación medioambiental invitó a las comunidades a recuperar sus estilos de vida, reforzando sus instituciones locales y diversificando la estructura productiva, rechazando el estándar del paternalismo y el enfoque del clientelismo; tuvo tres objetivos: *a)* reconstruir y conservar las cuencas y los bosques de la región; *b)* usar los ecosistemas de una manera sustentable; y *c)* unirse a los habitantes de la costa de Oaxaca en sus esfuerzos por recuperar su dignidad (Barkin y Paillé, 2000, 2002). El proyecto promovió la diversidad de la economía rural con la introducción de sistemas productivos alternativos para incrementar los ingresos y fortalecer las instituciones locales, enriqueciendo los sistemas de conocimientos tradicionales para la conservación con las técnicas modernas de conservación. Si el proyecto no hubiera considerado el enorme potencial del

⁶ Una nota sobre el papel del trabajo asalariado en esta estrategia está en orden. Aunque muchos miembros de las comunidades descritas en este artículo buscan trabajo en empresas capitalistas y reciben salarios, incluyendo algunos que tienen que migrar al extranjero en busca de mayores ingresos, la posibilidad de la comunidad de ofrecerles un refugio, un lugar para volver a donde se garantice su sustento y el de la familia, les genera cierta medida de libertad que la mayoría de los trabajadores no tiene; las relaciones proletarias, con sus procesos acompañantes de enajenación, dependen en gran medida de la falta de alternativas para las personas que deben aceptar el acuerdo de trabajo asalariado o enfrentar el hambre.

conocimiento tradicional en el manejo del ecosistema, el proyecto habría encontrado mayor resistencia por parte de las comunidades locales, como es común en muchos proyectos designados por agencias de desarrollo oficial en las oficinas centrales.

25.4. AGUA PARA SIEMPRE⁷

Los pueblos mixtecos son un grupo empobrecido en una región desolada al este-central de México que sufrieron de milenios de sobreexplotación. Un grupo de gente joven de la Universidad Iberoamericana propuso una colaboración con las 100 000 personas que viven en esa región para instrumentar un programa de rehabilitación del ecosistema basado principalmente en las técnicas del manejo del agua y de la tierra. Durante el subsiguiente cuarto de siglo (!) una serie de ambiciosos proyectos han mejorado las condiciones en un millón de hectáreas de la región, sobre la base de un programa firmemente anclado en la movilización comunitaria y el entrenamiento, basados en atacar el problema de la escasez de agua causada por tres factores: aumento de la población, gestión inadecuada de los recursos naturales, y la desigualdad en el acceso al agua y, muy especialmente, el sobresaqueo de suministros de agua por un pequeño número de personas legitimadas a través de las corruptas estructuras del poder.

La deforestación y la erosión superficial fueron los principales problemas en ser atacados. Una variedad amplia de proyectos que gestionan el territorio, incluyendo terrazas, represas y canaletas, fueron implementadas, por lo que personas provenientes de todas las comunidades pudieron participar. El efecto acumulativo de cientos de esos pequeños esfuerzos fue aumentar sustancialmente la tierra dedicada al cultivo y aumentar el volumen de agua captada para la producción agrícola, los animales y las comunidades. Este enfoque ha demostrado su viabilidad como un mecanismo para promover las capacidades locales más allá de la construcción de obras públicas y aumentar el potencial productivo de la región. La visión a largo plazo y el énfasis en la creación de capacidad local para la ejecución del proyecto ha transformado la organización en un tipo de

⁷ Para una descripción más detallada de esta y otras alternativas sobre el manejo del agua en México, véase Barkin (2001). El grupo responsable de este programa, Alternativas y Procesos de Participación Social, está dirigido por Raúl Hernández Garciadiego y Gisela Herrerías Guerra. Véase la página <http://www.alternativas.org.mx>.

sustituto de la agencia de gobierno local, con su propia estructura de gestión, flota de vehículos y equipo pesado de construcción con departamentos de ingeniería y planeación, e incluso un laboratorio de sistemas de información geográfica.

Otros proyectos parecidos están llevándose a cabo en otras regiones en México. Proyectos de gestión comunitaria del bosque ahora abarcan más de la mitad de los recursos maderables de la nación, donde grupos locales desarrollan sus propios programas de producción complementando esos programas con el ecoturismo, producción de artesanías, embotelladoras de agua y venta de servicios ambientales. Más importante, estos programas son ejemplos de la vía en la cual las personas están aprendiendo a apreciar el valor de sus tradiciones culturales heredadas y enriqueciéndolas con técnicas y aprendizajes de la época actual.

25.5. CONCLUSIONES

Los sistemas de conocimiento tradicionales están potenciados para proteger las comunidades y sus ecosistemas a lo largo de América Latina. Incluso, en la Ciudad de México distintos proyectos toman ventaja de los recursos locales para reforzar las economías locales y las estructuras políticas. Un bosque degradado está siendo rehabilitado como un sitio ecoturístico y como reserva natural, en donde a decenas de miles de visitantes que buscan el senderismo y ciclismo se les informa sobre la importancia de la naturaleza. Un anfibio precolombino, el axolotl, se ha convertido en una atracción carismática en los “jardines flotantes” de Xochimilco, cuando una comunidad decidió abandonar el comercialismo sin sentido a favor de proporcionar un *tour* que explica lo complejo que es el ecosistema y que éste puede llegar a ser gestionado para brindar una extensa variedad de distintos frutos, vegetales, y pequeños animales que protegen el medioambiente y brindan a las personas un bienestar económico.

Este relato anecdótico muy selectivo de iniciativas de desarrollo local que se están llevando a cabo, por supuesto no hace justicia a la gran cantidad de actividades realizadas por millones de mexicanos que están aplicando estrategias de desarrollo local al margen de la integración económica internacional. Se están fortaleciendo los órganos de gobierno tradicionales y se selecciona a funcionarios locales para promover los programas de producción y conservación coherentes con las estrategias sostenibles de gestión de los recursos, así como están respondiendo a las

necesidades locales; en el proceso, están transformando las relaciones de mercado con el mundo exterior, sustituyendo a sus socios comerciales con vínculos con otras organizaciones en donde llevan a cabo un comercio justo, así como con otras empresas “nicho” que los protegen contra el intercambio desigual.

Nosotros hemos sistematizado este conjunto de experiencias dentro de una estrategia para el manejo sustentable de los recursos a escala regional. La estrategia está siendo replicada a lo largo de todo el país y fue reforzada durante la conmemoración del año nuevo en 2009 convocada por los zapatistas para expresar su “Digna Rabia” (Digna Rabia; <http://dignarabia.ezln.org.mx/>). Las comunidades individuales se están moviendo más allá de sus confines locales para construir alianzas dentro y entre las regiones y los ecosistemas, ganando poder político y social para defenderse.

Si hay un aprendizaje que puede ser extraído de la experiencia mexicana, es que para que la tradición logre trascender, tiene que convertirse en un proceso viviente, un recurso que se debe renovar constantemente. En México, muchas comunidades están revalorando sus epistemologías originarias y están construyendo alternativas a la globalización. Nos están comprobando que la consigna de Seattle (1999) requiere una actualización:

¡MUCHOS OTROS MUNDOS SON POSIBLES!

PARTE IVb
RESISTENCIAS Y ALTERNATIVAS.
IMAGINAR Y CONSTRUIR EL FUTURO

INTRODUCCIÓN

Esta sección empieza con mi participación en las actividades de “reflexión y análisis” en tierras chiapanecas después de un periodo de intensas actividades de la “Digna Rabia” para conmemorar el decimoquinto aniversario del levantamiento zapatista. Asienta mi convicción, plasmada a lo largo de este libro, de que son los pueblos originarios, junto con las comunidades campesinas dispuestas a acompañarlos, quienes están generando las respuestas necesarias para enfrentar los profundos cambios naturales y sociales que nos esperan.

En la disciplina de la economía, el surgimiento de un nuevo campo, la economía ecológica, representa un hito importante. Aparecido a finales del siglo pasado, reflejó la necesidad que muchos sentíamos de transceder los límites de la economía ortodoxa, como lo he expresado en varias partes de este libro. Mi propia experiencia en este proceso empezó con una interacción con Kenneth Boulding en Denver, Colorado, en los años sesenta, para luego tener la oportunidad de visitar a Nicolás Georgescu-Roegen hacia finales de los setenta. En el Centro de Ecodesarrollo, ya habíamos comenzado a realizar las labores de generar una ciencia multi o transdisciplinaria; nuestras investigaciones y las decenas de libros que publicó constituyen un testimonio de las profundas raíces de este trabajo en México. Mi participación en el campo me llevó a participar en la creación de la Sociedad Mesoamericana de Economía Ecológica y la introducción de este campo de estudio en el posgrado de ciencias económicas, donde tuve la fortuna de encontrar un buen grupo de estudiantes comprometidos con emprender un camino heterodoxo para su formación profesional, algunos de los cuales son coautores de los capítulos de este libro. En el proceso, tuve la buena fortuna de una invitación generosa de Joan Martínez Alier de compartir un año en su Instituto en Barcelona, factor que contribuyó a avanzar y perfeccionar nuestros trabajos en México. El capítulo 27 es reflejo de nuestra interacción crítica con este campo donde el conflicto de paradigmas sigue siendo un reto para su consolidación.

No se podría incursionar en estos quehaceres sin encontrarse con los predicadores de la responsabilidad social y económica de los actores y el avance de las formas alternativas de organización dentro de las actividades urbanas y comerciales. Nuestra participación (con Blanca Lemus) en un

proyecto del UNRISD (Instituto de Investigaciones para el Desarrollo Social) es la continuación de investigaciones realizadas en México que demostraron lo realmente cínico de los muy caros ejercicios empresariales para etiquetarse de socialmente responsables (Utting, 2002). Esto contrasta con los muy loables esfuerzos de grupos de trabajadores para defender y fortalecer sus posiciones y sus comunidades, tomando control de empresas que caen en bancarrota, como son las más de 400 fábricas recuperadas en Argentina y unas cuantas en México (Ness y Azzellini, 2011). En el capítulo 28, seguimos examinando el lado positivo de esta orientación, los grupos sociales empeñados en crear mecanismos cooperativos de producción y de intercambio; advertimos sobre algunos de los peligros del idealismo y del pragmatismo, pero dejamos claras las posibilidades de avanzar en esta dirección, como lo están demostrando numerosos grupos de compañeros mexicanos.

Finalmente, cerramos con una síntesis de muchas de las ideas de este libro. Parte importante de los millones de personas que están apostando a un futuro mejor, lo están haciendo fuera de los límites institucionales del capitalismo. Están involucrados en una enorme variedad de actividades para tratar de forjar las bases de una sociedad más justa y más responsable consigo misma y con el planeta. Durante cuatro años colaboramos con un equipo internacional en 11 instituciones interesadas en la gobernanza ambiental (Castro *et al.*, 2015); identificamos múltiples formas de organización y de fortalecerse a través de colaboraciones con grupos locales que son testimonio de la ingenuidad de sus participantes y de su confianza en que podrán vivir mejor. El *sumak kawsay* de los pueblos andinos y el *Mandar obedeciendo* de los zapatistas son justo dos de estas formas, que van abriendo caminos y discusiones, creando nuevas oportunidades y provocando a los demás a unirse.

26. LA PROMESA DEL CAMPESINADO MEXICANO¹

Aunque México está en crisis y las condiciones de vida de su población están deteriorándose drásticamente, en la actualidad importantes grupos de sus pobladores rurales AHORA MISMO están forjando los nuevos mundos por los que claman los altermundistas desde Seattle hasta Copenhague. Construyen entornos que prometen una mejor calidad de vida y una cierta autonomía de los embates del neoliberalismo. En ninguna parte la vemos con mayor claridad que aquí en Chiapas, en esta Universidad, en el auditorio aquí atento a lo que se dice y participante en esta construcción.

En contraste con sus conductas en períodos anteriores de crisis, estas acciones campesinas e indígenas representan un desafío frontal a la política neoliberal. Su praxis refleja un rompimiento histórico, un abandono de procesos de colaboración, negociación y acomodo con los primeros gobiernos de la Revolución, empeñados en incorporarlos al proceso de modernización globalizante mediante su participación en los programas oficiales. Frente a la política de integración internacional y modernización urbano-industrial que promete dejarlos fuera de una nación en “reconstrucción”, importantes segmentos de la sociedad rural están proponiendo sus propias estrategias alternativas, una *nueva communalidad* que insiste en sustituir al mercado para definir cómo asignar recursos, cómo garantizar un nivel de vida digna para todos sus miembros, donde se puede crear nichos para generar nuevas oportunidades y respeto a las exigencias ambientales. Esta nueva communalidad hace posible una *verdadera* sustentabilidad, fincada en los atributos de responsabilidad social y ambiental. Sus experiencias nos reafirman algo muy significativo: para que estas sociedades “tradicionales” sobrevivan, para que puedan definir y realizar sus propios modelos de progreso, tendrán que seguir innovando; como hemos aprendido de la milenaria experiencia de innumerables pueblos, la tradición sólo puede mantenerse viva y con fortaleza a través de un proceso de cuidadosa y continua innovación. Para entender este proceso los invito a reflexionar sobre sus propias actitudes y acciones y sus relaciones con estos protagonistas y sus nuevas propuestas, con su

¹ Ponencia presentada en el “Seminario Internacional de Reflexión y Análisis” convocado por la Universidad de la Tierra, Chiapas, 30-31 de diciembre de 2009 y 1-2 de enero de 2010, en San Cristóbal de las Casas, Chiapas.

invitación implícita de acompañarlos a construir nuevos ámbitos de solidaridad y respeto mutuo. En los términos de Luis Villoro: nos invitan a acompañarlos en su abandono y rechazo a la hegemonía de la cultura occidental. ¡Qué apropiado este rechazo en tierras zapatistas!

Ya han pasado muchos lustros desde que terminó “el milagro mexicano” junto con sus promesas de una vida mejor, de cumplir con las reivindicaciones que simbolizaron los mejores ideales de la Revolución mexicana. En aquellos años, los campesinos colaboraron con el “proyecto de nación”, haciendo producir a las tierras que la Revolución les entregó, aceptando los magros beneficios de sus encomiables esfuerzos por elevar la productividad del campo, y así alimentar a los mexicanos y financiar los cimientos del mundo urbano-industrial, que hoy el gobierno está entregando a los capitales de ultramar.

Casi todos ya se desengañaron de las promesas incumplidas, y sobre todo las más recientes del Estado, que les ofrece sacarlos de la marginalidad que él mismo creó. A la vez, se dieron cuenta de la falsedad de la posibilidad de mejorar sus condiciones mediante su incorporación a la fuerza de trabajo obrero o a la informalidad, las únicas rutas ofrecidas por la política oficial. Por eso, están instrumentando nuevas propuestas para producir las condiciones necesarias para su propio progreso social y económico —*un progreso alejado de los valores mundanos de un mundo de consumo y derroche*— fincado en una vida comunitaria y un respeto por los ecosistemas de que dependemos todos.

Sus respuestas actuales han resultado mucho más creativas de lo esperado; están llegando más lejos de lo que jamás imaginaron, como vemos aquí en estas tierras zapatistas donde estamos celebrando otro aniversario del levantamiento, ¡su decimosexto! Son esfuerzos ambiciosos de importantes grupos de comunidades colaborando entre sí y construyendo alianzas para enfrentar y superar las diversas estrategias del capital para apropiarse de sus territorios y recursos. Sus esfuerzos son una reacción al rompimiento del pacto social que ofreció la Revolución, la respuesta al desdén oficial de los “muchos Méxicos” que se niegan a morir. El brusco cambio operado por las élites políticas y económicas en la sociedad mexicana durante los últimos decenios del siglo xx remplazó el pacto con un nuevo proyecto de integración internacional, un modelo urbano-industrial para el beneficio de unos cuantos privilegiados. Ante este nuevo escenario en estas tierras chiapanecas y muchas otras regiones a lo largo y ancho del país, importantes grupos sociales están reorganizándose para redoblar sus exigencias de “justicia social”, repudiando los repetidos embates a que fueron sometidos, para tomar control de las riendas para su bienestar: sus gritos de “Basta” y “El campo no aguanta más” transformaron a impor-

tantes segmentos de la población rural de empobrecidos productores de alimentos, agroexportaciones e insumos agroindustriales, en aguerridos promotores de otra forma de sociedad, una que atendiera a sus propias necesidades y a las de la mayoría de los mexicanos. Que promoviera la expansión productiva al tiempo que buscara formas de asegurar la rehabilitación y la conservación de sus ecosistemas, contribuyendo de esta manera no solamente a su propio bienestar, sino también al de la sociedad en su conjunto.

En esta visión se puede observar la construcción o reconstrucción de otros mundos, en los cuales importantes grupos sociales rechazan ser condenados a la marginación, a la extinción. Insisten en un nuevo estilo de progreso social y económico que ofrezca frutos materiales e inmateriales sin amenazar al medio ambiente. Estos mundos alternativos son ámbitos donde se exigen los derechos y superan los ataques para avanzar en sus propias propuestas: incluyen a los de Atenco, los de La Parota, los de Arcediano en Guadalajara, por mencionar sólo algunos de los centenares de pueblos que se han agrupado en el Movimiento de Afectados Ambientales, junto con los que se han reunido en torno a los zapatistas, La Otra Campaña y Vía Campesina. Estos mundos dejarían de depender de la integración económica y política internacional; con ellos se plantea la construcción de alianzas nacionales e internacionales, pueblos comprometidos con proyectos afines para asegurar sus necesidades básicas y su progreso.

RECONSTRUYENDO EL MUNDO RURAL

Hoy en día son muchos los que han condenado a los campesinos a la extinción. Recordemos el debate de una generación anterior —campesinistas contra descampesinistas— cuando los eruditos del momento rechazaron la posibilidad de la supervivencia de los campesinos porque representaban los rezagos de un modo de producción del pasado. La discusión actual gira en torno a la cuestión de la forma y las repercusiones de las estrategias que los campesinos están diseñando para su supervivencia. Aun cuando ahora mismo grupos dominantes en la academia ofrecen doctas explicaciones para respaldar los análisis oficiales de la burocracia nacional y de las agencias internacionales al servicio del capital, dictaminando el hundimiento de los moradores del campo en una crisis, este encuentro en CIDECI (Centro Indígena de Capacitación Integral, o UniTerra en San Cristóbal de las Casas, Chiapas), es evidencia de otra realidad. Los campesinos están demostrando que son actores con

iniciativa, con sus propias estrategias de innovación tecnológica y organización social; junto con los zapatistas, en todas partes del país se está construyendo un futuro alterno a las limitaciones impuestas por las estructuras dominantes de un mundo capitalista que los condenaría a la subyugación proletaria. Sus innovaciones sociales y tecnológicas han generado una amplia gama de nuevos productos que buscan dar mayor valor a los espacios productivos tradicionales, nuevos sistemas para la gestión de sus recursos sociales y naturales y nuevas formas para su gobernanza; en fin, los otros saberes que son centrales en este seminario. Las innovaciones abarcan nuevos espacios geográficos y nuevos grupos sociales, generando nuevas oportunidades sociales y económicas así como la recuperación de sus ecosistemas y sus recursos naturales, retirando éstos del dominio del capital o de la posibilidad de su futura expansión.

Hemos denominado esta visión como la *nueva ruralidad comunitaria*, una realidad donde dominan las ideas de 1] *comunalidad* (basada en cohesión social, democracia participativa, trabajo comunitario, y centralidad de territorio), 2] *autonomía* (formación político-social), 3] *autosuficiencia*, 4] *formación político cultural*, 5] *redes de apoyo*, 6] *diversificación productiva y de mercado* (desarrollo de fuerzas productivas comunitarias, generación de excedentes), y finalmente, 7] *gestión sustentable de recursos regionales* (ordenamiento, restauración, conservación, aprovechamiento, definido culturalmente). La práctica real de las comunidades es fuente de enorme fuerza social, dando contenido a estos criterios metodológicos, vinculados con una contribución fundamental en la orientación de los procesos de innovación tecnológica para la construcción de la sustentabilidad: la articulación de la responsabilidad social (equidad intergeneracional, justicia social) y la responsabilidad ambiental (gestión sustentable de recursos regionales).

Se destaca la emergencia de la *asociación comunitaria* (comunalidad), con sus nuevas formas de democracia representativa como un mecanismo alterno a las funciones desempeñadas por el *mercado* y por el *Estado* en la asignación de los recursos y en el desarrollo de capacidades tecnológicas, incluyendo la orientación hacia la innovación tecnológica. Este despliegue, esta reorientación de los procesos innovadores tiene como sustento otros modos de acumulación no capitalista, controlados por los propios productores y sus comunidades. Este planteamiento supone la posibilidad de desarrollar procesos de innovación tecnológica desde la construcción de otras racionalidades; de que otros mundos son posibles guiados por los principios de la *justicia social*, la *equidad intergeneracional* y la *gestión sustentable de recursos regionales*, con una reorientación hacia lo colectivo (en oposición a lo individual); al desarrollo del bienestar (en oposición

al crecimiento), y el respeto a la explotación de los recursos naturales (en oposición al capital). Lejos de ser ideas emanadas de una torre de marfil, mi presentación en este Seminario Internacional es una síntesis de la praxis y de las aspiraciones de las organizaciones sociales actualmente en marcha, encaminadas en las múltiples rutas de su propia transformación.

La innovación tecnológica juega un papel fundamental en los proyectos productivos para los que trabajamos con las comunidades. Es parte central del compromiso para la construcción de una verdadera sustentabilidad; comprende una nueva relación con el poder para montar sus propios modelos de progreso social y económico para nuevas formas sustentables de apropiación social de la naturaleza. Se trata de aprovechar los saberes locales, usando la ciencia para crear una sociedad fincada en una nueva racionalidad que conjuga las exigencias planetarias con las aspiraciones de los pueblos emprendiendo diversos caminos para su liberación. Los que caminamos por estas veredas reconocemos de manera especial el papel protagónico de las prácticas campesinas con ascendencia mesoamericana para enfrentar el carácter excluyente de la globalización económica.

Quiero destacar ahora algunas de las experiencias de trabajo desplegadas por comunidades campesinas; aunque cada ejemplo es de una sola actividad productiva, se conciben como partes en el proceso de la construcción de la autonomía y del empoderamiento:

- La reserva campesina de la biosfera en las Chimalapas. La comunidad indígena zoque maneja la reserva y canaliza los recursos para el sustento de la comunidad y asume la responsabilidad del entrenamiento profesional para colaborar con investigadores extranjeros; algunos miembros de la comunidad se formaron como biólogos y se entrenaron en el manejo de recursos forestales e hidráulicos en escuelas técnicas nacionales e internacionales. Se iniciaron los viveros para la siembra selectiva de ciertas especies de árboles que se encuentran en peligro de extinción y se implementó un pequeño programa de ecoturismo; se capacitaron para ordenar sus territorios y combatir agresiones como los incendios forestales. Este logro comunitario no fue fácil, pero se hizo posible con el apoyo de grupos ambientalistas y la asistencia financiera del gobierno inglés a principios del proceso, en el decenio de los ochenta.
- Algunas alternativas locales para el Istmo de Tehuantepec. La cruel polarización social ha llevado a las comunidades a realizar una serie de alianzas entre ellas para fortalecer el potencial natural de la re-

gión, respaldadas por la planta cementera de propiedad cooperativa. Se asociaron con un Fideicomiso para la Infraestructura Ambiental del Istmo para promover la gestión sustentable de los recursos naturales, basada en la organización de las cuencas de los ríos. Las propuestas incluyen un programa ambicioso para la rehabilitación de los cauces de los ríos y el manejo del agua y la tierra, con lo que se generarán nuevas oportunidades a través de la rehabilitación de los bosques, cierta producción de exportación agrícola y el mejoramiento y la expansión del sector artesanal. Esta experiencia contrasta marcadamente con los conflictos suscitados por la explotación que están sufriendo otras comunidades en la región (como La Ventosa) por la instalación de grandes “granjas” de aeroturbinas para generar energía eléctrica eólica, mayormente con inversión española, que no redundará en beneficio de los pueblos asentados en estas tierras.

- La revalorización de la producción tradicional de cerdos en las comunidades purhépechas frente a las tendencias nacionales y globales hacia la desaparición de la economía de traspaso. La respuesta propuesta involucró la colaboración con la organización indígena regional para producir “carne de puerco lite”, con niveles reducidos de colesterol en condiciones de traspaso con un sobreprecio importante. La colaboración contribuye a los esfuerzos para fortalecer la capacidad social para promover la democracia directa, fortaleciendo la economía de la región y el papel de la mujer dentro de las comunidades, ya que esta actividad es realizada principalmente por mujeres. También está atacando la contaminación ocasionada por el desecho de una parte de la cosecha de la fruta sin valor comercial y sus impactos severos en el manejo hidráulico del agua en la región.
- La producción de huevos enriquecidos con omega-3 (un ácido graso benéfico para la salud humana) en condiciones periurbanas, ha resultado eficaz como alternativa para fortalecer organizaciones sociales, atender a problemas ambientales, generar ingresos adicionales y arraigar las familias a sus comunidades en mejores condiciones sociales y materiales, ya que la venta de los huevos ha encontrado una elevada demanda. En este sistema se están forjando nuevas formas de acumulación, al servicio de las comunidades para sus futuros proyectos. Aquí también las protagonistas son mayormente mujeres.
- De manera similar, se observan esfuerzos en muchas comunidades forestales, en otras comunidades en torno a áreas naturales protegidas y muchos más defendiendo sus recursos naturales y especialmente sus fuentes de agua y sus derechos a garantizar acceso a ella. De hecho, México es conocido mundialmente por los avances en el

control comunitario de sus bosques, por el éxito de centenares de comunidades que lograron arrancar el control de los concesionarios y transformar su gestión con base en una visión diferente, la que se pregunta para qué sirven los bosques y también cómo conservarlos para las generaciones futuras. Los recientes éxitos de los pueblos en Guerrero y Jalisco en torno a la cancelación del proyecto de La Parota y la postergación del de Arcediano también ofrecen ejemplos de variadas estrategias para consolidar acciones comunitarias para construcciones alternativas; la todavía incierta victoria para detener la explotación de la mina San Xavier refleja la profundidad de la resistencia del capital y la complejidad de las batallas comunitarias. Asimismo, estamos viviendo numerosas acciones en todo el país para detener las intenciones oficiales de privatización del manejo del agua y asegurar su disponibilidad para la vida colectiva.

- Otros ejemplos, menos conocidos, también ofrecen aliento al mostrar la variedad de caminos que se están recorriendo en esta construcción de nuevos mundos. La recuperación de un millón de hectáreas en la Mixteca Alta con la participación de más de un centenar de comunidades, durante más de un cuarto de siglo construyendo obras de manejo de agua y suelo que demuestra la manera en que los conocimientos milenarios pueden enriquecer el uso de tecnologías modernas para mejorar la calidad de vida de los participantes y generar recursos para el futuro; su iniciativa de aprovechar estas tierras y agua recuperada para producir amaranto e industrializarlo para su sostén y el beneficio de los consumidores. Las experiencias se multiplican: cooperativas de artesanos; proyectos autogestionados de ecoturismo; las redes de productores de café comercio justo, comercializados por organizaciones solidarias, de miel, cacao y chocolate; la red de comercialización de granos ANEC; etcétera.

Estas experiencias son evidencia de la importancia de los otros saberes y del diálogo con los conocimientos del presente. Su premisa es la necesidad de tomar en cuenta a la gente en la implementación de la solución de problemas, reconocer como válidos sus conocimientos y colaborar con ellos en la construcción de soluciones. Las lecciones de los caracoles de buen gobierno reflejan poderosamente esta capacidad de aprovechar y enriquecer lo heredado con ciertas aportaciones de frontera. La sinergia tecnológica entre saberes y conocimientos ha sido clave en el desarrollo de estos proyectos, pero la distinción fundamental, con respecto a otros proyectos impulsados por ONG y organismos multilaterales, ha sido su diferente orientación ética: la construcción de una verdadera sustentabi-

lidad desde los atributos de responsabilidad social y ambiental. Esto es, la puesta en marcha de procesos de una nueva ruralidad comunitaria.

De esta manera, las sociedades que participan en el proceso de esta construcción social alternativa están también reconociendo su compromiso con otra forma de “contrato social”, una asociación comunitaria heredada de la cultura mesoamericana, expresado elocuentemente por Floriberto Díaz y Jaime Martínez Luna, de la Sierra Juárez y algunos de sus herederos intelectuales y seguidores. Es una perspectiva ética diferente a la racionalidad económica fincada en intereses individuales para la asignación de recursos; descansa en los procesos de apropiación social de la naturaleza y por tanto en los procesos de innovación tecnológica guiados por los compromisos de una verdadera sustentabilidad. Requiere asimismo de un compromiso colectivo, de una aceptación de sujetar la voluntad individual a las decisiones colectivas; como se refleja en este foro y se plasma con fuerza artística en la película *Corazón del tiempo*, la construcción de otros mundos ofrece un contraste tajante con las visiones dominantes, que Villoro sintetizó al mostrar cómo si se otorga al individuo el derecho de resguardar su interés particular y rechazar su participación con la comunidad en función de su interés egoísta, no lo hace si no le conviene.

En conclusión, la construcción de alternativas reales para “otros mundos mejores” está en este proceso. En ninguna parte más que aquí en las tierras zapatistas, pero también en otras partes del país. A diferencia de la presentación ortodoxa de la multidisciplinariedad y la interculturalidad, el *diálogo de saberes* incorpora de manera explícita las implicaciones de la concentración del poder sobre la posibilidad de la “negociación” y “democratización del conocimiento”. Presenta, entonces, el reconocimiento de los saberes —autóctonos, tradicionales, locales— que aportan sus experiencias y se suman al conocimiento científico y experto; *pero implica la ruptura de una vía homogénea hacia la sustentabilidad; es la apertura hacia la diversidad que rompe la hegemonía de una lógica unitaria y va más allá de una estrategia de inclusión y participación de visiones alternativas y rationalidades diversas...* La construcción de otros mundos está en proceso, no sólo aquí en Chiapas —y ofrece esperanzas insospechadas!

27. LA SIGNIFICACIÓN DE UNA ECONOMÍA ECOLÓGICA RADICAL¹

con MARIO FUENTE y DANIEL TAGLE²

INTRODUCCIÓN

El carácter articulador de disciplinas se presenta como uno de los atributos básicos de la Economía Ecológica (EE) en la construcción de propuestas holísticas orientadas a comprender el tema de la sustentabilidad ecológica de la economía. Sin embargo, la traducción operativa de tal atributo en un programa de investigación no es una faena fácil; su instrumentación no sólo presenta obstáculos epistemológicos, sino también éticos e ideológicos. Para esta integración disciplinaria, el pluralismo metodológico sigue siendo central, aunque, como veremos, una aspiración a realizarse. Su inclusión como esencia de la EE ha sido uno de los factores que ha favorecido la existencia de diferentes orientaciones en la explicación y comprensión de su objeto de estudio.

Este trabajo propone la necesidad de una versión *radical* para el análisis integral de las causas subyacentes de la triple crisis que nos enfrenta hoy en día: social, económica y ambiental. En este sentido, se introduce la idea de abrir un necesario debate sobre la pertinencia contemporánea del marxismo como corpus compatible en la construcción de un pluralismo metodológico orientado en la resignificación³ de la EE radical. Así

¹ Publicado en *Revista Iberoamericana de Economía Ecológica*, vol. 19(1), 2012, <http://www.redibec.org/IVO/REV19_01.pdf>.

² Mario Fuente Carrasco es Profesor-Investigador Titular en el Instituto de Estudios Ambientales de la Universidad de la Sierra Juárez en Oaxaca. Es Doctor en Estudios de Sustentabilidad de la Universidad de Tlaxcala y biólogo de la Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco. Ha enfocado sus investigaciones al tema de la sustentabilidad desde una perspectiva de la justicia ambiental. Es Investigador Nacional nivel I: fuente@unsij.edu.mx; Daniel Tagle Zamora es Doctor en Ciencias Económicas por la UAM-X. Es Investigador Nacional nivel I. Formado en el campo de la Economía Ecológica, estudia temas relacionados con la ecología política del agua y diversos temas sobre medio ambiente y desarrollo: datagle@yahoo.com.mx.

³ La palabra de (re)significación es usada tanto por Zemelman (2006) como por Leff (2006) desde una perspectiva epistémica; como una crítica al aspecto *ideológico* del discurso científico. Estos autores plantean que el debate del “modelo de sociedad”, y por tanto de desarrollo sostenible se da en la esfera del lenguaje, en la significación que el discurso económico del neoconservadurismo, el cual se reproduce sin hacer explícitas sus premisas

mismo, hay otros dos factores determinantes de una heterogeneidad de visiones. Uno de ellos es el derivado del contexto geopolítico y académico regional en el que se desenvuelve la reflexión de la sustentabilidad de las diferentes sociedades regionales que integran a la *International Society of Ecological Economics*.

El otro factor determinante de la orientación de la EE, y de mayor relevancia, es de tipo estructural e ideológico: la pretendida preponderancia de la economía de mercado. Una de las grandes transformaciones del proyecto de la modernidad occidental (capitalista) se ha caracterizado por el fuerte arraigo de la ideología de una economía del mercado como el gran regulador de la sociedad; como guía de todas las instituciones de la sociedad (Polanyi, 2003). La EE no ha estado exenta de tal influencia como parte de una pretendida premisa de un pluralismo metodológico, lo que le imprime una fuerte orientación y justificación reproductivista; conservadora de las premisas metodológicas y éticas congénitas a la racionalidad económica neoclásica.

Uno de los primeros pensadores contemporáneos que ofreció significativas aportaciones en esta tarea crítica, de por un lado proporcionar pistas de la construcción coherente de un pluralismo metodológico en la naciente EE, y por otro evidenciar las anomalías paradigmáticas de la racionalidad económica neoclásica para mantener el mito de un crecimiento económico ilimitado, fue Kenneth Boulding (1966) y más adelante Nicolás Georgescu-Roegen⁴ (1971). Este autor retoma de Podolinski (1880), algunas categorías de la ecología, tales como el tema de los flujos energéticos y de la entropía en los procesos productivos. De esta forma Georgescu-Roegen le da un contenido transdisciplinario a la entropía; se transforma en una categoría dialéctica entre dos campos disciplinarios: la ecología y la economía.

e intereses asociados con la acumulación del capital. Advierten que el contenido de estos conceptos está ligado a las instituciones vigentes reproductoras del sistema, por lo que plantean la necesaria significación, o más concretamente la resignificación de los conceptos; es decir de darle un *contenido* diferente al discurso dominante.

⁴ Sin embargo, sus aportaciones no fueron acogidas con beneplácito por muchos practicantes en la ISEE, entre ellos sus fundadores Herman Daly y Robert Costanza. Para una discusión detallada de la crítica de Georgescu-Röegen y su negativa de ingresar a la Sociedad y al Consejo Editorial de la revista, se puede consultar en Bonaiuti (2011), quien comenta que la antipatía de Georgescu-Röegen por la Sociedad creció con el tiempo, finalmente la atacó no sólo por defender “la idea de que la salvación del dilema entrópico es el estado estable...[y por propagar la idea] ... del más grande de los operadores en el campo de la ecología, Costanza, quien abusó de su teorema ‘ridículo’ [sobre las equivalencias energéticas del gasto monetario]” ... [sino] “¡por su mercadeo del más peligroso de la medicina milagrosa (charlatana) de todos los tiempos, el ‘desarrollo sostenible!’” (232).

Existen otros intentos aislados que han procurado enriquecer el pluralismo metodológico de la EE; de estas tentativas se han derivado criterios metodológicos como los provenidos de la ciencia posnormal, el análisis multicriterio, el principio precautorio, la coevolución, la deuda ecológica y el metabolismo social, entre otros (Fuente, 2009).

A pesar de estas contribuciones, el contexto contemporáneo latinoamericano exige de la EE una ruptura epistemológica y ética más profunda, más radical, con las premisas de la racionalidad económica neoclásica. Ello implica componer el desfase provocado por el enfoque económico ortodoxo y la realidad; pasar del pensamiento retórico al pensamiento epistémico, de la interpretación del problema a su transformación; de la emisión de un juicio ecológico a uno ético; de uno disciplinario a un diálogo intercultural y de saberes.

En esta tarea existen otras racionalidades alternas a la derivada de la racionalidad económica capitalista. En el terreno académico destaca la crítica del marxismo. En esta tesitura, el abordaje de este artículo se realiza desde tres aproximaciones analíticas. En la primera sección se introducen aspectos de este nuevo campo transdisciplinario pero se centra en tipificar al menos tres versiones que coexisten de EE, *la conservadora, la crítica y la radical*. En la segunda parte se aborda el tema de las restricciones y obstaculizaciones para la instrumentación de un pluralismo metodológico dentro de la EE; ello en función de la fuerte influencia de la teoría económica neoclásica. La tercera sección aborda un conjunto de reflexiones que destacan el papel del marxismo como un enfoque analítico para favorecer una perspectiva que enriquezca el pluralismo metodológico hacia una significación de una EE radical.

27.1. LA ECONOMÍA ECOLÓGICA EN PERSPECTIVA HISTÓRICA: ASPIRACIONES Y VERSIONES

La EE moderna es un campo transdisciplinario⁵ que se ocupa de analizar la interacción de los procesos económicos con los ecológicos. Su compromiso para enfrentar los retos planetarios la obliga a reconocer la complejidad de los problemas socioambientales, proporcionando una visión sistémica de la relación sociedad-economía-ambiente. Esta aspira-

⁵ Se distingue entre inter, multi y transdisciplinariedad tal como ha sido acotado por Costanza *et al.* (1999). Para fines del artículo se toma como referente a la transdisciplinariedad; sin embargo, con este concepto también se acoge al asunto de la inter o la multidisciplinariedad.

ción implica la construcción de una propuesta metodológica centrada en una perspectiva multidisciplinaria, históricamente abierta y desde un pluralismo metodológico (Burkett, 2006: 2-3). A pesar de la reciente institucionalización de la EE, su propuesta metodológica le permite una mejor comprensión de las causas y soluciones para enfrentar los problemas ambientales, lo cual le ofrece la posibilidad de generar propuestas alternativas ante la incapacidad mostrada por la economía neoclásica para enfrentar la crisis planetaria.

En sus orígenes, durante los años ochenta, la EE trajo consigo la incorporación de investigadores de diversos campos, principalmente de las ciencias sociales y las ciencias duras (Ropke, 2004, 2005). Su carácter transdisciplinario ha favorecido dicha inclusión, permitiendo diferentes propuestas metodológicas, sobre todo las derivadas de categorías de la ecología (entropía, resiliencia, coevolución, metabolismo) y su relación con los sistemas sociales y económicos. Por ejemplo, se ha tomado a la entropía como herramienta analítica para aclarar la inviabilidad ecológica del actual modelo de producción dominante. La literatura de la EE abarca una importante discusión con la economía neoclásica. Los temas contenciosos de estas discusiones que han generado mayor confrontación entre la EE y la economía neoclásica incluyen: sustitución entre naturaleza y capital hecho por la sociedad; crecimiento versus ambiente; ambiente y comercio; el optimismo del cambio tecnológico; crecimiento y calidad de vida (Ropke, 2005). Actualmente examina un sinnúmero de posibilidades de marcos analíticos, entre las cuales se incluyen la economía social y solidaria, decrecimiento, y buen vivir, haciendo intrínsecos los principios éticos de justicia social, equidad intergeneracional y manejo sustentable de los ecosistemas,⁶ entre otros temas (Barkin y Lemus, 2011). El campo ha conseguido una confluencia de investigadores de diferentes campos, lo que ha llevado al desarrollo de diferentes versiones de EE en función de la postura que se mantenga con respecto a la citada racionalidad económica capitalista: *la conservadora, la crítica y la radical* (Fuente, 2008).

a] Versión conservadora de la EE

La versión conservadora⁷ parte del reconocimiento de la economía como subsistema abierto dentro de un sistema más grande, pero limitado: la

⁶ Barkin (2008: 8-9) ofrece una caracterización más amplia de estos principios éticos de la Economía Ecológica.

⁷ Dos referentes en esta versión son Herman Daly y Robert Costanza (Costanza, 2009).

naturaleza. Sin embargo, desconoce una relación entre el poder, la racionalidad económica capitalista y la insustentabilidad.⁸ Por ello se rehúsa a incorporar el tema del conflicto social (léase lucha de clases). Esta vertiente muestra dos caretas: una con un fuerte componente económico antropocéntrico y otra ecocéntrica; tienen ciertas equivalencias con las que Martínez Alier (2004) ha denominado como el “evangelio a la ecoeficiencia” y el “culto a lo silvestre”, respectivamente. Desde la primera máscara se plantea la compatibilidad entre el crecimiento económico y el ambiente sin la necesidad de cambiar el modelo de organización productivo dominante (el capitalista). Para ello promueve la implementación de los instrumentos de mercado, con lo que muestra su alta afinidad e influencia dada por la economía neoclásica.⁹ Esta careta es la dominante hoy, reflejando el gran atractivo para muchos analistas de migrar hacia este nuevo campo “disciplinario” que ha ganado cierto “cachet” frente a los que se repliegan en la “economía ambiental”. La segunda careta, menos influyente, es la ecocéntrica. Desde ésta se propone limitar los procesos productivos desplegados por comunidades rurales desde un interés de los derechos intrínsecos de la vida silvestre, preferentemente en ambientes prístinos. Dado que la mayor riqueza biológica está en los países del Sur, se promueve como estrategia la instalación de áreas de reserva, prohibiendo algunas prácticas de apropiación social de la naturaleza desplegadas por las comunidades rurales locales.

A pesar de la aparente diferencia entre estas caretas, sobresale una perspectiva ética ambiental común: la negación de que la sociedad no es homogénea en su relación con la distribución de los costos y beneficios derivados de los procesos de apropiación social de la naturaleza.

b] *Versión crítica de la EE*

La versión crítica¹⁰ advierte sobre el papel de la racionalidad económica en la insustentabilidad. Sus orígenes vienen de la región iberoamericana de la ISEE donde insisten que la implementación de los instrumentos de mercado por sí sola no promueve una solución a la crisis ambiental;

⁸ La omisión del ejercicio del poder en su análisis del funcionamiento del mercado es comprensible por la forma en que ha evolucionado teóricamente, guiada por las instituciones académicas e ideológicas norteamericanas que han dominado la profesión por más de un siglo (Perelman, 2006).

⁹ El tema de pagos por servicios ambientales es reflejo de esta careta de la versión conservadora, y se documenta en la revista de la ISEE.

¹⁰ El principal referente de esta versión es Joan Martínez Alier (2004).

señalan que la inadecuada incorporación de un pluralismo metodológico puede profundizar la crisis socioambiental. Se enriquece con las aportaciones de la ecología política, incorporando dos conceptos fundamentales y críticos al papel de la racionalidad económica capitalista: *a]* la incommensurabilidad monetaria como lenguaje prioritario en la valoración de la naturaleza; y *b]* el concepto de conflictos ecológicos distributivos, resaltado dentro de un ecologismo de los pobres y el de justicia ambiental (Martínez-Alier, 2004). Esta vertiente no vincula estos niveles de análisis con categorías más generales y críticas a la racionalidad económica del neoconservadurismo, tales como la de clases sociales o el de la acumulación del capital. El conflicto los acota en el nivel de países: norte-sur, “ricos-pobres”. Sus practicantes han contribuido con una abultada literatura sobre los diversos problemas socioambientales, enfocada bajo la categoría de “deuda ecológica” ocasionada por la larga historia de la expansión colonial e imperial de épocas pasadas que practicó diversas formas de extracción de recursos y valores sin compensar a los pueblos afectados. En su definición de la sustentabilidad no hay posibilidad de remplazar muchos recursos naturales no renovables o la pérdida de biodiversidad; como consecuencia, requiere de medidas no mercantiles para conservar la calidad de los recursos renovables y restringir el uso de los recursos no renovables con el fin de acercarse a una sustentabilidad fuerte.

c] Versión radical de la EE

La versión radical¹¹ parte de la necesidad de realizar una ruptura con el discurso de la racionalidad económica neoclásica. Su hipótesis central es que la crisis ambiental es resultado de una crisis del tipo de proyecto civilizatorio occidental y de su racionalidad económica (Magdoff y Foster, 2010); su discurso y sus instituciones se presentan como un obstáculo epistemológico para abordar el tema de la sustentabilidad. Identifica el impacto de la fuerte relación que existe entre los lenguajes de valoración y los conflictos económicos distributivos en el ejercicio de los derechos de propiedad, el poder fetichizado y la agudización de los conflictos ambientales distributivos (Hornborg *et al.*, 2007). En esta perspectiva se esboza que la transformación hacia estrategias fuera de la acumulación capitalista no sólo repercute en un enfrentamiento para combatir los

¹¹ Como referentes en esta versión podemos encontrar a Elmar Altvater, Paul Burkett, John Bellamy Foster, James O’Connor y Enrique Leff.

procesos de la exclusión social, sino también en el diseño de políticas de apropiación social de la naturaleza con una mayor responsabilidad ambiental y social.

Por ello, considera la importancia de trascender, de transformar la racionalidad económica capitalista, ya que asevera que es el responsable de la crisis de civilización, elemento no tratado de manera frontal en las otras dos versiones de Economía Ecológica.

En sus versiones más recientes, especialmente en América Latina, ha incorporado el papel de las praxis contestatarias a la racionalidad económica ortodoxa, tales como las prácticas comunitarias de los pueblos indoamericanos. Por esto, se han revalorado las categorías y aportaciones de los *saberes tradicionales* y *praxis sociales*, planteando un proceso de democratización en la apropiación social de la naturaleza con una vigilancia ambiental responsable. Además, esta vertiente busca una mayor colaboración con distintas tradiciones intelectuales y culturales que ofrecen diversas maneras de integrar las esferas culturales y productivas para la gestión sociopolítica y ambiental. Ello impone una nueva obligación a los investigadores institucionalizados para ampliar sus grupos de trabajo y sus conocimientos, como lo sugiere la literatura sobre el diálogo de saberes (Leff, 2006), la memoria biocultural (Toledo y Barrera, 2008); el diálogo intercultural (Zemelman y Quintanar, 2006), la ciencia posnormal (Funtowicz y Ravetz, 2000) y la transdisciplinariedad (Baumgärtner *et al.*, 2008; Hirsch *et al.*, 2006; Pohl *et al.*, 2010). Para este grupo, la sustentabilidad fuerte no sólo implica reconocer y tomar medidas adicionales por la irreversibilidad de muchos procesos naturales que amenaza a la humanidad, sino que está mediada por los procesos culturales de las praxis comunitarias de apropiación social (Leff, 2004).

La expresión de estas vertientes no está confinada necesariamente a determinadas regiones de la ISEE; sin embargo, es evidente que los procesos estructurales de la globalización económica impactan de manera diferentes a estas regiones; y con ello a la relación, explicación y necesidad de transformar la relación economía-sociedad-naturaleza. Los practicantes de la EE situados en los países con alta diversidad biológica y cultural, y que cumplen el papel asignado en la división internacional del trabajo como parte de una estrategia geopolítica (neo)colonial de extracción y transferencia de insumos biológicos, energéticos y minerales, perciben la compleja relación economía-sociedad-naturaleza de manera diferente a la visión de los países del Norte. Derivado de este entorno, no es de extrañarse que la versión *conservadora* tenga mayor presencia en las ISEE ubicadas en las sociedades occidentales, mientras las versiones *crítica* y *radical* se vinculan a sociedades como las latinoamericanas. Sin

embargo, esta pluralidad no se refleja en la revista *Ecological Economics*. Es notorio el predominio de la *versión conservadora*, seguida por una pequeña porción de los intentos de un pluralismo metodológico desde la *versión crítica*, y dejando pocos o nulos espacios para la *versión radical*. Este predominio *conservador* está marcado, por tanto, con una fuerte preferencia por el mercado (en su versión neoclásica) y de sus modelos econométricos basados en el individualismo metodológico, tal como lo señala Burkett (2010) en su análisis a los documentos publicados en la *Revista*.

27.2. DESAFÍOS PARA EL PLURALISMO METODOLÓGICO EN LA ECONOMÍA ECOLÓGICA: ENTRE EL DISCURSO Y LA PRÁCTICA

El pluralismo metodológico permite realizar la articulación de diferentes paradigmas, a través de sus metodologías, conceptos y herramientas, para abordar y discutir los problemas teóricos y políticos que implica la compleja relación sociedad-ambiente. Sin embargo, se debe cuidar de la posible imposición de un enfoque dominante que incorpore su marco de análisis y conceptos:

Existe un interesante punto de tensión en el interior de la EE. Dado que su sujeto de estudio “es muy grande y complejo para abordarlo todo con un conjunto limitado de herramientas conceptuales”, la EE rechaza la noción de que hay “un único paradigma o enfoque correcto para abordarlo”; por lo tanto debe esforzarse por “una gran medida de ‘pluralismo conceptual’” ... Al mismo tiempo, el compromiso con el pluralismo significa que la EE abarque, y esté ampliamente influenciada por la economía ambiental neoclásica como uno de sus “subconjuntos” (Burkett, 2010: 93).

Por eso, no es mera coincidencia que un antiguo presidente de la ISEE, defendiendo la necesidad de un pluralismo metodológico, insistió en el número inaugural de la revista, que es bien conocido que los economistas neoclásicos acepten sólo “un patrón de pensamiento... el modelo neoclásico de mercado” (Norgaard, 1989: 37). En la práctica, muchos de los economistas ecológicos siguen considerando únicamente las soluciones del mercado neoclásico para enfrentar los retos ecológicos, tal como se puede observar en la revista de la ISEE.

Mientras se continúe empleando este reduccionismo, usando conceptos neoclásicos como el equilibrio del mercado capitalista, se continuará

socavando el acuerdo de pluralismo metodológico. Se hace todavía más evidente al extender el análisis a otras áreas ‘no-económicas’ con el uso del enfoque positivista de individualismo metodológico a conceptos como el caso del “capital social” y “capital natural” (Fine, 2001, 2002, 2010). Burkett (2010) lo desmenuza, retomando el análisis de Fine, mostrando cómo la transformación de la relación entre la sociedad y la naturaleza en una mercancía es ampliamente aceptada por la gran mayoría de los economistas ecológicos, a pesar de que implica una mercantilización de la naturaleza y sus procesos (“servicios”).

Lo mencionado arriba conlleva a enraizar a la EE en el “imperialismo de la Economía Neoclásica” (Lazear, 2000), debilitando y obstaculizando el acuerdo tácito de sus practicantes sobre el pluralismo metodológico. No obstante, los que insisten en su importancia no desechan todos los conceptos y herramientas del marco neoclásico, ya que su inclusión constituye parte de este tratado del pluralismo metodológico, o como Burkett lo llama, *Meta-paradigma*.

Desde esta perspectiva, el pluralismo metodológico es la conjunción de diversas propuestas para la comprensión y la solución de conflictos ecológicos y del uso de diferentes lenguajes de valoración de la naturaleza. Pero es importante dimensionar el grado de avance de este campo de conocimiento a partir de esta particular función del pluralismo. El análisis multicriterio, la ciencia posnormal, el principio precautorio, el metabolismo social, la coevolución y los conflictos distributivos son criterios metodológicos sumamente útiles; son ejemplos de aplicación de esta propuesta. No obstante, la EE se ha visto obstaculizada en cuanto a su desarrollo teórico alternativo, ya que la gran mayoría de trabajos en este campo se limitan a la aplicación del instrumento del mercado como problema prioritario por atender, y no como dimensión subordinada, a los problemas de la escala (sustentabilidad ambiental), el cultural y la distribución (equidad y justicia) (Costanza *et al.*, 1999; Tagle, 2011).

Un requerimiento necesario para el desarrollo del pluralismo metodológico en la EE consiste, esencialmente, en que los paradigmas utilizados permitan cumplir con los objetivos de la EE (la sustentabilidad ecológica de la economía). Es decir, se pueden emplear instrumentos y conceptos de diversos paradigmas (incluyendo la teoría neoclásica), siempre y cuando se subordinen al imperativo de garantizar los principios de interculturalidad, justicia social, equidad intergeneracional y gestión sustentable de ecosistemas.

La apertura histórica es igualmente problemática, por la complejidad que impone frente a la tradición de la economía ortodoxa. Esta exigencia metodológica implica incorporar nuevas visiones y posibilidades en los

dominios de la política económica y cambio institucional. Actualmente, este requerimiento es particularmente significativo, cuando las contradicciones del sistema actual están amenazando con destruir las condiciones planetarias básicas necesarias para la reproducción de la sociedad humana, empezando con el deterioro en la calidad de vida de grandes segmentos de la población que amenaza con crecientes conflictos sociales.

Ante la necesidad de garantizar la complejidad metodológica de la EE para abordar los problemas candentes del momento, existen varios enfoques y metodologías que pueden contribuir a enriquecer este principio. Uno de ellos es el enfoque marxista, con su visión derivada del materialismo histórico y de la relación sociedad-naturaleza. Este enfoque resulta pertinente, tanto por su replanteamiento del concepto de realidad, de ciencia, de sociedad y de naturaleza de manera alterna a la ortodoxia; así como por su incorporación explícita de la perspectiva ética, política e histórica para la comprensión de las causas de los problemas sociales, ambientales y económicos. Sus criterios metodológicos son cardinales para comprender la construcción delineada del deterioro ambiental, pero sobre todo en la construcción de alternativas a la racionalidad económica capitalista. El siguiente apartado esboza algunas vertientes para contribuir al buen desarrollo de la construcción de los principios éticos y epistémicos de la Economía Ecológica.

27.3. LA PERSPECTIVA MARXISTA: LA HETERODOXIA Y SUS CONTRIBUCIONES AL ANÁLISIS DE LA ECONOMÍA ECOLÓGICA

Un reflejo de esta visión integradora es evidente en el redescubrimiento de la importancia del concepto de “metabolismo social”, reconocido desde antes de Marx, pero al que se le ha dado nueva importancia en el periodo reciente. El creciente interés como herramienta adicional para el estudio de la sociedad es producto de su utilidad para enriquecer diversas áreas de estudio; entre las más importantes están la industria (Ayres y Simonis, 1994), el campo (Toledo, 2008), el proceso de trabajo (Schneider y McMichael, 2010), la historia (Hornborg *et al.*, 2007) y el cambio global (Foster *et al.*, 2010; Toledo y González de Molina, 2011).

a] *La relación teoría-praxis: de la interpretación a la transformación de la racionalidad económica*

La Tesis Once sobre Feuerbach¹² resume gran parte de su visión de la ciencia con un carácter históricamente abierto y sirve como guía para algunos de los participantes en la moderna escuela de la EE. La perspectiva marxista, por ello, se ubica como una propuesta heterodoxa y crítica a la racionalidad económica capitalista. Su orientación no está enfocada al estudio que favorezca el crecimiento económico ilimitado bajo la tutela de la propiedad privada y el individualismo metodológico, sino a su crítica y transformación. La perspectiva marxista al plantearse desde esta perspectiva epistemológica y ética (por ello se denomina como *ética-histórica abierta*), contribuye a identificar y evidenciar la estrecha relación que existe entre el deterioro ambiental, las condiciones del conflicto social y la racionalidad económica, permitiendo con ello realizar importantes contribuciones al campo de la Economía Ecológica.

El reconocimiento de este atributo permite una apertura con las praxis sociales en la resolución de los conflictos socioambientales. El origen del estudio de la economía política marxista enfatiza el origen del valor, lo cual está vinculado con la estructura de lucha de clases. Así, como ya se mencionó, desde la racionalidad económica capitalista, la producción de más valor está orientada inherentemente a generar mayor explotación y una progresiva concentración de la riqueza, con una consecuente intensificación del deterioro ambiental. Un cambio en la lógica que persiste en la generación de los conflictos económicos distributivos repercutirá en una diferente forma de realizar los procesos de apropiación social de la naturaleza, y por tanto en la resolución de los conflictos ambientales distributivos (Delgado, 2010; Fuente y Barkin, 2011; Martínez Alier, 2004, 2004a; Moyo y Yaros, 2008).

En este rubro también destaca el papel epistémico de las *praxis sociales* en los procesos de enfrentamiento y transformación de las lógicas de acumulación capitalista, y por lo tanto en los citados procesos de apropiación de la naturaleza. Para Sánchez Vázquez (2003) es la práctica política la que le va a dar un estatuto epistemológico a la teoría. Visto así, entonces la *praxis* proporciona un nuevo sentido a la noción de “diálogo de saberes”; como una reivindicación de la práctica cotidiana de diferentes comunidades que se enfrentan en las condiciones específicas y particulares ante

¹² “Los filósofos no han hecho más que interpretar de diversos modos el mundo, pero de lo que se trata es de transformarlo.”

las instituciones de la racionalidad económica generadora de proceso de exclusión social (Fuente, 2008; Leff, 2010; Villoro, 2004).

Por otra parte, esta praxis también se refleja en el surgimiento del pensamiento indígena como una veta para enriquecer el pensamiento con alternativas entre algunos practicantes de la EE, como es el caso de la filosofía del “Buen Vivir” de los pueblos andinos (Acosta y Martínez, 2009; Barkin y Lemus, 2011; Tortosa, 2010). También hay otras cosmovisiones que están cobrando actualidad a medida que otras etnias emprenden estrategias alternativas para promover o consolidar su bienestar y su compromiso para cuidar y defender sus ecosistemas, como es el caso de los zapatistas en México y el Movimiento Sin Tierra en Brasil y La Vía Campesina (Baronnet *et al.*, 2011; Vargas-Camus, 2009). Otra alternativa, aparentemente menos contestataria del capitalismo actual, está enmarcada en las propuestas del decrecimiento, surgido de la comunidad de EE en Europa (Flipo y Schneider, 2008; Kallis, *et al.*, 2010; Latouche, 2009).

En los últimos años, esta área de investigación se ha fortalecido con la introducción del concepto de “acumulación por despojo” (o desposesión) como marco teórico y analítico para estudiar el impacto de la expansión del capital hacia los territorios de “refugio” que muchos pueblos indígenas y comunidades campesinas habían logrado proteger frente a la voracidad del capital internacional (Harvey, 2003; 2005). Los estudios del proceso han coadyuvado a impulsar movimientos sociales con una participación activa de estudiosos de la EE, aprovechando sus conocimientos para identificar estrategias más efectivas para la defensa de los territorios en cuestión, en una congruencia directa de la onceava tesis de Feuerbach.

27.4. CONCLUSIONES

Se identificó una versión radical de la EE. En ésta se hace explícito el señalamiento de la necesidad de integrar un conjunto de propuestas derivadas de racionalidades alternas a la de tipo neoliberal, tal como lo enfatiza Spash en su tajante dictamen de que la teoría neoclásica se presenta como un obstáculo epistemológico al evadir la dimensión limitante de la realidad biofísica y de la exclusión de las valoraciones éticas:¹³

¹³ Spash (2011) también sugiere adoptar una “Economía Ecológica Social”, tal como ya habíamos hecho (capítulo 29).

La economía ecológica podría elaborar o un enfoque más riguroso y establecer una estructura teórica o volverse más ecléctica, sin foco e irrelevante. La economía ecológica como un movimiento conservador es un desperdicio innecesario de tiempo, simplemente emulando la economía ambiental y de los recursos. Hoy, más que nunca, se requiere de la economía ecológica como un movimiento radical, para criticar y cambiar las organizaciones sociales e instituciones que difunden creencias falsas sobre la realidad económica, social y ambiental (Spash, 2012: 45).

En esta vertiente se reconoce el tema del conflicto entre grupos sociales, y el papel del poder y la propiedad en la ordenación de la racionalidad económica: la acumulación del capital. En este sentido, el pluralismo metodológico buscado por esta vertiente no sólo le interesa integrar categorías que evidencien las limitantes ecológicas de la racionalidad económica; sino también la posibilidad de incorporar enfoques orientados a buscar construir una sustentabilidad ecológica de la economía a partir de principios éticos de equidad y justicia.

Desde esta tipología, se encontró que las praxis campesinas desplegadas por diversas comunidades indoamericanas son aportaciones epistémicas al pluralismo metodológico; pero también lo es una racionalidad que ha sido históricamente crítica a las premisas del capitalismo: el marxismo. Las categorías analíticas del marxismo siguen siendo vigentes para comprender las raíces estructurales e ideológicas de la insustentabilidad, pero también para la identificación de los obstáculos epistemológicos, éticos y políticos que impone la racionalidad económica neoliberal. Estos aspectos son fundamentales en la construcción de muchos mundos posibles; pues de lo que se trata es de una mayor comprensión de esta complejidad, pero también de su transformación.

Los procesos estructurales de la globalización económica que están impactando los procesos de apropiación social de la naturaleza dados en los pueblos de América Latina en función de una mayor acumulación por despojo, hace evidente la necesidad de explorar perspectivas contestatarias a la racionalidad económica neoclásica. La incorporación del marxismo fortalece el atributo de pluralismo metodológico en la significación de una EE radical. Si la EE se dirigiera a descubrir los procesos subyacentes que impulsan la dinámica de insustentabilidad y preparar respuestas políticas y sociales efectivas, podría armar una fructífera agenda de trabajo para responder a las necesidades del periodo venidero.

28. LA ECONOMÍA ECOLÓGICA Y SOLIDARIA: UNA PROPUESTA FRENTE A NUESTRA CRISIS¹

con BLANCA LEMUS²

INTRODUCCIÓN

La lente de la economía solidaria ofrece la oportunidad de ver desde otro ángulo la crisis actual, para revertirla —insistiendo en la prioridad de asegurar una canasta básica a todos—. Esta canasta que comprende no sólo los satisfactores materiales fundamentales de alimentación, sino también otros tan importantes como las necesidades de vestimenta y alojamiento, además de los servicios sociales colectivos, tales como la educación y asistencia médica, así como satisfactores culturales, que contribuirían a revertir los procesos de desintegración social y económica que actualmente nos preocupan. Poniendo en primera plana la satisfacción de estas necesidades, sería posible volver nuestra vista colectiva a la urgente labor de construir o reconstruir nuestras infraestructuras más básicas; las redes de agua potable y saneamiento, los caminos, los mecanismos de comunicación popular (*e.g.*, radio comunitaria), y fundamentalmente la rehabilitación de nuestros ecosistemas. En lo que sigue ofrecemos un contexto de la economía solidaria en el cual proponemos la instrumentación de esta estrategia.

28.1. PARA ENTENDER LA ECONOMÍA SOLIDARIA.

Economía Solidaria es una expresión que en la actualidad se escucha con frecuencia, tanto en foros académicos como fuera de ellos. Esta popularidad no necesariamente va aparejada con una comprensión sobre su significado. Para entender la economía solidaria es fundamental enfatizar

¹ Publicado en Revista *Sustentabilidades*, núm. 5, 2012, <<http://www.sustentabilidades.usach.cl/sites/sustenable/files/paginas/05-01.pdf>>.

² Blanca Lemus Ruiz es Doctora en Medio Ambiente del Trabajo de la Universidad de Massachusetts, Lowell, y médica por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Es jubilada de las Facultades de Medicina y Biología de esta universidad y sigue colaborando en investigaciones con el Dr. Barkin: urapeti@gmail.com.

lo que se dice que es: construcción de solidaridad social. Hay dos campos heterodoxos de estudio estrechamente relacionados en los que se suele usar la palabra “economía”: economía solidaria y economía ecológica. Sin embargo, su uso actual nos obliga a aclarar que nuestra discusión pretende precisamente superar las versiones y las visiones tradicionales y dominantes de la economía.

Nos referiremos al primer campo: cuando hablamos de economía solidaria, que es fundamentalmente un campo de estudio y sobre todo de acción, nos abocamos a examinar actividades que contribuyen a construir instituciones y forjar actividades que trasciendan la visión y el análisis de individuos operando aisladamente en la sociedad. En el estudio ortodoxo de la economía domina el individualismo metodológico, donde se presupone que el sujeto aislado es un actor pasivo en el sistema, recibiendo señales desde el mercado para tomar decisiones, tanto por el lado de la producción como por el del consumo.

El segundo campo o expresión a que nos referiremos es la economía ecológica. En realidad, tampoco es “economía” en el sentido ortodoxo, es decir, en los términos actuales del uso común de la profesión. Más bien, es un campo de estudio que pretende contribuir a una (re)organización de la sociedad, que promueva una relación equilibrada entre sus miembros y la naturaleza. Muy particularmente, como veremos más adelante cuando hablemos de alternativas, este campo contribuye a las reflexiones recientes sobre la necesidad de sustituir las estrategias macroeconómicas vigentes de crecimiento con otras que apuntan hacia la promoción de otras estrategias sociales y productivas para lograr la satisfacción de las necesidades sociales, a la vez que atienda a las exigencias de la naturaleza conducentes al progreso sustentable. El uso de la palabra economía en ambas expresiones, la solidaria y la ecológica, ha contribuido a malos entendidos, y podría prestarse a una confusión; las alternativas abordadas aquí requieren superar el individualismo metodológico que domina el análisis ortodoxo, en favor de un análisis colectivista que contribuya a crear otro modelo de sociedad más justa.

En América Latina se están explorando las aportaciones de una nueva visión, afincada en las herencias de los pueblos originarios en la región; una de ellas, la *sumak kawsay*, o “buen vivir”, incluida en las nuevas constituciones de Bolivia y Ecuador, enfatiza el compromiso de un estilo de gestión sociopolítica y ambiental congruente con la justicia social y el equilibrio ambiental.³ En contraste, una estrategia de decrecimiento, propuesta por

³ Una versión similar existe en las cosmovisiones de gran parte de los otros grupos originarios en la región, incluyendo los kuna (*Abya Yala*) de Panamá y los tzotziles y tzel-

muchos colegas en Europa, propone una simplificación de los estilos de vida y de sus requerimientos de insumos materiales y energéticos para la dinámica de sus sociedades. Esta propuesta de una nueva estrategia orientada hacia el “decrecimiento” es muy diferente: una explicación sencilla es expresada por uno de sus proponentes mejor conocidos, Serge Latouche: “Su objetivo es una sociedad donde se vivirá mejor trabajando y consumiendo menos. Se trata de abrir de nuevo el espacio para la capacidad de invención y la creatividad de la imaginación reprimida por el totalitarismo economicista, desarrollista y orientado hacia el progreso” (2009). Las diferencias entre las dos propuestas no son menores: mientras que los europeos están enfocando sus prioridades en reducir la “huella ecológica” de sus sociedades, los latinoamericanos buscan revertir el deterioro en la calidad de vida de las mayorías y de la degradación del ambiente, ocasionado por la particular forma de inserción en el mercado mundial y la larga historia de una política económica injusta.

De esta manera, en nuestra visión de la teoría y la práctica, cuando hablamos de economía solidaria, también estamos hablando de economía ecológica. Estamos construyendo un proceso para fortalecer la comunidad y la sociedad, a la vez que estamos tomando en consideración los impactos de nuestras propuestas y de nuestras acciones, no sólo en cuanto a las relaciones entre grupos sociales, sino también a los impactos que podrían tener en los ecosistemas, en el equilibrio planetario del que todos dependemos. En nuestra visión, esta construcción tendría que ser una obra colectiva, de grupos sociales organizados para efectuar el cambio de manera intencional, más que el resultado de las acciones aisladas de individuos respondiendo de manera autárquica a señales generadas por instituciones que les son ajenas. Como consecuencia, insistimos en la propuesta de transformar las relaciones sociales entre los participantes de todos los sectores y de todos los grupos sociales, con compromisos para asegurar el bienestar y compartirlo. Para avanzar, debemos exigirnos en cada momento evaluar nuestros esquemas en términos de su aportación a construir comunidades solidarias que también propugnen por una solidaridad entre comunidades, entre sociedades.

tales, de México. Para mayor información sobre esta corriente de pensamiento, véanse los números 452 y 462 de la revista *América Latina en Movimiento* (2010, 2011), disponibles en <http://alainet.org>, y las referencias incluidas en ellos.

28.2. ELEMENTOS DE LA ECONOMÍA SOLIDARIA

La economía solidaria tiene que empezar con el concepto de comunidad y el compromiso de la propia comunidad para asegurar la supervivencia y el bienestar de todos sus miembros. En este sentido, la economía solidaria es una economía colectiva y cambia todo en el momento que el individuo decide, o dicho de otro modo, que el individuo, junto con los demás miembros de la comunidad, colectivamente, deciden que todos los miembros de la comunidad tienen el derecho a lo que podríamos llamar una canasta básica (por especificar), un conjunto de servicios sociales y bienes materiales que garanticen un nivel de vida adecuado, según las posibilidades de la comunidad, pero nunca por debajo de lo que la comunidad considera una vida digna.

Una vez aceptada esta base de convivencia, garantizando el mínimo de bienestar para sus miembros, entonces el reto de la comunidad y de los miembros participantes deja de ser el generar suficiente empleo. Este problema del empleo desaparece, junto con el problema de generar el trabajo; en su lugar el reto de la comunidad es: ¿cómo movilizar colectivamente a la población para ir ampliando la capacidad colectiva de producir lo requerido para satisfacer sus necesidades básicas, para cuidar la colectividad y para recuperar y mejorar el entorno natural?

Queremos insistir que esta visión de economía solidaria cambia los términos de referencia sobre lo que es la economía, porque ya no es el reto de generar empleo; tampoco es el reto de generar empresas, ni vender o impulsar el crecimiento. El reto ahora es satisfacer las necesidades materiales, sociales, ambientales y culturales, que incluyen los aspectos educativos y de salud. Lo anterior implica, por supuesto, transformar también los términos de referencia de lo que es una sociedad. Con esta nueva visión de la sociedad, ya no estaríamos preocupados por los conceptos de ganancia y de maximización, de todos estos elementos de la economía convencional, sino que tendríamos que estar preocupados por organizarnos para generar el bienestar social y la sustentabilidad que, por supuesto, tienen que ir de la mano.

28.3. EL INTERCAMBIO

Una vez aclarada la diferencia sobre el contexto en el cual habría que entender la economía solidaria y la economía ecológica, tendremos que examinar el papel que tiene el intercambio para las comunidades partici-

pantes, tanto en el interior de las mismas como entre ellas, pero también de éstas con su entorno ambiental. En primer lugar se puede abordar el tema de las relaciones entre las comunidades,⁴ aspecto que puede comprenderse desde la economía solidaria. Al respecto, es fundamental comenzar con explorar la importancia del mercado. Abrir las condiciones para el intercambio es de suma importancia porque sería absurdo pedir a cualquier comunidad producir todo lo que requiere para satisfacer todas sus necesidades, considerando las diferencias de ecosistemas, de clima, de conocimientos y de capacidades que ofrecen las posibilidades de ampliar la gama de productos y servicios disponibles en todas las comunidades participantes; hay necesidades que no se pueden cubrir dentro de cada una de las comunidades, y quizás algunas que requieren adquirirse fuera del círculo de comunidades asociadas con el proceso solidario. Por eso los mercados y el intercambio son fundamentales. En este contexto, sin embargo, debemos plantear una pregunta de enorme trascendencia: ¿cómo deciden los integrantes de la comunidad cuáles deben ser las mercancías que componen una canasta básica? Y también: ¿cuáles serán las necesidades que se definirían como parte del alcance de la responsabilidad de la comunidad?

Queremos sugerir que uno de los debates que la comunidad tiene que llevar a cabo en el proceso de construcción de la economía solidaria es éste: ¿qué somos capaces de garantizar a nuestra sociedad? Como parte de esto, y aquí está otra pregunta todavía más compleja, ¿somos capaces de decirles a nuestros coparticipantes que algunos productos no están comprendidos en este compromiso colectivo? Porque la economía solidaria implica que no todo el mundo tendrá el derecho de hacer lo que desee en términos individuales, sobre todo con la herencia de la sociedad de consumo y el individualismo que caracteriza a la sociedad de donde esta transición está emanando.

El reconocimiento de la importancia del intercambio plantea otro elemento modular en la conformación de la economía solidaria: la estructura de los mercados en que participan las comunidades y sus reglas de operación. En la economía dominante, la mayor parte de los productores en pequeña escala sufren del problema de un acceso desfavorable a los mercados para la distribución de sus productos; aun cuando lo hacen en grupo, las estructuras comerciales resultan discriminatorias y castigan fuertemente los precios ofrecidos. Como consecuencia, es fundamental plantear el problema de la circulación de las mercancías —el

⁴ Los aspectos de la relación de las comunidades con el entorno ecológico son analizadas desde los planteamientos teórico-metodológicos de la economía ecológica (capítulo 28).

intercambio— para asegurar mejores condiciones y, como consecuencia, mayores posibilidades de utilizar sus excedentes productivos para mejorar las condiciones de vida, así como la capacidad para consolidar y expandir sus infraestructuras productivas, sociales y ambientales.

En este contexto la economía solidaria plantea, como parte integral, la necesidad de construir mercados solidarios —espacios que faciliten el intercambio en condiciones que permitan una retribución adecuada por el trabajo que se invierte para la producción de los bienes o satisfactores, y para el mantenimiento y reposición de los equipos y recursos naturales involucrados en los procesos de producción—. Estos espacios son muy variados y tienen características diferentes y complejas, dependiendo del mismo proceso de intercambio y las características de los que acuden a ellos. Quizá el más socorrido de los procesos es el trueque: el intercambio con base en la transferencia física de productos (y servicios) entre los actores. El trueque es una forma de intercambio muy antigua, generalmente realizada entre dos partes, y que ha sido desplazada por símbolos de equivalencia, cuya forma más general es el dinero. Sin embargo, en medio de las varias crisis económicas, cuando el dinero mismo pierde su valor, es decir, cuando deja de tener la confianza de la sociedad, se produce un retorno a distintas formas del trueque; hemos visto muchos ejemplos de esto; el más conocido de estos ejemplos es el de Argentina durante su crisis a principios del siglo XXI (Hintze, 2003).⁵

Hoy en día, es notable la persistencia y aun la reaparición de mercados de trueque en México. De diversas maneras, principalmente pero no exclusivamente en comunidades indígenas, se siguen realizando diferentes formas de trueque. Uno de los más experimentados a nivel local es el mercado purhépecha. Éste se realiza quincenalmente entre miembros de un grupo de 24 comunidades en el área del lago de Pátzcuaro, rotando la sede entre las comunidades participantes. Este ciclo de trueque cumplió 18 años de actividad en 2011. Lo más destacado de esta experiencia, así como de varias otras, es su carácter social y político, reflejando un proceso de consolidación grupal que tendría que entenderse en la coyuntura mexicana como una reafirmación de las diversas demandas por la autonomía. Por supuesto, hay otras experiencias de mayor envergadura que han surgido en tiempos de guerra, o en la ausencia de autoridades reconocidas, es decir, en espacios de ingobernabilidad, en áreas donde el propio Estado demuestra su incapacidad para gobernar.

⁵ Véase también la revista, *Otra Economía*, publicado por la Red de Investigadores Latinoamericanos de Economía Social y Solidaria, en: <http://revistas.unisinos.br/index.php/otraeconomia>.

Un factor fundamental que define la operatividad de estos sistemas es el componente de la relación social entre las partes, y el reconocimiento del elemento subjetivo en el establecimiento de los términos del intercambio entre ellas.⁶ Además del trueque, otras formas de espacios alternativos de intercambio surgen en torno a las economías locales y solidarias; algunos podrían utilizar monedas locales o sistemas de cuenta reconocidos solamente por las personas involucradas directamente en las transacciones, mientras que otros usarían los dineros “oficiales” en curso en sus países, aunque quizá con precios o valores diferentes de los que prevalecen en los mercados “formales”, reflejando compromisos de retribuir correctamente a los productores por sus labores, el tiempo requerido para la producción o los recursos naturales involucrados así como las labores de conservación de los ecosistemas.

Como es evidente en esta reflexión, el intercambio solidario analizado aquí es mucho más que una simple transacción entre mercancías o entre sus propietarios. Se resalta el carácter moral del proceso de intercambio, un carácter que el mercado capitalista ha logrado esconder eficazmente, al implantar en la conciencia de los participantes de la transacción una idea equivocada de un intercambio entre actores iguales y de la justicia en el proceso de compra-venta. En el mercado solidario se transforma este carácter, imprimiendo una naturaleza diferente de compromisos éticos para respetar y fortalecer las comunidades participantes y para realizar procesos productivos neguentrópicos,⁷ pero también para conservar y rehabilitar sus ecosistemas. De esta manera se hace evidente que no es el mercado mismo el que impone la explotación, sino el proceso de producción en el cual surgieron los bienes que se están canjeando.

⁶ Es notable, por ejemplo, que el intercambio realizado en los encuentros de trueque en el área de Pátzcuaro se caracteriza por tener cierta flexibilidad en los “valores” intercambiados, si fueran evaluados en términos de los precios que rigen regionalmente para estos productos como mercancías expedidos en los comercios regionales. Las variaciones en cantidades de bienes ofrecidas por un determinado producto es tema de reiterados comentarios entre los muchos visitantes que asisten y tratan de analizar la experiencia.

⁷ Neguentrópico es un concepto acuñado por Erwin Schrödinger (1944) como entropía negativa, refiriéndose al proceso de un organismo vivo que exporta energía para mantener baja su entropía, es decir, de reducir la generación de desorden que caracteriza los procesos de degradación descritos por la Segunda Ley de la Termodinámica (cf. Wikipedia en inglés y las referencias allá citadas).

28.4. LOS DINEROS ALTERNATIVOS

El dinero alternativo es un tema muy cercano al corazón de muchos de los participantes en economía solidaria.⁸ El uso del dinero alternativo en la economía solidaria puede ser positivo, pero también puede ser una calamidad; su significado depende de los mismos factores conceptuales que diferencian a la economía solidaria de la economía convencional. En cualquier contexto, el dinero alternativo tiene la ventaja de que los participantes están obligados a hacer sus adquisiciones de otros miembros de la misma red, o de otras redes donde los dineros tendrían validez o reconocimientos recíprocos; esa característica ofrece una gran ventaja para los participantes, porque la economía alternativa en este sentido involucra necesariamente establecer una relación implícita, porque rara vez es explícita, de solidaridad entre los compradores y vendedores. Al usar dinero alternativo de esta manera se está cuestionando la misma autoridad del Banco de México, del Tesoro Norteamericano (Banco Federal de Reserva de Estados Unidos) o del Banco Central Europeo.

Sin embargo, tal como se está manifestando hoy, una parte demasiado importante del uso del dinero alternativo es para comprar productos que están producidos en la sociedad capitalista. Los participantes están intercambiando productos que responden a una especie de patrón de consumo individualista y competitivo, y peor todavía, muchos de los productos vendidos y comprados con dineros alternativos son bienes producidos bajo condiciones de explotación proletaria por empresas transnacionales en sistemas globales de gestión. Es decir, son mercancías producidas en organizaciones donde los productores no reciben salarios justos de sus patrones; los trabajadores se encuentran en condiciones laborales desfavorables y a menudo hasta peligrosas o dañinas para la salud. Por lo tanto, al ofrecer productos provenientes de estos circuitos están negando los principios de la economía solidaria. Por eso digamos, tiene una faceta positiva y una negativa.

Desgraciadamente, también enfrentamos el mismo fenómeno en empresas locales, promovidas por las bien intencionadas iniciativas de economía solidaria en la administración pública. ¿Cuántas PYMES y “mercados solidarios” están promocionando mercancías fabricadas en condi-

⁸ Es notable que actualmente en México circulan por lo menos unas 17 formas de monedas “alternas” en la economía social y solidaria. Por supuesto, hay múltiples de estas monedas en la economía “formal”, como son los monederos electrónicos de varias empresas comerciales, las millas de las compañías de aviación y los puntos acumulados en otros diversos medios de pago.

ciones de explotación laboral, con trabajadores asalariados remunerados con salarios que no les ofrecen la posibilidad de vivir dignamente o aun por debajo de los mínimos legales? ¿Cuántos trabajadores de productos vendidos en “mercados solidarios” o en empresas sociales del tipo promovido por organizaciones como el Fondo Nacional de Empresas Sociales (FONAES, ahora INAES) trabajan en condiciones que amenazan su propia salud o que contaminan las comunidades o los acuíferos donde laboran? ¿Cuántos productores se agrupan en organizaciones para comercializar su producción “social” simplemente porque son productores familiares —muchas veces con empleados pagados a destajo— que contribuyen al enriquecimiento del organizador que los aglutina en nombre de causas justas o accesos privilegiados a canales oficiales?⁹

En contraste, el surgimiento de mercados de comercio justo podría entenderse como una manera para que organizaciones solidarias puedan participar en los mercados convencionales, sin menospreciar la importancia de las relaciones sociales y ambientales alternativas arraigadas en los propios productos. El comercio justo en los mercados dominantes ofrece una manera para que el comprador pueda expresar su apoyo por las diferencias sociales y ambientales involucradas en los procesos de producción, respaldados por los organismos intermediarios que promueven estas opciones y operan a escala global. Pero la venta de productos bajo la etiqueta de “comercio justo” sin que se comunique la diferencia en la forma social de su producción y los compromisos que implica con el medio ambiente, constituye otra forma de engaño demasiado común en nuestro país.

28.5. LA ÉTICA Y EL MERCADO

Así, como el dinero alternativo no garantiza que sea solidario, el dinero del microcrédito tampoco garantiza que sea solidario. Con la puesta en escena del microfinanciamiento a través del otorgamiento del Premio Nobel de la Paz al señor Yunes de Bangladés por su iniciativa del Grameen Bank,¹⁰ las instituciones oficiales están promoviendo el microcrédito como

⁹ Desgraciadamente, todas estas preguntas tienen respuestas muy puntuales y documentadas que ilustran los múltiples abusos que caracterizan la práctica de promover la economía social en México hoy en día.

¹⁰ Como nota al margen, es importante notar que este banco ha funcionado para crear oportunidades para muchos pequeños comerciantes quienes venden productos globales, e.g., servicios de telefonía celular, generando servicios útiles y contribuyendo a reforzar las economías locales; sin embargo, las tasas efectivas de interés que cobran son elevadas,

una nueva “varita mágica” para enfrentar la pobreza. Más aún, algunos están promoviendo sus propias respuestas de créditos “éticos” para apoyar a las comunidades. Sin embargo, de la misma forma que cuestionamos el contexto social de los dineros alternativos, preguntamos: ¿para qué se usa ese dinero? y ¿cuáles son las relaciones sociales de producción y de intercambio que se generan con los fondos? Hemos visto que mayormente son instancias para facilitar la comercialización de mercancías producidas en la economía globalizada por las empresas globales. Este dinero “ético” podría servir, en primer lugar, si facilitara el proceso de restituirle al dinero la función de intercambio de productos locales y regionales entre las comunidades y no de acumulación centralizada, y, segundo, si ese dinero se utilizara para reforzar esta economía en manos de la gente. Pero, si el dinero se va a utilizar para ir a comprar en el comercio formal controlado por los grandes consorcios o para vender los productos distribuidos a través de canales del comercio informal o piramidal, evidentemente esa microempresa deja de ser solidaria, más bien es una microempresa de economía popular, que no tiene nada que ver con la economía solidaria. Es decir, todo depende de en qué se use este financiamiento de la Banca Ética.

Por eso, queremos insistir en que participar en un mercado con dineros alternativos no es automáticamente un mecanismo para incorporarse a la economía solidaria. No debemos conformarnos con definir a la economía solidaria como la creación de espacios de intercambio con dineros alternativos cuando se utiliza mayormente en productos de la economía globalizada, ya que se convierte en otro espacio de mercantilización, otra forma encubierta de promover la enajenación. Hay que encontrar alternativas para que la relación entre actores refuerce el proceso social de responsabilidad mutua y solidaridad social. Eso implica insistir en que la producción se realice en condiciones de respeto hacia los seres humanos, la comunidad y el medio ambiente; cuando se cumplan estas condiciones, ya podemos hablar de ser solidarios.

llegando al equivalente de 80% al año. Para una crítica mordaz de estas instituciones y sus prácticas, véase Bateman (2010). La experiencia mexicana ofrece un panorama mucho más desolador; en el país la institución más grande que ofrece microcréditos es conocida y denunciada por ser usurera: Banco Compartamos es analizada con particular agudeza por Ashta y Bush (2007) y Ashta y Hudon (2009).

28.6. ¿UNA UTOPÍA?

Avanzando, y anticipando algunas reacciones a este planteamiento, éste se podría criticar por ser un planteamiento utópico. Sin embargo, los grupos solidarios y los analistas que nos ocupamos del tema, trabajando con la gente y creando bases de confianza mutua, hemos identificado múltiples experiencias en las cuales están participando millones de mexicanos, actores de las comunidades que están realmente construyendo de diversas maneras una transición hacia una existencia solidaria. Aunque muchas de las experiencias mexicanas tienen lugar en las zonas indígenas, donde se están implementando distintos procesos para crear espacios autonómicos, espacios de autogobierno y de autogestión, también se están gestando intentos en áreas urbanas donde la propia dinámica de exclusión social y hostigamiento oficial está incitando a la sociedad a unirse para crear sus propios espacios sociopolíticos, y que éstos se vuelvan también productivos. Llama mucho la atención la diversidad de actividades emprendidas por estas comunidades, por personas que crecientemente están conscientes de la necesidad de escapar del dominio de la relación proletaria y de forjar mecanismos para generar excedentes que ellos mismos puedan gestionar para fortalecer sus comunidades y mejorar sus infraestructuras.

28.7. LA CONSTRUCCIÓN DE ALTERNATIVAS

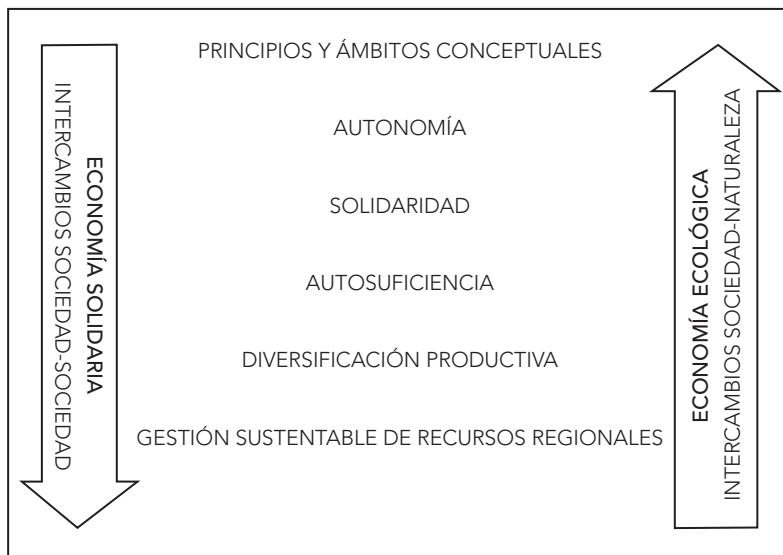
Hablar de la construcción de alternativas es entrar en los detalles operativos del funcionamiento de la economía solidaria. Esto implica buscar mecanismos para combinar la economía solidaria con la economía ecológica, que podríamos enumerar cinco principios.¹¹

Así, las actividades específicas en que estamos involucrados incluyen proyectos discutidos en capítulos anteriores de este libro, algunos de los cuales pueden sonar raros, tales como la producción de carne de puerco “light” (baja en grasas y en colesterol); huevos enriquecidos con omega-3 (que son más saludables para los consumidores); artesanías con base en insumos propios, como la seda producida en las propias comunidades a partir de hilos generados por gusanos de seda criados por los comuneros, cuyo alimento, las hojas de árboles de morera proviene de árboles reproducidos y plantados en sus terrenos y los de las comunidades. También se

¹¹ Para una mayor explicación de estos cinco principios, véase el último capítulo de este libro: “Construyendo mundos poscapitalistas”.

está promoviendo la instalación de sistemas domésticos para la calefacción solar del agua y construcción de plantas locales de tratamiento de aguas residuales dentro de las comunidades para generar nuevas fuentes de agua para producción de traspaso y comunitaria. Otros grupos están creando empresas para ofrecer servicios de ecoturismo, de alimentos orgánicos y de comidas tradicionales. En otro plano, varias comunidades forestales están trabajando con sistemas comunitarios para el aprovechamiento sustentable y certificado de sus recursos naturales y para la participación en los mercados internacionales de venta de servicios ambientales.

FIGURA 28.1. METABOLISMO SOCIAL



FUENTE: elaboración propia.

Para nosotros, investigadores, el reto que tenemos es desarrollar estrategias para acompañar a las comunidades, para cuando vayamos a colaborar con una comunidad a proponerles a sus integrantes algún proyecto, debemos preguntarnos qué garantía les podemos ofrecer de que nuestras propuestas no les van a hacer más mal que bien. Quisiéramos mencionar que ya hay experiencias de las cuales podemos aprender. Es aleccionador, por ejemplo, explorar las iniciativas actuales, evaluarlas y aprender de ellas; en la Ciudad de México hay experiencias extraordinariamente interesantes, tal es el caso de los 32 parques comunitarios y servicios de espaciamiento y en los municipios conurbados del Valle de México. Hay que decir que no todas las experiencias en estos parques han sido exitosas, sin embargo, algunas son verdaderamente buenas,

como la del parque Ejidal San Nicolás Totolapan, donde 2 300 hectáreas de bosque han sido rescatadas y puestas al servicio de los visitantes por un grupo de campesinos, los que agregan a sus actividades cotidianas, la de ecoguías. También están las notables experiencias de algunos de los chinamperos de Xochimilco, empeñados en rescatar al ajolote (*Ambystoma mexicanum*), tan apreciado como amenazado en su supervivencia como especie.

En las condiciones actuales de la sociedad mexicana, las iniciativas de la sociedad civil son particularmente importantes. Mediante sus acciones, están diseñando nuevas estrategias para promover el bienestar social y la conservación ecosistémica. En el proceso, los propios actores están generando alternativas que no se limitan a la esfera productiva, ya que su implementación requiere de actos de gestión que les llevan a asumir responsabilidades de gestión ambiental y gobernanza; estas acciones resultan particularmente significativas, ya que históricamente las instancias “oficiales” no las han cumplido de una manera adecuada, sobre todo cuando se trata de beneficiar a grupos sociales de menores ingresos o a organizaciones locales y regionales que han adquirido capacidades para actuar efectivamente. Pero, en el proceso de generar y consolidar estos espacios políticos alternativos no podrán sobrevivir si no incluyen también espacios territoriales donde sus actividades productivas, sociales, culturales y ambientales dejen una fuerte herencia que contribuya a elevar los niveles de bienestar de los participantes.

Por eso, es fundamental insistir en que el concepto de la Economía Solidaria y Ecológica no debería verse simplemente como otro modo de realizar la producción y la comercialización de los mismos productos, sino que contribuya a crear nuevas oportunidades para los que han estado excluidos del modelo globalizado. Tampoco se trata de otra forma de exaltar la “economía popular” como la economía de los pobres, que valientemente están mostrando su extraordinaria creatividad en establecer microemprendimientos que contribuyen a su capacidad de sobrevivencia en niveles un poco arriba del nivel de subsistencia. No es simplemente otra forma de apropiación social de la naturaleza y de comercializarla sino, más bien, constituye un nuevo modelo para satisfacer las necesidades básicas de la población y para organizar las formas colectivas para asegurar la inclusión de todos los sectores sociales en los nuevos compromisos asumidos por los impulsores de la economía social y solidaria (Barkin y Rosas, 2006). Como lo expresó Nicolás Georgescu-Röegen, considerado como el padre de la economía ecológica moderna, superar nuestras crisis actuales “...no será posible sin una profunda reestructuración y una reorientación radical [de la economía]” (1995). En este sen-

tido, cobra relevancia realizar procesos de apropiación social de la naturaleza desde una economía neguentrópica, desde un equilibrio dinámico. La implicación de esta aportación es que la sobrevivencia de la humanidad depende no tanto del “desarrollo sustentable”, el “estado estacionario” o del “crecimiento cero” sino de una dramática transformación en los patrones del metabolismo social para llegar a un modelo diferente de sociedad.

Esta agenda de principios y actividades dejaría de ser relevante en un plano nacional si nos limitáramos únicamente a sólo aquellas comunidades comprometidas con forjar soluciones para ellas mismas y para ofrecer aportaciones propias a aminorar los peores estragos ambientales del modelo nacional de economía y sociedad que tenemos. Las contradicciones fundamentales evidentes en la sociedad mexicana, generadas por las profundas crisis económicas y ambientales que se agudizan con el paso del tiempo, han motivado a millones de mexicanos —quizá un 15% de la población nacional— a dedicarse a construir otras sociedades dentro de la sociedad nacional, implementando los principios enunciados en lo que hemos planteado hasta ahora. La sugerencia enunciada al principio de este capítulo —la posibilidad de ofrecer una estrategia alternativa que terminaría con la manifiesta incapacidad actual para asegurar la satisfacción de las necesidades básicas en las comunidades, en todos los hogares mexicanos, y con ello terminar con el desempleo— debe ser el punto de arranque de cualquier iniciativa para implementar una política de economía social y solidaria.

Para finalizar: lo fundamental es asegurar a las comunidades con quienes trabajemos, que nuestros esfuerzos conjuntos para generar el trabajo solidario, contribuirán a crear y reforzar a la comunidad, a reorganizar las prioridades y los sistemas de producción. Es en este proceso en el que podríamos construir puentes que nos comuniquen, basados en la confianza mutua. Es imprescindible que estemos seguros de que en el proceso de tratar de colaborar para mejorar nuestras sociedades, tomemos caminos que nos unan, y no que nos dividan.

¡Otros mundos son posibles! ¡Ya están en construcción en México!

29. CONSTRUYENDO MUNDOS POSCAPITALISTAS¹

con BLANCA LEMUS²

INTRODUCCIÓN

En el contexto del muy trillado compromiso oficial para instrumentar mecanismos de gobernanza ambiental, nos queremos ocupar en estas líneas de su práctica en Latinoamérica, la que, en nuestra opinión seguirá siendo difícil, si no imposible, de lograr. Esta dificultad es producto de las profundas desigualdades sociales y las tendencias y actitudes de las fuerzas hegemónicas que han mostrado una extraordinaria resiliencia perversa para impedir el progreso en la implantación de políticas públicas y estrategias sociales que protejan la abundancia de diversidad —biológica, cultural y étnica—, que el continente ostenta como su herencia (Barkin, 2013).³ Como consecuencia, la injusticia ambiental se está agravando en todas partes del hemisferio. Estos cambios están provocando el doble movimiento que era central en el análisis de Karl Polanyi (2003): confrontaciones directas entre, por un lado, políticos, inversionistas acaudalados y posicionados para operar en mercados internacionales, los proveedores de tecnologías, inversionistas con concesiones en regiones y sectores abiertos recientemente a la inversión extranjera, y, por el otro lado, diversos grupos sociales organizados que consideran a estas intromisiones

¹ Publicado en *Culturas y Representaciones*, vol. 10(19), 2015, pp. 26-60, <<http://www.revistas.unam.mx/index.php/crs/article/view/52075>>.

² Blanca Lemus Ruiz es Doctora en Medio Ambiente del Trabajo de la Universidad de Massachusetts, Lowell, y médica por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Es jubilada de las Facultades de Medicina y Biología de ésta Universidad y sigue colaborando en investigaciones con el Dr. Barkin: urapeti@gmail.com.

³ La gobernanza debería encaminar al uso de los recursos públicos para el beneficio social; la captura de los procesos políticos por grupos hegemónicos, en un sentido gramsciano, tan común en América Latina, los desvía hacia fines particulares a expensas de la sociedad y del planeta, conduciendo a una resiliencia perversa en que las élites pueden seguir con sus prácticas devastadoras, tal como se examina en Barkin (2013). El análisis de la gobernanza local en las comunidades embarcadas en construir sus sociedades poscapitalistas ofrecido en este artículo muestra la posibilidad de otro tipo de acuerdo social para su buen uso comunitario. Los modelos de acción colectiva (Ostrom, 2011) y cooperación ofrecen mecanismos para contrarrestar las dinámicas traicioneras a un discurso democrático, pero sólo aplican a sociedades locales, tal como se demuestra en numerosos estudios de estas comunidades (*e.g.*, Borrini-Feyerabend *et al.*, 2007).

como una amenaza a sus sistemas productivos, a sus formas de vida y su salud, al tiempo que también son destructivas de sus comunidades, sus culturas y los ecosistemas de los cuales todos dependemos.

En esta contribución abordamos algunas de las causas subyacentes de estos conflictos, dando voz a algunos de los actores que participan activamente en el desarrollo de sus propias alternativas a las propuestas de desarrollo de las fuerzas hegemónicas que originan las transformaciones en sus sociedades. Estas alternativas surgen de grupos cuyas organizaciones están conformadas por diferentes cosmovisiones, producto de sus múltiples orígenes étnicos, y por los profundos debates filosóficos y epistemológicos del pasado medio siglo, surgidos a partir de numerosos movimientos sociales, proponiendo diversas estrategias para progresar, mejorando su bienestar sin afectar, sino restaurar, sus ecosistemas.

Este análisis se basa en una importante literatura emergente que propone diferentes epistemologías y metodologías, reflejando la participación directa de una amplia diversidad de comunidades alrededor del mundo en investigaciones sobre sí mismas y sobre las posibilidades de poner en práctica diferentes enfoques para mejorar su bienestar. A pesar de que provienen de regiones muy alejadas y de tradiciones disímiles, existen sorprendentes similitudes en sus reflexiones sobre cómo deben realizarse las investigaciones y cómo ellos pueden colaborar con los “foráneos” para encontrar los métodos que les permitan avanzar en la búsqueda de un mejor estilo de vida y de su capacidad de autogobernarse. Una notable contribución de esta corriente intelectual y académica es la de la socióloga maorí Linda Tuhiwai Smith (Smith, 2012 [1999]), en respuesta a la tendencia de muchos estudiosos de imponer sus modelos sobre las estructuras sociales locales, la viabilidad de producción y las capacidades de sus “aborígenes” para avanzar. Hoy en día hay una creciente literatura que destaca no sólo las limitaciones metodológicas de gran parte de los estudios académicos occidentales en el tercer mundo, sino que amplía la crítica a planos epistemológicos, éticos y cosmológicos. Los colaboradores de este proceso sostienen que, puesto que las clases sociales están profundamente enraizadas en las instituciones, se originan profundas dificultades cuando se trata de entender el discurso y las propuestas de los pueblos de otras culturas, especialmente de los pueblos apartados de las sociedades arraigadas en la tradición judeocristiana; los obstáculos pueden rastrearse hasta la esencia misma de las diferencias en los sistemas de valores y la relación de la propia sociedad con el mundo que habitamos (*v.g.*, Apffel-Marglin *et al.*, 2010; Venkateswar y Hughes, 2011; Stephen y Hale, 2013). El diálogo intercultural ha demostrado ser particularmente fructífero, yendo más allá tanto del universalismo como

del relativismo cultural, hasta involucrarse en la relatividad y el pluralismo cultural para una armonización democrática, justa y pacífica de los intereses en conflicto (Panikkar, 1995; Vachon, 1995; Dietrich *et al.*, 2011). El creciente interés en los comunes, como un sistema que emerge más allá del mercado y el Estado, expone el nuevo protagonismo en la escena social y política de antiguas y nuevas comunidades (Ostrom, 1985, 2011; Walljasper, 2010; Bollier y Helfrich, 2012; Linebaugh, 2013; McDermott, 2014; Barkin y Lemus, 2014).

Nos basamos en las posiciones de una miríada de grupos locales y regionales que intentan superar siglos de haber sido relegados a regiones cada vez más inhóspitas, al tiempo que también son blanco de opresión, como resultado de formas desiguales de integración, transformándolos de pueblos independientes en víctimas del colonialismo y del “desarrollo” capitalista (inter)nacional. Haciendo hincapié en su rechazo de las fuerzas del mercado que controlan y distribuyen recursos, estos grupos están intentando diseñar y ejecutar diversas propuestas para la toma de decisiones, basados en un sistema de valores que generalmente privilegia soluciones y bienestar colectivos por sobre el beneficio individual, y que asume una visión cosmocéntrica de la naturaleza. Estas propuestas emergen de un sistema de objetivos diferente y más complejo, arraigado en la experiencia histórica, las tradiciones culturales y las relaciones y responsabilidades intergeneracionales, que sitúan sus expectativas en un plazo mucho más largo que el considerado típicamente por las metodologías dominantes que actualmente orientan la gobernanza ambiental. Planteamos que para superar las desigualdades heredadas y creadas por la política pública, las comunidades tienen el reto de adoptar estrategias propias que generen oportunidades para sus miembros que tomen en cuenta, tanto el problema de justicia social, como el de restauración ambiental.

Debido a que intentan colocar la política y la ética en el centro de la vida social (de nuevo) —desplazando de la misma a la economía—, explícitamente rechazan la supremacía de un cálculo económico para tomar decisiones fundamentales sobre su sociedad, economía, o la gestión del ecosistema; éste es el meollo de la aportación de Polanyi (2003), que centró su crítica en el desarraigado impulsado por la dominación del mercado internacional. Así, estas comunidades están construyendo activamente alianzas entre sí, sin importar si están situadas en regiones contiguas, o asociadas a través de organizaciones sectoriales o culturales, creando plataformas para consolidar su habilidad de negociar con autoridades locales y nacionales, o resistir la imposición de políticas o proyectos a los cuales se oponen. Están intentando aislarse de la hegemonía de las epistemologías y fuerzas dominantes, forjando instituciones propias

para crear espacios de mayor autonomía en las esferas políticas, sociales y productivas, defendiendo su forma de vida y su territorio en contra de ser absorbidas por la economía internacional o incluso de su absoluta incautación o apropiación por el capital internacional.

Como se examina más adelante, están buscando nuevas maneras de fortalecer sus sociedades y mejorar su capacidad de autogobernarse. En muchos casos, esto implica una redefinición de sus identidades, combinando el conocimiento de su patrimonio cultural con el entendimiento actual de la trascendencia de sus raíces culturales y la historia de sus luchas contra muchas de las numerosas formas de injusticia a las cuales continúan sometidas. Estas luchas...

...nunca han sido un reflejo ciego, espontáneo, a las condiciones económicas objetivas, [más bien] han sido un conflicto consciente de ideas y de valores durante todo el camino (Thompson, 1959: 110).

Tan es así que las comunidades han podido “aferrarse a la visión del bien colectivo”⁴

Es notable que una característica común de solidaridad en muchas de estas comunidades sea la creciente conciencia de la importancia de su patrimonio e historia, su contribución a sus propias definiciones como pueblos, cuyas identidades colectivas y sistemas de creencias han generado formas únicas de organización y de dinámicas sociales.⁵ De esta forma, están descubriendo nuevas formas de integrar sus sistemas de creencias, sus culturas y su relación con el medio ambiente, a cosmovisiones que conducen a la creación de modelos contrastantes de sociedad, modelos

⁴ Aunque Thompson describe la noción de conciencia de clases en la Inglaterra de la posguerra, parece apropiado aplicar su análisis a las luchas indígenas en América.

⁵ La diferencia sostenida por muchos grupos indígenas en México entre “pueblos” y “comunidades” refleja la dispersión de miembros de una sola etnia sobre grandes espacios; por eso, es también significativa la diferencia entre el concepto geográfico del espacio y el concepto sociopolítico de territorio que es defendida con gran vehemencia por muchos pueblos en la actualidad. Las diferencias entre el uso del concepto de pueblos en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, contrasta con el uso del término comunidad en el Artículo 8j de la Convención de Diversidad Biológica (CBD) y en el Protocolo de Nagoya sobre el Acceso y Participación Justa y Equitativa en los Beneficios que se deriven de su Utilización al CBD. (Dos de estos documentos están mencionados abajo y son fácilmente obtenidos en las páginas de internet de la OIT y de las Naciones Unidas.) No es este el espacio para abundar sobre el tema, pero la sensibilidad de los grupos a estas diferencias no es, a menudo, entendida por los funcionarios encargados de negociar con el “Méjico Profundo” (Bonfil, 1987).

que abordan directamente las demandas de justicia social y sustentabilidad, mientras que protegen toda la panoplia de rasgos que definen a un pueblo.⁶ A pesar de que las incertidumbres actuales han favorecido la aparición de diferentes formas de localismo, de aislacionismo y fundamentalismo a menudo violento, la mayoría de las comunidades no tratan de volver atrás en la historia, sino al contrario, tratan de avanzar y descubrir en sus tradiciones inspiración y alternativas sabias y razonables para sus actuales predicamentos.

Al mismo tiempo que crean estos nuevos modelos de sociedad, las comunidades están participando activamente en un complejo proceso para definir (o redefinir) sus identidades. Ya no basta con declarar que son de un origen étnico o de otro, o que son campesinos de una u otra tradición. Esta búsqueda de identidad es compleja e involucra la combinación de numerosos contextos concéntricos y competitivos, procedentes de culturas nacionales y locales o regionales, de orígenes étnicos y características ambientales que afectan las estructuras sociales. Viiniendo desde un punto de origen diferente, la demanda por justicia social, por ejemplo, no puede consentir la idea de que las profundas desigualdades son parte de la condición humana; o que un simple cambio en el sistema jurídico puede legitimar el saqueo de los recursos comunitarios o la destrucción de los equilibrios planetarios. Esta discusión necesariamente conduce a una profunda distinción en lo concerniente a la naturaleza del contrato social sobre el que cada sociedad está construida, planteando la cuestión de si el individuo tiene el derecho, en última instancia, de hacer valer su interés individual a expensas de los de la comunidad, un derecho que generalmente no está concedido en las comunidades con las que colaboramos. Para muchas de estas comunidades, el individuo es reconocido como una parte de las redes de relaciones, para las cuales la comunidad es la primera capa de su existencia personal.

Por supuesto, estos discursos también definen trayectorias para el progreso social. Las iniciativas comunitarias latinoamericanas generalmente incitan a discusiones profundas sobre estilos de vida y organización comunitaria; enfoques simplificados como “buen vivir”, “mandar obedecer”

⁶ Cabe destacar que la búsqueda por integrar este rico patrimonio con los retos de asegurar una calidad de vida aceptable y la conservación de los ecosistemas parece ser un aspecto común entre las comunidades de diferentes culturas y regiones. La rica y abundante literatura que sistematiza las experiencias de los pueblos indígenas que continúan defendiendo sus propias formas de vida e impidiendo que sus territorios sean saqueados o dañados, muestra claramente la posibilidad de formar estrategias alternativas para afrontar tales desafíos, como los vinculados a los discursos dominantes de la gobernanza ambiental que permanecen atados a las instituciones de la economía de mercado.

ciendo” o “comunalidad”, son conceptos que implican la moderación como parte de estrategias complejas para construir organizaciones alternativas. Identificamos, en este proceso de diálogo con las comunidades, cinco principios básicos: autonomía, solidaridad, autosuficiencia, diversificación productiva y el manejo sustentable de recursos regionales.⁷

En lo que sigue, resumimos nuestra colaboración con comunidades y alianzas de grupos locales involucrados en el proceso de tratar de consolidar sus propias estructuras de gobierno, que sean capaces de responder a su visión de una sociedad apropiada congruente con asegurar el bienestar y la sustentabilidad. Esta colaboración toma como punto de partida sus luchas para consolidar programas alternativos para producir los bienes básicos necesarios que aseguren sus medios de subsistencia y fortalezcan su capacidad de autogobierno, al tiempo que se respetan las posibilidades y los límites de sus ambientes. En esta colaboración nos ha llamado la atención la medida en que los participantes están sobradamente informados acerca de los crecientes debates sobre epistemologías que explícitamente cuestionan las estructuras lógicas del gobierno dominante y de los modelos de desarrollo;⁸ muchos de estos debates aparentemente académicos se han convertido en parte integral de las discusiones y el diseño de propuestas estratégicas en el interior de estos grupos locales, para entender e implementar programas encaminados hacia el avance local y regional.

En tanto que la mayoría del trabajo de campo se basa en interacciones intensivas con comunidades en el estado de Oaxaca, contamos también con contribuciones adicionales de otras partes de México y de América Latina, y con otros actores que están surgiendo de movimientos de resistencia contra proyectos transnacionales de “desarrollo” para implementar sus propias propuestas y así consolidar una base material e institucional para mejorar el bienestar social y económico de sus comunidades y asegurar su capacidad para promover el equilibrio del ecosistema.

⁷ La especificación de “sustentabilidad regional” refleja la importancia de definir los ecosistemas en cuanto a espacios naturales en lugar de administrativos o políticos. Las comunidades son sumamente conscientes de la importancia de respetar las construcciones naturales, tales como la cuenca de un río, lo que requiere cooperación y alianzas entre comunidades para la implementación de estrategias de gestión sustentable.

⁸ La importancia de estas otras epistemologías se examina en importantes contribuciones a nuestro conocimiento por parte de colegas que participan en los intercambios con los pueblos cuyas organizaciones y sistemas productivos son guiados por otras cosmovisiones. Para una introducción a esta literatura, véase la contribución de Boaventura de Sousa Santos (2009) que ofrece una exposición clara de este enfoque. El trabajo seminal de Robert Vachon (1995) entre los iroqueses en América del Norte, y la tradición de Ivan Illich (1977, 1986, 1990), tienen ahora abundantes herederos/sucesores/seguidores.

29.1. UNA METODOLOGÍA ALTERNATIVA

Forjar sus propias soluciones es una meta ambiciosa para los pueblos que se proponen superar la discriminación, la marginación y los esfuerzos sistemáticos de las potencias coloniales de antaño y de las élites de poder de la actualidad para relegarlos a rincones de sus territorios cada vez más aislados y depauperados. Lo que es notable acerca de las historias que estamos encontrando y los colaboradores que tenemos la fortuna de conocer, es la abundancia de propuestas con las que están experimentando y la tenacidad con la que continúan resistiendo las tentativas de integrarlos a la economía nacional e internacional como individuos desfavorecidos en sociedades cada vez más polarizadas. Nuestros esfuerzos para invitar a varias comunidades a colaborar, para ayudarnos a entender sus planteamientos de gobernanza y sus aspiraciones, también añadieron otra dimensión a nuestro conocimiento sobre la dinámica social actual, un conocimiento que no se pierde en los analistas que modelan el proceso de globalización, sino que quizás es subestimado o incluso mal comprendido en la academia.⁹ En su evaluación de las probables tendencias mundiales en materia de seguridad nacional en el año 2015, el director de Inteligencia Central —como jefe de la Comunidad de Inteligencia de Estados Unidos— fue informado por un grupo de expertos externos en el año 2000 que los movimientos de resistencia indígena en Latinoamérica serán uno de los principales desafíos para los gobiernos nacionales en los próximos quince años:

Los movimientos de protesta indígena [...] aumentarán, facilitados por las redes transnacionales de activistas de derechos indígenas y apoyados por grupos internacionales bien financiados de derechos humanos y defensa del ambiente. Las tensiones se intensificarán en la zona, desde México hasta la región amazónica

⁹ Nuestra interacción con las comunidades es parte de un creciente reconocimiento de una importante dinámica comunitaria para emprender estrategias exitosas para la construcción de sociedades poscapitalistas. En México, algunos académicos involucrados en este esfuerzo han formado la Red de Etnoecología y Patrimonio Biocultural con el apoyo de CONACYT, mientras que a nivel regional las actividades de organizaciones sociales como PRATEC (Perú), Agruco (Bolivia), Movimiento Sin Terra (Brasil) y Vía Campesina en casi todos los países del hemisferio contribuyen a esta dinámica. Santos (2009) ofrece una visión metodológica para entender la que Martínez Luna (2003) y Díaz (Robles y Cardoso, 2008) habían comenzado para los pueblos oaxaqueños; Leff (2014) contribuye con su exploración de los resultados neguentrópicos de estas comunidades; Toledo y Ortiz-Esquivel (2014) exploran la amplia difusión geográfica del proceso en México mientras que Fuente *et al.*, (2012) presentan la riqueza de estudios detallados en la Sierra Juárez de Oaxaca.

[...] [El informe prosigue:] Los conflictos internos derivados de las quejas de represión del Estado, injusticias de carácter étnico y religioso, aumento de las presiones de migración, o de los movimientos de protesta indígena, se producirán con mayor frecuencia [...] en América Central y la región andina (Tenet, 2000: 46-49).

Es evidente que los movimientos de resistencia que observamos en algunas regiones mexicanas están proliferando en todo el hemisferio, como reacción a las políticas del Estado para promover la integración local en proyectos de desarrollo nacional e internacional, permitiendo que foráneos tengan acceso privilegiado a los recursos naturales y a la construcción de infraestructuras en territorios tradicionalmente controlados por estos pueblos.¹⁰ Hemos encontrado que también hay avances positivos que motivan a comunidades por todo el hemisferio a fortalecer sus capacidades para gobernar sus territorios, comprendiendo de una mejor manera las relaciones entre ellas mismas y su entorno, y al mismo tiempo a participar en esfuerzos deliberados para construir alianzas entre sí y con organizaciones transnacionales capaces de apoyarlos en la defensa de sus demandas en los ámbitos internacionales.

La necesidad de este proceso de organización en las comunidades se ha hecho cada vez más evidente debido a que las condiciones dentro de cada país —y las internacionales— han cambiado dramáticamente. Un esfuerzo concertado para acelerar la integración y conectividad interna con la economía global, así como para facilitar el acceso de las empresas internacionales a los recursos nacionales como parte de una campaña para promover el crecimiento económico de la región, está cambiando el mapa de América Latina afectando principalmente a las comunidades indígenas del hemisferio. Estos analistas resumieron el problema:

El reordenamiento del territorio ha difuminado las fronteras en términos tanto económicos como políticos con proyectos tales como el Proyecto Mesoamericano (previamente Plan Puebla-Panamá) y la Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional de América del Sur (Initiative for Regional Infrastructure Integration of South America, o IIRSA), los cuales entraron en vigor después del año 2000.¹¹ Sus objetivos primarios incluyen la construcción de redes de trans-

¹⁰ Un importante esfuerzo para sistematizar nuestro conocimiento de estos movimientos está disponible en un consorcio europeo —Organizaciones de Justicia Ambiental, Responsabilidades/Obligaciones y Comercio (<http://www.ejolt.org>)—, el cual mantiene un inventario creciente de los movimientos de resistencia.

¹¹ Ambos proyectos son propuestas de gran escala para inversiones en infraestructura

porte y telecomunicaciones, así como proyectos de generación de energía tales como represas hidroeléctricas y parques eólicos. También proyectan designar parques nacionales, áreas protegidas, sitios Patrimonio de la Humanidad, áreas de conservación transfronterizas, parques transnacionales (también llamados Parques para la Paz), corredores biológicos y ecológicos y redes de áreas protegidas [...] El diseño de estos proyectos es de hecho estratégico, y los gobiernos “progresistas” están presentándolos como una oportunidad de desarrollo (Navarro y Bessi, 2014).

Ana Ester Ceceña, economista mexicana, agrega (Bessi y Navarro, 2014):

Lo que sucederá con IIRSA es que los gobiernos locales se verán obligados a ser más disciplinados, porque se les alinearán en concordancia con los mercados globales. Existen 500 compañías transnacionales que producen la mitad del producto interno bruto global; cuando uno revisa el diseño de IIRSA y los proyectos de estas compañías, se complementan uno al otro: se está construyendo la cimentación para la circulación de la comunicación, la mercancía, las materias primas y la energía [...] El capital necesita una reordenación del territorio —considerando esto como un tipo de construcción histórico-social— para continuar reproduciéndose, tanto en términos de materiales como en relaciones de poder, de acumulación de capital y de ingresos. El ordenamiento permite el acceso en una gran escala a ciertos tipos de material de la Tierra. En la caracterización de esta última forma de desarrollo neoliberal, Gustavo Esteva (2014) observó:

Los pueblos indígenas están en el frente de batalla, luchando en una guerra en beneficio de todos nosotros, porque es allí donde el sistema capitalista busca relanzar una nueva forma de acumulación.

Los pueblos indígenas son cada vez más insistentes en exigir el reconocimiento y la integridad de sus territorios, muchos de los cuales se encuentran amenazados por las “grandiosas” propuestas del capital global; sus acciones están confrontando directamente estos esquemas, y cambiando los mapas de las Américas en el proceso.¹²

Han fortalecido su determinación para perseguir sus reivindicaciones

para facilitar la penetración de grandes organizaciones capitalistas en las regiones menos explotadas pero bien dotadas y de gran importancia (cf. <<http://www.proyectosmesoamerica.org/>> y <http://www.iirma.org/>>).

¹² La efectiva resistencia en México a los intentos de quitar a las comunidades de sus accesos al agua para transferirla a los demandantes urbanos y empresariales es un ejemplo de mucha actualidad. Gómez (2015) ofrece un análisis particularmente agudo de esta situación.

históricas, volviéndose cada vez más hábiles para lograr el cumplimiento del Convenio de la Organización Internacional del Trabajo (oIT) y garantizar el consentimiento previo de los pueblos nativos a las demandas territoriales de extranjeros para emprender actividades o explotar recursos naturales en sus regiones.¹³ Acompañando este mapa cambiante se encuentra una nueva conciencia de las significativas diferencias en la comprensión incluso de los conceptos más elementales en sus intercambios con sus interlocutores en los Estados de los cuales forman parte: aunque existe una significativa discrepancia a lo largo de las Américas, debido a que diversos pueblos y grupos sociales cuestionan los procedimientos gubernamentales para encomendar a un sólo organismo la implementación de políticas unificadas para la miríada de grupos étnicos en sus países,¹⁴ una fuente aún más grave de conflicto involucra la propia noción de propiedad y la aparente libertad con que los agentes externos (léase agentes del gobierno) pueden desdeñar los reclamos del pueblo por la tierra, por al agua y en general por los recursos naturales.

Este problema se presenta debido a las profundas diferencias entre el significado histórico de los diversos conceptos de propiedad y de territorio. Para muchos grupos, territorio es un término incluyente con implicaciones complejas que no se incorporan fácilmente a los conceptos imperantes del significado de tierra o propiedad basados en el mercado. Esto es tan esencial que incluso la Organización de Estados Americanos se ve obligada a tomar nota de su importancia en el contexto de la demanda para elaborar una Declaración Americana de los Derechos de los Pueblos Indígenas (oAS-CJPA, 2003: 1-2):¹⁵

Los derechos territoriales son un reclamo central de los Pueblos Indígenas en el mundo. Esos derechos son el sustrato físico para su capacidad de sobrevivir como pueblos, para reproducir sus culturas, para mantener y desarrollar sus

¹³ El Convenio 169 de Pueblos Indígenas y Tribales (<http://www.ilo.org/indigenous/Conventions/no169>) garantiza este derecho y cuando es ratificado por una nación, tiene el estatus de mandato constitucional. Cabe destacar que de los 22 países que ratificaron la Convención, 17 son de América Latina.

¹⁴ Véase la reveladora presentación de Benno Glauser de este problema en sus intercambios con líderes del pueblo ayoreo de Paraguay (Venkateswar y Hughes, 2011: cap. 1). En sus siete capítulos, este libro ofrece una abigarrada descripción del activismo indígena en muchas partes del mundo.

¹⁵ El grupo de trabajo encargado de preparar la “Declaración Americana de los Derechos de los Pueblos Indígenas” fue formado tras una resolución de la Asamblea General de la oEA en 1989; sin embargo, no fue hasta junio de 2016 cuando se aprobó la Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (cf. www.oas.org/es/sadye/documentos/res-2888-16-es.pdf).

organizaciones y sistemas productivos [...] Los Pueblos Indígenas han fortalecido sus organizaciones y desarrollado una lucha más organizada para reclamar sus derechos. En el centro de esas demandas están los problemas relacionados con la tierra, los territorios y los recursos naturales [...] estos derechos no son meramente un asunto inmobiliario [...] En cambio, los derechos indígenas sobre la tierra abarcan un concepto más amplio y diferente, que se relaciona con el derecho colectivo a la supervivencia como un pueblo organizado, con control sobre su hábitat como una condición necesaria para la reproducción de su cultura y para su propio desarrollo, o como los expertos indigenistas prefieren, para llevar adelante sus “planes de vida” y su institución política y social.

Las áreas indígenas, por ende, son una amalgama compleja de la cual depende la propia existencia de estos pueblos. Esto está claramente definido en la nueva Constitución brasileña de 1988, que otorga renovada fuerza a la posesión ancestral como base de los derechos territoriales caracterizados por cuatro rasgos significativos: 1] posesión ancestral permanente; 2] áreas necesarias para sus actividades productivas, incluyendo la reproducción de flora y fauna; 3] áreas necesarias para su reproducción cultural y para su supervivencia como un colectivo; y 4] un hábitat con la capacidad física y la forma para permitir el pleno funcionamiento de los mecanismos de autoridad y autogobierno de los pueblos indígenas. Estos territorios son el hábitat necesario para su vida colectiva, sus actividades, autogobierno y reproducción cultural y social.¹⁶

Los problemas surgen cuando el Estado pretende ejercer su soberanía mediante expropiación, para construir infraestructura, para explotar u otorgar concesiones de explotación de recursos naturales, o cualquier otra acción o proyecto que pueda afectar las tierras indígenas y el uso de su territorio. El derecho internacional ahora restringe esta facultad, obligando a una consulta previa, justa y formal con los pueblos indígenas afectados (Convenio 169, OIT, nota vii).

Puesto que los pueblos indígenas están consolidando sus exigencias constitucionales y legislativas para codificar elementos simbólicos y políticos de autonomía y autogobierno, como elementos de autodeterminación, los gobiernos se encuentran a sí mismos en un nuevo “terreno” al

¹⁶ Capítulo VII, Artículo 231. En otros lugares de Latinoamérica, estos derechos territoriales están protegidos constitucionalmente (Argentina, Bolivia, Colombia, Ecuador, México, Guatemala, Paraguay, Perú, Venezuela). La constitución de Ecuador también incluye componentes ambientales y de género desde 1998, derechos confirmados en la nueva magna carta de 2008.

intentar conciliar visiones globales de “desarrollo” con esfuerzos locales para alcanzar el bienestar.¹⁷

A lo largo del continente americano, los gobiernos continúan asumiendo que los precios de la propiedad de la tierra y de los recursos naturales pueden fijarse según los métodos del mercado y, en el mejor de los casos, negociadores de buena voluntad pueden llegar a acuerdos mutuamente beneficiosos para su explotación, asegurando así su “desbloqueo” para promover el desarrollo nacional mediante su comercialización en el mercado mundial. En estas circunstancias, parece casi incomprensible para los grupos de poder que otros grupos locales puedan objetar los términos de estas negociaciones, negándose incluso a discutir la posibilidad de emplazar una empresa forestal, una mina o un complejo de generación de energía en sus regiones, ya que molestarían un delicado equilibrio histórico y espiritual que ellos consideran una amenaza para su estructura social e integridad cultural, definidas en términos de una o más dimensiones no monetarias, para las cuales una compensación financiera es inconcebible.

La naturaleza y el alcance de esta lucha se remontan a tiempos coloniales. En el siglo XVIII, por ejemplo, las áreas reclamadas por los indígenas en México fueron llamadas Repúblicas de Indios, indicando que no representaban sólo un pedazo de tierra sino toda una forma de vida y de gobierno, a pesar de estar subordinadas a la Corona española. Esta disputa también tiene antecedentes muy antiguos: conocida como la Carta Magna de las Libertades y la Carta del Bosque, el rey y la nobleza de Inglaterra acordaron, al final del “largo siglo XII”, establecer límites a su poder para asegurar la subsistencia de los plebeyos (Linebaugh, 2013: cap. 2). La tradicional lucha por la tierra provocó la primera revolución social del siglo XX en México, y ha actuado con diversa intensidad en todos los países latinoamericanos durante los últimos cien años.

En la actualidad, la agitación de los últimos veinte años representa una mutación política de esa tradición hacia una lucha por la defensa territorial, según lo expresado en la Declaración de Quito (2009) de la Vía Campesina: “¡Por la Reforma Agraria y la Defensa de la Tierra y el Territorio!” Esto implica un profundo cambio conceptual:

Se demanda una forma específica de relación con la tierra que es marcadamente diferente a la impuesta por promotores públicos y privados en los últimos

¹⁷ Desgraciadamente, el gobierno mexicano interpreta esta obligación a su modo, a veces definiendo los términos de las consultas y otras veces haciendo caso omiso de sus resultados.

cincuenta años. Expresa una práctica soberana de la voluntad colectiva, que no contiene elementos separatistas pero que abiertamente desafía a las instituciones gubernamentales. La figura política de esta afirmación se presenta generalmente como autonomía (Esteva, 2010: 65).

La defensa territorial es también un nuevo tema central en las ciudades. La vieja tradición de asentamientos ilegales, que formó a la mayoría de las ciudades latinoamericanas durante el siglo XX, hoy se complementa con enérgicos movimientos para redefinir la vida urbana. El caso más espectacular fue el de Argentina (2001-2002), pero desde Oaxaca (2006) a Brasil (2014) movimientos vibrantes expresan la vitalidad de los nuevos sujetos sociales y las nuevas formas de protagonismo social (Mariotti *et al.*, 2007; Zibechi, 2008; Giarraca y Teubal, 2009).

29.2. CONSTRUYENDO COMUNES: GOBERNANZA COLECTIVA Y AUTONOMÍA

Esta diferenciación entre *territorio* y *propiedad* realza el significado de la propiedad social y la pertenencia como algo muy distinto de las actividades individuales. Se extiende a otra dimensión aún más importante: las comunidades generalmente se consideran a sí mismas parte de los “comunes”. Sin embargo, estos “comunes” no pueden reducirse a los recursos comunes; son mucho más que el aire, el agua o las otras dotaciones de la naturaleza que desató el debate de la “Tragedia de los Comunes” por Hardin (1995).¹⁸ Las actividades de las comunidades son algo mucho más parecido a lo que uno de los principales historiadores de este proceso describe para América Latina: “movimientos activos del hacer-común humano y demandas globales de distribución de la riqueza y de salvaguarda de los recursos comunes en cada continente” (Linebaugh, 2013: 279).

Estas organizaciones no están involucradas en la simple formación de “una economía alternativa, sino más bien una alternativa a la economía” (Esteva, 2014: i149). Para ellos, los comunes se ampliaron para abarcar los componentes sociales y culturales de la vida colectiva; no son simplemente un conjunto de cosas o recursos. Por el contrario, como muchos otros aspectos de estas sociedades, las organizaciones que están creando confieren gran importancia a las relaciones sociales dentro de la comu-

¹⁸ El mismo Hardin se vio obligado a reconocer, al final de su vida, que sólo examinó la “tragedia” de regímenes de acceso abierto, como los dominantes hoy en día, y no los comunes (*The Ecologist*, 1993: 13).

nidad, así como un firme compromiso para garantizar la conservación e incluso la ampliación de los comunes.¹⁹ Esta relación refleja una transformación colectiva y perdurable de la forma en que la sociedad se concibe y se administra a sí misma, al tiempo que también desarrolla el fundamento para la gestión colectiva y comunitaria.

Proteger, defender y gobernar los comunes son procesos complejos y riesgosos. Complejos, porque abarcan todos los aspectos de la existencia social y biológica; arriesgados, porque implica desafiar a los poderes fácticos y cuestionar la legitimidad de su “estado de derecho”, es decir, el sistema legal que ha creado y perpetuado una sociedad profundamente injusta, exacerbando las desigualdades sociales y acelerando la destrucción del ambiente. Esta disputa sobre la naturaleza del Estado proviene de un rechazo de los fundamentos filosóficos de orden hegemónico, basado en la idea de un “contrato social” que presupone la posibilidad de aplicar normas universales, como *justicia social, igualdad o incluso democracia*, imparcialmente para atender las necesidades de todos los grupos sociales.²⁰ Por esta razón, también implica un rechazo *prima facie* de la legitimidad de las “autoridades” nacionales, que asumen su derecho a transferir recursos de la comunidad —los comunes— a terceros por cualquier razón, sin tener en cuenta el bienestar de los pueblos, las decisiones locales o consideraciones históricas y ambientales, como es la práctica común en el contexto minero, forestal y de gestión del agua, a pesar de que actualmente se extiende a cuestiones complejas de bio y nanotecnología en muchas naciones.²¹ Por lo tanto, los esfuerzos para promover la solidaridad entre los diversos grupos sociales exigen un enfoque político que requiere que cada uno se libere de las instituciones sociales y políticas dominantes que son incapaces de atender sus necesidades particulares.

Pero consolidar los cimientos de esta sociedad implica mucho más que emprender actividades específicas o establecer instituciones apropiadas para la gobernanza o gestión. La sociedad solidaria requiere compromisos personales de cada miembro para asumir responsabilidad por el bienestar de los demás y para limitar las demandas individuales de acce-

¹⁹ No es mera coincidencia que las regiones de mayor biodiversidad en el país, son también las de mayor diversidad étnica, tal como lo documentó de una manera elegante Ekart Boege (2008).

²⁰ Luis Villoro (2003) ofrece un análisis profundo de las diferencias en los significados de los contratos sociales en diferentes contextos sociales.

²¹ Las leyes mexicanas dan al gobierno el derecho a expropiar terrenos comunes para obras públicas o de interés público. En 2013, la Constitución fue reformada para permitir que esta facultad pudiera ser aplicada en beneficio de operadores privados.

so a los recursos colectivos (Robles y Cardoso, 2008; Martínez Luna, 2010). Para fortalecer estas bases, es esencial comenzar con una visión común de la sociedad como un conjunto, cuyo punto de partida sea revertir la tendencia histórica de enriquecimiento de unos pocos a costa de la mayoría; tan es así que han incorporado decisiones colectivas para garantizar la transparencia y la participación directa en la toma de decisiones y la responsabilidad universal para la administración o la aplicación de esta dinámica. Desafía la presunción de la libertad del individuo dentro del grupo, obligando a cada miembro a medir cuidadosamente su impacto sobre los otros y la totalidad del grupo y a guiarse por la referencia de su efecto sobre la colectividad en sus decisiones y acciones. En términos históricos y especialmente a la luz de la práctica en la sociedad globalizada de hoy, requiere de una redefinición de la relación de las personas con su sociedad, rechazando la noción de que una persona tiene el derecho irrestricto a alejarse de —o incluso oponerse— al bienestar de la comunidad después de haber participado en el proceso colectivo para llegar a una decisión.

Este punto de partida tiene implicaciones importantes para la forma en la que se determinan las prioridades y en que las actividades están organizadas. Quizá una de las más llamativas y exigentes de éstas sea la necesidad de revertir la organización jerárquica de los lugares de trabajo: por supuesto, los individuos deben recibir un pago por su trabajo, pero no deberían tener que someterse a relaciones sociales autoritarias y desigrantes para satisfacer sus necesidades básicas. La organización proletaria existente en la sociedad es parte de una condición subyacente de la indefensión de los trabajadores, incluso incapaces de sobrevivir sin ingresar a la fuerza laboral; la alternativa en construcción aquí parte de la presunción de que todos los miembros de la sociedad gozan del derecho legítimo a una forma de vida socialmente determinada, independientemente de sus contribuciones a la producción o rendimientos. Su participación en las actividades colectivas se basa no solamente en un sentido del deber y pertenencia a la comunidad, sino también en una obligación impuesta explícitamente por las autoridades comunales. Este enfoque elimina la doble enajenación del trabajo moderno: de los frutos del trabajo y de la lógica de la actividad creativa.

29. 3. LA IMPORTANCIA DEL EXCEDENTE: CREANDO LAS BASES PARA LA GOBERNANZA COMUNAL

La decisión entre pueblos indígenas y comunidades campesinas de crear formas autónomas de autogobierno representa un desafío audaz para el modelo imperante de gobernanza y de justicia social y económica basada en la democracia representativa y su matrimonio con el “libre” comercio. Arraigado en el compromiso de definir y defender sus territorios, el proceso involucra la creación de nuevas instituciones y procesos para la apropiación social del entorno natural y los sistemas productivos que han creado con el fin de asegurar su capacidad de mantener y fortalecer su comunidad, para satisfacer sus necesidades básicas y facilitar el intercambio con sus pares (trueque) y en el mercado. Los mecanismos establecidos por las comunidades para la gestión a menudo involucran dinámicas complejas para la concertación entre los distintos grupos dentro de las comunidades, así como formas para delegar responsabilidades a sus miembros con base en sus conocimientos y compromiso social, o para asegurar una amplia participación política y la rendición de cuentas.

Por lo tanto, no es únicamente la propia elección de actividades, sino también los procesos de implementación de las mismas, lo que resulta crucial para el diseño de los mecanismos sociales que contribuyen a los resultados deseados relacionados con la equidad y la sostenibilidad. En la discusión sobre los proyectos individuales con los cuales hemos estado en contacto, un aspecto interesante del análisis es que no solamente la elección de la técnica, sino también —y a menudo igual de importante— la naturaleza de las actividades, hablan de una preocupación por atender las necesidades básicas socialmente definidas de los miembros de las comunidades, creando un equilibrio entre el uso de los recursos naturales y la restauración, regulación del uso de la tierra y conservación del ecosistema del cual se extraen.

Estas actividades están siendo organizadas de manera voluntaria para garantizar su viabilidad y continuidad. En muchos casos, los grupos están tratando de regenerar el tejido social erosionado por fuerzas internas y externas por igual. Si bien nos enfocamos en la naturaleza colectiva de la toma de decisiones, es igual de importante comprender los mecanismos que hacen posible la consolidación de la comunidad y su capacidad para avanzar. Durante nuestras interacciones con las comunidades en su búsqueda de soluciones que proporcionarán los medios para seguir adelante, identificamos una característica fundamental que contribuyó a este éxito, uno que también explica su capacidad para consolidar la capacidad de instrumentar el modelo de gobernanza colectiva que es fundamental

para la continuidad de la sociedad y su potencial para asegurar mejoras en las vidas de sus miembros; la organización explícita de recursos sociales y productivos que buscan generar excedente para “reinversión” y “redistribución” (Baran, 1959).

La importancia crucial del excedente en la gestión de la comunidad es un aspecto del proceso administrativo a menudo invisible y mal comprendido. Gran parte de la literatura describe a las comunidades rurales en general y a los grupos indígenas en particular, viviendo al límite de la subsistencia, puesto que la pobreza de recursos materiales limita su capacidad para avanzar y reduce las oportunidades de ampliar la gama de actividades que pueden llevar a cabo. En contraste, nuestras relaciones con comunidades a lo largo de las Américas revelan su capacidad y compromiso para producir este excedente y gestionarlo colectivamente, usándolo para recompensar a los miembros que han hecho contribuciones importantes en la producción, canalizando el resto para fines colectivos.

Centrando la atención en los procesos de producción y gestión del excedente dentro de los límites para satisfacer necesidades socialmente definidas y las posibilidades de sus ecosistemas, esta estructura de gestión colectiva de los diversos proyectos locales ha demostrado ser eficaz en la construcción de un marco de justicia ambiental que resulta ser tan difícil de lograr en las sociedades mercantiles de las que forma parte. A diferencia de esas otras secciones de la sociedad fuertemente ligadas a la economía global, estas comunidades han creado posibilidades de organizarse para asegurar que sus miembros no tengan que sufrir pobreza extrema y desempleo. Como resultado, generan activamente un potencial productivo mucho mayor de lo que puede ser apreciado por una simple contabilidad de los recursos financieros que tienen a su disposición. Una parte de este potencial está bien documentada en la literatura, como es el caso del trabajo “voluntario” que se espera de todos los miembros para tareas colectivas, que incluyen construcción y mantenimiento de infraestructura o conservación de los ecosistemas (*v.g., tequio, faena, minga*).

Los mecanismos sociales para la asignación y rotación de puestos administrativos y políticos, tan importantes para la gobernanza local, son otra forma en que los recursos se generan en estas organizaciones comunales, guiadas por cosmovisiones alejadas de las basadas en el beneficio material e individual. Pero, igualmente importante, el compromiso de inserción o participación universal también crea una responsabilidad compartida de los miembros para contribuir a las tareas colectivas, asegurando que la mayoría de las personas estarán involucradas en una multiplicidad de actividades para su propio beneficio y el de la comunidad. Estos recursos, a menudo invisibles en la economía de mercado,

emergen de la capacidad social para promover una amplia participación en pos del bienestar general.

El excedente ha existido en la organización humana desde tiempos inmemoriales. Aun cuando no existía ninguna institución formal para el intercambio y la acumulación, la construcción de grandes y pequeños proyectos para canalizar el agua o crear monumentos es testimonio de la capacidad de las sociedades para avanzar más allá de sus necesidades inmediatas, construyendo proyectos para aumentar la capacidad productiva o la grandeza de sus “líderes”. Lo que distingue a las innumerables comunidades guiadas por cosmovisiones alejadas de las basadas en el beneficio material y el beneficio individual a expensas del conjunto, es su capacidad para promover una amplia participación en pos de generar el bienestar general.

Recientemente, estas sociedades han mejorado las posibilidades para poner en práctica nuevos proyectos y generar mayores fondos disponibles para esos proyectos.²² Están aprovechando ciertos avances en ciencia y tecnología, combinándolos con conocimientos autóctonos para una producción mayor o más eficiente, así como medios más eficaces para mejorar su bienestar y su habilidad para proteger sus ecosistemas. Mediante el examen de la disponibilidad y movilización del excedente, las comunidades están mejor equipadas para determinar la manera óptima de aplicar sus visiones a largo plazo. Lo que asombra acerca de las experiencias individuales con las cuales hemos estado asociados, es el claro entendimiento de muchos de los participantes y de los líderes de las formas en que determinadas actividades pueden contribuir a objetivos generales.

29.4. ENFOQUES COMUNALES PARA LA JUSTICIA AMBIENTAL

Por todo el continente americano las comunidades están participando en el diseño e instrumentación de soluciones locales que contribuyan a su extensa lucha por la justicia ambiental en circunstancias de acoso y franca violencia ejercidas por los poderes del Estado sobre las sociedades de las que forman parte. Mientras deben dedicar gran cantidad de energía para protegerse contra las fuerzas que tratan de controlar sus recursos naturales y someterlos a las diferentes disciplinas de los mercados y los

²² O’Hara (2011) editó una colección de ensayos sobre la relevancia del concepto de excedente como un fondo para el cambio social. Véanse, en particular, los ensayos de Stanfield y Wrenn en el número.

sistemas políticos, es notable que continúen movilizándose a nivel local y nacional, al tiempo que se asocian internacionalmente con otras comunidades y organizaciones no gubernamentales para consolidar nuevas líneas y tecnologías de producción y experimentar con formas para mejorar las actividades existentes.

Estas acciones son el producto de la compleja interacción de fuerzas dinámicas dentro de las comunidades y sus reacciones a presiones externas. Son parte de la búsqueda de una identidad única que se ha vuelto cada vez más importante en la medida que estos pueblos hacen valer legalmente su derecho a la autodeterminación, tal como se define por sus variadas historias y su comprensión de los privilegios otorgados conforme al Convenio 169 de la OIT y acuerdos similares promulgados por otras instituciones internacionales. En México, como en otros lugares, este proceso tiene una larga historia, que fue plasmada en la Constitución de 1917, cuando las comunidades indígenas fueron reconocidas y se les otorgaron los derechos colectivos en la Reforma Agraria.²³

Durante la segunda mitad del siglo XX, las comunidades mexicanas libraron una batalla implacable y difícil por hacer valer sus derechos sobre el control de las tierras que fueron capaces de conservar o de recuperar después de la Revolución. Fueron particularmente eficaces en arrebatar contratos de explotación de sus bosques comunales de las firmas privadas a las que se les habían dado concesiones para gestionarlos (Bray y Merino, 2004). Hoy en día, existe una gran variedad de planes de gestión vigentes, testimonio de las habilidades que las comunidades han adquirido al intentar conciliar presiones para asegurar la conservación, con la necesidad de crear empleos y generar ingresos. La literatura ofrece una relación de esta variedad de estrategias, y muchos estudios exploran el nexo entre estos enfoques y las cosmovisiones de las comunidades participantes, particularmente en bosques comunitarios, que constituyen el 71% de los

²³ La Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de 2007 (<http://undesadspd.org/indigenouspeoples/declarationontherightsofindigenouspeoples.aspx>) debería servir para reforzar la enmienda de 1992 al Artículo 4 de la Constitución Mexicana, afirmando la “composición pluricultural” del país. Desafortunadamente, los cambios legislativos no fueron acompañados de ajustes en la estructura legal para definir la relación judicial entre el Estado y las decenas de pueblos indígenas. Continúan surgiendo graves conflictos porque la legislación reciente (2013-2014) refuerza el derecho del Estado a apropiarse de los recursos en territorios reconocidos como pertenecientes a muchos de estos pueblos a pesar de su declarada oposición en términos del Convenio 169 de la OIT.

bosques de la nación (por ejemplo, Bray *et al.*, 2007; Cronkleton *et al.*, 2011; Barkin y Fuente, 2013; Stevens *et al.*, 2014).²⁴

El movimiento para reafirmar las identidades indígenas en México fue reforzado todavía más tras el levantamiento en enero de 1994 en Chiapas por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (<http://enlacezapatista.ezln.org.mx>) (Muñoz, 2003). Desde entonces, la actividad y visibilidad de los pueblos indígenas en todo México se ha incrementado, junto con un reconocimiento gradual de su importancia dentro de la población. Su creciente visibilidad es resultado, en parte, de sus respuestas a las acciones represivas del Estado y de algunas empresas privadas con concesiones para removerlos de sus territorios.²⁵ Mientras que un recuento de las iniciativas que se están implementando en estas comunidades sería demasiado largo para su inclusión aquí, baste decir que la discusión de muchas de ellas en el marco del Congreso Nacional Indígena, y la creciente circulación de información y reuniones entre miembros, está contribuyendo a fortalecer la determinación y capacidad de sus miembros para llevar adelante sus proyectos.

Con respecto a sus esfuerzos por ganar reconocimiento y elaborar estrategias de gestión local, el control de los recursos hídricos ha sido particularmente polémico debido a que las comunidades intentan hacer valer su derecho a un abastecimiento adecuado y a proteger sus fuentes de agua. Estos movimientos ahora se encuentran inextricablemente asociados con otros que se oponen a megaproyectos de construcción de represas para generación de electricidad, o para su trasvase entre cuencas a gran distancia y así abastecer zonas urbanas. Como resultado, muchas comunidades que históricamente han sido capaces de satisfacer sus propias necesidades e incluso compartir los excedentes con las comunidades vecinas, ahora se encuentran involucradas en coaliciones con terceros defendiendo sus fuentes de agua, junto a los ecologistas que generalmen-

²⁴ Los esfuerzos para asumir el control colectivo de los bosques se iniciaron en la década de 1970 (Simonian, 1995). Hoy en día, el movimiento de bosques comunitarios de México es reconocido como uno de los más eficaces y sustentables del mundo, abarcando más de una cuarta parte del territorio nacional. La Red Mexicana de Organizaciones Campesinas Forestales y el Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible (CCMSS) continúan desempeñando papeles importantes en la coordinación de sus actividades y proporcionando información sobre su historia.

²⁵ La misma definición de indígena ha cambiado en tiempos recientes. Mientras que Bonfil Batalla (1987) menciona que existen unos 8 millones de indígenas, el Censo reportó sólo 6 millones en 1990. Sin embargo, hoy existen entre 18 y 20 millones de personas que se consideran a sí mismas indígenas (Toledo, 2014). La población indígena mexicana es la más grande en el hemisferio; Bolivia, Ecuador y Guatemala tienen las mayores proporciones.

te argumentan que los enfoques de las obras públicas y de ingeniería del sector público son inapropiados y que simplemente posponen “el día del juicio final” con respecto a la necesidad de una aproximación más ecológica e informada para la gestión del agua.

Hicimos un hallazgo interesante en nuestras colaboraciones con comunidades involucradas en la protección de las fuentes de agua, es la combinación de tecnologías tradicionales con las de vanguardia para proteger sus fuentes naturales, arroyos y manantiales. Esta combinación de tecnologías con participación directa de la comunidad en la gestión del agua contrasta fuertemente con el enfoque de las autoridades nacionales del agua, quienes prefieren un modelo administrativo homogéneo y centralizado. En respuesta a las grandes diferencias en las condiciones locales, hay muchos modelos tecnológicos de ahorro de agua que están siendo implementados por las comunidades, como la instalación de inodoros secos y la separación de los flujos de aguas negras y grises para permitir el procesamiento biológico pasivo y de bajo costo, congruente con prácticas ambientales restauradoras.

Un proyecto particularmente digno de mención es Agua para Siempre, que transformó un millón de hectáreas en una región cerca de Tehuacán, Puebla de una meseta árida con escarpadas pendientes, utilizando tecnologías “apropiadas”, para construir un gran número de proyectos de manejo de pendientes y de bajo impacto, incluyendo embalses y estanques de roca para canalizar flujos superficiales y colectar los escurrimientos, recreando acuíferos subterráneos y estructuras encontradas en algunos de los proyectos de irrigación más antiguos en el hemisferio occidental desde el siglo xi. Este proyecto, que comenzó en la década de 1980, combina actividades agroecológicas y agroindustriales de manejo comunitario con empresas cooperativas pertenecientes a los participantes, generando empleos y productos que están resultando atractivos para los consumidores por sus cualidades sociales, ecológicas y nutricionales (Hernández Garciadiego y Herrerías, 2008).²⁶

En Bolivia, la experiencia de la “Guerra del Agua” del año 2000 en Cochabamba sigue viva en la memoria de la gente, ya que los comités locales del agua se siguen organizando activamente mientras resisten el empeño del Estado en administrar los comunes (Fogelberg, 2013; Dwi-

²⁶ Este proyecto sigue movilizando la participación de más de 100 000 personas en una región que ha estado en operación por más de un cuarto de siglo. Centrándose en una amplia gama de actividades que crean numerosas oportunidades y que requieren incluso una mayor gama de habilidades, la región está alentando a la gente a permanecer ahí, fortaleciendo las comunidades y mejorando el bienestar de los pueblos.

nell y Olivera, 2014). Estas propuestas de gestión comunitaria abarcan muchas áreas importantes de la existencia colectiva de sus miembros, pero no pueden proveer todas las necesidades de la comunidad. Contar con suministros adecuados de agua y modelos sustentables para la gestión de los bosques ofrece puntos de partida importantes para construir comunidades más fuertes y resistentes. Por desgracia, recientemente las presiones sobre los gobiernos nacionales para aumentar la producción de energía procedente de fuentes renovables están acentuando los conflictos con las comunidades indígenas amenazadas con ser desterradas de sus territorios.²⁷ En México, la negativa del gobierno a permitir que las comunidades indígenas emprendan sus propios proyectos de micro-hidroelectricidad evidencia claramente el miedo al grado de independencia que este tipo de actividades podría promover.

A pesar de los obstáculos y conflictos, numerosas comunidades están llevando a cabo actividades productivas para abastecer sus necesidades básicas y producir bienes que puedan canjearse por otros (trueque). Los esfuerzos en curso están orientados a la identificación de nuevas actividades que hagan uso de los recursos renovables disponibles para producir bienes que puedan intercambiarse ventajosamente con terceros para satisfacer estas necesidades básicas. El objetivo de este enfoque es inducir dinámicas sociales que agrupen a los productores en organizaciones más fuertes que se conviertan, a su vez, en parte de sus comunidades.

Como parte de este esfuerzo, muchos colectivos están acompañando a comunidades en la introducción de actividades complementarias y ayudándolas a modificar o introducir nuevas tecnologías que fortalezcan sus capacidades organizativas para contribuir al bienestar colectivo. El objetivo de estas iniciativas es sumarse a los esfuerzos de las comunidades para reforzar sus propias capacidades para gobernarse. Como ya se mencionó, una de las más importantes organizaciones dedicadas a acompañar a los pueblos en el fortalecimiento de sus comunidades, permitiéndoles satisfacer de mejor manera los desafíos para asegurar un mejor estilo de vida, es la Vía Campesina (vc, <<http://viacampesina.org>>). Este grupo tiene presencia en 73 países, representando a más de 200 millones de

²⁷ El alcance y la intensidad de los conflictos que originan los enfrentamientos paradigmáticos en relación con el modelo apropiado para el manejo de agua y su uso son tales, que un número completo del Informe sobre Desarrollo Humano del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD, 2006) fue dedicado al tema. Asimismo, el *2013 World Social Report* (2013) de la UNESCO, aborda la necesidad de un nuevo tipo de ciencia social causada por el alcance de los impactos sociales de los cambios ambientales resultantes de modelos contradictorios de gestión ambiental y los derechos legítimos de los pueblos indígenas.

miembros; su propósito es promover la producción de alimentos mediante técnicas agroecológicas para orientar a los grupos de productores hacia una mayor autosuficiencia.

En 1996, la vc aumentó y redefinió la soberanía alimentaria, asociándola con la capacidad de determinar de forma autónoma qué comer y cómo producirlo (Rosset, 2013). La polémica decisión de la FAO de declarar 2014 el “Año Internacional de la Agricultura Familiar” refleja su mayor influencia para avanzar su agenda; de la misma manera, también logró incluir la agroecología como una de las estrategias principales que podrían asegurar el control de la agricultura por los productores y una respuesta adecuada a la necesidad de garantizar la soberanía alimentaria en los países donde está activa (CEPAL/FAO/IICA, 2014).

Otros grupos sociales participan activamente en las actividades que promueven cambios sociales, políticos y productivos para contribuir a mejorar sus propias vidas, así como las de los demás al tiempo que se intenta conservar y mejorar la calidad del medio ambiente o la sustentabilidad. En Chiapas, México, los Caracoles (organismos de gobierno local establecidos en territorio zapatista en 2003) están contribuyendo a este objetivo, mejorando directamente la vida de cientos de miles de sus miembros, en tanto que también ofrecen un modelo de organización social y de cambio que sigue teniendo un poderoso efecto sobre otras comunidades así como en otros países. Existe amplia evidencia de que sus actividades están mejorando el bienestar, contribuyendo a la diversificación de la economía y aumentando la productividad en una región donde quizá hasta 500 000 personas están participando; los pueblos han alcanzado un altísimo nivel de autosuficiencia en alimentos, salud y educación (Baronnet *et al.*, 2011).

En América del Sur, las comunidades andinas participan igualmente en la promoción de estrategias colectivas, conocidas como “Buen vivir” (*sumak kawsay* en quechua).²⁸ A lo largo de las Américas, grupos de comunidades participan en las movilizaciones para defender sus territorios, culturas y sociedades de la invasión por parte de aquellos que ambicionan sus recursos, o de instituciones que pueden erosionar el fundamento de sus diferencias; hay grupos como Idle no More (de las Primeras Naciones) en Canadá, la Confederación Haudenosaunee (Iroqués) en el este de América del Norte; el Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin

²⁸ Existe una amplia literatura describiendo y evaluando este enfoque y propuestas similares para estrategias alternativas que mejoren la calidad de vida de una manera realmente sustentable, que emergió de las cosmovisiones indígenas (por ejemplo, Bretón, 2005, 2013; Huanacuni, 2011; Lang, 2013; Hidalgo y Cubillo, 2014).

Tierra (MST) en Brasil, los Mapuches en Chile, así como el Congreso Nacional Indígena, la Asamblea Nacional de Afectados Ambientales y la Red Mexicana de Afectados por la Minería en México, y muchos otros en toda la región.

Acompañando a estas acciones de resistencia, muchas comunidades están involucradas en otras actividades constructivas, promoviendo la colaboración con investigadores universitarios y de la sociedad civil que están contribuyendo a explicar el valor del trabajo, contribuyendo a la diversificación de las economías y al mejoramiento de la producción de manera sustentable (Toledo *et al.*, 2013; Toledo y Ortiz-Espejel, 2014). Una aplicación que ha demostrado ser particularmente ilustrativa implica la inclusión de aguacates (*Persea americana*, “Hass”) no comerciables, que estaban causando una carga ambiental, en las dietas de cerdos de engorda en criaderos de traspatio, resultando en cambios metabólicos que producen carne de cerdo baja en colesterol, mejorando los ingresos de las productoras, ya que se comercializa en los mercados locales como un producto de primera calidad; en este caso, como en otros basados en un paradigma similar, las mujeres indígenas fueron especialmente beneficiadas, ya que ellas pusieron en marcha los proyectos y pronto sus comunidades reconocieron sus capacidades de liderazgo (Barkin, 2012; Fuente y Ramos, 2013).

Con un enfoque diferente, activistas académicos están trabajando con productores en diversas regiones para proteger y mejorar la producción de una bebida alcohólica tradicional mexicana —el mezcal—, modificando las técnicas tradicionales de siembra y cosecha de agave, cuidando el bosque y enriqueciendo la vida de la comunidad mediante la promoción de la producción cooperativa que está contribuyendo a aumentar los ingresos y la rehabilitación de los ecosistemas (Delgado *et al.*, 2014). En el estado de Guerrero, México, este trabajo es parte de un ambicioso programa del Grupo de Estudios Ambientales (Illsley *et al.*, 2007) que movilizó la capacidad local de gobernanza para promover formas locales del “Buen vivir” y la restauración de ecosistemas, que fue galardonado con el Premio Ecuador en 2012 por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo.

En otra región de México, en el estado de Oaxaca, cuatro comunidades zapotecas en el distrito de Villa Alta siguen cuidando sus moreras (*morus alba*), criando gusanos de seda para producir el hilo tradicional que luego tejen en prendas muy atractivas que los artesanos comercializan a un muy buen precio; son comercializados localmente y a través de un bien manejado Museo Textil en la capital del estado. En otros lugares están experimentando con nuevas plantaciones de variedades perennes

de algodón nativo, coyuchi (que se cultiva ya desde antes de la Conquista española), tejido en magníficas artesanías como una alternativa al algodón genéticamente modificado que actualmente domina la industria artesanal.

Allende la frontera sur, en Perú y más recientemente en Bolivia, una organización de desarrollo y promoción técnica bien establecida, Pratec, está desarrollando estrategias efectivas para el aprendizaje de la comunidad, mejorando la producción en las ecologías múltiples del mundo andino, centrándose en papas (*Solanum tuberosum*) pero equilibrando cuidadosamente su trabajo para apoyar el progreso diversificado con otros recursos (González, 2014).²⁹ El ecoturismo es una actividad aún más polémica, ya que se trata de una apertura explícita de la comunidad a los fuereños que con frecuencia son incapaces de comprender la magnitud del abismo económico y cultural que los separa de sus anfitriones (Barkin, 2002, Warnholtz y Barkin, 2015).

En otros lugares, los pueblos indígenas, campesinos y trabajadores industriales están explorando nuevas rutas para reorganizar sus lugares de trabajo y contribuir a mejorar los estándares de vida para ellos y sus comunidades. Nuevos sistemas de producción están siendo inventados en la medida en que los trabajadores ocupan algunas fábricas cerradas y continúan las operaciones cambiando los sistemas de gestión y de incentivos (Ruggeri, 2013; Ness y Azzellini, 2011). En muchos casos, las iniciativas no sólo colocaron a los productores directos en control de las empresas sino que también a menudo crearon posibilidades de inclusión de la comunidad en las decisiones y de incorporar el impacto sobre el medio ambiente en el nuevo criterio de toma de decisiones.³⁰

²⁹ La extensión de esta creatividad no puede ser mostrada en esta discusión. Para más detalles sobre los proyectos mencionados en este párrafo, consulte los siguientes sitios: <<http://geaac.org>>, <www.equatorinitiative.org/index.php?option=com_winners&view=winner_detail&id=67&Itemid=683&lang=es>, <www.museodetextoaxaca.org> y <www.pratec.org>. Entre los grupos que participan en nuestro proyecto, las comunidades indígenas y campesinas se dedican a la agricultura urbana, separación de residuos para la reutilización y aprovechamiento de agua de lluvia; cerca del centro de la ciudad capital de Oaxaca; una de estas iniciativas recibió un reconocimiento nacional (Premio Gobierno y Gestión Local) en 2012 (<<http://oaxaca.me/recibe-san-bartolo-coyotepec-premio-nacional-por-el-cuidado-ecologico>>).

³⁰ Una revisión de muchas de estas iniciativas, que implican diferentes modelos organizativos y la cooperación entre los productores y que abarca no sólo los aspectos productivos, sino también las instituciones de gobernanza que ahora están incorporando comunidades enteras en el proceso de gestión (en Bollier y Helfrich, 2012; Burbach *et al.*, 2013; Colectivo Lavaca, 2007; Giarraca y Teubal, 2005; Piñeiro, 2011; Rebón, 2004; Sitrin, 2005; Webber y Spronk, 2011).

29.5. CONSTRUYENDO MUNDOS POSCAPITALISTAS

Mientras que estas iniciativas están cambiando el mapa de América, muchos otros “desarrollos” amenazan con erosionar las posibilidades de mejorar la vida de los pueblos y del cuidado del ambiente. Incluso cuando las comunidades indígenas están afirmando sus recién reencontrados derechos para proseguir con sus actividades de gestión forestal y del agua, los gobiernos están alentando iniciativas a gran escala para empresas transnacionales que amenazan con alterar el delicado equilibrio de las actividades productivas de las que las comunidades dependen para su subsistencia y para el equilibrio de los ecosistemas. Estos proyectos plantean interrogantes fundamentales acerca de la capacidad de las comunidades para defender sus territorios, incluyendo su sustancial patrimonio cultural, social y productivo, que los integran a sus ecosistemas.

Los conflictos siguen y se agudizan, presentando diferencias aparentemente irresolubles y choques a menudo violentos, debido a que las minas, las presas, el ecoturismo y otros proyectos amenazan la existencia misma de las comunidades con las recientes reformas energéticas (no sólo en México), la fractura hidráulica (*fracking*) y otras formas de extracción de recursos. Generalmente, las comunidades rechazan la hipótesis de que los sacrificios que esta destrucción conlleva pueden ser compensados con ofertas monetarias que sólo los obligarían a ir hacia una senda de marginación institucionalizada como individuos aislados, una vida de oportunidades limitadas sin los sistemas de apoyo social y la seguridad de las redes que sus comunidades ofrecen.

Las iniciativas en curso para fortalecer o generar “nichos de sustentabilidad” por parte de comunidades campesinas e indígenas de América son sumamente importantes y alentadoras. Mientras que el impulso en el mercado global está amenazando claramente a los grupos sociales y ecosistemas en todo el mundo, los continuos y exitosos esfuerzos de pueblos indígenas y campesinos para implementar sus propias estrategias hacia el cambio social y productivo que deliberadamente incorporen el ambiente en el proceso, ofrecen una ventana para ver las posibilidades que pueden encontrarse y conseguir que la justicia ambiental sea una realidad en segmentos de la población cada vez mayores; esto no sucederá donde domine la estructura capitalista de producción y control. Por lo tanto, la implementación de soluciones locales, que crean áreas de acción autónoma, será aún más significativa y eficaz, mientras que los espacios dominados por el mercado mundial continuarán sufriendo deterioro ambiental y acentuados conflictos sociales.

Terminamos este capítulo explicando el porqué de su título. Mucho

de la epistemología y muchas de las experiencias resumidas en el texto son resultado de siglos de reflexión, de aprendizaje, que las comunidades han logrado rescatar de sus historias, de interpretar y reinterpretar las lecciones de sus ancestros y seguir un proceso de “innovar para mantener la tradición”.³¹ La gran mayoría de las sociedades involucradas en esta reconstrucción de sus mundos en el presente han pasado por muchas etapas de la historia humana: de ser pueblos “originarios” a ser sujetos coloniales y luego de ser relegados con la independencia para entonces verse incorporados en los peores lugares económicos, sociales y políticos del naciente capitalismo. Han sufrido todos los atropellos de la organización social y política que podría imponer el capitalismo. En este contexto y en la coyuntura actual, de un capitalismo que no conoce límites para su explotación del ser humano y de la naturaleza, estas sociedades y sus diversas comunidades están optando por salir, para vivir al margen de las naciones de las cuales son parte. Están organizándose sin las estructuras proletarias y explícitamente reforzando sus ideas del ser colectivo y del contrato social basado en la responsabilidad solidaria. Es en este sentido en el que están “Construyendo Mundos Poscapitalistas”.

31 Eric Wolf (1987) claramente discutió el problema de la tradición. Su juicio era que las sociedades tradicionales más exitosas eran las que supieron conservar lo que consideraban lo más importante e incorporar innovaciones que ayudaban a que funcionaran mejor sus instituciones, sus creencias, sus sistemas productivos.

BIBLIOGRAFÍA

- Absalón Montes, M.C. (2000), *Praxis femenina y estrategias de vida en Santa Fe de la Laguna, Michoacán*, Maestría en Ciencias en Desarrollo Rural Regional, Universidad Autónoma de Chapingo, Texcoco.
- Ackerman, F. (2009), *Can We Afford the Future? The economics of a warming world*, Londres, Zed Books.
- Acosta, A. (2010), “Sólo imaginando otros mundos, se cambiará éste. Reflexiones sobre el Buen Vivir”, *Sustentabilidad(es)* 2(6): 189-208.
- (2013), *El Buen Vivir: Sumak Kawsay, una oportunidad para imaginar otro mundo*, Barcelona, Icaria.
- y Martínez, E. (2009), *El buen vivir. Una vía para el desarrollo*, Quito, Abya-Yala.
- Adelman, I. (1984), “Beyond export-led growth”, *World Development* 12(9): 937-949.
- y Taylor E. (1990), “Is structural adjustment with a human face possible? The case of Mexico”, *Journal of Development Studies* 26(3): 387-407.
- , E.J. Taylor y S. Vogel (1988), “Life in a Mexican village: A SAM perspective”, *Journal of Development Studies* 25(1): 5-24.
- Adelson, N. (1997), “The environmental root of the Chiapas Uprising”, *Journal of Public and International Affairs* 1(8): 122-142.
- Alburquerque Llorens, F., C. De Mattos y R. Jordan Fuchs (1990), *Revolución tecnológica y Reestructuración productiva: Impactos y desafíos territoriales*, Buenos Aires, Grupo Editor Latinoamericano y Colección de Estudios Políticos Sociales.
- Alcaly, R. (1978), “Introduction to Marxian Crisis Theory”, en Union of Radical Political Economics (URPE), (ed.), *US Capitalism in Crisis*, Nueva York, URPE: 15-22.
- Alcanda Vergara, P. (2001), “Los paradigmas de la gestión forestal en el siglo XXI: biodiversidad, multifuncionalidad y sostenibilidad”, en Camprodrom, J. y E. Plana, (eds.), *Conservación de la diversidad, fauna vertebrada y gestión forestal*, Barcelona, Centre Tecnològic Forestal de Catalunya y Universitat de Barcelona: 41-76.
- Alejo, J. (1970), “Aspectos demográficos del crecimiento económico”, en *Dinámica de la población en México*, México, El Colegio de México.
- Altieri, M.A. (1999), *Agroecología. Bases científicas para una agricultura sustentable*, Montevideo, Editorial Nordan-Comunidad.
- Altvater, E. (2007), “The Social and Natural Environment of Fossil Capitalism”, *Socialist Register* 43(4): 37-59.
- y B. Mahnkopf (2002), *Las limitaciones de la globalización. Economía, ecología y política de la globalización*, México, Siglo XXI Editores.
- Álvarez Bully, E. y A. Piñeiro Nelson (coords.) (2014), *El maíz en peligro ante los transgénicos. Un análisis integral sobre el caso de México*, México, UNAM.

- Alves Amorim, M. (1993), *Lessons on Demand: Order and Progress for Small Firms in Ceará, Brazil*, Master's in Community Planning Thesis, Massachusetts Institute of Technology.
- Alvizouri Muñoz, M., J. Carranza Madrigal, J.E. Herrera Abarca, F. Chávez Carballo y J.L. Amezcuá Gastelum (1992), "Effects of avocado as a source of monounsaturated fatty acids on plasma lipid levels", *Archives of Medical Research* 23 (4): 163-167.
- Anderson, C.A. (1961), "Access to higher education and economic development", en Halsey, A.H., , J. Floud y C.A. Anderson (eds.), *Education, Economy and Society*, Nueva York, Free Press, cap. 21.
- Andrae, G. y B. Björn (1985), *The Wheat Trap: Bread and underdevelopment in Nigeria*, Londres, Zed Books y The Scandinavian Institute of African Studies.
- Anta F., S. (2006), "Forest certification in Mexico", en Cashore, B. y F. Gale (eds.) *Confronting sustainability: Forest certification in developing and transitioning countries*, New Haven, CT, Yale School of Forestry and Environmental Studies.
- Antinori, C.M. y G.C. Rausser (2007), "Collective choice and community forestry management in Mexico: An empirical analysis", *Journal of Development Studies* 43(3): 512-536.
- Apffel-Marglin, F., S. Kumar y A. Misra (2010), *Interrogating Development: Insights from the margins*, Nueva Delhi, Oxford University Press.
- Appendini, K. (2001), *De la milpa a los tortibonos: La restructuración de la política alimentaria en México*, México, El Colegio de México/UNRISD.
- , R. García Barrios y B. de la Tejera (2002), "¿Por qué los campesinos mexicanos siguen cultivando maíz? La seguridad alimentaria en el contexto del TLCAN", *Tercer Congreso Europeo de Latinoamericanistas*, Ámsterdam del 3 al 6 de julio.
- Appleton, A. (2002), "How New York City Used an Ecosystem Services Strategy. Forest Trends", disponible en: http://modernncms.ecosystemmarketplace.com/repository/moderncms_documents/NYC_H2O_Ecosystem_Services.pdf.
- Aranda, S. (1968), *La revolución agraria en Cuba*, México, Siglo XXI Editores.
- Archivo General de la Nación (1937), *Copia certificada del título de propiedad común de Don Domingo Plácido*, México, AGN.
- Arden-Clarke, C. (1992), "South-North Terms of Trade, environmental protection and sustainable development", *International Environmental Affairs* 4(2): 122-137.
- Arias, P. (1997), "Tres microhistorias de trabajo femenino en el campo", *Estudios Sociológicos* XV(43): 213-237.
- Arriaga, L., J.M. Espinosa, C. Aguilar, E. Martínez, L. Gómez y E. Loa (2000), *Regiones Terrestres prioritarias de México*, México, Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO).
- Arrojo Agudo, P. (2005), *Lo público y lo privado en la gestión del agua: Experiencias y reflexiones para el siglo xxi*, Madrid, Ediciones de Oriente y del Mediterráneo (Fundación Alternativas).
- (2006), "Los retos éticos de la nueva cultura del agua", *Polis* 5(14): 2-6.
- Arroyo Alejandre, J., A.I. Canales Cerón y P.N. Vargas Becerra (2002), *El norte de todos: Migración y trabajo en tiempos de globalización*, Guadalajara, Universidad

- de Guadalajara, Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas, UCLA Program on Mexico, PROFMEX, México, Juan Pablos Editor.
- Arroyo, G. (1978), "Modelos de acumulación, clases sociales y agricultura en América Latina", *Investigación Económica* 37(143): 119-149.
- Ascencio Franco, G. (1985), *Lechones domésticos para engordar capitales: Numarán, un caso de especialización comercial*, Maestría en Ciencias. Universidad de Guadalajara.
- Ashta, A. y M. Bush (2007), "Ethical Issues of NGO Principals in Sustainability, Outreach and Impact of Microfinance: Lessons in Governance from the Banco Compartamos' IPO", disponible en: <http://ssrn.com/abstract=1093665>.
- y M. Hudon (2009), "To whom should we be fair? Ethical Issues in balancing stakeholder interests from Banco Compartamos case study", *CEB Working Paper* 09-36.
- Assies, W., G. van den Haar y A.J. Hoekema (eds.) (2000), *The Challenge of Diversity: Indigenous peoples and reform of the state in Latin America*, Ámsterdam, Thela Thesis.
- Austin, J. y G. Esteva (1987), *Food Policy in Mexico: The search of self-sufficiency*, Ithaca, NY, Cornell University Press.
- Ayres, R.U. y E. Simonis (1994), *Industrial Metabolism: Restructuring for sustainable development*, Tokio, United Nations University.
- Badiale, M. y M. Bontempelli (2010), *Marx e la decrescita. Perché la decrescita ha bisogno del pensiero di Marx*, Democrazia Nella Comunicazione, Milán, Abiblio.
- Bagchi, A.K. (2005), *Perilous Passage: Mankind and the global ascendancy of capital*, Lanham, MD, Rowman & Littlefield Publishers.
- Balan, J., H. Browning y Jelin, E. (1971), *Estudios sobre migración, estructura ocupacional y movilidad social en México*, México, Instituto de Investigaciones sociales, UNAM.
- Balanyá, B., B. Brennan, O. Hoedeman, S. Krishimoto y P. Terhorst (2005), *Por un Modelo Público de Agua: Triunfos, luchas y sueños*, Ámsterdam, Transnational Institute (TNI) y Corporate Europe Observatory (CEO).
- Banco de México (1966), *Ingresos y gastos familiares en México, 1963*, México, Banco de México.
- (1969), *Cuentas nacionales y acervos de capital, 1950-1967*, México, Banco de México.
- (1973), *La distribución del ingreso en México*, México, Fondo de Cultura Económica.
- Barabas, A. y M. Bartolomé (1999), *Configuraciones étnicas en Oaxaca: Perspectivas etnográficas para las autonomías, vol. I, introducción, macroetnias*. México, Instituto Nacional Indigenista, INAH, CONACULTA.
- Baran, P.A. (1959), *La Economía Política del Crecimiento*, México, Fondo de Cultura Económica.
- Barkin, D. (1969), "La concentración del ingreso dentro del proceso de desarrollo agrícola". *Comercio Exterior* 19(11): 870-874.
- (1970), "La persistencia, de la pobreza en México: Un análisis económico y estructural", *Desarrollo Económico* 10(38): 263-284.

- Barkin, D. (1971), "Acceso a la educación en México: Un enfoque regional", *Revista Mexicana de Sociología* 23.
- (1971a), "Educación: ¿Una barrera al desarrollo?", *El Trimestre Económico* 38(152): 951-993.
- (1971b), "Gasto público y cambio social: una crítica metodológica", *Comercio Exterior* 21: 73-76.
- (1972a), "La redistribución del consumo en Cuba", *Comercio Exterior*, 23(7): 615-625.
- (1972b), "Automóviles y la vía chilena al socialismo", *Economía Política*, (México), IX(2): 67-84.
- (1975), "Mexico's albatross: The United States Economy", *Latin American Perspectives* 2(11): 64-80.
- (1975), "Veinticinco años de imperialismo", *Comercio Exterior* 25(12): 1377-1388.
- (1976), "¿Quiénes son los beneficiarios del desarrollo regional?" en: Naciones Unidas, Instituto Latinoamericano de Planificación Económica y Social, *Ensayos sobre Planificación Regional del Desarrollo*, México, Siglo XXI Editores.
- (1982), "El uso de la tierra agrícola en México", *Problemas del Desarrollo* 12(47): 59-85.
- (1987), "Proletarianización global: Un acercamiento a la nueva división internacional del trabajo", *Economía, Sociedad y Territorio* I(3): 429-455.
- (1987), "The end to food self-sufficiency in Mexico", *Latin American Perspectives* 14(3): 271-297.
- (1991), *Un desarrollo distorsionado: México en la economía mundial*, México, Siglo XXI Editores.
- (1992), "Morelia hacia finales del milenio". En: Zendejas, J. (comp.), *Las Ciudades Medianas*, México, Red Nacional de Investigación Urbana: 197-204.
- (1994), "Las organizaciones no gubernamentales ambientalistas en México", en Glender, A. y V. Lichtenberger (comps.), *La Diplomacia Ambiental: México y la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo*, México, Secretaría de Relaciones Exteriores y Fondo de Cultura Económica: 342-363.
- (1998), "La producción del agua en México: Aportación campesina al desarrollo", *Cuadernos del Desarrollo Rural* 40(2): 17-27.
- (1998), *Riqueza, pobreza y desarrollo sustentable*, México, Editorial Jus, Centro de Ecología y Desarrollo y Centro Lindavista.
- (1999), "Dos milagros: Las monarcas y los campesinos", en *Reunión de América del Norte sobre la Mariposa Monarca 1997*, Montreal, Canadá, Comisión para la Cooperación Ambiental (CCA): 205-210.
- (1999), "The Economic Impact of Ecotourism: Conflicts and solutions in highland Mexico", en Godde, P., M.F. Price y F.M. Zimmerman (eds.), *Tourism and Development in Mountain Regions*, Londres, Cab International: 157-172.
- (2000), "Superando el Paradigma Neoliberal: Desarrollo sustentable popular", en Giarracca, N. (ed.), *¿Una Nueva Ruralidad en América Latina?*, Buenos Aires, CLACSO: 81-99.

- Barkin, D. (2001), "Enfrentando la Globalización Desde Regiones Autónomas: Estrategias alternas para el desarrollo sustentable", en Martínez, C., E. Pea y C. González (eds.), *Crisis y alternativas del sector agropecuario para el siglo XXI*, México, UNAM, Instituto de Investigaciones Económicas: 98-110.
- (2001), *Innovaciones mexicanas en el manejo del agua*, México, Centro de Ecología y Desarrollo y Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco.
- (2002), "El desarrollo autónomo: un camino a la sustentabilidad", en Alimonda, H. (ed.), *Ecología Política: Naturaleza, Sociedad y Utopía*, Buenos Aires, CLACSO.
- (2002), "Indigenous Ecotourism in Mexico: An opportunity under construction", en McLaren, D. (ed.), *Rethinking Tourism and Ecotravel*, Westport, CT, Kumarian Press: 125-135.
- (2002), "The Reconstruction of a Modern Mexican Peasantry", *Journal of Peasant Studies* 30(1), 73-90.
- (2003), "Alleviating poverty through ecotourism? Promises and reality in the Monarch Butterfly Reserve of Mexico", *Environment, Development and Sustainability* 5(3): 371-382.
- (2003a), "La soberanía alimentaria: El quehacer del campesinado mexicano", *Estudios Agrarios* 9(22): 35-65.
- (2004), "Forjando una estrategia alternativa en México para aprovechar el comercio Mundial", *Cuadernos del CENDES* 55(21): 1-19.
- (2006), *La gestión del agua urbana en México: Retos, debates y bienestar*, Guadalajara, Universidad de Guadalajara.
- (2006a), "Reconsiderando las alternativas sociales en México rural: Estrategias campesinas e indígenas", *Polis* 5(15): 2-8.
- (2008), "Presentación del número temático: Economía Ecológica", *Argumentos* 21(56): 7-15.
- (2012), "Communities constructing their own alternatives in the face of crisis: economic globalization in mountain regions", *Mountain Research and Development* 32 (Especial): 512-522.
- (2013), "Viviendo el pacto fáustico. La resiliencia perversa frente al cambio climático", *Veredas*, 14(27): 7-19.
- (2015), "Nuevos Paradigmas para el Sistema Modular", *Argumentos*, 24(78): 165-183.
- (comp.) (1972), *Los beneficiarios del desarrollo regional*, México, Sep-Setentas.
- y B. DeWalt (1985), "La crisis alimentaria mexicana y el sorgo", *Problemas de Desarrollo* 16(61): 66-84.
- y B. Suárez San Román (1982), *El fin del principio: Las semillas y la autosuficiencia alimentaria*, México, Océano y Centro de Ecodesarrollo.
- y B. Suárez San Román (1985), *El fin de la autosuficiencia alimentaria*, México, Océano.
- y B. E. Lemus (2014), "Rethinking the Social and Solidarity Society in Light of Community Practice", *Sustainability*, 6(9): 6432-6445.
- y C. A. Paillés (1999), "El agua y el bosque como instrumentos para el desarrollo sustentable en Huatulco", en Flórez, M. (ed.), *Agua pasó por aquí:*

- Experiencias sociales de manejo sustentable. Una alternativa a la privatización*, Bogotá, Colombia, Instituto del Tercer Mundo, Instituto Latinoamericano de Servicios Legales Alternativos: 113-123.
- Barkin, D. y C. A. Paillés (2000), “Colaboración con la comunidad para el ecoturismo: una estrategia de gestión sustentable de recursos regionales”, *El Periplo Sustentable* 1(2): 1-9.
- y C. A. Paillés (2001), “El agua en un plan regional de manejo sustentable de recursos”, en Barkin, D. (ed.), *Innovaciones mexicanas en el manejo del agua*, México, Centro de Ecología y Desarrollo y Universidad Autónoma Metropolitana.
- y E. Santiago (2006), “Local participation and sustainability: lessons from three communities in Oaxaca”, en Johnston, J., M. Gismondi y J. Goodman (eds.), *Nature's Revenge: Reclaiming sustainability in an age of ecological exhaustion*, Toronto, Broadview Press: 183-201.
- y G. Esteva (1979), *Inflación y Democracia: El caso de México*, México, Siglo XXI Editores.
- y G. López Castro (1992), *Creación de empleos en centros conocidos de emigración: producción interna y agricultura de temporal*, México, Consejo Nacional de Población: Memoria del seminario sobre la migración internacional y el desarrollo económico de México.
- y M. A. García (1999), “La construcción social de la deforestación en México: los incendios de 1998 en la selva tropical de los Chimalapas”, en Novelo U., F. y J. Flores (eds.), *Globalización, estado y actores sociales en México*, México, UAM-X, CSH, Depto. de Producción Económica: 103-124.
- y B. E. Lemus, (2011), “La Economía Ecológica y Solidaria: Una propuesta frente a nuestra crisis”, *Sustentabilidad(es)* 5(1): 4-10.
- y M. Fuente (2013), “Community Forest Management: Can the green economy contribute to environmental justice?”, *Natural Resources Forum*, 37(3): 200-210.
- y M. Rosas Baños (2006), “¿Es posible un modelo alterno de acumulación? Una propuesta para la Nueva Ruralidad”, *Polis* 5(13): 361-371.
- y N. Manitzas (eds.), *Cuba: Camino Abierto*, México, Siglo XXI Editores.
- y T. King (1970), *Desarrollo Económico Regional: Enfoque por cuencas hidrográficas*, México, Siglo XXI Editores.
- , I. Ortiz y F. Rosen (1997), “Globalization and Resistance: The Remaking of Mexico”, *NACLA Report on the Americas*, 30(4): 14-29.
- , R. Batt y B. R. DeWalt (1991), *Alimentos vs. forrajes: La sustitución global de los granos en la producción*, México, Siglo XXI Editores.
- , W. Armenta, D. Cabrera, E. Carcaño y G. Parra (2011), “Capacidad social para la gestión del excedente: la construcción de sociedades alternativas”, en Novelo U., F. (ed.), *La UAM ante la sucesión presidencial: Propuestas de política económica y social para el nuevo gobierno*, México, Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco, División de Ciencias Sociales y Humanidades: 543-557.

- Barón, L. y D. Barkin (2001), "Innovations in indigenous production systems to maintain tradition", en Flora, C. (ed.), *Interactions Between Agroecosystems and Rural Human Community*, Miami, Florida, CRC Press: 211-219.
- Baronnet, B., M. Mora Bayo y R. Stahler-Sholk (2011), *Luchas muy otras: Zapatismo y autonomía en las comunidades indígenas de Chiapas*, México, UAM-x-Ciesas-UN-ACH.
- Barraclough, S. (1991), *An End to Hunger? The social origins of food strategies*, Londres, Zed Books.
- Bateman, M. (2010), *Why Doesn't Microfinance Work? The destructive rise of local neoliberalism*, Londres, Zed Books.
- Baumgärtner, S., C. Becker, K. Frank, B. Müller y M.F. Quaas (2008), "Relating the philosophy and practice of ecological economics. The role of concepts, models and case studies in inter- and transdisciplinary sustainability research", *Ecological Economics* 67(3): 384-393.
- Ben, A. y P. Engelhard (1993), *The urgency of fighting poverty for democracy and the environment*, Ginebra, United Nations Non-governmental Liaison Service.
- Benería, L. (2003), *Gender, Development and Globalization; Economics as if all People Mattered*, Nueva York, Routledge.
- Benítez Zenteno, R. (1970), *Problemas de población y desarrollo*, México, Centro Nacional de Productividad.
- Berkes, F. y C. Folke (1998), *Linking social and ecological systems: Management practices and social mechanisms for building resilience*, Cambridge, UK, Cambridge University Press.
- , J. Colding y C. Folke (2000), "Rediscovery of traditional ecological knowledge as adaptive management", *Ecological Applications* 10(5): 1251-1262.
- Berlan, J.-P., Durand y M. Hansen (2001), *La guerre au vivant, OGM et mystifications scientifiques*, París, Agone, Contre-Feux.
- Bessi, R. y S. Navarro (2014), *The Changing Map of Latin America*, en: <http://www.truth-out.org/news/item/24981-across-latin-america-a-struggle-for-communal-land-and-indigenous-autonomy>, acceso 1 de agosto de 2014.
- Bialostozky, C. (1970), *Recursos humanos: tabulaciones con base en una muestra del censo de población de 1960*, México, El Colegio de México.
- Bianchi, P. y L. Miller (1999), *Innovación y Territorio: Políticas para las pequeñas y medianas empresas*, México, Jus.
- Biswas, A.K. (1996), "Agua para el mundo en desarrollo en el siglo xxi", *Ingeniería Hidráulica en México* XI(3): 5-11.
- Blackman, A. (2003), "The Cutting Edge and the Nitty Gritty: Environmental Protection in Mexico", *Resources* 149(6): 26-28.
- y A. Kildegaard (2010), "Clean Technological Change in Developing-country Industrial Clusters: Mexican Leather Tanning", *Environmental Economics and Policy Studies* 12(3): 115-132.
- y N. Sisto (2003), "Adopción de tecnologías limpias en las tenerías de León, Guanajuato", *Dinámica de la Curtiduría* 12(103),
- Blaikie, P. (1985), *The Political Economy of Soil Erosion in Developing Countries*, Londres, Longman.

- Blair, J. (1975), *The control of oil*, Nueva York, Pantheon Books.
- Boas, H. (2011), *No REDD papers, vol. 1*, Londres, The Corner House.
- Boege Schmidt, E. (2008), *El patrimonio biocultural de los pueblos indígenas de México. Hacia la conservación in situ de la biodiversidad y agrodiversidad en los territorios indígenas*, México, INAH, Educal, Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas.
- y D. González (1997), “Extractivismo en la Selva Maya de México ¿una alternativa para el desarrollo de un ‘Polo Verde’ en el sureste mexicano?”, *Cuadernos Agrarios* 6(14): 115-143.
- Bollier, D. y S. Helfrich (2012), *The Wealth of the Commons*, Amherst, The Levellers Press.
- Bonefeld, W. y P. Burnham (1998), “The Politics of Counter Inflationary Credibility in Britain, 1990-94”, *Review of Radical Political Economics*, 30(1): 32-52.
- Bonfil Batalla, G. (1982), “Lo propio y lo ajeno: Una aproximación al problema del control cultural”, en Colombres, A. (ed.), *La cultura popular*, México, Dirección General de Culturas Populares, SEP y Premiá Editora de Libros: 79-86.
- , G. (1987), *México Profundo: Una Civilización Negada*, México, Grijalbo.
- Boorstein, E. (1969), *Economic Transformation of Cuba: A First-Hand Account*, Nueva York, Monthly Review Press.
- Borja-Vega, C. y A. de la Fuente (2013), *Municipal Vulnerability to Climate Change and Climate-Related Events in Mexico*, Washington, DC, World Bank Policy Research Working Paper 6417.
- Borrini-Feyerabend, G., M. Pimbert, M.T. Farvar, A. Kothari y Y. Renard (2005), *Sharing Power: Learning by Doing in Co-management of Natural Resources throughout the World*, Londres, Earthprint, Gland, Suiza, IUCN.
- Boulding, K. (1966), “The Economics of Spaceship Earth”, en Jarrett, H. (ed.), *Environmental Quality in a Growing Economy*, Baltimore, MD, Resources for the Future/Johns Hopkins University Press: 3-14.
- Bowles, S. (1970), *Planning educational systems for economic growth*, Cambridge, MA, Harvard University Press.
- Bowles, S. (1971), “Unequal education and the reproduction of the social division of labor”, en Edwards, R.C., Reich, M. y Weisskopf, T. (Eds.) *The Capitalist System*, Saddle River, NJ, Prentice-Hall.
- Boyce, J.K. (1994), “Inequality as a cause of environmental degradation”, *Ecological Economics* 11(3): 169-178.
- (1996), *Economic Policy for Building Peace: The lessons of El Salvador*, Boulder, CO, Lynne Rienner Publishing.
- Bray, D. y L. Merino (2004), *La experiencia de las comunidades forestales en México. Veinticinco años de silvicultura y construcción de empresas forestales comunitarias*, México, Semarnat.
- Bray, D., L. Merino y D. Barry (2007), *Los bosques comunitarios de México. Manejo sustentable de paisajes forestales*, México, Semarnat.
- , L. Merino, P. Negreros, G. Segura, J.M. Torres y H.F.M. Vester (2003), “Mexico’s Community-Managed Forests as a Global Model for Sustainable Landscapes”, *Conservation Biology* 17(3): 672-677.

- Bretón, V. (2005), “Los paradigmas de la ‘nueva’ ruralidad a debate: el proyecto de desarrollo de los pueblos indígenas y negros del Ecuador”, *Revista Europea de Estudios Latinoamericanos y Caribeños*, 78: 7-30.
- (2013), “Etnicidad, desarrollo y ‘Buen Vivir’: Reflexiones críticas en perspectiva histórica”, *Revista Europea de Estudios Latinoamericanos y Caribeños*, 95: 71-95.
- Bronfenbrenner, M. y F.D. Holzman (1963), “Survey of Inflation Theory”, *American Economic Review*, 53(4): 593-661.
- Brown, M.I. (2013), *Redeeming REDD: Policies, Incentives and Social Feasibility for Avoided Deforestation*, Londres, Earthscan.
- Bruni, L. y P.L. Porta (2007), *Handbook on the Economics of Happiness*, Northampton, MA, Edward Elgar.
- Burbach, R., M. Fox y F. Fuentes (2013), *Latin America’s Turbulent Transitions: The future of twenty-first century socialism*, Londres, Zed.
- Burkett, P. (2008), “La comprensión de los problemas ambientales actuales vistos con el enfoque marxista”, *Argumentos*, 21(56): 21-32.
- Cárdenas, C. (1967), “Nacionalización de la explotación forestal”, *Revista del México Agrario* 11: 99-102.
- Cardoso, F.H. y E. Faletto (1969), *Dependencia y desarrollo en América Latina: Ensayo de interpretación sociológica*, México, Siglo XXI Editores.
- Carnoy, M. (1964), “The costs and returns to schooling in México: A case study”, *Disertación Doctoral*, University of Chicago, Dept. of Economics.
- (1967), “Earnings and Schooling in México”, *Economic Development and Cultural Change* 15(4): 408-419.
- Carrasco, C. (2001), “La sostenibilidad de la vida humana: ¿un asunto de mujeres?”, *Mientras Tanto* 82(10): 43-70.
- Castell Cancino, J. y F. Rello Espinosa (1977), “Las desventuras de un proyecto agrario: 1970-1976”, *Investigación Económica* 36(141): 131-155.
- Castro, F. (1961 [1956]), *La historia me absolverá*, La Habana, Instituto del Libro.
- (1970), “Ponencia en el aniversario de la Revolución Cubana, 26 julio”, *Granma*, 2 de agosto.
- de, B. Hogenboom y M. Baud (eds.) (2015), *Gobernanza ambiental en América Latina*, Buenos Aires, CLACSO.
- Caves, R. (1960), *Trade and Economic Structure: Models and Methods*, Cambridge, MA, Harvard University Press.
- CEPAL (1971), *La distribución del ingreso en América Latina*, México, CEPAL y Fondo de Cultura Económica.
- (1996), *Transformación productiva con equidad. La tarea prioritaria del desarrollo de América Latina y el Caribe en los años noventa*, Santiago de Chile, CEPAL.
- Cernea, M.M. (1995), *Primero la gente. Variables sociológicas en el desarrollo rural*, México, El Banco Mundial y Fondo de Cultura Económica.
- Chance, J. y W.B. Taylor (1987), “Cofradías y cargos: una perspectiva histórica de la jerarquía cívico-religiosa mesoamericana”, *Suplemento de Antropología: INAH* 14: 1-23.

- Chapela y Mendoza, G. y D. Barkin (1995), *Monarcas y Campesinos: Estrategia de desarrollo sustentable en el oriente de Michoacán*, México, Centro de Ecología y Desarrollo.
- Chapela, F. (1999), "Emergencia de las organizaciones sociales de Oaxaca: la lucha por los recursos forestales", *Alteridades* 9(17): 105-112.
- Chenery, H.B. (1961), "Comparative Advantages and Development Policy", *American Economic Review* 51(1): 18-51.
- Chiriboga, B., F. Calderón y D. Piñero (1991), "Modernización Democrática e Incluyente de la Agricultura en América Latina y el Caribe", San José, CR, IICA, Serie Documentos de Programas 28.
- Chossudovsky, M. (1975), "Hacia el nuevo modelo chileno: Inflación y redistribución del ingreso (1973-1974)", *El Trimestre Económico*, XLII(2)(166): 311-347.
- Cinta Guzman, R. (1971), "Burguesía nacional y desarrollo", en *El perfil de México en 1980*, vol. III, México, Siglo XXI Editores.
- Clark, B. y J.B. Foster (2009), "Ecological imperialism and the global metabolic rift: Unequal exchange and the Guano trade", *International Journal of Comparative Sociology*, 50(3-4): 311-334.
- Colectivo Lavaca (2007), *Sin patrón: Fábricas y empresas recuperadas por sus trabajadores. Una historia, una guía*, Buenos Aires, Cooperativa de trabajadores Lavaca Editora.
- Colectivo Situaciones (2002), *19 y 20: Apuntes para el nuevo protagonismo social*, Buenos Aires, Colectivo Situaciones/Ediciones mano a mano.
- Comisión de Cooperación Ambiental (2003), *Informe del estado del medio ambiente*, Montreal, Canadá.
- Comisión Económica para América Latina/Food and Agriculture Organisation/ Instituto Internacional de Cooperación Agrícola (2014), *Perspectivas de la agricultura y del desarrollo rural en las Américas: Una mirada hacia América Latina y el Caribe*, San José, IICA.
- Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y Desarrollo (1987), *Nuestro Futuro Común*, Madrid, Alianza Editorial.
- Comisión Nacional del Agua (Conagua) (2003), *La participación privada en la prestación de los servicios de agua y saneamiento: conceptos básicos y experiencias*, México, Conagua.
- (Conagua) (2008), *Estadísticas del agua en México 2008*, México, Conagua.
- Comisión Nacional Forestal (Conafor) (2001), *Programa Estratégico Forestal para México, 2025*, México, Semarnat-Conafor.
- (Conafor) (2011), *Visión de México sobre REDD+. Hacia una estrategia nacional*, México, Semarnat.
- Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) (2006), *Identidad y organización indígena de cara al siglo XXI*, México, Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, Coordinación General de Programas y Proyectos Especiales, Dirección de Fortalecimiento de Capacidades de los Indígenas (DFCI).
- Consejo Nacional de Economía (1958), *El empleo, el subempleo y el desempleo en Cuba*, La Habana, CNE.

- Consejo Técnico Consultivo Nacional (CONAF) (1998), *Acta difundida en internet de la declaración final*, Miembros ONG del consejo CONAF.
- Conservación de la Biodiversidad por Comunidades Indígenas de los Estados de Oaxaca Michoacán Guerrero y México (COINBIO) (2008), *Comunidades indígenas y biodiversidad. Memoria del proyecto COINBIO 2001-2007*, México, Banco Mundial, Nacional Financiera, Semarnat, Conafor.
- Constantino Toto, R. (2006), *Aqua, Seguridad Nacional e Instituciones: Conflictos y riesgos para el diseño de las políticas públicas*, México, Universidad Autónoma Metropolitana - Xochimilco, Instituto de Investigaciones Legislativas y Senado de la República XIX Legislatura.
- Coraggio, J.L. (1987), *Consideraciones teórico-metodológicas sobre las formas sociales de organización del espacio y sus tendencias en América Latina*, Quito, Centro de Investigaciones Ciudad.
- (2003), *Política social y economía del trabajo: alternativas a la política neoliberal para la ciudad*, Quito, Miño y Davila Editores, Instituto FRONESIS, ILDIS-FES, Ediciones Abda-Yala.
- (2004), *La gente o el capital. Desarrollo local y economía del trabajo*, Quito, Abya-Yala.
- Costanza, R. (2013), *Herman Daly Festschrift: Toward a sustainable and desirable future: A 30 year collaboration with Herman Daly*, Encyclopedia of Earth. Disponible en: http://editors.eol.org/eoearth/wiki/Herman_Daly_Festschrift.
- Costanza, R., J. Cumberland y H. Daly (1999), *Introducción a la Economía Ecológica*, Madrid, AENOR.
- Cronkleton, P., D. Bray y G. Medina (2011), “Community Forest Management and the Emergence of Multi-Scale Governance Institutions: Lessons for REDD+ Development from Mexico, Brazil and Bolivia”, *Forests*, 2(2): 451-473.
- Cruz, W. y R. Repetto (1992), *The environmental effects of stabilization and structural programs: The Philippines case*, Washington, DC, World Resources Institute.
- Cuba (1968), *La estrategia del desarrollo económico*, Santiago de Chile, Delegación Cubana al Tercer Simposio Internacional sobre la Planeación del Desarrollo.
- Cuban Delegation (1967), *The international symposium on industrial development*, La Habana.
- Currie-Alder, B. (2004), *La Corresponsabilidad Ambiental en el Sureste Mexicano: Procesos de Participación Social en la Gestión de los Recursos Naturales*, Ottawa, Ontario, Canadá, Iniciativa de Programa Minga, Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo.
- Cusi, E. (1969), *Memorias de un colono*, México, Jus.
- Daly, H.E. (1993), “The perils of free trade: Economists routinely ignore its hidden costs to the environment and the community”, *Scientific American* 269(5): 50-57.
- (2000), *Ecological Economics and the Ecology of Economics: Essays in Criticism*. Cheltenham, UK, Edward Elgar Publishing Ltd.
- y J.B. Cobb (1993), *Para el bien común*, México, Fondo de Cultura Económica.
- Damette, O. y P. Delacote (2011), “Unsustainable timber harvesting, deforestation and the role of certification”, *Ecological Economics* 70(6): 1211-1219.

- De Janvry, A. y C. Garramón (1977), "The dynamics of rural poverty in Latin America", *Journal of Peasant Studies* 4(3): 206-216.
- De Walt, B. (1983), "The cattle are eating the forest", *Bulletin of Atomic Scientists* 39(1): 18-23.
- Delegación Cubana. (1968), *La estrategia del desarrollo económico*, Tercer seminario interregional sobre planificación y desarrollo, Santiago de Chile, CEPAL.
- Delgado Lemus, A. (2014), "Ampliando gustos históricos", en *Mural. Suplemento Negocios*, 31 de agosto, en <http://www.mural.com>.
- , A. Casas y O. Tellez (2014), "Distribution, abundance and traditional management of *Agave potatorum* in the Tehuacán Valley, Mexico: bases for sustainable use of non-timber forest products", *Journal of Ethnobiology and Ethnomedicine*, 10(63): 1-12.
- Delgado Ramos, G-C. (2002), *La Amenaza Biológica: Mitos y falsas promesas de la biotecnología*, México, Plaza y Janés.
- (2010), *Ecología política de la minería en América Latina*, México, UNAM-Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades.
- Díaz, F. (2004), "Comunidad y comunalidad", en Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (ed.), *Antología sobre la cultura popular indígena: diálogos en acción segunda etapa*, México, Conaculta: 365-373.
- Dierckxsens, W. (1998), *Los límites de un capitalismo sin ciudadanía. Hacia una mundialización sin neoliberalismo*, San José, Costa Rica, Departamento Ecuménico de Investigaciones.
- (2000), *Del neoliberalismo al postcapitalismo*, San José, Costa Rica, Departamento Ecuménico de Investigaciones.
- Dieterich, H., E. Dussel, R. Franco, A. Peters, C. Stahmer y E. Zemelman (2000), *Fin del capitalismo global. El nuevo proyecto histórico*, Navarra, España, Txalaparta.
- Dietrich, W., J. Echavarría Álvarez, G. Esteva, D. Ingruber y N. Koppensteiner (2011), *Peace Studies: A Cultural Perspective*, Londres, Palgrave Macmillan.
- Dobb, M. (1970), *Un ensayo sobre crecimiento económico y planificación*, Madrid, Editorial Tecnos.
- (1971), *Economía del bienestar y economía del socialismo*, México, Siglo XXI Editores.
- Dorfman, R., P. Samuelson y R. Solow (1958), *Linear Programming and Economic Analysis*, Nueva York, McGraw Hill.
- Dourojeanni R., A. A. Jouravlev y G. Chávez (2002), *Gestión del agua a nivel de cuencas: teoría y práctica*, Santiago, Chile, CEPAL.
- Downing, T.E., S.B. Hecht, H.A. Pearson y C. Garcia-Downing (1992), *Development or Destruction: The conversion of tropical forest to pasture in Latin America*. Boulder, CO, Westview Press y Man and the Biosphere Program.
- Downs, T.J., I.M. Suffet y E. Cifuentes García (1999), "Risk screening for exposure to groundwater pollution in a wastewater irrigation district of the Mexico City Region", *Environmental Health Perspectives* 107(7): 553-561.
- Duchrow, U. y F. Hinkelammert (2003), *La vida o el capital. Alternativas a la dictadura global de la propiedad*, San José, Costa Rica, Departamento Ecuménico de Investigaciones.

- Dumont, R. (1965), *Cuba, intento de crítica constructiva*, Barcelona, Nova Terra.
- Dussel, E. (1998), *Ética de la Liberación: En la edad de la globalización y de la exclusión*, Madrid, Editorial Trotta.
- (2006), *Filosofía de la cultura y la liberación*, México, UNAM.
- , E. Mendieta y C. Bohórquez (2010), *El pensamiento filosófico latinoamericano, del Caribe y “Latino” (1300-2000)*, México, Siglo XXI Editores.
- Dwinell, A. y M. Olivera (2014), “The water is ours, damn it! Water communing in Bolivia”, *Community Development Journal* 49(1): i44-i52.
- Easterlin, R. (2002), *Happiness in Economics*, Northampton, MA, E. Elgar.
- Eckstein, S. (1968), *El marco macroeconómico del problema agrario mexicano*, México, Centro de Investigaciones Agrarias.
- (1976), *Farming in Mexico and Peru: A multivariate analysis of peasant cooperatives*, Ramat-Gan, Israel, Dept. of Economics, Bar-Ilan University.
- Economic Commission for Latin America (1963), “The Cuban economy in the period 1959-1963”, en *Economy Survey for Latin America 1963*, Santiago de Chile, ECLAC.
- (1963), “The Economic development of Colombia, 1957; Economic development of Peru and Economic development of Argentina”, *Economic Survey for Latin America, 1963*, Santiago de Chile, ECLAC.
- Ehrlich, P. y A. Ehrlich (1991), *Healing the Planet: strategies for Resolving the Environmental Crisis*, Reading, UK, Perseus Books.
- Emanuelli, M.S. (2009), *Agua para todas y todos: Carpeta de luchas y experiencias en México*, México, COMDA.
- Esch, S., M. Delgado, S. Helfrich, H. Salazar Ramírez, M.L. Torregrosa e I. Zúñiga Pérez-Tejada (2006), *La gota de la vida: Hacia una gestión sustentable y democrática del agua*, México, Ediciones Böll.
- Escobar, A. (1995), *La invención del tercer mundo: Construcción y deconstrucción del desarrollo*, Caracas, Venezuela, Editorial El Perro y la Rana.
- Esteva, G. (1976), *El Estado y los medios*, México, Nueva Política.
- (2010), “From the Bottom-up: New Institutional Arrangements in Latin America”, *Development* 53(1): 64-69.
- (2014), “Commoning in the New Society”, *Community Development Journal* 49(1): i144-i159.
- y D. Barkin (1980), *La batalla en el México rural*, México, Siglo XXI Editores.
- Estrada, F., C. Martínez-López, C. Conde y C. Gay-García (2012), “The new national climate change documents of Mexico: What do the regional climate change scenarios represent?”, *Climatic Change* 110(3-4): 1029-1046.
- FAO (1967), *Agriculture and livestock production in Cuba*, Roma, FAO.
- Farley, J. (2012), “Ecosystem services: The economics debate”, *Ecosystem Services* 1(1): 40-49.
- Farley, M. (1997), *Small is (still) beautiful: Appropriate technology and the dry toilet in Morelos*, México, The University of Toronto.
- Feder, E. (1972), *The Rape of the Peasantry*, Nueva York, Doubleday.
- Fellner, W. (1958), *The problem of rising prices*, París, OECD.

- Fenbrenner, M.B. y H. Franklyn (1963), "A survey of inflation theory", *American Economic Review* 53(4): 593-661.
- Fernández Ortiz, L. y M. Tarrio García (1977), *Modernización de la agricultura campesina ejidal y dependencia económica*, México, Fondo de Cultura Campesina.
- Ferranti, D., Perry, W. Foster, D. Lederman y A. Valdes (2005), *Beyond the city: The rural contribution to development*, Washington, DC, World Bank, Latin American and Caribbean Studies.
- Findlay, R. (1968), "Efficient accumulation, international trade and the optimum tariff", *Oxford Economic Papers* 20(2): 208-217.
- Fine, B. (2001), *Social Capital versus Social Theory: Political economy and social science at the turn of the millennium*, Londres, Routledge.
- (2002), "Economic Imperialism: A view from the Periphery", *Review of Radical Political Economics* 34(2): 187-201.
- (2010), *Theories of Social Capital: Researchers Behaving Badly*, Londres, Pluto.
- Flipo, F. y F. Schneider (2008), *Economic De-growth for ecological sustainability and social equity*, París, First international conference on Economic De-growth for Ecological Sustainability and Social Equity.
- Fogelberg, K. (2013), "From Adopt-a-project to Permanent Services: The evolution of Water for People's approach to rural water supply in Bolivia", *Water Alternatives* 6(2), Art. 6.
- Food and Agriculture Organization of the United Nations (2000), *FAO Yearbook of Forest Products 1998*, Rome, FAO.
- Forest Stewardship Council (2008), *Manejo Forestal, Auditoria Anual 2008*, México, Unión de Comunidades Productoras Forestales Zapotecas-Chinantecas de la Sierra de Juárez de R.I. (UZACHI) en Sierra Juárez, Oaxaca.
- Foster, J.B. (1993), "Let them eat pollution: Capitalism and the world environment", *Monthly Review* 44(8): 10-20.
- , B. Clark y R. York (2010), *The Ecological Rift: Capitalism's War on the Planet*, Nueva York, Monthly Review.
- Fox, J. (1993), *The Politics of Food in Mexico: State power and social mobilization*, Ithaca, Cornell University Press.
- Francos, A. (1962), *La fete Cubaine*, París, R. Juliard.
- Frank, A.G. (1978), *Capitalismo y subdesarrollo en América Latina*, México, Siglo XXI Editores.
- Frey, S.R. (2001), *Environment and Society Reader*, Boston, Allyn and Bacon/Longman.
- Friedmann, J. (1992), *Empowerment: The politics of alternative development*, Nueva York, Basil Blackwell.
- y H. Rangan (1993), *In Defense of Livelihood: Comparative studies on environmental action*, West Hartford, CT, Kumarian Press.
- Frisch, H. (1977), "Inflation theory 1963-1975, A second generation survey", *Journal of Economic Literature* 15(4): 1289-1317.
- Fuente Carrasco, M. (2008), "¿La Economía Ecológica? ¿Un paradigma para abordar la sustentabilidad?", *Argumentos* 21(56): 75-99.

- Fuente Carrasco, M. (2009), “Nueva ruralidad comunitaria y sustentabilidad: contribuciones al campo emergente de la economía-ecológica”, *Revista Iberoamericana de Economía Ecológica* 13(4): 55-69.
- (2009), *Interculturalidad y conflictos ambientales distributivos. Procesos de construcción de nichos de sustentabilidad desde las comunidades de la Sierra Juárez de Oaxaca*, Tesis Doctoral en Ciencias Ambientales, Universidad Autónoma de Tlaxcala.
- y D. Barkin (2011), “Concesiones forestales, exclusión y sustentabilidad. Lecciones desde las comunidades de la Sierra Norte de Oaxaca”, *Desacatos* 37(7): 95-110.
- Fuente, M. y F. Ramos Morales (2013), “El ecoturismo comunitario en la Sierra Juárez-Oaxaca, México: Entre el patrimonio y la mercancía”, *Otra Economía. Revista Latinoamericana de Economía Social y Solidaria* 7(12): 66-79.
- , F. Ruiz y C. Aquino (2012), *Conocimiento indígena contemporáneo y patrimonio biocultural en la Sierra Juárez de Oaxaca*, Ixtlan, Oax., Universidad de la Sierra Juárez.
- Fuentes, C. (1978), *La cabeza de la Hidra*, México, Argos Vergara.
- Funtowicz, S.O. y J.R. Ravetz (2000), *La ciencia posnormal*, Barcelona, Icaria.
- y J.R. Ravetz (1993), “Science for the post-normal age”, *Futures* 25(7): 739-755.
- Furtado, Celso (1977), *La economía latinoamericana: Formación histórica y problemas contemporáneos*, México, Siglo XXI Editores.
- Gabriel, L. (2007), *Autonomies multiculturelles en Amérique Latine et ailleurs*, París, L'Harmattan.
- y G. López y Rivas (coords.) (2005), *Autonomías indígenas en América Latina: Nuevas formas de convivencia política*, México, Plaza y Valdés, UAM-I.
- Gallegos Espinosa, R. (1983), *Algunos aspectos del aguacate y su producción en Michoacán*, Texcoco, México, Universidad Autónoma de Chapingo.
- Gallopin, G.C. (1997), *Development and application of an integrated conceptual framework for tropical agroecosystem research based on complex systems theories*, Cali, Colombia, Centro Internacional de Agricultura Tropical.
- Gamble, A. y P. Walton (1977), *El capitalismo en crisis, la inflación y el Estado*, México, Siglo XXI Editores.
- García Canclini, N. (2001), *Culturas híbridas. Estrategias para entrar y salir de la modernidad*, México, Random House Mondadori.
- García Salazar, E.M. (2013), “Economía ecológica: Un análisis integral alternativo. El caso de la industria de la curtiduría en León Guanajuato”, Disertación doctoral en Ciencias Económicas, México, Universidad Autónoma Metropolitana.
- Garibay Orozco, C. (2005), *Comunalismos y liberalismos campesinos. Identidad comunitaria, empresa social forestal y poder corporado en el México contemporáneo*, Disertación doctoral, El Colegio de Michoacán, Zamora.
- Gay-García, C. y F. Estrada (2010), “Objective probabilities about future climate are a matter of opinion”, *Climatic Change* 29(1-2): 27-46.
- Georgescu-Roegen, N. (1971), *La ley de la entropía y el proceso económico*, Madrid, Fundación Argentaria/Visor.

- Georgescu-Roegen, N. (2010), *From bioeconomics to degrowth: Georgescu-Roegen's "New Economics" in eight essays*, editado por Bonaiutu, M. Londres, Routledge.
- Gintis, H. (1971), "Education, Technology and the Characteristics of Worker Productivity", *American Economic Review* 61(2): 266-279.
- Girard, A. (1967), números especiales de "Sociologie de la Education", *Revue Française de Sociologie* 8(1): 3-16.
- Glade, W. y C. Reilley (1993), *Inquiry at the Grassroots: An Inter-American Foundation reader*, Arlington, MD, Inter-American Foundation.
- Gobierno del Estado de Oaxaca (GEO) (2011), *Plan Estatal de Desarrollo del Estado de Oaxaca*, México, GEO.
- Gómez M., L. Galicia y R. Aguilar (2008), "Sensibilidad de grupos funcionales al cambio climático en la Sierra Norte de Oaxaca, México", *Investigaciones Geográficas. Boletín del Instituto de Geografía de la UNAM* 67: 76-100.
- y J. Palerm Viqueira (2015), "Abastecimiento por pipas de agua potable en el valle de Texcoco", *Agricultura, Sociedad y Desarrollo* 12(4): 567-586.
- González Butrón, M.A. y D. Barkin (2008), "Otra economía posible: Propuestas teóricas en construcción en América Latina y el Caribe frente a la economía de mercado", *PASOS* 139(1): 21-34.
- Gonzales, T. (2014), "Kawsay (Buen Vivir) y afirmación cultural: Pratec-Naca, un paradigma alternativo en los Andes", en Marañón, B. (ed.), *El Buen Vivir y descolonialidad: Crítica al desarrollo y la racionalidad instrumentales*, México, UNAM-Instituto de Investigaciones Económicas: 121-139.
- González Casanova, P. (1992), "Paradigmas y Ciencias Sociales", *Dialéctica* 15(12): 8-24.
- González Casanova, P. (1997), "La Teoría de la Selva", *La Jornada* en: <http://www.jornada.unam.mx/1997/03/06/perfil.html>.
- González de León, M. y V.M. Toledo (2011), *Metabolismos, Naturaleza e Historia: Hacia una teoría de las transformaciones socioecológicas*, Barcelona, Icaria.
- González, P.C. (1981), "La explotación forestal en México", *Revista del México Agrario* 14(4): 11-140.
- Goodland, R. y H.E. Daly (1993), "Why Northern income growth is not the solution to Southern poverty", *Ecological Economics* 8(2): 85-101.
- Gowdy, J.M. y S. Mesner (1998), "The Evolution of Georgescu-Roegen's Bioeconomics", *Review of Social Economy* LVI(2): 136-156.
- Gramsci, A. (1999 [1971]), *Selection from The Prison Notebooks*, editado y traducido por Q. Hoare y G.N. Smith, Londres, Lawrence & Wishart.
- Gregory, M. (1992), "Environmental, sustainable development, public participation, and the NAFTA: a retrospective", *Journal of Environmental Law and Litigation* 7(1): 99-174.
- Grieg-Gran, M. (2010), *Beyond Forestry: why agriculture is key to the success of REDD+*, Londres, IIED Briefing Paper.
- Grossman, G.M. y A.B. Krueger (1993), "Environmental impacts of a North American free trade agreement", en Garber, P.M. (ed.), *The Mexico-U.S. Free Trade Agreement*, Cambridge, MA, MIT Press: 13-56.

- Grupo Cubano de Investigaciones Económicas (1963), *Un estudio sobre Cuba; colonia, república, experimento socialista: Estructura económica, desarrollo institucional, socialismo y regresión*, Miami, University of Miami Press.
- Guevara, E. (1960), "Ponencia", *Obra Revolucionaria*, 18 de junio, núm. 11,
- (1962), "Ponencia", *Cuba Socialista*, Año II (7).
- Gunderson, L.H. y B. Pritchard (2002), *Resilience and the Behavior of Large-Scale Systems*, Washington, DC, Island Press.
- Gutelman, M. (1967), *L'Agriculture Socialisée Cuba: Enseignements et perspectives*, París, François Maspero.
- Gutiérrez, G. (1998), *Ética y economía en Adam Smith y Friedrich Hayek*, San José, Costa Rica, Departamento Ecuménico de Investigaciones.
- Hall, D., E. Lobina, V. Corral, O. Hoedeman, P. Terhorst, M. Pigeon y S. Kishimoto (2009), *Asociaciones público-públicas (PUP) para el suministro del agua*, Londres, ISP-TNI-PSIRU.
- Hallegatte, S., R.J. Colin Green, J. Nicholls y M. Corfee (2013), "Future Flood Losses in major Costal Cities", *Nature Climate Change* 3(2): 802-806.
- Hamilton, S., B.R. De Walt y D. Barkin (2003), "Household welfare in four rural Mexican communities: The economic and social dynamics of surviving national crises", *Mexican Studies/Estudios Mexicanos* 19(2): 433-462.
- Hansen, J. (2009), *Storms of My Grandchildren: The Truth about the Coming Climate Catastrophe and Our Last Chance to Save Humanity*, Nueva York, Bloomsbury.
- Hansen, W.L. (1970), "Income distribution and effects of higher education", *American Economic Review* 60(2): 335-340.
- y B. Weisbrod (1969), *Benefits, Costs and Finance of Higher Education*, Chicago, Markham.
- y B. Weisbrod (1970), "The search for equity in the provision and finance of higher education", en *Technical Reports Related to Background Study No. 11, Conferences on Policies for Educational Growth*, París, OCDE.
- Harbinson, F. y C. Myers (1964), *Education, Manpower and Economic Growth*, Nueva York, McGraw-Hill.
- Hardin, G. (1995[1968]), "La tragedia de los comunes", *Gaceta Ecológica*, 37 [Science 162(3859), 1243-1248], en <http://www2.inecc.gob.mx/publicaciones/gacetas/231/hardin.html>.
- Harris, J. (2000), *Rethinking Sustainability: Power, knowledge and institutions*, Ann Arbor, MI, University of Michigan Press.
- Harvey, D. (2005), *El nuevo imperialismo. Acumulación por desposesión*, Buenos Aires, CLACSO.
- Hecht, S.B. (1985), "Environment, development and politics: Capital accumulation and the livestock sector in eastern Amazonia", *World Development* 13(6): 663-684.
- Hernández Chávez, N. (2002), *El traspasio como factor de desarrollo económico en la comunidad indígena de Caltzontzin*, Tesis de Licenciatura, Escuela de Economía, Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo.
- Hernández Díaz, J. (2007), *Ciudadanías diferenciadas en un estado multicultural: los usos y costumbres en Oaxaca*, México, Siglo XXI Editores.

- Hernández Garciadiego, R. y G. Herrerías Guerra (2008), “El programa Agua para Siempre: 25 años de experiencia en la obtención de agua mediante la regeneración de cuencas”, en Paré, L.; D. Robinson y M. González Ortiz (eds.), *Gestión de cuencas y servicios ambientales. Perspectivas comunitarias y ciudadanas*, México, Instituto Nacional de Ecología.
- Hernández, L.E. (1985), *La productividad y el desarrollo industrial*, México, Centro de Investigación para la Integración Social.
- Hewitt de Alcántara, C. (1978), *La modernización de la agricultura mexicana, 1940-1970*, México, Siglo XXI Editores y UNRISD.
- Hidalgo-Capitán, A. y A. Cubillo-Guevara (2014), “Seis debates abiertos sobre el sumak kawsay”, *Iconos*, 48: 25-40.
- Hill, M. (2007), “Confronting Power Through Policy: On The Creation and Spread Of Liberating Knowledge”. *Journal of Human Development* 8(2): 259-282.
- Hinkelammert, F.J. (1996), *El Mapa del Emperador: Determinismo, caos, sujeto*, San José, Costa Rica, Departamento Ecuménico de Investigaciones.
- y H. Mora Jiménez (2005), *Hacia una economía para la vida*, San José, Costa Rica, Departamento Ecuménico de Investigaciones.
- Hinojosa, O. (1958), *Los bosques de México: relato de un despilfarro y una injusticia*, México, Instituto de Investigaciones Biomédicas, UNAM.
- Hintze, S. (2003), *Trueque y Economía Solidaria*, Buenos Aires, UNDP, 2003.
- Hirsch Hadorn, G., D. Bradley, C. Pohl, S. Rist y U. Wiesmann (2006), “Implications of Transdisciplinarity for Sustainability Research”, *Ecological Economics* 60(1): 119-128.
- Hirschman, A. (1962), *La estrategia del desarrollo económico*, México, Fondo de Cultura Económica.
- (1973), *Development projects observed*, Washington, DC, Brookings Institution Press.
- Holguín Quiñones, F. (1971), “Índice de Gini modificado para medir la desigualdad de estudios de la población”, *Revista Mexicana de Sociología* 33.
- Hollister, R. (1966), *A Technical evaluation of the first phase of the Mediterranean Regional Project*, París, OCDE.
- (1970), “Education and the distribution of income: some exploratory forays”, en *Conference on Policies for Educational Growth*, París, OCDE.
- Hornborg, A., J.R. McNeill y J. Martínez-Alier (eds.) (2007), *Rethinking environmental history: World-system history and global environmental change*, Lanham, MD, AltaMira Press.
- Howard, P. y T. Homer-Dixon (1998), “Environmental Scarcity and Violent Conflict: The case of Chiapas”, en Homer-Dixon, T. y J. Blitt (eds.), *Ecoviolence: Links Among Environment, Population and Security*, Lanham, MD, Rowman and Littlefield, Ch. 2.
- Huacuz, G. (1993), *Mujer indígena, mujer purepecha*, México, Equipo de Mujeres en Acción Solidaria, Cuadernos para la mujer: pensamiento y lucha.
- Huanacuni, F. (2011), *Buen Vivir/Vivir Bien. Filosofía, políticas, estrategias y experiencias*, Lima, Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas, CAOI.

- Huberman, L. y P. Sweezy (1969), *Socialism in Cuba*, Nueva York, Monthly Review Press.
- Ibarra, D. (1970), "Mercados, desarrollo y políticas económicas, perspectiva de la economía en México", en *El perfil de México en 1980, vol. I*, México, Siglo XXI Editores.
- Illich, I. (1971), *Deschooling society*, Nueva York, Random House, en http://www.mundolibertario.org/archivos/documentos/IvnIllich_lasociedaddescolarizada.pdf.
- ____ (1977), *Towards a History of Needs*, Nueva York, Pantheon Books.
- ____ (1986), *La alfabetización de la mentalidad. Un llamamiento a investigarla*, Cuernavaca, Tecnopolítica.
- ____ (1990), *El género vernáculo*, México, Joaquín Mortiz/Planeta.
- Illsley Granich, C. et al. (2007), "El Grupo de Estudios Ambientales, AC: Entre la acción social y la consolidación institucional", en Bebbington, A.J. (ed.), *Investigación y cambio social. Desafíos para las ONG en Centroamérica y México*, Guatemala, Escuela de Medio Ambiente y Desarrollo.
- Inglehardt, R. (2004), "Human beliefs and values: A cross-cultural sourcebook based on the 1999-2002 Values Surveys", estudio realizado en el Survey Research Center de la Universidad de Michigan, México, Siglo XXI Editores.
- Instituto Latinoamericano de Planificación Económica y Social (ILPES) y CEPAL (1976), *Ensayos sobre Planificación Regional del Desarrollo*, México, Siglo XXI Editores.
- Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (2009), *Perspectivas de la gestión del agua en México al año 2025*, Jiutepec, Morelos, Serie Estudios Prospectivos, IMTA.
- International Institute for the Environment and Development (2002), *Minería y Minerales de América del Sur en la Transición al Desarrollo Sustentable*, Londres, IIED.
- Isbister, J. (1971), "Urban employment and wages in a developing economy: The case of Mexico", *Economic Development and Cultural Change* 20(1): 24-46.
- Janecki, G. (1995), *Comercio internacional y medio ambiente: la discusión actual*, Santiago de Chile, Naciones Unidas y CEPAL.
- Janssen, M.A. y J.M. Anderies (2011), "Governing the Commons: Learning from field and laboratory experiments", *Ecological Economics* 70(9): 1569-1620.
- Jennings, B.H. (1988), *Foundations of international agricultural research: Science and politics in Mexican Agriculture*, Boulder, CO, Westview Press.
- Jiménez Torrecilla, N. y F.J. Martínez Gil (2004), "La nueva cultura del agua: Hacia un modelo sostenible de gestión hídrica", *Rolde: Revista de Cultura Aragonesa* 105-106(2): 17-32.
- Johnson, P. y D. Cooperrider (1991), "The Global Integrity Ethic: defining global social change organizations and the organizing principles which make trans-national organizing possible", *Associations Transnationales* 2(2): 90-102.
- Junta Central de Planificación (1961), *Compendio Estadístico*, La Habana.
- ____ (1964), *Boletín estadístico de Cuba*, La Habana.

- Kabeer, N. (1998), *Realidades trastocadas. Las jerarquías de género en el pensamiento de desarrollo*, México, Paidós.
- Kalecki, M. (1939), *Essays in the Theory of Economic Fluctuations*, Londres, Allen and Unwin.
- Kalecki, M. (1943), "Political Aspects of Full Employment", *Political Quarterly*, 14(4): 322-330.
- Kallis, G., F. Schneider y J. Martinez Alier (2010), "Growth, Recession or De-growth for Sustainability and Equity?", *Journal of Cleaner Production* 18(6): 511-606.
- Keesing, D. y A. Manne (1971), Labor force and skilled manpower projections for México, *Demografía y Economía* 5.
- Kettler, J. y G. Ramírez (1999), "Restauración ecológica a través de la autonomía local", en Aragon Durand, F. (ed.), *Los escenarios paradójicos del desarrollo*, México, Universidad Iberoamericana.
- Keynes, J.M. (1933), "National self-sufficiency". *The Yale Review* 22(2), 755-769.
- Kirchner, J. (1998), "Disinflation, Structural Change, and Distribution", *Review of Radical Political Economics*, 30(1): 53-89.
- Klein, N. (2014), *Esto Lo Cambia Todo: El capitalismo contra el clima*, Madrid, Paidós.
- Klooster, D. (2003), "Campesinos and Mexican forest policy during the Twentieth Century", *Latin American Research Review* 38(2): 94-126.
- Kovel, J. (2002), *The Enemy of Nature: The end of capitalism or the end of the world*, Londres, Zed Books.
- Krugman, P. (2009), *The return of depression economics and the crisis of 2008*, Nueva York, Norton & Company.
- La Jornada (1998), *Datos publicados el 9 de julio*, México.
- La Jornada Ecológica (1998), "El fuego ¿elemento purificador o factor de la deforestación?", *La Jornada Ecológica*, suplemento del 27 de julio.
- Lagarde, M. (1995), *La garantía de equidad política genérica: la 6a pregunta*, México, Convención Nacional de Mujeres en el Foro de Consulta por la Paz y la Democracia.
- Laidler, D.E.W. y Parkin (1975), "Inflation: A survey", *The Economic Journal* 85(340): 741-809.
- Lajous Vargas, A. (1968), *Aspectos de la educación superior y el empleo de profesionistas en México, 1959-67*, México, El Colegio de México.
- Lancaster, K.A. (1968), *Mathematical Economics*, Nueva York, Dover Publications.
- Lang, M. (ed.) (2013), *Alternativas al capitalismo/Colonialismo del siglo xxi*, Quito, Fundación Rosa Luxemburg-Grupo Permanente de Trabajo sobre Alternativas al Desarrollo.
- Lappe, F.M. y J. Collins (1977), *Food First. Beyond the myth of Scarcity*, Boston, Houghton-Mifflin.
- , J. Collins y P. Rosset (1998), *World Hunger: Twelve myths*, Nueva York, Grove Press.
- Latapi, P. (1971), "Sorpresa en el Censo de 1970", *Periódico Excélsior*, 13 de marzo.
- Latouche, S. (2009), *Pequeño tratado del decrecimiento sereno*, Barcelona, Icaria.
- Lazear, E.P. (2000), "Economic Imperialism", *The Quarterly Journal of Economics* 115(1): 99-146.

- Leff, E. (1995), *Green production: Toward an environmental rationality*, Nueva York, Guilford Press.
- Leff, E. (1998), *Saber ambiental: sustentabilidad, racionalidad, complejidad, poder*, México, Siglo XXI Editores-CIICH-PNUMA.
- (2004), *Racionalidad Ambiental: La reapropiación social de la naturaleza*, México, Siglo XXI Editores.
- (2006), *Aventuras de la Epistemología Ambiental*, México, Siglo XXI Editores.
- (2010), “Imaginarios sociales y sustentabilidad”, *Cultura y representaciones sociales* 5(9), 47-121.
- (2010), *Discursos Sustentables*, México, Siglo XXI Editores.
- (2014), *La apuesta por la vida. Imaginarios sociales e imaginación sociológica en los territorios ambientales del Sur*, México, Siglo XXI Editores.
- Lemus R., B.E. (1995), “Aguas Negras: Riqueza para unos, enfermedades para otros”, en Restrepo, I. (ed.), *Agua, Salud y Derechos Humanos*, México, Comisión Nacional de Derechos Humanos: 171-187.
- , B.E. (1999), “Bitter Sweetness: The health effects of privatization in a sugar mill in Mexico”, Disertación Doctoral en Medio Ambiente del Trabajo, University of Massachusetts, Escuela de Ingeniería, Lowell, MA.
- Leonard, H.J. (1989), *Environment and the Poor: Development strategies for a common agenda*, New Brunswick, NJ, Transaction Books.
- Levenstein, C. (ed.) (2008), *At the Point of Production: Social Analysis of Occupational and Environmental Health*, Amityville, NY, Baywood (Routledge).
- Lewis, W.A. (1972) [1954], “Desarrollo económico con oferta ilimitada de mano de obra”, en Flores, E. (ed.), *Desarrollo agrícola. Lecturas del Trimestre*, núm. 1, México, Fondo de Cultura Económica.
- Linck, T. (1988), *El campesino desposeído*, Michoacán, El Colegio de Michoacán.
- Linebaugh, P. (2013), *El Manifiesto de la Magna Carta: Comunes y libertades para el pueblo*, Madrid, Traficantes de Sueños.
- Lipset, S. M. (1966), “Élites, educación y función empresarial”, en Lipset, S.M. y A.E. Solari (eds.), *Élites y desarrollo en América Latina*, Buenos Aires, Paidós.
- Little, I., T. Scitovsky y M. Scott (1970), *Industry and Trade in Some Developing Countries*, Londres, Oxford University Press.
- Livernash, R. (1992), “The Growing Influence of NGOs in the Developing World”, *Environment: Science and Policy for Sustainable Development*, 34(5): 12-43.
- Lockhart, J. (1999), *Los nahuas después de la Conquista: historia social y cultural de los indios del México central, del siglo XVI al XVIII*, México, Fondo de Cultura Económica.
- Lohmann, L. (2006), *Carbon Trading: A Critical Conversation on Climate Change, Privatization and Power*, Londres, The Corner House/Dag Hammarskjöld Foundation (*Development Dialogue*, núm. 48).
- (2011), “Financialization, commodification and carbon: the contradictions of neoliberal climate policy”, en Panitch, L. (ed.), *The Crisis and the Left*, Londres, Merlin: Socialist Register.

- Lora, E. (2009), *Beyond Facts - Understanding Quality of Life*, Cambridge, MA, Harvard University Press for the Inter-American Development Bank y David Rockefeller Center for Latin American Studies, Harvard University.
- Lustig, N. (1987), "Crisis económica y niveles de vida en México: 1982-1985", *Estudios Económicos* 2(2): 227-249.
- Machado, A., Castillo e I. Suárez (1993), *Democracia con Campesinos, o Campesinos sin Democracia*, Bogotá, Ministerio de Agricultura-Fondo DRI-IICA y Universidad del Valle.
- Magdoff, F. y J.B. Foster (2010), "What Every Environmentalist Needs to Know About Capitalism", *Monthly Review* 61(10): 20
- Maier, E. (1998), *Género Femenino, Pobreza Rural y Cultura Ecológica*, México, Potrilllos Editores y ECOSUR.
- Margin, S. (1974), "What do bosses do? The origins and functions of hierarchy in capitalist production", *Review of Radical Political Economics* 6(2): 33-60.
- Mariotti, D. et al. (2007), *Tiempos de rebelión: "Que se vayan todos". Calles y plazas en la Argentina: 2001-2002*, Buenos Aires, GEMSAL.
- Martínez Alier, J. (1991), "Ecology and the poor: A neglected dimension of Latin American history", *Journal of Latin American Studies* 23(3): 621-639.
- (1992), *De la Economía Ecológica al Ecologismo Popular*, Barcelona, Montevideo, Icaria, Nordan.
- (1995), *De la Economía Ecológica al Ecologismo Popular*, Barcelona, Icaria.
- (2004), *El ecologismo de los pobres. Conflictos ambientales y lenguajes de valoración*, Barcelona, Icaria-Antrazyt-FLACSO.
- (2004a), "Los conflictos ecológicos-distributivos y los indicadores de sustentabilidad", *Revista Iberoamericana de Economía Ecológica*, núm. 1: 21-30.
- (2006), "Los conflictos ecológico-distributivos y los indicadores de sustentabilidad", *Revista Polis* 5(13): 2-12.
- Martínez Austria, P.F. (2007), *Efectos del cambio climático en los recursos hídricos de México*, Jiutepec, Morelos, IMTA.
- Martínez de Navarrete, I. (1972), "La distribución del ingreso en México: tendencia y perspectivas", en Ibarra, D., J. Martínez Ríos y J. Basurto (eds.), *El perfil de México en 1980 - vol. 1*, México, Siglo XXI Editores: 17-71.
- Martínez Luna, J. (2003), *Comunalidad y Desarrollo*, México, Conaculta y CAMPO, A.C.
- (2010), *Eso que llaman comunalidad*, México, Conaculta.
- Marx, K. (1974), "Introducción", en Marx, K., *Elementos fundamentales para la crítica de la economía política*, México, Siglo XXI Editores: 123 ss.
- Marx, K. (1975), *El Capital*, 8 vols., México, Siglo XXI Editores.
- Massey, D.S. y E. Parrado (1994), "Migrant dollars: The remittances and savings of Mexican migrants", *Population Research and Policy Review* 13(1): 3-30.
- Mathews, A.S. (2011), *Instituting nature: Authority, expertise, and power in Mexican forest*, Cambridge, MA, MIT Press.
- Max-Neef, M.A., A. Elizalde y M. Hopenhayn (1998), *Desarrollo a Escala Humana. Conceptos, Aplicaciones y Algunas Reflexiones*, Montevideo, Barcelona, Nordan, Icaria.

- McAfee, K. (2012), "The Contradictory Logic of Global Ecosystem Services Markets", *Development and Change* 43(1): 105-131.
- McCully, P. (2004), *Ríos silenciados: Ecología y política de las grandes represas*. 2^a. ed., Buenos Aires, Proteger, Amigos de la Tierra.
- McDermott, M. (ed.) (2014), "Introduction", *Community Development Journal*, 49(1): i1-i11.
- McKibben, B. (2011), *The Global Warming Reader*, Nueva York, OR Books.
- Meade, J. (1964), *Efficiency, Equality and the ownership of property*, Londres, Allen and Unwin.
- Mendoza, M.R. (1976), "La política forestal en el sector ejidal", *Revista del México Agrario* 9(2): 35-70.
- Mesa-Lago, C. (1969), "Availability and Reliability of Statistics in Socialist Cuba", *Latin American Research Review* 4(2): 47-81.
- ____ (1969), "The Revolutionary Offensive", *Transacion* 6(6): 22-29.
- Mincer, J. (1970), "The distribution of labor incomes: A survey with special reference to the human capital approach", *Journal of Economic Literature* 8(1): 1-26.
- Mir, A. (1971), "Determinantes económicos de las desigualdades interestatales en logros educativos en México", *Revista del Centro de Estudios Educativos* 1.
- Mitchell, R.E. (2006), "Environmental Governance in Mexico: Two Case Studies of Oaxaca's Community Forest Sector", *Journal of Latin American Studies* 38(3): 519-548.
- ____ (2008), "El ejercicio de la democracia en dos comunidades forestales de la Sierra Norte de Oaxaca, México", *Desacatos* 27(1): 149-168.
- Montefrio, M.J.F. y D. Sonnenfeld (2011), "Forests, Food, or Fuel? Competing Coalitions and Biofuels Policymaking in the Philippines", *Journal of Environment and Development* 20(1): 27-49.
- Mooney, R.P. (2002), *El siglo ETC; Erosión, transformación tecnológica y concentración corporativa en el siglo XXI*, Montevideo, Uruguay, Grupo ETC, Dag Hammarskjöld Foundation y Nordan.
- Moyo, S. y P. Yeros (2008), *Recuperando la tierra. El resurgimiento de movimientos rurales en África, Asia y América Latina*, Buenos Aires, Zed/ CLACSO.
- Mumme, S.P. (1992), "Environmentalists, NAFTA, and North American Environmental Management", *Journal of Environment and Development* 2(1): 258-306.
- Muñoz Ramírez, G. (2003), *10 y 20: El Fuego y La Palabra*, México, Revista Rebeldía/La Jornada Libros.
- Muñoz, H., O. Oliviera y C. Stern (1971), *Migración y marginalidad ocupacional en la ciudad de México*, México, Siglo XXI Editores.
- Myers, C. (1965), *Education and National Development in Mexico*, Princeton, Industrial Relation Section, Princeton University.
- Nación Purhépecha (1993), "Decreto", en Huacuz, G., *Mujer indígena Mujer purhépecha*, Cuadernos para la Mujer, Serie Pensamiento y Lucha, núm. 12. Morelia, EMAS-CEMIF.
- Naciones Unidas (1970), *La distribución del ingreso en América Latina*, Nueva York, ONU.

- Navarrete, J.E. (1971), *México: la política económica del nuevo gobierno*, México, Banco Nacional de Comercio Exterior.
- Navarro, S. y R. Bessi (2014), *Across Latin America, a Struggle for Communal Land and Indigenous Autonomy*:<http://www.truth-out.org/news/item/24981-across-latin-america-a-struggle-for-communal-land-and-indigenous-autonomy>, 1 de agosto de 2014.
- Ness, I. y D. Azzellini (eds.) (2011), *Ours to Master and to Own: Workers' Control from the Commune to the Present*, Chicago, Haymarket Books.
- Norberg-Hodge, H., S. Gorelick y J. Page (2011), *The Economics of Happiness*, Australia, Local Futures.
- Nordhaus W.D., N. Kaldor, A. Greenspan y W. Brainard (1974), "The falling share of profits", *Brookings Papers on Economic Activity*, 1974(1): 169-217.
- Norgaard, R.B. (1989), "The Case for Methodological Pluralism", *Ecological Economics* 1(1): 37-57.
- Noyola, J. (1948), "¿Existe una política de precios?", *Revista de Economía* XI(8): 9-10.
- (1956), "El desarrollo económico y la inflación en México y otros países latinoamericanos", *Investigación Económica* 16: 603-648.
- y G.D. López Rosado (1951), "Los salarios reales en México. 1939-1950", *El Trimestre Económico* 18(1): 201-209.
- Núñez, O. (1993), *Desarrollo sostenible y economía campesina*, Managua, Centro Para la Promoción, la Investigación y el Desarrollo Rural y Social-CIPRES.
- (1998), *El manifiesto asociativo y autogestionario*, Managua, Centro Para la Promoción, la Investigación y el Desarrollo Rural y Social.
- Nurkse, R. (1963), *Problems of Capital Formation in Underdeveloped Countries*, Nueva York, Oxford University Press.
- O'Connor, J. (1989), "Political Economy of Ecology of Socialism and Capitalism", *Capitalism Nature Socialism* 1(3): 93-106.
- (2001), *Causas Naturales: Ensayos en marxismo ecológico*, México, Siglo XXI Editores.
- O'Hara, P. (ed.) (2011), "Stanfield's Concepts of Social and Political Economy", *Forum for Social Economics* 40(1): 1-5.
- Olivares, R. y R. Sandoval Minero (2008), *El agua potable en México - historia reciente, actores, procesos y perspectivas*, México, ANEAS.
- Organización de Estados Americanos, Comité sobre Asuntos Jurídicos y Políticos (oas-CJPA) (2003), "Traditional Forms of Ownership and Cultural Survival, Right to Land and Territories", en *Working Group to Prepare the Draft American Declaration on the Rights of Indigenous Peoples* (oae/Ser.K/XVI, GT/ 327Gobernanza ambiental en América Latina DADIN/doc.113/03 rev. 1, 20 de febrero) en <http://www.oas.org/council/CAJP/Indigenous%20documents.asp#2003>, 10 de septiembre de 2014.
- Ortiz Mena, A. (1970), "Desarrollo Estabilizador: Una década de estrategia económica en México", *El Trimestre Económico* 37(2)(146): 417-449.
- (1998), *El desarrollo estabilizador*, México, Fondo de Cultura Económica.

- Ortiz Rendón, G.A., F. Cruz y J.C. Valencia (1998), "Aspectos relevantes de la política del agua en México, en el marco de desarrollo sustentable", Ponencia presentada en Conferencia Internacional "Agua y Desarrollo sostenible", París, Oficina Internacional del Agua.
- Ostrom, E. (1985), "Are Successful Efforts to Manage Common-Pool Problems a Challenge to the Theories of Garret Hardin and Mancur Olson?", *Working Paper, Workshop in Political Theory and Policy Analysis*, Indiana University.
- _____. (1986), "An Agenda for the Study of Institutions", *Public Choice*, 48(1): 3-25.
- _____. (1993), *Institutional Incentives and Sustainable Development: Infra-structure policies in perspective*, Boulder, CO, Westview.
- _____. (2000 [1990]), *El gobierno de los bienes comunes. La evolución de las instituciones de acción colectiva*, México, FCE/ Semarnap.
- _____. T. Dietz, N. Dolsak, P.C. Stern, S.C. Stonich y E.U. Weber (2002), *The Drama of the Commons*, Washington, DC, National Academy Press.
- Palerm, A. (1969), *Planeamiento integral de la educación en México*, México, Centro Nacional de Productividad.
- Panikkar, R. (1979), *Myth, Faith and Hermeneutics*, Ramsey, Paulist Press.
- _____. (1995a), *Invisible Harmony: Essays on Contemplation & Responsibility*, Minneapolis, Fortress Press.
- _____. (1995b), *Cultural Disarmament: The way to peace*, Louisville, W. J. Knox Press.
- Pearce, D. y J. Warford (1993), *World without end: Economics, environment and sustainable development*, Washington, DC, World Bank.
- Pen, J. (1971), *Income Distribution: Facts, Theories, Policies*, Londres, Penguin Books.
- Perelman, M. (2006), *Railroading Economics: The creation of the free market mythology*, Nueva York, Monthly Review Press.
- Pérez, E., M.A. Farah y H. De Grammont (2001), *La Nueva Ruralidad en América Latina*. Bogotá, Pontifícia Universidad Javeriana.
- Peters-Stanley, M., K. Hamilton, T. Marcello y M. Sjardin (2011), *Back to the Future: State of the Voluntary Carbon Markets*, Washington, DC, Forest Trends.
- Phelan, L., A. Henderson-Sellers y R. Taplin (2013), "The Political Economy of Addressing the Climate Crisis in the Earth System: Undermining Perverse Resilience", *New Political Economy* 18(2): 198-226.
- Piñeiro Harnecker, C. (2011), *Cooperativas y Socialismo: Una mirada desde Cuba*, La Habana, Editorial Caminos.
- Podolinsky, S.A. (1880 [1995]), "El trabajo del ser humano y su relación con la distribución de la energía", en Martínez Alier, J. (ed.), *Los principios de la Economía Ecológica*, Madrid, Argentaria-Visor: 63-142.
- Pohl, C., S. Rist, A. Zimmermann, P. Fry, G.S. Gurung, F. Schneider, C.I. Speranza, B., Kiteme, S. Boillat, E. Serrano, G.H. Hadorn y U. Wiesmann (2010), "Researchers' roles in knowledge co-production: Experience from sustainability research in Kenya, Switzerland, Bolivia and Nepal", *Science and Public Policy* 37(4): 267-281.
- Polanyi, K. (2003 [1944]), *La Gran Transformación: Los orígenes políticos y económicos de nuestro tiempo*, México, Fondo de Cultura Económica.

- Pollit, B. (1971), "Problemas del empleo y el desarrollo económico en Cuba", *Comercio Exterior* 21(5): 414-423.
- Posada, M. e Velarde (2000), "Estrategias de desarrollo local a partir de productos alimenticios típicos: el caso del vino de la costa en Buenos Aires, Argentina", *Revista Latinoamericana de Economía* 121 (31): 63-84.
- Prebisch, R. (1950), *El desarrollo económico de América Latina y sus principales problemas*, Santiago de Chile, CEPAL.
- (1959), "Commercial Policy in the Underdeveloped Countries", *American Economic Review* 49(2): 251-273.
- Prieto Vázquez, J. (1969), "La distribución del ingreso en México", *Comercio Exterior* 19(9): 686-696.
- Puente Leyva, J. (1969), *Distribución del ingreso en un área urbana: El caso de Monterrey*, México, Siglo XXI Editores.
- Quintas, I. y M. Rosengauss (2011), "Disponibilidad de agua frente al cambio climático", presentado en XXIII Congreso Nacional del Agua del 22 al 25 de junio, Chaco, Argentina.
- Ramírez de la O, R. (1980), "Industrialización y sustitución de importaciones en México", *Comercio Exterior* 30(1): 31-37.
- Ramsey, F. P. (1928), "A Mathematical theory of savings", *Economic Journal* 38: 358-559.
- Ranis, G. y Fei (1965), "Economic Development in a Labor Surplus Economy", *The Pakistan Development Review* 5(2): 271-294.
- Ravetz, J.R. y S.O. Funtowicz (1999), "Post-Normal Science - an insight now maturing", *Futures* 31(3): 641-646.
- Razeto, M.L. (1993), *De la economía popular a la economía de solidaridad, en un proyecto de desarrollo alternativo*, México, Diálogos y Autocrítica, IMDOSOC.
- Rebón, J. (2004), *Desobedeciendo al desempleo: La experiencia de las empresas recuperadas*, Buenos Aires, Picasso/La Rosa Blindada.
- Red Interamericana de Agriculturas y Democracia (RIAD) (1993), *¿Qué es la agricultura sustentable?*, México, Grupo de Estudios Ambientales y RIAD.
- Redclift, M. (1981), *Development policy making in México: The sistema alimentario mexicano (SAM)*, La Jolla, CA, Program in United States-Mexican Studies, University of California at San Diego.
- Regino Montes, A. (1999), "Los pueblos indígenas: diversidad negada en Chiapas", *Revista Chiapas*: 7: 21-44.
- Restrepo, I. (1976), "La transferencia de recursos a la agricultura", *El Economista Mexicano* 11(3).
- (1984), *Las truchas: ¿Inversión para la desigualdad?*, México, Centro de Ecodesarrollo y Océano.
- (1995), *Agua, Salud y Derechos Humanos*, México, Comisión Nacional de Derechos Humanos.
- y Eckstein, S. (1976), *La agricultura colectiva en México*, México, Siglo XXI Editores.
- y Sánchez, J. (1969), "Arrendamiento de tierras ejidales: el caso de Apatzingán", *Revista del México Agrario* 3(1): 37-58.

- Reyes Osorio, S. (coord.) (1966), *Estructura agraria y desarrollo agrícola en México*, México, Fondo de Cultura Económica para el Centro de Investigaciones Agrarias.
- Rifkin, J. (2011), *The Third Industrial Revolution; How Lateral Power is Transforming Energy, the Economy, and the World*, Londres, Palgrave, Macmillan.
- Rist, G. (2014), *The History of Development: From Western origins to global faith*, Londres, Zed Books.
- Rivera Borbon, C. (1970), *El gasto del gobierno federal mexicano a través de la Secretaría de Educación Pública*, México, Secretaría de Educación Pública.
- Roberts, J.T. y B.C. Parks (2009), "Ecologically Unequal Exchange, Ecological Debt, and Climate Justice: The History and Implications of Three Related Ideas for a New Social Movement", *International Journal of Comparative Sociology* 50(3-4): 385-409.
- Robinson, J. (1977), "What are the questions?", *Journal of Economic Literature* 15(4): 1318-1339.
- Robles Hernández, S. y R. Cardoso Jiménez (2008), *Floriberto Díaz. Escrito: Comunalidad, energía viva del pensamiento mixe*, México, UNAM, Programa Universitario México Nación Multicultural, La Pluralidad Cultural en México, 14.
- Rockström, J. et al. (2009), "Planetary boundaries: Exploring the safe operating space for humanity", *Ecology and Society* 14(2), art. 32.
- Rodwin, L. y Schön, D.A. (1994), *Rethinking the Development Experience: Essays provoked by the work of Albert O. Hirschman*, Washington, DC y Boston, Brookings y Lincoln Institute.
- Rogoff, N. (1961), "Local social structure and educational selection", en Halsey, A.H., J. Floud y C.A. Anderson (eds.), *Education, Economy and Society*, Nueva York, Free Press, pp. 241-251.
- Ropke, I. (2004), "The early history of modern ecological economics". *Ecological Economics* 50(3-4): 293-314.
- (2005), "Trends in the development of ecological economics from the late 1980s to the early 2000s", *Ecological Economics* 55(2): 262-290.
- Rosenstein-Rodan, P. (1943), "Problems of industrialization in Eastern and South-Eastern Europe", *Economic Journal* 53(210-211): 202-211.
- Rosset, P. (2013), "Re-thinking agrarian reform, land and territory in La Vía Campesina", *Journal of Peasant Studies*, 40(4): 721-775.
- Rozo C. y D. Barkin (1983), "La producción de alimentos en el proceso de internalización de capital", *El Trimestre Económico* 53(199): 1603-1626.
- Rubio-Fabian, R., J.V. Aguilar Guillén y J. Arriola Palomares (1994), *Bases para la construcción de un nuevo proyecto económico nacional para El Salvador*, San Salvador, Salvador, Fundación Nacional para el Desarrollo (Funde).
- Rubio, B. (2001), *Explotado y excluidos: los campesinos latinoamericanos en la fase agroexportadora neoliberal*, México, Plaza y Valdés, Universidad Autónoma Chapingo.
- Rudas Lleras, G. (1995), "Uso del Agua e Incentivos Económicos para la Conservación de Cuencas Hidrográficas", *Cuadernos de Desarrollo Rural*, 34: 7-23.

- Rudiño, L. (2008), “Prodeplan: ¿Fábrica de bosques?”, *La Jornada del Campo*, 11 marzo.
- Ruggeri, A. (2013), *Cuadernos para la Autogestión*, Buenos Aires, Chilavert.
- Rzedowski, J. y C.R. Palacios (1977), “El bosque de Engelhardtia (*Oreomunnea*) mexicana en la región de la Chinantla (Oaxaca, México): una reliquia del Cenozoico”, *Boletín de la Sociedad Botánica de México* 36: 93-123.
- Sahlins, M. (1972 [1983]), *Economía de la Edad de Piedra*, Madrid, Akal.
- Sánchez Vázquez, A. (2003), *Filosofía de la praxis*, México, Siglo XXI Editores.
- Santiago, E. (2001), “Desarrollo y sustentabilidad”, *Revista Digital: Unidad y Diversidad*.
- Santos, B. de Sousa (2009), *Una epistemología del Sur: La reinvenCIÓN del conocimiento y la emancipación social*, México, Siglo XXI Editores/CLACSO.
- Saraceno, E. (1994), “The modern functions of small farm systems: An Italian experience”, *Sociología Ruralis* 34(4): 308-328.
- Satterthwaite, D., G. McGranahan y D. Mitlin (2005), *Community-driven development for water and sanitation in urban areas. Its contribution to meeting the Millennium Development Goal targets*, Ginebra, Water Supply and Sanitation Collaborative Council.
- Schmidt, A. (1976), *El concepto de naturaleza en Marx*, México, Siglo XXI Editores.
- Schminck, M., J.R. Jouve-Martin, K. Broad y A. Hall (2011), “Contemporary Debates on Ecology, Society, and Culture in Latin America”, *Latin American Research Review* 46 (Especial): 3-217.
- Schneider, M. y P. McMichael (2010), “Deepening, and repairing, the metabolic rift”, *Journal of Peasant Studies* 37(3): 461-484.
- Schoijet, M. (2008), *Límites del crecimiento y cambio climático*, México, Siglo XXI Editores.
- Schrödinger, E. (1994 [1944]), *¿Qué es la vida?*, Salamanca, Universidad de Salamanca.
- Schroyer, T. (1997), *A World that Works: building blocks for a just and sustainable society*, Lanham, Rowman & Littlefield.
- Schumacher, E.F. (1973), *Lo pequeño es bonito*, Madrid, Akal.
- Scitovsky, T. (1954), “Two concepts of external economies”, *Journal of Political Economy* 62(2): 143-151.
- (1959), “Growth-Balanced or Unbalanced”, en Abramovitz , M. (ed.), *The Allocation of Economic Resources*, Palo Alto, CA, Stanford: 207-217.
- Secretaría de Agricultura y Ganadería y Banco de México (1976), *Memoria del seminario de ganadería tropical: Desarrollo en general de la ganadería de los trópicos*, Acapulco, México, FIRA, Banco de México.
- Secretaría del Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca (1998), *Los incendios forestales de 1998*, México, Semarnap.
- Selowsky, M. (1967), “Education and Economic Growth: Some international comparisons”, *Economic Development Report* núm. 83, University of Chicago, Department of Economics.
- Sen, A. (1981), *Poverty and Famines: An essay on entitlement and deprivation*, Oxford, Oxford University Press.

- Sen, A. (1992), *Inequality Reexamined*, Cambridge, MA, Harvard University Press.
- ____ (2001), *On Ethics and Economics*, Nueva York, Oxford University Press.
- Servicios Ambientales de Oaxaca (SAO) (2010), *Beneficios sociales, ambientales y económicos, generados con la venta de bonos de carbono del mercado voluntario; y Evaluación del potencial de captura de carbono en comunidades indígenas y campesinas del Estado de Oaxaca*, Oaxaca, Conafor-PROCYMAF.
- Sheahan, J. (1958), "International specialization and the concept of balanced growth", *Quarterly Journal of Economics* 72(2): 183-197.
- Sheahan, J. (1971), "Innovación y empleo", *Demografía y Economía* 5.
- Silvado, S da Costa, L. Heller, L.R. Santos Moraes, P. Campos Borja, C. Henrique de Melo y D. Sacco (2006), *Experiências de exito em serviços públicos municipais de saneamento*, Brasília, ASSEMAE - Associação Nacional dos Serviços Municipais de Saneamento. Resumen disponible en: www.waterjustice.org/uploads/attachments/109doc.doc.
- Silverman, B. (1973), "Organización económica y social: Algunos dilemas", en Barkin, D. y N. Manitzas (comps.), *Cuba: Camino Abierto*, México, Siglo XXI Editores, cap. 4: 141-185.
- Simonian, L. (1995), *La Defensa de la Tierra del Jaguar*, México, CONABIO.
- Sitrin, M. (2005), *Horizontalidad: Voces de Poder Popular en Argentina*, Buenos Aires, Chilavert.
- Smith, L. (2012 [1999]), *Decolonizing Methodologies: Research and indigenous peoples*, Londres, Zed Books.
- Solares, M. (1983), *Manual práctico: el cultivo del aguacate*, México, Editores Mexicanos Unidos.
- Spash, C.L. (2012), "New foundations for ecological economics", *Ecological Economics* 77(2): 36-47.
- ____ (2012), "Towards the integration of social, ecological and economic knowledge", en Gerber, J.F. y R. Steppacher (eds.), *Towards an Integrated Paradigm in Heterodox Economics*, Basingstoke, UK, Palgrave Macmillan: 26-46.
- Stanford, L. (1999), "Dimensiones sociales de la organización agrícola: La producción de aguacate en Michoacán", en Cartón de Grammont, H., M.A. Gómez Cruz, H. González y R., Schwentesius Rindermann (eds.), *Agricultura de exportación en tiempos de globalización: El caso de las hortalizas, frutas y flores*, México, CIESTAAM y Juan Pablos Editor: 211-252.
- Stavenhagen, R. (1968), *Neolatifundismo y explotación*, México, Nuestro Tiempo.
- ____ (2008), *Los Pueblos Indígenas y sus Derechos*, París, UNESCO.
- Stephen, L. y C.R. Hale (eds.) (2013), *Otros Saberes: Collaborative Research on Indigenous and Afro-Descendant Cultural Politics*, Santa Fe, SAR Press/LASA.
- Stern, S., S. Nicholas, D. Dietz, D. Anderson, A. Zenghelis y C. Taylor (2007), *Stern Review on the Economics of Climate Change*, Londres, HM Treasury.
- Stiefel, M. y M. Wolfe (1994), *A Voice for the Excluded: Popular participation in development*, Londres, Zed Books y United Nations Research Institute for Social Development.
- Streeten, P. (1959), "Unbalanced Growth", *Oxford Economic Papers* 11(2): 167-190.

- Suárez, B. y D. Barkin (1990), *Porcicultura: La producción de traspato: otra alternativa*, México, Océano.
- Sullivan, D. (1997), “Trends in real wages growth”, *Chicago Fed Letter* 115(4): 1-4.
- Sunkel, O. (1991), *El Desarrollo Desde Adentro: Un enfoque neoestructuralista para la América Latina*, México, Fondo de Cultura Económica.
- Swan, S., R. McNally, M. Grieg-Gran, D. Roe y E.Y. Mohammed (2010), *Options for promoting high biodiversity REDD+*, Londres, IIED.
- Tagle Zamora, D. (2011), *Economía Ecológica: Un paradigma alternativo para enfrentar los problemas de asignación de recursos: El caso de la economía del agua*, Disertación Doctoral en Ciencias Económicas, Universidad Autónoma Metropolitana, México.
- y D. Barkin (2008), “Permisos de Intercambio en el Contexto de la Nueva Cultura del Agua y el Marco Directivo Europeo de Aguas: Lecciones de la experiencia mexicana”, en Orozco Hernández, M.E., G.M. Suárez Díaz, J.R. Calderón Maya, H. Campos Alanís y N. Hernández Ramírez (eds.), *Escenarios de gestión del espacio urbano y regional en México*, Toluca, México, Gobierno del Estado de México/Secretaría de Desarrollo Metropolitano: 125-146.
- Tanzer, M. (1975), *Energéticos y Política Mundial*, México, Nuestro Tiempo.
- Taylor, W.B. (1972), *Landlord and Peasant in Colonial Oaxaca*, California, Stanford University Press.
- Tello, C. (1971), “Un intento de análisis de la distribución personal del ingreso en México”, en Wionczek, M., *Disyuntivas Sociales: Presente y futuro de la sociedad*, México, SepSetentas.
- (1979), *La política económica en México 1970-1976*, México, Siglo XXI Editores.
- Tendler, J. (1993), “Tales of dissemination in small-farm agriculture: Lessons for institution builders”, *World Development* 21(10): 1567-1582.
- Tenet, G. (2000), *Global Trends 2015: A Dialogue about the Future with Nongovernment Experts*, Washington, National Intelligence Council.
- Thomas, C.Y. (1974), *Dependence and Transformation: The economics of the transformation to socialism*, Nueva York, Monthly Review.
- Thompson, E.P. (2014 [1959]), “Commitment in Politics”, en Winslow, C. (ed.), *E. P. Thompson and the Making of the New Left*, Londres, Lawrence & Wishart.
- Tobin, J. (1974), *The New Economics: One Decade Older*, Princeton, NJ, Princeton University Press.
- Toledo, V.M. (2000), *La Paz en Chiapas: ecología, luchas indígenas y modernidad alternativa*, México, UNAM y Quinto Sol.
- (2005), “Repensar la conservación: ¿Áreas naturales protegidas o estrategia bioregional?”, *Gaceta Ecológica* 79: 67-83.
- (2008), “Metabolismos rurales: hacia una teoría económico-ecológica de la apropiación de la naturaleza”, *Revista Iberoamericana de Economía Ecológica* 7(1): 1-26.
- (2014), “México: la batalla final es civilizatoria”, en *La Jornada*, México, UNAM, serie de 4 artículos: 22 de julio, 5 de agosto, 2 de septiembre y 30 de septiembre.

- y B. Ortiz Espejel (2014), *México, Regiones que Caminan hacia la Sustentabilidad: Una geopolítica de las resistencias bioculturales*, Puebla, Universidad Iberoamericana, Campus Puebla/Conacyt.
- y M. González de Molina (2011), “El Metabolismo entre la Sociedad y la Naturaleza”, en Toledo, V.M. y M. González de Molina (eds.), *Metabolismos, Naturaleza e Historia: Hacia una teoría socio-ecológica del cambio histórico*, Barcelona, Icaria: 113-156.
- y N. Barrera Bassols (2008), *La memoria biocultural: La importancia ecológica de las sabidurías tradicionales*, Barcelona, Icaria.
- , D. Garrido y N. Barrera-Bassols (2013), “Conflictos Socio-Ambientales, Resistencias Ciudadanas y Violencia Neo-Liberal en México”, *Ecología Política*, 46: 115-124.
- Tortosa, J.M. (2011), *Maledesarrollo y mal vivir: Pobreza y violencia a escala mundial (Un análisis crítico sobre las tendencias del desarrollo convencional y la categoría del maledesarrollo)*, Quito, Abya Yala, Universidad Politécnica Salesiana/Fundación Rosa Luxemburg.
- Trejo Reyes, S. (1970), “El incremento de la producción y el empleo industrial en México, 1950-1965”, *Demografía y Economía* 4.
- (1971), *Industrialization and employment growth in Mexico 1950-1965*, Disertación Doctoral, Yale University, Department of Economics.
- (1983), “La concentración industrial en México. El tamaño mínimo eficiente y el papel de las empresas”, *Comercio Exterior* 33(8): 706-715.
- Tressell, R. (2013 [1914]), *Los filántropos en harapos*, Madrid, Capitan Swing.
- Turrent Fernández, A., T.A. Wise y E. Garvey (2012), *Factibilidad de alcanzar el potencial productivo de maíz de México*, Medford, MA, Global Development and Environment Working Paper 12-03, Tufts University.
- Umlas, E. (1998), “Environmental Networking in Mexico: The Comité Nacional para la Defensa de los Chimalapas”, *Latin American Research Review* 33 (3): 161-187.
- UNESCO (2013), *The World Social Science Report 2013*, París, ISSC/UNESCO/OECD.
- Unikel, L. (1968), “Ensayo sobre una nueva clasificación de población rural y urbana en México”, *Demografía y Economía* 2.
- y E. Victoria (1970), “Medición de algunos aspectos del desarrollo socio-económico de entidades federativas en México, 1940-1960”, *Demografía y Economía* 4.
- Union for Radical Political Economics (1977), *U.S. Capitalism in Crisis*, Nueva York, URPE.
- United Nations (1968), *Statistical Yearbook*, Nueva York, UN.
- United Nations Environment Program (UNEP) (2011), *Towards a Green Economy: Pathways to Sustainable Development and Poverty Eradication - A Synthesis for Policy Makers*, Nairobi, UNEP.
- United Nations, Economic Commission for Latin America. (1963), *Economic Survey of Latin America, 1963*, Nueva York, UN.
- Utting, P. (2002), *The Greening of Business in the South: Rhetoric, Practice and Prospects*, Londres, Zed Press.

- Vachon, R. (1995), "Guswenta or the Intercultural Imperative: Towards a Re-enacted Peace Accord between the Mohawk Nation and the North American Nation-States (and their Peoples)", *Interculture Journal*, 28(2, 3, 4): 127-129.
- Van Dam, C. (2011), "Indigenous Territories and REDD in Latin America: Opportunity or Threat?", *Forests* 2(1): 394-414.
- Vergara-Camus, L. (2009), "The MST and the EZLN struggle for land", *Journal of Agrarian Change* 9(3): 365-393.
- Vergara (2014), *The MST, the Zapatistas and Peasant Alternatives to Neoliberalism*, Londres, Zed Books.
- Venkateswar, S. y E. Hughes (2011), *The Politics of Indigeneity, Dialogues and Reflections on Indigenous Activism*, Londres, Zed.
- Villoro, L. (1996), *Los grandes momentos del indigenismo en México*, México, El Colegio de México, El Colegio Nacional, Fondo de Cultura Económica.
- Vergara (2001), *De la Libertad a la Comunidad*, México, Fondo de Cultura Económica
- Vergara (2004), *Crecer, saber, conocer*, México, Siglo XXI Editores.
- Von Neumann, J. (1945 [1938]), "A Model of General Economic Equilibrium", *The Review of Economic Studies*, 13(1): 1-9.
- Walker, B.H. y D. Salt (2006), *Resilience Thinking: Sustaining Ecosystems and People in a Changing World*, Washington, DC, Island Press.
- Walker, B.H., L.H. Gunderson, A.P. Kinzig, C. Folke, S.R. Carpenter y L. Schultz (2006), "A Handful of Heuristics and Some Propositions for Understanding Resilience in Social-Ecological Systems", *Ecology and Society* 11(1), Art. 13.
- Walker, R. (1999), "Putting Capital in its Place: Globalization and the prospects for labor", *GeoForum* 30(3): 263-284.
- Walljasper, J. (2010), *All That We Share: A Field Guide to the Commons*, Nueva York, The New Press.
- Warman, A. (1972), *Los campesinos: Hijos predilectos de la revolución*, México, Nuestro Tiempo.
- Webber, J. y S. Spronk (2011), "The Bolivarian Process in Venezuela: A Left Forum", *Historical Materialism*, 49(1): 229-266.
- Werner, B. y P. Burnham (1998), "The Politics of Counter-Inflationary Credibility in Britain, 1990-1994", *Review of Radical Political Economics* 30(1): 53-89.
- Wilkie, J. (1968), *Statistical Abstract of Latin America*, Los Ángeles, The University of California, Los Ángeles.
- Vergara (1970), *The Mexican Revolution: Federal expenditures and social change since 1910*, Berkeley, University of California Press.
- Wilson, E.O. (1992), *The Diversity of Life*, Cambridge, MA, Belknap Press.
- Winder, D. (1992), "De concesión maderera a comunidad forestal: cambio político, económico y social en la Sierra Juárez, Oaxaca", *Opciones* 32(1): 7-10.
- Wolf, E.R. (1987 [1982]), *Europa y la gente sin historia*, México, Fondo de Cultura Económica.
- World Commission for Environment and Development (1987), *Our common future*, Oxford, Oxford University Press.

- World Wildlife Fund (2001), *Chimalapas: La última oportunidad*, México, Secretaría del Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca.
- Yaffe, D. y P. Bullock (1979), "Inflation, the crisis and the post war boom", *Revolutionary Communist* 3(4): 5-45.
- Zemelman, H. y E. Quintanar (2007), *Conversaciones acerca del interculturalidad y conocimiento*, México, IPN - IPECAL (Instituto Pensamiento y Cultura de América Latina, Estudios Epistemológicos e Histórico-Culturales).
- Zepeda, J. (comp.) (1988), *Las sociedades rurales hoy*, Zamora, El Colegio de Michoacán.
- Zibechi, R. (2008), *Autonomías y emancipaciones: América Latina en movimiento*, México, Bajo Tierra Ediciones.

LÍNEA DE TIEMPO

ORDEN CRONOLÓGICO-TITULO-AÑO-CAPÍTULO EN LIBRO

1] Agricultura: El sector clave de la economía cubana (1970)	12
2] La educación: ¿Una barrera al desarrollo económico? (1972)	2
3] ¿Quiénes son los beneficiarios del desarrollo regional? (1976)	6
4] Desarrollo regional y reorganización campesina (1977)	7
5] Inflación y democracia: El caso de México (con Gustavo Esteva) (1978)	4
6] Parábola de la región y los emporios (1980)	8
7] Los límites del crecimiento capitalista: El caso de México (1984)	1
8] La economía de guerra: Estrategia rural frente a la crisis (1990) ...	16
9] El impacto de la integración en los trabajadores mexicanos (con Blanca Lemus) (1998)	3
10] La producción de agua en México: Aportación campesina al desarrollo mexicano (1998)	22
11] La construcción social de la deforestación en México: Los incendios de 1998 en la selva de Los Chimalapas (1999)	10
12] Dos milagros: Monarcas y campesinos (1999)	9
13] Superación el paradigma neoliberal: Desarrollo popular sustentable (2000)	14
14] La nueva ruralidad y la globalización (2001)	13
15] El desarrollo autónomo: Un camino a la sostenibilidad (2002)	17
16] El Maíz: La persistencia de una cultura en México (2003)	15
17] Producción de carne de puerco “Lite” como estrategia de desarrollo sustentable para campesinos michoacanos (con Ma. de Lourdes Barón y Mario Alvizouri) (2003)	19
18] Reconsiderando las alternativas sociales en México rural: Estrategias campesinas e indígenas (2006)	18
19] La participación local en los proyectos de desarrollo sustentable: un estudio de caso en tres comunidades oaxaqueñas (<i>con Evelinda Santiago</i>) (2006)	21
20] Repensando la educación económica para la conservación (2006)	23

21]	Principios para la construcción de organizaciones socioeconómicas alternativas: Lecciones aprendidas desde el trabajo fuera de las estructuras institucionales (2009)	25
22]	La promesa de los campesinos mexicanos (2010)	26
23]	La ingobernabilidad en la gestión del agua urbana en México (2010)	11
24]	La economía ecológica y solidaria: una propuesta frente a nuestra crisis (con Blanca Lemus) (2011)	28
25]	Enfoque heterodoxo para entender el progreso en el siglo xxi (con Blanca Lemus) (2011)	24
26]	La significación de una economía ecológica radical (con Mario Fuente y Daniel Tagle) (2012)	27
27]	Manejo forestal comunitario: ¿Puede la economía verde contribuir a la justicia ambiental? (2013)	20
28]	Viviendo el pacto fáustico: La resiliencia perversa frente al cambio climático (2013)	5
29]	Construyendo mundos post-capitalistas (con Blanca Lemus) (2015)	29

ENSAYO: LA LÍNEA DE TIEMPO

El desarrollo de las ideas en los ensayos en este libro en un lapso de más de medio siglo, refleja la maduración de las ideas que he venido reafirmando y repitiendo en los últimos años, en el sentido de que es necesaria una profunda transformación en nuestras sociedades para construir “un mundo en el cual caben muchos mundos.”

Mi arribo a una comunidad ribereña en Pátzcuaro, Michoacán, México en 1962, me encaminó hacia una trayectoria singular cuando el general Lázaro Cárdenas me propuso realizar la investigación para mi tesis de doctorado sobre el programa de desarrollo regional que venía realizando desde hacía más de un decenio. Los resultados de la nueva infraestructura que él implantó contribuyeron a profundizar las contradicciones que estaban configurando una renovada estructura polarizada de clases y etnias en el país. A pesar de este proceso, que era evidente para cualquier observador del desarrollo en la Tierra Caliente, lo que más me llamó la atención, durante los cinco años en que tuve la oportunidad de interactuar con el general Cárdenas, fue el profundo arraigo que expresaban los campesinos, que reiteraron su lealtad y fe en Tata Cárdenas, reconociendo su compromiso de trabajar en su beneficio. Este complejo panorama se refleja en el contraste entre los capítulos 6, 7, y 8. El primero, elaborado con material que mi comité de tesis, formado por economistas ortodoxos de Yale University, no permitió incluir en mi disertación, es una lectura que fue ampliamente t en los cursos de “desarrollo” en la CEPAL en la época y formó la base para un libro de circulación masiva en los quioscos mexicanos con la colaboración de Ángel Palerm y Eric Wolf, entre otros (Barkin, 1972). El segundo ofrece un análisis de la brecha entre el avance productivo y la destrucción social y ambiental de un proyecto de infraestructura hidráulica. El tercero, escrito unos años después (1980) para un auditorio más amplio, refleja una radicalización de estas ideas para apoyar el incipiente “Sistema Alimentario Mexicano” (SAM).

Mientras que concretaba mis estudios doctorales (1962-1966), tuve la oportunidad de estudiar la nueva estrategia pos-revolucionaria en Cuba. Para muchos de los que llegamos de afuera, era evidente que la decisión inicial de reducir el tamaño de la industria azucarera era errónea. Con base en colaboraciones con generosos compañeros cubanos en la delegación frente a Naciones Unidas, elaboré un ensayo crítico de esta estrategia (capítulo 12), llevándolo para su discusión a la Facultad de Economía de la Universidad de La Habana, donde generó una amplia discusión y su posterior publicación.

Terminando mi doctorado me incorporé como miembro fundador del

nuevo Centro de Estudios Económicos de El Colegio de México (1964). Colaboré en muchos temas que reflejaban la diversidad de preocupaciones del nuevo equipo profesional y los primeros estudiantes del posgrado. Entre nuestras mayores preocupaciones estaba la cuestión de la forma tan segmentada de la educación que se estaba expandiendo en el país. Esto nos llevó a colaboraciones con colegas norteamericanos con similares visiones; uno de estos productos es el segundo capítulo del presente libro, escrito a finales de los años sesenta (capítulo 2), que produjo un fuerte repudio entre los rangos de los economistas ortodoxos que se estaban encargando de la planificación de la expansión educativa en México. En contraste, una copia del documento de trabajo llegó a manos de Iván Illich en su nuevo centro en las afueras de Cuernavaca, donde estaba empezando a elaborar las ideas de su muy polémico libro, *La Sociedad Desescolarizada*. Este fortuito evento nos llevó a desarrollar una cercana relación de varios años, al tiempo que se consolidaba su Centro Intercultural de Documentación (CIDOC), como un hervidero para nuevas epistemologías surgidas de una intensa interacción entre pensadores creativos de muchas partes del mundo, hasta que Illich lo cerró en los años ochenta.

Esta época era de mucha efervescencia campesina a raíz de las muy contradictorias políticas sectoriales. Mis trabajos iniciales enfocados a la importancia de la producción rural para el bienestar social me encaminaron hacia una trayectoria poco valorada entre los economistas que se disputaban un lugar en las instituciones oficiales para promover la industrialización. Ello me llevó a buscar colegas de otros campos de las ciencias sociales, lo cual fue muy afortunado, ya que fue el inicio de una muy larga colaboración (que aún mantenemos) con Gustavo Esteva, quien estaba involucrado en ese entonces en la consolidación de la CONASUPO, para afrontar el nuevo déficit alimentario que estaba generando severos estragos en la sociedad. Esteva y yo escribimos el ensayo sobre inflación que fue galardonado con el Premio Nacional de Economía Política, Juan F. Noyola (1976-1978) (capítulo 4). Es indicativo de los profundos errores de la política económica en nuestro país en los cuatro decenios siguientes que el ensayo tenga quizá todavía más relevancia en 2018 que cuando se redactó originalmente. Tengo el gusto y el honor de que Gustavo haya escrito el Prólogo de este libro.

El decenio de los ochenta vio la profundización de mi visión de la imposibilidad de llevar a cabo un proyecto social dentro de los límites del sistema capitalista. El ensayo que asienta esta convicción abre el presente libro. Siguen agudizándose las contradicciones entre las promesas de la clase política y los límites biofísicos del planeta, evidenciando el Pacto Fáustico que ha operado durante más de medio siglo (capítulo 5). Para

ofrecer otra dirección de lo posible, promoví en varios foros la idea de una “Economía de Guerra” (capítulo 16) basada en la movilización masiva de la población para atender a sus propias necesidades, ya que las promesas estatales y del aparato productivo capitalista no las consideraban.

Los años subsecuentes reflejaban la agudización de la brecha al interior de la profesión de los economistas, resultando en numerosos esfuerzos para limitar el debate. Uno de los más brutales ejercicios de la represión estatal institucional de aquellos años fue la decisión de cerrar el Centro de Ecodesarrollo y otros del sistema CONACYT por sus abiertas posiciones contestatarias a las políticas públicas, que promovían la integración internacional y la destrucción de las cadenas locales y regionales de producción a expensas del bienestar social y humano, así como de los ecosistemas (el material del capítulo 7 fue uno de estos productos). Con la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) (1994), no se tardó en experimentar sus secuelas; el levantamiento zapatista y el desmoronamiento de la vida sindical y el empeoramiento de las condiciones laborales en las grandes empresas resultaron evidentes (capítulo 3).

La ratificación del TLCAN, con la creación de la Comisión de Cooperación Ambiental, generó un nuevo ímpetu para poner los asuntos ambientales en primera plana para las organizaciones de la sociedad civil mexicana. Con la victoria del movimiento “Para una Nueva Cultura del Agua” contra el régimen neoliberal en España (2001), se gestó un proceso que transformó el marco jurídico para la gestión de los recursos hídricos en la Comunidad Europea. Su influencia se extendió a América Latina; en México empezamos a dar visibilidad a algunos de los sistemas locales de gestión más equilibrada, mayormente operado por comunidades indígenas (capítulo 22). El conflicto en torno al control de la gestión del agua en nuestro país sigue agudizándose; a pesar de la reforma del Artículo Cuarto de nuestra Constitución Política en el cual se reconoció el “Derecho Humano del Agua” (2012), mandatando la promulgación de una nueva Ley General de Agua. Hoy en día, las profundas diferencias entre los intereses privados y los de la sociedad civil continúan impidiendo un avance para resolver el terrible desorden que hay en la gestión del agua en México (capítulo 11).

Con la creciente presión para avanzar hacia nuevos enfoques para promover la “sustentabilidad” a raíz de la virtual avalancha de reuniones internacionales y materiales sobre el tema, surgieron voces discordantes que cuestionaron su posibilidad dentro del sistema capitalista. El Grupo Interamericano para el Desarrollo Sustentable de la Agricultura y los Recursos Naturales me invitó a escribir un ensayo en torno a este de-

bate donde afirmé que “la misma acumulación de riqueza crea pobreza” (Barkin, 1998:55); a pesar de sus limitaciones, la versión bilingüe se volvió un éxito de librería y es ampliamente consultada en su versión electrónica de acceso abierto. Al mismo tiempo las luchas de grupos locales para defender sus territorios y promover modelos alternativos de organización social y productiva estaban intensificando sus actividades y ganando visibilidad (capítulos 9, 10, y 13). Un acontecimiento particularmente notable en esta época fue el resurgimiento del movimiento campesino con su propio reconocimiento de sus aportaciones al progreso del país, reflejado en un sinnúmero de dimensiones (capítulos 15 y 17); mi ensayo sobre la persistencia de la cultura del maíz (capítulo 14) es producto de una intensa actividad académica y de la interacción con organizaciones sociales en torno a la movilización “Sin Maíz no hay País”. Para profundizar en esta línea, exploramos una creciente gama de actividades y círculos de intercambio social y económico que se estaban gestando con la consolidación de las organizaciones sociales en el país (capítulo 25); reformulado para ponerlo en sintonía con los planteamientos del Ejército Zapatista de Liberación Nacional y con una de sus importantes iniciativas –en la que participé– para entrar en relación con las fuerzas progresistas del país y el mundo, refuerza nuestra convicción de que hemos superado la etapa de protestas para avanzar hacia la construcción de nuevos mundos (capítulo 26).

Al mismo tiempo, nuestras aportaciones para el enriquecimiento de los estudios de posgrado en la Universidad Autónoma Metropolitana empezaron a rendir frutos en trabajos conjuntos con los doctorantes. Con la creación del Laboratorio de Sustentabilidad, iniciamos líneas de trabajo que combinaron la rica herencia del marxismo con los nuevos desarrollos de la economía ecológica (capítulo 23). Durante el primer decenio del nuevo siglo salieron a la luz trabajos que trasladaron nuestra anterior reflexión del concepto de la nueva ruralidad comunitaria (capítulo 18) a las actividades muy concretas de las comunidades; resultado de investigaciones doctorales, estos ensayos han contribuido a forjar una nueva metodología, incorporando los propios actores a los equipos de investigación (capítulos 19, 20 y 21), así como un nuevo marco analítico para la propia economía ecológica (capítulo 27).

Acompañando este desarrollo intelectual y político, después de haber extendido su formación del reino de la medicina al de la salud comunitaria y de los trabajadores, mi colaboradora y compañera Blanca tomó una parte central en la transformación de las ideas, conceptos y epistemologías a una línea de trabajo que se plasma en gran parte de este libro, mucho más allá de los capítulos en que se reconoce la co-autoría (3, 24, 28, 29).

ÍNDICE

Agradecimientos.....	9
Prólogo.....	11
Introducción.....	17
I. UNA VISIÓN CRÍTICA DEL DESARROLLO CAPITALISTA.....	25
Introducción.....	27
1. Los límites del desarrollo capitalista: el caso de México.....	31
2. La educación: ¿una barrera al desarrollo económico?.....	47
3. El impacto de la integración en los trabajadores mexicanos.....	84
4. Inflación y democracia: el caso de México.....	95
5. Viviendo el <i>pacto fáustico</i> : La resiliencia perversa frente al cambio climático'	131
II. EL DESARROLLO REGIONAL: ESPEJO DE UN DESARROLLO DISTORSIONADO.....	141
Introducción.....	143
6. ¿Quiénes son los beneficiarios del desarrollo regional?.....	146
7. Desarrollo regional y reorganización campesina: La Chontalpa como reflejo del gran problema agropecuario mexicano.....	166
8. Parábola de la región y los emporios.....	190
9. Dos milagros: monarcas y campesinos.....	198
10. La construcción social de la deforestación en México: los incendios de 1998 en la selva tropical de Los Chimalapas.....	208
11. La ingobernabilidad en la gestión del agua urbana en México.....	227
IIIa. PROPUESTAS Y ESTRATEGIAS. <i>DIAGNÓSTICOS CRÍTICOS</i>	253
Introducción.....	255
12. Agricultura: el sector clave de la economía cubana.....	257
13. La nueva ruralidad y la globalización.....	281
14. Superando el paradigma neoliberal: Desarrollo popular sustentable.....	293
15. El maíz: la persistencia de una cultura en México.....	304
IIIb. PROPUESTAS Y ESTRATEGIAS. <i>ESTRATEGIAS ESPERANZADORAS</i>	317
Introducción.....	319
16. La economía de guerra: Una estrategia rural frente a la crisis.....	321
17. El desarrollo autónomo: Un camino a la sostenibilidad.....	334

18. Reconsiderando las alternativas sociales En el México rural: estrategias campesinas e indígenas.....	358
19. Producción de carne de puerco “lite” como estrategia de desarrollo sustentable de campesinos michoacanos.....	367
20. Manejo forestal comunitario: ¿Puede la economía verde contribuir a la justicia ambiental?.....	381
IVa. RESISTENCIAS Y ALTERNATIVAS. <i>LA CAPACIDAD DE RESISTIR</i>.....	401
Introducción.....	403
21. La participación local en los proyectos de desarrollo sustentable.....	406
22. La producción de agua en México: Aportación campesina al desarrollo mexicano.....	426
23. Repensando la educación económica para la conservación.....	436
24. Enfoque heterodoxo para entender el progreso en el siglo XXI.....	452
25. Principios para la construcción de organizaciones socio-económicas alternativas: lecciones aprendidas desde el trabajo fuera de las estructuras institucionales.....	465
IVb. RESISTENCIAS Y ALTERNATIVAS. <i>IMAGINAR Y CONSTRUIR EL FUTURO</i>.....	475
Introducción.....	477
26. La promesa del campesinado mexicano.....	479
27. La significación de una economía ecológica radical.....	487
28. La economía ecológica y solidaria: Una propuesta frente a nuestra crisis.....	500
29. Construyendo mundos poscapitalistas.....	514
Bibliografía.....	541
Línea de tiempo.....	575

Otros títulos

**Un desarrollo distorsionado:
la integración de México a la economía mundial**
David Barkin

Inflación y democracia. El caso de México
David Barkin et al.

**Alimentos versus forrajes. La sustitución entre granos a
escala mundial**
David Barkin et al.

David Barkin arribó a México en 1962. Sus investigaciones en torno a la obra de Lázaro Cárdenas fueron el inicio de una serie de críticas de las políticas públicas que se estaban implementando en aquella época. A pesar de su participación activa en los airados debates universitarios sobre la política económica en México y otras partes, él se alejó de la tendencia de incorporarse a la administración pública para reformar los caminos trazados por los defensores de los regímenes; recibió el Premio Nacional de Economía Política por identificar las contradicciones teóricas y reales de la política económica de la época. Su posición crítica se fortaleció con la incorporación de dimensiones socioambientales, generando una activa participación en los debates en torno a la integración económica internacional y norteamericana.

Con la consolidación del régimen neoliberal en México, en contraste con lo que estaba ocurriendo en otras partes del hemisferio, Barkin empezó a implementar programas académicos e investigaciones para trazar caminos alternativos de la construcción de la sociedad y de la protección del planeta. Su liderazgo en promover la economía ecológica en la región se concretó en colaboraciones con comunidades indígenas y campesinas. Las propuestas ofrecidas en los últimos ensayos apuntan hacia las múltiples formas de transformaciones que estas comunidades estarán exigiendo en los años venideros. Sus actuales colaboraciones siguen encaminadas hacia la construcción de "*un mundo en que caben muchos mundos*".



siglo veintiuno
editores



UNIVERSIDAD
AUTÓNOMA
METROPOLITANA

